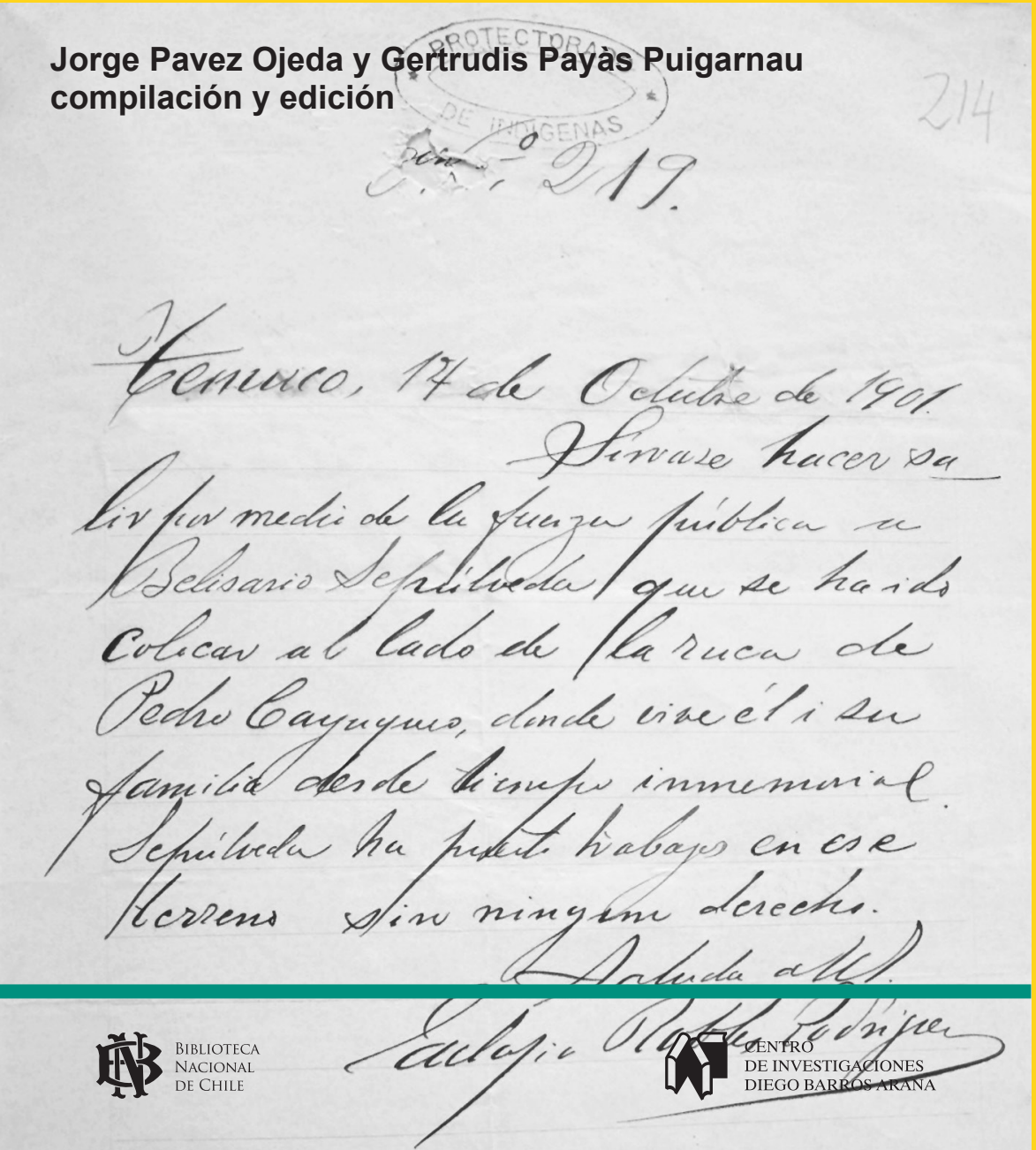
FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA REPÚBLICA
Volumen LIII

EL PROTECTORADO DE INDÍGENAS EN CHILE.

ESTUDIO INTRODUCTORIO Y FUENTES (1898-1923)

Jorge Pavez Ojeda y Gertrudis Payàs Puigarnau
compilación y edición



BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE
CENTRO DE INVESTIGACIONES DIEGO BARROS ARANA

El protectorado de indígenas en Chile.
Estudio introductorio y fuentes
(1898-1923)

Jorge Pavez Ojeda y Gertrudis Payàs Puigarnau
(compilación y edición)

Con la colaboración de
Julieta Vivar
Danay Mariman
Susana González

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Gobierno de Chile
Chile en marcha

© Ediciones Biblioteca Nacional de Chile. 2021
Inscripción Nº 2021-A-10896

ISBN978-956-244-534 (título)
ISBN 956-244-001-X (colección)

Derechos exclusivos reservados para todos los países

Director Biblioteca Nacional de Chile
Sr. Pedro Pablo Zegers Blachet

Director del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana
y Director Responsable
Sr. Rafael Sagredo Baeza

Editor
Sr. Marcelo Rojas Vásquez

Imagen de Portada
Oficio del protector de indígenas Eulogio Robles Rodríguez
al gobernador del Departamento de Imperial, 14 de octubre 1901.
Archivo Regional de la Araucanía, Fondo Gobernación de Imperial, vol. 41.

Ediciones Biblioteca Nacional de Chile
Av. Libertador Bernardo O'Higgins n.º 651
Teléfono: 56 223605283
www.centrobarrosarana.gob.cl
Santiago de Chile

impreso en chile / printed in chile

FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA REPÚBLICA
VOLUMEN LIII

EL PROTECTORADO DE INDÍGENAS EN CHILE. ESTUDIO INTRODUCTORIO Y FUENTES (1898-1923)

Jorge Pavez Ojeda y Gertrudis Payàs Puigarnau
(compilación y edición)

Con la colaboración de
Julieta Vivar
Danay Mariman
Susana González

CENTRO
DE INVESTIGACIONES
DIEGO BARROS ARANA

AGRADECIMIENTOS

Las investigaciones y los trabajos que han desembocado en esta publicación han sido financiados por el proyecto Fondecyt Regular n.° 1170419 (2017-2020), titulado "Mediación lingüístico-cultural en los ámbitos de contacto mapudungun castellano derivados del proceso de chilenización de la Araucanía: administración de justicia, producción etnográfica y lingüística y escolarización (1880-1930)". En el mismo marco tuvieron lugar tres coloquios de investigación, en 2018 y 2019, durante los cuales se discutieron los alcances de esta publicación. Deseamos agradecer los comentarios y aportes recibidos en estos coloquios de parte de los miembros del equipo del Fondecyt: Héctor Mora, José Manuel Zavala y Darío Rojas, los invitados de cooperación internacional Marisa Malvestitti, Juan Antonio Ennis y Danielle Zaslavsky, y nuestros asistentes de investigación y tesistas: José Miguel Ortiz, Aurora Sambolin y Fernando Ulloa.

También queremos agradecer la colaboración de quienes ayudaron en la investigación de archivos: Patricia Huenuqueo, que como coordinadora de fondos en el Archivo Nacional de la Administración (ARNAD) apoyo con entusiasmo la investigación ahí realizada, y Laura Hillock por su ayuda en las primeras búsquedas. Asimismo, a Julieta Vivar su labor de transcripción de las Memorias del Protectorado, sistematización del corpus y colaboración editorial, y a Danay Mariman y Susana González sus transcripciones de otras fuentes. Gracias, también, a Felipe Castro Gutiérrez por los mapas, a Catalina Vivar por los ajustes de las imágenes, y a Hermann Schmidlin por facilitarnos copias de su colección de fotografías de su abuelo Manuel Neculman.

Muy especialmente, agradecemos al Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, en la persona de su director, Rafael Sagredo Baeza, y de su editor, Marcelo Rojas Vásquez, por acoger esta publicación en la colección Fuentes para la Historia de la República.

Gertrudis Payàs reconoce el apoyo recibido del Núcleo de Estudios Interétnicos e Interculturales de la Universidad Católica de Temuco y del grupo de investigación Alfaqueque de la Universidad de Salamanca; y Jorge Pavez agradece en particular a Fabien Le Bonniec y Dina Guarda su hospitalidad en sus estadías de trabajo en Temuco.

PRÓLOGO

Este volumen constituye un nuevo y trascendental hito en el trabajo de desclasificación de archivos y documentos de la larga historia de relaciones entre los mapuche y el Estado español –primero– y chileno –después.

Los protectores de indígenas del Chile republicano fueron la versión modernizada de una institución jurídica colonial cuyo propósito fundamental era el amparo y la representación de los habitantes originarios. Labor que nos parece hoy casi irrisoria frente a la dimensión del atropello y abuso producido por la ocupación militar y colona de la Araucanía o Ngulumapu durante el siglo XIX.

Uno de los principales responsables de esta ocupación, Cornelio Saavedra, escribía al presidente José Joaquín Pérez desde Angol en 1862: "Salvo pequeños tropiezos de poca importancia, la ocupación de Arauco no nos costará sino mucho mosto y mucha música"[1].

Evidentemente, la violencia se manifestó de múltiples formas durante esta larga campaña militar, muchas veces el mosto y la música hablaron en nombre y con el respaldo de las balas y los sables. Para el pueblo mapuche resistir abiertamente hubiera sido condenarse a muerte ante el poderío del ejército expedicionario.

Las consecuencias humanas, sociales y económicas de la ocupación *wingka* del Ngulumapu se dejan sentir con fuerza en la pluma de los protectores. El acorralamiento territorial, la conculcación de derechos, el sentimiento de derrota y de indefensión, el supremacismo y racismo de los vencedores se sienten abierta o soterradamente en las páginas dadas a la luz pública en este volumen gracias al esfuerzo y empuje del equipo liderado por Gertrudis Payàs.

La ocupación militar del territorio mapuche abrió una época de violencias permanentes; ya no se trataba de abusos y agresiones puntuales, en los márgenes, ahora se atacaba su corazón y sin vuelta atrás. El objetivo era ocupar las tierras agrícolamente más rentables y relegar a sus antiguos habitantes al mínimo espacio de sobrevivencia. Se apostó a que los "indios incivilizados" que no sabían de agricultura "moderna" se fueran extinguiendo con el paso del tiempo, tal como había ocurrido con otras "razas inferiores y primitivas". Las teorías ra-

[1] Cornelio Saavedra, *Documentos relativos a la ocupación de Arauco* (Santiago, Cámara Chilena de la Construcción/Pontifica Universidad Católica de Chile/Biblioteca Nacional de Chile, Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile, 2009), tomo 43, p. XVII.

cialistas y civilizatorias, que suponían la inferioridad de las sociedades indígenas entendidas como razas y las condenaban a desaparecer, era predominante cuando se escribieron los papeles que se presentan en esta obra.

Los autores de los documentos del protectorado eran individuos que compartían una visión de mundo dominada por las ideas de progreso y evolución cultural combinadas con una tradición que podríamos calificar –a falta de mejores palabras– de humanista-liberal cuyo principal fundamento era el derecho que poseía todo ser humano, por muy "inferior" que se le considerara, de acceder a la justicia y a la propiedad.

Con agudeza, Jorge Pavez, en el detallado y rico estudio introductorio de las memorias aquí presentadas, reconstruye, en un ejercicio de arqueología jurídica, la genealogía del aparataje jurídico que se resume en el concepto de 'protector'. Por definición, un protector lo es de alguien que no puede valerse por sí mismo, de un inferior. Si el principio de la república es, en teoría, la igualdad ante la ley de ciudadanos autónomos, entonces una institución de antiguo régimen y de raigambre colonial como el protectorado solo puede ser considerada útil y acorde con este principio en la medida que se plantea como transitoria y destinada a desaparecer cuando sus protegidos alcancen la autonomía jurídica. Autonomía que –pensaban los protectores– los mapuche alcanzarían principalmente gracias a la educación.

Dicho lo anterior, el proceso de reducción de las tierras mapuche producido por la ocupación militar y colona, eufemísticamente denominado "radicación indígena" fue una bomba de tiempo cuyas posteriores explosiones son los innumerables abusos, despojos y litigios descritos en las memorias, informes y correspondencia producidos por, y en torno a, los protectores. Frente a tal desafío, estos defensores o, bien, renunciaron por incapacidad, negligencia o corrupción o, bien, trataron de hacer frente "en la medida de lo posible".

Cabe señalar que, en el periodo cubierto por esta institución, los altos funcionarios públicos eran parte de una élite relativamente pequeña proveniente de una clase media emergente o de la antigua "fronda aristocrática"; la ocupación del cargo de protector de indígenas solo constituía un eslabón en una carrera funcionaria que muchas veces terminaba en carrera política. Quienes tuvieran ambiciones de progreso en ambos campos debían tener mucho cuidado en no comprometer su futuro con decisiones contrarias a los intereses de los poderosos.

Por supuesto que hubo excepciones, y una notable fue la de Eulogio Robles, hombre inquieto intelectualmente, honesto y de gran energía cuya labor en defensa de los derechos indígenas y de investigación etnográfica ocupan gran parte de los archivos compilados en este libro.

Ni Eulogio Robles ni los otros protectores –como tampoco sus interlocutores mapuche letrados– fueron inmunes a las ideas eurocéntricas y positivistas predominantes en la época que situaban a la sociedad occidental como modelo que debían alcanzar todos los pueblos: el progreso científico, técnico y moral era la forma de arribar a dicho ideal, y su instrumento principal, la educación.

En las memorias aquí reunidas aparece la palabra 'escuela' ciento seis veces, 'colegio' y 'educación'[2] cuarenta respectivamente; al contrario, la palabra 'religión' solo se menciona tres veces y 'evangelización', dos. Sin duda los archivos protectorales tuvieron una impronta más laica que sus equivalentes misionales a pesar de haber sido los franciscanos, los capuchinos y los anglicanos –incluso más que el Estado– quienes impulsaron la escuela indígena; punta de lanza del proyecto "civilizador" que anhelaban los protectores y que para los religiosos iba de la mano con la evangelización.

Si de recurrencias terminológicas se trata, dos palabras superan a las anteriores en los escritos protectorales: 'propiedad' y 'tierra', la primera con doscientos cuarenta registros y la segunda con doscientos veinte y siete. Estas reiteraciones léxicas pueden dar al lector una idea de la problemática central que ocupó a los protectores: la *propiedad de la tierra* en un territorio indígena reducido y enfrentado a la voracidad del latifundista, al arañazo del colono pobre y al conflicto interno producido por el crecimiento demográfico.

Recomendamos vivamente la lectura de este libro, pues abre un portal hacia las incomprensiones, frustraciones, contradicciones y realidades que confluyen en el presente del pueblo mapuche y que tensionan sus desafíos futuros.

José Manuel Zavala.
Lautaro, 14 de enero 2021.

[2] Incluido el verbo 'educar' (ocho veces).

EL PROTECTORADO DE INDÍGENAS EN CHILE ESTUDIO INTRODUCTORIO[3]

Jorge Pavez Ojeda

El Protectorado de Indígenas como sobrevivencia colonial

El Protectorado de Indígenas fue una institución jurídico-administrativa del Estado chileno, creada por la llamada Ley de Radicación del 4 de diciembre de 1866. Esta operó entre 1866 y 1874, fue luego suspendida entre los años 1875 y 1884, retomando su actividad en 1885, y alcanzando su mayor desarrollo institucional y cobertura territorial entre los años 1909 y 1916. En 1930, fue definitivamente disuelta por la Ley 4802.

Sin embargo, como principio jurídico de protección tutelar de "naturales", se trata de una sobrevivencia en el derecho codificado nacional de un principio del derecho indiano, y sus bases jurídicas se pueden, incluso, remontar a los principios proteccionistas de grupos sociales tutelados establecidos por el Derecho Romano. En 1516, ante las denuncias de abusos y atropellos a los pueblos conquistados realizadas por Bartolomé de Las Casas, la corona hispana nombra al famoso exencomendero y fraile dominico "Procurador y protector universal de todos los indios"[4]. En la década siguiente, la administración im-

[3] En este estudio introductorio aprovechamos de enmendar algunos errores de interpretación que se presentan en nuestro artículo "Los intérpretes mapuche y el Protectorado de Indígenas: constitución de la propiedad, traducción y castellanización (1980-1930)", publicado con Gertrudis Payàs y Fernando Ulloa en el *Boletín de Filología*, vol. 55, n.º 1 (Santiago, 2020), pp. 161-198, cuando desconocíamos aún datos claves de la historia del Protectorado de Indígenas en el siglo XIX. Aprovechamos de agradecer especialmente aquí a Gertrudis Payàs por su apoyo a la investigación que sustenta este estudio.

Nota: Se ha modernizado la ortografía, pero conservado la ortotipografía del original en las citas. En cuanto a las palabras en mapudungun, excepto cuando se trata de fuentes, en que respetamos la grafía original, optamos por dejar el etnónimo 'mapuche' sin indicación de número, y dejamos en cursiva y siguiendo el grafemario académico (Fernando Zuñiga, *Mapudungun. El habla mapuche* (Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2006)) las palabras comunes en mapudungun (*longko*, *wingka*, *ngillatun*, *ruka*, *trawun*, *laku*). Escribimos en mayúscula y letra recta el territorio mapuche chileno Ngulumapu y las unidades político-territoriales del Huillimapu y Futa Huillimapu, y en minúscula y letra recta los nombres de las identidades regionales: lafkenche= costa, huilliche= sur del río Toltén, pehuenche= cordillera.

[4] Francisco Cuena Boy, "Utilización pragmática del derecho romano en dos memoriales indianos del siglo XVII sobre Protectores de Indios", en *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, n.º 20 (Valparaíso, 1998); Constantino Bayle, *El protector de naturales* (Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1945). Para un estado del arte reciente sobre los estudios en torno a los Protectores de Naturales, véase Caroline Cunill, "La protectoría de indios en América: avances y perspectivas entre historia e

perial nombró "protectores y defensores de los indios" en los virreinatos y las principales Audiencias "como para que mirase en su conversión lo que más convenía y cuidase de su conservación y que nadie les agraviase"[5]. El oficio de protector se institucionaliza, entonces, en dos variantes: el de Protector General de los Indios del Reino y el de los Protectores Partidarios de Naturales, en ciudades y partidos (provincias), los cuales asumían la representación legal de los indígenas en los litigios judiciales.

Desde el nombramiento de Bartolomé de Las Casas como protector "de todos los indios" y durante la primera parte del siglo XVI, los protectores serán designados entre obispos y otros eclesiásticos, delineando así el rol tutelar de la Iglesia católica respecto a los indígenas de América. El celo y exclusividad con el que los sacerdotes asumieron este papel llevó a una serie de conflictos de jurisdicción con el poder secular, siendo este tipo de conflictos uno de los temas reiterados en el derecho indiano codificado en la *Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias*, donde se insiste en que "se guarden las leyes de estos reinos de Castilla, que prohíben a los jueces eclesiásticos usurpar la jurisdicción real"[6]. Las tensiones generadas entre poderes eclesiásticos y civiles llevaron a la Corona a transferir el título de protector a los fiscales de las Audiencias, lo que se concretó entre 1554 y 1563. En 1575, una ordenanza del virrey Francisco Álvarez Toledo crea en Lima un protector general para el virreinato y protectores particulares para los partidos, estructura que será un modelo para las otras regiones del Imperio. La norma toledana buscaba disuadir a los indígenas de litigar personalmente en la Audiencia virreinal, ya que estos parecían tener especial afición por los procesos judiciales, a pesar de las consecuencias económicas y personales que estos podían tener para ellos[7]. Sin embargo, para entonces ya se percibían los problemas que arrastrará la institución durante siglos: la idoneidad de los nombrados en relación con sus capacidades, su eficacia y su ética profesional y personal. Debido a esto, la institución de protector terminó convirtiéndose en causa de "notable daño y perjuicio" para los indígenas, por lo que en 1582 el rey Felipe II suprime el oficio y traslada la función al abogado fiscal de las Audiencias[8]. Siete años después, Felipe II se retracta y vuelve a crear la institución, por medio de una real cédula del 10 de enero de 1589, se ordena a virreyes y gobernadores el nombramiento de protectores:

historiografía", en *Colonial Latin American Review*, vol. 28, No. 4 (Londres, 2019), pp. 478-495.

[5] José Refugio de la Torre Curiel, "Un mecenazgo fronterizo: El Protector de Indios Juan de Gándara y los ópatas de Opodepe (Sonora) a principios del siglo XIX", en *Revista de Indias,* vol. LXX, n.º 248 (Madrid, 2010), pp. 185-212.

[6] Véase Diana Bonnet, *Los protectores de naturales en la Audiencia de Quito. Siglos XVII y XVIII* (Quito, Flacso/ Abya-Yala, 1992), p. 18.

[7] Véase Mauricio Novoa Cain, "Derecho indiano y demandas y reivindicaciones indígenas: un enfoque para el lenguaje y la comunicación", en *Razón y Palabra,* n.º 26 (abril-mayo 2002. Disponible en www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n26/mnovoa.html [fecha de consulta: 10 de octubre de 2020]).

[8] Cuena, *op. cit.*

> "Y que estos sean personas de edad competente, y ejerzan sus oficios con la cristiandad, limpieza y puntualidad que son obligados, pues han de amparar y defender a los indios"[9].

La disposición llega al virrey del Perú, autorizándolo a proveer los cargos de protectores de indios "en personas de edad, mucha probación y cristiandad y que sean celosas del bien de los dichos indios"[10]. En el reino de Chile, se nombraron un protector general y protectores de partidos, encargados de defender jurídicamente los intereses indígenas en los "pueblos de indios", encomiendas y tierras del territorio gobernado por la corona hispana, los que actuaron hasta fines del siglo XVIII[11]. Esta legislación tutelar del derecho indiano para las "repúblicas de indios" no tenía vigencia al sur del río Biobío, reconocido como territorio autónomo de los mapuche, donde se aplicaba, en cambio, el derecho de gentes (*ius gentium*, antecedente del derecho internacional) que enmarcaba los acuerdos y tratados hispano-mapuche[12].

Cédulas reales posteriores en 1589 modificaron las formas de nombramiento de los protectores con el fin de prevenir los abusos[13]. En 1620, por ejemplo, dos memoriales proponen crear en la Audiencia de Quito un fiscal protector de indios, nombrado directamente por el Rey, con el mismo rango que los fiscales civiles y del crimen. En 1680, el Protector de Indios aparece de nuevo desvinculado de las Audiencias, aunque se establece la participación de los fiscales en la función de protección[14]. En 1740, se propuso sin éxito que las plazas de fiscales protectores fuesen ocupadas por hijos primogénitos de caciques, lo que, sin embargo, sugiere un momento de importante necesidad de representación de los indígenas por ellos mismos en la administración imperial[15]. Pero veinte años después se inicia un nuevo proceso de paulatina eliminación de los protectores provinciales o partidarios, siendo reemplazados por el Fiscal del Crimen en la función de defensa de los indígenas. En real cédula de 1776,

[9] Real cédula de Felipe II, dada en Madrid el 10 de enero de 1589 (Ley I, título VI, libro VI de la *Recopilación de Leyes de Indias*), en Novoa, *op. cit.*

[10] Carta al Virrey del Perú, en Ricardo Donoso y Fanor Velasco, *Historia de la constitución de la propiedad austral* (Santiago, Imprenta Cervantes, 1928), pp. 17-18.

[11] Fernando Silva Vargas, *Tierras y pueblos de indios en el Reino de Chile. Esquema histórico-jurídico* (Santiago, Universidad Católica de Chile, colección Estudios de Historia del Derecho Chileno, 1962), vol. 7.

[12] Miguel Alfonso Martínez, *Study on treaties, agreements and other constructive arrangements between States and indigenous populations.* Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión sobre la Prevención de la Discriminación y Protección de Minorías. Tercer informe de avance.E/CN.4/Sub.2/1996/23, 15 de agosto 1996; Jorge Pavez Ojeda, "Cartas y parlamentos: apuntes sobre historia y política de los textos mapuches", en *Cuadernos de Historia,* n.º 25 (Santiago, 2006), pp. 7-44; José Manuel Zavala (ed.), *Los parlamentos hispanomapuches 1593-1903. Textos Fundamentales* (Temuco, Universidad Católica de Temuco, 2015).

[13] De la Torre, *op. cit.*, p. 196

[14] Véase Bonnet, *op. cit.*

[15] Noticias secretas, en De la Torre, *op. cit.*

se suprime igualmente la plaza de Protector General, confirmando la fusión de su función con la de Fiscal del Crimen. También en Chile, el Protector de Indios será abolido de forma definitiva en los primeros años de la república por el Senado Consulto del 4 de marzo de 1819[16], y hacia 1821 en los territorios aun bajo control imperial, en afinidad con el liberalismo consagrado en la Constitución de Cádiz de 1812, donde ya no cabía la consideración de los indígenas americanos como sujeto de protección especial.

Derecho indiano (hispano-colonial)

La institución del Protector de Indios se basó en una doctrina del *ius commune* europeo, derecho que:

> "Se remonta a la legislación romana del Bajo Imperio, y en virtud de la cual los habitantes originarios de las Indias –los naturales de ellas– llegaron a ser considerados en conjunto como 'personas miserables', necesitadas por esta razón de un trato jurídico especial o privilegiado"[17].

La necesidad de una protección a los *miserabilis*, se puede tipificar en dos géneros jurídicos: el del *tutor*, como encargado jerárquico de un grupo social o el del el *defensor civitatis,* que asume la defensa de la plebe. Estas codificaciones jurídicas del derecho romano se dan en "el ambiente de corrupción civil y decadencia política que caracteriza a los últimos siglos del Imperio", el que lleva los emperadores a enfrentar los abusos de todo tipo perpetrados por los *potentes* o *potenciores*. En el caso de la protección a los *miserabilis*, esta se establece en una Constitución de Constantino (año 378) "relativa a la intervención del emperador en las causas que afectan a pupilos, viudas u otras personas miserables"[18].

En el derecho indiano se recuperó el sentido de protección como tutela sobre los débiles, concibiendo al Protector como procurador o tutor, más que como defensor del ciudadano ante los poderosos[19], configurándose así la noción de "abogado de los pobres"[20], que será luego recuperada en el derecho chileno del Protector de Indígena en el concepto de "litigante como pobre". Considerados en el derecho indiano como "menores" por su condición de "miserables", los indígenas quedaban fuera de las normas del derecho civil. En los llamados "pleitos de indios", que incluirán conflictos por la posesión y propiedad de la tierra, por construcción y acceso a caminos, y por imposiciones tributarias[21] (todos los

[16] Ramón Briones Luco, *Glosario de colonización y esposición de las leyes, decretos i demas antecedentes relativos al despacho de colonización hasta el 1.o de julio de 1904* (Santiago, Ministerio de Relaciones Exteriores/ Imprenta Universitaria. 1905), p. 381.

[17] Cuena, *op. cit.*

[18] *Ibid.*

[19] Véase Novoa, *op. cit.*

[20] Bonnet, *op. cit.*

[21] *Ibid.*; Silva Vargas, *op. cit.*

cuales volverán a ser objetos de litigio en el proceso de colonización emprendido por la república sobre el territorio al sur del Biobío en los siglos XIX y XX), los contratos firmados por indígenas eran considerados nulos (salvo los testamentos), no obligándolos civil o criminalmente si no se hacía con la intervención y consentimiento del Protector de Indios, en especial si los bienes transados en contratos eran inmuebles o de valor[22]. Función en la regulación de los contratos muy similar a la del "curador de menores" en el derecho romano.

Como trasfondo de estas categorías que clasifican la persona jurídica indígena, están también los debates teológicos de la Escuela de Salamanca a principios del siglo XVI sobre la persona moral y la humanidad de los "naturales" de América. Bartolomé de Las Casas, Francisco de Vitoria y otros plantean el problema de la humanidad de indígena americano bajo el principio de "la unidad universal del mundo bajo una ley". Este reconocimiento filosófico tenía implicancias jurídico-legales muy concretas, por ejemplo, en la justificación de la privación de los derechos de los indios sobre las tierras americanas y su gobierno; expropiación que solo se justificaría si estos fueran considerados "pecadores, infieles, brutos (*amentes*), o seres irracionales (*irrationales*)"[23]. Como recuerda Ronald Judy, siguiendo a Anthony Pagden, "la apabullante evidencia de la racionalidad y civilidad de los indios" obligó a Francisco de Vitoria a reconocerles humanidad y razón, y, por lo tanto, *dominium* de los indios sobre sus asuntos[24], aunque la ausencia de literacidad alfabética entre los indios americanos le permitió "indicar que no tenían el conocimiento de la verdad, lo cual daba a los españoles el derecho legítimo para entrar en el dominio de los indios"[25]. El reconocimiento de su humanidad no fue el de una alteridad o una diferencia en el pensamiento, sino el de una anterioridad y un potencial de similitud. Como los niños, se trataba de humanos con *potencial* para la razón, para el conocimiento de la verdad y de la ley natural. En tanto "menores" y "miserables", la Iglesia consideraba de su especial responsabilidad el cuidado de los indígenas así infantilizados, los que al mismo tiempo se veían colocados bajo un amparo especial del Soberano, generando su estatus etnológico como acumulación de tres condiciones: rústico, miserable y menor[26].

Estas nociones político-jurídicas se proyectaron en la teoría de las "dos repúblicas" –la "república de indios" y la "república de españoles"– gobernadas diferenciadamente en tanto "repúblicas imperfectas" que responden a la jerarquía de la "república perfecta" del Monarca[27]. En ese marco de gobierno, la tradi-

[22] Véase Novoa, *op. cit.*

[23] Anthony Pagden, *The Fall of Natural Man: The American Indian and the origins of Comparative Ethnology* (Cambridge, Cambridge University Press, 1987).

[24] Ronald Judy, *(Dis)forming the American Canon* (Minneapolis, Minnesota University Press, 1993), p. 80.

[25] *Op. cit.*, p. 82.

[26] Véase Cuena, *op. cit*

[27] Abelardo Levaggi, "República de Indios y República de Españoles en los Reinos de España", en *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, n.º 23 (Valparaíso, 2001), pp. 419-428.

ción del derecho indiano y sus tecnologías legales contribuyen a fomentar las concepciones heteronómicas indígenas de la decisión política y la soberanía, es decir, de la legitimidad de la autoridad fundada en una fuerza exterior a ella. A una comprensión jerárquica de la autoridad imperial, donde el soberano de España se situaba *por encima* del gobierno secular de administración autónoma de poblaciones, los pueblos indígenas responden con una compresión heteronómica de la autoridad, donde el Soberano se sitúa *por fuera* de la "república de indios", fomentando así formas de administración paralela de las violencias, la justicia, las virtudes y las decisiones políticas, administración propia mediada por la ley de un factor heterogéneo a la sociedad indígena. Este "equívoco" en la comprensión de la filosofía política que sustenta la noción de "república" del derecho indiano, puede explicar su sobrevivencia en las fundaciones jurídicas de las repúblicas criollas y sus nuevas vidas en el pensamiento político mapuche (e indígena) del siglo XX[28], lo mismo que se observa con la institución del Protectorado, que conseguirá un arraigo de larga duración (de mediados del siglo XVI a principios del XIX) como aparato de la heteronomía etnopolítica.

Colonialismo republicano e instituciones de la "radicación de indígenas"

La institución de un "nuevo" Protectorado de Indígenas viene establecida en la primera de las llamadas Leyes de Radicación, la ley del 4 de diciembre de 1866, que dispone en su artículo 8:

> "En los territorios fronterizos de indígenas, habrá un letrado con el título de Protector de Indígenas, el cual ejercerá las funciones que atribuye al Intendente y Gobernadores el decreto de 14 de Marzo de 1853, y representará los derechos de los indígenas en todas las circunstancias que se ofrezcan, y especialmente en el deslinde de sus posesiones y en todos los contratos traslaticios de dominio".

Esta misma ley de 1866 permitía la fundación de poblaciones en los territorios indígenas, y prohibió la enajenación de terrenos entre particulares, salvo que estuvieran inscritos y registrados. La ley también creó la Comisión de Radicación de Indígenas, encargada de efectuar los deslindes de los terrenos que serían entregados a los mapuche por medio de un título de merced[29]. Los "territorios

[28] Cf. Jorge Pavez Ojeda, "Las 'repúblicas indígenas' y el archivo como fetiche (nasa, kuna, mapuche, 1910-1950)", ponencia presentada en Latin American Studies Association Conference 50, Nueva York, 29 de mayo de 2016.

[29] "La misma ley establecía la forma de definir las tierras indígenas. Se les entregarían títulos a los que demostraran ocupación efectiva y continuada; si varios indígenas pretendieren un terreno, se favorecería al que lo hubiera ocupado en los últimos cinco años; si varios indígenas poseyeren un mismo terreno, se les consideraría comuneros y se les dividiría en partes iguales; todos los derechos

fronterizos de indígenas" habían sido definidos en el artículo 3 de la ley del 7 de diciembre de 1852 como:

> "El territorio comprendido entre el Bío-Bío y el Toltén y entre los Andes y la cordillera de la costa, será regido como territorio fronterizo. Lo mismo se observará con el comprendido entre Carampangue y el Toltén, la cordillera de la costa y el mar".

Una segunda ley de radicación, del 4 de agosto de 1874, en su artículo 10, confiere al Protector de Indígenas la representación de los intereses fiscales y la facultad de "litigar como pobre" en defensa de los indígenas. Esa misma ley prohíbe la adquisición de tierras por particulares en el territorio comprendido entre el río Malleco y el límite norte de la provincia de Valdivia. Al sur del Toltén, la dictación de leyes proteccionistas estará desfasada de varias décadas, en perjuicio de los mapuche-huilliche. Por ley del 11 de enero de 1893, se extenderá la prohibición de adquisición de tierras de la ley de 1874, desde la provincia de Valdivia al sur, y solo en 1906 se hará extensiva a las provincias de Valdivia y Llanquihue la definición de funciones legales de amparo a los indígenas establecidas para los intendentes en el decreto de 1853, y que se trasladan por ley de 1866 al Protector de Indígenas. Como han mostrado varios autores, esto tendrá graves consecuencias para la constitución de la propiedad indígena en las provincias de Valdivia y Llanquihue[30].

En el primer periodo de la institución (1866-1975), se sucederán cuatro Protectores de Indígenas: primero Teodoro Errázuriz[31], con sede en Los Ángeles, reemplazado durante el año 1870 por el exdiputado por Coelemu, Virginio Sanhueza, quien durará solo un año en el cargo, al ser nombrado fiscal de la Corte de Apelaciones de Concepción. Asumirá, entonces, por unos años y con sede en Angol, el exregidor y exalcalde de Los Ángeles, David Maza (o de la Maza, hijo del terrateniente regional Domingo de la Maza), siendo reemplazado por el exsecretario de la Intendencia del Maule, Carlos Boizard. Pero un año después, la ley del 15 de octubre de 1875 suprime el cargo de protector, que será restablecido por el artículo 3 de la ley del 20 de enero de 1883[32].

---

de propiedad se le reconocerían al cabeza de familia (varón o mujer); si los indígenas poseyeran un terreno como reducción dependiente de un cacique, se les daría la propiedad en común; si una octava parte de los jefes de familia de una reducción quisieren que se les otorgase la propiedad por separado, se haría la división, dando al cacique el triple de terreno que se les asignase a los cabezas de familia; y se preferirían los límites naturales para deslindar las propiedades". Fabián Almonacid, "El problema de la propiedad de la tierra en el Sur de Chile (1850-1930)", en *Historia*, n.º 42, vol. I (Santiago, 2009), p. 9.

[30] Cfr. entre otros Eugenio Alcamán, *Memoriales mapuche-williches. Territorios indígenas y propiedad particular (1793-1936)* (Osorno, Conadi, 2010).

[31] Abogado, profesor de Latín y Castellano en el liceo de Los Ángeles, hará luego una carrera de juez, asumiendo en 1880 como ministro en la Corte de Apelaciones de Santiago. Cfr. *Anales de la Universidad de Chile*, tomo 57 (Santiago, diciembre 1880), p. 727.

[32] Manuel Oñat señala en su Informe a la Comisión Parlamentaria (en este volumen, p. 372), que en 1876 fue "promovida a otro puesto la persona que lo servía, quedó acéfalo". Cfr. también Briones,

Un observador agudo como el naturalista francés Claudio Gay, notará en su segundo viaje por la Araucanía (1863-1864) la revitalización del derecho indiano en la legislación nacional que intenta enmarcar el proceso de colonización del Ngulumapu. En el amplio tratado etnográfico escrito unos años después de su viaje, comenta:

> "[Por decreto del] 14 de marzo 1863, el Gobierno creyó renovar de alguna manera la real cédula de 1719, o al menos decretar que desde entonces toda transacción [de tierras] sería válida solo si haya sido hecha ante el intendente o su representante, decreto que quedara en estado de letra muerta por la sutilidad de los contratantes, bastante astutos para hacer contratos secretos, el indígena usando de pretexto supuestas deudas y su obligación de pagarlas. Quizás sería más eficaz considerarlos como menores y darles protectores, como existían en la época colonial desde 1560, cuando un verdadero jurisconsulto que permanecía en la frontera y bastante poderoso para apreciar juiciosamente la exposición del requisitorio y llevar su control en todos los informes de testigos, demasiado a menudo de partido de los interesados"[33].

Lo que Claudio Gay presenta aquí como una propuesta propia era, en realidad, una decisión casi tomada por el Estado, la que se plasmará en la ley de 1866, como señala unas líneas después:

> "Un protector deberá incluso allegárseles [a los indígenas] como se hacía antes para los indios de encomienda, considerados en estado de minoría de edad en la sociedad (en 1560 ya existía un protector)"[34].

Entre medio de sus comentarios legislativos sobre la sobrevivencia del derecho indiano, señala sin eufemismos la situación en el territorio:

> "El Gobierno, que en estos momentos les hace [a los mapuche] *una guerra de conquista*, habiendose ya apropiado de toda la costa hasta el gran valle ¿no tendrá que temer, al obligarlos a concentrarse en las cordilleras, que se dejen caer inesperadamente como una avalancha que se tragaría el pequeño número de propietarios que se sería aventurado con imprudencia en ese valle? Solo fuertes guarniciones pueden asegurar su toma de posesión y la tranquilidad que exije y fortalecerla, y con eso logrado se deberá medir los terrenos concedidos, abrir buenos caminos para facilitar las comunicaciones y establecer jueces concienzudos para hacer justicia tanto a los indios como a los chilenos"[35].

op. cit., 1898. Esta persona era el abogado Carlos Boizard, que alcanzó a ocupar por solo dos años el cargo de protector. Luego será nombrado juez de letras en Linares y hará una carrera como juez.

[33] Claude Gay, *Moeurs et coutumes des Araucaniens*, escrito entre 1870-1873, p. 449 en edición de Claudio Cratchley y Diego Milos, a quien agradecemos la facilitación de una copia del documento.

[34] *Op. cit.*, p. 450.

[35] *Ibid.*

Esta precisión es sin duda importante: las leyes de radicación y su aparato jurídico son discutidas y promulgadas por el congreso nacional en las décadas de 1860 y 1870, *al mismo tiempo* que se lleva a la práctica una guerra de conquista. No es casual que esas décadas constituyan probablemente el periodo más oscuro de la historia mapuche moderna, donde se define la conquista de sus territorios mediante una guerra de ocupación que no escatima en masacres, depredaciones y saqueos del ejército y los colonos chilenos, historia de violencia esbozada en unos pocos estudios que han derrumbado la mitología militar de la "pacificación" sin resistencia de la Araucanía, desarrollada por los historiadores del siglo XIX y reforzada en dictadura por la llamada "historia fronteriza"[36].

Por otra parte, recién en 1884 se constituye la Comisión de Radicación de Indígenas, encargada de la cuestión clave de otorgar títulos de propiedad a indígenas, los llamados Títulos de Merced, iniciando así con veinte años de retraso la implementación efectiva de la ley de radicación de 1866. Como aún no se volvía a designar el Protector de Indígenas para los "territorios fronterizos", un decreto del 10 de noviembre de 1884 asigna a los promotores fiscales la defensa y representación de los indígenas "en los litigios sobre propiedad o posesión de sus tierras" y los contratos de compra-venta que celebrasen[37]. El nuevo protector será nombrado en 1885 con sede en Angol, y el nombramiento recaerá en el abogado recién graduado Tomás Romero Hodges, quien ocupará el cargo hasta 1889, para luego hacer carrera como diputado por Malleco, Intendente de la misma provincia y fiscal de la Corte de Apelaciones de Valdivia. En su reemplazo asumirá Teófilo Durán, funcionario que ocupará el cargo entre 1891 y 1899, siendo luego nombrado Subinspector de Tierras en Temuco. Como veremos mas adelante, Tomás Romero y Teófilo Durán fueron probablemente los protectores más cuestionados en la historia de la institución, en un periodo de gran desamparo legal de las tierras mapuche.

El año 1900 el juez de letras de Temuco, Eulogio Robles Rodríguez, es nombrado protector de indígenas de Cautín con sede en esa misma ciudad. Al segundo año en ejercicio, constata la imposibilidad de defender adecuadamente los indígenas de todo el "territorio fronterizo", por lo que solicita la creación de un protectorado adicional para el área sur del río Toltén, territorio conocido como Futa Huillimapu (füta=grande; Huillimapu= Tierra del Sur):

[36] Aunque no conocemos un estudio monográfico sobre este oscuro periodo, los trabajos de José Bengoa, *Historia del pueblo mapuche. Siglo XIX y XX* (Santiago, LOM Ediciones. 2000); Jorge Pinto Rodríguez, *De la inclusión a la exclusión. La formación del estado, la nación y el pueblo mapuche* (Santiago, Ediciones USACH, 2001); Pablo Mariman, "Los mapuche antes de la conquista militar chileno-argentina", en Pablo Mariman *et al.*, *i...Escucha, Winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche* (Santiago. LOM Ediciones, 2006), pp. 53-127 y Héctor Nahuelpán, "Formación colonial del Estado y desposesión en el Ngulumapu", en Comunidad de Historia Mapuche, *Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün. Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche* (Santiago, Ediciones CHM, 2012), pp. 123-156, dan elementos para dimensionar la violencia de la ocupación entre 1860 y 1885.

[37] Cfr. Álvaro Jara (ed.), *Legislación indigenista de Chile* (Ciudad de México, Ediciones Especiales del Instituto Indigenista Interamericano 1956).

> "Se remediaría esta anómala situación si se diera un defensor a los indios del sur del Toltén, servicio indispensable, para que en conformidad a la ley intervenga en las radicaciones que hoy se llevan a efecto en esa zona como para defenderlos de los que abusiva y criminalmente se apoderan de sus tierras. En Pitrufquén, Gorbea, etc. en que van adquiriendo valor, debido en gran parte al ferrocarril en construcción a Valdivia, los indios están expuestos a cada instante a ser despojados de ellas. Indígenas de esta zona han reclamado ante mí manifestándome que se les ha destruido sus casas, arrebatado sus sembrados y me he visto en la imposibilidad de asumir su defensa, limitándome a indicarles que ocurran a la Sub-Inspección de Valdivia y al promotor fiscal de ese departamento. [...] En las comunas rurales, adonde muy débilmente puede llegar la acción del Protectorado, se confabulan el alcalde, el subdelegado y el juez de subdelegación para explotar a los indios arrebatándoseles sus tierras"[38].

La insistencia de Eulogio Robles en esta necesidad ayudará a la creación del Protectorado de Indígenas para las provincias de Valdivia y Llanquihue en 1906, subdividido al año siguiente en un protectorado para cada una de esas provincias. En 1909 se crearán, mediante la ley de presupuesto, los protectorados de las provincias de Malleco (que alternará sede entre Angol y Traiguén) y Arauco (alternando su sede entre Cañete y Lebu). Sin embargo, en 1910 el Estado amenaza con el cierre del Protectorado de Llanquihue, ante lo cual el protector Daniel Cerda defiende la importancia de su oficina informando que se siguen veintiséis juicios en el Juzgado de Letras de Osorno en los que "se ventilan derechos de indígenas", y destacando que:

> "El solo hecho de existir un funcionario encargado de velar por los intereses de los indígenas hace que se respeten sus derechos ante la seguridad de que serán defendidos"[39].

En 1911, los protectores se reúnen con la Comisión Parlamentaria de visita en la región, y le entregan informes que serán incluidos como anexos al compendioso Informe Parlamentario, favoreciendo así por algunos años la acción de los protectorados[40]. Dos años después, Eulogio Robles entrega el cargo de protector de indígenas de Cautín, después de doce años de arduos trabajos, habiendo marcado un giro en la historia de la institución por la impronta ética, la integridad y la energía con que desarrolló sus funciones. Durante sus doce años

[38] Eulogio Robles, *Memoria del Protectorado de Cautín para el año 1902*, en este volumen, p. 225.

[39] Archivo Nacional de la Administración. Siglo XX, Santiago (en adelante ARNAD), Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización (en adelante MINREL), vol. 1436, 1910.

[40] Los Informes especiales entregados por los protectores Eulogio Robles, Manuel Oñat y Manuel Labbé a la Comisión Parlamentaria de Colonización están incluidos en este volumen, pp. 357-362, 369-380 y 395-430.

en el cargo, interactuó con miles de mapuche, los defendió en cientos de juicios para la restitución de sus tierras y desarrolló múltiples y profundas relaciones con sus representantes políticos, religiosos y lingüísticos. Además, se vinculó de manera activa a la Sociedad de Folklore Chileno, interactuó con los principales araucanistas de la época y redactó importantes trabajos etnográficos sobre el pueblo mapuche[41]. Su carrera llegará hasta la Corte Suprema, y en tanto miembro de ella, visitó el XVIII Congreso Araucano de diciembre de 1938 después de muchos años alejado del territorio mapuche, el Ngulumapu[42]. Será reemplazado en el Protectorado de Cautín por el hasta entonces protector de Arauco, Manuel Labbé, quien gozaba del apoyo de la organización mapuche Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía[43], fundada en 1910, y cada vez más atenta a las políticas de radicación.

La ampliación cuantitativa y cualitativa de la capacidad de protección legal y defensa de derechos indígenas llevará a un mayor escrutinio y crítica del proceso de radicación[44], a lo cual en 1916 el gobierno responderá con una serie de cambios administrativos que parecen iniciar un proceso de debilitamiento de la acción protectora. Por una parte, el gobierno destituye ruidosamente al presidente de la Comisión Radicadora, Leoncio Rivera, quien ejercía el cargo desde 1894, y sobre el que pesaban acusaciones de conflictos de interés, abandono de deberes, perjuicio a los indígenas y abierta corrupción por parte de varios dirigentes de la Sociedad Caupolicán. El presidente de esta Sociedad, Manuel Neculman, denunció que el presidente de la Comisión había usado un ingeniero de la misma para sustraer tierras de un título de merced y entregárselas a la Concesión Silva Rivas, de la cual Leoncio Rivera había sido abogado particular. En su nota de prensa, escribe Manuel Neculman:

> "No es posible Excmo. Señor que nuestra raza continúe bajo el capricho de un funcionario que no tiene el menor escrúpulo de faltar a la verdad y engañar a sus superiores con el objeto de perjudicar al indígena y favorecer a los particulares a quienes defiende y que está más preocupado de sus propios negocios que a la atención de los deberes que el Supremo Gobierno le ha confiado"[45].

[41] Sus trabajos etnográficos, publicados en los *Anales de la Universidad de Chile* entre 1907 y 1920, fueron compilados en Eulogio Robles Rodríguez, *Costumbres y creencias araucanas* (Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1940).

[42] Manuel Aburto Panguilef, manuscrito, inédito, 1938, p. 308.

[43] Véase columna de Manuel Manquilef, "Raza araucana. Don Manuel Labbé" en Fuentes Complementarias de este volumen.

[44] Sobre las críticas a la Comisión Radicadora, véase Alvaro Bello, "La Comisión Radicadora de Indígenas, su paso por la Araucanía (1866-1930)", en *Nütram*, vol. 9, n.º 34 (Santiago, 1994).

[45] Manuel A. Necul, "Una nota al Ministro", en *La Época,* Temuco, 2 de diciembre de 1915, la nota es enviada el 2 de diciembre 1915 y publicada diez días después. Véase texto completo en Fuentes Complementarias de este volumen.

Poco después de la destitución de Leoncio Rivera, una manifestación reúne decenas de delegaciones mapuche en Temuco para exigir a las autoridades la realización efectiva de la política de radicación. En su discurso, el joven Manuel Aburto Panguilef confirma que para muchos el problema no eran las leyes sino los funcionarios encargados de aplicarlas:

> "Lo único que necesitamos, lo único que pedimos a los mandatarios de Chile, es que se nos radique y se nos indique, a cada cual, el terreno que nos corresponde, para dedicarnos con ardor y entusiasmo al trabajo. Hay miles de indios que todavía no están radicados, todos estamos en una absurda comunidad y miles de estas comunidades están mal radicadas porque así lo quiso un funcionario mal intencionado que, cerca de veinte años oprimió a la raza hasta que al fin fue violentamente separado de su puesto"[46].

Al año siguiente, el nuevo presidente de la Sociedad, Manuel Manquilef, escribirá a propósito del destituido Leoncio Rivera:

> "Reducto y estorbo de bienestar araucano fue durante 22 años la Comisión Radicadora de Indígenas. Esta comisión, dueña y señora de las tierras indias fue la esquilmadora en la constitución de la propiedad mapuche"[47].

En su memoria anual, Manuel Manquilef cita al "prestigioso radical araucano", Juan M. Catrileo, vicepresidente de la Sociedad y al secretario Basilio García, quienes solicitaban en carta al ministro de Hacienda, que no se repusiera al destituido Leoncio Rivera, considerado "enemigo y esquilmador de la raza aborigen [...] que defiende a particulares y concesiones contra los intereses de los infelices indios"[48].

Con esta presión pública y las acusaciones que pesaban sobre el desempeño de Leoncio Rivera en la Comisión Radicadora, el gobierno decide nombrar al Protector de Indígenas de Cautín, Eleazar Bravo (sucesor de Manuel Labbé, con solo un año en el cargo), como presidente de la Comisión Radicadora, y a Francisco Mozó como protector de Cautín. Del abogado Eleazar Bravo, funcionario que era, además, "miembro honorario" de la Sociedad Caupolicán[49], se tenían grandes expectativas, las que resume Manuel Aburto en el discurso antes citado:

> "Por último, queridos hermanos, [felicitamos] al Supremo Gobierno que la oficina Comisión Radicadora de nosotros, antes radicadora de huincas, la

[46] Manuel Aburto, "Discurso de Manuel Panguilef", en *El Diario Austral*, Temuco, 16 de octubre 1916.

[47] Manuel Manquilef, "Memoria del Presidente de la Sociedad Caupolicán", en *El Diario Austral*, Temuco, 25 de diciembre 1917.

[48] *Ibid.*

[49] Rolf Foerster y Sonia Montecino, *Organizaciones, líderes y contiendas mapuches* (Santiago, Centro de Estudios de la Mujer, 1988), p. 20.

> ha convertido en radicadora de la raza y esperemos tranquilos en nuestras casas la acción del digno funcionario, de quien esperamos una radicación perfecta y pidamos a quien corresponda para que este señor se traslade a nuestras propiedades y nos entregue nuestros terrenos en conformidad a la regla 7 del artículo 7° de la Ley del 4 de Diciembre [de 1866]"[50].

La tarea no era fácil, y recién asumido como presidente de la Comisión, Eleazar Bravo señala haberse "formado una triste idea de la Oficina de la que me hago cargo, que un tiempo tuvo un personal de 25 individuos y que hoy no tiene sino cinco", y constata que a esas alturas se trata de una comisión "que ya no existe", donde falta de todo, y cuya "falta de atención lleva a Santiago romerías de indios por no encontrar aquí lo que es del resorte de esta Comisión"[51].

Por lo demás, los cambios de funcionarios se acompañaron de una política de restricción presupuestaria mucho más grave para la institucionalidad, con un decreto oficial que elimina los protectorados de Arauco y Llanquihue, y sobrecarga los protectorados de Malleco y Valdivia, que tendrían que hacerse cargo de esos amplios territorios donde menos radicaciones se habían realizado y donde las usurpaciones particulares tenían una larga y oprobiosa historia, como lo señalaba el propio Leoncio Rivera en sus informes a la Comisión Parlamentaria y sus memorias a la Oficina de Mensura de Tierras. La eliminación del Protectorado de Llanquihue parece una nueva burla del Estado, cuando la gran concentración mapuche de ese año en Temuco había tenido por objetivo precisamente demandar mayor agilidad en la radicación de los mapuche-huilliche de Villarrica y Llanquihue, donde casi no se habían otorgados títulos de merced, como señala claramente el petitorio entregado en esa oportunidad al intendente de Cautín, que exigió:

> "1° La suspensión de los remates de tierras que tendrán lugar esta semana;
>
> 2° Que se lleve a cabo la inmediata radicación de 24 mil indios que aún no se han radicado en la Provincia de Llanquihue, y muchos otros miles en la Provincia de Valdivia y Arauco;
>
> 3° Que se revise toda la radicación indígena que está mal hecha;
>
> 4° Que se lleve a cabo cuanto antes la subdivisión de la propiedad; y
>
> 5° Que se traslade el Señor Presidente de la Comisión Radicadora personalmente al departamento de Villarrica y a las partes donde su presencia sea necesario para que haga una radicación conforme a la ley.
>
> Se nombró enseguida una comisión formada por el señor Juan Catrileo, Ambrosio Paillalef y Francisco Melivilu para que ponga en conocimiento

[50] Aburto, "Discurso...", *op. cit.*

[51] Eleazar Bravo, presidente de la Comisión Radicadora de Indígenas a Inspector General de Colonización, Temuco, 20 de mayo de 1916, en ARNAD, Fondo Inspección General de Colonización e Inmigración (en adelante IGCI), vol. 211.

del señor Intendente el acuerdo anterior. La comisión fue muy bien recibida por el señor Meecks, quien les prometió ayudarlos y enviar su petición junto con un informe favorable al Supremo Gobierno"[52].

En 1923, queda sin efecto un decreto del año anterior que establecía que el Protectorado de Valdivia atendería los juicios de indígenas de Cautín que llegasen a la Corte de Apelaciones de Valdivia, porque el gobierno decreta el cierre definitivo de este Protectorado para reabrir el de Arauco, argumentando que "el mantenimiento de un Protectorado de Indígenas en Valdivia no obedece a una necesidad actual, por cuanto la población indígena en esa Provincia es muy reducida"[53]. La Ley 4169 del 29 de agosto de 1927 que crea el Tribunal Especial de Subdivisión de Comunidades, mantendrá dos protectorados de indígenas con el fin de representar a los mapuche en este tribunal, hasta que en 1930, la Ley 4802 que crea los Juzgados de Indios, elimina definitivamente la institución del Protectorado de Indígenas y entrega la función de defensa legal de los mapuche en los juzgados a la figura del Procurador de Indígenas.

Como ha señalado la mayoría de los estudios sobre la constitución jurídica de la propiedad en el sur de Chile, el retraso en la implementación de la ley de 1866 y de las instituciones e instrumentos creadas por esta (Comisión de Radicación, Protectorado de Indígenas, Títulos de Merced), favoreció ampliamente la usurpación de las tierras mapuche por grandes y pequeños colonos que, con la complicidad activa de agentes de los poderes Ejecutivo y Judicial, abusaban de los recursos jurídicos y de interpretaciones de la ley de 1866 (en especial de la exigencia de "ocupación efectiva y continuada" de terrenos) para la inscripción a su nombre de deudas, derechos y acciones sobre tierras históricamente ocupadas por mapuche y declaradas fiscales por el Estado. En el periodo de funcionamiento de la Comisión Radicadora de Indígenas (1884-1929), entregó cerca de tres mil títulos de merced a casi noventa mil indígenas, sumando unas quinientas mil hectáreas, lo que equivale a un diez por ciento de las 9,5 millones de hectáreas que comprende el territorio desde el río Biobío hasta la provincia de Llanquihue[54].

[52] "Comicio indígena de ayer", en *El Diario Austral*, Temuco, 16 de octubre de 1916.

[53] Decreto presidencial 455 del 14 junio 1923, en ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1436.

[54] Sobre este proceso se pueden consultar los informes de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2003), Comisión de Trabajo Autónomo Mapuche, *Informe de la Comisión de Trabajo Autónomo Mapuche* (Santiago: Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas 2003), también disponible en http://bcn.cl/28mt0 [fecha de consulta: 10 de agosto de 2020]; y los trabajos de Fabián Almonacid, "La división de las comunidades indígenas en el sur de Chile, 1925-1958: un proyecto inconcluso", en *Historia,* n.º 42, vol. I (Santiago, 2008), pp. 5-56 y "El problema...", *op. cit.*, entre otros.

Cuadro n.º 1
Los Protectores de Indígenas
(1866-1927)

<table>
<tr><th></th><th>Arauco
(Cañete, Lebu)</th><th>Malleco y Biobío
(Los Ángeles, Angol, Traiguén)</th><th>Cautín
(Temuco)</th><th>Valdivia
(Valdivia)</th><th>Llanquihue
(Osorno)</th></tr>
<tr><td>1866
1867
1868
1869</td><td colspan="2">Teodoro Errázuriz
(con sede en Los Ángeles)</td><td rowspan="4" colspan="3"></td></tr>
<tr><td>1870</td><td colspan="2">Virginio Sanhueza</td></tr>
<tr><td>1871
1872
1873</td><td colspan="2">David de la Maza
(con sede en Angol)</td></tr>
<tr><td>1874
1875</td><td colspan="2">Carlos Boizard Huidobro</td></tr>
<tr><td>1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884</td><td colspan="5">[Cargo suprimido]</td></tr>
<tr><td>1885
1886
1887
1888
1889</td><td colspan="2">Tomás Romero Hodges
(con sede en Angol)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>1890</td><td colspan="5">[Alejandro Larenas Fuenzalida]</td></tr>
<tr><td>1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899</td><td colspan="5">Teófilo Durán
(con sede en Temuco)</td></tr>
<tr><td>1900
1901
1902
1903
1904
1905</td><td colspan="5">Eulogio Robles Rodríguez
(con sede en Temuco)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th>Arauco
(Cañete, Lebu)</th><th>Malleco y Biobío
(Los Ángeles, Angol, Traiguén)</th><th>Cautín
(Temuco)</th><th>Valdivia
(Valdivia)</th><th>Llanquihue
(Osorno)</th></tr>
<tr><td>1906
1907</td><td colspan="3">Eulogio Robles R.</td><td colspan="2">Carlos G. Irribarra</td></tr>
<tr><td>1908</td><td rowspan="4">Manuel A. Labbé</td><td>Manuel Oñat</td><td rowspan="3">Eulogio
Robles R.</td><td rowspan="6">Carlos G.
Irribarra</td><td rowspan="3">Daniel Cerda</td></tr>
<tr><td>1909
1910</td><td>Manuel Oñat
(hasta septiembre)/
Javier L. Arrieta S.</td></tr>
<tr><td>1911</td><td rowspan="4">Javier L. Arrieta</td></tr>
<tr><td>1912</td><td rowspan="2">José
Schwerter Q.</td></tr>
<tr><td>1913
1914</td><td rowspan="3">Francisco
Muñoz Quezada</td><td>Manuel Labbé</td></tr>
<tr><td>1915</td><td>Eleazar
Bravo C.</td><td rowspan="2">José
Schwerter Q.</td></tr>
<tr><td>1916</td><td rowspan="2">Francisco
Mozó Merino</td></tr>
<tr><td>1917</td><td colspan="2">Javier L. Arrieta</td><td rowspan="3">Carlos G. Irribarra</td></tr>
<tr><td>1918</td><td colspan="2">s.d.</td><td>Francisco
Mozó M.
(hasta
marzo)/
Armando
Moraga D.</td></tr>
<tr><td>1919
1920
1921
1922</td><td colspan="2">s.d.</td><td>Armando
Moraga D.</td></tr>
<tr><td>1923
1924
1925
1926
1927</td><td colspan="2">Carlos Schnake Vergara</td><td colspan="3">Armando Moraga Droguett</td></tr>
</table>

Fuentes: Memorias IGCI 1899-1918; Memorias MINREL 1872, 1857, 1890, 1891; *Anales de la Universidad de Chile* 1869, 1880, 1881; Cuenta general de Inversión 1893, Ramón Briones Luco, *Glosario de Colonización, 1898* (Santiago, Imprenta Moderna, 1898); Reseñas biográficas parlamentarias, en Biblioteca del Congreso; ARNAD, Fondo IGCI; ARNAD, Fondo MINREL; Archivo Histórico Nacional (en adelante ANH), Fondo Intendencia Cautín; Tomás Guevara, *Historia de la civilización de la Araucanía: Los araucanos y la república* (Santiago, Imprenta Cervantes, 1902), tomo II. Tomás Guevara menciona como protector al abogado Alejandro Larenas Fuenzalida, nombrado Intendente de Malleco en 1901, sin precisar en qué fecha, aunque es probable que en el interinato entre Tomás Romero y Teófilo Durán.
Para visualizar la evolución de la jurisdicción territorial de los protectores de indígenas, véanse los mapas en este volumen, pp. 143-146.

El Estado colonial, la expansión del capital y el aparato ideológico jurídico

"Derecho es ideología jurídica
más un suplemento de ideología moral"
Louis Althusser

En su obra *Los orígenes del totalitarismo*, Hannah Arendt abordaba una dimensión contradictoria de los procesos de expansión colonial, expansión que es la lógica común del capitalismo y el imperialismo. Por medio de la colonización, en Chile como en el resto del mundo, el Estado busca la ampliación de la nación como cuerpo político, la integración de nuevos sujetos al cuerpo nacional, y su propio crecimiento como estructura de administración soberana de ese cuerpo político colonial, con funcionarios de gobierno comprometidos con ese colonialismo de tipo nacionalista. Así, en el imperialismo "moderado" inglés, la expansión del capital es aceptada como instrumento de la política nacional, producto de la "emancipación política de la burguesía" y la alianza del capital con el "bajo pueblo" (*the mob*). Sin embargo, la burguesía del gran capital busca la expansión sin límites de los procesos de acumulación de valor:

> "El concepto de expansión ilimitada, que sólo puede colmar la esperanza de ilimitada acumulación de capital y produce la acumulación del poder sin otros fines, hizo casi imposible la fundación de nuevos cuerpos políticos, tal como hasta la era del imperialismo había sido siempre resultado de la conquista. En realidad, su consecuencia lógica es la destrucción de todas las comunidades existentes, las de los pueblos conquistados tanto como las de la madre patria"[55].

La expansión se realiza en la apropiación de tierras y recursos con la expulsión o exterminio de los antiguos habitantes, movilizando también para este proyecto al "bajo pueblo", es decir, campesinos o peones transformados en colonos aspirantes a pequeños productores independientes, y que forman colonias de poblamiento, ávidas de apropiarse de tierra que no tienen y nunca han tenido. Este proceso, diferenciado en sus modos imperiales (hegemonía del proyecto del gran capital en el modelo inglés, y hegemonía del Estado "civilizador" en el modelo francés), se puede observar en Chile como una mezcla singular de ambas formas del colonialismo: la agresividad del capital terrateniente y el paternalismo del Estado republicano, doble inspiración de los modos de colonización que está también a la base del "eclecticismo" impulsado por Andrés Bello en la codificación del derecho nacional[56]. Por una parte, empre-

[55] Hannah Arendt, *Los orígenes del totalitarismo* (Madrid, Alianza Editorial, 2006).

[56] Sobre el eclecticismo de Andrés Bello y sus consecuencias para el pensamiento del colonialismo chileno se puede consultar Pablo Solari, "El ataque de Valentín Letelier al eclecticismo en

sarios y pequeños colonos chilenos y extranjeros se vuelven el sujeto de una "ideología de frontera"[57] de tipo populista, racista y nacionalista, un bloque de intereses resguardado por el sentido individualista y utilitarista de la colonización, expresado en la figura que se impone de hecho sobre el derecho: los llamados "particulares", que son los agentes históricos de ese proceso de acumulación primitiva como constitución de la propiedad privada por un proceso de usurpación legalizada mediante inscripciones irregulares amparadas en el *Código Civil* de Andrés Bello promulgado en 1857[58]. Por otra parte, el Estado busca organizar y regular la colonización estableciendo leyes e instituciones que tienden a la expansión jurídica de la burocracia para la administración de los diferentes territorios y sujetos fronterizos (los nuevos colonos y los antiguos ocupantes mapuche). Esa es la función de las Leyes de Radicación y las instituciones que estas crean como la Comisión de Radicación y el Protectorado de Indígenas.

El derecho, como discurso formal, sistemático, no contradictorio y saturado, requiere apoyarse en el aparato represivo del Estado (en su infraestructura policial) y en una ideología jurídica que es exterior al derecho mismo (por ejemplo, las ideas de libertad e igualdad ante la ley). Esta instancia ideológica, a su vez, requiere un "suplemento de ideología moral", como superestructura ideológica que actúa en los sujetos como "gendarme ausente", en reemplazo del policía que no está siempre en cuerpo presente vigilando el cumplimiento de la ley[59]. De manera que el Aparato Ideológico de Estado (AIE) jurídico tiene la doble función como aparato específico (diferenciado de otros AIE como el religioso o el educativo), de articular la superestructura ideológico-moral *sobre y en la infraestructura* de la represión policial[60]. El derecho pertenece, entonces, a la vez, al aparato represivo de Estado y al sistema de los aparatos ideológicos de Estado, los que gozan de "autonomía relativa" en su relación con la infraestructura del modo de producción[61]. Las Leyes de Radicación, con la Comisión Radicadora y el Protectorado de Indígenas creados por estas, constituyen el derecho y las agencias de esta "autonomía relativa" de los aparatos ideológicos de la colonización fronteriza, y disponen de una articulación necesaria con la infraestructura policial. Pero, al mismo tiempo, su aplicación histórica va deve-

Filosofía de la educación", en *Paralaje*, n.º 7 (Valparaíso, 2011), pp. 119-147 y Jorge Pavez, *Laboratorios etnográficos. Los archivos de la antropología en Chile (1880-1980)* (Santiago, Ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, 2015).

[57] Véase Frederik Barth, Joao Pacheco de Oliveira, *O nascimento do Brasil e outros ensaios* (Rio de Janeiro, Contra Capa. 2015).

[58] Gran parte de los llamados "estudios fronterizos" de la década de 1980 será la expresión historiográfica tardía de esa ideología de frontera.

[59] Louis Althusser, *Sur la reproduction* (Paris, Presses Universitaires de France, 1995), pp. 97-100.

[60] *Op. cit.*, p. 202.

[61] Louis Althusser, *Ideología y aparatos ideológicos de Estado (Freud y Lacan)* (Buenos Aires, Nueva Visión, 1988).

lando en la práctica la carencia de un "suplemento de ideología moral" en el proceso de colonización, cuya ideología sostiene una noción privatizada e individualizada de la propiedad contractual sobre las tierras, y el consecuente desvanecimiento del "núcleo moral" común necesario para alguna forma de solidaridad social[62]. Esta disolución del "suplemento moral" en la aplicación del derecho se expresa en la inexistencia de la figura del "gendarme ausente", es decir, de la coacción superestructural que obliga a los "particulares" a cumplir la ley, aunque la superestructura policial no se haga presente.

La carencia de suplemento "moral" en la política de colonización fue denunciada ampliamente por dirigentes y organizaciones mapuche durante el proceso de radicación, aunque estos se expresaran con diferentes ideologías jurídicas. Mientras que algunos dirigentes defendían la propiedad comunitaria de la tierra, otros como el futuro diputado Manuel Manquilef defenderá la subdivisión de las comunidades, siempre con un argumento moral. Este joven profesor normalista, profesor de la Misión Anglicana de Kepe y luego del liceo de hombres de Temuco, escritor y futuro presidente de la Sociedad Caupolicán, denunciará en 1914 la perversión de las intenciones de las leyes en el momento de su aplicación, acusando especialmente a los funcionarios de la Comisión de Radicación:

> "A pesar de todo, jamás pretendió el Gobierno arrebatar al indio toda su tierra, quiso solo quitarle lo que no podían aprovechar [...]. Aunque la Ley de Radicación es perfectamente constitucional, su práctica ha sido la conquista mas pesada y dura: engaños, violencias, asesinatos, quemar rucas e indios, etc. Cuando se dictó la ley en referencia, aun había en el Gobierno y Administración Pública sentimientos de honradez y respeto a la propiedad indígena. Reconoce ella ampliamente la propiedad del natural. [...] La Comisión Radicadora se constituía en el terreno, e ipso facto procedía a demarcar el suelo que el indio ocupaba. Esto duró poco y luego todo se echó a la chacota: cuatro, seis u ocho ingenieros constituyeron otras tantas comisiones, que hicieron lo que se les antojó, y arrojaron a los indios de sus tierras para darlas a colonos o rematantes; se mató al que no respetaba sus injusticias y al fin se dio por establecido por esa comisión de que el indio no podía ocupar más de 3 o 4 hectáreas. Falseando la ley e interpretándola malamente, se dijo que no era la ocupación el modo de adquirir del indio, sino la posesión y no esta en su acepción legal, sino una posesión que permitiera arrebatarle si era posible todo [...]. Se despreció el acto posesorio por excelencia que el indio podía ejercitar como pastor que era [...]. Esto ha sido una burla a la ley, un sarcasmo, un crimen nacional con engaño primero, violencia en las personas y fuerza en las cosas después"[63].

[62] Emile Durkheim, *De la division du travail social* (Paris, Presses Universitaires de France, 1930).

[63] Manuel Manquilef, *¡Las Tierras de Arauco! El último cacique* (Temuco, Imprenta y Encuadernación Modernista, 1915), pp. 9-10.

Los miembros de la Sociedad Caupolicán sabían de lo que hablaban. Su primer presidente, el profesor normalista Manuel Antonio Neculman, había sido intérprete oficial de la Comisión de Radicación durante un par de años (1887-1889), después de unos años como profesor de la escuela n.º 1 de Angol, para volverse, luego de su paso por la Comisión Radicadora, preceptor de la escuela n.º 1 de Temuco[64]. Por su parte, en 1919, el fundador y presidente de la Sociedad Mapuche de Protección Mutua de Loncoche, quien unos años antes había sido intérprete del Protectorado de Valdivia, Manuel Aburto Panguilef, declaraba en un discurso ante la Sociedad Mutual que las leyes de radicación "ante el espíritu de la usurpación han resultado letra muerta"[65]. Un par de años después, Manuel Aburto Panguilef lidera la creación de la Federación Araucana en el Primer Congreso Araucano de diciembre de 1921, cuyo objetivo declarado es el estudio del "derecho que tiene y efectivamente le corresponde a la raza araucana ante la ley y la autoridad moral de nuestro país"[66]. El manifiesto aprobado en el Segundo Congreso Araucano al año siguiente, es aún más explícito en su diagnóstico, acusando, también, la ausencia de moral que afectó la aplicación de las Leyes de Radicación y la actuación de la Comisión de Radicación:

> "I) [...] que la Constitución Política del Estado ni el Supremo Gobierno han pretendido vulnerarles su moral y su legislación ni de aquel que se le robe sus tierras en la forma que se ha hecho hasta el día de hoy;
>
> II) Que el Estado, en virtud de sus sagrados deberes que le pesa para velar por los intereses de sus gobernados, ha dictado leyes especiales para reconocer y constituir la propiedad indígena, los deslindes generales de sus predios a la Comisión Radicadora de Indígenas, a tiempo de su radicación;
>
> III) Que la Comisión Radicadora de Indígenas, pasando por encima de las leyes especiales, que es la voluntad suprema de la nación, no ha hecho otra cosa que despojar a todos los indígenas de sus propiedades, hasta constituir comunidades en que le caben dos hectáreas a cada comunero;
>
> IV) Que el Estado en que se halla actualmente la propiedad indígena, en cuanto a los radicados, este procedimiento es criminal e inmoral y en contravención manifiesta y arbitraria del sentido real y efectiva de las leyes de 4 de diciembre de 1866 y 4 de agosto de 1874"[67].

[64] Diego Gamboa y Jonathan González, "'...al sentirse dueños de la tierra se han puesto mas atrevidos y peligrosos...'. La Comisión Radicadora de Indígenas y la constitución de las primeras comunidades mapuches en el Gulumapu, 1884-1881", seminario para optar al grado de Licenciado en Historia (Santiago, Universidad de Chile, 2016).

[65] Véase Foerster y Montecino, *op. cit*., p. 33.

[66] Véase *op. cit*., p. 36.

[67] Véase *op. cit.,* pp. 71-72

Manuel Aburto no dejará de criticar la forma en que se realizó la radicación y su flagrante contradicción con la moralidad que debía inspirar las mismas leyes, por lo que en 1924 participa en la asamblea extraordinaria de la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, planteando:

> "Lo que debe hacer la asamblea es nombrar una comisión que se acerque al gobierno y pida enérgicamente la reconsideración de las radicaciones hechas y solicite nuevas radicaciones conforme lo establecen las leyes de la República, exponiendo para ello los títulos de merced donde se pueden hacer resaltar los verdaderos crímenes que se cometieron al radicar nuestra raza"[68].

Los diferentes líderes mapuche no dejarán de apelar a la validez del Aparato Ideológico Jurídico, no tanto por su poder coactivo (que nunca los benefició demasiado, y que tampoco tuvieron institucionalizado en su tradición política), sino por su articulación a un suplemento de ideología moral, que aparece en el centro de sus reclamos históricos, y como principal sustento de validación de las leyes. Estando en juego la existencia material misma de la sociedad, sus escritos maximizan el suplemento moral del derecho y su aparato ideológico. Mientras los colonos particulares operan en la esfera del derecho civil, productor de contratos de intercambio entre individuos, los líderes mapuche apelan al núcleo moral de la ideología jurídica, y su codificación penal como crímenes contra toda una sociedad explotada y vulnerada.

El Protectorado de Indígenas como archivo fragmentario evanescente

La operatividad y reproducción de la ideología jurídica se sustenta ampliamente en su producción de archivo, como lugar de depósito de documentos legales (topología de la *arkhé*) y de interpretación de las leyes por un custodio autorizado (nomología del *arconte*)[69]. El Imperio romano:

> "Al expandirse siguiendo la circulación de sus documentos e inmortalizándose a sí mismo por su archivamiento, prescribió la manera en que los archivos de la ley occidental pasaron dejaron a ser signos visibles del poder y empezaron a ser banidos en oscuras oficinas"[70].

Los archivos y sus documentos determinan la formalización y diferenciación de la ley entre autoridad y administración, contribuyendo a la formación de tres entidades sobre las que se basa la ley: la verdad, el Estado y el sujeto.

[68] Véase Foerster y Montecino, *op. cit.*, p. 38.

[69] Jacques Derrida, *Mal d'archive. Une impression freudienne* (Paris, Galilée, 1995).

[70] Cornelia Vissman, *Files. Law and Media Technology* (Stanford, Stanford University Press, 2008), p. XIII.

La inexistencia de un fondo oficial de archivo dedicado al Protectorado de Indígenas señala el frágil estatuto de la verdad, el Estado y el sujeto del colonialismo chileno. Desde la creación de la institución en 1866, la ley exigirá que el Protector de Indígenas informe anualmente de su actividad. Esta exigencia se precisará en el Reglamento de la Inspección General de Tierras y Colonización del 20 de mayo de 1896 que señala que el protector: "Deberá presentar al Inspector General, en Enero de cada año, una memoria de los trabajos que haya ejecutado". Sin embargo, el reglamento no fue cumplido con mucha constancia, y no ha resultado fácil encontrar estas memorias cuando no fueron impresas en los volúmenes de las *Memorias de la Inspección General de Colonización e Inmigración* (ex Inspección General de Tierras y Colonización), de la que dependió durante la fase tardía de su existencia institucional (siglo XX). La serie impresa de estas *Memorias*, que inicia en 1899, fue suspendida por falta de recursos en 1915, y nuevamente se desvanece la visibilidad pública de la administración de la colonización. Por otra parte, los documentos del funcionamiento cotidiano y rutinario del Protectorado se encuentran dispersos en numerosos fondos archivísticos, de alcance departamental, provincial, regional y nacional. Recién en 2019, el Fondo IGCI, fue abierto al público luego que falleciera el funcionario que los custodiaba en la Biblioteca Nacional de Chile y que se oponía a tanto a su acceso al público como a su traspaso al Archivo Nacional Histórico. En este fondo de archivo encontramos numerosas huellas documentales del Protectorado de Indígenas, que dependía directamente de esta Inspección, al igual que la Comisión de Radicación, hasta la disolución definitiva de ambas instituciones en 1930.

La fragmentariedad y dispersión evanescente del archivo de las varias oficinas de Protectorados que llegaron a funcionar al mismo tiempo, es sintomática del régimen jurídico-legal en que se zanja y legaliza la usurpación de las tierras de los mapuche del sur. Institución menor dentro del entramado burocrático de la colonización chilena, sobrevivencia hispano-indiana en el derecho codificado nacional, el Protectorado como fruto de una ideología tutelar proteccionista no pudo imponerse ante los aparatos de Estado que ejecutaban el proyecto de colonización de poblamiento por nacionales y extranjeros, amparados en la ideología liberal del individualismo contractual y las instituciones anticomunitarias del derecho civil. La invisibilización del archivo del Protectorado, el que también fue varias veces destruido por incendios que afectaron sus diferentes oficinas[71], se reproduce también en la invisibilidad de los principales sujetos de su acción jurídica, los mapuche que vieron mermados sus derechos por la debi-

[71] Los incendios que afectaron las oficinas del Protectorado de Cautín en Temuco en 1908 y del protectorado de Valdivia en 1909 abarcaron muchas cuadras céntricas de estas capitales provinciales, por lo que se dificulta pensar que fueron intencionados a la destrucción específicas de sus archivos. No sabemos, en cambio, de las condiciones en que se generó el incendio que consumió "gran parte del archivo" de la Comisión Radicadora en el año 1911.

lidad de la institución. El Protectorado de Indígenas fue el principal lugar de inscripción de la agencia jurídico-legal mapuche en su demanda por tierras, aunque no el único. En sus documentos destacan centenares de nombres propios mapuche, los que solicitan la representación de sus derechos al protector, ante el acoso permanente de los "particulares" que ambicionan la apropiación de sus tierras. Al mismo tiempo, los documentos rubricados por el Protectorado de Indígenas se inscriben en un régimen de enunciación que repite y reproduce enunciados y prácticas racistas, propias de la ideología de protección, tutela y asimilación, la que infantiliza e inferioriza a los indígenas al mismo tiempo que oblitera y elimina su lengua, el mapudungun, y su nombre como pueblo, el mapuche. Pocas veces enunciado en miles de páginas oficiales (y más bien en la década de 1920, última década reduccional), los etnónimos 'mapuche', 'huilliche' o 'lafkenche' son reemplazados casi siempre por las categorías coloniales de "indígenas", "indios" o "araucanos". Asimismo, muy pocas palabras del léxico mapudungun aparecerá en más de treinta años de funcionamiento de la institución, destacando la inscripción fugaz de dos palabras: *ruka* (casa) y *nguillatun* (ceremonia).

La producción y aplicación del derecho opera así una ideología jurídica, que es también una ideología lingüística. Mientras que la historia del derecho se presenta como la de un proceso de racionalización y creciente codificación por la escritura, el binarismo oralidad/escritura va reforzando la jerarquía colonialista de las lenguas, donde aquellas que han desarrollado escrituras alfabéticas para la redacción de la ley se imponen a las otras. De manera que el proceso de desposesión territorial tiene un correlato lingüístico-epistemológico debido a la importancia que adquieren para su efectuación:

1) los dispositivos jurídicos implementados por la escritura del derecho y la ley y
2) los aparatos judiciales de su aplicación, donde se afirma la dominación lingüística.

El proceso de imposición del derecho genera una crisis, una ruptura semiótica que tiende a la imposición de un nuevo régimen significante. La aplicación de la ley de la República en el territorio indígena, en el proceso llamado de radicación inaugura "un suspenso entre dos épocas de escritura"[72]: la época de las *ars dictaminis*, cuando la política interétnica entre las "dos repúblicas" se escribía en la correspondencia diplomática entre caciques y autoridades estatales[73], y la época de las *ars notariae,* cuando la política de colonización se escribe en las notarías como inscripción jurídica de títulos de propiedad y contratos de arriendo y compraventa de tierras. Mientras que las artes de dictar cartas inscriben simétricamente a los sujetos como representantes de la colectividad política (o el Estado) en una obligación de reciprocidad, las artes notariales interpelan al

[72] Jacques Derrida, *De la grammatologie* (Paris, Minuit, 1967), p. 130.
[73] Jorge Pavez (comp.), *Cartas mapuche. Siglo XIX* (Santiago, Colibris/OchoLibros, 2008).

sujeto para el cumplimiento de contratos individuales zanjados "ante la ley" que lo obliga. La violencia epistémica de esta colonización semiótica está en el "cambio funcional en un sistema de signos" que se inicia "por la fuerza de una crisis". Sin embargo, el espacio para el cambio existe ya en una función previa del sistema semiótico, la función heteronómica de la ley, de manera que "el cambio de función-significación suplementa la función precedente"[74]. Las artes notariales del *Código Civil* impuesto al sur del Biobío suplementan la función de una escritura previa, la de las artes epistolares y también las escrituras de Actas y Tratados de Paz surgidos de grandes y pequeños parlamentos interétnicos. Pero en ese proceso de suplementación imperfecta de una escritura por otra, de la violencia de las clasificaciones por la violencia epistémica colonial, solo caben los "fracasos cognitivos"[75] o "equívocos de traducción"[76], que conciernen no solo el carácter liberal capitalista de la ley que regula la propiedad de la tierra, sino, también, el carácter de la *aplicación* de esa ley. Por eso que tanto como los abogados, ingenieros, jueces, agentes judiciales, notarios y tinterillos, los intérpretes mapudungun-castellano tendrán un lugar protagónico en el proceso de colonización y radicación precariamente tutelado por los Protectores de Indígenas.

Las prácticas de traducción jurídico-lingüística no son nuevas ni propias de la época reduccional, sino que más bien empiezan a volverse una necesidad institucional de los aparatos estatales que tienen que atender situaciones jurídicas que involucran a los mapuche, principalmente en la Comisión de Radicación, el Protectorado de Indígenas y los Juzgados de Letras. De hecho, durante todo el siglo XIX, las cartas que los *longko* remitían a las autoridades estatales venían escritas en castellano, lo que supone la participación de intérpretes al servicio de las jefaturas mapuche que remitían esas cartas y que recibían respuestas oficiales. Pero, como muestran las cartas de los *longko* enviadas durante el proceso de radicación que inicia la Comisión Radicadora en 1884, estos jefes hacen un esfuerzo notable por traducir no solo la lengua, sino, también, el derecho, traducción de nociones jurídicas que buscan dar a entender la legalidad de su posición en el derecho del otro, hacer su derecho traducible a la legislación del otro, abriendo el idioma del destinatario (español) a los sentidos de su idioma original (el mapudungun). Esta práctica de traducción jurídica en la escritura de cartas anuncia entonces una nueva época en la que los caciques apelan a la protección por parte de las máximas autoridades republicanas ante una serie de agentes usurpadores, entre estos, muchos funcionarios de ese mismo Estado.

[74] Gayatri Spivak, "Estudios de la subalternidad. Deconstruyendo la historiografía", en Sandro Mezzadra (comp.), *Estudios poscoloniales. Ensayos fundamentales* (Madrid, Traficantes de sueños, 2008), p. 2.

[75] Gayatri Spivak, "¿Puede hablar el subalterno?", en *Revista Colombiana de Antropología*, vol. 39, (Bogotá, enero-diciembre 2003), p. 327.

[76] Eduardo Viveiros de Castro, "Perspectival Anthropology and the method of controlled equivocation", in *Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America*, vol. 2, issue 1. Disponible en https://digitalcommons.trinity.edu/tipiti/vol2/iss1/[fecha de consulta: 19 de junio de 2018]

Los mapuche y el Estado chileno:
de la simetría epistolar a la tutela judicial

En el mes de junio del año 1896, doce años después de implementada la Comisión de Radicación de Indígenas, y once años después de la campaña de Villarrica que culmina la ocupación militar de la Araucanía, los mapuche Manuel Mariqueo, Ramón Llancapichún, Francisco Millanao y Joaquín Millanao viajan desde la tierra *huilliche* hasta Santiago, y ahí entregan tres cartas al Ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización. Estas cartas, escritas por Joaquín Millanao a ruego de estos autodenominados "Ciudadanos Chilenos Araucanos", hacen presente directamente al Ministro los problemas de tierra que los aquejan: Manuel Mariqueo denuncia que un cierto Carlos Furlo quiere "gravarle" "un retazo [de terreno] que me quiere usurpar", siendo Carlos Furlo el yerno de un cierto Enrique Schmitt con quién Manuel Mariqueo estuvo en litigio durante más de veinte años, "habiéndole ganado como tres veces al referido Schmitt que ha fallecido", y alegando que ha tenido que "gastar mil y tantos pesos sobre el juicio que seguí en contra de Schmitt" para conseguir la inscripción de sus títulos en el Conservador de Bienes Raíces, cuyas contribuciones fiscales señala estar pagando trimestral y semestralmente[77]. Ramón Llancapichún denuncia por su parte a un cierto Francisco Peña como "mero tenedor violento" de un terreno que le arrendaba desde hace nueve años y que ahora Francisco Peña no quiere devolver, y que el referido Francisco Peña junto a sus hijos y otros "fue a saltearme y quitarme la vida", habiéndole robado cuatrocientos veinte pesos que tenía en la casa de donde tuvo que huir, y que Francisco Peña tiene a Ramón Llancapichún "sentenciado a muerte con mi señora esposa".[78] Finalmente, Francisco Millanao denuncia la ocupación de un terreno suyo por Adeodato Pucci, como "mero tenedor en Clandestinidad Interrumpida", por lo que solicita que "esa escritura falsa que tiene Puchi sea nula y quede sin efecto". Las tres cartas son de mano del mismo escribano mapuche, las tres dicen acompañar sus títulos de propiedad inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, argumentan escribir directamente al Ministro con el objetivo de "evitar gastos" en procedimientos judiciales y terminan solicitando un "pase libre" para volverse por tren hasta el puerto de Valparaíso y por embarcación marítima desde ahí hasta Valdivia.

Cuatro meses después del viaje a Santiago de la comitiva Millanao, Esteban Romero, un *ñizol longko* (autoridad principal) que alcanzó importante renombre por su resistencia armada contra la fundación del fuerte de Temuco quince años antes (1881)[79], envía una carta dictada a un escribano de Chillán,

[77] Véase Pavez, *Cartas mapuche...*, *op. cit.*, p. 797.

[78] *Op. cit.*, pp. 799-800.

[79] Manuel Manquilef, "Comentarios del pueblo araucano (La faz social)", en *Anales de la Universidad de Chile*, tomo CXXVIII (Santiago, 1911), pp. 3-60 y "Comentarios del pueblo araucano (La

dirigida ya no al Ministro sino al Presidente de la República recién asumido, Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901). En esta carta se lee en términos muy diferentes un mismo problema de fondo, que es el del régimen jurídico de los mapuche y el despojo material al que están sometidos. Romero escribe "por sí, en representación de su numerosa familia y, a nombre de muchos y prestigiosos caciques de la Araucanía", de los cuales da una extensa lista trescientas personas, y señala "respetuosamente" al Presidente:

> "Que ya no nos es posible soportar por mas tiempo la cruel tiranía que sobre nosotros pesa. Las autoridades en representación del Estado y a nombre de la Ley, cooperan al despojo que nos hacen los especuladores de tierra y animales en la frontera [...] Todos nosotros nos dedicamos al cultivo de la tierra y a la crianza de animales contribuyendo así, mas que los extranjeros que hoy nos sustituyen, al bienestar del pueblo de Chile; pero ya no nos es posible hacer esto porque se nos ha despojado con injusticia, de nuestros elementos [...] se nos martiriza y trata de exterminar, de todos [los] modos. Las policías rurales nos vejan y quitan nuestros caballos y se nos hace responsable de cualquier robo que en la frontera se ejecute; se nos arrastra a la cárcel y allí se nos maltrata cruelmente y tenemos que sufrir el hambre y morir, de pena y extenuación"[80].

El *longko* da cuenta de los abusos de especuladores, del robo de animales, de las injusticias de la policía y autoridades que los trata como criminales y los hambrea, todo lo cual se realiza "en representación del Estado y a nombre de la Ley". Para enfrentar el exterminio, Esteban Romero pide al Presidente "justicia y protección", deslizando una extraña "amenaza":

> "Si no la encontramos, nos veremos obligados a aceptar la oferta que se nos hace de la Argentina, donde podemos contar con extensiones para enviar nuestros ganados y con tierras de cultivo para alimentar a nuestras familias".

El cacique Esteban Romero busca afirmar la autonomía del grupo mapuche para decidir la ley del Estado (chileno o argentino), exterior al grupo (mapuche), a la que decide acogerse, es decir, afirmar la heteronomía de la ley del Estado como una decisión de la autoridad mapuche, una "heteronomía sin servidumbre"[81]. Algo parecido harán dos años después los caciques Domingo Coñuepan, Paineman y Landero, aunque en forma invertida: ante la eventualidad de guerra entre Chile y Argentina (1898), el ilustrado "gobiernista" Coñuepan y sus *lonko*

jimnasia nacional)", en *Anales de la Universidad de Chile*, tomo CXXXIV (Santiago, 1914), pp. 1-219; Tomás Guevara, *Las últimas familias y costumbres araucanas* (Santiago, Imprenta Barcelona, 1913).

[80] Véase Pavez, *Cartas mapuche, op. cit.*, p. 805.

[81] Jacques Derrida, *Politiques de l'amitié* (Paris, Galilée, 1994).

ofrecen al mismo presidente Federico Errázuriz, el "sacrificio de sus mocetones" ("cuyo número no baja de quinientos"), y se declaran a la espera de "órdenes para ocupar un puesto avanzado" en la Argentina[82].

A pesar de su amenaza, Esteban Romero también expresa al Presidente su preferencia por Chile, "pues nos es muy duro dejar a Chile amado en cuyo pueblo hemos inoculado nuestra sangre y con ella las condiciones de nuestra noble raza"[83]. A diferencia de Francisco Millanao, para Esteban Romero la solución está en el cambio de los agentes del Estado, más que en el cambio de la ley; por eso pide "se digne ampararnos nombrando hombres buenos y con autoridad bastante para que puedan protegernos"[84], deslizando así una crítica tanto a la calidad de los funcionarios encargados de asuntos indígenas como a la débil autoridad que se les concedía para una acción protectora eficaz. La solicitud de Esteban Romero parece haber sido escuchada, ya que dos años después, el "hombre bueno con autoridad bastante para proteger" a los mapuche se manifestará en la persona del juez letrado nombrado Protector de Indígenas de la Provincia de Cautín, el abogado Eulogio Robles Rodríguez, quien tendrá que "representar los derechos de los indígenas [...] especialmente en el deslinde de sus posesiones y en todos los contratos traslaticios de dominio" (ley de 1866), y asumir la "representación de los intereses fiscales en todo el territorio" y "litigar como pobre en defensa de los indios" (ley de 1874)[85].

La carta de Francisco Millanao, también suscrita por su pariente y escribano Joaquín Millanao, incluye una petición de alcance más general respecto al régimen jurídico de las tierras indígenas. Se trata de una demanda relativa a la modificación de la legislación misma que regulaba la propiedad de las reducciones indígenas, afecta hasta entonces a la prohibición de división y enajenación:

> "Siendo nosotros Chilenos Araucanos, como los demás que estamos bajo la bandera chilena y que estamos en nuestras propiedades, suplicamos a su Excelencia para que nos [permita] arrendar, hipotecar, permutar o enajenarlas, para buscarnos la vida así como lo hacen [en] nuestra República de Chile, sírvase su Excelencia así decretarlo"[86].

[82] Véase Coñuepan, Paineman y Landero, en Pavez, *Cartas mapuche, op. cit.*, p. 819. En 1889, Domingo Coñuepan agradece a Horacio Lara "en nombre de mi nación", "la memoria de tantos mártires de mi Patria de Arauco", en Pavez, *Cartas mapuche, op. cit.*, p. 792.

[83] Véase Esteban Romero en Pavez, *Cartas mapuche, op. cit.*, p. 806.

[84] La carta termina con la lista exhaustiva de los miembros de "dos familias cuyos miembros han sido despojados de sus patrimonios i obligados a buscar en la casa paterna el único refugio que les queda": la del mismo cacique Esteban Romero compuesta por ciento cincuenta y nueve personas, y la de su concuñado el "caciquillo" Juan Alberto Quidel compuesta de ciento cuarenta y tres miembros, haciéndose así el representante de trescientos seis hombres y mujeres mapuche.

[85] Entre 1906 y 1910, se nombrarán Protectores de Indígenas para las otras provincias de frontera (Valdivia, Llanquihue, y posteriormente Arauco-Biobío y Malleco).

[86] Véase Pavez, *Cartas mapuche...*, *op. cit.*, p. 801.

Desde la perspectiva de los Millanao, cuyo grupo ya ha obtenido sus títulos de radicación, la igualdad jurídica consistía en la posibilidad de volverse sujetos contractuales en un mercado de tierras, al igual que cualquier ciudadano chileno propietario. La simetría es entendida aquí en la forma de un agenciamiento de la ciudadanía a la propiedad individual de tierras, agencia que habilita para "arrendar, hipotecar, permutar o enajenar" lo que el derecho del Estado le garantiza como propiedad. Esta concepción liberal del individuo y la propiedad de la tierra en términos de un bien o recurso transable, y la necesidad de dividir la propiedad colectiva de la tierra en títulos individuales, será compartida por casi todos los Protectores de Indígenas, como podemos leer en sus Memorias anuales.

Estas cartas revelan también otra práctica, que es parte de las lógicas de la simetría política y la heteronomía sin servidumbre en que se desenvuelven las jefaturas mapuche. Se trata del viaje en comitiva a las ciudades capitales, para presentar sus demandas directamente ante la autoridad superior del Estado[87]. Desde su primer año en funciones, Eulogio Robles podrá percibir que los viajes a la capital de Chile indicaban la urgencia de los mapuche por reafirmar el amparo político-jurídico sobre sus tierras:

> "Los araucanos desean vivamente se les radique con prontitud para verse amparados con un título en el terreno que poseen; de ahí sus frecuentes viajes a Santiago para pedir su radicación"[88].

Las cartas entregadas al Ministro en Santiago por los Millanao son expresión de esta práctica, y el nombramiento de los Protectores de Indígenas en las diferentes provincias fue una decisión que buscaba cambiar esta relación equívoca, instalando una mediación que no era solo jurídica, administrativa y lingüística, sino, también, política y geográfica. Sin embargo, más de una década después, el ministro de Colonización Puga reclama al intendente de Cautín por tener que seguir recibiendo a los mapuche en Santiago:

> "El Ministerio ha tratado en diversas ocasiones de evitar que los indígenas que tienen que hacer llegar a conocimiento del Gobierno reclamaciones relativas a sus tierras se trasladen a Santiago a presentar personalmente sus quejas. Hasta ahora nada se ha conseguido a este respecto y a obtener un resultado favorable en tal sentido se encaminan las instrucciones que paso a dar a US. US, como primer autoridad de la provincia y como representante

[87] Sobre el envío de "embajadores" mapuche a la ciudad de Santiago, véase Osvaldo Silva, "Las relaciones entre los linajes de los butalmapu mapuches y la actuación de sus embajadores en Santiago", en *Cuadernos de Historia*, n.º 28 (Santiago, 2008), pp. 161-178 y sobre la costumbre del viaje a tierras lejanas en la cultura mapuche, Alvaro Bello, *Ñampulkafe. El viaje de los mapuche de la Araucanía a las pampas argentinas* (Temuco, Universidad Católica de Temuco, 2011).

[88] Eulogio Robles, *Memoria del Protectorado de Cautín para el año 1900*, en este volumen, p. 184.

inmediato del Gobierno, conviene que preste acogida, oyendo sus reclamos, a las peticiones que le dirijan los descendientes de la antigua raza araucana que, por condición de inferioridad respecto a los demás pobladores del país, son mas dignos de ayuda y están, a menudo expuestos a ser victimas de procedimientos torcidos en su contra [...] Si bien es verdad que a los Protectores de Indígenas de Temuco y Valdivia está encomendada esta clase de trabajos ocurre frecuentemente que los caciques y mocetones que residen lejos de esos centros no tienen los medios de ponerse con facilidad al habla con aquellos y cuando logran conseguirlo han perdido tiempo y dinero que no siempre pueden recuperar. De ahí que prefieran venir a la capital, en donde tienen necesariamente que sufrir toda clase de privaciones y dilatar mas la pronta solución que anhelan"[89].

Al año siguiente, es el nuevo ministro, Rafael Balmaceda, quien reitera su queja al Intendente:

"Con frecuencia vienen a Santiago indígenas a entablar reclamos que los Gobernadores Departamentales o los Protectores de Indígenas podrían fácilmente satisfacer. El Gobierno por razones de simple equidad les concede pasaje de regreso; pero sucede que el indígena reclamante se hace acompañar de varios otros, ocurriendo el caso de uno que traía doce mocetones, imponiendo un gravamen innecesario al erario. En lo sucesivo los Gobernadores deberán prestar atención solícita u preferente a los reclamos de los indígenas, en conformidad con propósitos del Gobierno de impedir por todos los medios de que sean expoliados. Si en su defensa es menester recurrir a la justicia deberán requerir por escrito a los Promotores Fiscales. El Gobierno concederá pasaje de regreso sino al indígena interesado y que traiga pasaporte del respectivo Gobernador. Sírvase hacer notificar esta resolución por avisos que se fijarán en la Gobernación y las oficinas de los Protectorados de Indígenas"[90].

Los viajes a Santiago son indicios de una singular relación histórica de los mapuche con la ley, el Estado y sus instituciones, pero también indican la (dis) funcionalidad de todo el proceso de radicación y los intereses en conflicto en el proceso de constitución jurídica de la propiedad.

La aplicación de las Leyes de Radicación implicaba no solo a las instituciones creadas para tal efecto, sino, también, la actuación de otras instituciones públicas, menos proclives a la defensa del derecho de los mapuche y al proyecto integracionista que inspiraba las leyes, de manera que el Estado se revela en sus

[89] Ministro F. Puga a Intendente de Cautín, 20 de noviembre de 1907, en Archivo Nacional Histórico (en adelante AHN), Fondo Intendencia de Cautín, vol. 115.

[90] Ministro R. Balmaceda a Intendente, 16 de noviembre de 1908, en AHN, Fondo Intendencia de Cautín, vol. 115.

diferentes segmentos, como instrumento de los intereses de grupos sociales que los usan para sus fines y se enfrentan entre sí mediante la cooptación de agentes e instituciones. De manera que el proceso de constitución de la propiedad de la tierra y la violencia de la "acumulación originaria" en el Ngulumapu evidencian los conflictos de una segmentalidad estatal, cuyos diferentes aparatos se enfrentan en la práctica, sustentando sus posiciones en diferentes ideologías jurídicas. Las Memorias de los protectores constituyen una fuente inestimable para entender esos conflictos y la legalización de los procesos de usurpación de las tierras mapuche. No puede dejar de llamar la atención la cantidad de veces que los protectores deben usar en sus escritos palabras como 'atropellos', 'abusos', 'crímenes', 'extorsiones', 'engaños', 'vejámenes', 'tropelías', 'fraudes', 'exacciones', 'usurpación', 'expoliación' o 'despojo', para denunciar lo que le está ocurriendo al pueblo mapuche en el periodo de 1890-1930. Estas palabras describen una realidad que viene ocurriendo mucho antes en el territorio mapuche, desde antes, incluso, de las leyes de radicación, que inicia probablemente en las regiones de Arauco y Valdivia hacia 1840, y se mantiene durante todo el siglo XIX y siglo XX a pesar de esas leyes.

La aplicación invertida de las leyes de radicación

Una cuestión central en el proceso que posibilitó la desposesión del territorio mapuche por los colonos y el capital terrateniente es la denunciada por el Protector de Indígenas Eulogio Robles en varias de sus Memorias, y es que la ley de radicación fue aplicada "en sentido inverso". En vez de adjudicarle a los mapuche las tierras por ellos ocupadas antes de la conquista chilena del territorio, para luego declararlas sobrantes como fiscales y destinarlas a remates, el Estado impulsó el proceso inverso: se declararon tierras fiscales y remataron antes de radicar a los indígenas, de manera que a ellos se les dejaban las sobrantes. Desde su primera Memoria como Protector de Indígenas (1901), Eulogio Robles señala a propósito de la carencia de tierras para radicar a los mapuche:

> "La escasez de tierra de que se hace mérito, se debe precisamente a no haber practicado las radicaciones en conformidad a la ley; pues se ha procedido en sentido contrario a lo por ella prescrito. No hago cargo a los funcionarios que hoy tienen este servicio: el mal viene de mas atrás. La ley de 4 de diciembre de 1866 dispone que en terrenos de estas zonas se proceda a radicar a los indios, i que el sobrante se repute terreno baldío, y de dominio del Estado. Como se ve, es necesario radicar primero a los indios para determinar cuál es la propiedad fiscal; pero en muchos casos se ha procedido a la inversa: el Estado ha dispuesto de estos terrenos, sacándolos a remate, y después se ha radicado a los indios, dejándolos encerrados entre terrenos rematados; en el

sobrante, puede decirse, de estos remates, se les ha radicado. Se ha procedido, pues, en sentido contrario a lo dispuesto por la ley".

Ante la Comisión Parlamentaria de Colonización que visita la Araucanía en 1911, Eulogio Robles volverá a insistir:

"Al mismo tiempo que se radicaban indígenas, se formaban hijuelas para remates, se daban lotes de terreno en arrendamientos, se donaban suelos a colonos y se hacían enormes concesiones de suelos a particulares para que los colonizaran. Todavía más: en muchas ocasiones, se procedió primeramente a rematar hijuelas, a colonizar, etc., y en el sobrante se radicó a los indios. Es decir, se aplicó la ley en sentido inverso: el Fisco dispuso de lo que quiso, y en el resto de los suelos se radicó a los indios"[91].

El Estado favoreció en la práctica la ocupación por colonos nacionales y extranjeros, contradiciendo las propias leyes que se había dado teóricamente para otorgar derechos a los indígenas en la repartición de tierras.

Esta aplicación inversa (y perversa) de la ley se vio facilitada por la demora de casi veinte años en nombrar una comisión radicadora (1884), lo que forma parte coherente de una estrategia más amplia para atrasar la radicación y así adjudicar tierras a los *wingkas*. Eulogio Robles detecta tempranamente las formas en que se burlaron las primeras leyes de radicación. Entre las décadas de 1840 y 1860 se iniciaron en Arauco, Malleco, Valdivia y Osorno[92] las inscripciones notariales de tierras indígenas a nombre de grandes y pequeños colonos, ante lo cual el Poder Legislativo reaccionó prohibiendo estas inscripciones notariales en un registro público, única forma legal de enajenar propiedad inmueble entre particulares según el *Código Civil* de 1957. Es entonces cuando:

"Personas interesadas en eludir estas precauciones, ocurrieron lisa y llanamente a los notarios con el objeto de extender escrituras de venta y de poderes para litigar, hasta que por decreto de 16 de octubre de 1863, se prohibió a los notarios de Arauco y de Nacimiento que otorgasen las escrituras a que se refieren los decretos antes citados, que tenían fuerza de ley [...] Ese decreto no consultó sanción alguna para los funcionarios que lo contraviniesen, y los fraudes y abusos contra los indígenas, a quienes con frecuencia se enredaba en juicios con la mira de despojarlos de sus tierras, siguieron su curso; en vista de lo cual se dictó el decreto de 6 de julio de 1872, que dice en uno de sus considerandos 'que, no obstante las medidas tendentes a evitar los fraudes y abusos que se cometen en la enajenación y demás actos que celebran los

[91] Informe de Eulogio Robles a la Comisión Parlamentaria, en este volumen, p. 404.

[92] Alcamán, *op. cit.* y Rolf Foerster, ¿*Pactos de sumisión o actos de rebelión? Una aproximación histórica y antropológica a los mapuche de la costa de Arauco* (Santiago, Pehuén, 2018).

> indígenas para trasmitir o gravar la propiedad del territorio en que se encuentran, ha llegado a noticias del Gobierno que estos abusos continúan con perjuicio de la propiedad del Estado, que es la que de ordinario sirve de materia para estas transacciones'; y resolvióse que 'los escribanos públicos de los departamentos de Nacimiento, Angol, Lebu e Imperial no extenderían en lo sucesivo escritura alguna sobre venta, hipoteca, anticresis, arriendo o cualquier otro contrato que tenga por objeto gravar o enajenar los terrenos de indígenas de aquellos departamentos, sin que por parte de los que pretenden celebrar estos contratos se les presente el respectivo título escrito y competentemente registrado, [...] y que, siendo indígenas los que pretendan gravar o enajenar la propiedad, los escribanos no extenderían los respectivos instrumentos si no se les presentaba la copia legalizada de la escritura que previamente ha debido otorgarse en conformidad al artículo 6° del Supremo Decreto de 14 de marzo de 1853 y los artículos 4° y 5° de la ley de 4 de diciembre de 1866' [...] Este decreto sancionó con suspender de sus oficios a los notarios que lo contravinieren. [...] Olvidaron las leyes prohibitivas que hemos citado, establecer procedimiento expedito para hacerlas respetar, y sus preceptos han llegado a convertirse casi en meramente teóricos"[93].

Es importante desarrollar aquí la argumentación de Eulogio Robles, dando cuenta de forma breve de como se dio históricamente el divorcio entre la teoría jurídica y la práctica administrativa, una teoría que reconoció a los mapuche el derecho de propiedad de la tierra, y una práctica que llevó a cabo en el territorio mismo formas perversas de desposesión, apartadas de la ley, y amparadas en la corrupción de funcionarios públicos que trabajaban para los intereses de los grandes capitalistas y acumuladores de tierra.

Teoría positivista de la protección y práctica perversa de la ocupación

Como mostró Víctor Toledo, el debate parlamentario sobre la ley de 1866 enfrentó dos concepciones políticas sobre el modo de colonización de la Araucanía: la liderada por Benjamín Vicuña Mackenna y Cornelio Saavedra, que propugnaba la expropiación estatal de todas las tierras del sur a los que consideraban "bárbaros" sin derecho ninguno, y la encabezada por José Victorino Lastarria, Antonio Varas y Miguel Luis Amunátegui, que buscaba que prevalecieran los principios constitucionales de la fundación republicana, que reconocía a todos los habitantes del exreino de Chile (incluidos los mapuche, que habían sido declarados ciudadanos chilenos en la Constitución del 1833) el derecho de propiedad. En la ley de radicación aprobada en 1866 prevaleció el criterio propuesto por José

[93] Eulogio Robles, *Memoria del Protector de Cautín para el año 1901*, en este volumen, p. 175.

V. Lastarria, que buscaba que el derecho positivo nacional se diferenciara del derecho indiano y no discriminara entre grupos o clases de sujetos con más o menos derecho al dominio de sus bienes, generando así el caso excepcional de la legislación chilena en relación con el resto de los colonialismos (Argentina o Estados Unidos) que declaraban las tierras indígenas como *res nullius* (tierra sin dueño), excepcionalismo que denunciaban los opositores a la ley de radicación[94]. Pero como remarca el mismo Víctor Toledo a continuación del protector Eulogio Robles y de muchos dirigentes mapuche, una cosa fue la teoría legal y otra diferente fueron las prácticas, que se revelan de forma explícita en las Memorias de algunas autoridades de los territorios fronterizos, que consideraban que la presentación de hechos consumados generaba una presión sobre el gobierno y el Congreso Nacional para la derogación de la ley de 1866. El gobernador de Lebu, Hermógenes Perez de Arce, es notablemente virulento en su retórica, llena de sinécdoques, paralepsis y falacias, que encubren el abierto desacato al mandato legislativo. El Gobernador inicia su exposición declarando:

> "Para que se poblara el departamento de Lebu ha sido necesario quebrantar la ley del 4 de diciembre 1866 y decretos posteriores que a ella se refieren; porque esa ley prohíbe la población del territorio de Lebu, desde que prohíbe la adquisición de terrenos. A pesar de la ley, los pobladores han venido en gran número. Y, ¿qué harían esos [centenares de] pobladores si no pueden comprar un pedazo de terreno; si no pueden contratar sino ante un protector de indígenas que vive a cien leguas de distancia y una cordillera de por medio? No se podía hacer otra cosa que eludir la ley; hacer contratos a pesar de sus prohibiciones. Esto es lo que efectivamente ha sucedido. Se han hecho muchísimos contratos privados. Todos los terrenos de indios están en manos de arrendatarios"[95].

A pesar de ser "arriendos" acordados con los mapuche, el Gobernador acusa los alzamientos indígenas como obstáculo al "sacrificio" de los colonos: "de muchos de ellos puede decirse que mientras abrían el surco con el arado les picaba las espaldas la lanza del araucano". Pero este conflicto armado parece no existir cuando se trata de alabar las cualidades de "nuestros nacionales" para la colonización del territorio indígena:

> "Conocen las costumbres de los indios y su idioma; están acostumbrados a correr los peligros de su vida semi-salvaje. Con estas facilidades no les cuesta

[94] Victor Toledo Llancaqueo, "En segura y perpetua propiedad. Notas sobre el debate jurídico sobre derechos de propiedad indígena en Chile, siglo XIX", en *Actas del IV Congreso Chileno de Antropología* (Santiago, Universidad de Chile, 2001).

[95] Hermógenes Pérez de Arce, "Informe del Gobernador de Lebu", en *Memoria de Relaciones Esteriores i de Colonizacion presentada al Congreso Nacional de 1875* (Santiago, Imprenta de la República, 1875), p. 261.

> mucho trabajo estrechar sus relaciones con los indios y entrar en negocios para comprarles sus terrenos"[96].

De manera que los alzamientos no parecen ya relevantes cuando se trata de autorizar "que los terrenos pasen de las manos del salvaje a las manos del hombre civilizado". De esta manera cuando señala: "no puede arribarse otro resultado, sino que conceda los indios capacidad legal para vender, y legalizar multitud contratos privados hoy existentes"[97], también está diciendo que más que una "capacidad" se apelará a una obligación que se cumplirá con la fuerza en caso de resistencia, tal como lo impulsaban desde Santiago los discursos supremacistas de BenjamínVicuña Mackenna y *El Mercurio*. No hay lugar para los mapuche en este proyecto de colonización, que no sea la venta de sus tierras. De hecho, cuando el Gobernador señala que "trabajamos por la civilización de los araucanos, pero trabajamos por un imposible, mientras haya una ley que haga imposible todo comercio con ellos", niega la potencia ganadera de los mapuche y toda la importante actividad de intercambio y comercio que existía en la frontera[98]. El Gobernador propone con vehemencia la entrada de la colonización nacional en las tierras indígenas, colonización que adquiere en este relato la forma de una agresiva fuerza de ocupación, apenas contenida por disposiciones legales que considera deben eliminarse para abrir la compuerta a la ocupación masiva. La "colonización espontánea" es así concebida como una fuerza de presión para-militar, y tendrá ocasión de actuar como tal[99]:

> "El departamento de Lebu no ha necesitado de inmigración artificial; tiene una inmigración nacional espontánea. Está en él abierta la ancha puerta que ha de dar entrada a la civilización en toda la baja frontera. ¿Qué cosa mas justa, mas conveniente, entonces que dejar franca esa puerta; dejar que tomen amplitud todos los elementos civilizadores que de por sí solos pugnan por romper las barreras con que se les tiene detenidos en la línea de la frontera? Una inmigración artificial europea nos costaría inmensos sacrificios de dinero. Una inmigración espontánea no nos cuesta un solo centavo. Esta la tenemos en Lebu, y la tenemos estrecha, comprimida, casi perseguida y hostilizada,

[96] Pérez de Arce, *op. cit.*, p. 267. Aquí aprovecha el Gobernador para exponer su estrategia espacial de ocupación por la fuerza: "Juzgo conveniente poblar el territorio araucano por medio de colonias extranjeras y de colonias nacionales, distribuidos del modo siguiente: las extranjeras situadas a inmediaciones de las poblaciones consumidoras ya establecidas y formadas, con facilidades para dar salida a los productos; las nacionales a inmediaciones de la línea de frontera, en disposición de avanzar hacia el interior".

[97] *Op. cit.*, pp. 260-261.

[98] Cf. Jorge Pinto e Iván Inostroza, *Expansión capitalista y economía mapuche, 1680-1930* (Temuco, Universidad de la Frontera/Municipalidad de Collipulli, 2015).

[99] Véase un ejemplo donde más de cuatrocientos "vecinos" de Cañete y Quidico se unen a los soldados de Lebu para atacar a los mapuche de Tirúa, en Foerster, *¿Pactos de sumisión...*, *op. cit.*, pp. 206-207.

puede decirse, por las disposiciones legales vigentes. Tenemos una población numerosa, dispuesta a desbordarse mas allá de las líneas de la frontera, tan luego como pueda ocupar el suelo. Es, pues, de inmensa importancia no matar ese espontáneo movimiento de población, sino adelantarlo, empujarlo, ofrecerle estimulo para que cada día tome mayores proporciones. El mas poderoso aliciente que puede ofrecerse a los particulares para establecerse en el territorio araucano son las facilidades para adquirir la propiedad territorial. Estimo como de una valiosísima importancia la influencia que debe tener la iniciativa particular en la civilización de la Araucanía"[100].

La estrategia de hechos consumados de infracción a las llamadas "leyes prohibitivas" con la que actúa la colonización de particulares en la provincia de Arauco, se asemeja a la que se dio desde la provincia de Valdivia hacia el sur. Si antes de esas leyes, la usurpación de tierras se efectúa mediante compra-venta de tierras que no están delimitadas y son vendidas por mapuche que no son propiamente "dueños" de estas, con las prohibiciones de compra-venta impuestas por las leyes, la usurpación adquiere otras formas de infringirlas como son la venta de "acciones y derechos" sobre las tierras. En ambas prácticas ilegales, la apropiación de tierras indígenas por colonos contó con la complicidad activa de los funcionarios locales y regionales (alcaldes, subdelegados, jueces, notarios), que "legalizaban" las escrituras de compra-venta ya sea de tierras o de "acciones y derechos" sobre estas. Pero además, la reconstrucción de esta historia de despojos tiene que considerar las notables diferencias epistemológicas en torno la noción de propiedad de la tierra, entre el *admapu* (derecho consuetudinario mapuche) y el *Código Civil* de Andrés Bello. Es la diferencia entre un historicismo estrecho como el de Leonardo León, que mira los documentos notariales de Arauco como si fueran transparentes y unívocamente leídos por todas las partes que firman[101], y una perspectiva etnohistórica como la de Rolf Foerster, que permite mostrar el equívoco fundamental por el que las formas de cesión de derechos sobre la tierra por parte de los mapuche que concurren a firmar a las notarías, son concebidas como derechos de uso individual bajo la figura de la "donación", primero, y de la venta de "acciones y derechos" y de "arriendos", después, en el marco de un uso colectivo entre grupos aliados, que no equivale a una forma de enajenación individual y perpetua[102]. Y ello porque, por un lado, el *admapu* no consideraba la tierra como un bien transable

[100] Foerster, *¿Pactos de sumisión...*, *op. cit.*, p. 264.

[101] Leonardo León, "La danza de los pesos y las hectáreas: lonkos y comerciantes en la venta de tierras mapuches, 1858-1864", en *Revista Tiempo Histórico*, vol. 5, n.º 8 (Santiago, 2014), pp. 17-47. La gran cantidad de preguntas sin respuesta que formula este autor sobre el problema no parece recurso retórico sino evidencia de sus limitaciones epistemológicas para entender el archivo que analiza.

[102] Rolf Foerster, "Los procesos de constitución de la propiedad en la frontera norte de la Araucanía: sus efectos esperados y no esperados en el imaginario y en la estructura de poder", en *Cuadernos de Historia*, n.º 28 (Santiago, 2008), pp. 7-35.

(valor de cambio), sino como herencia inenajenable e indivisible de las generaciones anteriores, que los vivos solo pueden ocupar (valor de uso), y que era entendida como herencia común de generaciones anteriores[103] (lo que explica que los chilenos beneficiados por donaciones o acciones y derechos de parte de algunos mapuche siempre se encontraban con ocupantes mapuche de los mismos terrenos que no habían cedido ningún derecho) y, por otra parte, porque en la lógica indígena de la alianza y el pacto resultaba importante compartir el uso de la tierra colectiva con los aliados (fueran o no mapuche) ofreciéndoles el derecho a establecerse en ella (derecho no entendido como enajenación)[104]. Sin duda que la posibilidad de traspasar individualmente derechos de uso (y no de propiedad), abierta por la legislación chilena, generó espacios para el conflicto interno entre los *lof* (unidades territoriales) mapuche, el desacato de ciertos miembros de esas comunidades al mandato del *admapu,* y el quiebre con los administradores del derecho mapuche que eran los *longko.* En el caso del Huillimapu, territorio al sur del Toltén, el derecho mapuche había también incorporado un título de propiedad anterior a la figura del Título de Merced, que eran los llamados Títulos de Comisario, otorgados a las familias huilliches por el comisario de nación Francisco Aburto y reconocidos por la ley chilena en 1823[105]. Los procesos de colonización en las provincias de Arauco y Valdivia, y las prácticas de legalización de la desposesión de tierras se adelantaron bastante a lo que ocurrió en las provincias de Malleco y Cautín, donde la ocupación se realizó mediante avanzadas militares y líneas de fortificaciones propias de una guerra de conquista. El Estado asumió ahí un papel preponderante en la desposesión práctica de las tierras indígenas, con la promesa legislativa incumplida de reconocer el derecho de los mapuche a las tierras que ocupaban.

Así, en los primeros años de 1870, mientras en Lebu la autoridad pareciera esperar solo una orden para lanzar las huestes de la "colonización espontánea" sobre las tierras *lafkenche* (de la costa), en la línea del Malleco, el abogado, exregidor y exalcalde de Los Ángeles, David Maza, nombrado Protector de Indígenas en 1871, da cuenta de prácticas igualmente preocupantes. Se trata de una de las primeras intervenciones que hemos encontrado de un Protector de Indígenas en Memorias ministeriales, en la forma de un intercambio de informes con el ministro de Relaciones Exteriores y Colonización Adolfo Ibáñez. El protector David Maza da cuenta de la compleja situación de superposición de pretensiones de propiedad territorial entre el Estado, los particulares y los mapuche:

[103] Resulta sospechosa la relativización que sugiere el intendente Basilio Urrutia respecto a los "terrenos" mapuche, al señalar "que ellos *consideran* suyos por haberlos heredado de sus mayores". Cf. "El Intendente de Arauco al Ministro de Relaciones Esteriores i de Colonización", en *Memoria del Ministerio de Relaciones Esteriores i Colonización* (Santiago, Imprenta de la República, 1875), p. 250.

[104] *Ibid.*

[105] Sobre la importancia del comisario Francisco Aburto véase Donoso y Velasco, *op. cit.* y Alcamán, *op. cit.*

> "Hay varios indios que no han vendido sus tierras al Fisco. Con todo esas tierras están comprendidas dentro los límites que expresan las escrituras públicas de compra venta extendidas por varios indios a favor del Fisco [...] El Protector de indígenas, por esta circunstancia, se ha visto mui embarazado para atender los reclamos de esos indios que no han vendido y así espera que US. se sirva indicarle el camino que deba seguir en esos casos. Además pongo en conocimiento de US. que de todas las escrituras públicas de compra-venta hechas por los indios a favor del Fisco, no hay una sola que esté inscrita; y no me he atrevido a solicitar su inscripción, porque estoy persuadido de que muchos vecinos de por acá, se opondrán inmediatamente a la inscripción de todas ellas"[106].

La situación resulta difícil de entender para el ministro de Santiago, por lo que pide explicaciones. En un segundo informe, el protector David Maza desarrolla los dos problemas enunciados. Respecto a los terrenos reclamados por indígenas que no han vendido, pero que figuran en las escrituras de venta al Estado, señala:

> "*No era posible que el representante del Fisco conociese individualmente a cada uno de los muchos dueños de un inmenso territorio*, como son todas las propiedades adquiridas por el Estado a título de compra hecha a indígenas. Los vecinos de la Frontera que prestaron en aquella ocasión buenos servicios al Coronel don Cornelio Saavedra, influyendo con los indios a que vendiesen sus terrenos, eran solo conocedores de ciertas localidades pero ignoraban quienes fuesen los dueños de muchas otras. Además es necesario recordar que *no fueron los indios quienes ofrecieron en venta sus tierras, sino que ellos fueron solicitados para venderlas, y que muchos manifestaron claramente que tal proposición no les agradaba de ninguna manera*; bien que después accedieron sometiéndose a las instancias y consejos de algunas personas influyentes [pero también] muchos se ocultaron para no ser llamados con tal objeto"[107].

Y respecto al segundo punto, el de la dificultad de inscribir las escrituras y, por lo tanto, de concretar legalmente la enajenación de las tierras, explica:

> "Muchos particulares [...] se llaman dueños de una considerable extensión de los terrenos comprados por el Estado, alegando algunos que tienen escrituras de compra, de donación en pago, etc. [...] todas estas personas tienen

[106] David Maza, "Informe del Protectorado de Indígenas al Ministro de Relaciones Exteriores y Colonización, Angol, 1 abril 1872", en *Memoria de Colonización presentada al Congreso Nacional de 1872 por el Ministro del ramo* (Santiago, Imprenta de El Independiente, 1873), pp. 133-134.

[107] "Informe del Protectorado de Indígenas al Ministro de Relaciones Exteriores y Colonización, Angol, 25 de mayo 1872", en *Memoria de Colonización presentada al Congreso Nacional de 1872 por el Ministro del ramo* (Santiago, Imprenta de El Independiente, 1873), p. 136. Las cursivas son nuestras.

> en Angol agentes encargados de darles inmediato aviso de la inscripción de las escrituras fiscales, a fin de que ellos puedan oportunamente hacer la oposición del caso"[108].

Y termina el protector David Maza, con cierta esperanza:

> "Cuando en cumplimiento del artículo 2º del decreto de 15 de abril último, tenga yo que visar los contratos traslaticios de dominio, gravámenes e hipotecas, que se hubieren celebrado sobre terrenos indígenas desde el 1º de enero 1854, tendré ocasión poner de manifiesto un vergonzoso cuadro de los vejámenes, fraudes, tropelías y abusos, muchos fáciles de probar, con que algunos vecinos se han complacido en sacrificar a los pobres indios. Entonces haré ver como un propietario fronterizo posee actualmente algunos miles cuadras de terrenos de indios, sin haber dado por ellos más que tres almudes de frejoles, gimiendo mientras tanto sus verdaderos dueños en la más espantosa miseria"[109].

No puede ser casual que al año de advertir sobre los criterios que imprimiría a su gestión, el protector David de la Maza del Río haya sido sustituido en el cargo. A pesar de ser hijo de Domingo de la Maza, temprano terrateniente que "compró" las tierras de Renaico a la viuda del *lonko* Mariluan, el protector David de la Maza parece haber tenido cierto compromiso genuino con la ley proteccionista, y por eso tuvo apoyo del prefecto de misiones Estanislao Leonetti[110], quien parece haber facilitado su acercamiento con el *toqui* (jefe militar) José Santos Kilapan, y también de la prensa regional como el periódico *El Laja*, que publicaba sus cartas y otras crónicas sobre sus gestiones[111].

[108] "Informe del Protectorado de Indígenas al Ministro de Relaciones Exteriores y Colonización, Angol, 25 de mayo 1872", *op. cit.*, pp. 136-137.

[109] *Op. cit.*, p. 137.

[110] El fraile Estanislao M. Leonetti desde Nacimiento le escribe a David de la Maza, el 23 de mayo de 1872 para decirle: "he sabido con mucho placer que usted ha intervenido en varias cuestiones de indios i les ha hecho justicia. Los indios le están sumamente agradecidos y se ha llenado la Araucanía de tales noticias. Así será fácil sacar algo de estos pobres, viendo se les oye como a hombres y se les trata como tales. Yo por mi parte congratulo con usted y le doy las gracias". Cf. Véase Luis Carlos Parentini, *Tipos fronterizos en la Araucanía del siglo XIX: los afuerinos*, documentos de estudio (Santiago, Universidad Blas Cañas, 1994), p. 55.

[111] Véase en Luis Carlos Parentini citas del diario *El Laja* con excelentes referencias del protector Maza. Luego de su sustitución en el cargo por Carlos Boizard en 1874, no tenemos más referencias de Maza, aparte de su muerte prematura a los cuarenta y nueve años, en 1889: "Apenas llegado a esa ciudad, numerosas partidas de indios fueron presentándose a el para que hiciera valer los muchos reclamos que las autoridades fronterizas les obligaban a interponer, por el mal tratamiento que les dan i las injusticias que con ellos se cometen. El señor Maza ya tiene interpuesto más de 200 reclamos a nombre de los indígenas, que por primera vez veían claridad y justicia para ellos". Parentini, *op. cit.*, p. 54.

En esos mismos años (1871-1872), la Comisión Topográfica se encarga de la mensuración y partición en hijuelas del Territorio de Colonización declarado fiscal, avanza detrás de las fuerzas militares, generándose todo tipo de problemas y conflictos de jurisdicción entre las autoridades que debían concurrir a la fijación de límites (Protector de Indígenas, secretarios de Intendencia e intendentes)[112]. Las hijuelas mensuradas por la Comisión son abiertas a remates, impulsados por el intendente y ministro Cornelio Saavedra, quien "compraba" esas tierras a los mapuche mediante la coerción oportunamente denunciada por el protector David Maza. En el primer remate, autorizado por decreto del 5 de agosto 1873, se subastan cuarenta y seis mil hectáreas, con entusiasta participación de los terratenientes y el capitalismo santiaguino. No parece casual, entonces, que activada con éxito la política de remates de tierras declaradas fiscales, en detrimento del derecho indígena, sea suprimido el cargo de Protector de Indígenas mediante un decreto del año 1875.

En su *Historia del pueblo mapuche,* José Bengoa distingue las estrategias de colonización entre "estatistas" (la mayoría de los militares, como el intendente general Gregorio Urrutia) que buscan un mayor control de la propiedad por parte del Estado, y "capitalistas" (entre los que se sitúa el intendente general Cornelio Saavedra), que buscan la entrega rápida de tierras a grandes y a veces pequeños colonos. Víctor Toledo, en cambio, apunta a la relación de estas estrategias con el marco legal en que se inscriben, distinguiendo entre positivistas constitucionalistas, que reconocen el derecho indígena, y expropiadores supremacistas, que buscan el simple exterminio. El criterio de Víctor Toledo parece más acertado, al demostrar que el Estado no declaró fiscales todas las tierras del sur, sino que reconoció el derecho constitucional de los indígenas a la propiedad de la tierra, y por eso tuvo que aplicar prácticas coercitivas para forzar los mapuche a vender, como dan cuenta los informes del protector David Maza. Lo que sí da cuenta el trabajo de José Bengoa y varios otros, es que dentro del bloque de poder que busca la expropiación de las tierras indígenas, se disputa también el proyecto de colonización que se quiere desarrollar, enfrentándose los eurocéntricos que creen que solo la colonización extranjera puede contribuir a un proyecto civilizatorio "modernizador", y los nacionalistas que buscan impulsar la colonización nacional, repartiéndose la tierra entre el gran capital terrateniente y los pequeños colonos nacionales de la "colonización espontánea".

Los aparatos y agentes estatales al servicio de la usurpación por "particulares"

La supresión del cargo de Protector en 1876 parece una maniobra exitosa de los grupos de poder que se oponían a la ley de 1866, y propugnaban la expropiación

[112] Cf. Oficio de jefe de ingenieros de la Comisión topográfica al Ministro de RR.EE y Colonización, septiembre 1872, en Guevara, *Historia de la civilización..., op. cit.*

práctica de las tierras mapuche. Un elemento que apunta a esto es la valoración que hace el intendente Basilio Urrutia del protector de indígenas Carlos Boizard, sucesor de David Maza, el mismo año en que será suprimido el cargo. En su Informe al Ministerio de Colonización, Basilio Urrutia reivindica un particular "método de colonización" puesto en práctica por él junto al Protector de Indígenas: la creación de "una colonia de naturales araucanos" destinada a "servir de asilo a cuantas familias indígenas ocupaban sin derecho los terrenos fiscales rematados en el mes de noviembre de 1873". En esta "colonia" *modelo*, donde al modo estadounidense se trasplantaron familias mapuche, se formaron "cincuenta y un lotes [hijuelas de treinta, cuarenta y cincuenta hectáreas] que en el acto se ofrecieron por medio del protector de indígenas", en lo que considera un:

> "Pequeño establecimiento llamado a servir de norma a los que sea necesario crear en el futuro [y] así lo ha comprendido el actual protector de indígenas cuya solicitud i cuidado por la suerte de la colonia [...] me complazco en declarar públicamente como un acto de justicia"[113].

Al mismo tiempo, el intendente Basilio Urrutia defiende la pertinencia de la mediación del Protector de Indígenas en la constitución legal de la propiedad, cuestionando el criterio de la Corte de Apelaciones de Concepción por no conocer la "cuestión araucana" en la práctica, de manera que las gestiones de solicitud de títulos de merced debieran "practicarse por conducto del protector de indígenas, representante nato de los indios"[114]. A pesar del énfasis del Intendente en la importancia casi indispensable de esta institución de mediación y protección, su existencia será suspendida hasta el año 1884, dejando así a la Comisión Topográfica de Teodoro Schmidt la libertad para diseñar el mapa de la propiedad de la tierra, sin obstáculos de jurisdicción o consideraciones de protección al derecho indígena.

Con la segunda ley de radicación de 1883, que refuerza los argumentos de José Victorino Lastarria para complementar la ley de 1866, se busca restablecer el derecho de propiedad indígena, ampliamente burlado durante casi veinte años. Se nombra una comisión de radicación de indígenas, y al año siguiente, se vuelve a establecer la institución del Protectorado. Pero aquí de nuevo, el bando terrateniente logra tomar el control del proceso en el territorio mismo, consiguiendo el nombramiento de personajes afines a la apropiación fiscal de la mayor

[113] Basilio Urrutia, "Memoria del Intendente de Arauco", en *Memoria de Relaciones Esteriores i de Colonización presentada al Congreso Nacional de 1875* (Santiago, Imprenta de la República, 1875), p. 251. El intendente Urrutia menciona otra "pequeña colonia indígena", la del "cacicato de Manquelipe con sus ochenta y tres lotes de tierra, distribuidos entre los llamados súbditos de este cacique", *op. cit.*, p. 252.

[114] "Memoria del Intendente de Arauco", *op. cit.*, p. 254. Entre 1874 y 1883, era un ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción que presidía la Comisión Topográfica que entregaba títulos de merced a los mapuche (véase cuadro n.º 2).

Cuadro n.º 2
Resumen de radicaciones con Títulos de Merced al año 1914

AÑOS	Autoridad	Lei	TÍTULOS DE MERCED			Observaciones
			Radicaciones	Personas	Hectáreas	
1866 a 1874 (12 años)	Comision de injenieros, asesorada del Juez de Letras de Angol.	4 de diciembre de 1866	—	—	—	No hai datos
1874 a 1883 (9 años)	Comision de injenieros, presidida por un Ministro de la Corte de Concepcion.	4 de agosto de 1874	10	700	3 696	—
1883 a 1907 (24 años)	Comision de injenieros, presidida por un abogado.	20 de enero de 1883	1 200	42 467	257 960	Inspeccion Jeneral de Colonizacion e Inspeccion Jeneral de Tierras i Colonizacion.
1907 a 1913 (6 años)	Comision de injenieros, presidida por un abogado.	20 de enero de 1883	1 220	30 766	156 766	Oficina de Mensura de Tierras

Fuente: *Memoria anual de la Oficina de Mensura de Tierras*, 1914.

cantidad de tierra, para su remate y adquisición por los grandes propietarios. En el Protectorado de Indígenas se nombra al abogado recién titulado Tomás Romero Hodges, quien ejercerá hasta 1889. En su historia de la "civilización de Araucanía", Tomás Guevara comenta que "a los pocos años de la pacificación definitiva, desde 1885, todos los asuntos de indígenas comenzaron a adquirir mayor extensión", y cita la Memoria del gobernador del territorio de Angol que señala:

> "A medida que ha llegado a conocimiento de los indios el restablecimiento de las funciones encomendadas al protector de indígenas han ido también ocurriendo en demanda del patrocinio de este funcionario. Aumentan diariamente sus defensas en una progresión notable, a medida que ha llegado a noticia de otros el resultado favorable de los reclamos interpuestos por los primeros"[115].

Sin embargo, del protector Tomás Romero nombrado en 1885, solo sabemos de gestiones perjudiciales para los mapuche. Por ejemplo, en 1886, su validación de la expropiación de parte de la reducción pehuenche de Choque Choque, luego de la medición del mismo ingeniero Alejandro Larenas de la Comisión Radicadora, situación denunciada en carta dirigida al Presidente de la República por los *longko* Manuel Quilapi, Ignacio Quilapi y José Huentecul, quienes acusan que los terrenos quitados "se le ha[n] puesto en posesión a cinco colonos i otra estancia se ha reservado el Sr. [comandante Martín] Drouilly el cual la ha arranchado"[116]; o su validación de la expropiación por parte de la Comisión de Radicación, de dos tercios de las 900 ha que Juan Levian y los suyos habían obtenido frente a la ciudad de Traiguén[117]; o la querella contra el protector interpuesta en 1887 por Manuel Paillao de Guadaba, por presentarse en su propiedad junto al presidente de la Comisión Radicadora "en momentos que yo estaba ausente" y luego de medir:

> "Una extensión como de trescientas hectáreas [...] hicieron entrega de ellas al indígena Francisco Piutre, despojándome a mi de la manera mas violenta de esta parte de terreno, que es la mejor i mas productiva"[118].

[115] Guevara, *Historia de la civilización...*, *op. cit.*

[116] Carta de Manuel Quilapi, José Lun Huentecul e Ignacio Quilapi al Presidente de la República Domingo Santa María, segundo semestre de 1886, Fondo Gobernaciones, Gobernación de Angol (sin fecha exacta), en Diego Gamboa y Jonathan González, "'...al sentirse dueños de la tierra se han puesto mas atrevidos y peligrosos...'. La Comisión Radicadora de Indígenas y la constitución de las primeras comunidades mapuches en el Gulumapu, 1884-1881", seminario para optar al grado de Licenciado en Historia (Santiago, Universidad de Chile, 2016), p. 47. El presidente de la Comisión era el coronel Adolfo Holley.

[117] Aníbal Barrera Ortega, *El grito mapuche* (Santiago, Grijalbo, 1999). El presidente de la Comisión en noviembre de 1886 era Emiliano Fuentes.

[118] Querella de Manuel Paillao, de Guadaba, contra Tomas Romero, marzo 1887, caja 16, n.º 11, 1887, Juzgado de Letras de Angol (civil), en Paula Aedo Sagredo, *Intérpretes del Primer Juzgado de*

Quien fuera presidente de la Comisión Radicadora durante los años 1888-1889, el abogado y coronel José Miguel Varela, da cuenta explícita los conflictos que generaba la actividad de la Comisión, cuando no favorecía los intereses de las familias Bunster, MacKay, Anguita, Lavanderos, Jarpa y Subercaseaux, entre otras, en la formación de sus latifundios, intereses para los que trabajaba y de los cuales se beneficiaba precisamente el "protector" Tomás Romero[119]. De hecho, compartía con los Bunster la propiedad del diario *El Colono* de Angol, y con su apoyo fue primero nombrado intendente de Malleco, para luego ser elegido diputado para el Congreso Nacional. Durante su periodo parlamentario, se escribió de él:

> "El Ministerio Lastarria le dio un cuarto de hora de celebridad, nombrándolo Intendente de Cautín; pero, a poco de nombrado, fue destituido ruidosamente por el Ministerio Ibáñez y por causales graves [...] Por fortuna para él, después de esta caída, lo recibió en sus brazos su compañero de negocios, el general Urrutia"[120].

En 1890, cuando Tomás Romero es nombrado Intendente, es reemplazado en el Protectorado por el abogado Teófilo Durán, quien ocupará el cargo durante toda esa década[121]. El protector Durán tampoco dejó buenos recuerdos entre los mapuche. En una carta sin fecha dirigida al general Gregorio Urrutia a mediados de esa década, Antonio Painemal de Cholchol, escribe:

> "Mis potreros pedí al Protector Teófilo Duran, no me [los] quiere entregar y me dijo que estaba[n] rematado[s], y el papel que yo tengo dicho Sr. me lo quería hacer pedazo de ira, me quiere usurpar Don Miguel, me a[y]uda. Señor [Leoncio] Ribera y Sr. [Teófilo] Duran me dijeron los dos que mi terreno crecería"[122].

En 1902, Teófilo Durán es denunciado en el Congreso Nacional por el diputado y futuro senador Artemio Gutiérrez, como "individuo que cuando fue protector de indígenas, no hizo otra cosa que negociar y emborracharse", por eso, según el diputado, el presidente Federico Errázuriz, "lo mando a la calle dejando tranquilo a este pobre pueblo"[123]. Artemio Gutiérrez agregaba que este:

Letras de Temuco (1884-1894), tesis de grado para optar a la Licenciatura en Traducción (Temuco, Universidad Católica de Temuco, 2012).

[119] Gamboa y Gonzalez, *op. cit.*, p. 65.

[120] Juan Pérez de Montalbán, *Perfiles parlamentarios* (Santiago, Imprenta de la República, 1892), p. 66.

[121] Según una noticia imprecisa de Tomás Guevara en *Historia de la civilización...*, *op. cit.*, es posible que en un breve intervalo de ese año 1890, el cargo de protector haya sido ocupado por Alejandro Larenas, nombrado intendente de Malleco en 1901.

[122] Véase Pavez, *Cartas mapuche...*, *op. cit.*, p. 760. Hemos corregido la ortografía, pero no la sintaxis.

[123] Congreso Nacional, Sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, 15 de mayo de 1902, p. 2019.

> "Sujeto a quien la administración pasada destituyó por mal empleado, pues distaba mucho de ser ángel protector de los indios, porque no dejó bellaquería por cometer. Después de haber estado unos dos años sin tener qué hacer, se le ha nombrado de nuevo, trasladándolo hasta con un ascenso a Temuco, para que siga haciendo de las suyas"[124].

Que Teófilo Durán trabajaba más para los intereses de los colonos que para sus "protegidos" legales los mapuche, lo prueba también la cantidad de tierras indígenas rematadas en subasta durante su administración: entre 1893 y 1894, se remataron quinientas mil hectáreas, correspondiente a la mitad de la totalidad de tierras rematadas entre 1873 y 1897 (un millón cien mil hectáreas)[125]. En 1899, Durán informa con bastante autocomplacencia a la Inspección General, culpando a los propios mapuche de sus problemas:

> "El modo más eficaz de civilizar a los indígenas es arbitrar alguna medida que les permita vivir en paz y tranquilidad en los terrenos que poseen. A ello se opone, entre otras cosas, la ley vigente sobre la manera de radicarlos. Según ella, las radicaciones se hacen por reducciones, o sea en un conjunto de familias indígenas que reconocen un jefe, cacique o no; y el derecho de propiedad se reconoce en el jefe de la familia, siendo de advertir que siempre hay individuos solteros que no pueden pretender este derecho. Quedan, pues, por lo general, en comunidades más o menos considerables, según sea el número de familias que componen el conjunto. De aquí disputas diarias e interminables sobre la posesión de éste o aquel retazo de terreno [...] cábeme la satisfacción de dejar constancia de que algunos indígenas han alcanzado un grado de relativa civilización, de que se dedican al trabajo sin tener el vicio consuetudinario de bebidas alcohólicas que por desgracia domina a una gran parte, y de que, en fin, los hay también que saben leer y escribir con más o menos perfección, lo cual los hace ciudadanos útiles a la nación"[126].

Como adelantamos más atrás, esta historia de autoridades "protectoras" dedicadas a torcer la aplicación de la ley, o a favorecer a los "particulares", colonos y latifundistas, será conocida de manera amplia y amargamente denunciada por los dirigentes de las primeras organizaciones mapuche del siglo XX. Estos dirigentes letrados criticaron, no las leyes mismas, sino la oportunidad de su aplicación, y las contradicciones perversas entre ambas cosas. Manuel Manquilef denunció, incluso, la burla a la propia ideología de tutela y protección que inspiraba las leyes y que terminó encubriendo la violencia, los abusos y la expoliación:

[124] Congreso Nacional, Sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, 15 de mayo de 1902, *op. cit*., p. 2025.

[125] Briones, *op. cit.,* 1898, p. 400.

[126] *Memoria del Protectorado de Indígenas para el año 1898*, en este volumen, p. 170.

> "El Gobierno de Chile no pudo dejar de comprender la necesidad de proteger a los indios cuya nación entraba a formar parte de la nación, y así como Protector y amigo fue admitido en las rucas araucanas. Fue un padre, cuyo deber es velar por sus hijos menores. Pero ¡oh desgracia! Ese padre se transformó pronto en tutor y este tutor se convirtió en corruptor para arrebatar a su pupilo, sus inmensos campos e innumerables ganados. El padre, resultó tío y sin amor ninguno a su sobrino, a quien engañó primero con falaces promesas para ganarse su confianza; a quien pervirtió después con toda clase de vicios que le enseñó y por último le quitó sus propiedades, y hoy no le quiere reconocer como hombre [...] El Gobierno de Chile violó tratados, promesas. Hizo pedazos la Constitución declarando la guerra a Arauco en la forma mas insidiosa y ruin que jamás una nación lo hiciera"[127].

Sin duda los actos notariales y jurídicos efectuados antes de la implementación efectiva de las instituciones y procedimientos de radicación y de las "leyes prohibitivas" que protegían las tierras indígenas impidiendo su enajenación, fueron dejando trabas documentales que luego sirvieron de prueba a los colonos para justificar jurídicamente sus apropiaciones de tierra, como bien remarca el protector Irribarra de Valdivia, provincia donde imperó, al igual que en Arauco, la lógica de inscripción de "acciones y derechos" sobre las tierras:

> "Interrogados sobre el motivo que han tenido [los colonos] para tratar de arrojar al indígena, o para entrar y tomar posesión del terreno de este, contestan con toda tranquilidad: 'Tenemos títulos, hemos comprado antes de la ley prohibitiva'. Examinados esos títulos resultan ser simples acciones y derechos, cuotas. No es aventurado afirmar que el noventa por ciento (90 %) de las escrituras públicas versan sobre simples acciones y derechos. Estas han sido y siguen siendo los títulos que han servido y continúan sirviendo para todo"[128].

Durante el siglo XIX, además de los resquicios legales aplicados y avalados por autoridades locales afines a los intereses de los latifundistas, al ver que el Congreso persistía en las leyes de radicación y sus instituciones proteccionistas, este bloque supremacista consiguió que se nombraran en esas instituciones funcionarios favorables a sus intereses. El perfil de los protectores parece cambiar a principios del siglo XX, con el nombramiento del juez Eulogio Robles como protector de Cautín, quien destacará por imprimirle un sello ético al cargo. Pero entonces, los intereses privados empiezan a actuar desde Santiago mediante una nueva estrategia, la de precarizar materialmente la institucionalidad proteccionista, de manera que estuviera siempre carente de recursos para desarrollar con

[127] Manquilef, *¡Las Tierras de Arauco!...*, *op. cit.*, p. 8.
[128] *Memoria del Protector de Valdivia para el año 1907*, en este volumen, p. 290.

mayor eficacia su tarea. Esto se sumaba a décadas de corrupción y cooptación de todo tipo de autoridades locales (gobernadores, alcaldes, jueces de distrito y subdelegación, delegados y subdelegados departamentales, promotores fiscales, ingenieros de radicación, recaudadores de impuestos, oficiales de registro civil, actuarios, etc.), que obstaculizaban permanentemente la defensa de las tierras indígenas por parte de los protectores y participaban en todo tipo de abusos hacia los mapuche. Todos estos funcionarios ejecutivos y judiciales eran, además, interlocutores directos de los Protectores de Indígenas en sus tareas cotidianas, como explica Eulogio Robles en un oficio donde solicita la liberación de costo de envío postal y telegráfico para los Protectorados[129].

Desde su primer año en funciones, el protector Eulogio Robles irá detectando y denunciando en sus Memorias a los agentes del Estado que colaboran en la usurpación de tierras y los abusos de todo tipo contra indígenas. Especialmente corruptos aparecen los juzgados de menor cuantía (subdelegación y distritos), donde los indígenas "son víctimas de inicua y vasta explotación":

> "En estos juzgados se estafa de manera inicua a los naturales, cobrándoseles muchas veces deudas supuestas. El procedimiento que para ello se emplea es perfectamente adecuado y produce siempre los resultados que se han tenido en mira: un tinterillo se presenta a uno de estos juzgados y pide que el indígena tal o cual sea citado a reconocer una cuenta o una firma puesta a ruego suyo en un pagaré. El *chauchero,* que, como dijimos, es la palabra que sirve a los indígenas para designar a los receptores, lo notifica o no; pero siempre estampa la diligencia. No comparece el citado y la firma o cuenta se da por reconocida en su rebeldía. Si comparece, no por eso se ha mejorado su situación, porque, aun cuando niegue la deuda o niegue haber rogado a alguien para que firme por él, como no sabe escribir, al levantarse el acta se hace la declaración que ha reconocido la cuenta o que ha hecho firmar a ruego. Ya el explotador tiene título ejecutivo. Lo que sigue es consecuencia lógica del procedimiento: el *chauchero,* auxiliado con la fuerza pública, que se ha pedido de antemano, se dirige a la reducción y por una deuda de treinta, cuarenta o cincuenta pesos, se embarga animales de valor de trescientos, cuatrocientos o quinientos pesos. Es de advertir que no se toma para nada en cuenta que los animales pertenezcan al deudor verdadero o ficticio: se embarga los que señale el *chauchero* o el interesado. Se nombra un depositario a un insolvente. Y total: los dueños no vuelven a ver más sus animales. Esta Memoria se volvería interminable si enumerara todos los medios, ingeniosos algunos, empleados por la mala fe para estafar a los indígenas en los juzgados de menor cuantía,

[129] Eulogio Robles explica que debe intercambiar correspondencia con otros protectores, jueces letrados, promotores fiscales, jueces de subdelegación y distritos, intendentes, gobernadores, subdelegados e inspectores de provincias, alcaldes y tesoreros municipales, jefes de destacamentos de Carabineros, fiscales y secretarios de las Cortes. Cf. ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1436, 1909.

servidos muchos de ellos por verdaderos desalmados, si he de emplear la palabra que, aunque dura, traduce fielmente el concepto"[130].

Temístocles Urrutia, el Inspector de Colonización al que informa Eulogio Robles, estaba al tanto de esta realidad, y en su propia Memoria señalaba:

"Los jueces de subdelegación y de distrito exceden de una manera increíble sus atribuciones y ejercen sin reparo alguno las funciones de un juez letrado. Se me ha asegurado como efectivos actos de partición verificados por jueces de subdelegación y de distrito y me consta que conocen en delitos y actos de la exclusiva competencia del juez letrado. Aquellos funcionarios persiguen encarnizadamente al pobre indígena y hacen gravitar en él todo el peso de la injusticia, habiéndose ejecutado prisiones y castigos ante el solo denuncio de un supuesto robo de un buey o de una vaca, hechos por personas interesadas en usufructuar del terreno ocupado por el indio y que se valen de ese medio para ahuyentarlos de los terrenos que ocupan"[131].

Luego de un año en el cargo, el protector de Valdivia, Carlos Irribarra, también denunciará la acción de los juzgados de menor cuantía (jueces de distrito y de subdelegación):

"El estado de atraso en que viven aún la mayor parte de los pueblos apartados de los centros relativamente cultos, y mui especialmente los de la región austral, la influencia incontestable de la política lugareña, que obliga a barnizar con cierta autoridad, culturas agrestes que lo solicitan como aureola de respeto y baluarte de impunidad, todo esto escusa, hasta cierto punto, el nombramiento de personas desprovistas de toda delicadeza e ilustración para puestos de honor y responsabilidad. Descartando honrosísimas excepciones, los jueces de Subdelegación y Distrito de las provincias australes, extralimitando sus atribuciones, han servido de viles y odiosos instrumentos a algunos usurpadores de suelo indígena o fiscal, como así mismo, explotado sus cargos en beneficio propio. Conocemos jueces de Subdelegación que se han prestado villanamente a tramitar y fallar un juicio sobre desahucio de indígenas, sin otra notificación a éstos que la del auto que ordenaba el lanzamiento. Sabemos de otros que han mantenido indígenas secuestrados hasta arrancarles la promesa de no destruir una volteada que se deseaba mantener como deslinde. Por incidencia contaremos de un alcalde que de acuerdo con el juez de Subdelegación, prestó la fuerza armada para obstruir la pasada de un puente a un grupo de indígenas que se dirigían a dar cuenta a nuestra oficina de lo que les estaba ocurriendo. Hablaremos de otro que decretó para sí y ejecutó personalmente

[130] *Memoria del Protectorado de Cautín para el año 1901*, en este volumen, p. 192.
[131] *Ibid.*

> un allanamiento de una casa de indígena y que después de trascurridos quince o más días de hecho el denuncio al juez del Crimen por esta oficina, se presentó con un sumario instruido con posterioridad, pero retrotrayendo la fecha de la iniciación. Otro rompió cercos con sus propias manos y con su sola autoridad. [...] No es extraño, pues, que muchos desgraciados sean civilmente condenados sin noticias de la existencia de un proceso"[132].

Los agentes de Estado que explotan a los mapuche también proliferan en las municipalidades, como denuncia Robles:

> "La mayor parte de las municipalidades son bastante inescrupulosas en el cobro de [la] contribución [al fisco por propiedades de tierra] los funcionarios que intervienen en la tasación de las propiedades para los efectos de este pago asignan siempre a las de los indígenas valor subido y no dejan jamás de incluir en el respectivo rol hijuelas de menos de dos mil pesos a las cuales se les aumenta su avalúo con ese fin"[133].

Al año siguiente, Robles insiste en que:

> "No hay palabras con qué representar los abusos que los recaudadores del impuesto cometen con los indios. Así, cobran una misma contribución dos o tres veces. Exageran hasta lo increíble los gastos de la cobranza: como los indios viven lejos de las poblaciones, el recaudador tiene que recorrer algunas leguas para ello, y cobran, por lo regular, veinte pesos por viaje, y nunca hacen uno solo. He visto recibos por siete pesos, por ejemplo, que han subido a mas de setenta, recargado con los costos de la cobranza"[134].

El protector se verá también confrontado a los promotores fiscales, que por decreto de 1884 debían "auxiliar en su tarea a los Protectores de Indígenas". Sin embargo, Robles constata que estos se niegan a hacerlo, impugnando incluso "la legalidad y aún la constitucionalidad de esa disposición". De manera que:

> "Salvando los promotores fiscales de Collipulli y de Cañete, no he tenido noticias de otros que se allanen a acatar el decreto supremo ya citado. Este último funcionario, que con todo celo ha tratado de amparar a los indios, ha encontrado dificultades ante el juzgado respectivo originadas de diversidad de criterio para apreciar la aplicabilidad del tantas veces referido decreto"[135].

[132] *Memoria del Protectorado de Indígenas de Valdivia para el año 1907*, en este volumen, p. 287.
[133] *Memoria del Protectorado de Indígenas de Cautín para el año 1901*, en este volumen, p. 186.
[134] *Memoria del Protectorado de Cautín para el año 1902*, en este volumen, p. 233.
[135] El promotor fiscal de Traiguén le contesta a Robles argumentando su negativa a apoyar al Protectorado en los siguientes términos: "siento no poder acceder a su petición por las siguientes razo-

El protector Robles también denuncia "los cobros indebidos en las oficinas del Registro Civil", para lo cual requerirá atribuciones de "alguna fiscalización [...] en las inscripciones de matrimonios de los indios y declaraciones sobre legitimación y reconocimiento de hijos". El protector Irribarra menciona, incluso:

> "Un oficial del Registro Civil que estorbó hasta hace poco la legalización de los matrimonios entre indígenas a quienes exigía como precio de sus servicios en la oficina ocho pesos y cuatro mas por cada hijo nacido antes de la celebración del contrato matrimonial"[136].

En los documentos de archivo constan los casos particularizados en que los protectores entraban en conflicto con varias de estas autoridades. Por ejemplo, en 1902, Eulogio Robles denuncia a la Inspección General de Colonización la actuación del juez de distrito Celestino Mella por su complicidad en las exacciones cometidas contra un grupo de mapuche de Tirúa:

> "Han comparecido a esta Oficina los indígenas Juan Millanao Lincopi, Francisco Painen y Juan Lincopi de Tirúa, quejándose de exacciones cometidas en ellos con complicidad del juez de distrito Celestino Mella y han entregado al suscrito una exposición a fin de que la haga llegar al señor Juez Letrado de esa. Denuncios análogos perpetrados en otros distritos y sub-delegaciones de ese Departamento, toma conocimiento diariamente la Oficina a mi cargo. Así, por ejemplo, se ha denunciado que se están extendiendo por gente inescrupulosa pagarés falsamente firmados a ruego por indígenas en que estos se confiesan deudores de cierta cantidad de dinero y con tales pagarés los falsos acreedores ejecutan a estos infelices, los privan de sus cosechas. Ha tenido también que intervenir el infrascrito en embargos que se traban en terrenos de indios despachados por jueces de menor y mínima cuantía, contra el texto expreso de reiteradas prohibiciones legales que impiden que directa o indirectamente se les prive de la posesión o tenencia de sus tierras. He creído

nes: 1° el artículo 8° de la ley de 4 de diciembre de 1866 que creó el cargo de Protector de Indígenas, confiere a dicho funcionario, sin límites, la representación de los indígenas; por consiguiente, para que esa representación se hiciera extensiva a los Promotores habría necesidad de una ley; 2° porque, en vista de la disposición legal anteriormente citada, el decreto de 10 de noviembre de 1884 es ilegal; 3° porque, no habiendo ninguna ley que imponga a los promotores la obligación de defender a los indígenas, el decreto citado es, además, inconstitucional, atendiendo a lo dispuesto en el N.° 10 del artículo 28 de la Constitución; 4° porque, teniendo interés una municipalidad en los juicios que hay que iniciar, no puedo defender a los indígenas, siendo promotor, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la ley de 5 de enero de 1894 y en el N° 6 del artículo 263 de la Ley Orgánica de Tribunales; y 5° porque, en mi concepto, a los indígenas radicados, a pesar de lo dispuesto en el artículo 6° de la ley de 4 de agosto de 1874 y en las leyes de 20 de enero de 1893, pueden embargárseles y rematárseles sus terrenos por falta de pago de las contribuciones". Oficio de agosto de 1901, en *Memoria del Protectorado de Cautín para el año 1901*, en este volumen, p. 187.

[136] *Memoria del Protectorado de Valdivia para el año 1907*, en este volumen, p. 287.

del caso aprovechar esta exposición, a fin de que, si lo tiene a bien, se sirva trascribírsela al señor Juez Letrado. Agradecería a Ud. La hiciera poner también en conocimiento del señor Ministro de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción que actualmente practica visita extraordinaria en ese Juzgado"[137].

Dos años después, Robles denuncia la usurpación de tierras cometidas por un mozo de los ingenieros de la misma Inspección General:

"Los indígenas no radicados vivientes entre los ríos Coihueco y Millahueco (Truf-Truf) han comparecido a esta Oficina reclamando contra Erasmo Sandoval, mozo de uno de los ingenieros dependientes de la Inspección, y manifestando que les ha ocupado sus tierras [Sandoval] sirve de mozo a los ingenieros dependientes de la Inspección hace más de ocho años [...] Como esto es irregular, ruego a Ud., si lo tiene a bien, se sirva pedir se reconsidere la resolución que autorizó al nombrado individuo para gozar los derechos que la ley acuerda a los colonos nacionales"[138].

En 1912, ante el caso de marcación a fuego de José Manuel Painemal por el colono Michaeli, Robles denuncia los obstáculos que ha puesto el juez de distrito para que el protector pueda ejercer su papel de defensa jurídica de la víctima, denuncia que el Inspector General eleva al Ministro de Colonización:

"[Tenga Ud. la] conveniencia de recomendar a los Protectores que, en caso de atentados criminales contra los indígenas, los ayuden en la acción que deben entablar para obtener el castigo de los culpables, aún cuando la labor de estos funcionarios está circunscrita a las cuestiones civiles sobre tierras. En otras ocasiones esta Oficina ha impartido instrucciones en el sentido que US. se sirve indicar, pues con dolorosa frecuencia se denuncian crímenes cometidos contra los bienes y personas de los indígenas [...] En el caso particular a que US. se refiere ['crimen cometido en la persona del indígena José Manuel Painemal, de Imperial, a quien aplicaron una marca de fuego'], puedo decir a US. que el Protector de Indígenas de Cautín ha tomado participación activa en el proceso seguido contra el criminal. Desgraciadamente, su personería ha sido objetada, sin que haya encontrado en el juzgado de Imperial ningún apoyo, por lo que se ha visto en la necesidad de presentarse en grado de queja contra el juez"[139].

Como señala Robles en su Memoria de 1912, además de la gestión de los conflictos de tierra, el protector se veía enfrentado a otras autoridades por cumplir otras funciones como:

[137] Protector a Inspector, 29 de enero de 1902, en ARA, Fondo Gobernación de Nueva Imperial, vol. 42.

[138] Robles a Inspector, 17 de marzo de 1904, en ARNAD, Fondo IGCI, vol. 60.

[139] Inspector a Ministro, 3 de septiembre de 1912, en ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1769.

> "En lo posible, patrocinar a los indígenas en los juzgados de menor cuantía [porque] en tales juzgados se les estafa, confabulándose el juez, el actuario, y el acreedor. Es corriente que se instauren ejecuciones con pagarés firmados a ruego por indígenas, pagarés que son extendidos con el mismo tipo de letra desde el principio hasta el fin, incluyendo las firmas de los testigos, que se dicen llamados a suscribir a ruego".

También debe enfrentarse a los municipios practicando:

> "Gestiones dirigidas a obtener que las municipalidades no cobren a los indios contribuciones indebidas, haciendo eliminar del rol de avalúos las propiedades que no deben gravarse por no haber obtenido aún el indígena título de merced"[140].

En 1920, es el protector de Cautín Armando Moraga quien enfrenta al presidente de la Comisión Radicadora, cuando esta quiere exigir "estampilla de cuarenta centavos en los certificados de radicación que dé la Oficina a su cargo, a solicitud mía". Moraga alega que no se ha respetado el "privilegio de pobreza para el Protector de Indígenas" y que "la conducta puesta en práctica por la Comisión Radicadora, no es sólo atentatoria a las leyes de la República, sino profunda e irritantemente enojosa"[141]. A lo que el presidente de la Comisión Eleazar Bravo responde:

> "Tal vez el señor Protector de Cautín tenga razón en lo que dice en su oficio en informe tanto en las citas como conclusiones a que llega, aun cuando no es verídico respecto a los hechos que afirma"[142].

En 1926, el mismo Moraga denuncia ante la nueva Dirección General de Tierras, Colonización e Inmigración, los "procedimientos que desde hace tiempo viene poniendo en uso el Gobernador del Departamento de Imperial" quien:

> "Sin autorización de nadie, sin que ninguna Ley de la República lo autorice para ello, y en cambio violando repetidas instrucciones que a Intendentes y Gobernadores de la frontera ha impartido el señor Ministro del Interior, viene interviniendo, en forma enojosa y constante en asuntos de colonización.

[140] "Hay que notar que los indios, que tienen título de propiedad, no están exentos del pago de esta contribución porque la ley no exceptúa expresamente dichos predios; pero la contribución no puede hacerse efectiva en sus bienes raíces, por ser inalienables". *Memoria del Protector de Cautín para el año 1912*, en este volumen, p. 191.

[141] Protector Moraga a presidente de Comisión Radicadora, 24 de abril de 1920, en ARNAD, Fondo IGCI, vol. 242.

[142] Presidente de la Comisión Radicadora a protector Moraga, 8 de mayo de 1920, en ARNAD, Fondo IGCI, vol. 242.

Diariamente concurren a esta oficina numerosos indígenas que reclaman en contra de dicho funcionario, el que les llama a comparendos, ordena entrega de suelos y resuelve, en calidad de juez, dificultades que se suscitan entre los indígenas. Tales actuaciones son perfectamente irregulares y están produciendo un malestar profundo entre los indígenas, porque no han servido sino para multiplicar las dificultades que se originan entre estos, sirviendo además, las tales actuaciones, para debilitar la influencia y el principio de autoridad que es la base fundamental que debe existir en las actuaciones de los funcionarios públicos [...] A fin de cortar de raíz esta corruptela, ruego se sirva recabar del señor Ministro del Interior la correspondiente orden, a fin de hacer cesar las funestas e ilegales actividades de la persona de que hablo"[143].

Es nuevamente Eleazar Bravo, desde su nuevo cargo de Inspector Visitador de los Servicios Regionales, el encargado de responder al Director General de Tierras, evitando pronunciarse sobre la actuación particular del Gobernador, y enunciando una interpretación que parece fundamentar ideológicamente la nueva política impulsada por el Gobierno y que dará pie a una nueva legislación de subdivisión de las comunidades mapuche:

"En primeros años de la radicación, los Protectores arreglaban amistosamente muchas cuestiones entre estos (indígenas), pero como su intervención en estas cuestiones no tiene base legal y los indígenas están mas civilizados, resulta que cuando los indígenas recurren ante el Protector en busca de una justicia que no está facultado para hacer, solo respetan sus resoluciones los débiles e ignorantes, a quienes puede amedrentarse con manifestaciones de fuerza. Los que ya tienen cierta cultura no las respetan sino cuando les conviene. De modo que la actuación del Protector de Indígenas en este sentido, perjudica la parte débil de la masa indígena, que es la que necesita protección. Por esto he creído que la intervención de los Protectores de Indígenas en estos asuntos debe reducirse a los casos que amistosamente puedan solucionar [...] Muchos indígenas acuden, como es lógico, a la justicia. Otros a las autoridades administrativas. La justicia resuelve en un sentido y la autoridad administrativa en otra. Cada día se enreda y dificulta mas la situación de los afectados. Los indígenas que acuden a los Protectores, se quejan de ellos ante mí o ante la Dirección, los que acuden donde los Gobernadores ante los Protectores y al revés. Como Ud. ha visto el Gobernador de Imperial y otras autoridades, se quejan de las actuaciones del Protector de Cautín y este se queja a su vez de aquellos. Por esta causa los indígenas, pierden el respeto a las autoridades y su situación cada día es peor. En consecuencia, resulta malo, que la autoridad

[143] Protector Moraga al Director General de Tierras, Colonización e Inmigración, 2 de noviembre de 1926, en ARNAD, Fondo IGCI, vol. 309.

> administrativa se esté atribuyendo facultades judiciales [...] Estimo, que, mas, vale, dejar a esta gente, entregada a sí misma, que estar haciendo una justicia a medias, que solo beneficia a los mas fuertes"[144].

El director de tierras Villalobos se pronuncia unos meses después en informe al Ministro, usando el episodio para avalar el cambio de política y de legislación indígena, y iniciar así la división de las comunidades:

> "Las incidencias producidas entre el señor Gobernador de Villarrica y el Protector de Indígenas de Cautín, y a que se refieren estos antecedentes, son sólo una manifestación circunstancial y de importancia secundaria del gran problema que suscita el hecho de que no corresponde ya la legislación vigente sobre indígenas al estado de civilización de la raza aborigen, pues mientras aquella consulta la radicación en común, el grado de cultura a que esta alcanza y sus exigencias económicas, le imponen ineludiblemente la propiedad familiar y aún la individual. Es este un caso en que se demuestra claramente que el derecho vive independientemente de la ley, y que la vence, si esta, lejos de fomentar el progreso y la evolución, trata de contenerlos y de ajustar las actividades dentro de un marco que ya les queda estrecho [...] con el despacho del proyecto sobre división de comunidades indígenas [...] terminarán dificultades como las de que aquí se trata, se producirá la paz y se fomentará el trabajo y la producción entre los indígenas, y se realzará ante ellos la autoridad moral del régimen civil y de los funcionarios administrativos a que están sometidos"[145].

Vemos en las palabras de la autoridad nacional responsable de la mensura de tierras, la derrota de los principios tutelares del derecho protector ante los principios del derecho civil individualista, que busca fundamentar la subdivisión de la propiedad colectiva en nombre de constataciones seudo-sociológicas sobre el supuesto avance del estado de "civilización", la que en esa ideología equivale tautológicamente a la individualización de la propiedad, el derecho y la moral. El cuestionamiento y atropello constante que sufrió la legislación protectora de parte de las autoridades fronterizas, el capital terrateniente y los pequeños y grandes colonos, no permitió nunca que el derecho se ejerciera tal como había sido establecido en las leyes de radicación.

Son varios los dirigentes de la Sociedad Caupolicán –Manuel A. Neculman, Manuel Manquilef, Jose María Catrileo, Juan Huenul, Basilio García, Arturo Huenchullan– que desde su fundación en 1910 denunciaron las usurpaciones de la colonización y el complicidad de muchos funcionarios públicos con los atrope-

[144] Eleazar Bravo, Inspector Visitador de los Servicios Regionales, al Director de Tierras, 2 de diciembre de 1926, en ARNAD, Fondo IGCI, vol. 309.

[145] Director de Tierras a Ministro, 16 de febrero de 1927, en ARNAD, Fondo IGCI, vol. 309.

llos y abusos, en situaciones que les tocaba conocer en sus visitas a las reducciones como parte de esos quinientos mapuche "civilizados"[146] que sentían el deber de representar a la sociedad mapuche en su conjunto. La representación de reclamos y denuncias se hacía mediante publicaciones en los periódicos, reuniones con autoridades regionales, envío de cartas y visitas a las máximas autoridades en Santiago. Sin embargo, la unidad de criterios de los miembros de la Sociedad Caupolicán empezará a fracturarse a mediados de la década de 1920, con la cada vez más instalada convicción de una parte de la sociedad mapuche y sus representantes (Manuel y Pedro Manquilef, Martin Collio, Antonio Chihuailaf) de la necesidad de subdivisión de las comunidades en propiedades individuales. Estos dirigentes liberales pasaron de la crítica a las ilegalidades cometidas a la crítica de las leyes mismas, las que consideraron como obstáculo a la integración de los mapuche a la "civilización" occidental, adoptando el discurso evolucionista de la integración social sostenido también por la totalidad de los protectores de indígenas del siglo XX. Al ser elegido diputado en 1926, Manuel Manquilef impulsa la ley de subdivisión, en abierta ruptura con la Sociedad Caupolicán, cuyos dirigentes Arturo Huenchullan y José Cayupi, resumen su posición en un telegrama al Ministro de Colonización: "Verdaderos Araucanos tal vez 150.000 ni sueñan que parlamento está labrando su tumba segura"[147].

La precariedad estructural de la institución protectora

La serie de dificultades y obstáculos que hemos visto aparecer en la labor de los Protectorados se puede entender en función de la precariedad de la posición administrativa que ocupó esta institución en lo que llamamos la ideología de frontera. Mantener pequeño y sin recursos el aparato de protección jurídica fue también una forma de materializar la ideología fronteriza que privilegió la adjudicación de tierra a capitalistas, colonos y concesionarios por encima de los mapuche. Esta precariedad debilitó de varias maneras la acción protectora. Por una parte, como vimos, los protectores debían enfrentarse a las reparticiones públicas cuyos agentes y autoridades operaban para favorecer la colonización nacional y extranjera por medio del acaparamiento de tierras. Y, por otra parte, las precariedades administrativas y las restricciones de todo tipo que sufrieron los Protectorados llevaban a sus defendidos, los mapuche, a cuestionar las instituciones con reclamos

[146] Telegrama al Ministro de Colonización, 1925, en Foerster y Montecino, *op. cit.*, p. 25.

[147] Telegrama al Ministro de Colonización, 1925, en Foerster y Montecino, *op. cit.*, p. 25. Para más detalles sobre el periodo 1925-1935 y las divisiones de organizaciones y líderes mapuche, véase también André Menard y Jorge Pavez, "Los archivos del 29: derroteros y derrotas de la Federación Araucana", en *Anales de Desclasificación,* vol. 1, n.º 1 (Santiago, 2005), pp. 51-104.

que afectaron la legitimidad de los protectores y fueron, a la vez, usados para justificar su eliminación[148].

Desde principios del siglo XX, los diversos protectores reclamaron por la escasez de todo tipo de recursos para dotar de eficacia la acción protectora, escasez que se expresa en los retrasos del nombramiento de funcionarios, los recortes presupuestarios, los retrasos en el pago de sueldos y gastos, la falta de claridad y validación local de su representación legal de los indígenas (que permitía que funcionarios judiciales o de gobierno cuestionaran o suplantaran a los protectores), y otras decisiones administrativas y legales que dificultan la actividad jurídica, y que muchas veces consiguen generar denuncias, reclamos y odiosidades en su contra por parte de sus mismos "protegidos" mapuche.

El año 1900, cuando Eulogio Robles se hace cargo del Protectorado de Indígenas en Temuco, el protector da cuenta de que falta de todo, como si el anterior protector, Teófilo Durán, simplemente no hubiera existido (aunque, como hemos sugerido, existía para asegurar que la institución *no* operara). Robles tuvo que organizar sobre la marcha una oficina que contara con mobiliario, materiales de trabajo y un equipo de al menos tres personas: el abogado protector, un escribiente y un portero, generalmente mapuche, que hacía las veces de intérprete oficial del Protectorado, el llamado "portero-intérprete", o a veces "intérprete portero". Desde su nombramiento como protector, Robles (1900-1912), junto a otros protectores como Carlos G. Irribarra en Valdivia (1906-1916) o Javier Arrieta en Malleco (1911-1916), insistirá hasta el cansancio en la necesidad de contar con profesionales y ayudantes calificados para la enormidad de la tarea que significaba atender de ochenta a cien mil mapuche repartidos en un territorio de diez departamentos.

El sueldo de los protectores fue fijado por la ley de 1866 en 3500 pesos, remuneración en ese entonces equivalente a la de un juez letrado de capital de provincia. Un oficio del Inspector General de Tierras y Colonización fechado en 1910 reclama que se haya suprimido la asignación para vivienda considerada en el presupuesto anual, y que "en tan largo tiempo, a pesar de la depreciación que ha sufrido nuestra moneda", la remuneración de los protectores "no haya sido modificada"[149]. Como puede verse en el cuadro n.º 3, este sueldo de los protectores era bajo en comparación con el de otras autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización, del cual dependía la Inspección General de Colonización e Inmigración, aun con la asignación especial para domicilio. En total, su renta era ocho veces superior a la del portero-intérprete, cuyo sueldo era el más bajo de la escala.

[148] De alguna manera, el giro de los "liberales" mapuche al abrazar el proyecto de subdivisión individual de la propiedad parece, en parte, efecto de observar la cuasiimposibilidad práctica de una política proteccionista.

[149] ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1436, 1910.

Cuadro n.º 3
Sueldos de funcionarios en Inspección General de Colonización e Inmigración (1910) y propuestas de protectores de Arauco y de Malleco

Cargo	Asignación anual Presupuesto nacional	Propuesta protector de Arauco	Propuesta protector de Malleco
Juez Letrado de capital de provincia (referencia)	$ 12 000		
Inspector General de Colonización	$ 12 000		
Secretario de Colonización	$ 6 000		
Archivero	$ 1 200		
Portero	$ 840		
Protector de Indígenas	$ 3 500	$ 10 000	$ 10 000
Asignación para casa de Protector	$ 3 000		
Ingeniero de Protectorado	$ 4 000	$ 6 000	$ 7 000
Agente judicial del Protectorado (Malleco y Cautín)	$ 2 400	$ 3 600	$ 3 600
Escribiente del Protectorado	$ 1 800 (Malleco y Cautín) / $ 1 200 (Otros)	$ 1 800	$ 2 400
Intérprete portero del Protectorado	$ 720	$ 1 200	$ 1 500

Fuente: *Partida Presupuestaria Inspección General de Colonización e Inmigración* (1910)*; Memorias del Protectorado de Arauco y de Malleco* (Manuel Labbé 1911; Manuel Oñat 1911).

Entre 1910 y 1911, los cinco protectores de indígenas incluyen en sus Memorias anuales una reivindicación salarial, ya que, como señala el protector Manuel Oñat (1910-1911) de Malleco:

> "En los últimos tiempos se han mejorado los sueldos de todos los empleados públicos, menos el de los protectores de indígenas. Estos funcionarios han permanecido como olvidados o ignorados de los poderes públicos".

A modo de comparación, Oñat señala:

> "El abogado de colonización que reside en Angol y que tiene una labor tranquila y simplemente de bufete, goza de una renta anual de diez mil ochocientos pesos ($10.800), y el agente judicial que tiene este abogado percibe cuatro mil trescientos veinte pesos ($4.320)".

También compara el valor de los viáticos, que deja muy en desventaja a los protectores:

> "El Ministerio del Interior fijó en 20 pesos diarios los viáticos de los inspectores de boticas, es decir el doble del que gozan los protectores de indígenas; las razones para establecer una diferencia tan enorme entre el viático que percibe un inspector de boticas y el que percibe un protector de indígenas, cuando andan en comisión del servicio, no acierto a comprenderlas".

El protector de Malleco Javier Arrieta, que sucede a Oñate en 1911, adelanta otra comparación:

> "Según la nueva ley [de remuneraciones del Ejército] un sargento que es un individuo sin ilustración alguna, gana 200 pesos mensuales, y un protector de indígenas que debe ser abogado y que pesa sobre sus hombros una enorme responsabilidad gana solo 291 pesos mensuales".

Cada una de estas categorías de funcionarios públicos realizaba funciones estratégicas en la contención de las fuerzas que asaltaban la propiedad indígena, ya sea por medios jurídicos o aplicando la fuerza bruta, disfrazada de legalidad o abiertamente criminal. Para entender la organización del trabajo de defensa de las tierras asignadas a mapuche por las leyes de radicación, es necesario situar los agentes de este trabajo en los conflictos en los que se implican y que los implican, agentes algunos comprometidos en un proyecto jurídico-ideológico de colonización y nacionalización destinado a fracasar tanto en su fundamento cultural como en la práctica de protección del derecho de los mapuche. Un fracaso que, sin embargo, contribuye a proyectar el indigenismo al interior del Estado como un compromiso arraigado en la tradición republicana. Revisemos, entonces, las actividades habituales del Protectorado y de los agentes encargados de estas: ingenieros, intérpretes, agentes judiciales, escribanos, caballos y fuerza pública.

Deslindes, mensura y particiones: los ingenieros de la radicación

La delicada cuestión de la delimitación de las tierras ya se planteaba al norte del Biobío durante la Colonia:

> "El problema de los deslindes fue uno de los primeros que se planteó una vez constituida propiedad territorial, y fue uno de los que dio origen a los más engorrosos litigios durante la época colonial"[150].

En la guerra de conquista iniciada por Chile al sur del Biobío desde fines de la década de 1850, las tropas militares y sus enclaves fortificados eran seguidas en

[150] Donoso y Velasco, *op. cit.*, p. 17. Véase Silva Vargas, *op. cit.*, sobre estos litigios.

sus avances por una comisión topográfica encargada de mensurar y deslindar hijuelas en las tierras declaradas fiscales, o reconocidas como propiedad de los mapuche, que entonces se veían forzados a vender a precios irrisorios al Estado. Esta comisión estaba conformada por ingenieros entre los que destacó el alemán Teodoro Schmidt, y se transformó después en la Sección Topográfica del Ministerio de Colonización, la que llegó a tener quince ingenieros[151]. En 1884, cuando se constituye la Comisión Radicadora para el otorgamiento de títulos de merced a los mapuche, a esta se le asignan dos ingenieros para que trabajen junto al abogado que preside la Comisión. El decreto del 20 de mayo de 1896 establece que la Comisión de Radicación dependerá de la Inspección General de Tierras y Colonización, al igual que el Protectorado de Indígenas.

Con la llegada de Eulogio Robles al Protectorado de Cautín en 1900, la Inspección General designará al ingeniero Luis Conrady para apoyar la labor del protector[152]. En 1907 la Comisión Radicadora y sus ingenieros dependen de la Oficina de Mensura de Tierras[153], y Conrady queda al servicio de esa Oficina, hasta su muerte en 1912 cumplidos los ochenta años de edad. El hecho que este ingeniero haya trabajado hasta esa avanzada edad en campañas de mensura en terreno, cumpliendo "con todo celo y actividad las comisiones que se le confieren"[154], habla de un personaje excepcional. En 1905, en su informe al protector Robles sobre sus tareas de deslindes de reducciones y partición de hijuelas, Conrady hace la lista de sus actividades de mensura en terreno, y agrega varias observaciones sobre el "adelanto" en el "bienestar" de los mapuche en los últimos dos años, que ve asociado a dos condiciones: "donde se ha hecho la partición de terreno entre los indígenas, y donde ellos no están bajo el tutelaje antiguo de los caciques". Desde la perspectiva del ingeniero topógrafo, las particiones efectuadas por mediación del protector eran la mejor forma para el desarrollo de la actividad agrícola de los comuneros, la que evaluaba en términos de su implementación tecnológica:

> "Es muy frecuente que se encuentre ahora que los indígenas usan máquinas segadoras para sus cosechas, de las cuales ellos mismos son dueños y aún hay algunos que tienen sus motores a vapor y máquinas trilladoras"[155].

Pero además de reforzar la tesis de la necesidad de subdivisión de las tierras asignadas por títulos de merced, reconoce que los problemas principales de los ma-

[151] Briones, *op. cit.*, 1898, p. 222.

[152] *Memoria del Protectorado de Cautín para el año 1901*, en este volumen, p. 186.

[153] Decreto 732 del 27 mayo de 1907, en Bello. "La comisión radicadora...", *op. cit.*

[154] *Memoria del Protectorado de Cautín para el año 1901*, en este volumen, p. 186.

[155] "Informe al Protector de Indígenas de Cautín, 9 de abril de 1906", en *Memoria de la Inspección General de Colonización e Inmigración para el año 1905* (Santiago, Imprenta Cervantes, 1906), p. 173. Luis Conrady señala también que la nueva Ley de Alcoholes ha tenido efectos positivos en reducir el alcoholismo.

puche no tienen que ver con relaciones entre ellos, sino con dos factores estrictamente políticos: la presencia de colonos usurpadores y la escasa cantidad de tierras asignadas a los indígenas en la radicación.

> "Seria un gran bien para los indígenas –escribe Luis Conrady– si se pudieran desalojar los españoles (como ellos llaman a los hijos del país) de sus tierras, pues estas gentes hacen un mal incalculable por sus costumbres de arrendar terrenos de los indígenas que pagan con bebidas alcohólicas, y después de algunos años con sus maquinaciones se hacen como dueños de los terrenos de los indígenas, los cuales ellos denuncian como terrenos fiscales y los piden como colonos nacionales; esto lo hacen en terrenos indígenas en que estos no tienen títulos de merced"[156].

Y sigue:

> "En mi conocimiento exacto de la situación de los indígenas adquirido en el terreno mismo, por medio de observaciones directas y personales, me he convencido que se les da muy poco terreno, pues hay muchas familias de cuatro y cinco personas que solo tienen de tres a cuatro hectáreas de terreno. Ud. sabe que con tan poco terreno apenas pueden hacer sembrados y no tienen donde llevar a pastar sus animales, por lo cual se ven obligados a llevarlos a la Argentina o a los cajones de la Cordillera"[157].

El ingeniero señala con claridad cómo la política de radicación mutiló todo el potencial ganadero de la economía mapuche, una política de despojo de ganado que fue uno de los principales y decisivos factores del empobrecimiento estructural mapuche en las décadas previas a la radicación[158], y probablemente un elemento que explica la enajenación de tierras al Estado o a colonos (venta de "acciones y derechos" y "arriendos") 1860 y 1880. Al respecto escribe Luis Conrady en su informe de 1905:

> "Se habría incrementado espontáneamente la industria ganadera en dar a los indígenas el terreno suficiente para sus crianzas. Se nota hoy menos cantidades de animales entre los indígenas que lo que había antes, lo cual se debe aparte de la razón dada, al impuesto que grava el ganado argentino [...] La escasa cabida de terreno es de las radicaciones nuevas pues antiguamente, según lo he visto en los títulos y planos, se ha adjudicado a los indios mucho más suelo"[159].

[156] "Informe al Protector de Indígenas de Cautín, 9 de abril de 1906", *op. cit.*
[157] *Ibid.*
[158] Nahuelpán, *op. cit.*, pp. 135-136
[159] "Informe al Protector de Indígenas de Cautín, 9 de abril de 1906", *op. cit.*, p. 174.

En 1911, el protector de Valdivia Carlos Irribarra incluye en su Memoria un informe del ingeniero Leónidas Soto, que aporta valiosas informaciones sobre las condiciones de trabajo de estos profesionales. En primer lugar, reporta los elementos técnicos que emplea:

> "El instrumento de ingeniería que más usé en mis operaciones, porque tiene una Declinatoria Sanguett de primer orden, es un taquímetro centesimal francés, con divisiones auto-reductoras i altimétricas grabadas por Khránass. A veces me bastó aparatos sencillos como la Brújula Katter, el Prisma Salmoraighi. Un Pantómetro, etc., etc.".

Y destaca que "todos estos aparatos son de mi exclusiva propiedad; ninguno es del Fisco". Por otra parte, resalta la intensidad y exigencia de la labor, en tanto funcionario público que debe también representar al gobierno:

> "Repasando mis carteras se ve que he hecho los siguientes viajes. A Pelchuquin. tres viajes; Corroco, Rucahue, Lanco, dos viajes; La Paz, tres viajes; Chanco, La Faja, Huefel, dos viajes; Lolorruca, dos viajes; Coihue, Huipel, Carilafquen, Loncoche, tres viajes; Huelquelelfun, dos viajes; Rucapuilli, dos viajes; Lago Ranco, Rupemeica, Pulingue, dos viajes; Villarrica, Putue, Huiscapi, Curaco, Lliu Lliu, Futa Alihuen, Piñoepillain, Coihueco, Chihuaihue, Huechulelfu, recorriendo gran parte de la provincia, haciendo llegar hasta el más lejano rincón y última *ruca*, tal era mi deseo, la palabra de aliento y esperanza, de que el Gobierno se preocupa de ellos, pagando muy bien, siendo lo contrario, abogados, ingenieros, agentes judiciales, etc., etc., para atenderlos gratuitamente en su defensa. En estas comisiones he salido fuera de Valdivia desde agosto a marzo inclusive, un total de ciento noventa y cuatro días, cuyos viáticos deseo se me abonen"[160].

Y finalmente, llama la atención sobre los riesgos que corre en estas comisiones en terreno:

> "Sería además de cansado, particularizarme, poner en su conocimiento las veces y personas que en distintas ocasiones me han prohibido y amenazado de bala, si trabajaba en el terreno usurpado por ellos. Felizmente para mi, nada ha sucedido hasta ahora".

Es destacable la convicción ideológica "civilizatoria" que tienen estos agentes tecnológicos, dispuestos a arriesgar su integridad física o, incluso, a mentir sobre sus sueldos para ofrecer una imagen del Estado como garante de justicia y espe-

[160] "Informe de ingeniero Leonidas Soto", en Carlos Irribarra, *Memoria del Protector de Valdivia para el año 1911*, en este volumen, p. 463.

ranza a los campesinos mapuche desamparados. Sin embargo, ante las dificultades sociales y políticas de su tarea, no todos los ingenieros lograban sostener esta convicción, como ilustra expresivamente un relato del misionero [Sigisfredo] Schneider, respecto a una situación vivida por el ingeniero de la Comisión de Radicación Cesar Ibar, cuando hacia 1905 realiza sus tareas en la región de Panguipulli. Cuenta Schneider que los mapuche estaban ahí:

> "En la creencia que iban a recuperar todos los terrenos usurpados por Joaquín Mera y otros. Pero cuando veían que esto era imposible, siendo que los particulares no dejaban al ingeniero [entrar] en sus terrenos cercados, los indios principiaban a disgustarse con el ingeniero".

Entonces Juan Catriel, un *lonko* del lugar, le pide al misionero "que el ingeniero suspenda sus trabajos" y que le dé una "recomendación para trasladarse a Santiago a pedir otro ingeniero", a lo que Schneider responde que eso era "una locura" y que "no encontrarían nunca mejor ingeniero que Cesar Ibar". Luego, sigue el relato:

> "Le conté algo [a Ibar] de lo que los indios me habían hablado. Me contestó que los indios eran unos tontos y Catriel un mal agradecido y que sus atribuciones no le permitían hacer mas de lo que hacía. Por fin se demostró desanimado, diciendo que toda la radicación no era mas que una chacota que afirmaba a los ladrones en sus robos y a los indios en su miseria y que con toda injusticia se echaba la culpa de todos estos males sobre los ingenieros. Tanto quejar y tanto reparar me descompusieron también el ánimo"[161].

La disponibilidad de ingenieros para la radicación y la defensa del derecho a la tierra de los indígenas, radicados o no, se volverá un asunto crucial para las instituciones protectoras, como lo muestra la disputa del año 1907 entre el Protectorado y la recién creada Oficina de Mensura de Tierras (ex Sección Topográfica del Ministerio de Colonización), en torno a la asignación de un ingeniero exclusivo para las tareas del Protectorado. El 9 de febrero el inspector general Temístocles Urrutia (1905-1921) le escribe al Ministro, ante una solicitud de partición de hijuelas de Francisco Huenchuñir:

> "Por no haberse consultado el puesto de ingeniero del Protectorado en el presupuesto no será posible al Protector hacer la partición indicada. Tampoco podría hacerse este trabajo por un ingeniero de la Comisión Radicadora pues a estos funcionarios les han sido encomendado trabajos mas urgentes"[162].

[161] [Sigisfredo] Schneider 1904-1924, citado en Mariman, *op. cit.*, p. 116.
[162] ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1304, 1907.

En junio de ese año, el ingeniero Luis Conrady vuelve a ser contratado "para que prestara sus servicios de ingeniero a las órdenes del Protector de Indígenas de Temuco". Sin embargo, al mes siguiente, el director de la Oficina de Mensura Luis Risopatrón propone al ministro Federico Puga Borne "dar unidad al servicio [...] de mensura de tierras de los territorios de colonización y las radicaciones de colonos e indígenas", señalando:

> "Es obvio señor Ministro, que esta unidad podrá mantenerse siempre que los trabajos se lleven a cabo por una sola Oficina y se romperá en el momento en que sea más de una la que los efectúa. Y este es el caso del nombramiento del señor Conrady a las órdenes del Protectorado de Indígenas, que es extraño a esta Oficina"[163].

Cinco días después, el Ministro firmaba un decreto ratificado por el presidente Pedro Montt que establece que Conrady dependerá de la Oficina de Mensura[164]. El Inspector parece no haberse enterado de la decisión cuando en septiembre consulta telegráficamente por el ingeniero Conrady. Eulogio Robles le contesta que este "no depende hoy de esta Oficina" y el presidente de la Comisión Radicadora dice "no tener orden permitir ida Conrady a esa [Santiago]".

El Inspector escribe al Ministro argumentando la importancia del ingeniero para solucionar problemas de tierras entre indígenas, problemas que adjudica a la estructura política de las comunidades ("reducciones") creadas por la radicación:

> "Este ingeniero tiene la obligación de efectuar las subdivisiones de las hijuelas que se otorgan a las reducciones de indígenas, subdivisión esta de gran importancia, pues así se destruyen los cacicazgos y demás defectos fundamentales que afectan la constitución de la familia indígena y de la propiedad dentro de las reducciones"[165].

Al mes siguiente, constatada la maniobra del director de la Oficina de Mensura, el Inspector vuelve a escribir al Ministro rogando "se sirva dejar sin efecto el decreto No. 1202 de 30 de julio último", donde se establece la dependencia del ingeniero. Entre sus argumentos, señala:

> "Las funciones del ingeniero del Protectorado son distintas de las que supone el Director de la Oficina de Mensura de Tierras [...] La Comisión Radicadora de Indígenas hace entrega a los indígenas de los terrenos que ocupan, por

[163] Risopatrón, Director de la Oficina de Mensura de Tierras, 25 de julio de 1907, en ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1304.

[164] Decreto del 20 de julio de 1907, en ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1304.

[165] Inspector Urrutia a Ministro, 11 de septiembre de 1907, en ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1304,

> reducciones que suelen constar de quinientas o más personas, y la sub-división de la hijuela entregada en común entre las diversas familias de la reducción, es labor encomendada al ingeniero del Protectorado. No me explico qué dificultades puedan surgir de la dependencia de diversa Oficina [...] debo hacer presente a US. que siendo el Protector el abogado de los indígenas, a él también le corresponde efectuar la partición de los bienes de estos y liquidación de las comunidades existentes entre ellos; y por la confianza que ha sabido captarse entre los indígenas el Protector es generalmente el árbitro ante quienes acuden en sus litigios. Estas funciones que ejerce el Protector y que no le están encomendadas por la ley, sino que por la costumbre dan resultados muy benéficos en cuanto contribuyen a la civilización de los indígenas, constitución de su propiedad dentro de sus reducciones y abolición del sistema de Cacicazgos de tan funestas consecuencias, pero para desempeñarlas es indispensable que un ingeniero coopere a su labor"[166].

Este episodio de conflicto burocrático muestra la importancia que adquiere en el control de los ingenieros en los órganos estatales. Además, revela el proyecto estructural de la Inspección General de Colonización, que es la "destrucción de los cacicazgos y otros obstáculos" a la constitución de la propiedad familiar entre indígenas, entendida como propiedad privada de una familia nuclear constituida en la propiedad jurídica. Esta ideología planteada como proyecto de "civilización de los indígenas" busca el establecimiento de una cultura liberal de "partición de bienes", y el Protectorado es concebido como el instrumento que debe generar la confianza de los mapuche en el aparato ideológico jurídico, en tanto árbitro legitimado de las mediaciones con este aparato. Pero, incluso ,para este proyecto –que es el de una efectiva transformación cultural que tienda a la integración individual, acompañada por la protección legal de las tierras de las tierras asignadas a los mapuche– la institución protectora no obtendrá los recursos que la hagan eficaz. Así, en su Memoria para el año 1907, Eulogio Robles señala:

> "Podría escribir carillas y mas carillas para poner de manifiesto los obstáculos insuperables que encuentro para servir mi puesto como lo deseo [...] El servicio de esta defensa que debería ser atendida por numeroso personal, está confiado a un sólo funcionario, al cual se exige proceda pronta y eficazmente en todos los casos de reclamo que se presentan en las provincias de Cautín, Malleco, parte de Biobío y Arauco. A pesar de haberlo pedido, no dispongo del personal suficiente para el buen desempeño de mi puesto, carezco de ingeniero para que me ilustre en las cuestiones de hecho, no tengo liberación postal para dirigirme a las distintas autoridades de la Frontera, como lo he

[166] Inspector Urrutia a Ministro, 9 de octubre de 1907, en ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1304.

pedido y se me ha denegado; y no hay en esta oficina planos de los terrenos de indígenas radicados y por radicar como también he solicitado. Y, todavía [...] no se me paga con puntualidad mis viáticos ni mis gastos de pasajes, adéudaseme sumas relativamente crecidas por años y años"[167].

La carencia de ingeniero que apoye las tareas del Protectorado sigue pesando a Robles durante todo el año. En agosto le escribe en oficio al intendente de Malleco:

"Continuamente ocurren a esa Intendencia indígenas manifestando de que son molestados por particulares en sus hijuelas y en que se expone que el único medio que estima el Sr. Intendente para arreglar esas dificultades es el envío de un ingeniero que vaya a marcar los deslindes en el terreno mismo, pues los que perturban la posesión indígena aseveran que no ocupan sus tierras los colindantes"[168].

En 1909, Robles vuelve a solicitar al Inspector la designación de ingenieros, que ese año parecen haber sido considerados en el presupuesto. En la nota, también explica la ineficacia burocrática en la que había quedado la disponibilidad de ingenieros desde el decreto que los hacía a todos ellos depender de la Oficina de Mensura de Tierras:

"Sabe el Sr. Inspector que la ley dispone que el Protector atienda de preferencia el deslindamiento de los terrenos de indígenas y esta prescripción especial no puede acatarla careciendo de un ingeniero. Los asuntos de deslinde, ya sea entre particulares e indígenas y entre los indígenas mismos, es uno de los asuntos más complicados que se ventilan en esta Oficina y por desgracia en la mayoría de los casos estérilmente. En el presupuesto actual se consultaron los fondos para ingenieros de los Protectorados de Indígenas; pero hasta hoy no se han expedido los respectivos decretos de nombramientos. Cuando esta Oficina necesita de los servicios de un ingeniero, el procedimiento del que hay que valerse es de dirigirse a la Inspección para que se sirva recabar del Ministerio ordene al Sr. Director de la Oficina de Mensura de Tierras, que, a su vez, ordene a alguno de los funcionarios de su dependencia, se ponga a disposición del Protector. El trámite es engorroso y dilatorio y mientras se

[167] Véase *Memoria del Protectorado de Cautín para el año 1907*, en Cristóbal Montecinos, *Eulojio Robles Rodríguez, Protector de Indígenas de Cautín: Pleitos por restitución de tierras de mapuches (1900-1930)*, tesis para optar al grado de Magister en Historia (Santiago, Universidad de Chile, 2011). Conviene señalar que esta memoria de Eulogio Robles (1908), al igual que algunas fuentes y documentos relevantes, no han podido incluirse en el presente volumen, pues la pandemia de Covid-19 impidió el acceso a repositorios y archivos. .

[168] Protector Robles a Intendente de Malleco, 25 de agosto de 1908, en AHN, Fondo Intendencia de Malleco, vol. 275.

> lleva a cabo puede pasar la oportunidad de dichos servicios. Hace diez días telegrafié al Sr. Inspector rogándole recabara del Ministerio la orden de que se me facilitara un ingeniero por tener necesidad de algunas operaciones en el terreno como cuestiones previas para entablar dos juicios y hasta la fecha no sé si se me haya accedido o no a lo solicitado, y mientras tanto los indios interesados vienen diariamente a exigirme los atienda. No sería raro que, cansados de esperar, se dirijan a esa [Santiago] a interponer un reclamo porque no los atiendo y que me traigan una orden para que proceda a la brevedad posible a amparar sus derechos dando cuenta de lo obrado"[169].

Su insistencia parece ser recompensada con el decreto del 12 de junio de 1909 del Ministerio, que establece que la Oficina de Mensura debe disponer de dos ingenieros para los Protectorados. Pero el director de Oficina de Mensura los concede para los meses de julio, agosto y septiembre. El Inspector General se ve obligado a recordarle al Director algo que ya sabía[170], que esos son:

> "Meses casi inútiles para el trabajo de campo por ser los más crudos del invierno... [en los que es] casi imposible efectuar trabajos en el campo por lo que se hace ilusorio el cumplimiento del citado decreto",

y que "la comisión de ambos ingenieros debe ser permanente y no solo para los meses mas crudos del invierno". A pesar del decreto que establece que ingenieros de la Oficina de Mensura deben estar a disposición de Protectorados, el director de esa oficina, en oficio de marzo de 1910:

> "Solicitó que se pusieran a sus órdenes dichos ingenieros [...] fundado en que 'hay conveniencia en reunir en una sola oficina pública todos los ingenieros que se ocupen en el ramo de levantamiento de planos'".

Se nombró a los ingenieros Luis Conrady y Federico Schneider, para servir a los protectores, pero a las órdenes de la Oficina de Mensura. Para el Inspector General esto generaba un problema ya que "la labor de estos ingenieros no tienen ningún punto de contacto con los trabajos encomendados a la Oficina de Mensura". Mientras que el trabajo de esta última se ejerce "en la mensura y levantamiento de planos de los terrenos de colonización", en el caso del Protectorado:

[169] Protector Robles al Inspector General, que reenvía al Ministro, 27 de mayo de 1909, en ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1436.

[170] En las memorias de la Oficina de Mensura de Tierras para los años 1907 y 1908, el presidente de la Comisión Radicadora Leoncio Rivera le hace saber al Director de la Oficina de Mensura que la temporada anual en la que pueden trabajar los ingenieros de campo van de septiembre a abril, debido a las crudezas del invierno.

> "El ingeniero no vendría a levantar nuevos planos ni a modificarlos en forma alguna, sino a comprobar únicamente si el indígena ha sido privado de alguna porción de los terrenos que se han comprendido en su titulo de merced".

El Inspector termina su comunicación al Ministro señalando que han pasado siete meses:

> "Sin que uno solo de ellos haya llenado las funciones que la ley explícitamente les encomienda. Mientras, se ha hecho en forma sumamente defectuosa la defensa de los indígenas prolongándose indefinidamente algunos litigios e imposibilitándose la iniciación de otros por falta de informes técnicos"[171].

En octubre, el Inspector vuelve a escribir al Ministro:

> "Mientras carezca de un ingeniero que coopere en la sección de cada uno de ellos, será imposible conseguir que la defensa de los terrenos de propiedad de indígenas pueda ejercerse en forma que permita obtener una resolución pronta y eficaz en resguardo de sus intereses [...] Al Protector de Indígenas, que naturalmente ignora la topografía, ciencia propia de un ingeniero, le es imposible establecer la efectividad de lo que asevera el reclamante, especialmente la extensión del terreno usurpado, datos de que debe hacer mención en la demanda que presenta ante la justicia ordinaria. Está demás decir que el indígena carece con mayor razón de los conocimientos que le permitirían fijar ese importante dato"[172].

A principios de 1911, los problemas no se han resuelto ya que el director de la Oficina de Mensura asignó ayudantes de ingenieros para asesorar a los protectores de Cautín y Valdivia, y no a los solicitados ingenieros titulares Conrady y Schneider[173]. El Inspector vuelve a escribir al Ministro con abundancia de argumentos, algunos dirigidos específicamente a las preocupaciones del Ministerio sobre las consecuencias de la no resolución de los conflictos en la región, antes que escalaran a Santiago:

> "Los conocimientos de esos ingenieros servirían al pronto esclarecimiento de cualquier reclamo, desde que solo deben informar ateniéndose a los planos confeccionados por la Comisión Radicadora de Indígenas que conocen en todos sus detalles, pues se trata en estos juicios de hacer respetar por los particulares los deslindes marcados en esos planos y en ningún caso de modificarlos [...] habiendo trascurrido el año sin que los ingenieros designados

[171] ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1436, 1910.

[172] ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1436, 1 de octubre de 1910.

[173] En ese entonces, la Comisión Radicadora opera con seis ingenieros titulares, dos ingenieros ayudantes y seis ayudantes; "Informe de la Comisión de Radicación", en *Cuarta Memoria del Director de la Oficina de Mensura de Tierras* (Santiago, Imprenta Universitaria, 1911), pp. 114-115.

por el Gobierno llenaran las funciones indicadas [...] este mes se han contratado por la Oficina [...] dos ayudantes de ingenieros, que nunca han servido en la radicación de indígenas [...] En el curso del año próximo pasado la labor de los Protectorados en defensa de los indígenas se ha hecho en forma sumamente deficiente, porque carecían de los auxilios de ingenieros, ayuda absolutamente indispensable, puesto que las reclamaciones indígenas versan, sin excepción, sobre usurpaciones de sus terrenos por particulares y solo esos profesionales pueden proporcionar medios efectivos de defensa, estableciendo si se han viciado o no, y en qué extensión, los deslindes marcados en los planos de radicación y titulos de merced otorgados a los indígenas [...] el ayudante puesto a su disposición exige anticipo para atender los gastos de caballo, mozos etc. Esta Inspección no dispone por el momento de fondos para proporcionar los anticipos que se solicitan [...] los empleados contratados por la Oficina [...] en las condiciones apuntadas no satisfarían las necesidades que han aconsejado su nombramiento [...] Por este motivo, continuamente vienen a la capital grupos de indígenas a traer sus quejas hasta el Gobierno, manifestando que no son atendidos en la defensa de sus derechos, quejas de que se hace eco la prensa acusando a los Protectores de Indígenas, de ser negligentes en el desempeño de sus funciones"[174].

Ese mismo mes, el Congreso Nacional envía una comisión parlamentaria de colonización a conocer en terreno el problema de la constitución de la propiedad indígena y no indígena en el sur de Chile. Su informe, publicado en 1912, es ampliamente conocido y citado en la historiografía, ya que la Comisión da cuenta de los múltiples abusos y atropellos que se cometen sobre los mapuche. Luego de acompañar el viaje de la Comisión por las localidades de Temuco, Pitrufquén, Gorbea, Loncoche, Villarrica, La Paz, Valdivia, La Unión, Osorno, Puerto Varas, Octay y Puerto Montt, el Inspector entiende que se trata de una oportunidad para reforzar sus peticiones de apoyo al Poder Ejecutivo. En oficio emitido dos días después del regreso de la Comisión a Santiago, le escribe al Ministro:

"La Comisión ha podido imponerse [...] que por deficiencia del personal no se ha podido atender con más rapidez muchos asuntos; por lo cual ha opinado que debe aumentarse este, dándole a los protectores de indígenas, agentes [judiciales] a cada uno, ingenieros, mozos y elementos de defensa judicial y mayor número de Administradores de Colonias i otros empleados cooperadores que hagan más eficaz las múltiples labores de la oficina"[175].

Sin embargo, al año de la visita parlamentaria, poco ha cambiado. En octubre de 1912 se produce la matanza de Forrahue, una de las tragedias más comen-

[174] Inspector a Ministro, 30 de enero de 1911, en ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1436.
[175] Inspector a Ministro, 6 de marzo de 1911, *op. cit.*

tadas de la época, donde son asesinados por fuerzas policiales trece comuneros *huilliche* que se resistieron a la expulsión de sus tierras, durante un "lanzamiento" ordenado por un juez que adjudicó la propiedad de los terrenos al colono Atanasio Burgos. En esa ocasión, el Inspector General transcribe el informe del protector de Llanquihue José Schweter, quien vuelve a insistir en la importancia de los ingenieros para prevenir conflictos como ese:

> "Como se manifiesta en el Informe trascrito, el Protector necesita de los servicios de un ingeniero para que lo asesore en las diligencias que practicará con el fin de obtener que se desmarquen las hijuelas que corresponden a los indígenas a quienes se reconocieron derechos en la partición referida. Debo repetir nuevamente a V.S. lo que en numerosas ocasiones y desde hace largo tiempo he tenido el honor de manifestar a V.S. respecto a la necesidad de que los cinco ingenieros consultados en la ley de presupuesto 'para que cooperen a la acción de los Protectores de Indígenas' (Item 815, partida 17 correspondiente a esta Inspección) pasen a depender del infrascrito. Actualmente de los cinco ingenieros citados, solo tres dependen de esta Oficina, los que trabajan en los Protectorados de Malleco, Cautín y Valdivia. La defensa de los indígenas de Arauco y Llanquihue se hace en forma deficiente porque los ingenieros que debiesen informar sobre las cuestiones de hecho que invariablemente se presentan sobre usurpación, de tierras, trabajan a las órdenes de la Oficina de Mensura de Tierras, y no atienden a las labores para que han sido nombrados"[176].

A fines de ese año 1912, Eulogio Robles deja el cargo después de doce años como protector de indígenas de Cautín, siendo trasladado como juez letrado al tribunal de La Serena, y es reemplazado en Temuco por Manuel Labbé, quien había sido protector en Arauco desde la creación de esa oficina en 1909. En 1914, el protector de Malleco, Javier Arrieta, vuelve a insistir en los problemas y reclamos que genera la falta de un ingeniero con dedicación exclusiva a su provincia:

> "Este Protectorado, a medida de sus fuerzas, protege rápida y eficazmente a los indígenas, y si hay alguno de estos que no se cree amparados, es porque su reclamo es injusto o porque momentáneamente no se les puede acceder a lo que piden, por falta de tiempo, sobretodo en aquellas gestiones en que debe intervenir el Ingeniero de la Oficina, funcionario que está recargado de trabajo no solo por las innumerables ordenes que debe cumplir, sino también en razón de que por orden superior debe atender la Provincia de Arauco"[177].

El reclamo formal que hace en 1915 el profesor Manuel A. Neculman como presidente de la Sociedad Caupolicán, contra el presidente de la Comisión de

[176] Inspector a Ministro, 31 de octubre de 1912, en AHN, Fondo MINREL, vol. 1769.

[177] Protector Arrieta a Inspector, 25 de noviembre de 1914, en AHN, Fondo Intendencia de Malleco, vol. 275.

Radicación, Leoncio Rivera, también permite entrever lo que estaba en juego tras la carencia estructural de ingenieros que apoyen el Protectorado, y los obstáculos interpuestos por la dirección de la Oficina de Mensura (de la cual en 1907 había pasado a depender la Comisión Radicadora) para asignar ingenieros a las tareas de los protectores. En el conflicto que reseñamos más atrás, y que terminó con la destitución del presidente de la Comisión Radicadora, el ingeniero Manterola del Protectorado había confirmado un "error" en el número de hectáreas (146 ha) de un título de merced otorgado en 1911, no así en el plano topográfico, donde constaban las 220 ha que reclamaba el jefe de la reducción José María Melillan. Rivera, en vez de corregir el número en el título, envía al ingeniero Calvo de la Comisión, a modificar las líneas del plano, y las hectáreas perdidas en el cambio de línea pasaban a la propiedad de la Concesión Silva Rivas cuyo abogado, como denuncia la Sociedad Caupolicán, era del gabinete jurídico particular del propio Leoncio Rivera...[178]. El caso muestra cómo la dependencia administrativa de los ingenieros los involucraba no solo en los problemas de jurisdicciones de las instituciones, sino, también, en la corrupción de los funcionarios por los intereses terratenientes. Esto afectaba la creencia pública (chilena y mapuche) en la "objetividad científica" de las técnicas y documentos de mensura (los planos), por su evidente instrumentalización en los conflictos político-legales locales. Pero la opción centralizadora y jerárquica del director de la Oficina de Mensura le negaba en la práctica a la parte mapuche representada por los protectores las capacidades técnicas para ganar los juicios, y permitía que los particulares siguieran legalizando y avalando "técnicamente" la propiedad mal habida.

A propósito de la gira en la región que efectúa el ministro de Colonización el año 1917, el *Diario Austral* reportará de nuevo el problema ya conocido por todos, de la falta de ingenieros, en este caso en la propia Comisión Radicadora (presidida ahora por el exprotector de Cautín, Eleazar Bravo), celebrando la visita oficial para así:

> "Cuando conozca los medios del despojo sistemático de los indígenas por los pillos y detentadores, cuando palpe la lenidad judicial, cuando no la complicidad, y observe la morosidad del Gobierno en cumplir sus obligaciones para con los indígenas",

el Ministro pueda dar soluciones. Para esto, dice el editorial:

> "Es preciso tener un personal que ejecute la tarea de mensurar, deslindar tierra y hacer las escrituras y títulos correspondientes; es decir, lo primero en

[178] Necul, *op. cit.*, véase texto completo en Fuentes complementarias de este volumen. La Sociedad Caupolicán ya había reclamado por este caso ante el Inspector General de Colonización, denunciándolo junto a otros casos que expone en documento publicado por Manuel Manquilef, Manuel Neculman y Pedro Manquilef, véase Jorge Pinto (ed.), *Conflictos étnicos, sociales y económicos. Araucanía 1900-2014* (Santiago, Pehuén editores, 2015), pp. 286-288.

> toda colectividad organizada, constituir la propiedad. Se necesitan ingenieros y ayudantes mensuradores. Estas ráfagas de estrictez en las economías en los gastos públicos suelen dar lugar a graves errores; y uno de ellos es el haber suprimido los ingenieros de la oficina de radicación. Esta obra, de suyo lento, queda ahora paralizada"[179].

Al año siguiente, Armando Moraga Droguett asume el Protectorado de Cautín en reemplazo de Francisco Mozó Merino, trasladado a cumplir funciones en la Inspección General[180]. En 1919, el reclamo de Juan Llanquileo Tranma, de Yautahuen, a la Intendencia de Cautín confirma que persiste la carencia de ingenieros, y revela también que algunos comuneros, urgidos por su deseo de partición de las reducciones en hijuelas, se disponen a contratar ingenieros particulares –"fajeros" o "prácticos"– y solicitan apoyo de fuerza policial para proteger el trabajo de estos agrimensores privados:

> "He reclamado una infinidad de veces ingeniero ante la Comisión Radicadora de Indígenas y Protector de Indígenas, pero siempre se me ha dicho que no tienen ingenieros disponibles para las particiones de los mapuches o que los que tiene la Comisión Radicadora están ocupados en radicar a los indígenas que no han sido radicados. Por lo expuesto y haciéndose ya imposible vivir en comunidad, porque el más grande atropella al más chico y ocupan así todo el terreno dejando a los débiles muriéndose de hambre, por estas razones vengo en pedir a US. se sirva concederme la fuerza pública a fin de que un ingeniero particular proceda a hacer la división de la reserva, entregándole a cada uno el terreno que le corresponde [...] a fin de evitar muertes, puñaladas y otros crímenes que continuamente están sucediendo por esta causa"[181].

La aparición de estos "prácticos de ingeniería"[182] o "fajeros", resulta lógica después de décadas de demandas sin respuestas por la asignación de ingenieros oficiales para los deslindes de reducciones, ocupaciones de "arrendatarios" y particiones de hijuelas. Una crónica del *Diario Austral* ese mismo año 1919 señala que estos "prácticos" son sugeridos a los mapuche por particulares para la mensura de tierras indígenas, "sin estar autorizados por persona competente", para definir los limites de suelos arrendados a los particulares. Los prácticos, que se hacen pasar por ingenieros titulados:

[179] "Radicación de indígenas", en *El Diario Austral*, Temuco, 1 de febrero de 1917.

[180] Armando Moraga se había titulado de abogado en 1916 en la Universidad de Chile con una memoria dedicada a las psicopatologías sexuales, titulada *Consideraciones sociales y médico-legales sobre la degeneración del instinto genésico* (Santiago, Imprenta La Ilustración, 1916).

[181] Abraham Cabrera a ruego de Juan Llanquileo Tramma, de Yautahuen, Temuco, 1919, en AHN, Fondo Intendencia de Cautín, vol. 115.

[182] "Carahue. Los prácticos", en *El Diario Austral*, Temuco, 6 de agosto de 1919.

> "Solo vienen a llenar el bolsillo, ni se toman la molestia de ver el expediente de radicación [...] a los indios se les engaña asegurándoles que vienen de orden del señor Protector, produciéndose entre ellos dos corrientes, una que defiende los suelos entregados y la otra que procura por todos los medios correr a los intrusos, formándose entre los dos bandos verdaderas batallas campales, que terminan con muchos heridos a palos",

de manera que, "los muchos reclamos que van al Protectorado se derivan de las continuas mensuras que estos practican". La nota periodística ofrece el ejemplo del "célebre práctico" Sandoval, quien:

> "Atropelló suelos ajenos arrancando de raíz los linderos establecidos por otros ingenieros y aprobados por el señor Protector de Indígena [...] sin respetar planos ni líneas trazadas por el ingeniero [de la Comisión Radicadora] señor Ibar"[183].

A principios de 1920, el protector Moraga le reitera al Inspector una serie de problemas que, como hemos visto, se vienen arrastrando por dos décadas:

> "Habrá podido imponerse el Sr. Inspector, en sus visitas a Temuco, en las reclamaciones que los indígenas dirigen al Ministro de Colonización, y en los oficios que el Protectorado ha dirigido a Santiago, que el noventa por ciento de aquellas reclamaciones son provocadas por la falta de ingenieros que las solucionen en el terreno. La indivisión del terreno, la inseguridad en que el mapuche vive para saber si tal pedazo de tierra le habrá de pertenecer en definitiva, mata de cuajo todas las iniciativas de esta gente: no pueden trabajar con interés, no hacen mejoras de ninguna especie, y ni siquiera cierran sus parcelas de terreno, porque ignoran, como he dicho antes, si en definitiva les habrán o no de corresponder. Los indígenas están desesperados por esta situación; vienen en romería a esta oficina, y el papel del infraescrito, en este caso, se reduce a mandar oficio al Presidente de la Comisión Radicadora, solicitando ingeniero. He mandado más de cuatrocientos oficios, pero solo a unos cuantos, se les ha dado cumplimiento debido a que el ingeniero señor Manterola, es hombre que atiende también las radicaciones de indígenas. Esta causa ha traído por consecuencia un mal gravísimo: en la imposibilidad de obtener ingeniero de Colonización, el mapuche recurre a los fajeros, y estos son bien complacientes con el que los lleva; este ha recibido algún dinero por su trabajo, y escoge, dentro de la reducción, el mejor pedazo de suelo para

[183] "Los prácticos", en *El Diario Austral*, Temuco, 6 de agosto de 1919. Este podría ser el mismo Erasmo Sandoval que entre 1896 y 1904 figuraba como mozo de ingeniero de la Comisión Radicadora, y fue acusado por Robles de usar su posición para adjudicarse en calidad de "colono nacional" terrenos de mapuche aún no radicados (véase más atrás).

> dárselo al que lo lleva oficiosamente. De aquí miles de nuevos reclamos, que es menester solucionarlos, trasladándose el infrascrito al terreno, o dejando sin efecto la partición arbitraria inexacta practicada por el fajero"[184].

Moraga termina su informe solicitando al Inspector la designación de:

> "Un ingeniero que dedique su actividad exclusivamente a esta clase de negocios, y que, dependiendo del infrascrito, pueda hacer los trabajos de mayor urgencia que, de acuerdo con las necesidades y el convencimiento que de estos negocios tengo, decretará el Protectorado"[185].

El protector Moraga no informa nada nuevo respecto a las dificultades de la labor del Protectorado, sin embargo, se distancia de sus antecesores en su tendencia a polemizar públicamente contra los dirigentes de la Sociedad Caupolicán, como en las ácidas columnas contra Juan Huenul, a la sazón prosecretario de la organización mapuche[186]. Además de cierta prepotencia positivista disfrazada de condescendencia y miserabilismo, y sin nunca reconocer la responsabilidad del Estado en la pobreza material mapuche, el escrito de Moraga da cuenta del evolucionismo que inspira el proyecto liberal de subdivisión de las tierras indígenas, donde los defensores de las tierras reduccionales son acusados de "conservadores", "colectivistas" y "comunistas" atrasados a su tiempo. En esta confrontación, el protector Moraga encontrará aliados en los líderes "liberales" mapuche como Manuel Manquilef o Martín Collío Huaiquilaf. La figura de Collío es aquí relevante, ya que se trata de un joven mapuche que luego de estudiar en Santiago, consiguió mediante su trabajo de informante con el antropólogo estadounidense Frank Speck[187] obtener una beca de estudios de ingeniería en la Universidad de Pennsylvania (Estados Unidos). Su retorno a Chile en 1923 es celebrado en una columna del protector Moraga, que aclama al "primer ingeniero de la raza aborigen titulado en el extranjero"[188]. Lo que llama la atención es que en ningún momento la existencia de un ingeniero mapuche es considerada como un potencial aporte a las necesidades de este tipo de profesionales en el territorio mapuche. De hecho Moraga señala que el joven Collío ha obtenido dos proposiciones de trabajo, una del gobierno "en una elevada participación

[184] Protector Moraga a Inspector, 11 de febrero de 1920, en ARNAD, Fondo IGCI, vol. 242.

[185] Y termina recomendando ingeniero Rodolfo Fuentes que "tiene el mérito de conocer a fondo estas cuestiones por haber sido, en años pasados, ingeniero de Colonización".

[186] Véanse las columnas en la sección Fuentes complementarias de este volumen.

[187] Frank Speck, "Two Araucanian Texts", *XXI International Congress of Americanist* (Leiden, E. J. Brill, 1922), pp. 371-373 y Donald Brand, "A Tri-Lingual Text by Martin Collio Huaiquilaf", *New Mexico Anthropologist*, vol. 22 (Albuquerque, 1941), pp. 36-51. Ambos documentos contienen textos en *mapudungun* dictados y traducidos por Martin Collio, el primero como estudiante de la University of Pennsylvania en 1921, y el segundo presumiblemente en una visita de Donald Brand a Chile.

[188] Armando Moraga, "El ingeniero indijena señor Collio", en *Diario Austral*, Temuco, diciembre de 1922.

en las oficinas técnicas del Ministerio de Industria" y otra de la administración de las minas de El Teniente, en ese momento propiedad de la Kennecott Cooper Company. En los años siguientes, Collío tomará activa posición en el debate por la subdivisión de tierras, apoyando al diputado Manquilef y con fuertes críticas públicas a Manuel Aburto Panguilef a quien acusa de "*self made* mapuche" y "mapuche de poca escuela" que promueve "el Soviet de los mapuche"[189]. El protector Moraga y sus aliados mapuche se habían así transformado en agentes anticomunistas, más que defensores de derecho a la tierra.

Logística de archivo y de campo:
escribientes, agentes y caballos

Como hemos podido leer en varios documentos antes citados, las carencias de personal auxiliar y equipos afectaban las diversas funciones necesarias en los Protectorados, mermando la eficiencia en el desempeño de sus tareas. Es el caso de los ingenieros auxiliares, escribientes, los agentes judiciales e, incluso, los medios de transporte indispensables como eran los caballos. Después de dos años en el cargo, el protector Robles le escribe al Inspector solicitando que se le asigne un escribiente a su oficina, aprovechando de listar la gran cantidad de labores que realiza la repartición:

> "Debe representar y defender los derechos de los indios en todas las circunstancias que se ofrezcan, y así me veo obligado a ampararlos en la posesión de sus tierras, a patrocinarlos ante la Comision Radicadora, a defenderlos en juicios ante este Juzgado cuando se trata de indígenas desvalidos, a practicar diversas gestiones para obtener se repriman los abusos numerosos que se cometen con ellos en los juzgados de subdelegación y de distrito, a velar porque los municipios no cobren contribución de haberes sino a los indígenas obligados a pagarla, y porque la cuota que deben satisfacer sea la justamente debida, a evacuar los informes que me pide esa Inspección General, etc. etc. Esta vasta y delicada labor no puede ser desempeñada sin la ayuda de otro empleado que se encargue siquiera del trabajo material de escritura [por lo que solicita] se consulte en el presupuesto del año venidero la cantidad necesaria para el pago de un escribiente para esta oficina"[190].

En 1907, Eulogio Robles solicita la compra de caballos que le permitan mayor autonomía en sus desplazamientos en terreno:

> "Para estas excursiones se arriendan caballos, con dinero del infrascrito o se piden prestados a la Policía. Lo primero no es justo, y es de advertir que

[189] Foerster y Montecino, *op. cit.*, p. 41; Menard y Pavez, "Los archivos del 29...", *op. cit.*

[190] ARNAD, Fondo IGCI, vol. 44, 1902. En 1907, Eulogio Robles tiene que contratar un nuevo escribiente.

> no siempre se encuentran caballos disponibles para tomar en arriendo. La Policía no siempre los facilita y cuando se obtienen es por servicio y con poca oportunidad. A fin de poder atender el servicio en el campo es necesario que se provea al infrascrito de un caballo aperado".

El Inspector transmite la solicitud al Ministerio, extendiéndola al Protectorado de Valdivia, junto a la múltiples veces reiterada demanda por la asignación de ingenieros[191].

Las carencias de equipos humanos y elementos de trabajo no afectaban solo al Protectorado, como consta en las Memorias del presidente de la Comisión de Radicación, Leoncio Rivera, que en 1906 acusa las notificaciones tardías por falta de aprobación de presupuestos, la "provisión de elementos de trabajo" también tardía, el "desaliento" de los auxiliares de ingeniería al ser notificados del cese de cargos a final de año[192]. También señala que el personal de secretaría asignado a la Comisión es de "competencia muy limitada" por ser elegidos "directamente por el Supremo Gobierno", y que además, dispone de un solo empleado de oficina, todo lo cual lo lleva a pronosticar que, con esas condiciones, el proceso de radicación no podrá concluir antes de diez o quince años más[193]. Lo interesante es que el presidente de la Comisión también presenta las condiciones óptimas de eficiencia de su labor. Señala que, aunque lo ideal sería una campaña de radicaciones que efectuara la "matrícula en un solo día en toda la Araucanía", con los recursos solicitados se podría concluir la radicación en solo dos temporadas (de septiembre a mayo). Estos recursos serían seis ingenieros auxiliares y seis ayudantes, más el "número de empleados de secretaría correspondientes", instrumentos, mulas, el número correspondiente de "brujuleros y alarifes, con fondos listos para pagarlos a tiempo", y no tener que "mantenerlos a su costa", como viene ocurriendo debido a los atrasos de tres meses en el pago de cincuenta pesos (lo que obliga a los propios ingenieros a darles anticipos para no perderlos, porque "no hay como conseguir reemplazos"). Todo lo cual redunda para Rivera en un servicio seriamente "amenazado de desprestigio"[194]. Rivera parece haber obtenido lo que quería, ya que en la Memoria de la Comisión Radicadora para el año 1911, señala que la Comisión opera con seis ingenieros, dos ingenieros ayudantes, y seis ayudantes[195]. Aunque en este caso, la disponibilidad de estos recursos no aseguró la eficacia de la radicación, trasladándose así las respon-

[191] Robles a Inspector, 16 de octubre de 1907; Inspector a Ministro, 18 de noviembre de 1907, en ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1304.

[192] "Memoria del Presidente de la Comisión Radicadora para el año 1906", firmado en 15 abril de 1907, en *Memoria de la Inspección Jeneral de Tierras y Colonización* (Santiago, Imprenta Ercilla, 1907), pp. 82-83.

[193] *Op. cit.,* p. 86.

[194] "Memoria del Presidente de la Comisión Radicadora para el año 1906", firmado en 15 abril de 1907, *op. cit*., pp. 87-88.

[195] "Memoria de la Comisión de Radicación", en *Memoria de la Oficina de Mensura de Tierras para el año 1911* (Santiago, imprenta, año), pp. 114-115.

sabilidades de negligencia a la conducción del proceso por el propio Rivera, como vimos más atrás que acusaron los dirigentes mapuche.

En 1910, Robles vuelve a insistir sobre la precariedad de personal para la enormidad de la tarea del Protectorado: la falta de recursos impide tanto la contratación de "agentes judiciales para que coadyuven a la defensa de los indios, e ingenieros que los ilustren acerca de los reclamos sobre internación de deslindes". En 1915, es el protector de Malleco, Javier Arrieta, quien informa al Inspector que se ha quedado sin agente judicial que lo apoye en los juicios que tramita:

> "Por causa de la crisis económica por la que atraviesa el país, motivada en parte muy principal por la actual Guerra Europea, a mediados del mes de diciembre último fueron notificados de cesantía dos de los empleados de la Oficina [...]: fueron ellos el ingeniero y el agente judicial [...] Con tal resolución, como se comprende, se ha privado a la Oficina de medios poderosos para hacer más efectiva y fructífera su labor. Felizmente, se me ha comunicado hace pocos días desde la Inspección General de Colonización que el ingeniero de la Oficina ha quedado reincorporado al servicio durante el presente año. Sería obra de verdadera justicia si igual reincorporación se hiciera con respecto al agente judicial, funcionario indispensable para la mejor y expedita marcha de los numerosos juicios que sigue el Protectorado ante los juzgados de los cuatro departamentos que tiene esta provincia"[196].

En 1919, el presidente, el tesorero y el secretario de la Sociedad Caupolicán, también se suman formalmente a la petición de agentes judiciales que apoyen los Protectorados en los juicios que llevan los indígenas:

> "Se han presentado a esta Oficina [...] haciendo presente la verdadera necesidad que existe en la creación del puesto de agente judicial para los Protectorados. Hoy que existe en el gobierno el propósito de terminar [...] la dictación de una ley, la situación un tanto irregular en que se encuentran los mapuches, sería tal vez la ocasión más propicia y única para poner en práctica esta idea"[197].

Las organizaciones mapuche seguirán constatando los efectos de las precariedades institucionales sobre el debilitamiento de la defensa jurídica de las tierras. Incluso en 1929, cuando se había declarado terminado el proceso de radicación, promulgado una ley de subdivisión y pronta a desaparecer la institución del Protectorado de Indígenas, el Comité Ejecutivo de la Araucanía (compuesto de la Sociedad Caupolicán y la Federación Araucana) en representación del VII Con-

[196] Protector Arrieta a Inspector, 9 de febrero de 1915, en AHN, Fondo Intendencia de Malleco, vol. 275.

[197] ARNAD, Fondo IGCI, vol. 242, junio de 1919.

greso Araucano realizado en El Llaima, proclama en sus acuerdos su adhesión a la labor del protector de indígenas de Cautín, "pide la creación de otro secretario para el Protectorado de Temuco y la creación de un secretario para el de Osorno"[198].

Las tareas de la traducción:
lenguaraces, porteros-intérpretes y tinterillos

La intercesión de las organizaciones mapuche para reforzar la contratación de funcionarios en los Protectorados muestra que estos dirigentes apostaban a los instrumentos jurídicos-institucionales para la defensa de las tierras, en la medida que se reforzaran las condiciones mínimas de su eficacia. En este sentido, luego de varias décadas de actuación, el Protectorado parece haber sido una institución aceptada y validada por los dirigentes mapuche como aparato de mediación jurídica, social y política. En esta legitimación de la institucionalidad reduccional, fue importante la participación de los mapuche como funcionarios del Protectorado, en el único cargo que tuvieron la posibilidad de actuar como agentes del Estado, el de portero-intérprete[199]. El nombre del cargo muestra desde ya la poca valoración que se tenía del trabajo específico de mediación lingüística en las instituciones públicas, al no establecer la tarea de traducción como dedicación exclusiva de un funcionario, a pesar de que esta era irreemplazable junto a la del abogado protector y el ingeniero. La función de intérprete no constaba en la ley que creó el Protectorado; en cambio, la de portero estaba tipificada, y el cargo existía en las oficinas públicas. En estas circunstancias, debió resultar lógico contratar como porteros a mapuche o chilenos bilingües español-mapudungun que pudieran realizar la doble tarea, como recepcionistas y traductores de los usuarios mapuche que no hablaban castellano. En 1896, el Reglamento de la Inspección General de Tierras y Colonización establece oficialmente el cargo de Intérprete del Protectorado, quien "tendrá las obligaciones que señale el protector de indígenas y prestará también sus servicios ante la Comisión Radicadora"[200].

La traducción en audiencias

Las Memorias de los protectores ponen en evidencia no solo el carácter bilingüe de la mayor parte de las interacciones en oficinas y en el terreno mismo, sino, también, las diferencias de entendimiento y múltiples equívocos producidos por el

[198] Véase Menard y Pavez, "Los archivos del 29...", *op. cit.*, p. 97.

[199] Además de posiciones como la de profesores de escuela o excepcionalmente, de escribiente, donde no participaban en tanto indígenas, sino como profesionales.

[200] Jara, *op. cit.*, p. 61. El cargo es contemplado en la ley de presupuesto de 1897 para la Comisión Radicadora, para un portero-interprete que "sirve también al Protector de Indigenas". Briones, *op. cit.*, 1898, p. 85.

choque cultural y social. Una audiencia era un espacio tensionado por las atribuciones que se arrogaba el funcionario a cargo y por la desconfianza de los mapuche hacia la institucionalidad chilena. Aun cuando el protector era en rigor el responsable de aconsejar, proteger y acoger los reclamos con la finalidad de evitar abusos, en tanto tutor legal del mapuche considerado bajo el principio jurídico de "menor" o "miserable", la comunicación de las partes fue todo menos fluida. El diálogo de la audiencia con Juan Epulef, que reproduce el protector Carlos Iribarra en su Memoria del año 1907, es un ejemplo notable de incomprensión mutua de las partes, incluso con "un indio que posee el español"[201]. En este intercambio, realizado sin la mediación de un intérprete, se percibe que las dificultades de comunicación no afectan solamente la pertinencia y transmisión eficaz de la información, sino que, también, generan asperezas en el diálogo y recriminaciones de quien se siente en posición de autoridad para definir el marco y las dinámicas comunicativas que impone a un reclamante mapuche infantilizado por este tutor legal. Este diálogo grafica, también, toda la serie de problemas que se presentaron al momento de judicializar la defensa de las tierras de los mapuche, en la medida que sus formas de ocupación, uso, demarcación, propiedad y herencia de la tierra no correspondían a los cánones del derecho occidental. Es a todo esto que hay que sumar el problema de la traducción estrictamente lingüística, considerando que la mayoría de la población mapuche no hablaba castellano[202]. En este contexto, la actuación del intérprete bilingüe podía, incluso, contribuir a allanar estas diferencias y equívocos, haciendo las veces de "explicador" a las partes dialogantes. Esta actividad de mediación "técnica" (jurídica, geográfica, sociológica, y también lingüística) probablemente más común de lo que los documentos expresan, debía comenzar desde el ingreso del indígena a la oficina del Protectorado, y prolongarse durante toda la audiencia, con toda suerte de interrupciones por la gran cantidad de reclamos que se atendían a diario. El monolingüismo de cada parte hacía que los intérpretes fueran figuras claves en las audiencias, recibiendo a los demandantes, interpretando oralmente los diálogos, explicando términos y conceptos, haciendo entender formalismos, gestiones y plazos institucionales y jurídicos, y mediando entre las expectativas de unos y otros. De estas dificultades y sus amargas consecuencias da cuenta un informe

[201] Carlos G. Irribarra, *Memoria del Protectorado de Valdivia para el año 1908*, en este volumen, pp. 295-299.

[202] Los informes de principios del siglo XX no coinciden en cuanto a la demografía mapuche; mientras el protector Eulogio Robles la evalúa en setenta mil individuos (*Memoria para el año 1902*), el Censo practicado en 1906 establece la existencia de ciento un mil mapuche (Censo 1907), y hacia 1925 la Sociedad Caupolicán la estima en ciento cincuenta mil mapuche (Foerster y Montecino, *op. cit.*). Además, se percibe un gran desconocimiento respecto a la situación sociolingüística en el territorio, resulta incierta la penetración del castellano y poco se sabe de la vigencia del bilingüismo. El protector Robles, por ejemplo, señala en 1905 que "tres cuartas partes [de los indígenas] hablan español", pero dos años después, en 1907, baja su estimación a un 40% (*Memorias para el año 1905* y *1907*), lo que demuestra la irregular percepción que se tenía de los usos lingüísticos y también que las dificultades de comunicación se fueron imponiendo como evidencia a partir de la práctica misma de las tareas del Protectorado.

solicitado por el protector Robles al juez Juan Parga de la Corte de Apelaciones de Concepción, donde el magistrado expresa que "con motivo de una visita extraordinaria practicada en el juzgado de Temuco":

> "No me sería posible dar a V. S. Iltma, una idea exacta de las condiciones deplorables en que se encuentran los indígenas en lo que se relaciona con la administración de justicia, y lo que es peor todavía, el régimen actual creado por nuestras leyes y disposiciones administrativas, no ofrece medios de cambiar esa situación [...] y porque el indígena no entiende la jerga judicial de los tiempos de don Alfonso el Sabio y no comprende qué cosas son autos de estrados, emplazamientos, rebeldías y contumacias; no conociendo el español, se pronuncia en su contra una sentencia con todos los requisitos que enseña el formulario, la cual sentencia lo condena, según los casos, ora a entregar sus bienes, ora a presidio y a sufrir azotes o a muerte sin defensa cierta y positiva. Esto sería un sarcasmo si no entrañara una evidente iniquidad"[203].

En este contexto, a pesar del carácter subordinado de sus funciones, el cargo de portero-intérprete se volvió de absoluta necesidad, y repetidamente las memorias dan cuenta de quejas por la carencia de estos profesionales o la mezquindad de sus remuneraciones. Estas tensiones y contradicciones fueron también vividas por los propios intérpretes que, formando parte de la sociedad indígena, operaban como agentes del Estado. Si bien sus voces no son audibles en las Memorias, sus ausencias, renuncias, las quejas de los Protectores y el poco reconocimiento oficial de su labor expresan bien el hecho de que el cargo, aunque daba prestigio, no generaba toda la proyección laboral o estabilidad profesional y material, deseable para los mapuche[204]. Esto porque, a pesar de su importancia como condición básica de realización de la tarea de protección jurídica de los mapuche y sus tierras, la función de portero-intérprete del Protectorado, ocupaba el último escalafón de remuneraciones en la administración (entre 1907 y 1912 pasa de 600 a 820 pesos anuales), bien por debajo de los agentes judiciales y escribientes (1.200 pesos) (ver cuadro 3). No sólo los sueldos eran comparativamente bajos, afectando la posibilidad de retener a los buenos intérpretes o conseguir sus reemplazos; tampoco se tramitaban diligentemente esos reemplazos, de manera que los reemplazantes no recibían sus sueldos y los Protectores tenían que adelantar esos pagos de sus propios bolsillos.

[203] Eulogio Robles, *Memoria del Protectorado del Cautín para el año 1902*, en este volumen, p. 229.

[204] Ha sido hasta la actualidad muy irregular la valoración del factor lingüístico en la administración de justicia y otras instancias del Estado, en países plurilingües. Cf. para el caso chileno actual Daniela Delgado y Elsy Curihuinca, "Interculturalidad en juicio: el derecho del indígena a comunicarse en su propia lengua", en *Vivat Academia* , vol. 118 (Madrid, 2012), pp. 61-75 y Fabien Le Bonniec y Pamela Nahuelcheo, "La mediación lingüístico-cultural en los tribunales en materia penal de la Araucanía", en *Revista de Llengua i Dret/ Journal of Language and Law,* vol. 67 (Barcelona, 2017), pp. 279-293.

La importancia, recurrencia e intensidad del trabajo de mediación realizado por los porteros-intérpretes, puede dimensionarse a partir de las audiencias presenciales otorgadas por los protectores a los solicitantes y reclamantes mapuche. Los protectores son bastante precisos respecto a las audiencias en sus Memorias, lo que muestra que se trataba de una carga importante de su trabajo. Por ejemplo, el protector de Valdivia señala en 1907:

> "Hay meses, de Setiembre a Enero inclusives, en que se oyen hasta diez y quince reclamos [...] por día [...] en que cada reclamante ocupa, como término medio, treinta minutos de la audiencia diaria. Muchísimos absorben hasta una hora y media"[205].

Lo que significa de cinco a quince horas de audiencia bilingüe por día. Las audiencias son también intensas ya que es necesario traducir a varios participantes, como recuerda el mismo Irribarra:

> "Durante el año de 1908 esta oficina ha oído 407 reclamos que significan audiencias para más de 500 personas, por cuanto a un solo reclamo concurren a veces hasta 3 y más individuos"[206].

Respecto a las audiencias, lo extenso de la jurisdicción, la gran variedad de problemas que se abordan, el amplio papel del protector y las dificultades de entendimiento encontradas, el protector de Cautín en 1913, Eleazar Bravo, comenta:

> "A estas atenciones he dedicado hasta hoy tres a cuatro horas diarias. Generalmente, todos los indígenas acuden al Protector en todos sus actos de alguna importancia: los divorciados, los que desean construir una casa, casarse con arreglo a la ley, ausentarse a la Argentina, hacer un cierro; en fin, hasta recoger el producto de un manzano. El Protector de Cautín es de hecho juez, parte, abogado, consejero, comisionista, depositario, gestor administrativo, en una palabra, tiene por clientela 40.000 indígenas difíciles de entender, y a cuya Oficina acuden diariamente 80 a 100 a quienes en una audiencia o dos podría arreglar definitivamente si tuviera atribuciones para ello. Las consultas son numerosas y aumentan a diario, a medida que van adquiriendo el conocimiento de que el infrascrito los sirve en buena forma y cuando no le es posible atender sus asuntos judiciales, les recomienda defensores honrados a quienes, si no puedo dirigir, al menos fiscalizo, aunque sea de lejos"[207].

Entre 1907 y 1913, varios protectores cuantifican su trabajo en relación con los reclamos mapuche recibidos en audiencias y los comparendos efectuados

[205] Carlos G. Irribarra, *Memoria del Protectorado de Valdivia para el año 1907*, en este volumen, p. 299.
[206] Carlos G. Irribarra, *Memoria del Protectorado de Valdivia para el año 1908*, en este volumen, p. 324.
[207] Eleazar Bravo, *Memoria del Protectorado de Cautín para el año 1913*, en este volumen, p. 503.

(véase cuadro n.º 4). Se puede suponer que una mayoría de estas atenciones requerían de la presencia activa del portero-intérprete.

Cuadro n.º 4
Reclamos y comparendos en audiencias otorgadas a solicitantes mapuche en los protectorados de Malleco, Llanquihue, Valdivia y Arauco (1910-1914)

Audiencias	Malleco 1910	Malleco 1911	Llanquihue 1911	Valdivia 1913	Malleco 1913	Arauco 1914
Reclamos	316	415	423	425	463	233
Comparendos	21	42	67	–	3	–

Fuente*: Memorias de los Protectores de Indígenas* (Manuel Oñate 1911; Javier Arrieta 1912; Daniel Cerda 1911; Javier Arrieta 1914; Fernando Muñoz 1914)

Como recuerda el protector Irribarra, al menos un tercio de estos reclamos se materializan en demandas judiciales, y la mitad de estas exige la elaboración de documentos dirigidos a la Inspección de Colonización, la Comisión Radicadora, los jueces letrados y las Cortes[208]. El protector Muñoz, por su parte, da un detalle del contenido de los doscientos treinta y tres reclamos que atendió en Arauco, de los cuales ciento veinte piden "separadamente se les entregue los pedazos de suelo que les corresponde según los Títulos de Merced"; otros cincuenta son:

> "En contra de caciques y caciquillos que ocupan mayor extensión de terrenos que lo que les corresponde llevando a las hijuelas gente extraña a las reducciones como arrendatarios o medieros";

unos diez "Por infracción a la ley de Reclutas i Reemplazos"; veinte "Pidiendo radicación y se les conceda Título de Merced 20" y, finalmente, cincuenta y tres "por otras causas que sería muy largo detallar"[209].

Las Memorias no ofrecen relatos precisos del trabajo del intérprete, aunque la importancia de su papel es implícita cuando un protector señala que tiene una "clientela" de cuarenta mil indígenas "difíciles de entender". Esta dificultad variaba según el grado de conocimiento del castellano de los mapuche, desde el monolingüismo en mapudungun hasta un bilingüismo funcional, pero insuficiente para situaciones jurídicas complejas, a lo que podrían sumarse otros problemas como la oportunidad de la atención, la intervención de terceros, la edad de los usuarios, o las variantes dialectales[210].

[208] Carlos G. Irribarra, *Memorias del Protectorado de Valdivia, para los años 1908* y *1914.*

[209] Fernando Muñoz, *Memoria del Protectorado de Arauco para el año 1914*, en este volumen, p. 492.

[210] Sobre el papel de los intérpretes en la actual administración de justicia, véase Gertrudis Payàs y Fabien Le Bonniec, "El dilema lengua/cultura en la práctica actual de la interpretación de tribu-

Bilingüismo y política mapuche

La traducción mapudungun-castellano, sus complejidades, sus agentes y sus funciones y efectos socio-políticos tienen una larga historia en el Ngulumapu[211], y es en esa historia que se inscribe la de los porteros-intérpretes institucionalizados en el Protectorado de Indígenas y en la Comisión de Radicación. Aunque precaria, esa institucionalización se puede considerar como la primera posición estatal en la que los mapuche y chilenos mapuchizados son considerados como funcionarios públicos, por el conocimiento etnológico que ofrecen (la lengua) lo que no es el caso para los profesores mapuche, que son contratados en las escuelas públicas para enseñar en castellano y en contexto multiétnico. Esta posición institucional será, entonces, ocupada tempranamente por sujetos cuyos familias ya estaban desde antes vinculadas a las tareas de mediación socio-lingüística en la frontera.

La figura del portero-intérprete, la importancia política de la traducción y la intensidad de su trabajo de mediación, entroncan con el papel que desempeñaron en los siglos precedentes los antiguos *lenguas generales* en los parlamentos, y otros cargos de mediación como los funcionarios "de indios amigos" en las distintas parcialidades donde operaban en el periodo colonial y también en el siglo XIX republicano. Para comprender la adopción temprana del bilingüismo por algunas renombradas familias mapuche, es necesario remontarse, en primer lugar, al sistema colonial de los "caciques gobernadores" indígenas, cuya lealtad a la corona hispana estaba asociada al pago de un sueldo y a la entrega de "bastones de mando", institución de alianzas que se prolonga durante varias décadas en el periodo republicano[212]. A estas figuras hay que agregar las de los "caciques embajadores" instalados por algunos años en Santiago en el siglo XVIII[213], las embajadas o viajes a la capital que seguirán practicándose en el siglo XIX y XX, y las secretarías indígenas a cargo de los archivos y la correspondencia epistolar

nales en la Araucanía", en Caroline Cunill y Luis M. Glave T. (coords.), *Las lenguas indígenas en los tribunales de América Latina: intérpretes, mediación y justicia (siglos XVII-XXI)* (Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2019).

[211] Cf. Gertrudis Payàs y Carmen Gloria Garbarini, "La relación intérprete-mandante: claves de una crónica colonial para la historia de la interpretación", en *Onomazéin*, vol. 25 (Santiago, 2012), pp. 345-368; Gertrudis Payàs, José Manuel Zavala y Mario Samaniego, "Al filo del malentendido y la incomprensión: el Padre Luis de Valdivia y la mediación lingüística", en *Historia*, n.º 45, vol. I (Santiago, enero-junio 2012), pp. 69-90

[212] Gabriel Guarda, "Los caciques gobernadores de Toltén", en *Boletín de la Academia Chilena de la Historia*, vol. XXXV, n.º 78 (Santiago, 1968); Leonardo León, *Apogeo y ocaso del Toqui Ayllapangui de Malleco, Chile. 1769-1776* (Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana/ LOM Ediciones, colección Sociedad y Cultura, 1999), vol. XVIII; Rolf Foerster y Fernanda Villarroel, "Los hermanos Budaleo como caciques gobernadores del Ayllarehue de Arauco y las transformaciones del Pacto Colonial (1820-1889)", en *Cuadernos Interculturales*, vol. 6, n.º 11 (Valparaíso, 2008), pp. 146-171.

[213] José Manuel Zavala, *Los mapuches del siglo XVIII. Dinámica interétnica y estrategias de resistencia* (Santiago, Ediciones de la Universidad Bolivariana, 2008).

entre mapuche y *wingka*[214]. Todo ello muestra la importancia del manejo del idioma castellano por las jefaturas mapuche, con el fin de facilitar el entendimiento y la negociación con la sociedad hispano-criolla, y en especial por las sospechas y aprensiones que pesaban sobre el actuar y los intereses de misioneros, "capitanes de amigos" y lenguaraces. Precisamente estas tres categorías de personajes, que fueron mediadores clave en las dinámicas fronterizas hispano-mapuche y criollo-mapuche, son las que tenderán a eclipsarse en el periodo reduccional con las instituciones de la radicación. Aunque, como en todo este proceso, quedarán sobreviviendo ciertos anacronismos en las nuevas instituciones o, más bien, diferentes temporalidades paralelas, donde antiguas instituciones se verán actualizadas en el proceso histórico.

En ciertas familias de *longko* y *ülmen*, miembros de varias generaciones habían adquirido el idioma castellano, y los *longko* eran más proclives a la educación formal de sus hijos en escuelas públicas o misionales, transformándose los pupilos, tras los años de instrucción, en asistentes de sus padres y agentes activos en cuestiones políticas primero y jurídico-administrativas después. De este tipo de familias provinieron muchos intérpretes bilingües y también muchos dirigentes de las organizaciones mapuche de la primera mitad del siglo xx como la Sociedad Caupolicán, la Federación Araucana o la Unión Araucana. Las familias Melin de Purén, Coñuepan y Painemal de Cholchol, Urrutia de Temuco, los Melivilu y Painevilo de Maquehue, Manquilef de Metrenco, Chihuailaf de Cunco, Neculman de Boroa, Paillalef de Freire, Aburto de Loncoche, Millanao de Villarrica, y varias decenas más constituyeron tempranamente una élite letrada del pueblo mapuche que se movía holgadamente entre las formas pre y posreduccionales de organización social[215].

La élite de los llamados entonces "araucanos civilizados" (empresarios y profesionales)[216], letrada y bilingüe, tendrá mayor facilidad que la gran mayoría del campesinado mapuche para relacionarse con las instituciones reduccionales como el Protectorado de Indígenas, la Comisión Radicadora, la Inspección General y el Ministerio de Colonización, y también prolongará la antigua práctica de viajar a Santiago a solicitar audiencias con el Presidente de la República y sus ministros[217]. Mientras que la gran mayoría de mapuche necesita intérpretes y agentes parajudiciales (los llamados "tinterillos") para transmitir sus demandas, algunos jefes de reducciones tendrán la capacidad de escribir y firmar sus reclamos, por ellos mismos o apoyados por otros mapuche letrados, evidenciando

[214] Pavez, *Cartas mapuche...*, *op. cit.*; Julio Vezub, *Valentín Saygüeque y la "Gobernación Indígena de las Manzanas". Poder y Etnicidad en la Patagonia Septentrional (1860-1881)* (Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009).

[215] Guevara, *Las últimas familias...*, *op. cit.*; Robles, *op. cit.*; Foerster y Montecino, *op. cit.*; André Menard y Jorge Pavez (eds.), *Mapuche y anglicanos. Vestigios fotográficos de la Misión Araucana de Kepe* (Santiago, Ocholibros, 2007); Pavez, *Laboratorios etnográficos...*, *op. cit.*; Joanna Crow, *The Mapuche in Modern Chile. A Cultural History* (Gainesville, University Press of Florida, 2013).

[216] Anuario comercial de Cautín 1905, en Pinto, *Conflictos étnicos...*, *op. cit.*, p. 80.

[217] Pavez, *Cartas mapuche...*, *op. cit.*

así la penetración de las prácticas letradas en castellano en ciertos sectores de la sociedad mapuche.

Intérpretes lenguaraces

Desde los primeros encuentros hispano-mapuche la valoración de los intérpretes, conocidos como "lenguas" o "farautes", fue ambigua: indeseables y muchas veces considerados culpables de fracasos militares y traiciones, eran, sin embargo, indispensables para las tratativas de paz[218]. En el siglo XIX, la denominación más común del mediador lingüístico es la de lenguaraz y su lugar de acción se va desplazando desde los parlamentos o *trawun* (juntas) interétnicos hacia las oficinas ejecutivas o judiciales del Estado. Hacia mediados del XIX, una nota del intendente de Arauco habría dado origen al decreto del 2 de junio de 1856 sobre la necesidad de validar los poderes notariales otorgados por indígenas, porque:

> "Careciéndose en esos pueblos de hombres que conozcan el idioma indígena, los especuladores llevan consigo lenguaraces aleccionados que trasmiten a los escribanos públicos conceptos distintos de aquellos que el indio emite, pero que están en armonía con los intereses del especulador de mala fe"[219].

La figura del lenguaraz orbitando en torno a las instituciones de la radicación y las connotaciones ambivalentes sobre su función de mediación socio-político-lingüística aparecen a principios del siglo XX en la descripción que hace el protector Robles de uno de los más famosos lenguaraces de la época, Celestino (Chelle) Burgos, al que presenta como un "simpático mestizo":

> "Ya en espera con el objeto de servir de testigo, ya en trajines para conducir ante la justicia a individuos que deberían declarar en pleitos en que con frecuencia se promueven y enmaraña a los indios, Chelle Burgos revoloteaba continuamente por los juzgados, y no sólo tales trabajos pesaban sobre sus hombros, sino que también contribuía a las tareas judiciales 'pasando la lengua'[220], esto es, sirviendo de intérprete en los litigios en que estaban complicados intereses mapuche y en los procesos criminales seguidos contra ellos. Chelle Burgos no era *re-mapuche*, indio puro, sino *champurria*, mezcla de europeo y de araucano, tal como lo delataba su aspecto: bajo de estatu-

[218] Parentini, *op. cit.*; Fernando Ulloa Valenzuela, *¿Mapuchización o erradicación? Trayectorias familiares y territoriales de capitanes de amigos y lenguaraces en Araucanía, 1825-1927*, tesis para optar al grado de Magíster en Historia (Santiago, Universidad de Chile, 2021).

[219] Nota del Intendente de Arauco, fechada en Los Ángeles, 11 de abril de 1856, en Donoso y Velasco, *op .cit.*, p. 53

[220] Eulogio Robles usa aquí la traducción literal del *mapudungun rülpazugufe*: "el que pasa la lengua".

> ra, grueso y de poca barba, como la generalidad de los indígenas, pero de ojos verdes y de cutis claro. Como nadie está libre de 'pelambres' o sea, de habladurías mal intencionadas, Chelle fue víctima de muchos de ellos, pues murmuraban algunos de sus coterráneos que se creyeron perjudicados con su intervención que no siempre era exacto en sus declaraciones, sino que variaba los hechos con la mira prudente de no echarse encima la mala voluntad de la contraparte, sobre todo, si tenía con ella relaciones de amistad, o con el propósito muy humano de obtener alguna ventaja material y no lo incluían entre los *kumeke tuwunche,* es decir entre la gente de buena procedencia, de clara estirpe, que jamás obscurece la verdad ni mancha los labios con la mentira; pero es de advertir que no toda la fama pública se contaminaba con esta opinión desfavorable, porque oímos más de una vez defenderlo enérgicamente de tales 'pelambres' "[221].

El lenguaraz Chelle Burgos era para entonces el último descendiente de una familia de lenguaraces en la que destacó el antiguo Rafa Burgos, quien fuera intérprete en el conocido Parlamento de Tapihue de 1825[222]. El nombre español indica que en algún momento este linaje se emparentó con agentes hispano-criollos, pero además que en el caso de Chelle Burgos, se trata de un champurria o mestizo, es decir, que, a pesar de su tradición familiar en el oficio de mediación, el personaje no es reconocido como estirpe re-mapuche y, por lo tanto, su palabra puede ser cuestionada.

La cuestión del mestizaje, que afectaba a muchos de los lenguaraces fronterizos identificados como *champurria*, es decir, hijos de mapuche y *wingka*, parece haber sido un factor que los ponía en algún momento bajo sospecha de ambivalencia en sus intereses. No tenemos claro en qué momento se empieza a construir esa imagen, pero es posible que tenga que ver con las lógicas de ocupación territorial chilena en el siglo XIX y los enfrentamientos entre parcialidades que esta desató. Además, es importante destacar que los mestizos tenían un acercamiento privilegiado al bilingüismo, al ser generalmente hijos de mujeres chilenas, las *chiñurras* ("señoras") cautivas casadas con *longko* polígamos, por lo que adquirían el castellano como lengua materna. Durante el periodo colonial hispano, *chiñurras* y *champurrias* mapuchizados gozaban de cierto estatus en la sociedad mapuche, pero en la segunda parte del siglo XIX, debido a la política de conquista impulsada por el Estado chileno y el consecuente cierre etnorracial de la sociedad mapuche, cayó sobre estos la desconfianza.

La tendencia de los lenguaraces a ampliar el sentido de la traducción hacia una mediación más propiamente política o atravesada por conflictos de interés, es comentada por el ingeniero Soto al protector Irribarra, a quien señala que ha optado por preparar un léxico para su uso en las comisiones de ingeniería

[221] Robles, *Costumbres...*, *op. cit.*, pp. 113-114.
[222] Ulloa, *op. cit.*

que efectúa en las reducciones, a fin de no ser burlado por el intérprete y, en el fondo, tener mayor control sobre la interacción.

> "He confeccionado, señor Protector, una cartilla del dialecto araucano, con las palabras y frases que mas directamente se relacionan con mi trabajo, para darme a entender entre ellos, porque hay reducciones de indios, lejanas de centros civilizados, que desconocen por completo nuestro idioma. Anteriormente, me entregaba a los buenos servicios del lenguaraz, tipo del indio valiente, astuto y sobre todo embustero, que no se conforma con traducir lo que oye, sino que inventa y concluye por poner en boca de otro, lo que él piensa, haciéndose indispensable llamarlo al orden por medio de los Carabineros y que traduzca corto y al pie de la letra. Estos inconvenientes se remedian con la cartilla"[223].

La preocupación del ingeniero revela así la frustración del agente de Estado al no poder controlar al intérprete y sus intereses personales (o los que él representa). Por otra parte, muestra que la falta de estandarización de la traducción favorece y fortalece el papel de mediación política e, incluso, judicial de los lenguaraces y tinterillos mapuche, especialmente los que actúan en forma independiente o paraestatal, sin ser institucionalizados.

Intérpretes en la Comisión Radicadora de Indígenas

La Comisión de Radicación, que inicia sus funciones en 1884, fue la primera institución burocrática que subordina la tarea de traducción al aparato ideológico de Estado jurídico. Uno de los intérpretes destacados que asume el cargo en esos primeros años fue Manuel Antonio Neculman (1888-1889), quien había ejercido como profesor de la Escuela n.º 1 de Angol, y como lenguaraz de Gregorio Urrutia en la última avanzada militar chilena sobre los territorios del Cautín (1883-4884)[224]. Neculman volverá después a trabajar como profesor, en la Escuela n.º 1 de Temuco, y participará como fundador y primer presidente de la Sociedad Caupolicán (1910-1915).

La Comisión compartió el intérprete con el Protectorado de Indígenas hasta cerca de 1900, cuando pudo contar con intérprete propio, por la gran cantidad de solicitudes que tenía que atender. En ese cargo destacaron dos porteros intérpretes y un escribiente mapuche. Felipe Reyes Millan, "de nombre español pero araucano de estirpe"[225], emparentado a los Ñamko de Boyeco, quien apren-

[223] Informe de ingeniero Leónidas Soto, en Carlos G. Irribarra, *Memoria del Protectorado de Indígenas de Valdivia para el año 1911,* en este volumen, p. ??.

[224] Gamboa y González, *op. cit*., pp. 60-61.

[225] Tomás Guevara, *Folklore araucano: refranes, cantos, procedimientos industriales, costumbres prehispánicas* (Santiago, Imprenta Cervantes, 1911), p. 5.

dió a leer y escribir en castellano en la escuela misional capuchina de Temuco y figura como intérprete del juzgado de letras de Temuco en 1888, oficiará como intérprete en la Comisión (circa 1900 hasta 1906), año en que es traspasado al mismo cargo en la Oficina de Mensura de Tierras. En 1914, Felipe Reyes consigue una beca de estudios superiores para su hijo Ramón Reyes, quien había estudiado con Tomás Guevara en el Liceo de Temuco. En 1906, Felipe Reyes es reemplazado en la Comisión Radicadora por Pedro Juan Melin quien actuará como intérprete oficial de la Comisión hasta al menos 1918[226]. Este intérprete provenía de una conocida familia abajina que se vinculó tempranamente con la República. Sus parientes antiguos Domingo Melin y su hijo Fermín Alejo Melin, descendientes del *longko* Meliñamku, fueron enviados a estudiar con los *wingka*, el primero a la misión de Nacimiento y el segundo en la Escuela Normal en Santiago[227]. Ambos, por lo tanto, leían, escribían y eran bilingües mapudungun-castellano. Domingo Melin heredó la jefatura de familia, hasta que es asesinado en 1880. Fermin Alejo Melin por su parte, fue escribiente e intérprete de la gobernación de Angol hacia 1870. Ambos murieron asesinados en 1880 por militares chilenos[228]. Tanto Felipe Reyes como Pedro Juan Melin provienen, entonces, de familias con dos generaciones al menos de parientes alfabetizados en escuelas, y cercanas a los agentes estatales chilenos. Y ambos se mantuvieron por más de una década como porteros-intérpretes.

Intérpretes en el Protectorado de Indígenas de Cautín

En los textos oficiales y personales del protector Robles, se encuentran diversos indicios sobre su trabajo con intérpretes mapuche y mestizos. Manuel Morales, por ejemplo, había oficiado como intérprete en el Juzgado de Temuco en 1888 y 1889[229], y es probablemente en ese juzgado donde conoció a Robles cuando este último actuaba como juez letrado. En marzo de 1902, Morales reemplaza a Juan Bautista Urrutia Loncon por licencia médica. Al mes de julio aún no se le ha pagado sueldo y el protector ni siquiera ha obtenido respuesta respecto a su contratación[230]. Urrutia Loncon volverá a ocupar su cargo de portero-intérprete

[226] ARNAD, Fondo MINREL vol. 1304, 21 de febrero de 1907; AHN Fondo Intendencia de Cautin, 1916-1918

[227] Guevara, *Las últimas familias...*, *op. cit.*, pp. 36-37.

[228] Pavez, *Cartas mapuche...*, *op. cit.*, pp. 68-69 y *Laboratorios etnográfico...*, *op. cit.*

[229] Causa Civil del Primer Juzgado de Letras de Temuco, rol n.° 00284, caja 2 (en el que se le acusa de no traducir fielmente), n.° 00283, caja 4, n.° 00271, caja 4, n.° 00270, caja 2, n.° 00461, caja 4, n.° 0052, caja 2, n.° 00343, caja 2, en Archivo de la Araucanía (en adelante ARA). Es posible que se trate del que fuera conocido como Mozo Morales, lenguaraz de Painemal junto a quien se sumó como capitán a las tropas de Gregorio Urrutia en la ocupación de Temuco (década de 1880). Cf. Guevara, *Las últimas familias...*, *op. cit.*, p. 162.

[230] Robles a Inspector, 6 de marzo de 1902 y 11 de julio de 1902, en ARNAD, Fondo IGCI, vol. 44.

en el Protectorado de Cautín, donde permanecerá al parecer hasta 1906. En 1910, en una carta a Rodolfo Lenz, el protector Robles tiene elogiosas palabras para el joven intérprete mapuche:

> "Sentí mucho la pérdida del antiguo [intérprete], un joven Urrutia Loncon, que tenia sed de aprender y que después de fatigarse todo el día en la Oficina, se hacia el tiempo para asistir a una escuela nocturna. Encontró poco el sueldo y yo pude, después de algunas peleas con la Comisión Radicadora, conseguir se le diera una buena hijuela y hoy trabaja en el campo con éxito"[231].

Antes de la escuela nocturna de Temuco, Urrutia se había formado en la Misión Araucana de Quepe, y cuando trabajó con Robles, lo apoyó en tareas etnográficas como traductor, pero también como secretario, al registrar los cantos chamánicos en la visita a un machitún, documentado por el mismo protector en 1907[232]. El retiro de Urrutia al campo durará algunos años, sin embargo, en 1913 aparece nuevamente contratado como portero-intérprete en el Protectorado de Cautín, y en 1917 pasa al cargo de escribiente en el mismo Protectorado, bajo la dirección del protector Francisco Mozó[233].

Al igual que Morales, el intérprete José Manuel Huento se había incorporado al aparato público como intérprete del Juzgado de Letras de Temuco a fines de 1880[234]. Hijo del cacique antiguo Antonio Huento de Temuco, Huento entra al Protectorado de Cautín en 1906, donde trabajará como portero-intérprete hasta al menos 1910. Sobre él escribe Eulogio Robles: "El intérprete oficial del Protectorado es hombre de alguna edad y no me sirve de nada en mis investigaciones"[235]. Sin embargo, el mismo Robles menciona a José Manuel Huento en al menos dos artículos etnográficos, como informante de historias vividas por su padre[236].

Poco después del nombramiento de Urrutia Loncon como escribiente, en diciembre 1917 el protector Mozó contrata como portero-intérprete a Antonio Catrileo, quien ya en 1874 oficiaba de intérprete juramentado en el Juzgado de Angol[237]. La familia Catrileo es una antigua familia de *ülmen longko* y a principios del siglo XX, destacaba el "cacique civilizado" Juan Catrileo como importante empresario agrícola y miembro fundador de la Sociedad Caupolicán de Temuco. De manera que de cuatro intérpretes que hemos identificado en el Protectorado

[231] Carta de Eulogio Robles a Rodolfo Lenz, Temuco, 30 de abril del 1910, en Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (en adelante UMCE), Fondo Lenz.

[232] Eulogio Robles, "Un machitún", en Eulogio Robles Rodríguez, *Costumbres y creencias araucanas* (Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1940).

[233] AHN, Fondo Intendencia de Cautín, año 1898-1925; AHN Fondo Intendencia de Cautín año 1916-1918.

[234] Donde aparece registrado al menos desde 1889. ARA, Causa civil del Primer Juzgado de Letras de Temuco, rol n° 00343, caja 2.

[235] Eulogio Robles a Rodolfo Lenz, Temuco, 30 de abril de 1910, en UMCE, Fondo Lenz.

[236] Robles, *Costumbres..., op. cit.*

[237] ARA, Primer Juzgado de letras de Angol 1874, caja 2, causa 05.

de Cautín, tres provienen del trabajo en juzgados, y Urrutia Loncon, el más joven, había realizado estudios secundarios, lo que le permitirá ser contratado como escribiente oficial. Además, dos de ellos, Morales y Urrutia, poseen nombres españoles, es decir, son descendientes de familias emparentadas por *lakutun*[238] con autoridades criollas, y los otros dos, Catrileo y Huento, son hijos de connotados *longko*.

Intérpretes en el Protectorado de Indígenas de Valdivia

En 1907, un año después de creado el Protectorado de Indígenas de Valdivia, esta oficina aún no cuenta con intérprete ni escribiente oficiales. El protector Carlos Irribarra se apoya en la práctica con el intérprete huilliche Manuel Antipil, quién aún no ha sido contratado. El Inspector de Colonización le escribe al ministro de Relaciones Exteriores y Colonización, acerca de la necesidad de agilizar esta contratación como condición indispensable del funcionamiento del Protectorado:

> "Para poder desempeñar el puesto i cumplir las obligaciones que le están encomendadas es indispensable el intérprete para comunicarse con los indígenas. Sin embargo, esta necesidad tan evidente no ha merecido la atención de los poderes públicos. Con la esperanza de ser nombrado presta sus servicios a mérito como intérprete el indígena Manuel Antipilo, pero como estas esperanzas amenazan desvanecerse, Antipilo desea retirarse de la oficina"[239].

Antipil solicita, entonces, un aumento de sueldo de treinta a cuarenta pesos mensuales[240], ante lo cual el protector propone que el Estado lo contrate como portero-intérprete y a la vez "mozo" (que hace tanto tareas de aseo de oficina como de ayudante en salidas de terreno). El protector Irribarra argumenta al Inspector que en vez de tener que pagar ochenta pesos en dos empleados diferentes, le pague sesenta pesos a Antipil quien se encargaría de las tres labores.

Esta fórmula buscaba formalizar contractualmente la pluralidad de funciones que se esperaba de los mapuche como portero-intérpretes, guías, baqueanos, mozos o alarifes, cuando el Protector de Indígenas realizaba salidas a terreno, para visitar una comunidad, una jefatura, una ceremonia o una reunión política. La multiplicidad de roles y tareas encomendadas a los mediadores recuerda tam-

[238] Félix de Augusta define *laku* como: "el abuelo paterno y también los nietos del mismo; el tocayo" y la práctica del *lakutun* como "darse regalos mutuos dos tocayos para celebrar su amistad". Véase fray Félix José de Augusta, *Diccionario mapudungún-español. Español-mapudungún* (Temuco, Ediciones UC Temuco, 2017).

[239] Inspector a Ministro, 26 de marzo de 1907, en ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1304.

[240] Para entonces, Antipil (también mencionado como Antifilo) aún no tiene su nombramiento oficial. El protector Ibarra señala que el mismo ha "estado pagando este sueldo que luego cobraré con viáticos y demás". ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1304, julio de 1907.

bién la de los antiguos personeros coloniales, como capitanes de amigos y lenguaraces, tratándose en este segundo caso, no solo de traductores, sino, también, de negociadores, conocedores de caminos, vados y rutas, diplomáticos fronterizos, mensajeros confidenciales, avivadores de intrigas y supervisores en terreno. De manera que, además de sus exigentes tareas de mediación, la agotadora movilidad geográfica y la precariedad de su posición en la administración pública, destacan algunos personajes que se "especializaron" en estas funciones, circulando incluso entre diferentes instituciones estatales.

En muchos casos, los porteros-intérpretes no pasarán de algunos años en el cargo. El citado Manuel Antipil durará tres años en el Protectorado de Valdivia, ya que 1910 es contratado en su reemplazo el joven Manuel Aburto Panguilef, quien había estudiado en la Misión Araucana de los anglicanos en Quepe, recibiendo luego formación en teología para convertirse en misionero. Hacia 1914, Aburto Panguilef será reemplazado en el Protectorado de Valdivia por Guillermo Jaramillo Valle, quien luego de un par de años en la función, se retira en julio de 1915, y es reemplazado por José Tripaillante. La familia Jaramillo Valle de Villarrica, al igual que la familia Aburto de Loncoche, recibieron sus nombres por *lakutun* con "comisarios de naciones" que actuaron a fines del siglo XVIII y principios del XIX. En el primer caso, se trata del comisario Pedro Jaramillo, hacia 1820, emparentado con Adriano Mera Jaramillo, quien actuó de lenguaraz y baqueano de los viajeros Döll y Treutler en 1859[241]. En el segundo caso, el nombre proviene del *laku* de los españoles Francisco Aburto y su hijo, ambos comisarios de naciones que otorgaron títulos de tierra (los famosos "títulos de comisario") y "bastones de mando" que reconocían la autoridad legítima de los caciques mapuche-huilliche. De manera que en este Protectorado también vemos que participan varios intérpretes huilliche de apellidos españoles, descendientes de familias antiguamente vinculadas al mundo hispano-criollo.

En el Huillimapu, cuando hacia 1936 ya había sido disuelta la institucionalidad de la radicación, el importante memorial al Presidente de la República de los caciques generales mapuche del Futa Huillimapu habían incorporado la figura del lenguaraz e intérprete y representante general de caciques, que firmaba por sí o a ruego de algún cacique general[242]. En ese memorial se inscribe también en mapudungun y castellano una importante reivindicación de los derechos lingüísticos de los "indios-mapuches y descendientes de Valdivia al sur":

> "4º. Para que se nos dé la instrucción amplia que nos corresponde dentro del ejercicio de nuestra vida cívica de ciudadanos: se recabe al señor Ministro de Educación Pública se ordene a las autoridades de la Instrucción Pública, se

[241] Paul Treutler, *La provincia de Valdivia i los Araucanos* (Santiago, Imprenta Chilena, 1861); Ulloa, *op. cit.*

[242] Alcamán, *op. cit.*, pp. 163-164.

> lleve un plan de trabajo más amplio en el orden de la enseñanza primaria, secundaria, profesional y comercial dentro de la región india-mapuche y se envíen miembros de Institución Folklórica a nuestra región para que se estudie el idioma indio-mapuche, y se hagan textos de enseñanza pública en las escuelas fiscales y se enseñe el idioma nativo junto con el castellano y demás idiomas que sean necesarios en la República. Porque no es posible que los padres de la raza chilena olviden su idioma nativo, sus descendientes no lo conozcan, etc. (sic), mientras tanto que los extranjeros y especialmente los alemanes lo conozcan a fondo para explotarnos a su entera satisfacción; los extranjeros jamás olvidarán el idioma de su país, esta misma razón nos induce a pedir respetuosamente que no se borre nuestro idioma, porque es nativo de este territorio"[243].

Los intérpretes tinterillos y el papeleo jurídico-legal

Los archivos del Protectorado, de las intendencias regionales y de la Inspección de Colonización muestran que la iniciativa de algunos mapuche de plantear sus reclamos y demandas dirigiéndolas por escrito a las autoridades (y especialmente al gobierno central) resultaba más eficaz que cuando las demandas que eran formuladas en forma oral en las audiencias presenciales. Sin embargo, esta producción de documentos escritos o firmados "a ruego" por los mapuche generaba también ciertas aprensiones y desconfianza en los propios protectores, por las razones que expone el protector de Valdivia Carlos Irribarra en su Memoria del año 1907:

> "Contamos por cientos en nuestra oficina las solicitudes, en papel sellado o en simple, redactadas i suscritas a ruego por individuos que se ocupan de estafar unos cuantos pesos a los indígenas que concurren al protectorado haciéndoles creer que deben presentarse por escrito. [...] Hemos tenido que arrojar uno por uno a los agentes oficiosos y apoderados que acompañaban a los reclamantes en las audiencias del Protectorado. No es aventurado afirmar que el noventa por ciento (90%) de las solicitudes que llegan al Ministerio de Colonización, sean obra de esos compadecidos. La experiencia nos autoriza a creer que del diez por ciento (10%) restante hay sólo seis con fundamentos atendibles y que las cuatro (4) que quedan son, con raras excepciones, inspiradas por personas que buscan en el indígena al instrumento para alcanzar algo de la exclusiva conveniencia del inspirador. Conviene llamar la atención a la letra y al estilo de esas numerosísimas presentaciones. A veces nos llegan cinco o más solicitudes diversas en petición de informes, que exhiben la misma letra y la misma redacción y firmadas a ruego por un mismo individuo. Idéntico

[243] Caciques generales mapuche del Futa Huillimapu, "Memorandum de Memorial", en *op. cit.*, p. 165.

se observa en las presentaciones al Protector. Si se tuviera cuidado de examinarlas en sus detalles, se tendría el cuadro más decidor de que el ochenta por ciento (80%) de las de la provincia de Valdivia son siempre de puño y letra de las mismas cuatro personas. Igual observación merecen las de Llanquihue. Este dato demuestra que ellas se deben, en su mayor parte, a insinuaciones de terceros que explotan la ignorancia y el bolsillo. Nos consta, por la confesión de los indígenas que estos han pagado hasta veinticinco pesos ($25) por una solicitud de protección en papel sellado presentada a esta oficina. Una continuada propaganda del Protector en contra de esas presentaciones inútiles ha venido concluyendo con ese negocio innoble. Cerradas las puertas de esta oficina a esos libelos, el tinterillaje continúa su comercio explotándolo con el envío de su artículo a las altas oficinas de la capital. Así se explica esa cantidad enorme de peticiones de amparo, etcétera, que llegan a la Moneda sin haber pasado previamente por el Protectorado. De aquí la dificultad del Protector para informar con conocimiento de causa sobre ellas"[244].

Los llamados tinterillos aparecieron en el mundo fronterizo asociados precisamente al despliegue de las lógicas jurídicas y notariales de la legalización de la ocupación y propiedad de la tierra por colonos nacionales. Luego los propios mapuche tendrán que recurrir a ellos para tener defensores en sus reclamos formales. La producción del papeleo jurídico de la frontera hizo proliferar el "tinterillaje", no solo en notarías y tribunales locales sino, también, para la documentación que se enviaba a Santiago. Hacia 1900, se contaban en Temuco veintisiete bufetes de abogados con sus "equipos" de tinterillos[245]. La existencia de estos mediadores jurídicos molestaba a los protectores que veían en ellos un entorpecimiento en el cumplimiento de su responsabilidad de defender a los indígenas. Por eso los reparos del protector Irribarra de Valdivia, que seguía señalando en su exposición:

"¿A qué conduce ese papeleo, ese cambio de notas etc., en estas oficinas públicas cuando las de arriba las envían en Informe a las de abajo? [...] Es ya tiempo que la corruptela deje de tener fuerza de ley de procedimiento administrativo. Pasar por sobre una oficina cuando se trata de asuntos que la ley le encomendó conocer especialmente, importa rodearla de desprestigio, matarle su autoridad moral, a la par que aumentarle inútilmente su labor. Examínese donde está el fin práctico de las solicitudes de amparo etc., que desentendiéndose del Protectorado llevan los indígenas al Ministerio. Si en esta alta repartición se proveyera: 'Ocurra donde corresponda', es seguro que en cortísimo tiempo desaparecerían esas montañas de papel formadas con las presentaciones [...] i se cegaría para siempre una fuente que explotan los tinterillos. Con la

[244] Carlos G. Irribarra, *Memoria del Protectorado de Valdivia para el año 1907*, en este volumen, p. 282.
[245] Bengoa, *op. cit.*, p. 358.

adopción de este temperamento iría desapareciendo además, poco a poco, el espectáculo que anualmente dan con su visita grupos de araucanos en el palacio de la Moneda"[246].

Estas preocupaciones del protector de Valdivia muestran las limitaciones del proyecto proteccionista, en la medida que se sustenta en una ideología de tutela paternalista, vertical y burocratizada de los derechos mapuche. La ideología tutelar reproducía los principios de la doctrina romana e indiana respecto a considerar a los indígenas como personas *miserabilis* o menores, que requerían "tutores" para ejercer sus derechos[247]. Aunque la constatación del negocio de tinterillaje y su condena es relevante, el argumento termina en una defensa corporativa del Protectorado en la cadena de conductos burocráticos regulares, que se justificaría porque al saltarse este aparato de mediación jurídico-administrativa específicamente destinado a ellos, los mapuche estarían fomentando el cuestionamiento estatal a su pertinencia y poniendo en tela de juicio su eficiencia en la resolución de los conflictos de tierra. Pero, además, porque este salto administrativo y geográfico (el viaje a Santiago de documentos y comitivas) reinstala una simetría política bien conocida en la historia mapuche[248], pero contradictoria con la ideología proteccionista de la tutela.

Es importante destacar que la condena de Irribarra, compartida por varios protectores, está dirigida a los tinterillos en su capacidad de producción de documentos, el llamado "papeleo de la frontera". Si bien la práctica de los tinterillos se prestaba a todo tipo de abusos, engaños y extorsión de recursos a los mapuche que creían en ellos, la lógica documental del tinterillaje fue impulsada desde los primeros años de la colonización al sur del Biobío, como estrategia clave para la validación notarial y judicial de las inscripciones de tierras por parte de los colonos chilenos. En ese sentido, el protector tampoco percibe que esta lógica fue apropiada por jefes de reducciones y otros dirigentes en la medida que la documentación escrita (y sellada con timbre y estampillas oficiales) parecía ser la única que otorgaba validez jurídica a sus demandas y reclamos.

De hecho, muchos documentos del Ministerio de Colonización y de la Inspección General de Colonización muestran que efectivamente los aparatos de Estado se movían con más diligencia de arriba hacia abajo, mediados por la documentación sobre la cual las autoridades más altas (ministro o inspector) pedían explicaciones a los protectores. El profesor, escritor, traductor y futuro diputado mapuche, Manuel Manquilef apunta al mismo argumento cuando denuncia "El tinterillaje establecido a firme por el Gobierno":

[246] Carlos G. Irribarra, *Memoria del Protectorado de Valdivia para el año 1907*, en este volumen, p. 282.
[247] Cuena, *op. cit.*
[248] Rolf Foerster y André Menard, "Futatrokikelu: don y autoridad en la relación mapuche-wingka", en *Atenea*, n.º 499 (Concepción, 2009), pp. 33-59.

> "[De] la violación de las leyes, las componendas, robos al Fisco y a los indios se hace responsable al tinterillo. Esta es una falsedad. Los responsables de todo esto son los juzgados, oficinas públicas y demás autoridades que rechazan al abogado honrado y han necesitado de aquellos para que les ayuden a consumar sus malas actuaciones. El tinterillo es mejor que aquellos y no es sino una causa instrumental. Es el Gobierno que ha fomentado los procedimientos tinterillescos y ha necesitado de elementos que se prestaran a ser sus agentes en cuanta injusticia cometiera y que pudieran servir también a los civilizados mandados acá de amparador y defensor de sus latrocinios"[249].

Al reconocer esta apropiación de la lógica del tinterillaje, se percibe que los tinterillos eran de procedencia heterogénea. Algunos pocos chilenos eran movidos por el genuino interés de apoyar a los mapuche, como en el caso destacable de Gerardo Salas, miembro fundador de la Sociedad Caupolicán, y sobre el cual el dirigente Martin Segundo Painemal recuerda:

> "Hablaba en mapuche, y cualquier problema mapuche, el era como intérprete, iba al juez, era como lenguaraz, iba a la Intendencia con los mapuche, era servicial. Había muchos tinterillos que ganaban plata con los problemas de los mapuche, pero ese hombre no, era evangélico y no cobraba, sino que hacía el favor no más"[250].

Otros eran tinterillos mapuche, probablemente sin el mismo ánimo de lucro que tenían los extorsionadores, cosa con la que los protectores no están de acuerdo. Así, por ejemplo, solo en el año 1914, los archivos de los Protectorados constan de cartas de Juan Sandoval, Andrés Manquenahuel, Ignacio Cheuquenao, Alberto Martínez, Domingo Curaqueo, José Segundo Calfio, Francisco Carileo quien escribe en representación de Ignacio Cheuquehuala y doce otros mapuche, Pascual Yaitul y Marcelino Llancau, quienes escriben también telegramas directamente al Ministro. A esto hay que sumar los dirigentes de la Sociedad Caupolicán[251], muy activos en sus presentaciones escritas al Ejecutivo, al Poder Judicial y a la prensa regional, las que muchas veces escriben a máquina[252]. Al ser alfabetizados y tener un buen manejo del castellano, estos demandantes obtendrán mayores consideraciones del aparato jurídico, lo que en sí mismo constituía un incentivo para que otras familias decidieran impulsar el aprendizaje del castellano entre sus descendientes, como necesidad imperiosa para la defensa de sus tierras. Los mapuche letrados que actuaban en forma independiente y con algún conocimiento de la procedimentalidad jurídico-bu-

[249] Manquilef, *¡Las Tierras de Arauco!...*, *op. cit.*, p. 15.

[250] Entrevista a Martin S. Painemal, en Bengoa, *op. cit.*, p. 384.

[251] Manuel Neculman, Basilio García, ambos intérpretes institucionales en su juventud (Neculman lo fue en la Comisión Radicadora y García en el Juzgado de Letras de Temuco).

[252] ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1851, 1914.

rocrática, es decir, los tinterillos mapuche, serán especialmente mal vistos por los protectores, que los acusan de incitar a los mapuche a enfrentarse a la institución y reclamar contra ella, como señala el protector de Llanquihue en su Memoria para el año 1912, que se asemeja bastante a las anteriores críticas de Irribarra:

> "Una palabra mas sobre las reclamaciones que a veces se formulan contra el proceder de esta oficina. Hay un pequeño contadísimo número de indígenas que no poseyendo ya ni una vara de terreno, ni ánimo para el trabajo, han abrazado la profesión de acompañar y dirigir a los indígenas en todas sus diligencias, ya sea en el Protectorado, en la Gobernación, policía, etc. Como explotan a los infelices en forma a veces vergonzosa, el infrascrito ha tomado algunas medidas contra ellos. Son estos los que van a Temuco y Santiago con quejas y reclamaciones contra el infrascrito, y fácil es comprobar, que son siempre los mismos individuos, y nadie mas, y que sus exposiciones son siempre inexactas o sin fundamento"[253].

Se revela aquí la dificultad de la ideología tutelar para ver a los mapuche como sujetos que producen sus propios agenciamientos con el aparato jurídico, siendo siempre vistos como sujetos manipulados o manipulables (por sacerdotes y otros agentes públicos o privados que actúan como tinterillos)[254]. En varios casos, estos tinterillos mapuche también provenían de familias con relaciones más estrechas y antiguas con los misioneros y agentes estatales de la república, las que buscaron en el siglo XIX formar a su descendencia en el bilingüismo, práctica descrita por el rector del Liceo de Temuco, Tomás Guevara, como sigue:

> "Los caciques no resistían la permanencia de sus hijos en los colegios misionales: tenían particular interés en que aprendieran a leer y escribir para que revisaran los documentos originados de sus transacciones. Hasta el día persiste entre los jefes de familia la costumbre de enviar al colegio al hijo mayor para que sea mas tarde un develador o un defensor de las argucias y avidez del leguleyo [...] Lo que se solía hacer por las autoridades civiles y militares creyéndose una gran obra en favor de la cultura indígena, era conseguir el ingreso de algunos hijos de caciques a la escuela normal de preceptores de Santiago. Mas, esta medida no ejercía preponderancia alguna en el adelanto intelectual del araucano, porque estos individuos, excepto uno que otro, volvían a la vida bárbara al ponerse en contacto con los suyos"[255].

[253] José Schwerter, *Memoria del Protectorado de Llanquihue para el año 1913*, en este volumen, p. 511.

[254] Sobre una forma de devenir tinterillo del misionero, véase el caso de Sigifredo de Frauenhäusl en Gabriel Pozo M. (ed.), *Expoliación y violación de los derechos humanos en territorio mapuche. Cartas del padre Sigifredo. Misión de Panguipulli, año 1905* (Santiago, Ocho Libros, 2018), especialmente el capítulo de Fabien Le Bonniec y Marcelo Berho, "El abogado de los indios y la constitución de la propiedad austral en Chile. Relevancia sociojurídica pasada y presente en las cartas del padre Sigifredo de Frauenhäusl", pp. 435-451.

[255] Tomás Guevara, *Costumbres judiciales i enseñanza de los Araucanos* (Santiago, Imprenta Cervantes, 1904), p. 69.

A continuación, Guevara presenta a su antiguo colaborador etnográfico Lorenzo Coliman, de la gran familia *nagche* o abajina de los Colipi, a quien da como ejemplo paradigmático de esta "vuelta a la vida bárbara" del mapuche letrado y bilingüe, mencionando además sus actividades de tinterillo:

> "Lorenzo Coliman, nuestro colaborador en muchos puntos de sociología araucana, es hijo de un cacique de Purén. Después de adquirir en la misión de Collipulli los conocimientos primarios, ingresó en 1876, por intermedio del general Saavedra, a la escuela de preceptores de Santiago. Estudió tres años, y en seguida, en vez de ir a enseñar a los niños de su tribu, se incorporó en 1879 al ejército que expedicionó al Perú. Concluida la guerra, vuelve a los lares de sus antepasados, para casarse a la usanza de los suyos, vivir de *ruca* en *ruca,* arrendar sus terrenos a los ávidos aparceros y vagar por las oficinas de Angol y Temuco traduciendo al castellano las querellas y peticiones del perseguido *mapuche*"[256].

Entre 1887 y 1892, Coliman trabajará como intérprete juramentado en el Juzgado de Angol, como lo hizo su pariente Juan Bautista Colipi entre 1878 y 1884. En los años siguientes no solo actuará además como tinterillo, sino, también, en "las tareas de enseñar a leer i escribir a niños indígenas" como profesor itinerante de las reducciones[257]. De esta manera, el mapuche alfabetizado, con conocimiento de la cultura letrada estatal y que alterna entre diferentes actividades de mediación lingüística, jurídica y escritural, fue reemplazando al antiguo lenguaraz mestizo.

Cuadro n.º 5
Funcionarios bilingües en instituciones de la radicación[258]

Institución	Funcionario (fechas en las que aparece ejerciendo funciones oficiales)
Comisión de Radicación, con sede en Temuco (1884-1927)	José Liberato Novoa (1884-1886) Antonio Osses (1887) Manuel Antonio Neculman (1887-89) Pedro Juan Melin (1907, 1915-1918) Felipe Reyes Millán (1912-1915)
Protectorado de Arauco, con sede en Cañete o Lebu (1909-1916)	Teófilo Oportus (1914-1915) Rigoberto Fuentes (1915-1916)

[256] Guevara, *Costumbres judiciales.., op. cit.*

[257] Guevara, *Folklore araucano..., op. cit.*, p. 4.

[258] Las fechas indicadas para cada nombre corresponden al año de su aparición en alguna fuente que indique su función, no al periodo en que ejerce como funcionario.

Institución	Funcionario (fechas en las que aparece ejerciendo funciones oficiales)
Protectorado de Malleco, con sede en Angol o Traiguén (1866-1890; 1907-1927)	¿?
Protectorado de Cautín, con sede en Temuco (1891-1927)	Juan Bautista Urrutia Loncon (como intérprete, 1900-1901) Manuel Morales (1902) Jose Manuel Huento (1905-1906, 1911) Juan B. Urrutia Loncon (como escribiente, 1917-1918) Antonio Catrileo (1917)
Protectorado de Valdivia, con sede en Valdivia (1906-1922)	Manuel Antipilo (como intérprete y mozo) (1907-1908) Manuel Aburto Panguilef (1910-1914) Guillermo Jaramillo Valle (1914-1915) José Tripaillante (1915-16)
Protectorado de Llanquihue, con sede en Osorno (1908-1916)	Arturo Fuentes (1908) Emilio Pacheco (1912-1913) Justo Escobar (1914-1915) Antonio Lican Millalonco (1915) Luis Figueroa (1915)

Fuerza pública y derecho

Por último, un personal que no dependía directamente de los protectorados, pero que era importante para la materialización de su autoridad jurídica y administrativa, era el de la llamada "fuerza pública", policial y militar. Desde 1894, cinco hombres del regimiento n.º 3 de caballería son asignados a las órdenes del Inspector General de Colonización[259], y desde los primeros años de Eulogio Robles a cargo del Protectorado de Indígenas de Cautín, este protector empleará recurrentemente la fuerza pública para proteger las tierras mapuche de aquellos que intentaban ocuparlas ilegalmente, como se puede apreciar, por ejemplo, en la decena de oficios que envía a la Gobernación de la provincia en una semana de octubre de 1901[260]:

> "Sírvase hacer notificar a don Alejandro Santander para que desocupe la posesión que indebidamente ha tomado de tierra del indígena Huenumil" (8/10/1901).

[259] ARNAD, Fondo IGCI, vol. 19.

[260] Oficios emitidos en una semana de octubre de 1901, en ARA, Fondo Gobernación de Nueva Imperial, vol. 39.

"Sírvase Ud. hacer salir por medio de la fuerza pública al español Segundo Tolosa que se ha introducido a las tierras del indígena Lorenzo Montupil" (8/10/1901).

"Sírvase hace salir por medio de la fuerza pública al español Abraham Candia que se ha introducido en las tierras del indígena Domingo Trina" (8/10/1901).

"Sírvase lanzar por la fuerza pública a Juan de Dios Muñoz, a Juan Correa, que ocupan terrenos destinados a indígenas en Mahuilll Cahue (Boroa) y amparar en ese terreno al indígena Juan de la Cruz Collipal" (10/10/1901).

"Ruego a Ud. Se sirva hacer salir por medio de la fuerza pública a los nacionales no indígenas Bienestor y Juan Salas y a Juan de Dios Vidal que sin ningún derecho se han introducido a la hijuela del indígena Juan Antonio LLancavil" (12/10/1901).

"Sírvase hacer salir por medio de la fuerza pública a Belisario Sepúlveda que se ha ido a colocar al lado de la ruca de Pedro Cayuqueo, donde vive él y su familia desde tiempo inmemorial" (14/10/1901).

"Sírvase Ud hacer salir por medio de la fuerza pública a Fidel Muñoz que a titulo de guardador de tierras fiscales se ha introducido dentro de la hijuela del indígena Domingo Huenul sucesor de Guemil" (14/10/1901)

"Ruego a Ud se sirva hacer salir por medio de la fuerza pública a Manuel Gaete y demás gente española que se ha introducido a la hijuela de la indígena María Florentina Molina" (15/10/1901).

Estos oficios dan cuenta de al menos dos fenómenos:

1) La intensa y sostenida presión de colonos chilenos –llamados "españoles" o "nacionales no indígenas" para distinguirlos de los mapuche, los que para la ley eran también chilenos– por ocupar tierras asignadas a indígenas por medio de la imposición de hechos consumados de ocupación, destrucción de cercos, construcción de ranchos, correteo de animales, introducción de animales en sembrados, etc. y
2) La dificultad para hacer cumplir la ley y hacer actuar la fuerza pública, debido a la protección que recibían los usurpadores chilenos por parte de algunas autoridades.

Así por ejemplo, en el caso del amparo a Juan Collipal, dos meses después la policía no ha efectuado aún el "lanzamiento", y le informan a Robles que el usurpador Muñoz "se arregló" con los indígenas. En el caso de Pedro Cayuqueo, al mes siguiente todavía no se ha cumplido la orden de lanzamiento de Sepúlveda, y el Prefecto recibe una nota del Gobernador ordenando que "no se dé cumplimiento al lanzamiento de Belisario Sepúlveda, pedido por Pedro Cayuqueo"[261]. La tarea del protector era entonces de permanente contención y interpelación a

[261] ARA, Fondo Gobernación de Nueva Imperial, vol. 39, 8 de noviembre de 1901.

las autoridades civiles y policiales, los tribunales, y la Comisión Radicadora, apelando al derecho de radicación de los mapuche, y a su defensa por medio de la fuerza pública, aparato coactivo que se encontraba sometido a órdenes de intereses divergentes entre las autoridades del territorio de colonización.

La fuerza pública también tenía que hacerse presente en las oficinas de los Protectorados, por los motivos que explica el protector Irribarra de Valdivia, en oficio de 1907 al Inspector, cuando el Ejército retira al soldado custodio de sus oficinas:

> "Se ha retirado el soldado que prestaba sus servicios en esta Oficina, porque así lo ordena el Reglamento del Cuerpo. No me quejo de esta resolución ni la califico, pero hago presente a esa Inspección que sin el soldado en la puerta y sin los servicios de él, en el Protectorado se producen frecuentes desórdenes, derivados de la lucha que sostienen los numerosos interesados para no ser postergados en las audiencias, aparte del feo aspecto que presenta la Oficina después del despacho diario, pues no es difícil figurarse el estado en que dejan el piso los indígenas con los hábitos que les son propios. El intérprete repugna servicios extraños a su empleo y me cuesta trabajo mantenerlo, pues nadie quiere ganar treinta pesos mensuales trabajando diariamente"[262].

Como se señaló más atrás, el trabajo de agrimensura generaba mucho recelo entre los mapuche, y los ingenieros tenían muchas veces que trabajar custodiados por fuerza armada. Cuando las situaciones de conflictos recrudecían, incluso con fuerza pública resultaba difícil realizar esas labores, como señala el ingeniero de la Comisión de Radicación, Cesar Ibar, al intendente de Cautín en 1919, solicitando la asignación de un sargento de carabineros y dos soldados "para proceder a la entrega y deslindamiento de la hijuela de la Sucesión de don Adolfo Barros, ubicada en la Concesión Silva Rivas", donde el ingeniero Ferrada había intentado llevar a cabo el deslinde, pero le expresó "que la fuerza que se le concedió anteriormente, fue insuficiente para llevar a efecto su cometido"[263].

La fuerza pública, además, no estaba siempre del lado de los mapuche o las instituciones proteccionistas. En numerosos casos, policías y militares se sumaban a la violencia de colonos, cometiendo todo tipo de crímenes contra los mapuche, como denuncia Robles desde su primera Memoria en 1901:

> "Es conveniente que se sepa que las prisiones arbitrarias decretadas contra ellos por funcionarios administrativos de inferior jerarquía son frecuentes, como también las flagelaciones para hacerlos confesar delitos en que se supone tengan participación y otras torturas a que se les somete en que la nota salvaje de

[262] ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1304, julio de 1907.

[263] Ingeniero C. Ibar de IGCI a Intendente, 2 abril de 1919. AHN, Fondo Intendencia de Cautín 1898-1925,

refinamiento de crueldad no falta jamás. Debo reseñar un asesinato alevoso de que fue víctima un indígena y que corre peligro de quedar impune. Ocurrió, no ha mucho, a esta oficina el natural Juan Millaleo herido a bala diciendo que en uno de los días del mes de diciembre se presentó a su *ruca,* poco después del mediodía un sujeto llamado Daniel Guzmán acompañado de tres gendarmes en estado de ebriedad, cuyos nombres ignoraba; que lo sacaron a él y a un hermano llamado Francisco Levinao, a una quebrada distante como cuadra y media de su *ruca* y, después de amarrarlos, se les hizo fuego dos veces, hiriendo a Millaleo y ultimando a Levinao. Los soldados pertenecían al destacamento de Perquenco. Hice la competente denuncia ante el Juzgado de Letras, quien ordenó la aprehensión de los gendarmes. El jefe superior de este destacamento, que no era el señor Trizano, se me presentó después atenuando la conducta de sus soldados, quienes, según me aseguró, observaban buena conducta y que el proceso que se seguía era una verdadera desgracia, pues esos soldados no habían pretendido asesinar a los indígenas sino amedrentarlos. Persiguiendo un robo llegaron a las cercanías de sus viviendas y como huyeron, se les hizo fuego a trescientos metros, disparándose sólo un tiro, que alcanzó a estos dos infelices. Con todo, la justicia se encargará de averiguar y reprimir este delito"[264].

Por otra parte, y contra el mito perenne de la "raza militar", los mapuche no parecen haber tenido inclinación por participar en los procesos de conscripción militar (al menos los mapuche-huilliche), tal como atestigua la Memoria del protector Daniel Cerda de Llanquihue para el año 1908:

"El servicio militar ha producido beneficios positivos entre los indígenas. Sin embargo, en noviembre último acudieron a este Protectorado la generalidad de los conscriptos indígenas a pedir les obtuviese la eximición del servicio, a lo que me negué terminantemente, exponiéndoles que no solo no haría gestión en tal sentido sino que coadyuvaría a la acción de las autoridades a fin de que ningún indígena de veinte años fuese remiso en el servicio militar. Los indígenas de esta Provincia que en general viven en estado de absoluta ignorancia, es necesario no hacerles perder la ocasión propicia que tienen para adquirir una mediana instrucción siquiera, y para que destierren la ociosidad y desaseo, que es habitual entre los indígenas"[265].

El protector Cerda muestra que la conscripción obligatoria, y en contra de la voluntad de los conscriptos mapuche-huilliche, era usada como sustituto de la escuela para la enseñanza, y como régimen de disciplinamiento laboral y corporal, tal como se entendía también para el caso del "bajo pueblo" chileno que alimentaba forzadamente las filas del Ejército. Unos años después, el protector

[264] Eulogio Robles, *Memoria del Protectorado de Cautín para el año 1901*, en este volumen, pp. 194-195.
[265] Daniel Cerda, *Memoria del Protectorado de Llanquihue para el año 1908*, en este volumen, p. 332.

Fernando Muñoz de Arauco expone una percepción totalmente opuesta a la del protector Cerda, lo cual indica bastante desconocimiento de la voluntad de los mapuche en participar de la conscripción obligatoria:

> "En orden al llamamiento conscripcional que se hace a los indígenas en cumplimiento a la ley de Reclutas y Reemplazos debo manifestar a usted que el indio por su carácter guerrero tiene gran entusiasmo por militar en las filas del Ejército; mas resulta, que ignorantes de las fechas en que se les hacen sus llamados no comparecen oportunamente con lo cual ordinariamente se ven procesados por la citada ley. No se ocultará a la penetración de usted las ventajas positivas que se adquirirían para el indígena en la conscripción militar en orden a la instrucción, carácter y hábitos que en los cuarteles se les enseña. El indígena es casi en su totalidad analfabeto y de aquí que tiene gran importancia el que hagan su servicio militar, lo cual seria fácil con que el Ministerio de Guerra impartiera al señor Intendente de esta Provincia y a los Gobernadores de Departamentos para que con la oportunidad debida notifiquen a los llamados al servicio militar"[266].

No sabemos si esta diferencia en la relación mapuche con la conscripción militar tiene que ver con diferentes historias territoriales (lafkenche vs. huilliche) o con prejuicios propios de los protectores (el protector Muñoz *supone* que los mapuche "ignoran" la fecha de comparecencia al reclutamiento y que por eso no se presentan). Lo que resulta claro es que los protectores reproducen una misma ideología del disciplinamiento de los indígenas por medio de la instrucción militar, es decir, que la conscripción debe constituirse en uno más de los dispositivos de chilenización de la población mapuche.

Aunque la fuerza policial podía ser requerida por los protectores para defender los derechos de los mapuche, esta tendrá también una gran responsabilidad en las diferentes masacres que se suceden por la resistencia de los mapuche a dejar sus tierras adjudicadas a colonos y concesionarios, como en el caso de la masacre de Forrahue y la masacre del Llaima. Nuevamente se trata del problema de la oportunidad y correcta aplicación de las leyes y sus instrumentos (la fuerza pública), que tiende a favorecer a los colonos, debido a la negligencia (calculada o no) de las autoridades regionales, tal como denuncia la Misión Araucana de Quepe en 1913, en respuesta a una Memoria del presidente de la Comisión de Radicación, Leoncio Rivera, que decía:

> "El servicio en la parte austral del territorio indígena va siendo cada día más engorroso a causa de los diversos sistemas puestos en práctica para el acaparamiento de las tierras de indígenas; y me cabe repetir hoy, que si no se

[266] Fernando Muñoz, *Memoria del Protectorado de Arauco para el año 1913*, en este volumen, p. 493.

> dictan disposiciones especiales, protectoras de la propiedad, o de mayor eficacia para la labor de los Protectores de Indígenas, encontraremos cada día mayores dificultades, y concluiremos por quedar del todo paralizados por la falta de campo preparado para ejercitar nuestra acción; pues, ya casi no hay terreno pretendido por indígenas que no se halle en discusión con particulares con derechos más o menos acentuados de posesión o dominio. Para radicar en condiciones de servicio expedito y eficaz, es preciso primero reivindicar"[267].

Ante la supuesta impotencia de acción que sugiere Rivera, el editor de *La Aurora Araucana*, presumiblemente el pastor Carlos Sadleir, comenta:

> "Si los particulares se oponen ¿no podría el Cuerpo de Carabineros ser ocupado en la tarea humanitaria de cumplir la ley de radicación, como fue usado cerca de Osorno para favorecer a un rico usurpador de tierras fiscales? [...] La Comisión [Radicadora] tiene amplias facultades [para decidir sumariamente sobre la propiedad que deslinden]: no hay apelación sobre lo obrado por ella para los pobres indígenas ¿cómo es que la hay para los ricos en una República como Chile donde por la Constitución todos tienen derechos iguales? El país espera del Supremo Gobierno que haga cumplir las leyes"[268].

Los reclamos mapuche contra los protectores

Como hemos podido apreciar para diferentes momentos de la historia de la institución, la exposición de los protectores a todos los flancos del conflicto colonial los hizo blanco de una serie de reclamos de sus mismos protegidos, los mapuche. Fuera de alguno cuya venalidad está bien documentada, los hubo que gozaban de amplio reconocimiento entre líderes y organizaciones mapuche (*longko*, mapuche anglicanos o miembros de la Sociedad Caupolicán), pero que eran también objeto de reclamos. En 1902 por ejemplo, Eulogio Robles tiene que defenderse ante el Inspector General de las acusaciones de Pascual Temo:

> "El origen de este reclamo es la escasa cabida de terreno que se le fijó al principio a Temo por la Comisión Radicadora, que le asignó solo sesenta hectáreas, elevadas después a ochenta, superficie que no he aceptado por considerarla pequeña, en atención a la mala calidad del suelo, y al número relativamente crecido de animales que posee este indio, por lo cual conceptué que la cabida mínima debía ser de cien hectáreas, exigencia bastante aceptable por existir al lado de la hijuela de Temo un retazo de suelo presuntivamente fiscal

[267] Leoncio Rivera, "Memoria de la Comisión Radicadora para el año 1911", en *Memoria de la Oficina de Mensura de Tierras* (Santiago, imprenta, 1912), p. 80. Extracto citado en *La Aurora Araucana,* n.º 1, Quepe, enero 1913.

[268] "Importante. Radicación de Indígenas", en *La Aurora Araucana,* n.º 1, Quepe, enero 1913.

> que hoy ocupa don Lisandro Brito. Esta Oficina ha atendido a Temo en sus diversos reclamos, impetrando medidas administrativas para hacer respetar sus derechos y aún ha dado cuenta telegráficamente y por notas a la Inspección general de los atropellos contra este indígena perpetrados por Brito y ha pedido también se oficie al Promotor Fiscal de esta a fin de que, en representación del Fisco, solicite su lanzamiento de las tierras que alegaba ocupar para acogerse a la ley de Colonización Nacional y de esta manera procediendo el Protectorado conjuntamente con el Promotor Fiscal, quitar todo pretexto a este señor que se excepcionaba con la alegación de ocupar tierras fiscales cuando se le ha notificado que abandone tierras de indios [...] hago presente, por su intermedio, al señor Inspector General de la absoluta necesidad de radicar pronto a este indio, extendiéndole el respectivo Título de Merced"[269].

En 1910, poco después del incendio que afectó las oficinas del Protectorado de Indígenas de Valdivia en diciembre de 1909, el protector Carlos Irribarra es objeto de reclamos formales. El Inspector le escribe al Ministro:

> "Varios indígenas, por conducto de un honorable Diputado, han formulado un cargo formal sobre la conducta administrativa del Protector de Indígenas de Valdivia, en el sentido de la falta de cumplimiento de la misión que tiene encomendada. Agrega además US, que el mismo señor Diputado ha expresado en ese Ministerio que tiene muy malos antecedentes de la conducta privada del funcionario de que se trata".

El Inspector solicita entonces autorización para viajar a Valdivia a "conocer los hechos e informar"[270]. Luego de su viaje de inspección, el Inspector informa que "el Protector sin Oficina atendió en la mejor forma a los indígenas [...] oía a los indígenas en el Juzgado y en la Oficina Regional de Mensura de Tierras". Y sigue:

> "El Protector se quejó de que personas ajenas al servicio, muchas veces transeúntes, apadrinaban con frecuencia gestiones pro indígenas y oían a estos sin prudencia ni tino haciéndose eco de hechos infundados, sacrificaban el prestigio y reputación del Protector. La impunidad de estos defensores oficiosos, agregó, tendía a multiplicar acusaciones falsas [...] Testimonios serios, muy autorizados, como son entre otros, del señor Intendente de la Provincia, Ministros de la Iltma. Corte de Apelaciones han depuesto sobre su conducta privada. Todos han estado contestes[271] en que ella no es acreedora a censuras y que alega con frecuencia en la Corte a favor de los indígenas [...] Tengo antecedentes para asegurar que Irribarra no juega ni bebe [...] nunca ha sido

[269] ARNAD, Fondo IGCI, vol. 44, 1902.
[270] ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1436, 14 de mayo de 1910.
[271] Concordantes, coincidentes.

> acusado de malos manejos [...] consta que Irribarra rechazó indignado una proposición de un usurpador de terrenos de indios. Se le ofrecían siete mil pesos. Por cumplir con su deber el señor Irribarra no tiene trabajo profesional, pues casi siempre se cree implicado por la confusión de la propiedad particular con la indígena. Juzgo, pues, señor Ministro, que son infundados los cargos hechos al Protector de Indígenas de Valdivia [...] su conducta como funcionario público y caballero ha sido correcta"[272].

En 1914, el cacique Osvaldo Mulato presenta un reclamo contra el protector Arrieta de Malleco, acusándolo de impedirle llegar a acuerdo de mediería con tres particulares. Arrieta se defiende ante el Intendente de la provincia, explicando que esos particulares "estaban sembrando en terrenos de la reserva [de Osvaldo Mulato], diciéndose medieros de varios indígenas comuneros" y que "perturbaban la tranquilidad de la reserva con frecuentes atropellos", ante lo cual el protector presento una demanda en procedimiento sumario "en beneficio directo de mis protegidos". Señala también que:

> "Cumplida la sentencia del juicio, serán los indígenas que los que se llevarán la parte de los medieros chilenos; y en consecuencia, son ellos los que salen ganando con el juicio",

por lo que:

> "Si ellos se presentan ante Us. pidiendo su intervención a favor de los particulares que les explotan sus propias tierras, lo hacen, o por ignorancia, o por consejos de los interesados en seguir cultivando esos terrenos indígenas, que son los propios individuos contra quienes procedo"[273].

Arrieta acusa así que los propios mapuche habrían cambiado de parecer (sin saber por qué motivos) y buscado llegar a acuerdo con los particulares, cuando el juicio para la expulsión de los medieros ya estaba en curso.

En otros casos, resulta evidente la acusación pública al protector como estrategia para desbaratar una defensa judicial. Es el caso de un reclamo de 1925 contra el protector de Malleco Carlos Schnacke, quien es acusado mediante una publicación en la prensa de dirigir "personalmente el lanzamiento del indígena Miguel Cabeton y sus numerosos arrendatarios, por medio de la fuerza pública" de una hijuela de 155 ha que era parte de la reducción de Lorenzo Quilapi Cabeton[274]. Por haber sido publicado el reclamo, el Director General de Tierras y Colonización pide un explicaciones formales al aludido protector,

[272] Inspector Urrutia al Ministro, 16 de junio de 1910. 1914, en ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1436.

[273] Protector Arrieta a Intendente de Malleco, 5 de septiembre de 1914, en AHN, Fondo Intendencia de Malleco, año 1905-1916.

[274] *El Diario Ilustrado*, Santiago, 12 de diciembre de 1925.

quien responde mediante un pormenorizado informe de siete folios sobre el caso en cuestión[275]. Ahí Schnacke señala que la publicación "está fundada en una tergiversación absoluta tanto de los hechos ocurridos como de la participación de las diferentes personas que en ella se mencionan", que no se ha realizado ningún lanzamiento, y que si se hubiera realizado, este "no sería en perjuicio del indígena Cabeton, sino precisamente en amparo de los derechos de este". Explica que Cabeton fue desalojado de su posesión por el denunciante abogado Cresta de la Sucesión Bombardieri, el que consiguió una orden de desalojo contra el mediero José Cuitiño, colocó arrendatarios e hizo defensas para evitar la entrada de los verdaderos dueños. El protector señala haber conseguido una orden de reposición del Intendente, y que en dos oportunidades solicitó la fuerza pública para hacerla cumplir, pero que el subdelegado a cargo, "en vez de cumplir la orden superior la comunicó al Sr. Cresta, quien les dio noticias de que no se cumpliría por haber reclamado al Supremo Gobierno". Ante esto el propio Cabetón lo llamo "telefónicamente" para informarle de lo sucedido. El reclamo consistía así en una tergiversación que pretendía enredar aun más el juicio por recuperación que favorecería a Cabeton. Aunque en este caso específico, el protector parece actuar de buena fe, una vez suprimida la institución del Protectorado, Carlos Schnacke ocupó el cargo de Juez del Juzgado de Indios, y luego el de abogado privado en Victoria, siendo cuestionado por dedicarse a defender particulares en los pleitos contra los mapuche[276].

El protector como heterónomo jurídico en la sociedad mapuche

Además de la mediación jurídica con los diferentes aparatos de la administración estatal, el protector ejercía funciones de mediación entre los propios mapuche, en conflictos que eran en su gran mayoría resultado del mismo proceso de reducción y de su impacto en la organización sociopolítica mapuche, además del despojo de tierras y la consecuente pauperización material de los mapuche, operando así como un mediador estatal sobre la base de una norma heterogénea a la sociedad sin Estado mapuche. Su figura da cuenta del cambio paradigmático de las instituciones que regulan las relaciones interétnicas e intersocietales, donde las instituciones del derecho de gentes (antiguo derecho internacional) adoptadas y desarrolladas en el derecho indiano como los parlamentos y tratados, y los cargos

[275] *El Diario Ilustrado*, Santiago, 18 de diciembre de 1925.

[276] Martín Correa y Eduardo Mella, *Las razones del illkun/enojo. Memoria, despojo y criminalización en el territorio mapuche de Malleco* (Santiago, LOM Ediciones/ Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, 2010). Carlos Schnacke fue el último Protector de Indígenas de Malleco, era de familia terrateniente en la zona de Victoria, y hermano de Oscar Schnacke, fundador del Partido Socialista de Chile, por lo que será también cuestionado por actuar en función de intereses político-partidarios.

de mediación como comisarios de naciones y capitanes de amigos, van siendo sustituidos por instituciones de tutela colonial como las de protectores y títulos de merced, también previstas en el derecho indiano, pero aplicadas a las poblaciones conquistadas de las "repúblicas de indios", es decir, consideradas como autonomías internas y no externas a la administración colonial. Se observa así la sobrevivencia de los principios jurídicos indianos y su coexistencia heterocrónica con el derecho nacional codificado, coexistencias anacrónicas que la teleología estatal intentará eliminar, pero que los mapuche buscan sostener como marcas de su continuidad histórica como pueblo.

El papel mediador, similar al de comisario de naciones, está insinuado en la actuación de uno de los primeros protectores, David Maza, en la década de 1870, cuando

> "Dos caciques poderosos del interior disputaban entre sí un retazo de terreno, a fin de dirimir la cuestión resolvieron de común acuerdo nombrar al Sr. Maza juez árbitro y para el efecto vinieron a donde él y le propusieron el arbitraje quien aceptó gustosísimo el cargo. Este hecho revela claramente la buena disposición de que se encuentran animados los indígenas para seguir el estado pacífico en que ahora se hallan, siempre que se les trate bien i no se les infiera ningún perjuicio"[277].

Asimismo, desde su primer año en funciones, Robles asume un papel similar, como consta en su Memoria para el año 1900:

> "Me he constituido en una especie de árbitro arbitrador para dirimir las dificultades que entre sí tienen los indígenas, a fin de evitar las pérdidas de tiempo y gastos a que se verían obligados, si ocurriesen a la justicia ordinaria. Acostumbro levantar acta de todo esto con la respectiva resolución. Los indios, casi siempre, cumplen religiosamente lo fallado por el Protector"[278].

Más de diez años después, el protector Schwerter de Llanquihue confirma los detalles de esta función, insistiendo en el papel nefasto de los tinterillos que estafan a los mapuche y las consecuencias que estos engaños tienen al generar conflictos con los propios protectores:

> "Creen los indígenas que una de las atribuciones y deberes del Protector es servirles de juez y árbitro en sus controversias sobre terrenos, y rara vez se presentan a los Tribunales ordinarios en tales casos. Por otra parte, si acuden a los jueces de menor cuantía, éstos no los atienden, y para verse libres de esta inconformable y odiosa clientela, los mandan donde el Protector, diciéndoles

[277] Véase *El Laja*, mayo de 1872, en Parentini, *op. cit*., p. 55.
[278] Eulogio Robles, *Memoria del Protectorado de Indígenas para el año 1901*, en este volumen, p. 173.

> que éste es el funcionario encargado por la ley para dirimir sus divergencias. Cuando ambas partes acatan la resolución del Protector, se restablece momentáneamente la armonía, pero tras corta tregua vuelven a suscitarse las mismas dificultades. A menudo una de las partes protesta contra el proceder del Protector, calificándolo de parcial y vendido, se consulta con algún tinterillo y lleva el asunto a los tribunales, donde en honorarios, gastos y costas consume lo poco que aun posee. Si en seguida se le cobran los honorarios y costas causadas, y se le embargan sus animales, vuelven donde el Protector a quejarse de haber sido engañados y explotados por el tinterillo y el juez, y a implorar su ayuda cuando comúnmente ya nada puede hacerse en su favor; y si se les dice que ya es demasiado tarde para reparar el perjuicio, no lo creen y repiten con mayores bríos sus quejas contra el Protector calificándolo de indolente y no cumplidor de sus deberes"[279].

En este análisis, llama la atención que el protector Schwerter no aborde las causas profundas de los conflictos suscitados y se quede en la crítica a los procedimientos, sin comprender la ansiedad y urgencia de las soluciones que requieren los indígenas. Esta incomprensión es todavía más evidente cuando señala que los conflictos entre indígenas:

> "No han disminuido, al contrario, tienen visos de aumentar, las reclamaciones de los indígenas entre sí. Es curioso y de difícil explicación el eterno descontento de éstos, que aunque sumidos en la miseria i agobiados por la desgracia, al parecer no pueden vivir sin rencillas y son por instinto refractarios a la armonía. Indígena que llega al pueblo, se presenta al Protectorado a reclamar, aun por los asuntos más nimios, contra el vecino, extraño o pariente, aunque sea el propio hermano"[280].

Desconoce así el protector que toda situación de violencia colonial genera "rencillas", "descontento", entre los pueblos sometidos por el Estado a la miseria y la desgracia y lógicamente "refractarios a la armonía".

Ante el aumento continuado de los conflictos de propiedades entre mapuche, el protector Muñoz anuncia una solución que venía siendo hace tiempo señalada por los protectores como la única para ellos imaginable, la división de las comunidades:

> "La liquidación de estas reducciones se impone por cuanto es notorio que en comunidades los mas fuertes estrechan al mas débil lo que es naturalmente altamente odioso por cuanto produce discordias entre los mismos indios, con grave perjuicio para sus propios intereses, ya que terceros interesados

[279] José Schwerter, *Memoria del Protectorado de para el año 1913*.
[280] *Ibid*.

en fomentarlas y encenderlas son precisamente los interesados, de donde resulta el despojo, el robo, y como consecuencia los pleitos"[281].

El protector también intervendrá en los pleitos matrimoniales entre mapuche, ya que:

"Sucede, también, que matrimonios antiguos mal avenidos ocurren a presencia del Protector en demanda de justicia. A las mujeres, a quien sus maridos, no casados legalmente, las maltratan, se les dice que no puede obligárseles a seguir a ese marido y así quedan libres de ellos"[282] .

Un caso de estos es relatado en detalle en uno de los textos etnográficos de Robles:

"Juana Rosa Lemunao era india de como veinticinco años, de estatura mediana, algo gruesa, de color moreno claro con tendencia a rojo, algo tosca de facciones; pero no desprovista de simpatía. Ya la conocíamos por haberla visto querellarse en una oficina pública contra su marido para separársele porque la trataba mal y 'no le daba para sus faltas', es decir, no proveía a sus necesidades, y por el contrario, el mal hombre le arrebataba el fruto de su propio trabajo para emborracharse. Recordamos que el querellado se defendió con calor y energía negando redondamente todos los cargos de Juanita, quien, decía, pretendía dejarlo, azuzada por su padre, que abrigaba el propósito de venderla nuevamente a otro *mapuche*, con el cual el viejo avaro tenia palabreado el negocio"[283].

La poligamia mapuche ("matrimonio por ritos de la raza") es señalada reiteradamente como un obstáculo a la civilización, y genera problemas jurídicos patrimoniales (por ejemplo, respecto a la posesión efectiva de la herencia) que tienen que resolver los protectores[284]. El protector Bravo de Cautín, quien luego será presidente de la Comisión de Radicación, escribe en su memoria de 1913 con el título "El matrimonio civil como elemento indispensable al progreso indígena":

"Es mi modesto juicio, que la base de un progreso evidente es obligar al indígena en una u otra forma a dejar la poligamia. Hoy no lo hacen porque ello les ocasiona gastos y no les permite aprovechar mayores extensiones de suelo. Todos los indígenas saben que el matrimonio civil existe y no lo hacen porque económicamente se perjudican. Creo que lo más grande que puede

[281] Fernando Muñoz, *Memoria del Protectorado de Arauco para el año 1913*, en este volumen, p. 492.
[282] Eulogio Robles, *Memoria del Protectorado de Indígenas para el año 1900*, en este volumen, p. 407.
[283] Robles, *Costumbres..., op. cit.*
[284] Véase también Pinto, *Conflictos étnicos..., op .cit.*, p. 111. **véase p. 94**

hacer el Gobierno en beneficio del indígena, es convertir en ley de la República, cuanto antes, el artículo 11 del proyecto de la Comisión Parlamentaria. Extirpada la poligamia y sacado el indio de la comunidad en que vive, no necesitará después de cinco o seis años más, ninguna ayuda especial; solo se civilizará y tras de la civilización vendrá el progreso"[285].

Finalmente, el protector también apoya a:

"Los indígenas que quieran educar o completar la educación de sus hijos [...] les gestiona lo conveniente, hasta conseguir facilidades para enviarlos a las escuelas prácticas de agricultura, a las escuelas normales";

y "da consultas, tanto a particulares como a indígenas, sobre los distintos puntos de la legislación especial a que están sometidos"; e incluso mediando con las autoridades de policía para que resguarden ceremonias como funerales, que a veces son perturbadas por los mismos colonos chilenos[286].

El protector Bravo en su Memoria de 1913 propondrá fortalecer jurídicamente este papel de los protectores como mediadores externos de "las cuestiones entre indígenas", y bajo el título "Conveniencia en dar a los Protectores atribuciones judiciales para fallar en primera instancia las cuestiones entre indígenas que se refieran a sus terrenos", señala:

"El Protector resuelve estas cuestiones pero sólo como amigable componedor, los juzgados sobre todo el de Temuco no atienden casi esos asuntos que jamás pueden apreciar con acierto y ya que la prueba testimonial en general y especialmente la indígena no da garantía de certeza. Las declaraciones juradas desvanecen como dice la Comisión Parlamentaria los más justos derechos y entre indígenas no se puede resolver nada sin imponerse personalmente o por medio del ingeniero. Hoy no se promueven cuestiones sino valiéndose de algún comunero de quien se hacen dar poder. Hay no indígenas que arrebatan 50 o 60 hectáreas de suelo valiéndose de uno de ellos. El Protector inicia alguna acción posesoria y la pierde naturalmente porque terminado el comparendo se presenta el poder del indígena en nombre del cual posee. Si el Protector tuviera atribuciones judiciales por el hecho de mezclarse algún natural tendrá jurisdicción sobre él y evitaría ese complot, a que mediante alguna remuneración se prestan muchos, que ni siquiera están radicados y cuyos poderes se refieren a pretendidas herencias que no existen pero parecen justificadas ante los tribunales"[287].

[285] Eleazar Bravo, *Memoria del Protectorado de Cautín para el año 1913*, en este volumen, p. 499.
[286] Eulogio Robles, *Informe del Protector de Indígenas de Cautín a la Comisión Parlamentaria*, 1911.
[287] Eleazar Bravo, *Memoria del Protectorado de Cautín para el año 1913*.

Pero para Bravo, cualquier solución a los conflictos entre mapuche y de estos con los no mapuche pasa por imponer la propiedad individual como ideología de la frontera, disolviendo las comunidades, y acabar con el proteccionismo estatal transformando al protector en un "simple consultor del juez de letras":

> "Tanto protectorados como ingenieros sostenidos por el Fisco acostumbran al indígena al tutelaje y gratuidad de servicios que, no siendo completos más les perjudican que ayudan. Me parece que cinco o seis años después de hecha la división de la comunidad, el papel del Protector de Indígenas debería, como lo establece el artículo 11 del proyecto a que he hecho referencia, ser un simple consultor del juez de letras para llenar los trámites ahí exigidos. Debería imponérsele todavía la obligación de suscribir todas las escrituras públicas que hicieran conjuntamente con los otorgantes, cerciorándose en cuanto sea posible de la efectividad de los hechos que ahí se expresan. Conforme a las ideas expuestas, es mi opinión que debe procederse inmediatamente a concluir con la comunidad, estado que no permitirá ningún adelanto ni vivir en otra forma que una verdadera guerra civil. Estimo que imponérsele la obligación de dividirse por ingenieros fiscales es obligarles a sufrir miles de injusticias, ya que éstos no alcanzarán las leyes que reglamentan los derechos hereditarios, no tendrán competencia de nadie ni otra fiscalización que el Gobierno. Los juzgados pasan atestados de indígenas casi todos denunciados o procesados por asaltos recíprocos y pequeños combates para arrebatar a los más débiles algún retazo de terreno; así, a veces violentamente, se arrebatan unos a otros sus rucas, denunciando a otras, hurtos de animales, y tras de eso una información de testigos, luego una orden de prisión, y cinco o seis meses de cárcel, hacen sus cosechas y se dejan, como es de suponer, a merced de la escasa caridad de los otros. Acusar al indígena por estos hechos es injusto y casi puede decirse que la ley les obliga a vivir así. Si entre un hombre y una mujer que después de conocerse mucho, y mediar entre ellos el cariño propio de marido y mujer, hay continuas discordias por insignificancias económicas, con cuanta mayor razón las habrá entre comuneros medio civilizados y que muchas veces por una u otra causa tienen hambre. Ninguna reducción quiere vivir en comunidad, y quien tal afirme, falta a la verdad y toma como fundamento el decir del cacique u otros de los mas fuertes e ilustrados que explotan únicamente a sus comuneros mas ignorantes o débiles"[288].

Educación y "civilización"

La existencia de las figuras de mediadores que actúan durante el periodo reduccional –lenguaraces, intérpretes institucionales, intérpretes tinterillos– está en estrecha relación con las lógicas de educación y alfabetización que desarrollaron

[288] Eleazar Bravo, *Memoria del Protectorado de Cautín para el año 1913.*

ciertas familias mapuche durante el siglo xix, entregando sus hijos a escuelas misionales o públicas para su educación formal en castellano. Algunas de estas familias, que proveyeron de mediadores sociolingüísticos al proceso jurídico y administrativo de la radicación, fueron constituyendo una élite que pudo defenderse de mejor manera ante el despojo territorial. Otras familias se beneficiaron de su constitución interétnica que facilitaba la formación informal bilingüe de sus descendientes. Sin embargo, la gran mayoría de los mapuche no tuvo estas oportunidades durante el periodo reduccional. Por eso, los Protectores de Indígenas, y particularmente Eulogio Robles, serán insistentes en la necesidad de universalizar la escuela primaria entre los mapuche. La educación y la alfabetización eran consideradas elementos fundamentales de lo que se entendía por "civilización de los araucanos": la sustitución de su modo de vestir, de habitar, de sus costumbres matrimoniales (poligamia), y de su idioma. Para este proyecto "civilizatorio" declaradamente asimilacionista, la escuela era la institución clave que los protectores llamaron a universalizar.

Aunque no tuviera facultades para poner en práctica una política masiva de educación pública, Eulogio Robles apoyó anualmente el envío de 10 a 15 jóvenes mapuche a cursar estudios de educación superior en las ciudades de Concepción, Chillán y Santiago. Por otro lado y en la misma línea civilizatoria, que busca sustituir la educación pública a la de los misioneros, el Protector de Llanquihue argumenta al Inspector General la necesidad de crear al menos cuatro escuelas para indígenas en el Departamento:

> "Hay en este departamento más de once mil indígenas que casi en su totalidad son absolutamente ignorantes. Varios caciques del departamento me han manifestado la necesidad de crear escuelas para indígenas y he podido imponerme que hay varios centros de poblaciones indígenas en donde las escuelas encontraría una población escolar de más de cien alumnos cada una. Se nota algo vergonzoso para nuestra cultura y es que hay indígenas ancianos que saben leer y escribir correctamente en cambio sus descendientes viven en la mas completa ignorancia debido a la falta de escuelas"[289].

Por su parte, el visitador de escuelas de Valdivia le escribe al protector de Cautín, señalando:

> "Si los indígenas tuvieran escuelas, indudable es que asistirían a ellas, pero en la provincia escasean hasta para todos los habitantes, no sólo para ellos. A fin de instruirlos se necesitarían ubicar más de treinta escuelas entre los de esta provincia"[290].

[289] ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1436, 17 de diciembre de 1908.

[290] Informe del visitador de escuelas Anselmo de la Cruz, en Eulogio Robles, *Memoria del Protectorado de Indígenas para el año 1901.*

Los informes de este y otros funcionarios celebran en forma casi unánime la capacidad de aprendizaje de los mapuche, y mencionan especialmente la relación con la lengua dominante como cuestión principal del éxito del proceso de educación, alfabetización y "civilización". El visitador de escuelas de Cautín señala al respecto que los mapuche son:

> "Refractarios a los ramos científicos por las dificultades con que tropiezan para posesionarse del idioma; pero una vez que dominan el castellano, les es sumamente fácil adquirir cuanto se les enseñe".

Para este agente ministerial, la mayor dificultad está en que "los araucanos viven retirados de los centros de población y su estado de pobreza no les permite mandar a sus hijos a educarse en los pueblos". Sin embargo, destaca la diferencia de clase que permite que "los caciques acomodados les dan la educación correspondiente, mandándolos a Temuco y aun a Chillan y a Santiago"[291].

El protector de Cautín también valorará estas familias que buscan escolarizar a sus hijos:

> "Hay indígenas que tienen grande interés en educar a sus hijos y acuden a solicitar con empeño que se los admitan en los establecimientos de educación que sostienen misioneros católicos y protestantes. Hasta se cuentan algunos que con sacrificios los envían a las escuelas públicas y al liceo de esta ciudad"[292].

Asimismo, el visitador de escuelas de Valdivia insistirá por su parte en que:

> "Esos niños [indígenas] poseen facilidad para el aprendizaje de todos los ramos memorativos y de observación y aplicación práctica, como dibujo, caligrafía, física, etc. Con rapidez admirable, teniendo algún cuidado, aprenden
>
> a expresarse correctamente en castellano, sin encontrar dificultades en la pronunciación"[293].

Eulogio Robles recoge el énfasis de los visitadores en la resistencia mapuche a la adquisición del castellano, constatando que el indígena "no quiere abandonar su idioma". Para enfrentar la situación, adopta una propuesta del profesor y lingüista Rodolfo Lenz respecto a la necesidad de una educación primaria en mapudungun:

[291] Eulogio Robles, *Memoria del Protectorado de Indígenas para el año 1901*, en este volumen, p. 203.
[292] Eulogio Robles, *Memoria del Protectorado de Indígenas para el año 1904,* en este volumen, p. 246.
[293] Informe del visitador de escuelas Anselmo de la Cruz, en Eulogio Robles, *Memoria del Protectorado de Indígenas para el año 1902*.

> "Es inexacto si se dice que el indio no quiere enseñanza. Cierto que no le gusta estudiar el catecismo, nada más cierto que no le gusta la enseñanza que se da en un idioma que no comprende. Pero establézcanse en medio de los indios pequeñas escuelas en donde se enseñen las primeras letras por parte de preceptores que sepan expresarse en idioma indio y que después comuniquen a sus alumnos conocimientos prácticos, los resultados no faltarán"[294].

Estos informes revelan una realidad lingüística en la que los intérpretes, profesionales y mediadores lingüísticos mapuche tienen una importancia fundamental en el periodo de la constitución de la propiedad reduccional. Esto explica por una parte el posicionamiento jurídico aventajado de las familias mapuche que han trasmitido el bilingüismo a través de diferentes generaciones, y de las familias que consiguieron enviar tempranamente a las generaciones más jóvenes a escuelas chilenas, donde adquirieron competencias en el castellano y la escritura alfabética. Esta posición destacada en el proceso de constitución de la propiedad será, sin duda, un incentivo para otras familias y comunidades mapuche para la escolarización futura de sus hijos, y da cuenta de la incidencia de la ideología jurídica en la imposición de una ideología lingüística, por la cual la adquisición de la lengua dominante y su escritura se presentan como herramientas imprescindibles para la defensa de los derechos mapuche: una defensa presente y una defensa futura.

Un caso paradigmático de autonomismo: el "protector" Manuel Aburto Panguilef y el derecho propio de la "república araucana"

Terminaremos este recorrido por la historia del Protectorado de Indígenas, destacando el caso singular del dirigente Manuel Aburto Panguilef, por lo que significa su trayectoria y proyecto político como forma de apropiación y traducción de la institucionalidad tutelar proteccionista a una forma autonomista del derecho mapuche en la época reduccional. Como mencionamos más atrás, estudió sus primeras letras en la Misión anglicana de Kepe, bajo la supervisión del pastor Carlos Sadleir, y luego se incorpora al trabajo evangelizador de la iglesia bautista de La Unión dirigida por Albert Dawson, de la cual desiste en 1906. En 1910, es contratado como intérprete del Protectorado de Valdivia, experiencia cuya importancia él mismo resalta en una entrevista dada varios años más tarde:

> "El año 1910 fui designado intérprete del Protectorado de Indígenas de Valdivia, donde empecé a preocuparme de la cuestión de las leyes. Mi jefe, señor Carlos Guillermo Irribarra, el actual Protector, mediante mi rectitud y con-

[294] Informe del visitador de escuelas Anselmo de la Cruz, *op. cit.*

> sagración al estudio, me dio buenos consejos en más de una ocasión y por iniciativa del él exhibí en Valparaíso en el Centenario, algunos trabajos de tejidos y adornos de plata que elaboran los indígenas. Inmediatamente de crearse el departamento de Villarica, fijé mi residencia en Pitrufquén sirviendo de escribiente en el estudio de los señores abogados Medardo 2º Jaque y Franklin Gallegos de quienes gocé siempre de la mejor estimación"[295].

Su trabajo como intérprete del Protectorado resulta clave para entender la formación de su pensamiento y trayectoria política posterior y, a la vez, para dar cuenta de la actualización de la práctica política prerreduccional en el periodo de la radicación. Era nieto de Luis Aburto Ayñamko, quien adopta por alianza el *laku* de la familia de "comisarios de naciones" de la región de Valdivia, funcionarios coloniales que destacaron por otorgar los llamados "títulos de Comisario", primeros títulos de propiedad otorgados por el Estado colonial a los mapuche-huilliche. El primero de estos comisarios fue Francisco Aburto, nombrado por Ambrosio O'Higgins en 1793, hasta el año 1821 en el que su hijo Francisco Aburto Ramírez asume el cargo. La familia Aburto reemplazará así a los Uribe y Jaramillo que ocupaban el cargo en el siglo XVIII. Es con Francisco Aburto Ramírez que se vinculará por alianza el *longko* José Cayo Ayñamko de Niguen, adoptando el nombre Aburto, el que transmitirá a su hijo Luis Aburto Ayñamko, abuelo de Manuel Aburto Panguilef. Luis Aburto es mencionado en varias crónicas como "cacique civilizado", actuando entre 1860 y 1870 como joven secretario de su padre José Aburto Ayñamko y de su primo Juan Aburto, mientras que el criollo Manuel Aburto era comisario de naciones. Luis Aburto fue el padre del afamado *longko* secretario de Juan Kalfukura en las Pampas y tío de Aburto Panguilef, Bernardo Aburto Namuncura, quien recomendará a Manuel Aburto para ser educado en la Misión anglicana de Quepe[296]. Aburto Panguilef provenía así de una familia con varias generaciones de *longko* letrados, que además había establecido una temprana alianza con funcionarios estatales de la institucionalidad mediadora colonial.

Entre 1914 y 1915, deja el cargo de portero-intérprete del Protectorado de Valdivia, y en 1916 se instala en Pitrufquén como ayudante de un gabinete de abogados, que lo apoyan para que estudie derecho en Santiago, pero decide, al final, dedicarse por entero a la actividad política y cultural[297]. Sin embargo, su paso por el Protectorado lo llevó a valorar la tradición jurídica colonial de

[295] Manuel Aburto, entrevista en *El Mercurio*, en Manuel Aburto Panguilef, *Libro diario del presidente de la Federación Araucana*, edición de André Menard (Santiago, CoLibris. 2013), p. 911.

[296] Paul Treutler, *Andanzas de un alemán en Chile, 1851-1863* (Santiago, Editorial del Pacífico, 1958), p. 419; Guevara, *Las últimas familias..., op. cit.*; Parentini, *op. cit.*, p. 77; Menard y Pavez, *Mapuche y anglicanos...*, *op. cit.*; André Menard, "Estudio preliminar: Manuel Aburto Panguilef y los archivos de la Federación Araucana", en Manuel Aburto Panguilef, *Libro diario del presidente de la Federación Araucana Manuel Aburto Panguilef* (Santiago, Colibris, 2013), pp. XVII-XXI.

[297] Menard, "Estudio preliminar...", *op. cit.*, pp. XXV-XXVI.

reconocimiento de los derechos mapuche, tanto por el derecho indiano (los tratados hispano-mapuche como el Parlamento de Las Canoas de 1793 y los títulos y bastones de mando otorgados por el comisario de naciones Francisco Aburto)[298] como el derecho nacional chileno y sus Leyes de Radicación de 1866 y 1874. Al mismo tiempo, su interpretación de este corpus jurídico heteronómico lo llevó a afirmar una reivindicación del derecho consuetudinario y del papel de los dirigentes mapuche en la administración de justicia, es decir, a una forma de autonomismo político al que dará sentido en su práctica política, jurídica e intelectual. Esta posibilidad autonomista mapuche como práctica que adopta los códigos y las formas de la institucionalidad y la legalidad estatal, puede haberla vislumbrado desde su papel de portero-intérprete del Protectorado, tal como afirma su hijo Germán Aburto, al destacar la resignificación del trabajo del intérprete en una mediación plenamente jurídica:

> "Mientras que era lenguaraz, venía uno, venía otro convocados, y él total que era el juez el que fallaba, no ve que si el mapuche no sabía hablar castellano, y el juez tampoco, total que él era el juez"[299].

Al dejar el Protectorado y asumir un trabajo como ayudante de un bufete de abogados, el portero-intérprete o lenguaraz vuelto "juez" deviene en tinterillo mapuche, como uno más de esos agentes que "han abrazado la profesión de acompañar y dirijir a los indígenas en todas sus diligencias", como define al tinterillo el protector Schwerter de Llanquihue[300]. El proceso de desinstitucionalización del mediador jurídico-lingüístico implica aquí la afirmación de una posición de autonomía para interactuar con los aparatos jurídicos, posición con la que Manuel Aburto reforzará su comprensión jurídico-política de la importancia de las leyes de radicación como legislación que reconoce la propiedad mapuche de las tierras, de la necesidad de una organización propia de "protección mutua", y de un "archivo propio" del pueblo mapuche, que incluyera un registro civil propio y el desarrollo de una jurisprudencia del "derecho propio".

Este proyecto político se inicia en 1918 con la creación por Manuel Aburto de la Sociedad Mapuche de Protección Mutua de Loncoche, cuando el exintérprete renuncia a la posibilidad de estudiar leyes y decide dedicarse por entero a la actividad política. En 1921, a raíz del primer Congreso Araucano convocado por Manuel Aburto y la Sociedad de Protección Mutua, esta se trans-

[298] En una de las conclusiones del 4° Congreso Araucano de la Federación Araucana realizado en Huincul, Nueva Imperial, en diciembre de 1924, se señala textualmente: "Que el Supremo Gobierno debe hacer respetar todos los títulos otorgados por el Comisario de Naciones, don Francisco Aburto y por los Jueces de primera instancia y Gobernadores, a todos los indígenas que tengan estos títulos". Véase Alcaman, *op. cit.,* p. 63.

[299] Entrevista a Germán Aburto, en Menard, "Estudio preliminar...", *op. cit*., p. XXIV.

[300] José Schwerter, *Memoria del Protectorado de Llanquihue para el año 1912*, en este volumen, p. ??.

forma en la Federación Araucana y aspira a representar al pueblo mapuche en su conjunto mediante la organización de consejos federales locales. Él mismo cuenta las circunstancias por las cuales entiende la necesidad de una organización representativa cuya opinión sea considerada en la elaboración de las leyes relativas a indígenas, en el contexto en que se discute la pertinencia de las leyes de radicación y la necesidad o no de impulsar la subdivisión de las tierras reduccionales:

> "En el mes de agosto de 1921, en presencia de don Carlos A. Sadleir, de don José Andrés Huichalaf y otros en las oficinas de uno de los Ministerios, manifesté al señor Montané, el actual inspector general de Colonización e Inmigración, que no estaba de acuerdo con los demás apóstoles de esta raza que quiere la exterminación completa de ella con todas sus costumbres en el país[301]. Agregándole que solo la voluntad soberana de la Araucanía era la llamada para pedir las leyes que le convenían y nadie más. El señor Montané celebró mi idea y me dijo que convocáramos a una reunión a todos los mapuches, cuyas conclusiones sería tomadas muy en cuenta en la elaboración del proyecto de ley por los indígenas"[302].

Luego de esta reunión con el Inspector General, superior jerárquico de los protectores de indígenas, decide convocar al Primer Congreso Araucano, momento de fundación de la Federación Araucana, que asume la misión de:

> "Luchar en todo sentido para sublimar todas las costumbres religiosas y sociales de esta raza que nadie puede impugnar científicamente, defendiendo su moral, sus derechos que por leyes especiales les corresponden y que no a obstante ellos, ha sido despojada de todas sus tierras"[303].

En los estatutos de fundación de la Federación Araucana:

> "Se declara que el Estado ha dictado leyes que son manifiestamente claras para la correcta constitución de la propiedad indígena. Que ellas no se han cumplido y en cambio se ha alterado en la forma mas odiosa, criminal e inmoral, la propiedad de esta raza",

y se acuerda "exigir el estricto cumplimiento de las leyes de radicación y luchar a pecho desnudo en contra de todos los abusos". Para esto, se buscará:

[301] Se refiere, sin duda, a Manuel Manquilef, quien expresaba con el lema "matar al indio", su oposición a las leyes de radicación y las "leyes prohibitivas" que impedían la subdivisión de reducciones.

[302] Aburto, *Libro diario...*, *op. cit.*, p. 911.

[303] *Ibid.*

> "Que la defensa de los indígenas respecto de sus intereses ante los Tribunales de Justicia, pase enteramente bajo la responsabilidad y riesgo de la Federación, la que tendrá un procurador judicial y un abogado en cada departamento y un abogado en las Cortes de Apelaciones, bajo su vigilancia y fiscalización, debiendo recibir ella los sueldos de los señores protectores de indígenas para su absoluta libertad en la defensa de sus hermanos"[304].

Por la forma de su génesis, por sus aspectos formales y por la posición que aspira a ocupar en la mediación político-jurídica entre los mapuche y el Estado, el proyecto de Aburto se puede entender como una forma de Protectorado de Indígenas autónomo y autoinstituido, que busca ser legitimado por el Estado heterónomo. El antes portero-intérprete del Protectorado de Valdivia no solo destaca la reunión con el Inspector General de Colonización como incentivo a la creación de una organización que represente legalmente a los mapuche, sino, también, la necesidad de velar por la correcta aplicación de las "leyes especiales" y la defensa jurídica de los mapuche, para lo cual la organización contará, al igual que los protectorados, con abogados que los representen. Y para dejarlo aun más claro, propone que los sueldos de los protectores de indígenas financien la actividad jurídica de la Federación Araucana. Hasta donde sabemos, se trata del primer proyecto mapuche de una institucionalidad autonómica jurídico-legal que funcionaría en el marco del Estado chileno.

Una vez formulados tales objetivos, Manuel Aburto y la Federación empiezan a actuar en consecuencia, y uno de los principales instrumentos de esta administración autónoma mapuche de los procedimientos jurídicos será la elaboración de registros de demandas, como el "libro especial de reclamos" que los asambleístas del Segundo Congreso Araucano acuerdan abrir en 1922, para que la:

> "Oficina central de la Federación Araucana, se dirija a las autoridades de la provincia para la atención del Consejo o Consejos en sus distintos reclamos que formulara ante ellas por todos los araucanos que sean víctimas de cualquier abuso"[305].

La Federación Araucana no se limitará a dejar registro de las demandas sino a actuar en la corrección de las decisiones judiciales, fomentando la recuperación de propiedades que consideraba usurpada. En mayo de 1923, por ejemplo, a través de un comunicado público firmado por Manuel Aburto Panguilef, la Federación señalaba:

[304] Aburto, *Libro diario...*, *op. cit.*, p. 912.

[305] Véase Eugenio Alcamán, *Memoriales mapuche-williches. Territorios indígenas y propiedad particular (1793-1936)* (Osorno, Conadi, 2010), p. 59.

> "El Consejo Federal de Nolguehue, después de haber comprobado la usurpación hecha con el amparo de la justicia del fundo Cotrelino, de una casa de tres pisos avaluada en cinco mil pesos y otra avaluada en tres mil, había repuesto en sus casas y propiedades a los hermanos Ancol"[306].

Los intendentes de las provincias de Valdivia y Llanquihue consideraron esta "acción de reposición" como una provocación y que la Federación Araucana se había puesto:

> "En pugna con los poderes públicos [...] induciendo a sus miembros a no acatar las resoluciones gubernativas en materia de lanzamientos [porque] en ningún caso la Federación podía reclamar o pedir cuentas que la constituirá en otro poder del Estado con más facultades que cualquiera de las ya establecidas"[307].

El diario *El Osorno,* en cambio, mostrará cierta simpatía con la acción del Consejo Federal amparado por la Federación Araucana, revindicando la diferencia acusada por los mapuche entre el respeto a las leyes y la desobediencia a las autoridades estatales, señalando:

> "Los araucanos, respetuosos siempre de las leyes, no han podido así no más rebelarse contra autoridades y poderes constituidos. Quién sabe si estudiando a fondo la cuestión, se podría, si no justificar, por lo menos explicarse la actitud de los que de modo tan enérgico como inesperado resisten el cumplimiento de una orden judicial"[308].

La Federación seguirá insistiendo en la defensa de las leyes existentes y la necesidad de su correcta aplicación. En el Tercer Congreso Araucano de diciembre de 1923 realizado en Riachuelo, la Federación propone, incluso, la dictación de una "ley especial" que repare en los perjuicios creados por la falta de implementación de las leyes existentes:

> "Para las ampliaciones de las radicaciones [...] el Honorable Congreso Nacional, interpretando a la letra el sentido de dichas leyes, debe dictar cuanto antes una ley especial disponiendo la devolución de sus tierras que por distintas formas se les haya robado a los indígenas y que los grandes terratenientes y concesionarios de las Compañías Colonizadoras deben devolver al Estado la mitad de los predios que ocupen para la radicación de los indígenas conforme a la ley. Y que el Estado debe reservar los terrenos fiscales que aun posee con el mismo fin".

[306] Véase Alcamán, *Memoriales mapuche-williches..., op. cit.*
[307] *Op. cit.*, p. 60.
[308] *Op. cit.*, p. 62.

A esto agrega un acuerdo de la asamblea para hacer una crítica explicita a la política seguida por el Poder Ejecutivo, que fue la forma práctica de no aplicar las leyes de radicación, tal como venía denunciando el protector Robles desde principios de siglo. Así el decimotercer acuerdo del Congreso establece:

> "Protestar en la forma más enérgica por el hecho de que ese gobierno sigue haciendo rematar tierras fiscales sin estar terminada la radicación legal de los indígenas y sin tomar en cuenta las justas peticiones de los dos Congresos Araucanos, pues según las leyes que ha empezado a defender la Federación Araucana, el S. Gobierno no puede hacer rematar tierras fiscales sin estar previamente terminada la radicación de los indígenas en conformidad a esas leyes [de 4 de diciembre de 1866 y de 4 de agosto de 1874]"[309].

A fines de 1924, durante el desarrollo del IV Congreso Araucano en Huinquil (Nueva Imperial), Manuel Aburto ofrece una entrevista al diario *La Nación* de Santiago, donde reitera su convicción de que:

> "Cumplidas esas leyes [de 1866 y 1874] los indígenas serían dueños de sus tierras, no como ocurre actualmente, que muchos no tienen nada, y la mayor parte son dueños de una hectárea"

y que "nuestros derechos están garantidos por las leyes dictadas pero no cumplidas". La defensa de las leyes de radicación se volvería una cuestión clave en la campaña en contra de una ley de subdivisión de las reducciones activamente promovida por los funcionarios de colonización y ciertos líderes mapuche como Manquilef. Por eso Aburto y la Federación optan por insistir en la histórica demanda de aplicación efectiva ley y no su cambio por otra:

> "Los araucanos estiman que cualquier ley que se [dicte] vendría a perjudicarlos, ya que solo aspira a la estricta aplicación de las leyes ya dictadas, las que son lo bastante buenas para favorecerlos"[310].

Los años que siguen serán claves en la disputa ideológica, política y legislativa en torno a las tierras mapuche. En 1926, Manuel Manquilef es elegido diputado por el Partido Liberal Democrático y se propone impulsar una ley de subdivisión de comunidades, mientras que la "gran asamblea interprovincial" convocada a mediados del año por la Sociedad Caupolicán parece ser el último intento por conciliar las posiciones de los dos bloques mapuche respecto a la constitución de la propiedad indígena[311]. En ese momento, la Sociedad dirigida

[309] Véase Alcamán, *Memoriales mapuche-williches..., op .cit.*, p. 63.

[310] Aburto *Libro diario..., op. cit.*, pp. 914-915.

[311] "Ayer se inicia la gran Asamblea Interprovincial auspiciada por la Sociedad Caupolicán", en *El Diario Austral*, Temuco, 7 de abril de 1926.

entonces por Arturo Huenchullán se une con la Federación Araucana de Manuel Aburto para conformar el Comité Ejecutivo de la Araucanía, y a fines de ese año, ya está consumada la distancia con Manquilef, quién no asiste al Congreso Araucano. Al año siguiente, Carlos Ibáñez da un golpe de Estado que derroca Arturo Alessandri, iniciando una etapa de persecución a varios dirigentes políticos, entre ellos a Aburto Panguilef quien será detenido y relegado en Santiago para alejarlo del Ngulumapu.

En el marco de esta persecución de la dictadura, que también afectaba a comunistas y movimientos obreros, en 1929 el ministro del Interior ordena por telegrama al intendente de Cautín Arturo Vidal: "Sírvase US impedir enérgicamente toda actividad Aburto Panguilef de las que se le han impedido"[312]. La orden es trasmitida inmediatamente al Prefecto de Carabineros, y poco después, en oficio confidencial el Intendente señala al Ministro:

> "En la última investigación sobre las actividades de Manuel Aburto Panguilef quedó comprobado que hacía propaganda entre los Araucanos en el sentido de que estos solo debieran obedecerle a él y no al Tribunal de División de Comunidades Indígenas".

Dos semana después, el intendente Vidal envía a los gobernadores de departamentos una circular confidencial "sobre las actividades de Manuel Aburto Panguilef" donde consta la "orden del señor Ministro del Interior de impedir de manera enérgica que el referido indígena continúe en las actividades que le están prohibidas", para lo cual establece el siguiente "modo de proceder": Primero, "no se tramitarán oficialmente las comunicaciones que Aburto dirija como Presidente de la 'Federación Araucana' "; segundo:

> "No se le reconocerá el carácter de 'Jefe moral de la raza Araucana', por cuanto el Gobierno ha designado Protectores de Indígenas y Tribunales especiales para arreglarles su situación y hacerles ingresar a la actividad nacional";

tercero, que aunque la Constitución (art. 10, inc. 3) reconoce la libertad de los ciudadanos "de emitir sin censura previa sus opiniones", estos:

> "Deberán responder de los delitos y abusos que cometan en el ejercicio de esa libertad; y como está comprobado que Aburto induce a los indígenas para que no acaten las órdenes del Tribunal de División, es por lo tanto subversivo,

[312] Telegrama de Ministro a Intendente, 2 de febrero de 1929, en Oficio de Intendente a Ministro, 18 de febrero de 1929, en ARNAD, Fondo Ministerio del Interior, vol. 7321. La carpeta porta la inscripción Archivo C. L. S. Providencia 1556. El seguimiento de las actividades de Manuel Aburto fue ordenado por la providencia n.º 625, de 8 de noviembre de 1929 (1928), rótulo bajo el cual se ordenará la documentación acumulada sobre él.

> obrando contra el Gobierno; excitando por consiguiente a que se altere el orden público";

y cuarto, que:

> "Cuando llegue Aburto a algún Departamento de la Provincia, el Gobernador se servirá citarlo a su oficina y hacerle saber que será estrictamente vigilado y controlado hasta que lleve una vida normal y se dedique al trabajo"[313].

Pocos días después, el 9 de marzo 1929, la policía de Ibáñez procederá a allanar la sede de la Federación Araucana en Loncoche y requisar sus archivos, que nunca serán devueltos a la organización[314]. Estos archivos constituyen una importante fuente para entender el papel que pretendía cumplir y ejercían en la práctica Aburto Panguilef y la Federación Araucana, como doble mapuche o sustituto autónomo del Protectorado de Indígenas en la administración y mediación político-jurídica de los asuntos mapuche. Al mismo tiempo, los archivos incautados muestran la preocupación que genera en las autoridades estatales este proyecto de protectorado autoinstituido y sus actividades de administración paralela de la sociedad y la justicia.

El capitán y comisario Alberto Sotomayor a cargo del seguimiento de Manuel Aburto y la Federación señala en su informe sobre el allanamiento:

> "Por referencia y los documentos que acompaño, se desprende que sus actividades son amplias y absolutas, entre los indígenas, no conociendo estos más autoridad que al referido individuo, quien cobra honorarios por hacer algunas diligencias".

Los documentos que acompaña son legajos de los casos atendidos por Manuel Aburto y que "comprueba lo aseverado más arriba, en el sentido de ejercer autoridad autónoma, sin considerar los Tribunales Ordinarios". Entre estos casos están los acercamientos de Aburto al Partido Comunista para el impulso de propuestas legislativas, el interceder ante el mando de Carabineros para solicitar el traslado de un policía mapuche, la resolución de conflictos entre mapuche por acusaciones de hechicería, la gestión para excarcelación de reos comunes mapuche, reclamos formales contra un ingeniero de radicación, celebración de matrimonio mapuche "por ritos de la raza" (segunda esposa). Estas actividades muestran como Aburto había transformado la práctica de tinterillo o abogado particular que cobra por sus gestiones, en una actividad jurídico-política que se asemejaba a la mediación

[313] Circular confidencial sobre actividades de Manuel Aburto Panguilef, por Intendente de Cautín, 4 de marzo de 1929, en ARA, Fondo Gobernación de Villarrica, vol. 126.

[314] Hemos tratado la historia de esta incautación y reproducido varios de los documentos secuestrados en Menard y Pavez, "Los archivos del 29...", *op. cit.*

de un protector de indígenas y la resolución de un juez, tomando decisiones normativas que eran acatadas por los interesados. Para el capitán Sotomayor:

> "Aunque estos procedimientos no constituyen delitos penados por la Ley, por no efectuarse en conformidad a ellas, forman un aspecto inaceptable ante la civilización y por consiguiente dignas de censura. Por todas las consideraciones anteriores y por referencias recibidas, estimo que es un peligro para la tranquilidad total de la provincia, y sobre todo en el sector en que vive, Loncoche"[315].

El prefecto de Cautín Facundo Grismaldi reenvía al Intendente el informe policial y una serie de legajos incautados, agregando:

> "Las diversas actividades del expresado Panguilef son contrarias a la Ley, y que es necesario de una vez por todas hacer cesar una situación a todas luces irregular, tomando enérgicas medidas contra este individuo, para quien los tribunales ordinarios son letra muerta, ya que ejerce su acción entre los elementos indígenas, en tal forma que ha llegado a constituirse en autoridad, con evidente perjuicio de esa gente que por ignorancia vive supeditada a este individuo"[316].

En 1930, coincidiendo con la disolución definitiva de los Protectorados de Indígenas mediante la Ley n.º 4802 que crea los Juzgados de Indios, las principales organizaciones mapuche (Federación Araucana, Sociedad Caupolicán, Unión Araucana) realizan una asamblea de "reunificación de la raza" propuesta por Arturo Huenchullán[317]. Esta reunificación no pasará de buenas intenciones, ya que muy pronto volverán a manifestarse fuertes discrepancias, especialmente por las diferencias con Manquilef y el encono que generaba el liderazgo de Aburto entre los mapuche de la Unión Araucana cercanos a la Iglesia católica, como Antonio Chihuailaf a la sazón miembro del Juzgado de Indios recién creado. Al año siguiente, en el IX Congreso Araucano de Raguintuleufu, la Federación formulará por primera vez la propuesta de creación de una "república indígena", profundizando una opción autonomista coherente con su defensa y emulación de las antiguas instituciones del derecho indiano, en este caso, la "república de indios" como forma de gobierno autónomo que el Estado colonial reconocía como derecho de los "naturales" de América.

[315] Informe de actividades de Manuel Aburto Panguilef, por el capitán y comisario Alberto Sotomayor González de la prefectura de Cautín, 9 de marzo de 1929, en ARNAD, Fondo Ministerio del Interior, vol. 7321.

[316] Prefecto de Cautín Grismaldi a Intendente de la provincia de Cautín Vidal, 21 de febrero de 1929, en ARNAD, Fondo Ministerio del Interior, vol. 7321.

[317] "La Asamblea indígena de ayer aprobó la unificación de todas las instituciones aborígenes", en *El Diario Austral*, Temuco, 11 de febrero de 1930.

Nota final

Los Memorias de los Protectorados de Indígenas y otros documentos producidos en el marco de su labor constituyen una fuente muy importante para conocer el proceso de ocupación de la "Araucanía histórica" o Ngulumapu, de constitución ilegal de la propiedad particular y el proceso de usurpación de las tierras mapuche consumado durante el proceso de radicación en "reservas indígenas" o comunidades. Estos documentos resaltan crudamente la violencia constante ejercida en contra de ellos tanto por colonos particulares como por autoridades de todos los niveles del aparato estatal. Esta violencia, denunciada y documentada por estos funcionarios protectores, incluyó desde el homicidio de mapuche a manos de asesinos a sueldo, hasta múltiples formas de eludir las leyes de radicación mediante prácticas jurídico-administrativas como contratos, juicios de partición, formas de inquilinaje y cobros ejecutivos de deudas, pasando por el secuestro, incendios de propiedades indígenas y falsas imputaciones de delitos que llevaron a la cárcel a las propias víctimas de usurpación. No puede dejar de sorprender la amplitud y variedad del catálogo de prácticas de abuso y despojo de los mapuche por parte de pequeños y grandes colonos con la activa participación de funcionarios públicos, los que consiguieron inscribir propiedades usurpadas mediante las más rebuscadas e ilegales prácticas jurídicas y notariales. Los documentos de Protectorado testifican así de los vicios originarios que sustentan todo el proceso de constitución de la propiedad privada y que rige hasta hoy en la Araucanía.

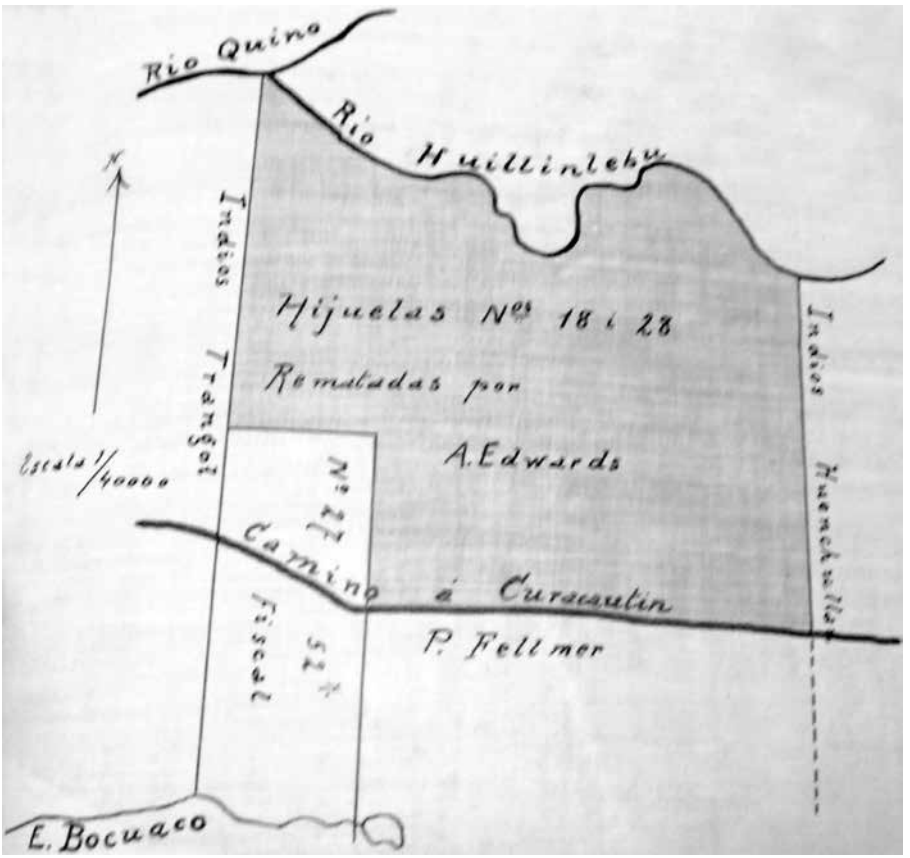
Agentes activos en la denuncia de los abusos y defensa de los intereses indígenas, aunque poco eficaces en sus resultados debido a la gran cantidad de obstáculos que estudiamos en esta introducción, los protectores que actuaron en el siglo XX fueron también presos de la ideología asimilacionista de la chilenización. Para esta ideología, las leyes especiales para indígenas, su formalización jurídica de la propiedad indígena comunitaria y sus restricciones a la compra y venta de la tierra, eran un contrasentido al proyecto republicano liberal que establecía la igualdad de los ciudadanos ante la ley, siendo entendida esta igualdad principalmente desde el derecho de propiedad individual y la libertad de comercio[318]. A pesar de considerarla negativa para el proceso de integración de los mapuche a la sociedad chilena (proceso llamado de "civilización"), la mayoría de los protectores del siglo XX (no así los del siglo XIX) se esforzaron en exigir la aplicación de las leyes, asumiendo con bastante paternalismo el papel de tutelaje que les otorgaban esas mismas leyes. Como tutores legales de mapuche en una sociedad etnocéntrica y racista que no consideraba al sujeto indígena suficientemente "civilizado" para defenderse a sí mismo, y que por eso les había otorgado una protección especial por leyes que no se cumplían, los

[318] Esta ideología liberal centrada en el comercio como factor de civilización fue traducida al derecho codificado en Chile por Andrés Bello. Cf. Julio Ramos, *Desencuentros de la modernidad en América Latina: literatura y política en el siglo XIX* (Santiago, Cuarto Propio, 2003).

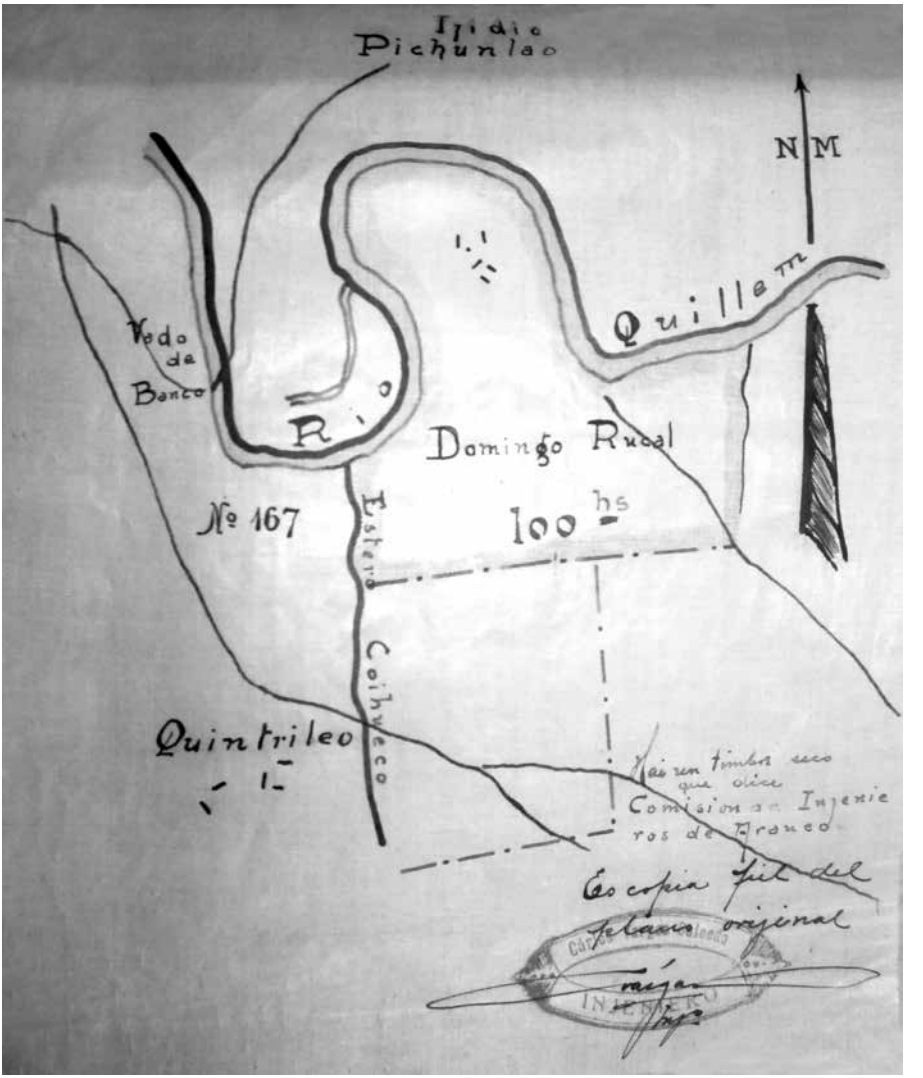
protectores fueron incapaces de entender que era esa misma lógica etnocéntrica de la ideología jurídica la que generaba los problemas que ellos observaban entre los mapuche. El proyecto estatal de colonización que representaban es el que había fomentado la destrucción de la organización social, política y económica mapuche. Los protectores nunca pudieron superar la ceguera epistemológica respecto a la violencia que generaba y legitimaba el proyecto "civilizatorio" colonial chileno (su carácter evolucionista lineal) contra la sociedad mapuche que se decía querer defender y respetar. Por eso, el Protectorado constituyó siempre un proyecto institucional extemporáneo tanto al proyecto legislativo que lo funda como al proyecto de colonización en el cual tiene que participar enfrentando a otras instituciones del Estado. Por eso resultó estratégica la vinculación de esta institucionalidad reduccional con las primeras organizaciones y dirigentes mapuche posocupación, y paradigmática la "traducción" autonomista que hace la Federación Araucana del sentido de la institución protectora, actualizando su anacronismo mediante una propuesta de mapuchización, es decir, que la protección jurídica no se concibiera ya como tutelaje racial de sujetos étnicos considerados "menores" jurídicos, sino como práctica de protección de los sujetos jurídicos de un pueblo por parte de sus propios representantes nacionales.

Jorge Pavez Ojeda
Santiago, septiembre 2020

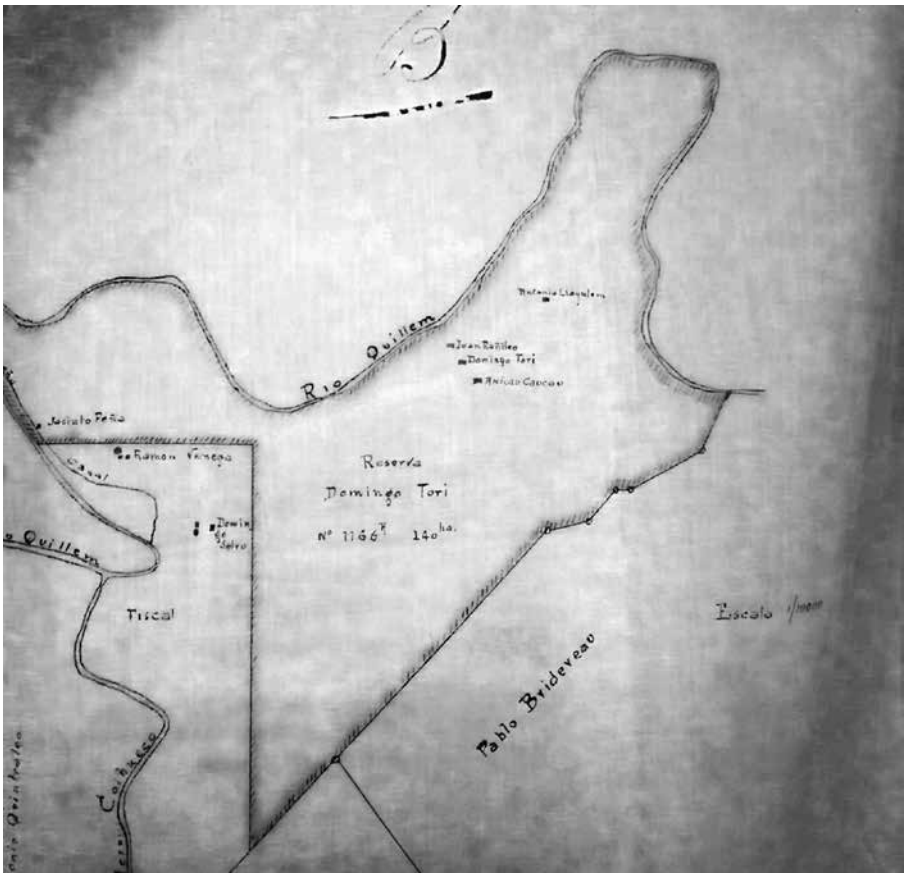
PLANOS Y MAPAS



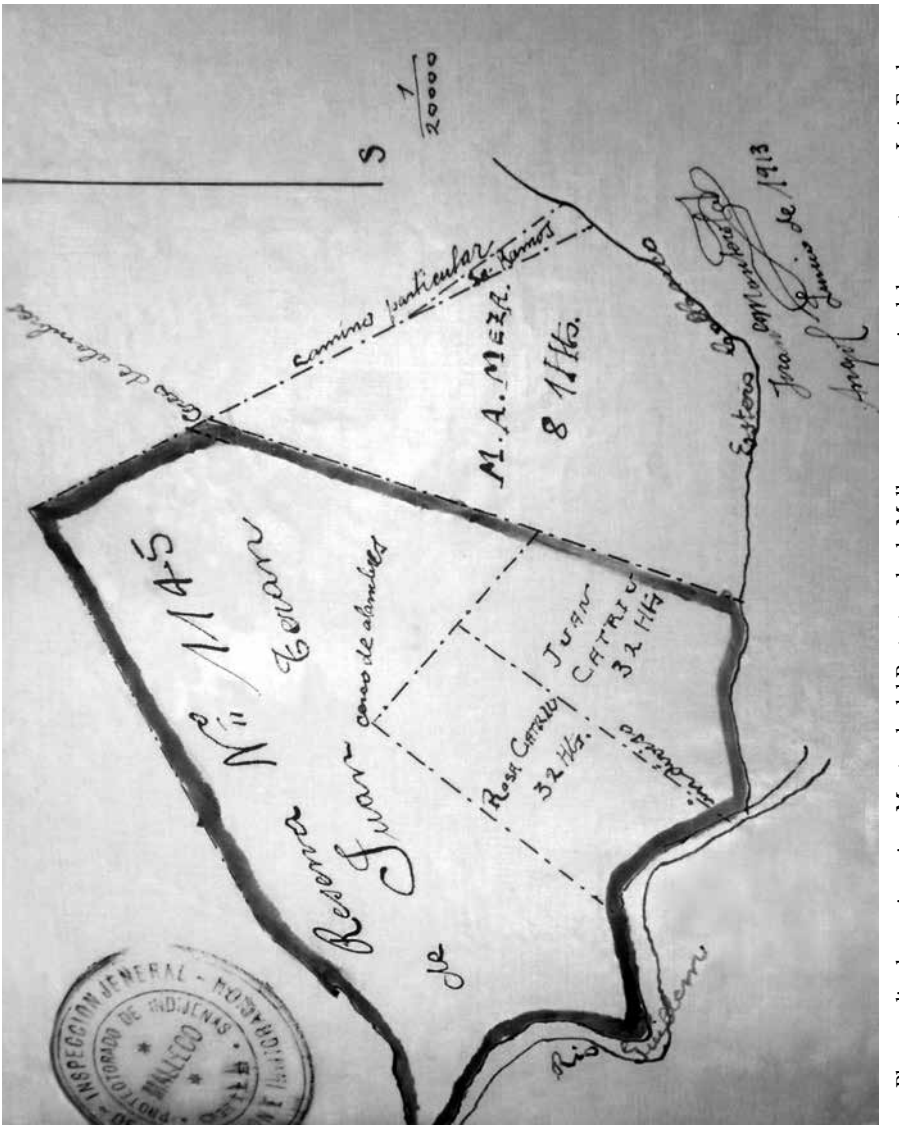
Plano de límites de terrenos de Llaulen (sucesor de Trangol) con las hijuelas rematadas por Agustín Edwards, por el ingeniero del Protectorado de Indígenas, enero de 1907, Fuente: ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1304.



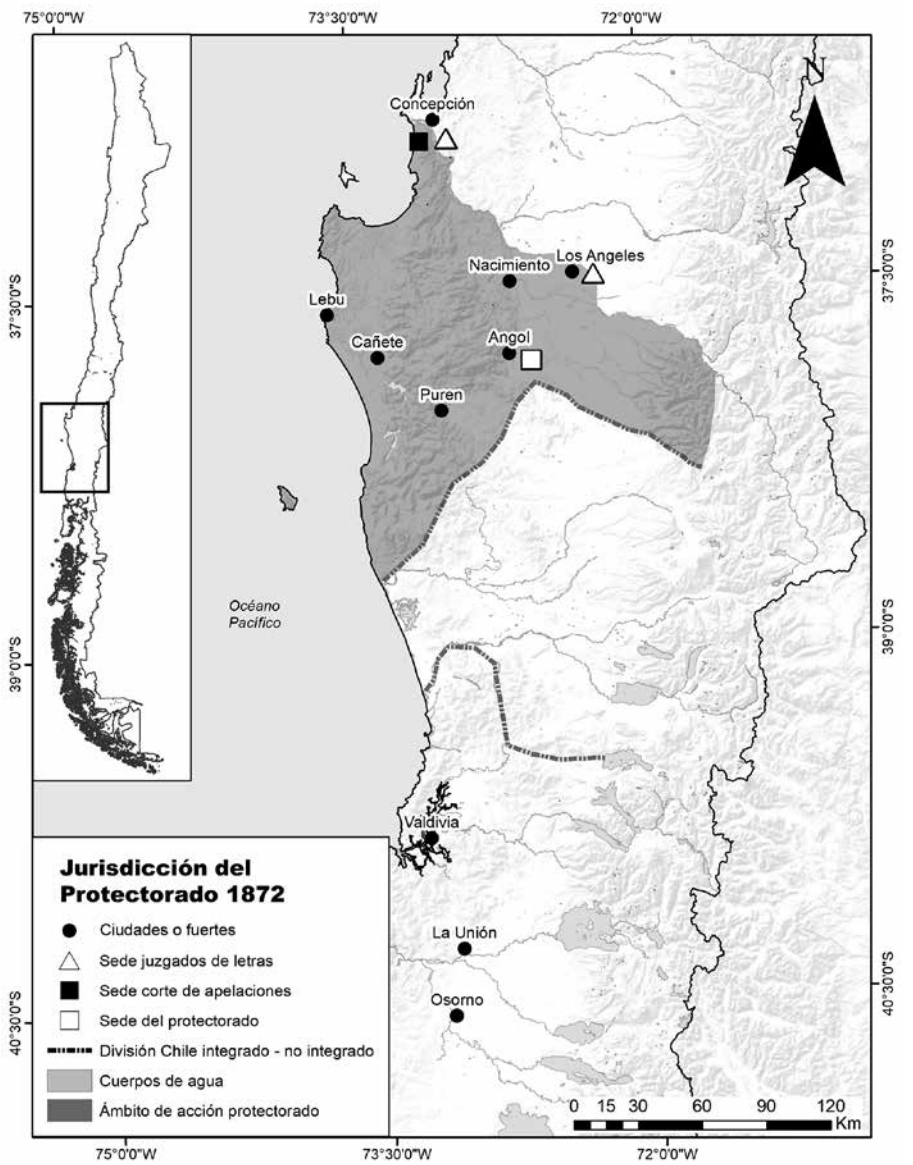
Plano presentado por Domingo Tori al Protectorado de Cautín, noviembre de 1912, en ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1850.



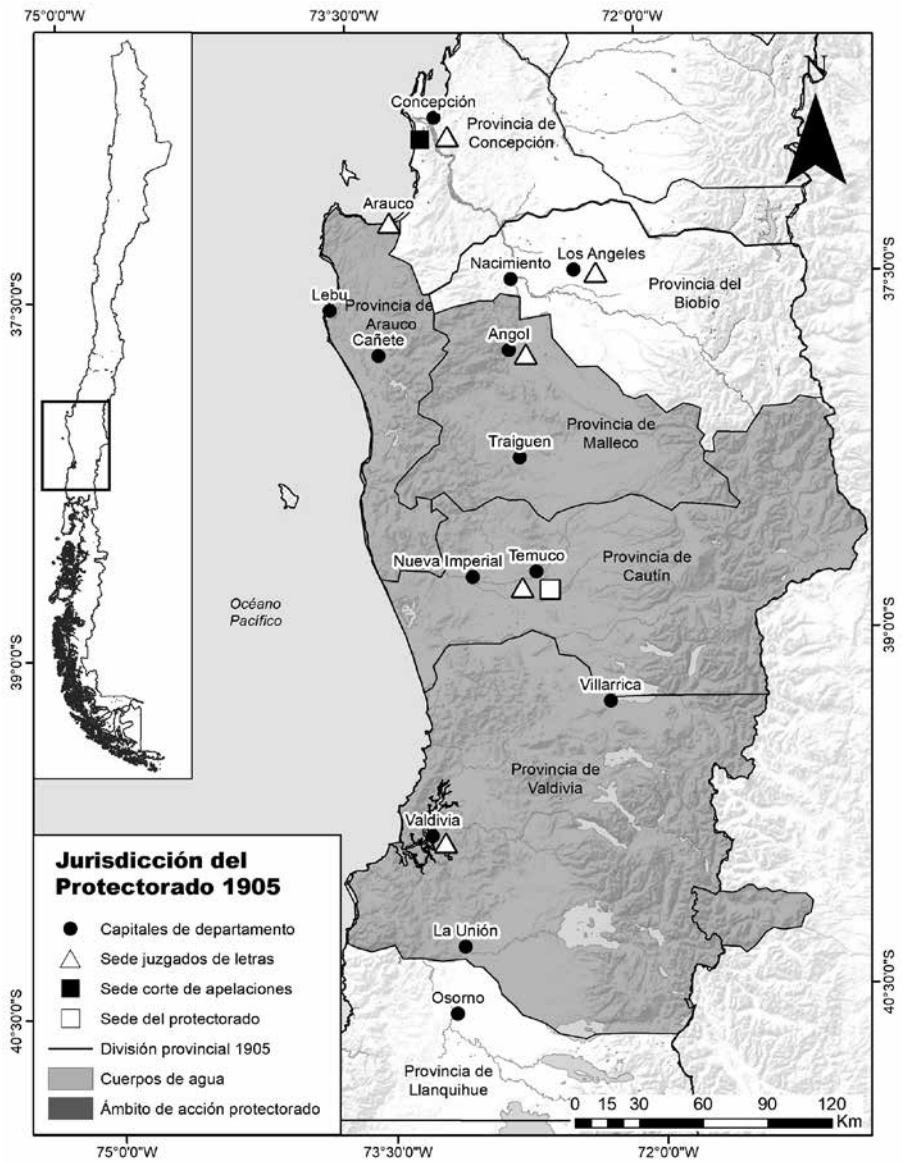
Plano realizado por la Comisión de Radicación de la reserva de Domingo Tori Rucal, circa de 1890, en ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1850.



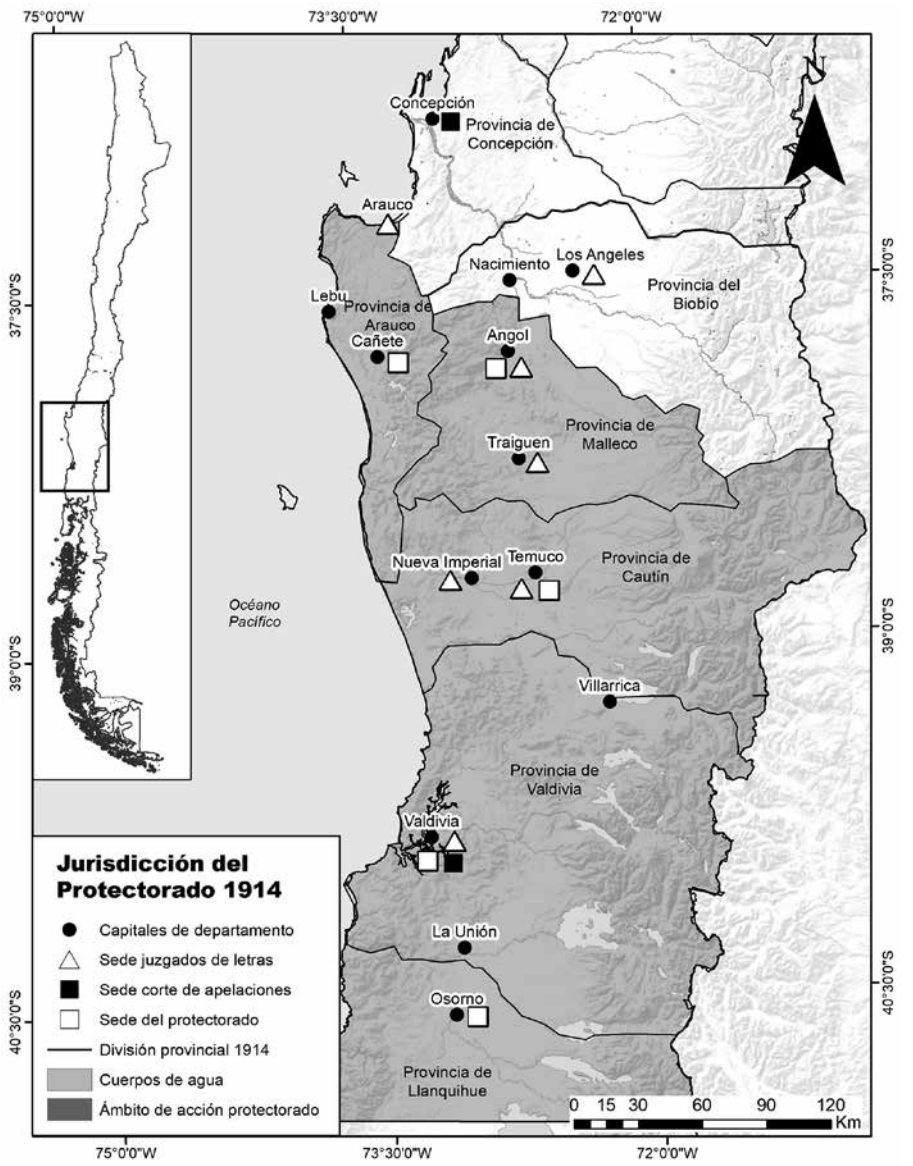
Plano realizado por ingeniero Manterola del Protectorado de Malleco, para corregir el de su antecesor Luis Fredes, que dejaba constancia de la ocupación ilegal del colono Meza, junio 1913, en ARNAD, Fondo MINREL, vol. 1850.



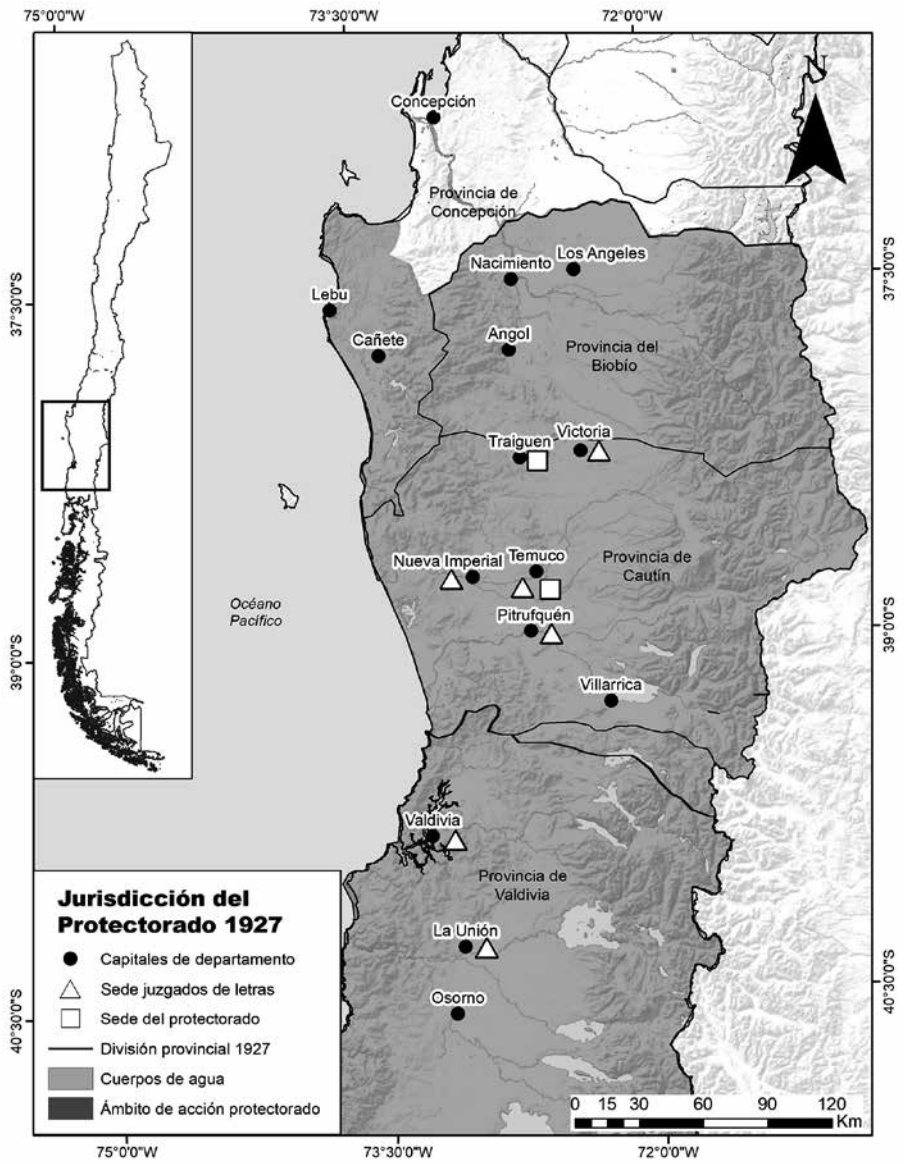
1872 – Área de Jurisdicción del Protectorado.
Elaboración: Felipe Castro Gutiérrez.



1905 – Área de Jurisdicción del Protectorado.
Elaboración: Felipe Castro Gutiérrez sobre la base de Rafael Sagredo Baeza, José Ignacio González y José Compan, *La política en el espacio. Atlas histórico de las divisiones político-administrativas de Chile. 1810-1940* (Santiago, Instituto Geográfico Militar/ Pontificia Universidad Católica de Chile/ Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2016).



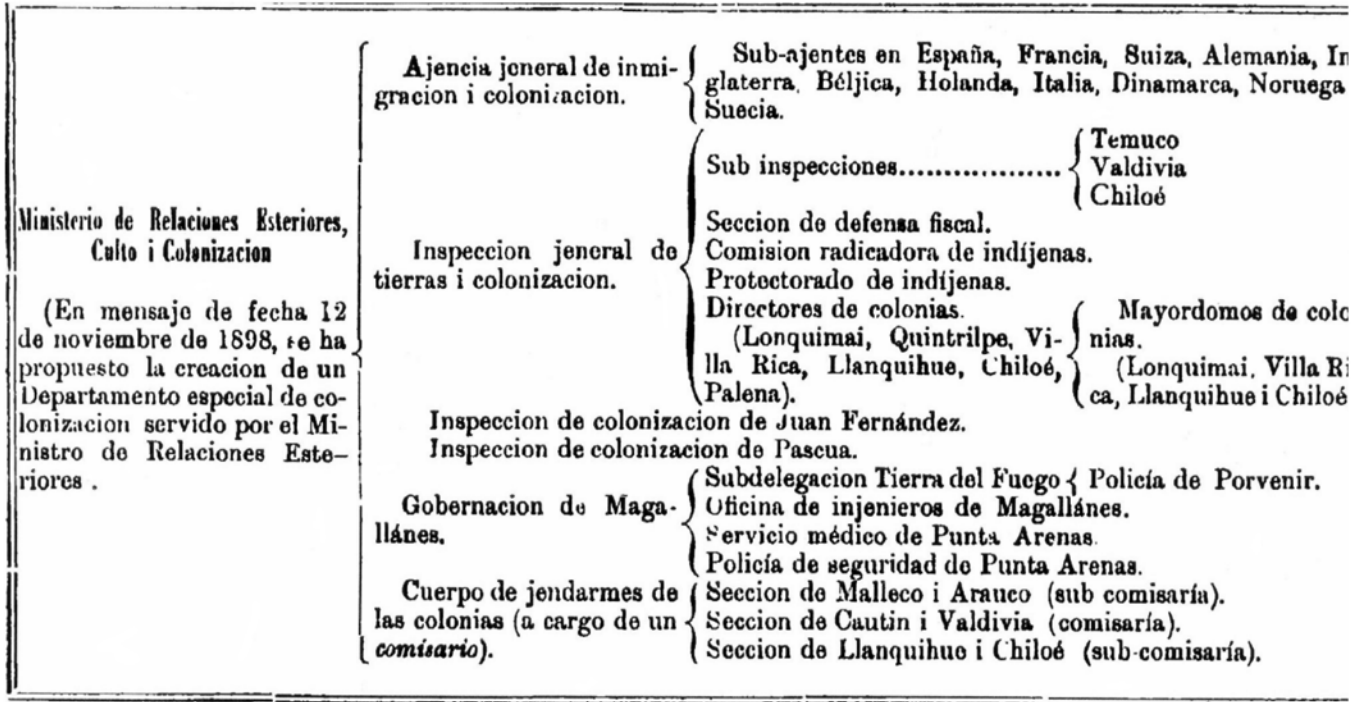
1914– Área de Jurisdicción del Protectorado.
Elaboración: Felipe Castro Gutiérrez.



1927– Área de Jurisdicción del Protectorado.
Elaboración: Felipe Castro Gutiérrez. sobre la base de Rafael Sagredo Baeza, José Ignacio González y José Compan, *La política en el espacio. Atlas histórico de las divisiones político-administrativas de Chile. 1810-1940* (Santiago, Instituto Geográfico Militar/ Pontificia Universidad Católica de Chile/ Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2016).

CUADROS

Cuadro 6
El Protectorado en su entorno institucional. Dos momentos: Ca. 1900 y 1906-1924



Ca. 1900. Fuente: Briones, *op. cit.*, 1900, p. 33.

1906-1924
Elaboración propia sobre la base de presupuestos
de la Inspección General de Colonización e Inmigración,
Fondo IGCI-ARNAD, y Memorias de la Oficina de Mensura de Tierras.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización Ministro (Santiago)	Inspección General de Colonización e Inmigración [ex Inspección General de Tierras y Colonización] Santiago	Repartición de Colonización (ex Subinspeccion)	Temuco Llaima Malleco Imperial Llanquihue Chiloé Valdivia	Secretario-Jefe Interventores de colonias Administradores de colonias Médico de colonias
		Repartición de Inmigración	Varios países	Agentes inmigración
		Hospederías	Valparaíso Talcahuano	
		Protectorado de indígenas	Arauco Malleco Cautín Valdivia Llanquihue	Protectores
Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización Ministro (Santiago)	Oficina de Mensura de Tierras	Dirección	Santiago	Director
		Sección Geodésica	Santiago	Agrimensores Ingenieros
		Sección Topográfica	Santiago	Agrimensores Ingenieros
		Servicio Regional	Arauco Malleco Cautin Valdivia Llanquihue Chiloé Magallanes	Agrimensores Ingenieros
		Comisión Radicadora de Indígenas	Temuco	Presidente Ingeniero Secretario

Nota: En 1900, el Protectorado y la Comisión Radicadora dependían ambas de la Inspección General de Tierras y Colonización y compartían ingenieros. A partir de 1906, con la creación de la Oficina de Mensura de Tierras, esta pasa a depender directamente del Ministerio, con el mismo rango que la Inspección General de Colonización e Inmigración, de la cual siguió dependiendo el Protectorado. La autonomía que adquiere la Oficina de Mensura en relación a la Inspección General generará una serie de problemas respecto a la disposición de ingenieros para el trabajo de radicación y protección de indígenas, que son analizados en la introducción a este volumen.

Cuadro 7
Esquema de la tramitación de una demanda en el Protectorado

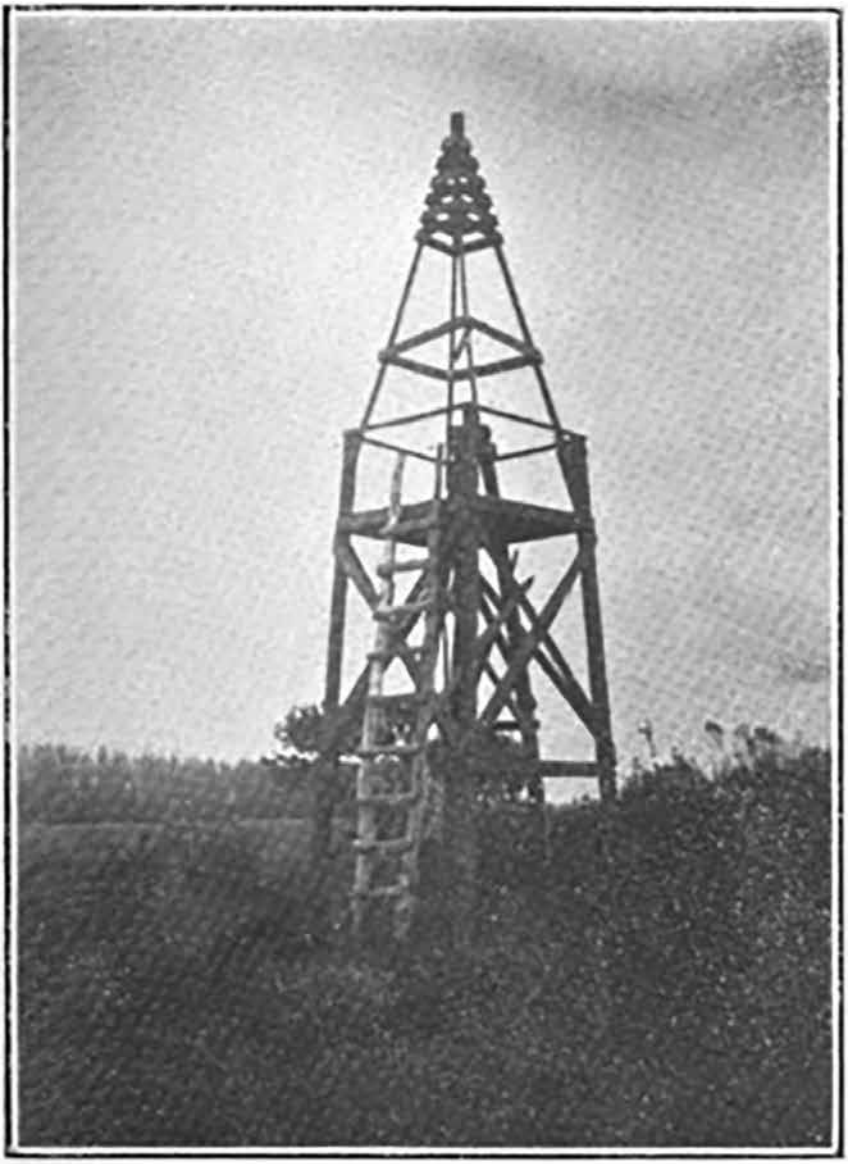
Pasos	Definición	Actores	Circunstancias y duración
Ingreso y recepción del demandante a la oficina del Protectorado	El demandante es recibido por el portero-intérprete, a quien formula las primeras consultas.	Demandante mapuche Portero-intérprete Tinterillo	El demandante mapuche llega desde su lugar de origen a la ciudad. Suponiendo que el Protector esté en la oficina, puede ser atendido en el acto. También puede ser captado y desviado antes por algún tinterillo que le ofrece sus servicios. Son comunes las quejas de los protectores al respecto.
Audiencia con el Protector	Se expone el caso en diálogo entre ambos, mediado por el portero-intérprete. El secretario toma nota.	Demandante mapuche Protector Secretario Portero-intérprete	El demandante se identifica, explica el caso, señala al demandado y trae o nombra testigos que cumplan los requisitos. Con estos antecedentes, el Protector evalúa el caso y da instrucciones al demandado para una segunda audiencia, si es preciso (por falta de testigos, por ejemplo, en cuyo caso el trámite puede dilatarse).
Recopilación de antecedentes *in situ*	El Protector ordena una verificación sobre el terreno	Protector Secretario Ingeniero Intérprete	Según disponibilidad del ingeniero, es despachado in situ para verificar deslindes y veracidad de reclamos o reivindicaciones. Se requiere intérprete. No se fija plazo para esta verificación, que depende de que los interesados se encuentren en el lugar.
Recopilación de antecedentes documentales	El Protector solicita antecedentes vía oficio a la Comisión Radicadora o a otras dependencias/autoridades (Delegaciones, Sub-Delegaciones, jueces)	Autoridades correspondientes	Se envían oficios solicitando los antecedentes. La celeridad de las respuestas depende de la voluntad y disponibilidad de los funcionarios, así como de las comunicaciones.
Dictamen y tramitación del caso	Sobre los antecedentes documentales, recogidos de palabra, y en terreno, el Protector determina las vías de tramitación: Mediación Solicitud de intervención de la fuerza pública Derivación del caso a Juzgados de Letras	Protector, demandante y demandado, con intérprete Protector, demandado, autoridad civil (gobernador y/o intendente), gendarmes Protector, demandante, demandado, abogado, fiscal, intérprete, juez, tinterillos	Los tiempos de tramitación son variables, sometidos a los plazos de respuesta de las distintas instancias, disponibilidad de agentes judiciales o tiempos de audiencia en los juzgados, y sujetos a cambios de circunstancias y otros imprevistos, entre ellos la intervención de los tinterillos, como se narra en las Memorias.
Registro e informe	Se elabora el informe anual o Memoria que se manda a la Inspección General.		Se registran los oficios en un libro copiador y se lleva el seguimiento. Se registra mensualmente el avance de los casos en tribunales mediante una planilla ad hoc. El término de los casos es imprevisible. De ahí que las Memorias se limiten a referir principalmente el número de casos atendidos y oficios redactados, y las planillas de casos judiciales pueden repetir casos durante varios años.

ILUSTRACIONES

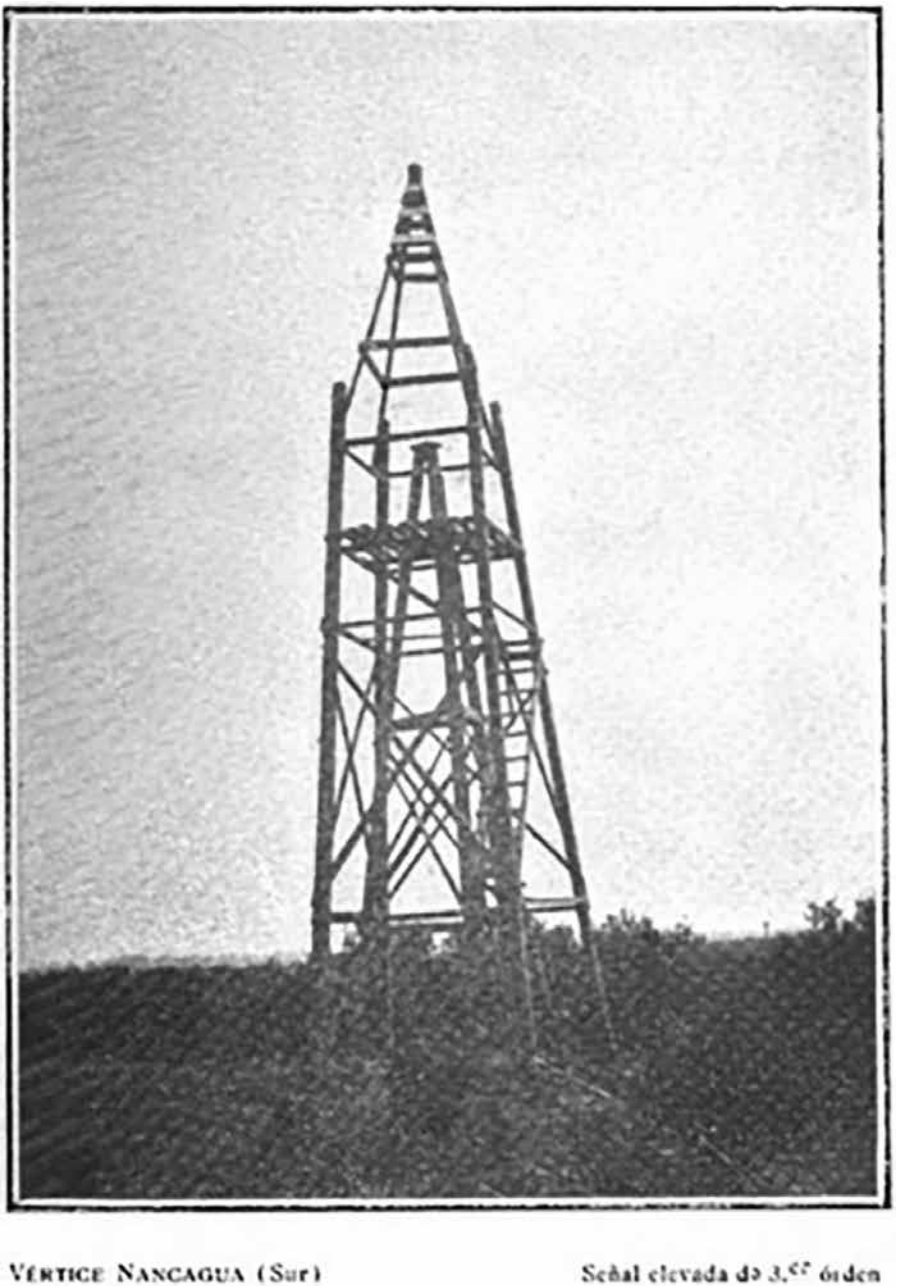


VÉRTICE NAHUELBUTA (Sur) Encatrado de reconocimiento y pilar de 1.er órden

"Vértice Nahuelbuta".
Fuente: *Cuarta Memoria del Director de la Oficina de Mensura de Tierras pasada al Señor Ministro de Colonización en abril de 1911* (Santiago, Imprenta y Encuadernación Universitaria, 1911), p. 33.



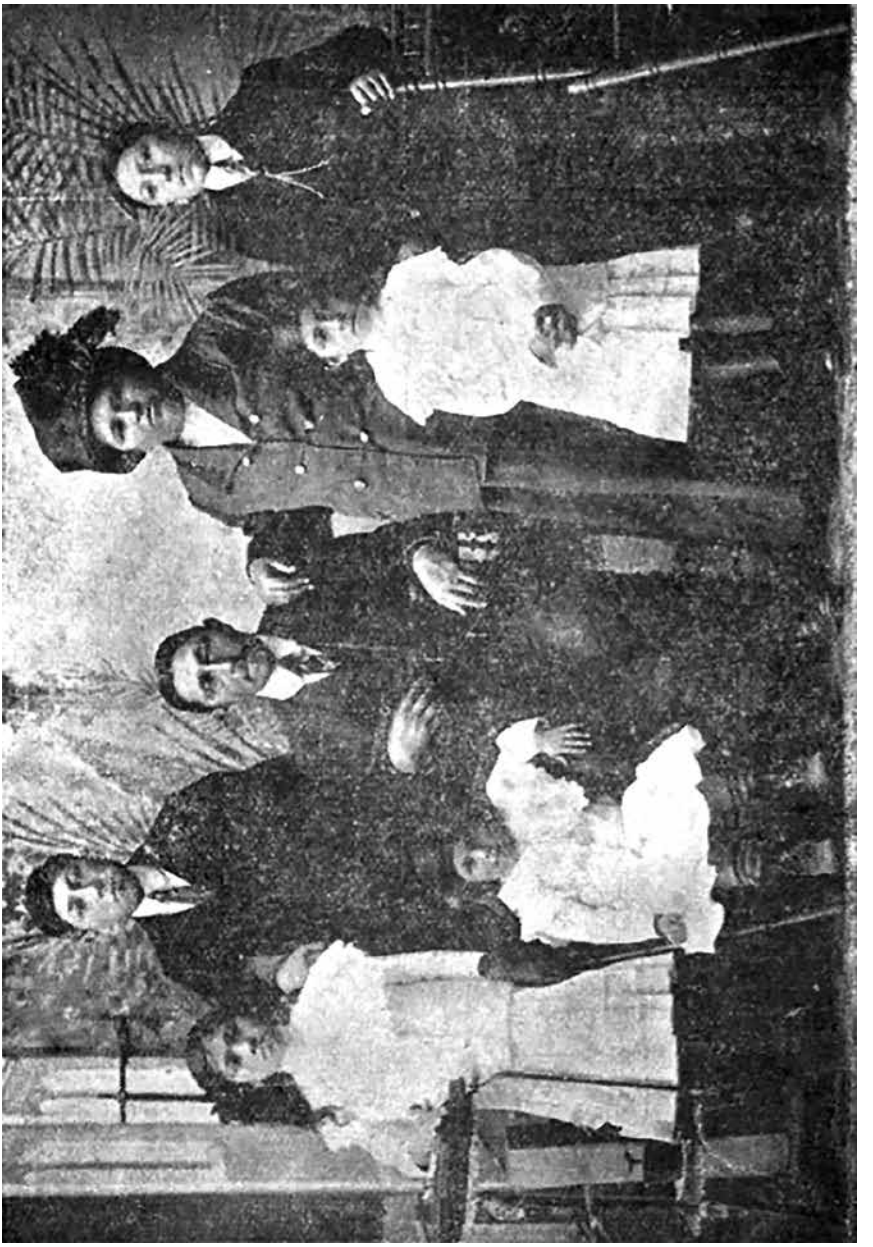
"Vértice Human (Sur). Schal elevada a 3er orden",
Fuente: *Cuarta Memoria del Director de la Oficina de Mensura de Tierras..., op. cit.*, p. 48.



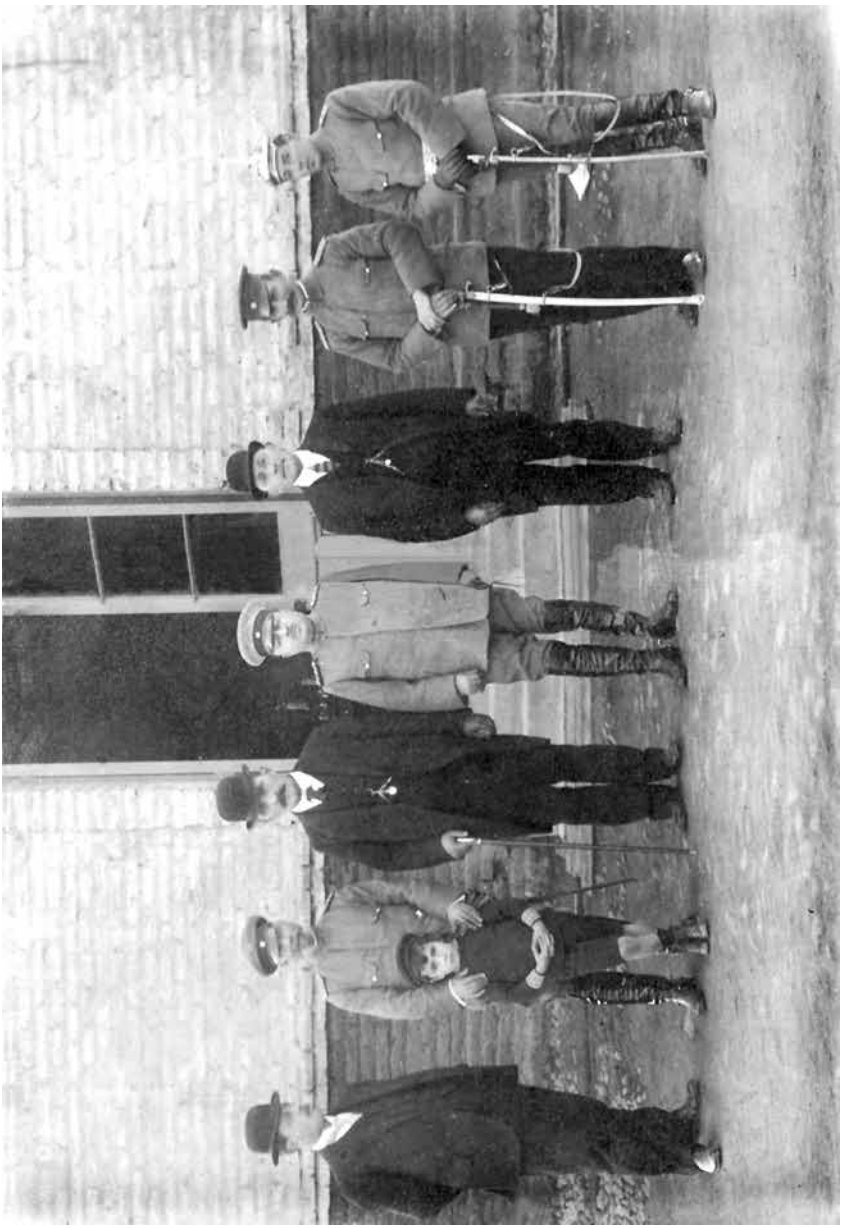
"Vértice Nancahua (Sur)".
Fuente: *Cuarta Memoria del Director de la Oficina de Mensura de Tierras..., op. cit.*, p. 65.



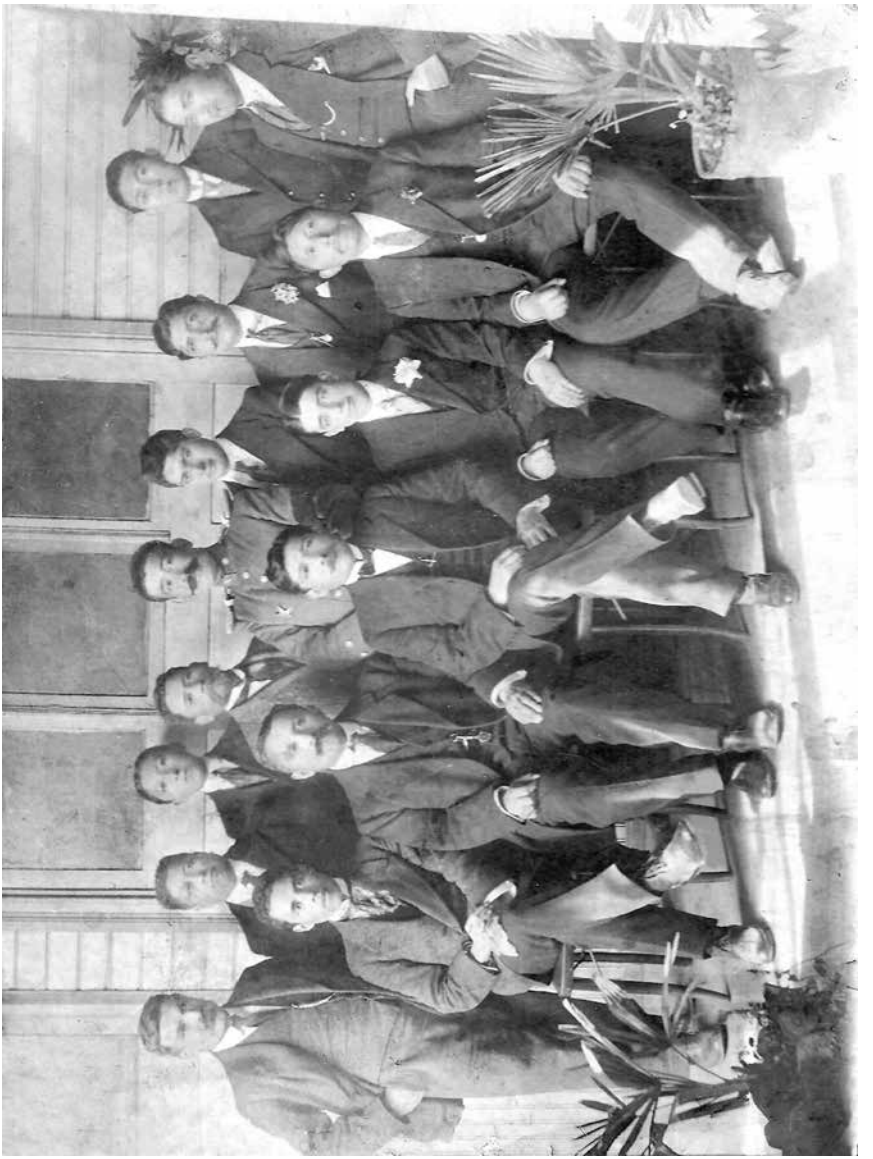
"Cacique Painemal, de Cholchol", en Guevara, *Las últimas familias..., op. cit.*, p. 178.



"Familia indígena de don Juan Catrileo, rico agricultor residente en Temuco", en Guevara, *Las últimas familias...*, *op. cit.*, p. 316.



"Delegación de Temuco a una petición". De civil destacados: Manuel A. Neculman y Juan Catrileo. De casco prusiano: comisario de Temuco Santiago Rivas, circa 1910, Colección personal de Herman Schmidlin.



Directorio de la Sociedad Caupolicán, circa 1910. Sentados de derecha a izquierda: Juan Catrileo, Francisco Melivilu, desconocido, Manuel Neculman. Colección personal de Herman Schmidlin.

FELIPE COLICHICHEO

La raza araucana, ántes fuerte y valerosa, hoi sumida en la mas triste decadencia, nos envia de tarde en tarde a Santiago algunos de sus representantes mas caracterizados: caciques andrajosos e indiferentes que se estacionan horas de horas en los pasillos de la Moneda, esperando audiencia para reclamar del despojo de sus tierras.

Ultimamente nos ha visitado Felipe Colichicheo, cacique de Pitrufquen. Le acompañan otro cacique, Mariano Hancaman, y un intérprete, Ricardo Cuminao. Los tres han recorrido la ciudad sin asombrarse de nada y despertando la curiosidad de los pilluelos. Regresarán en breve, como han regresado tantos otros a sus tierras: llenos de promesas de justicia.

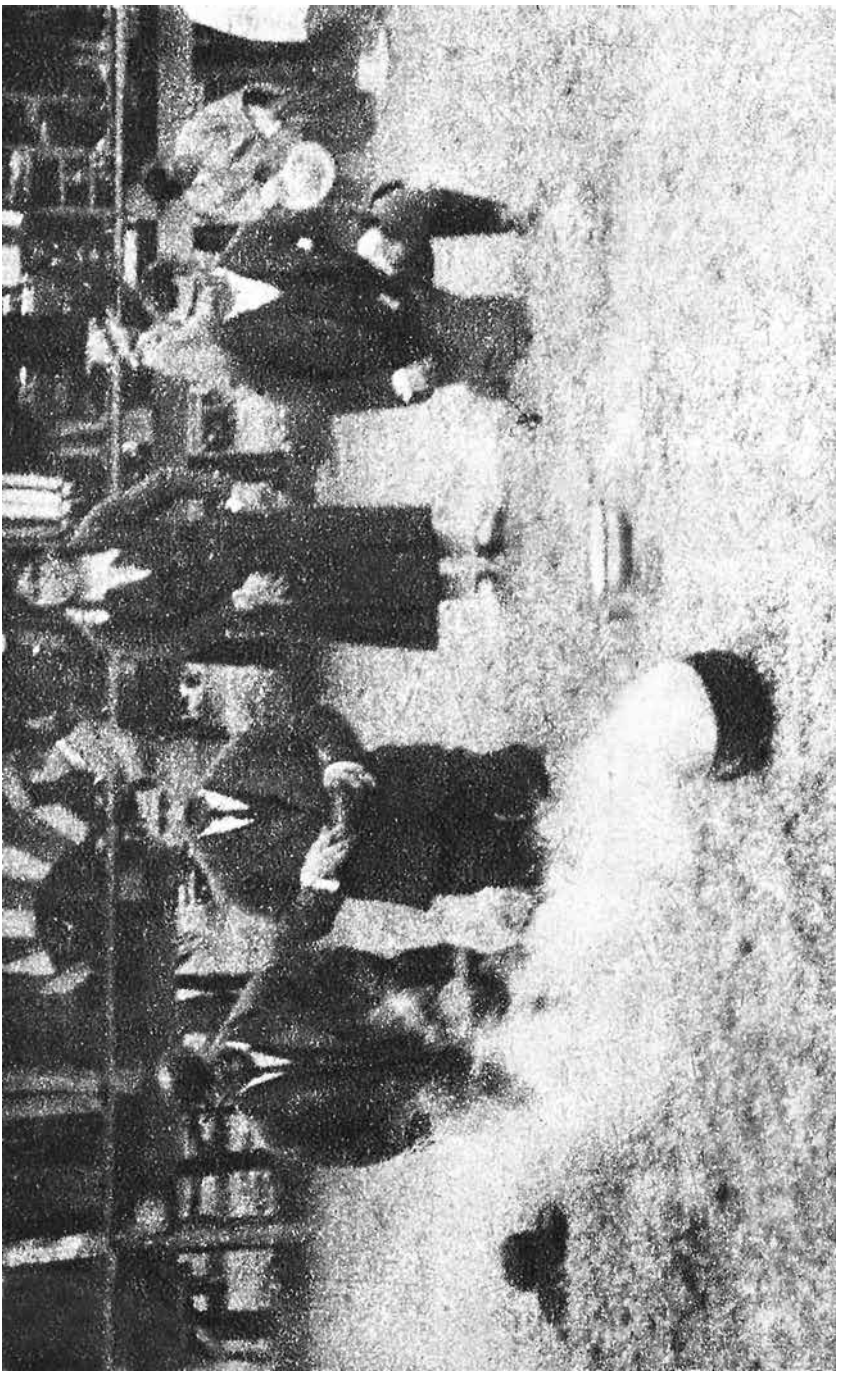
Colichicheo se retrató en nuestros talleres. Sus compañeros tambien se colocaron ante la máquina; pero no se estovieron quietos y resultaron movidos. Por esto no adornan estas pájinas.



Nota de prensa y foto del *longko* de Pitrufquén Felipe Colichicheo, una de tantas autoridades que acudieron a Santiago con sus intérpretes para reclamar por los despojos. Fuente: *Zig Zag*, Santiago, 1 de febrero, 1906.



Concentración de Traitraico (marzo, 1934) para despedir al embajador de Chile en España, Aurelio Nuñez Morgado, honrado como "Protector general de la raza araucana". Al centro, de izquierda a derecha: Aurelio Nuñez; Manuel Aburto Panguilef, presidente de la Federación Araucana; y Nelson Bravo, secretario de la Presidencia de la República, nombrado por la Federación Araucana como "Protector de la raza" en reemplazo de Aurelio Nuñez Morgado. Fuente: M. Cuevas Silva, "Invocando el espíritu de su raza, los araucanos celebraron su Gillatum en homenaje de tres embajadores", en *Zig-Zag*, Santiago, 16 de marzo 1934.



Manuel Aburto Panguilef, al centro, haciendo ofrenda de maíz, en ngillatun de la concentración en Traitraico. Fuente: M. Cuevas Silva, "Invocando el espíritu de su raza, los araucanos celebraron su Gillatum en homenaje de tres embajadores", en *Zig-Zag*, Santiago, 16 de marzo 1934.

LAS MEMORIAS DEL PROTECTORADO

Las *Memorias del Protectorado* son la principal fuente para comprender el funcionamiento de esta institución. En la selección que publicamos se distinguen dos tipos de *Memorias*: las que cada protector enviaba anualmente a la Inspección de Tierras y Colonización (luego Inspección General de Colonización e Inmigración), que, a su vez, lo incorporaba en el compilado de informes de sus diferentes dependencias y que publicaba al año siguiente; y las que se elaboraron en el marco de la labor de una comisión parlamentaria *ad hoc* que funcionó en 1910 para recabar información acerca de las quejas que regularmente llegaban al parlamento por el desarrollo de la política de radicación. Para algunos años en que no tenemos *Memoria*, hemos incluido los extractos sobre Protectorados que el Inspector General de Colonización incluyó en la *Memoria* de la Inspección a su cargo.

Hemos transcrito y organizado cronológicamente este conjunto de treinta y una *Memorias* que abarcan los protectorados del Cautín (Temuco), Valdivia, Llanquihue, Malleco y Arauco, entre las fechas de 1898 y 1918, colocando como fecha de referencia la del año que se informa y no la de su elaboración (inicio del año siguiente) e impresión (fecha de imprenta del compilado de la Inspección General). Si bien sabemos de la existencia de otras *Memorias*, consideramos que por la notoriedad que tuvieron estos protectores, en particular Eulogio Robles, lo sustancioso de sus informes y el interés de sus reflexiones y experiencias, así como por tratarse del periodo en que se consolida el Protectorado, esta primera selección que acompaña el Estudio introductorio ayuda a comprender los intereses que estaban en juego en el Protectorado, las expectativas y tensiones que generaba, y las dificultades y obstáculos de todo orden con los que se encontraron los protectores para corregir los atropellos y abusos cometidos contra los *mapuche*.

A distancia de poco más de cien años, las *Memorias* son testimonios ineludibles de la pérdida territorial mapuche y muestran como pocos documentos de la época, la maraña burocrático-judicial en la que se entrampaban las demandas indígenas. También reflejan los prejuicios personales de los protectores y los de la sociedad chilena en general contra los mapuche, así como el empeño con que estos acudieron a la Oficina del Protector para defenderse y defender su propiedad. Finalmente, también, las *Memorias* testimonian de la difícil comunicación,

mediada por intérpretes cuando los había, entre los funcionarios y los mapuche y, por ello mismo, confirman el interés de seguir estudiando las prácticas y figuras de la mediación.

En su publicación original, las *Memorias* del Protectorado que reproducimos no siguen una única pauta editorial, ni ortográfica, ni tipográfica, ni de formato, pues se imprimieron en distintos años, y por distintas manos de autor y de editor. Para facilitar su lectura las hemos normalizado lo más posible, siguiendo pautas ortotipográficas actuales. Conservamos, sin embargo, la ortografía en las referencias bibliográficas, así como las cursivas originales en los textos, que casi siempre corresponden a palabras en mapudungun o a énfasis de los propios autores. Corregimos las erratas obvias, y cuando se trata de errores de composición del texto (en las columnas de prensa), las indicamos y enmendamos cuando es posible.

En notas al pie van explicaciones breves de algunas palabras de uso poco común, mientras que los conceptos que merecen más atención se explican en un glosario al final del volumen, Asimismo, hemos considerado que pueden ayudar a la lectura dos cuadros (diagramas): en el cuadro 6 reproducimos un cuadro sinóptico que figura en el *Glosario de Colonización* de Ramón Briones (1900) donde puede verse el lugar que el Protectorado ocupaba en la institucionalidad vigente en 1900, seguido de otro, elaborado por nosotros, que refleja los cambios a partir de 1906. En el cuadro 7 proponemos una reproducción, sobre la base de estas *Memorias* e información complementaria, del itinerario y vericuetos de la tramitación de las demandas interpuestas ante los protectores.

Complementamos con una serie de cuatro mapas que muestran la expansión del Protectorado, sus sedes y los principales centros urbanos ante cuyas autoridades los protectores tramitaban los casos. Esperamos contribuir de esta manera a una mejor comprensión de los alcances geográficos, las distancias y los tiempos que implicó la actividad del Protectorado.

Gertrudis Payàs Puigarnau
Jorge Pavez Ojeda

1898
TEÓFILO DURÁN
MEMORIA QUE EL PROTECTOR DE INDÍGENAS PASA A LA INSPECCIÓN GENERAL DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN[319]

A fin de ser breve no repetiré aquí lo que en otras ocasiones he expuesto a la Inspección General, con relación a los servicios que están a mi cargo.

Insistiré, sin embargo, en las observaciones que la experiencia me ha sugerido sobre la mejor manera de adelantar y mejorar la condición de los indígenas y de remover los obstáculos que se opongan a su civilización y bienestar.

El modo más eficaz de civilizar a los indígenas es arbitrar alguna medida que les permita vivir en paz y tranquilidad en los terrenos que poseen. A ello se opone, entre otras cosas, la ley vigente sobre la manera de radicarlos. Según ella, las radicaciones se hacen por reducciones, o sea en un conjunto de familias indígenas que reconocen un jefe, cacique o no; y el derecho de propiedad se reconoce en el jefe de la familia, siendo de advertir que siempre hay individuos solteros que no pueden pretender este derecho. Quedan, pues, por lo general, en comunidades más o menos considerables, según sea el número de familias que componen el conjunto. De aquí disputas diarias e interminables sobre la posesión de este o aquel retazo de terreno. Otro inconveniente grave de este sistema, que arranca su origen de la misma causa, es el que trae consigo el cobro de la contribución de haberes. Encontrándose los indígenas en comunidades, tienen ellos que pagarla también en común. Pero hay muchos que, o no quieren o no pueden pagarla, y lo peor es que en las tesorerías municipales no se admiten pagos parciales sino la cantidad que adeuda la reserva. De aquí nacen otras infinitas cuestiones y sobre todo los abusos de los cobradores municipales, quienes, si los cometen con los grandes propietarios, como me consta, es natural que los cometan mayores con los indígenas, embargándoles sus pocos animales y privándolos a veces del goce de sus terrenos.

Y este mal es mucho mayor tratándose de indígenas no radicados, que no tienen deslindes fijos y que son considerados comuneros con el Fisco, y a quienes, sin embargo, se cobra contribuciones por algo indeterminado y que seguirá siéndolo mientras no se les radique en forma, asignándoles sus límites.

Aunque ya lo he dicho otras veces, creo conveniente insistir en la necesidad de radicar a los indígenas por zonas determinadas y no muy extensas. Concluido

[319] "Memoria que el protector de indíjenas pasa a la Inspeccion Jeneral de Tierras i Colonización", en *Memoria del Ministro de Colonización y Culto presentada al Congreso Nacional, 1898* (Santiago, Imprenta Nacional, 1899), pp. 30-32.

el trabajo en una zona, continuaría en otra. Si se hacen trabajos aquí y allá, demorará mucho más la radicación. Si se hubiera procedido en esta forma, los trabajos habrían sido más rápidos. Procediendo de otra manera, sucederá lo que ha pasado en muchos casos. Los indígenas no radicados de una zona en que se han hecho radicaciones quedan en una situación por demás irregular, sobre todo si se tiene presente que esta operación, según el art. 6 de la ley de 4 de diciembre de 1866, viene a fijar los derechos del Fisco y de los indígenas en la zona en que se ha cumplido esta prescripción legal. Sin llenar este requisito, no debería procederse a subastar terrenos fiscales en los cuales el Fisco tiene un derecho dudoso. De aquí que en muchos casos ha habido dificultades que han hecho difícil, si no imposible, entregar terrenos rematados.

Todos, o por lo menos muchos de estos inconvenientes o dificultades, desaparecerían, a mi juicio, con la aprobación de alguno de los proyectos de ley que se han sometido o pueden someterse a la consideración del Congreso Nacional sobre la reforma de la legislación actual relativa a radicaciones.

En conclusión, cábeme la satisfacción de dejar constancia de que algunos indígenas han alcanzado un grado de relativa civilización, de que se dedican al trabajo sin tener el vicio consuetudinario de bebidas alcohólicas que por desgracia domina a una gran parte, y de que, en fin, los hay también que saben leer y escribir con más o menos perfección, lo cual los hace ciudadanos útiles a la nación.

Temuco, 5 de mayo de 1899.

T. Durán

1901
EULOGIO ROBLES
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS[320]

La labor de la oficina

I

Señor Inspector General de Tierras y Colonización:

Cumpliendo con una prescripción administrativa, tengo el honor de presentar a Ud. esta Memoria acerca de los trabajos de la Oficina del Protectorado de Indígenas durante el año que acaba de fenecer.

No llenaría de manera estricta los deberes de mi cargo, si me limitara a exponer lisamente la labor anual de esta Oficina, y no formulara las observaciones que me ha sugerido su servicio; como así mismo si no manifestara brevemente los abusos, expoliaciones y aun crímenes de que son víctimas los araucanos. Debo también comunicar al señor Inspector General mis impresiones acerca de la capacidad intelectual de los indígenas y de su aptitud para asimilarse a la civilización, impresiones que he basado en datos fidedignos proporcionados por diversos funcionarios públicos.

Dividiré esta Memoria en dos partes: una que se refiere al trabajo de la Oficina y otra que trata de la civilización de los indígenas.

II

Fui nombrado Protector de Indígenas por decreto Supremo de 7 de febrero del año próximo pasado; pero, por estar sirviendo uno de los juzgados de letras de esta provincia no pude asumir ese puesto sino el 8 de marzo del mismo año.

Esta Memoria, pues, abarca el tiempo comprendido entre la fecha apuntada y el 31 de diciembre del ya citado año.

Los trabajos de la Oficina a mi cargo han consistido principalmente en gestiones dirigidas a conservar a los indígenas la posesión del terreno que les ha adjudicado la Comisión Radicadora, a mantenerlos en el goce de las hijuelas

[320] "Anexo Número 7. La labor de la Oficina", en *Memoria de la Inspeccion Jeneral de Tierras i Colonización, 1901* (Santiago, Imprenta Moderna, 1902), pp. 149-227.

proyectadas para que se les radique, y a hacerles respetar posesión en las zonas que ocupan, y de las cuales no se ha levantado aun planos.

He intervenido en las operaciones de la comisión mencionada cuando, después de extendido un título de merced a indígenas, se me notifica como representante legal de ellos.

He tenido que atender numerosas solicitudes para dividir las tierras que poseen en común. Cuando el indígena ha sido radicado, esta operación no ofrece dificultad, porque, con el título y plano respectivo a la vista, la practico yo mismo, y ordeno al ingeniero dependiente de esta Oficina la determine después en el terreno. Si el indígena no tiene título, y solo está proyectada la hijuela en que ha de radicársele, esta operación ofrece inconvenientes y no ha podido llevarse a efecto sino con carácter de provisional; pero por razones palpables, ha sido absolutamente imposible verificarla en terrenos no mensurados.

Muy molestas y de difícil solución han sido las cuestiones suscitadas entre indígenas comuneros acerca de la posesión de este o de aquel retazo de terreno, cuestiones que se promueven casi siempre cuando uno de ellos, contraviniendo a la ley, ha arrendado su suelo a persona extraña, la que ha tenido a bien tomar posesión, no solo del suelo arrendado, sino igualmente del contiguo. En tales casos, he cortado por lo sano, como se dice, y he hecho notificar al extraño para que en un plazo prudente que fijo abandone las tierras arrendadas. Algunas veces, para burlar el precepto legal que impide esta clase de contratos, se disimula su infracción y el arrendatario figura como aparcero o como mero encargado de la custodia del terreno, mientras su dueño permanece ausente: como Ud. sabe, los indios viajan de continuo a la Argentina, a donde llevan a pastorear parte de sus animales.

Los reclamos sobre arrendamientos ilegales, en que muchas veces el arrendatario no paga el canon estipulado y pretende adueñarse de lo arrendado, han sido bastante comunes y han demandado no poco tiempo al infrascrito.

He comenzado también a gestionar el pago a los indígenas del suelo que les ha sido expropiado para el servicio de los ferrocarriles en construcción.

El cobro del impuesto de haberes, practicado muchas veces en forma abusiva e irritante a los indios, ha reclamado con frecuencia mi atención y ha dado lugar a notas dirigidas a alcaldes de algunas comunas, invitándolos a corregir administrativamente los abusos denunciados, a presentaciones ante el Juzgado de Letras de este departamento, con el objeto de reprimirlos y a notas a los promotores fiscales de otros para que, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto supremo de 10 de noviembre de 1884, asuman la representación y defensa de los naturales, cuando alguna municipalidad ha pretendido privarles del dominio o posesión de sus tierras.

Me he hecho cargo, pero solo en este departamento, de juicios seguidos contra indios ante los juzgados de subdelegación y de distrito, en los que son víctimas de inicua y vasta explotación, y sobre los denuncios de abusos perpetrados fuera de la jurisdicción de este departamento en los mismos juzgados, que han

sido comunicados a esta Oficina, me he limitado –porque materialmente no podía hacer otra cosa– a ponerlos en conocimiento del respectivo juez de letras por medio de notas.

Me he constituido en una especie de árbitro arbitrador para dirimir las dificultades que entre sí tienen los indígenas, a fin de evitar las pérdidas de tiempo y gastos a que se verían obligados, si ocurriesen a la justicia ordinaria. Acostumbro levantar acta de todo esto con la respectiva resolución. Los indios, casi siempre, cumplen religiosamente lo fallado por el Protector.

He denunciado a la justicia ordinaria los delitos que se cometen con los indígenas, reclamando ante jueces respectivos la sanción legal correspondiente.

Por último, me he trasladado al terreno mismo cuando he recibido denuncios graves o cuando se ha producido alguna dificultad, que no podría haberse subsanado de otra manera; y he hecho viajes con este motivo a Lautaro, Toltén, Pitrufquen, Victoria y Collipulli.

Tal ha sido, brevemente expuesta, la labor de esta Oficina y que tengo el honor de someter a la consideración de Ud.

III

Antes de dar algún desarrollo a las diferentes cuestiones que han solicitado mi intervención y que con brevedad quedan expuestas, y de manifestar cómo se cumplen las leyes que terreno que ocupan, conviene recordar sus antecedentes legislativos y administrativos, hoy de oportunidad, y dignos de ser meditados por los legisladores para la feliz solución de un problema que pronto habrá de preocuparles, porque ya en enero próximo terminará el imperio de estas leyes prohibitivas.

Los poderes públicos han tratado siempre de vincular al indígena al terreno en que vive y de corregir los abusos que se perpetran con ellos. Numerosas son las disposiciones expedidas con el objeto de evitarlos. Su exposición servirá de antecedente a los hechos de que me valdré para manifestar cómo se priva hoy a los indígenas de sus tierras tan garantidas por la ley: como quiera que un precepto dictado con el fin de corregir un abuso supone larga serie de ellos, los motivos de estas disposiciones constituyen premisas lógicas en la larga cadena de arbitrariedades y fraudes contra los primitivos poseedores de estas tierras.

Desde los comienzos de nuestra vida independiente, antes de la definitiva organización del Estado, nuestros hombres públicos se preocuparon de los aborígenes y de la manera de hacerlos adquirir hábitos de vida sedentaria.

Una disposición de 1 de julio de 1813 ordenó que los indios se trasladaran a pueblos que se fundarían con el objeto de civilizarlos y en los que "gozarían de los mismos derechos sociales de ciudadanía que el resto de los chilenos". Estos pueblos tendrían necesariamente una iglesia o capilla con su cura, sotacura o capellán, una casa consistorial, una cárcel, una escuela de primeras letras, escritura y doctrina cristiana. A cada indio se adjudicaría una propiedad rural, ya

unida a su casa, ya en las inmediaciones de la villa y de la cual podría disponer "en absoluto y libre dominio".

Para su traslación, se daría a cada familia una yunta de bueyes con un arado, los instrumentos de labranza más comunes, las semillas para las siembras del primer año y un telar para tejidos ordinarios de lana. Los fondos necesarios se obtendrían del producto del remate de las tierras de los indios.

El senado-consulto[321] de 10 de junio de 1823 ordenó la mensura de los terrenos de indígenas, estableciendo al mismo tiempo "que lo actual poseído por ellos se declara en perpetua y legal propiedad". Medidos dichos terrenos, el sobrante pertenecería al Estado y sería tasado y sacado a licitación pública.

Preocupado el Gobierno de hacer adquirir a los indígenas "hábitos de propiedad", se decretó el 7 de septiembre de 1848 que los ministros de la Tesorería de Concepción entregaran al intendente de aquella provincia la cantidad de mil pesos que sería destinada a proporcionar habitaciones sólidas y estables dentro de los respectivos territorios a algunos caciques que lo solicitasen. Ordenó ese mismo decreto que se procediera a construir la casa que se tenía prometida al cacique Colipi en el paraje que se conociere a propósito para establecimiento de indios.

El objeto del Gobierno al acordarlo era, como se dice en el preámbulo del citado decreto, conseguir que los indígenas reconocieran domicilio, haciéndolos adquirir hábitos de propiedad, reduciéndolos a vivir en habitaciones estables, que los apegasen al suelo y los contrajesen al trabajo.

A medida que se fue avanzando la línea de la frontera araucana y que los indios pudieron comerciar y contratar con el resto de los nacionales, las tierras que iban quedando dentro de la zona definitivamente conquistada para la civilización, y aun las cercanas, despertaron la codicia de los particulares y comenzaron a adquirirlas por medio de contratos simulados con los indígenas o mediante el pago a estos de precio irrisorio o bien en cambio de aguardiente; en esas convenciones resultaba perjudicado no pocas veces el Estado; y para poner fin a tamaños abusos, se dictó el decreto de 14 de marzo de 1853, cuyo art. 1 dispuso que

> toda compra de terreno hecha a los indígenas o de terrenos situados en territorios de indígenas debía verificarse con la intervención del Intendente de Arauco o del gobernador de indígenas del territorio respectivo que el intendente comisione especialmente para cada caso. La intervención del intendente, o del funcionario comisionado por él, tendría por objeto asegurarse de que el indígena que vende presta libremente su consentimiento, de que el terreno que vende le pertenece legalmente y de que se ha pagado y asegurado debidamente el pago del precio convenido.

[321] = decreto.

Se estableció la misma formalidad para el "empeño" de terrenos o arriendo que excediera de cinco años, sancionando con la nulidad estas formalidades.

Los particulares trataron de eludirlas y encontraron maliciosamente una salida para burlarlas, pretendiendo que solo deberían observarse en los contratos con los indios y no en otros que versaran sobre tierras situadas en territorio indígena y, para evitar esto, se declaró, por decreto de 10 de mayo de 1854, que las formalidades referidas deberían aplicarse a toda enajenación de terrenos en territorio de indígenas, lo fueran o no los interesados en el contrato.

Y, todavía, con el mismo propósito de eludir estas formalidades, la mala fe encontró siempre un camino, y los agentes judiciales comenzaron a hacerse extender poderes por los indígenas para litigar sobre juicios de tierras, defraudando después a sus poderdantes y no saliendo siempre bien librados los intereses fiscales. Hubo, en consecuencia, necesidad de expedir el decreto de 5 de junio de 1856, cuyos motivos enumerados en sus considerandos merecen recordarse, y son los siguientes:

> Que los repetidos abusos que se cometen en el otorgamiento de poderes conferidos por los indígenas para ventilar en juicios, cuestiones de terrenos, hacen indispensable la intervención de una autoridad superior en esos actos; que sin esta medida se dejaban en pie los mismos vicios que trató de corregir el decreto de 14 de marzo de 1853; que era frecuente se instigara a los indígenas a promover tales juicios haciéndose otorgar amplísimos poderes, abusando de su falta de inteligencia en esta materia.

En uso de la autorización conferida al Presidente de la República por la ley de 2 de julio de 1852, se decretó que los poderes que se otorgaran por los indígenas para continuar en juicio cuestiones de terrenos deberían extenderse con las mismas formalidades que las escrituras de venta de las mismas tierras y que la autoridad encargada de intervenir en tales actos cuidaría de que no se otorgaran poderes sino a favor de persona competente, excluyendo, en consecuencia, del cargo de procurador judicial a todo individuo reconocido como instigador de juicios entre los indios.

Siguiéndose, todavía, en el sistema de consultar[322] garantías para la correcta trasmisión de la propiedad indígena y con el fin de evitar fraudes, se ordenó que, además de los poderes para litigar, fueran también visados por el Intendente los poderes para vender que otorgaran los araucanos.

Personas interesadas en eludir estas precauciones ocurrieron lisa y llanamente a los notarios con el objeto de extender escrituras de venta y de poderes para litigar, hasta que por decreto de 16 de octubre de 1863, se prohibió a los notarios de Arauco y de Nacimiento que otorgasen las escrituras a que se refieren los decretos antes citados, que tenían fuerza de ley, por haber sido expedidos

[322] = dictaminar, proveer, fijar.

por el Presidente de la República en uso de las facultades conferidas por la ley que creó la provincia de Arauco.

Ese decreto no consultó sanción alguna para los funcionarios que lo contraviniesen, y los fraudes y abusos contra los indígenas, a quienes con frecuencia se enredaba en juicios con la mira de despojarlos de sus tierras, siguieron su curso; en vista de lo cual se dictó el decreto de 6 de julio de 1872, que dice en uno de sus considerandos que

> no obstante las medidas tendientes a evitar los fraudes y abusos que se cometen en la enajenación y demás actos que celebran los indígenas para trasmitir o gravar la propiedad del territorio en que se encuentran, ha llegado a noticias del Gobierno que estos abusos continúan con perjuicio de la propiedad del Estado, que es la que de ordinario sirve de materia para estas transacciones;

y resolvióse que

> los escribanos públicos de los departamentos de Nacimiento, Angol, Lebu e Imperial no extenderían en lo sucesivo escritura alguna sobre venta, hipoteca, anticresis, arriendo o cualquier otro contrato que tenga por objeto gravar o enajenar los terrenos de indígenas de aquellos departamentos, sin que por parte de los que pretenden celebrar estos contratos se les presente el respectivo título escrito y competentemente registrado, del cual se tomaría razón en la escritura misma, enunciándose la fecha, nombre del escribano que hizo la inscripción y demás circunstancias que lo determinen y especifiquen; y que, siendo indígenas los que pretendan gravar o enajenar la propiedad, los escribanos no extenderían los respectivos instrumentos si no se les presentaba la copia legalizada de la escritura que previamente ha debido otorgarse en conformidad al art. 6 del Supremo Decreto de 14 de marzo de 1853 y los art. 4 y 5 de la ley de 4 de diciembre de 1866, cuya copia se insertaría íntegramente en el mismo instrumento.

Este decreto sancionó con suspender de sus oficios a los notarios que lo contravinieren.

La reiteración de semejantes disposiciones estaba probando su ineficacia; pero, con todo, se volvió a repetirlas con ciertas variantes, a los escribanos de la provincia de Arauco, dictándose el decreto de 1° de mayo de 1873, que conviene recordar:

> Considerando, dijo ese decreto, que al prescribir el art. 8 de la ley de 4 de diciembre de 1866 que haya un letrado con el título de Protector de Indígenas que ejercerá las funciones que atribuye al Intendente y Gobernador el decreto de 14 de marzo de 1853, y represente los derechos de los indígenas

> en todas las circunstancias que se ofreciesen, ha tenido por objeto asegurarse que los indígenas comprendan los contratos que intenten celebrar, que consienten en ellos y, en general, que las obligaciones que contraen son efectivas por haber concurrido las circunstancias dispuestas por la ley para la validez de un acto o declaración de voluntad; que, no obstante las prescripciones del citado art. 8, los escribanos públicos de la provincia de Arauco otorgan escrituras en que los indígenas, sin intervención del expresado Protector, se confiesan deudores a favor de terceros por cuantiosas sumas, que, atendidas sus facultades, su ninguna versación en los negocios, su falta de hábitos industriales, ofrece fundadas dudas la efectividad de los préstamos; que del estado de los pleitos pendientes sobre terrenos situados en territorio indígena remitido por el Juez de Letras de Arauco y de datos fidedignos que sobre el particular se han obtenido, se ha venido en conocimiento de la frecuencia con que los indígenas se constituyen deudores a breves plazos, de que son numerosas las ejecuciones que se ejercitan en su contra y de que los embargos que de ellas proceden se ejecutan de ordinario en predios pertenecientes al Estado o en terrenos en que los deudores no tienen dominio legal por no habérseles discernido título de merced, en conformidad a la citada ley; resultando de esta manera de proceder perturbaciones que son origen de reclamos y pleitos; (se ordenó que) los escribanos públicos de la provincia de Arauco se abstendrían de otorgar en lo sucesivo escritura alguna en que los indígenas contrajeran obligaciones personales o confirieran algún derecho real sin que concurra al acto, declaración o contrato el Promotor de Indígenas. Los escribanos que, en contravención a este decreto, extendieren escrituras quedarían sujetos a ser suspendidos de sus oficios, debiendo el Gobernador de aquellos departamentos o jueces de primera instancia llevar a efecto esta disposición tan pronto como la infracción los constara, y darían cuenta al Gobierno para que procediera a tomar las medidas concernientes.

La ley de 18 de octubre de 1870 permitió la libre enajenación de terrenos en una parte de la provincia de Arauco y los particulares quisieron aprovecharse de ello y procedieron a celebrar contratos con los indígenas que versaban sobre tierras del Estado, y hubo necesidad, para evitarlos, de dictar el decreto de 30 de noviembre de 1870, que ordenaba que

> en la celebración de los contratos de venta, hipoteca, permuta, arriendo u otros análogos que intentaran hacer los indígenas y en los poderes que confirieran para litigar sería menester que se acreditase previamente por medio de una información rendida ante el juez de letras o de primera instancia la existencia del derecho que tengan sobre el terreno a que se refiere el contrato o el poder con especificación de los linderos, extensión y demás circunstancias que permitieran formar una idea exacta del terreno. La información con

> sus antecedentes se debía poner en conocimiento del agente fiscal, quien podría pedir, siempre que lo creyese necesario al resguardo de los intereses fiscales, que informara acerca de ella el ingeniero de la provincia y aun que este practicase un reconocimiento sobre el terreno. Llenados estos requisitos y constando que no se trataba de terrenos baldíos, el contrato o el poder se llevarían a efecto.

La mayor parte, si no la totalidad de las disposiciones legales y administrativas que hemos citado, han caducado ya y solo tienen hoy un interés histórico. Vamos ahora a referirnos someramente a las leyes en vigor que regulan la constitución de la propiedad indígena y que, para su resguardo, limitan el ejercicio de su dominio.

La constitución de esta propiedad fue seriamente establecida por la ley de 4 de diciembre de 1866, que ordenó la fundación de poblaciones en tierras de indios, que creó una comisión de ingenieros para que las mida y les adjudique una cabida según lo que hayan poseído, prescribiendo al mismo tiempo procedimientos de detalle para estas operaciones y mandando se les otorgue título de merced, que se inscribirán en un registro especial que llevará el secretario de la citada comisión. No olvidó esta ley formalidades que garantizan la trasmisión de la propiedad indígena y los intereses fiscales, estableciendo en su artículo 4 que

> los contratos traslaticios de dominio sobre terreno situado en territorio de indígenas solo podrán celebrarse cuando el que enajena tenga título inscrito y registrado competentemente. Siendo indígena alguno de los contratantes, se necesita además que el contrato se celebre con arreglo a las prescripciones del decreto de 14 de marzo de 1853, el cual queda vigente en todo lo que no sea contrario a la presente ley, etc.

Creó también el cargo de Protector de Indígenas, quien desempeñaría las funciones que atribuye al intendente y gobernador el decreto referido.

La ley de 4 de agosto de 1874 reagravó estas prohibiciones y estableció en su art. 5 que lo dicho acerca de la enajenación se extendería también a las hipotecas, anticresis, arriendo o cualquier otro contrato sobre terrenos situados en territorio indígena.

Fue más adelante esta ley, prohibiendo en el art. 6

> a los particulares la adquisición por cualquier medio de terrenos de indígenas dentro de los límites siguientes: Por el norte el río Malleco desde su nacimiento en la Cordillera de los Andes, hasta su desembocadura en el Vergara, y de este punto siguiendo al sur el curso del río Picoiquen hasta su nacimiento en la Cordillera de Nahuelbuta, y desde allí una línea hasta la laguna de Lanalhue situada en dicha Cordillera y el curso del río Paicaví hasta su desembocadura en el mar; por el sur el límite que separa el depar-

> tamento de Imperial de la provincia de Valdivia; por el este la Cordillera de los Andes; y por el Oeste el mar. No regirá esta prohibición respecto de los fundos cuyos títulos estuviesen ya inscritos en la forma legal.

Los interesados en la libre adquisición de estas tierras interpretaron erróneamente la excepción contemplada en la última parte del artículo que acaba de citarse, pretendiendo que podían adquirirse todos los fundos cuyos títulos estuviesen inscritos; y hubo necesidad entonces de dictar la ley de 9 de noviembre de 1877, que declaró que esa excepción se refiere solo a los fundos cuyos títulos estaban inscritos ya en forma legal a la fecha de la promulgación de la ley de 1874.

El legislador, queriendo cortar en absoluto los fraudes que se cometían por medio de contratos sobre terrenos que se celebraban con los indígenas, estableció en el art. l de la ley de 20 de enero de 1883 que

> la prohibición de adquirir terrenos de indígenas hecha en el art. 6 de la ley de 4 de agosto de 1874 en el territorio designado en dicho artículo se extiende a las hipotecas, anticresis, arriendos o cualquiera otro contrato en virtud del cual se prive directa o indirectamente a aquellos de la posesión o tenencia de terrenos sobre terreno situado dentro de esos límites, aun cuando el indígena o la reducción a quien pertenezcan tengan registrado su título de propiedad. Esta prohibición subsistirá por diez años.

La ley de 20 de enero de 1883 fue prorrogada por diez años por la de 11 de enero de 1893, prohibición que expirará, por consiguiente, el 20 de enero del año entrante.

Prohibió, además, esta ley a los notarios extender escritura alguna de venta, hipoteca, arriendo o cualquier otro contrato en virtud del cual se prive directa o indirectamente a los indígenas del dominio, posesión o tenencia del terreno que ocupan.

IV

Olvidaron las leyes prohibitivas que hemos citado establecer procedimiento expedito para hacerlas respetar, y sus preceptos han llegado a convertirse casi en meramente teóricos. Un ejemplo me bastará para probar esta aserción: en uno de los juzgados de la provincia de Malleco presenté una solicitud acompañada de un título de merced a indígenas y el plano respectivo con el objeto de pedir el lanzamiento de alguien que a viva fuerza se había apoderado de tierras de indios, y el juez la consideró como demanda ordinaria y dio traslado para contestarla. En tales condiciones, es imposible hacer respetar la posesión de las tierras araucanas, porque cualquiera presentación judicial en amparo de sus derechos engendra artículos dilatorios, fecundos para la mala fe y que eternizan los juicios. De este modo, se frustra el propósito del legislador y se vuelven casi

estériles las gestiones del Protector, por más empeño que gaste en el exacto cumplimiento de su ministerio.

Conviene para que se palpen estos inconvenientes se dicte un procedimiento adecuado a la letra y espíritu de la ley, que haga somera exposición de las maneras como son desposeídos los indios de sus tierras.

La más frecuente de estas es apoderarse de ellas por medio de arriendos: como la mayor parte de los indígenas son comuneros en el inmueble que poseen, el interesado en usufructuarlo se fija en el individuo más infeliz y perezoso de la reducción y por una cantidad irrisoria de dinero, muchas veces por unos cuantos litros de aguardiente, se lo arrienda. El arrendatario no se limita a ocupar la posesión que antes ha tenido el arrendador, sino que escoge el terreno de mejor calidad y ubicación, sin tomar en cuenta para nada a sus poseedores, y en él se queda con ánimo de señor y dueño. Cuando semejantes abusos se cometen en este departamento, no es difícil su reprensión; no así cuando ocurren en otro.

Medio bastante usado es también tomar posesión a viva fuerza, expulsando a los indígenas y en seguida presentarse solicitando radicación en ellas a título de colono nacional. Otras veces se suaviza el procedimiento y se emplea el que voy a citar en el caso siguiente: un señor comenzó por arrendar una extensión de terreno al indígena Pedro Cayupi en el departamento de Imperial, a sabiendas que el tal contrato era ilegal; concluido el término del arrendamiento, fue instado por Cayupi para desalojar sus tierras; se resistió a ello ese señor, en vista de lo cual Cayupi formuló el competente reclamo ante esta Oficina. Notificado el usurpador para abandonar lo que ilegalmente ocupaba, se presentó ante el juez de letras del expresado departamento, querellándose de amparo, fundado en que había introducido mejoras en ese terreno y manifestando que tales mejoras le daban derecho a ser radicado en él como colono nacional. Otro caso de éstos, de los muchos que constan de los libros de la Oficina a mi cargo: un caballero de uno de los departamentos cercanos arrendó, ahora doce años, ciento cincuenta hectáreas de terreno a un cacique, que se iba para la Argentina, por veinte pesos en dinero y un caballo para el viaje; y desde entonces goza esas tierras. Quiso también acogerse a los beneficios de la Ley de Colonización, pero conseguí frustrarle la realización de este propósito.

Otro de estos procedimientos es facilitar dinero a indígenas con garantía de sus tierras: hay un indio que necesita corta cantidad de dinero y sabido esto por alguno de los filántropos de estas regiones, proporciona el dinero al indio, quien le empeña sus tierras. Como el indígena rara vez llega a reunir la cantidad debida, el filántropo se eterniza en el usufructo de ellas.

Otra manera: algunos indígenas se ven apurados para cubrir el importe de las contribuciones de haberes; pero nunca deja de haber seres caritativos, muchas veces pertenecientes a las clases acomodadas, que se subrogan las obligaciones del indígena para con la municipalidad; pero con la garantía del suelo, en el cual se quedan. Los indios, que temen mucho al "chauchero" –denominación gráfica que dan al ministro de fe que les embarga sus caballos, sus bueyes y sus escasos

sembrados que el municipio ha lanzado contra ellos– aceptan la subrogación. Ha habido casos de municipalidades que han embargado a indígenas insolventes, colocando en ellas en calidad de depositario a alguno de los allegados de la honorable corporación, quien se ha trocado después en dueño.

No he agotado aun la exposición de las maneras cómo se despoja al araucano de sus tierras. Hay otra más sencilla: equivocando deslindes de propiedades. Ha llegado a ser axioma de buen negociante en la frontera la recomendación de rematar tierras contiguas a las de los indios o al lado de predios fiscales, porque después, avanzando los deslindes e internándolos en terrenos del Estado o de indígenas, se puede redondear una linda finca a poco costo. Son innumerables, señor Inspector General, las cuestiones de deslindes entre indios y rematantes de tierras fiscales, y en ellos la razón está siempre de parte de los primeros. Como se sabe, no son nuevas estas artificiosas dificultades originadas en deslindes. En un decreto del año 1813, se hizo la siguiente declaración que puede repetirse hoy mismo:

> "el Gobierno conoce que entre la clase ruda, abandonada y miserable de los indios, y los hacendados poderosos que les rodean, siempre las usurpaciones y transgresiones de deslindes deben haberse dimanado y verificado con provecho de las personas pudientes",

y no se crea que estas "trasgresiones" de deslindes se practican por gente de condición humilde sino muchas veces por grandes cosecheros de trigo y grandes explotadores de madera.

Quedan todavía otros modos de efectuar despojos pidiendo pertenencias mineras de arcilla plástica, con el objeto exclusivo de usurpar la superficie que concede la ley para la cómoda explotación de la mina. De más está decir que tales minas no existen. Así tuve una petición en Lautaro con un señor que a pretexto de una concesión minera de esta naturaleza, quería rebanar parte de su hijuela al indígena Santos López Lican.

Mas aún: ha habido rematantes de tierras fiscales que, encontrando exigua la cabida de lo que han rematado y de mala ubicación, han optado por entrar en posesión de las tierras colindantes pertenecientes a indígenas. Así es un asunto que tengo pendiente ante el juzgado de Collipulli, en representación de los caciques Juan Ailla Varela y Juan Reinao contra don Toribio Benavente. Al día siguiente de hacerme cargo de mi puesto recibí de Ud. una comunicación en que me decía había llegado a Santiago el cacique primeramente nombrado, y denunciado que el Señor Benavente lo había despojado de todas sus tierras, y Ud. me encargó averiguar la efectividad del denuncio para la represión de semejante abuso. Envié a practicarla al ingeniero señor Pérez de la Sección Topográfica, y me manifesté que en realidad el señor Benavente había tomado posesión de toda la hijuela de Ailla Varela y de gran parte de la de Reinao. Quiso hacerlo salir, pues iba con algunos gendarmes a sus órdenes, pero fue amparado por las autoridades locales. Después envié al señor Layseca y me dio

igual informe. Gestiones practicadas por el señor Promotor Fiscal en resguardo de los derechos de los expresados indios no dieron resultado. Tuve, entonces, que trasladarme a Collipulli acompañado del ingeniero señor Schneider, quien procedió en presencia del mismo señor Benavente y mía, a hacer un levantamiento prolijo del plano de las hijuelas de Reinao y de Ailla y de la rematada por este Señor Benavente. Se le indicó a este señor lo que le correspondía; pero, sin embargo, se resistió a ocuparlo, quedando en posesión de las de los indios. Se me dieron a conocer otros graves abusos que este señor había cometido con los indígenas, que no expongo aquí, pero que, averiguada su efectividad, me apresuré a hacer la correspondiente presentación ante el juzgado del crimen. Ailla y Reinao están hoy en la miseria y son dignos de toda protección por trabajadores y honrados. Me haré un deber en comunicar a Ud. lo que resulte a este respecto de mis gestiones ante el juzgado de Collipulli.

Antes de poner fin a esta somera exposición, daré a conocer otras de las maneras frecuentes de desposeer al indígena: alguien, captándose con maña su buena voluntad, se introduce a sus tierras y da comienzo a trabajos agrícolas. Concluidos los agasajos, comienzan las dificultades con el huésped y el indio se resuelve a ver al Protector para que lo ampare. Al corriente de esto, el interesado fácilmente envuelve al indígena en un proceso por hurto o robo de animales; testigos que declaren haberlo visto conduciéndolos no faltan; y el indio va a la cárcel y se frustra el reclamo proyectado. El señor juez Ibar ha sorprendido algunas de estas maquinaciones y las ha reprimido enérgicamente.

Individuos a quienes he hecho salir de tierras de indios han ocurrido a otro medio: presentan cuentas a los juzgados para preparar en su contra la vía ejecutiva y cuando menos se piensa la cuenta se ha dado por reconocida y el indígena se encuentra con una ejecución encima y se ve obligado a transigir permitiendo en sus tierras al ejecutante para evitar mayores daños.

En fin, señor Inspector General, se echa mano de cuantos arbitrios puede sugerir la malicia para arrebatar sus tierras a estos infelices.

Urge, entonces, dictar un procedimiento expedito que haga efectivas las leyes que amparan la posesión indígena, y garanticen esta posesión hasta que en definitiva se resuelva a quién pertenece.

V

He dicho que he tomado conocimiento de las operaciones de la Comisión Radicadora cuando, finalizado un título de merced, se me notifica por su secretario. He reclamado con esta oportunidad de la exigua porción de terreno que se adjudica al indígena. En general he notado que se les deja dos, tres, cuatro hectáreas por cabeza.

Se me dice que se les da esto en atención a lo que poseen de acuerdo con la ley, y se me agrega, además, que no conviene darles mayor cantidad porque esos tierras quedarían desocupadas y fuera de cultivo; que el indio es perezoso

y que conviene que las posean manos civilizadas que incorporen riquezas a estas regiones.

No conceptúo atendibles semejantes alegaciones, pues, con la escasa cabida que se les asigna, se les condena para siempre al régimen de comunidad del cual pugnan por salir: con ese insignificante porción de terreno no se puede practicar entre ellos cómoda división, pues no es dable dedicar dos, tres, cuatro hectáreas a cultivos y a pastoreo de animales en terrenos de mala calidad y que muchas veces se cubren completamente de agua en la larga época de las lluvias de esta zona.

Para demostrar que es escasa la extensión de terreno que se da a los indios, me bastará hacer presente que algunos se ven obligados a arrendar otras, pues no caben en los que le dejó la Comisión Radicadora. Muchos, por este motivo, se ven obligados a llevar a pastorear sus animales a la Argentina.

Hay que tomar en cuenta que los terrenos de la Frontera no son de la calidad de los del norte y todavía que el indígena necesita más cabida que el civilizado, que puede hacer cultivos intensivos que sería ridículo exigir a ellos.

Poca importancia he dado también a la objeción que se me ha hecho afirmando que el indígena no se contenta jamás con lo que le adjudica la Comisión Radicadora y que ellos se creen dueños de toda la extensión que abarca su vista, pues que en realidad, como ellos lo manifiestan en su expresivo lenguaje, se les deja demasiado *atracados*.

Se me ha dicho también que no es posible dar más tierras a los indígenas por la sencilla razón que no las hay y, en caso de haberlas, no sería equitativo poner a unos indios en condiciones más favorables que a otros a quienes se ha hecho pequeña adjudicación. Tampoco tiene, a mi ver, fuerza este argumento: si se ha cometido injusticia respecto de unos no se sigue necesariamente que esa injusticia se ha de hacer extensiva a todos. Las tierras fiscales que han quedado al lado de la de los indios deberían acrecer a las respectivas reducciones cuando ha habido escasa adjudicación. Y la escasez de tierra de que se hace mérito se debe precisamente a no haber practicado las radicaciones en conformidad a la ley; pues se ha procedido en sentido contrario a lo por ella prescrito. No hago cargo a los funcionarios que hoy tienen este servicio: el mal viene de más atrás. La ley de 4 de diciembre de 1866 dispone que en terrenos de estas zonas se proceda a radicar a los indios, y que el sobrante se repute terreno baldío, y de dominio del Estado. Como se ve, es necesario radicar primero a los indios para determinar cuál es la propiedad fiscal; pero en muchos casos se ha procedido a la inversa: el Estado ha dispuesto de estos terrenos, sacándolos a remate, y después se ha radicado a los indios, dejándolos encerrados entre terrenos rematados; en el sobrante, puede decirse, de estos remates, se les ha radicado. Se ha procedido, pues, en sentido contrario a lo dispuesto por la ley.

Hay, pues, que reaccionar y proceder con más equidad y más generosamente con los dueños originarios de este suelo.

Es necesario mirar al porvenir: esta raza se multiplica de asombrosa manera y si es cierto que la mortalidad es también asombrosa en ella, este accidente

puede corregirse si se toman medidas higiénicas y se preocupan los poderes públicos de su conservación. No se creen proletarios para lo futuro y procediéndose con cierta largueza en la repartición de las tierras, trátese de incrementar una población acomodada que sirva de base a la expansión futura de la del país y no se desperdicie el aprovechamiento mejor de los notables caracteres étnicos de los araucanos que hasta hoy nada se ha hecho para utilizarlos. Está probado que el mejor colono es el que ha nacido en la tierra que se pretende colonizar, que se ha encariñado con su suelo, que está apegado a él: aprovechemos, pues, estas cualidades que posee el araucano y no le mezquinemos terrenos.

Convendría que el Presidente de la República, haciendo uso de la facultad que le confiere el art. 73, número 2 de la Constitución del Estado, reglamentara la ley de 4 de diciembre de 1866 y fijara un mínimum a las adquisiciones de terrenos indígenas.

VI

Debo hacer otras observaciones que me han sugerido mis relaciones con la Comisión Radicadora. Los araucanos desean vivamente se les radique con prontitud para verse amparados con un título en el terreno que poseen; de ahí sus frecuentes viajes a Santiago para pedir su radicación y las numerosas solicitudes llegadas a la Oficina de mi cargo con el mismo objeto, y que yo me he limitado a ponerlas en conocimiento del señor presidente de dicha comisión. Justo es convenir en que la lentitud de este servicio no se debe a desidia de los funcionarios encargados de él, sino a los procedimientos en vigencia. Me consta personalmente el interés y celo del distinguido jefe de esa Oficina.

El procedimiento empleado para la radicación es el siguiente: se toma matrícula por el secretario de la Comisión de Títulos o por un ingeniero de ella y, a veces por su mismo presidente, de los indígenas existentes en una zona dada. Practicado este trabajo, los indios matriculados deben comparecer a esa Oficina con testigos que establezcan su calidad de tales y que declaren que han poseído más de un año el terreno en que pretenden radicarse. Rendida la información, se les extiende título de merced que es notificado al señor Promotor Fiscal y al infrascrito. Cuando la adjudicación de terreno excede de trescientas hectáreas hay que elevar el expediente al Supremo Gobierno para que lo apruebe. Sucede muchas veces que los indígenas no comparecen oportunamente con sus testigos a recibir la información a que nos hemos referido, y trascurren así dos, tres y cuatro años: entonces no es posible recibir ya la información para extenderles su título de merced, sin revisar antes la matrícula. Como se ve, el procedimiento es engorroso y dilatorio.

Es necesario, pues, reformar la Ley de Radicación para dar más impulso a las operaciones de los radicadores.

Es además urgente concluir con la radicación indígena, porque, como Ud. lo hizo presente en su última Memoria, "mientras no se solucione el problema de

la radicación indígena no podrá constituirse correctamente la propiedad en el sur".

VII

Las frecuentes peticiones de indígenas que llegan a la Oficina a cargo del infrascrito con el objeto que se haga practicar entre ellos la división de las tierras que dejó en común la Comisión Radicadora, en otro de los aspectos por que debe contemplarse la ley de 4 de diciembre de 1866.

Aplicándose el número 5 del art. 8 de esta ley se acostumbra radicarlos en común, aunque la radicación individual está también contemplada en los números 2 y 3 de ese artículo.

Cuando la ley ordena la radicación en común da también facilidades para la individual o por familias, disponiendo (número 6) que si una octava parte de los indígenas, cabeza de familia de la reducción conocida como propietaria del terreno, pidiere que se le asigne lo que determinadamente les corresponda, los ingenieros procederán a hacer la división y demarcación de límites asignando al cacique el triple de la parte de terreno que se asigne a las cabeza de familia.

Uno de los grandes empeños de los indígenas es gozar tranquilamente de sus tierras fuera de comunidad.

Esto demuestra que la raza ha progresado socialmente, que conoce las ventajas de la propiedad raíz individual, que le repugna el régimen de comunidad a que se le obliga, que solo conviene a un estado social más atrasado.

Podemos decir, entonces, que los indígenas han adelantado más en este sentido que la ley que estableció su radicación, ley que reconoce el cacicato, hoy casi extinguido, y que consulta[323] a favor del cacique odioso privilegio en el reparto de las tierras.

En la última Memoria presentada a la Inspección General por mi antecesor se dice lo siguiente, hablando de los inconvenientes que acarrea la comunidad en que se deja a los indios:

> Otro inconveniente grave de este sistema que arranca de la misma causa, es el que trae consigo el cobro de la contribución de haberes. Encontrándose los indígenas en comunidad tienen ellos también que pagarlas en común. Pero hay muchos que no pueden o no quieren pagarla, y lo peor es que en las tesorerías municipales no se admiten pagos parciales sino la cantidad que adeuda la reserva. De aquí nacen otras infinitas cuestiones y sobre todo los abusos de los cobradores municipales, quienes, si los cometen con los grandes propietarios, como me consta, es natural que lo cometan mayores con los indígenas, embargándoles sus pocos animales y privándoles a veces del goce de sus terrenos.

[323] = dictamina.

Actualmente estoy preocupado de atender infinitas peticiones de división de tierras y encargo de ellas al ingeniero don Luis Conrady, que tan oportunamente tuvo a bien poner a las órdenes del infrascrito, y que cumple con todo celo y actividad las comisiones que se le confieren.

VIII

Sobre el cobro de la contribución de haberes a los indígenas, debo observar lo siguiente: los indios radicados, como dueños de la porción de tierra que les ha sido designada, no están exentos del pago de este impuesto, pero los no radicados, que no han consolidado con la propiedad la posesión del terreno que ocupan, en la que son comuneros con el Estado, no se puede legítimamente cobrárseles según lo dispuesto en el número 1 del art. 38 de la Ley de Municipalidades. Con todo, a muchos indios se les practica este cobro, lo que ha reclamado la intervención del infrascrito para evitar semejante abuso.

La mayor parte de las municipalidades son bastante inescrupulosas en el cobro de esta contribución. Los funcionarios que intervienen en la tasación de las propiedades para los efectos de este pago, asignan siempre a las de los indígenas valor subido y no dejan jamás de incluir en el respectivo rol hijuelas de menos de dos mil pesos a las cuales se les aumenta su avalúo con ese fin.

Materialmente imposible es al infrascrito corregir o atenuar siquiera en su mayor parte estos abusos en comunas distantes del lugar en que ejerce sus funciones, y sabido es que son numerosas las comunas de esta zona.

Las publicaciones del rol de avalúos que deben hacerse en conformidad a la ley, y en que figuran propiedades indígenas cuya tasación debería objetarse, pocas veces llegan a mi conocimiento, pues ni siquiera tengo noticias de los periódicos en que se inserta.

Además, no dispone esta Oficina de un plano general en que estén indicadas las propiedades de indígenas radicadas en las diversas comunas y las que, de acuerdo con un ingeniero conocedor del terreno, podrían avaluarse prudencialmente y enviar en seguida esta operación a la municipalidad para que la tuviera en cuenta al revisar las operaciones de los tasadores.

He dicho que se cometen abusos con los indígenas, originados del cobro de contribución de haberes, y para probar con hechos lo que afirmo me bastarán dos ejemplos tomados entre muchos: en los momentos mismos en que estaba redactando esta Memoria acudió a esta Oficina un indígena manifestando que para cobrarle un recibo por cuatro pesos doce centavos se le había embargado un caballo, cinco sacos de siembras de trigo y otros tantos de cebada.

Como puede suponerse, las costas de la cobranza centuplican el valor de lo cobrado: el recaudador municipal que tiene que trasladarse al campo para efectuarla exagera sus derechos, ya gravados con la distancia, echando mano a antojadizo y bastante elástico arancel. Todavía más: hay que nombrar depositario, quien, a su parecer, cobra razonable honorario, a lo que hay que agregar,

además, las costas causadas en la secretaría del juzgado; de modo que muchas veces la totalidad de lo que puede cosechar un indígena se le va en el pago de la contribución.

Un natural llamado Chenquimilla (sic) compareció ante el infrascrito manifestando que la Municipalidad de Perquenco le había embargado sus tierras por no haber pagado la contribución, entregándoselas a un tercero, quien, subrogándose en sus obligaciones para con la Municipalidad, las poseía. En vista de esto, el infrascrito dirigió una nota al alcalde invitándolo a corregir semejante abuso. Dicho funcionario contestó que este asunto estaba entregado al Juzgado de Letras de Traiguén y que ocurriera a esa autoridad. En la imposibilidad de trasladarse a ese punto dirigió un oficio al señor Promotor Fiscal para que, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto supremo de 10 de noviembre de 1884, se sirviera asumir la defensa y representación de dicho indígena.

El señor Promotor Fiscal contestó la siguiente nota, que entrego a la consideración de Ud.

Traiguén, 31 de agosto de 1901.
Le acuso recibo de su nota número 127 de 26 del corriente. En contestación a ella digo a Ud., que siento no poder acceder a su petición por las siguientes razones: 1°, el art. 8 de la ley de 4 de diciembre de 1866 que creó el cargo de Protector de Indígenas, confiere a dicho funcionario, sin límites, la representación de los indígenas; por consiguiente, para que esa representación se hiciera extensiva a los promotores habría necesidad de una ley; 2°, porque, en vista de la disposición legal anteriormente citada, el decreto de 10 de noviembre de 1884 es ilegal; 3°, porque, no habiendo ninguna ley que imponga a los promotores la obligación de defender a los indígenas, el decreto citado es, además, inconstitucional, atendiendo a lo dispuesto en el número 10 del art. 28 de la Constitución; 4°, porque, teniendo interés una municipalidad en los juicios que hay que iniciar, no puedo defender a los indígenas, siendo promotor, en virtud de lo dispuesto en el art. 7 de la ley de 5 de enero de 1894 y en el número 6 del art. 263 de la Ley Orgánica de Tribunales; y 5°, porque, en mi concepto, a los indígenas radicados, a pesar de lo dispuesto en el art. 6 de la ley de 4 de agosto de 1874 y en las leyes de 20 de enero de 1893, pueden embargárseles y rematárseles sus terrenos por falta de pago de las contribuciones.

La ley de 20 de enero de 1883, como Ud. sabe, restableció el cargo de Protector de Indígenas creado por la ley del año 1866, sin modificaciones de ninguna clase.

Debo hacer presente a Ud., sobre este asunto, que el año 1892, si mal no recuerdo, el tesorero fiscal inició aquí un juicio contra el indígena Enrique Levian, representado después por su hijo Pedro Husuchunao, por cobro de contribuciones agrícolas; que, como ese juicio se embrollase en su tramitación, el tesorero me requirió para que lo siguiese, en virtud de lo dispuesto

en el artículo 31 de la ley de 20 de enero de 1883 que organizó las tesorerías; que dicho juicio estuvo dos o tres veces en apelación ante la Corte Suprema; y que este Tribunal, que bien pudo pronunciarse de oficio sobre la improcedencia del cobro de la contribución del embargo del terreno del indígena ejecutado, no dijo chus ni mus al respecto.

Este juicio terminó adjudicándose al fisco el terreno embargado, de todo lo cual tiene conocimiento la Inspección por comunicaciones mías.

Dios guarde a Ud.

Rosendo Caro

Al señor Protector de Indígenas, Temuco.

Luego que el infrascrito tomo posesión de su cargo, comenzó a preocuparse de la situación legal de los indígenas radicados respecto de las municipalidades en lo tocante al pago de la contribución de haberes y a la manera de hacérsele efectivo, y, aunque se formó concepto propio sobre la materia, quiso tener una opinión más autorizada y propuso a Ud. la cuestión en nota enviada al efecto, que tuvo a bien pasarla en informe a la Sección de Defensa Fiscal, cuyo abogado jefe, señor Ramón Briones Luco, lo evacuó brillantemente. Ese informe fue aceptado en todas sus partes por la Inspección General, y constituye una luminosa y detenida exposición de las leyes especiales que reglan la propiedad indígena.

El señor Briones opina que no debe cobrárseles el impuesto sobre haberes a los indígenas no radicados y en cuanto a los radicados dice lo siguiente, que copio a la letra:

Respecto al indígena *radicado* la cuestión varía completamente de aspecto: debe pagar el impuesto como cualquier otro propietario. Las leyes que le prohíben enajenar o desprenderse del goce de su terreno no le privan de su calidad de dueño.

Pero surge de aquí otra dificultad grave, que probablemente ha motivado la consulta del señor Protector de indígenas, y esta es si son embargables y alienables, por el Ministerio de la Justicia, las propiedades de indígenas, para hacer efectivo el pago del impuesto de haberes.

Este asunto requiere también una lata exposición.

El decreto Supremo de 14 de marzo de 1853, que tiene fuerza de ley por haber sido dictado en uso de la facultad que se confirió al Presidente de la República por los art. 3 y 5 de la ley de 2 de julio de 1852, dispone en su art. l que "toda compra de terrenos hecha a indígenas o de terrenos situados en territorios de indígena, debe verificarse con intervención del Intendente de Arauco y del Gobernador de Indígenas del territorio respectivo que el Intendente comisione especialmente para el caso, etc.

Esta atribución del Intendente y Gobernador pasó después, por disposición del art. 8 de la ley de 4 de diciembre de 1866, al Protector de Indígenas.

Tres años después de publicado el decreto de 1853, el Gobierno hizo la siguiente e importante declaración que se refiere al caso en estudio y que aparece en el decreto Supremo de 17 de abril de 1856.

Se declara que en las enajenaciones de terrenos situados en territorio indígena que se hicieron en pública subasta *por ejecución* o por pertenecer dichos bienes a menores, no es necesario para la validez que intervenga el Intendente ni que se consulte al Gobierno cuando el terreno enajenado exceda de mil cuadras. Pero la escritura que debe otorgarse se extenderá en el libro que por decreto de marzo de 1853 debe llevarse en la secretaría de la intendencia de Arauco.

La ley de 1866 no modificó en nada esta disposición: solo amplió el decreto supremo de 14 de marzo de 1853, al disponer en su art. 4 que: "los contratos traslaticios de dominio sobre terrenos situados en territorio de indígenas solo podrán celebrarse válidamente cuando el que enajena tenga título escrito y registrado completamente; siendo indígena alguno de los contratantes, se necesita además que el contrato se celebre con arreglo a las prescripciones del decreto de 14 de marzo de 1853, el cual queda vigente, etc.".

Estando el indígena radicado tiene el título escrito y registrado que exige la ley: el indígena no radicado no puede cumplir esta condición impuesta por la ley.

Posteriormente el art. 5 de la ley de 4 de agosto de 1874 agregó que "la prohibición de enajenar contenida en el inciso 1 del art. 4 de la ley de 4 de diciembre de 1866 se extiende a las hipotecas, anticresis, arriendos o cualquier otro *contrato* sobre terrenos situados en territorio indígena".

Las varias leyes citadas continúan hasta aquí empleando solo la palabra *contrato* que hemos subrayado.

Mas la grave dificultad comienza en esta misma ley de agosto de 1874.

El art. 6 copiado a la letra en sus dos primeros incisos, dice: "Se prohíbe a los particulares la adquisición *por cualquier medio* (obsérvese que ya no emplea la ley la palabra contrato y que indudablemente se refiere a todos los modos de adquirir) de terrenos de indígenas dentro de los siguientes límites: por el norte el río Malleco, desde su nacimiento en la cordillera de los Andes, hasta su desembocadura en el río Vergara, y de este punto, siguiendo al sur el curso del río Picoiquen, hasta su nacimiento en la cordillera de Nahuelbuta; y desde allí una línea hasta la laguna de Lanalhue, situada en dicha cordillera, y el curso del río Paicaví hasta su desembocadura en el mar; por el sur el límite que separa el departamento de Imperial de la provincia de Valdivia; por el este, la cordillera de los Andes y por el oeste el mar. No regirá esta prohibición respecto de los fundos cuyos títulos estuvieren ya inscritos en la forma legal".

Esta disposición vino indudablemente a derogar, conjuntamente con el decreto de marzo de 1853, el decreto de 17 de abril de 1856, que permite la subasta de las propiedades indígenas en caso de ejecución.

Sólo quedaron vigentes sus disposiciones, al norte de la zona indicada, la provincia de Biobío, una parte del departamento de Angol y toda la parte de la provincia de Arauco que se encuentra al norte del Paicaví.

Desde Valdivia al sur se mantuvieron también sus disposiciones.

Más adelante veremos la suerte que tuvieron estas excepciones.

Esta prohibición contenida en la ley de 1874 fue haciéndose más severa y extensiva en las leyes posteriores.

El art. 1 de la ley de 20 de enero de 1883 dispone que: "la prohibición de adquirir terrenos de indígenas hecha a los particulares en el art. 6 de la ley de 4 de agosto de 1874 en el territorio designado en dicho artículo, se extiende a las hipotecas, anticresis, arriendos o cualquiera otro contrato en virtud del cual se prive directa o indirectamente a aquéllos de la posesión o tenencia sobre terrenos situados dentro de esos límites, aun cuando el indígena, o la reducción a quien pertenezcan tengan registrado su título de propiedad".

Con posterioridad, la ley de 11 de enero de 1893 prorrogó por dos años la prohibición y dispuso que estas prohibiciones se hacen extensivas a la provincia de Valdivia, Llanquihue, Chiloé y el territorio de Magallanes.

De este modo, desde enero de 1893 dejaron de regir desde Valdivia al sur las disposiciones del decreto de marzo de 1853 (cuyas disposiciones se habrían hecho extensivas a Valdivia y Llanquihue) y, por consiguiente, las del decreto de 17 de abril de 1856, sobre ejecuciones.

Esta fue la suerte que corrió el territorio de indígenas situado al sur de la zona de prohibición.

Respecto al territorio situado al norte de esa zona y que abarca una valiosa extensión, poblada por indígenas, en el departamento de Cañete, debemos hacer las siguientes observaciones: La ley de 13 de octubre de 1875 derogó las prohibiciones de las leyes de 1866 y de 1874 en el departamento de Lebu y en la parte del norte del departamento de Cañete, comprendida hasta la ribera septentrional del río Tirúa, y dispuso que las ventas de los terrenos de indígenas deberían hacerse en conformidad a las prescripciones del decreto de 14 de marzo de 1853.

Mas las prohibiciones de las citadas leyes de 1866 y de 1874 fueron restablecidas entre el Tirúa y el Paicaví por el art. 1 de la ley de 9 de noviembre de 1877 que dice: "siendo por lo tanto absolutamente prohibido a los particulares adquirir terrenos de indígenas dentro de los límites que señala el inciso 1 del citado art. 6 (de ley de 4 de agosto de 1874)", es decir, al sur del Paicaví en esa zona.

En la parte norte de la misma quedó vigente la disposición del artículo 15 de la ley de 13 de octubre de 1875.

En consecuencia, al norte del Paicaví y en todo el norte de la zona de prohibición de la ley de 1874 rige el decreto de 14 de marzo de 1853 y el de 17 de abril de 1856.

Estas son, señor Inspector General, las conclusiones a que arriba el infrascrito después del detenido estudio de la cuestión propuesta que ha practicado a pedido del señor Protector de Indígenas.

Estas conclusiones pueden reducirse a los siguientes puntos concretos.

1° En los indígenas no radicados no puede hacerse efectivo el impuesto, en modo alguno; 2° Los indígenas radicados deben pagar el impuesto, porque la ley no los exceptúa; pero hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

a. En la zona de prohibición de la ley de 1874 no pueden embargarse ni rematarse los terrenos de indígenas desde aquella fecha. Entre el río Paicaví y el Tirúa, en Cañete, pudieron rematarse desde 1875 a 1877.

b. En las provincias situadas al sur de aquella zona no pueden efectuarse esos embargos y subastas desde 1893.

c. En los departamentos situados al norte de la zona indicada, pueden efectuarse dichos remates.

Indudablemente se preguntará el señor Inspector cómo se podría armonizar la extraña situación en que se encuentra el municipio respectivo del indígena; pues si, por una parte, este último está obligado a pagar el impuesto, el municipio, por la otra, no puede proceder a una ejecución nula ante la ley.

Sólo la ley puede entrar a resolver esta grave dificultad y convendría que la Inspección General sometiera, para el efecto, este asunto al elevado criterio y sabiduría del Gobierno. Entre tanto, los municipios podrían hacer efectivo el impuesto en los bienes muebles de los indígenas.

No obstante el señor Inspector General resolverá lo que pareciere más de justicia.

Santiago, 19 de julio de 1991.

Ramon Briones L.

Abogado Jefe de la Sección de Defensa.

Urge, pues, definir el conflicto legal puesto de manifiesto en el dictamen que procede y dictar una ley que consulte[324] algunas garantías para los indígenas en la percepción del impuesto de haberes.

IX

Las expoliaciones de que son víctimas los indígenas en los juzgados de menor y mínima cuantía, merecen también capítulo aparte.

En estos juzgados se estafa de manera inicua a los naturales, cobrándoseles muchas veces deudas supuestas. El procedimiento que para ello se emplea es perfectamente adecuado y produce siempre los resultados que se han tenido en mira: un tinterillo se presenta a uno de estos juzgados y pide que el indígena

[324] = prevea, dictamine.

tal o cual sea citado a reconocer una cuenta o una firma puesta a ruego suyo en un pagaré. El *chauchero,* que, como dijimos, es la palabra que sirve a los indígenas para designar a los receptores, lo notifica o no; pero siempre estampa la diligencia. No comparece el citado, y la firma o cuenta se da por reconocida en su rebeldía. Si comparece, no por eso se ha mejorado su situación, porque, aun cuando niegue la deuda o niegue haber rogado a alguien para que firme por él, como no sabe escribir, al levantarse el acta se hace la declaración que ha reconocido la cuenta o que ha hecho firmar a ruego. Ya el explotador tiene título ejecutivo. Lo que sigue es consecuencia lógica del procedimiento: el *chauchero,* auxiliado con la fuerza pública, que se ha pedido de antemano, se dirige a la reducción y por una deuda de treinta, cuarenta o cincuenta pesos se embarga animales de valor de trescientos, cuatrocientos o quinientos pesos. Es de advertir que no se toma para nada en cuenta que los animales pertenezcan al deudor verdadero o ficticio: se embarga los que señale el *chauchero* o el interesado. Se nombra un depositario a un insolvente. Y total: los dueños no vuelven a ver más sus animales.

He tenido oportunidad de imponerme de estos actos indignos no solamente en mis funciones de Protector de Indígenas, sino también desempeñando las de juez letrado en departamentos en que hay indios.

Se me ha denunciado por personas que merecen fe que algunos individuos realizan el milagro de cosechar trigo sin haberlo sembrado, pues para ello tienen las sementeras de los indígenas: el medio cómo verifican este milagro es empleando pagarés impresos que se llenan con el nombre de algún indígena que cosecha trigo y con una cantidad de pesos que se les debe y se sigue el procedimiento que acabo de detallar.

En la última visita a los juzgados de subdelegación y de distrito practicada por el juez letrado de este departamento, don Juan de Dios Ibar pudo imponerse de abusos de este género y, entre otras medidas conducentes a precaverlos, hizo citar a algunos caciques influyentes para que recomendaran a los indígenas se abstuvieran de hacer firmar pagarés a ruego.

Siguiendo el sistema de aducir hechos para patentizar lo que afirmo, voy a citar uno porque es reciente, entre muchos que se me han dado a conocer, y copio la siguiente nota que me ha sido enviada por el señor Gobernador de Imperial:

> Nueva Imperial, 21 de febrero de 1902
>
> Como me he permitido manifestar a Ud. verbalmente y por cartas particulares, son innumerables y de todo género los abusos que se cometen con los indígenas y voy a citarle un hecho concreto: el nacional no indígena Serafín Martínez ha cobrado por varios años consecutivos al indígena Painecura Orellana –como fiador de Felipe Maliqueo– cierto número de fanegas de trigo que este vendió en yerba al primero de los nombrados, embargando a Painecura Orellana el que cosecha sin dejarle con qué subvenir a las necesi-

dades de su familia, no obstante estar esa deuda completamente extinguida con la cancelación total que a tiempo se hizo; pero el documento no fue devuelto y ha servido para la ejecución en los años siguientes.

Y en igual caso se encuentran la mayor parte de los indígenas: se abusa descaradamente de su ignorancia para explotarlos sin consideraciones de ninguna especie.

Otros, aprovechando la necesidad en que viven los naturales, les hacen pequeños anticipos por arriendo de sus suelos, y más tarde, con falsos testigos, los hacen aparecer con deudas crecidas, para cuya satisfacción ejecutan[325] a sus víctimas [y] ni siquiera les abonan el valor del arriendo.

Da verdadera lástima ver cómo son explotados estos infelices indios; y si no se toman algunas medidas eficaces que corten de una vez tanto abuso, se les obligará a que vuelvan a sus malos hábitos de robo.

Ud., que tanto interés toma por ellos, podrá hacer mucho en su favor.

Saluda a Ud.

J. Ignacio Anguita

Señor Protector de Indígenas

Temuco

Poco tiempo después el mismo funcionario me envió también la siguiente nota:

Nueva Imperial, 27 de febrero de 1902

Ampliando mi comunicación anterior número 231 dirigida a Ud. con fecha 21 del presente, permítome hoy agregar a los hechos enumerados e indicados en ella otros más graves que han sido comunicados al señor juez letrado por el Inspector del 1er distrito de la 4ª subdelegación de este departamento, don Mariano Faundes M., expresando: que Félix Muñoz como acreedor o encargado de cobrarles a los indígenas Francisco Painen, Juan Lincopi, Juan Millanao y Rosa Lincopi una deuda de *quince* pesos, entabló demanda en su contra y el juez de aquel distrito, don Celestino Mella, socio y cuñado del ejecutante Muñoz, ordenó embargar a Francisco Painen una ternera de año, un novillo de dos años, ochenta cabezas de ganado lanar, tres y media fanegas de trigo sembrado, tres y medio sacos de papas, tres almudes de maíz y dos de frijoles, también sembrados, y a Lincopi una sementera de trigo; ¡y que todo lo embargado no representa menos de *seiscientos pesos* por una deuda que apenas llega a *quince* pesos!

Que esa deuda ha sido pagada les consta a los testigos Luis Osorio, Nepomuceno López, Juan Parra, Francisco y Salomé Castro, Gregorio Arévalo y José Miguel Díaz; sin embargo, los documentos que debían ser devueltos para los efectos de la cancelación, no han sido entregados a los indígenas y

[325] = demandan.

con ellos se les vuelve a ejecutar, o bien los hace firmar el juez nuevos documentos a ruego de un hijo suyo que cobra un peso por cada firma.

Esta Memoria se volvería interminable si enumerara todos los medios, ingeniosos algunos, empleados por la mala fe para estafar a los indígenas en los juzgados de menor cuantía, servidos muchos de ellos por verdaderos desalmados, si he de emplear la palabra que, aunque dura, traduce fielmente el concepto.

No son ajenos al conocimiento de Ud. los abusos perpetrados por estos funcionarios, pues en su última Memoria se refiere brevemente a ellos y dice:

> Los jueces de subdelegación y de distrito exceden de una manera increíble sus atribuciones y ejercen sin reparo alguno las funciones de un juez letrado. Se me ha asegurado como efectivos actos de partición verificados por jueces de subdelegación y de distrito y me consta que conocen en delitos y actos de la exclusiva competencia del juez letrado.
>
> Aquellos funcionarios persiguen encarnizadamente al pobre indígena y hacen gravitar en él todo el peso de la injusticia, habiéndose ejecutado prisiones y castigos ante el solo denuncio de un supuesto robo de un buey o de una vaca, hechos por personas interesadas en usufructuar del terreno ocupado por el indio y que se valen de ese medio para ahuyentarlos de los terrenos que ocupan.

X

Acerca de la parte que me ha cabido para amparar y pedir la represión de los delitos que se perpetran con los indígenas es también necesario que haga una pequeña amplificación.

Es conveniente que se sepa que las prisiones arbitrarias decretadas contra ellos por funcionarios administrativos de inferior jerarquía son frecuentes, como también las flagelaciones para hacerlos confesar delitos en que se supone tengan participación y otras torturas a que se les somete en que la nota salvaje de refinamiento de crueldad no falta jamás.

Debo reseñar un asesinato alevoso de que fue víctima un indígena y que corre peligro de quedar impune.

Ocurrió, no hace mucho, a esta Oficina el natural Juan Millaleo herido a bala diciendo que en uno de los días del mes de diciembre se presentó a su *ruca,* poco después del mediodía, un sujeto llamado Daniel Guzmán acompañado de tres gendarmes, en estado de ebriedad, cuyos nombres ignoraba; que lo sacaron a él y a un hermano llamado Francisco Levinao a una quebrada distante como cuadra y media de su *ruca* y, después de amarrarlos, se les hizo fuego dos veces, hiriendo a Millaleo y ultimando a Levinao. Los soldados pertenecían al destacamento de Perquenco. Hice la competente denuncia ante el Juzgado de Letras, quien ordenó la aprehensión de los gendarmes. El jefe superior de este

destacamento, que no era el señor Trizano, se me presentó después atenuando la conducta de sus soldados, quienes, según me aseguró, observaban buena conducta y que el proceso que se seguía era una verdadera desgracia, pues esos soldados no habían pretendido asesinar a los indígenas sino amedrentarlos. Persiguiendo un robo, llegaron a las cercanías de sus viviendas, y como huyeron, se les hizo fuego a trescientos metros, disparándose solo un tiro, que alcanzó a estos dos infelices. Con todo, la justicia se encargará de averiguar y reprimir este delito.

Para terminar este capítulo, comunicaré a Ud. algunas crueldades que cometía un sujeto que ejerció el cargo de Inspector y que abusivamente se había hecho fuerte en tierra de indios: cuando lo molestaban o quería descubrir algún delito, torturaba a los indígenas introduciéndolos en sacos varios de trigo y sumergiéndolos después en el río Metrenco.

Constan estos hechos en un proceso que se sigue a Roberto Walder, pendiente hoy ante la Corte de Concepción. Uno de los indios, víctima de este delito, individuo bastante trabajador que se ocupaba como mecánico en una máquina trilladora, quedó casi inutilizado para ganarse su vida. No pasaron hasta aquí las crueldades de este sujeto y el infrascrito recibió repetidas quejas en su contra hasta que consiguió hacerlo aprehender por malos tratamientos de obra inferidos cobardemente a unas indias.

XI

Por la exposición que precede se habrá podido notar la magna labor de la Oficina a mi cargo, labor que, para su eficacia, necesita ser compartida con otros funcionarios del mismo orden.

El art. 8 de la ley de 4 de diciembre de 1866, que creó el puesto de Protector de Indígenas, le asignó, entre otras obligaciones, la de defender y representar los derechos de estos en todas las circunstancias que se ofrezcan.

Tal disposición pudo aplicarse cuando efectivamente había fronteras con los araucanos, cuando existía separación material que podía fijarse con una línea en el mapa entre Chile civilizado y Chile bárbaro; pero no después que, conquistados los territorios antes ocupados por los indígenas, se ha formado en ellos vastas e importantes circunscripciones administrativas.

Como se sabe, las fronteras araucanas comprenden varias provincias y es materialmente imposible a un solo funcionario atender a la defensa y representación de los indios en una zona tan extensa. Hay imposibilidad absoluta para atender estos servicios simultáneamente en los juzgados de Temuco, Traiguén, Angol, Collipulli y Cañete, por ejemplo.

Es cierto que el Protector de Indígenas debe ser auxiliado en sus tareas por los promotores fiscales, según los términos del decreto de 10 de noviembre de 1884; pero, como se ha visto, uno de estos funcionarios ha impugnado la legalidad y aun la constitucionalidad de esa disposición y otros a los cuales me he diri-

gido para que asuman en casos determinados la defensa y representación de los indígenas, no se han dignado acusarme recibo de mis comunicaciones. Salvando los promotores fiscales de Collipulli y de Cañete, no he tenido noticias de otros que se allanen a acatar el decreto supremo ya citado. Este último funcionario, que con todo celo ha tratado de amparar a los indios, ha encontrado dificultades ante el juzgado respectivo originadas de diversidad de criterio para apreciar la aplicabilidad del tantos veces referido decreto.

XII

Se acerca la época en que los araucanos tendrán la libre disposición de sus tierras, y es necesario considerar detenidamente este problema.

He visto, en memorias ministeriales, emitida la opinión de derogar lisa y llanamente las leyes prohibitivas que reglan la propiedad indígena.

En pocos meses más no habrá necesidad de una declaración legislativa a este respecto y bastará no renovar estas leyes, que fueron dictadas para regir durante un término fijo.

No creo que sea prudente dar libertad de disponer de sus tierras a los indígenas, pues así desaparecerá en breve tiempo la propiedad araucana. La voracidad de los particulares no se detendrá ante nada para adquirir a cualquier medio estas tierras, que son las mejores de la Frontera.

En páginas anteriores me he ocupado de las precauciones bastante minuciosas que se han tomado, ya en leyes, ya en decretos, para evitar los abusos que en perjuicio de los intereses de los araucanos, y aun de los del Estado, se cometían y que solo han venido a corregirse a medias con las leyes prohibitivas en vigor.

Con semejante facultad, que tan prematuramente se otorgara a los indígenas, ocurriría en toda la Frontera lo que pasó en la provincia de Valdivia antes del régimen de las leyes prohibitivas vigentes.

Para patentar esto voy a tomar algunos párrafos de una concienzuda comunicación enviada al señor inspector general por la Subinspección de Valdivia, en que, hablando de la colonización de ese territorio y del estado de las tierras indígenas, dice lo siguiente:

> El resultado feliz de esta colonización fue la consecuencia inevitable de la usurpación de las tierras que ocupaban los indígenas, usurpación que se llevó a efecto por medio del incendio y del asesinato. Para poner fin a los abusos que se cometían, el Supremo Gobierno hizo extensiva a la provincia de Valdivia la prohibición a que se refiere la ley del 4 de agosto de 1874, dictándose la de 13 de enero de 1893. No faltó medio para burlar los efectos de esta ley: a fines del año 1892, o más bien, cuando se comenzó a discutir en el Congreso, dieron remate a los terrenos que aun quedaban, haciéndose tal número de compras que los escribientes extraordinarios de la notaría no daban abasto a la profusión de escrituras que se extendieron.

Solo queda libre la parte que comprendió el límite sur del antiguo departamento de Imperial, pero no de litigios en Lanco, Cudico, Loncoche y Muquen, y el Fisco tendrá que demandar a sus actuales ocupantes, quienes han adquirido sus terrenos, sabiendo que contravenían a lo dispuesto en la ley de 4 de agosto de 1874.

En el estudio de los títulos de propiedad que he venido haciendo he encontrado el origen de alguno de éstos: particiones en que por auto del juez compromisario se ordena el remate de un terreno cuya acta inscribe el subastador y que abarca cuanto se ambiciona, sirviendo este título de base para la constitución de la propiedad de tal o cual fundo; ventas forzadas que de los terrenos que ocupaban no han hecho los indios, sin comprobarse previamente si el indio era o no verdadero dueño del terreno que vendía y la extensión de éste; son los particulares quienes tomaron esta diligencia a su cargo. Con la acción y derecho que compraban al indio se presentan al juzgado pidiendo la entrega judicial del terreno; esta se concede, cometiéndose a la autoridad más inmediata al predio, quien los deja en posesión de cuanto quieren abarcar; se levanta el acta respectiva; aunque haya otros vivientes, no importa, los obligan a salir si se resisten y los asesinan si tratan de defenderse; pero el comprador queda dueño de más de cuarenta mil hectáreas de terreno.

Son muchas las personas que hay en Valdivia sindicadas de haber asesinado a indios con el objeto de apoderarse de sus terrenos, y casi me atrevo a asegurar que nunca se ha levantado un sumario para esclarecer la verdad, pero si aseguro que estos son ricos propietarios dueños de considerables extensiones de terreno que antes ocupaban los indios.

Igual a lo acontecido en Valdivia sucedería en toda la zona en que hay tierras de indígenas si se alzaran las restricciones que hoy limitan su dominio en provecho exclusivo del tinterillaje y de sus actuales explotadores.

Si las tierras poseídas por los indígenas hubieran de pasar a manos de trabajadores honorables, tal vez podrían disimularse los inconvenientes que se derivarían de esta prematura libertad; pero, teniendo certidumbre que pasarán a manos inescrupulosas y que cada heredad de indígenas se convertirá en foco de dificultades, que perjudicarían los mismos intereses del Estado, es preferible dejar las cosas como están.

Además, los indios no se dan aún cuenta de la equivalencia en dinero de su suelo, y estoy seguro que en cada compraventa que se les hiciera se contemplaría una lesión enorme.

Se dice que podrían tomarse algunas precauciones para cautelar los derechos de los indígenas; pero hay que contestar que tales precauciones serían estériles, como lo fueron antes de las leyes prohibitivas vigentes, pues la mala fe los eludiría como en otras ocasiones; para probar esto no tengo más que referirme a la exposición que he hecho más atrás acerca de las medidas tanto legislativas como administrativas que se han adoptado para proteger los intereses de los indios y los fiscales de la voracidad de los particulares.

Puedo decir que las mismas razones que han tenido los tres congresos que han legislado sobre la materia para restringir el ejercicio del derecho de dominio a los indígenas subsisten hoy; y, en consecuencia, la ley de 13 de enero, próxima a caducar, debe prorrogarse, pues los indígenas no están todavía en aptitud para gozar sin limitaciones de los derechos civiles hoy en suspenso.

A fin de consultar otras opiniones sobre la materia y poder modificar la mía, he solicitado el parecer de mi antecesor y este experimentado funcionario, hoy Subinspector de tierras de Temuco, me ha contestado la siguiente nota, y he visto con satisfacción que su modo de pensar coincide en absoluto con el mío.

Copio la referida nota:

Temuco, 27 de febrero de 1902

Impuesto del contenido de la nota de Ud. de fecha 25 del corriente, en la cual Ud. tiene a bien pedir mi opinión sobre la conveniencia de prorrogar o no la ley de 11 de enero de 1893, trataré en breves palabras de dar a Ud. mi parecer acerca de la cuestión que me propone.

Es conveniente en general que todos los habitantes de un país estén sometidos a unas mismas leyes. Pero este principio general de Derecho Público sufre excepciones relativas a la situación de una comarca dada o a la condición o calidad de ciertas personas. Por eso, el legislador, tomando en consideración el estado de cosas en la zona austral del país, creyó conveniente dictar leyes especiales con el fin de resguardar no solo la propiedad indígena, sino también la fiscal. Los fundamentos de este régimen de excepción se encuentran en gran parte en los considerandos de los diversos decretos supremos relativos a terrenos de indígenas.

La cuestión hoy día es ésta: ¿conviene o no mantener en adelante esa legislación?

La ley de 11 de enero de 1893, que caducará el 20 de enero del año entrante, favorece los derechos del Estado sobre las tierras fiscales. Los terrenos de los indígenas y los fiscales están íntimamente ligados entre sí. La ley de 4 de diciembre de 1866 establece las reglas para la radicación de los indígenas: manda que se señalen sus posesiones en un plano y que se les dé título de merced; y añade que el terreno sobrante se reputará baldío, y de consiguiente, de propiedad del Estado.

Estudiando detenidamente esta ley y otras análogas, se llega a la conclusión de que el legislador llama terreno de indígenas, no solo los ocupados por éstos, sino todos los que se encuentran en el territorio habitado por indígenas.

Creo, en consecuencia, que mientras no se dicte una ley destinada a resguardar la propiedad fiscal no debe permitirse que caduque la citada ley de 1893. De otra modo serán defraudados los terrenos fiscales.

Por lo que hace a los indígenas, es también conveniente, a mi parecer, que siga vigente esa ley. Si no, la mala fe, el tinterillaje sobre todo, se apo-

derarán en muchísima parte de los terrenos de indígenas. Estos se verán envueltos en juicios ejecutivos en que el supuesto acreedor presenta títulos falsos, que se dan por reconocidos judicialmente sin citación siquiera del indígena, pues se suplanta la notificación; y así el indígena es privado de su terreno. Como son muchos los jueces de menor y de mínima cuantía que se prestan a estos abusos, resulta que el mal es considerable. Y esto que se hace hoy, a pesar de la prohibición de la ley, se haría en una proporción infinitamente mayor si no existiera ley alguna que prohíba a los particulares la adquisición o la posesión o tenencia de terrenos de indígenas.

Por otra parte, el Protector, según el art. 8 de la ley de 1866, tiene la representación judicial de los indígenas, pero no puede multiplicarse para seguir juicios en distintos departamentos. De aquí la necesidad de que sea auxiliado por los promotores fiscales. Es sabido que los litigantes de mala fe, a fin de aprovecharse de sus fraudes, ocurran de continuo a procedimientos dilatorios, siendo el más común el recurso de apelación. Pues bien, aunque el indígena tiene quien lo represente en primera instancia, no sucede lo mismo en segunda, por lo cual o duermen los expedientes en tribunales superiores o se declaran desiertas las apelaciones.

Por eso si se quiere que la ley produzca el resultado que se desea es indispensable que represente a los indígenas, además del Protector, el Ministerio Público, principalmente ante las Cortes de Alzada.

Tal es la opinión que me sugiere la consulta que Ud., señor, se ha dignado hacerme.

Con este motivo tiene el honor de saludar a Ud. su atento y S. S.

Teófilo Durán

Al Señor Protector de Indígenas. Presente.

XIII

En conclusión: si se quiere proteger efectivamente a esta raza y no su desaparecimiento ocasionado por el fraude y la degeneración, es necesario, en mi humilde sentir, dar a los indios eficaz representación judicial tanto en primera como en segunda instancia, dictando un procedimiento adecuado en el cual también se podría consultar la manera de hacer expeditas las leyes que amparan su propiedad: estatuir garantías legales para precaverlos de los fraudes de que son víctimas en los juzgados de menor y de mínima cuantía; resolver el conflicto que existe entre las leyes prohibitivas que resguardan esa propiedad y la municipal, buscando al mismo tiempo medios para que no se estafen naturales en el cobro de esta contribución; impulsar su pronta radicación para ampararlos con título de dominio en las tierras que ocupan; radicarlos, no por reducciones o en conjunto, sino por familias o individualmente y fijar un minimum a la extensión de suelo que debe asignarles la Comisión de Títulos de Merced y prorrogar por un largo tiempo la ley de 11 de enero de 1893, contemplando en

la nueva ley una sanción general para sus contraventores y para los notarios que autoricen contratos sobre tierras de indios. Esto, por una parte, y por otra, la absoluta prohibición de venderles alcohol y la propagación entre ellos de la instrucción primaria, la que debe ir acompañada de alguna enseñanza industrial y agrícola, con miras exclusivamente prácticas: de esta manera se detendrá la degeneración de los araucanos y se aprovecharán sus notables caracteres étnicos incrementando así la población espontánea de estas regiones, la que una vez mezclada con la proporcionada por la inmigración, podría volver florecientes y prósperas las provincias creadas en la antigua Frontera.

Civilización de los indígenas

I

Antes de todo, tenemos que expresar que para partir de base segura en la apreciación de los diversos aspectos por los cuales se puede considerar esta importantísima materia, falta un dato primordial: el guarismo exacto de la población araucana.

Los resultados que dan las publicaciones de la Oficina Central de Estadística no suministran ninguna luz acerca de esto. Tenemos, entonces, que referimos a lo que fijan algunas personas y funcionarios conocedores de esta raza, estimándola en 70.000 individuos.

II

Se quiere con móviles mezquinos hacer pasar la especie que los araucanos son refractarios a la civilización, y aducen, para dar visos de seriedad a este aserto, el hecho de que el indio, a pesar del contacto con gente civilizada, aun no deja sus hábitos antiguos: todavía usa el mismo traje, edifica su vivienda a la manera de sus antepasados; no quiere abandonar su idioma, se apega a su particular modo de constituir familia, tomando dos, tres y cuatro mujeres, etc.

Es de advertir que las personas que así opinan reducen su experiencia al corto tiempo que conocen esta raza y que no toman en cuenta que muchos indígenas se van incorporando y fundiendo en la civilización.

Y de modo visible se va operando esta incorporación: basta fijarse en los caracteres físicos de los mapuche y compararlos con los de nuestras clases bajas, y se verá que en una proporción bastante crecida en nada se les diferencian. Es esta una observación que hacen todas las personas que por primera vez conocen la Frontera. Tal asimilación de caracteres físicos es antecedente que permite creer que muy pronto habrán concluido las diferencias accidentales que existen entre nuestro bajo pueblo y los araucanos. De sus cualidades morales se puede afirmar lo mismo, y los indígenas, en muchos casos, a pesar de su degeneración, aventajan en ellas a nuestro elemento popular.

El indígena de hoy no es el de antes: si se compara su estado actual con el de algunos años atrás, se verá palmariamente que ha progresado.

Y todavía mas: tenemos que aducir una consideración banal para contestar aquellos que, por no haber visto en cierto número de años cambiarse radicalmente el modo de ser de los indígenas, creen que esta raza ha quedado estacionaria en la vía del progreso, diciéndoles que el paso de la barbarie a la vida civilizada no es ni puede ser de golpe sino por lenta evolución: toca a los interesados en que desaparezca de nuestro pueblo esta semibarbarie estimular con medidas gubernativas el proceso de esta evolución.

Se afirma que la raza araucana es perezosa, amiga del robo y entregada por completo al vicio de la embriaguez.

Que el indígena tenga tendencia al hurto, no el robo, pues no emplea la violencia, es exacto; pero se puede dejar constancia que no lo es en grado superior que la misma propensión que se nota en nuestro bajo pueblo. Estadísticamente se podrá demostrar que en una proporción dada existe igualdad de delincuentes de este género entre los indígenas y entre las otras clases populares.

Hay que decirlo con entera franqueza: por un hurto que cometa un indio, él, por lo menos, ha sido víctima de diez; puede hurtar un animal urgido por la necesidad; pero a él se le roban sus tierras, se le despoja por medio de tortuosos procedimientos judiciales; y aun a viva fuerza se le arrebata lo que lleva encima, de lo cual no pocos reclamos he recibido. Esto, sin contar con las raterías y estafas de que son víctimas por parte de comerciantes de baja ley, confabulados con tinterillos y jueces de menor cuantía.

En cuanto a los otros defectos que se le imputan como exclusivos, son inherentes a todos los pueblos del mismo grado de cultura.

III

Los indígenas no son refractarios a la civilización, se asimilan fácilmente a ella, tienen facultades intelectuales que les ponen en aptitud de adquirir conocimientos con la misma facilidad que nuestras clases populares. No les repugna la cultura; antes, al contrario, la buscan.

Estas afirmaciones las puedo corroborar con el autorizado testimonio del Doctor don Rodolfo Lenz, quien, en un trabajo leído en la Facultad de Filosofía y Humanidades, hablando de la intelectualidad araucana, dice lo siguiente:

> El indio araucano, con respecto a sus capacidades intelectuales, está, según mis experiencias, en un nivel seguramente no más bajo que el término medio del bajo pueblo europeo o chileno. Esto parecerá una exageración enorme, pero no se olvide que si el colono y el trabajador europeo parecen estar a mayor altura, lo deben, no a sus índoles, sino a la enseñanza de las escuelas y de la vida civilizada que los rodea. Y ¿qué enseñanza se da al indio?

Es inexacto si se dice que el indio no quiere enseñanza. Cierto que no le gusta estudiar el catecismo, nada más cierto que no le gusta la enseñanza que se da en un idioma que no comprende. Pero establézcanse en medio de los indios pequeñas escuelas en donde se enseñen las primeras letras por parte de preceptores que sepan expresarse en idioma indio y que después comuniquen a sus alumnos conocimientos prácticos, los resultados no faltarán. Todos los dueños de fundo que saben tratar bien al indio –desgraciadamente no son muchos– están de acuerdo que el araucano es muy buen trabajador. He visto un muchacho indio de unos catorce años, apenas hablaba unas cuantas palabras de castellano, que fue empleado como fogonero de una máquina aserradora y al cual su patrón, después de corto tiempo, podía confiar el manejo de dos motores a la vez cuando faltaba el mecánico chileno. El hijo del cacique Painemal de Cholchol aprendió en corto tiempo el manejo de la máquina segadora que su padre había comprado en enero de este año. Estos ejemplos, que fácilmente se podrían multiplicar, prueban que el indio no es incapaz para trabajos superiores[326].

IV

Las afirmaciones del señor Lenz las puedo corroborar también con informaciones que he recibido de personas que han estado a cargo de la educación de niños araucanos.

En diciembre último envié a los intendentes de la Frontera una nota en que les pedía se sirvieran ordenar se me tomaran por señores visitadores de escuelas los siguientes datos acerca de los educandos indígenas existentes en los establecimientos públicos de enseñanza:

I. Número de niños indígenas que existen en las escuelas del Estado;
II. Su asistencia media;
III. Su aptitud para la asimilación de conocimientos que se les proporcionan;
IV. Su conducta en el colegio;
V. Si los indígenas se resisten a enviar a ellas a sus hijos;
VI. Observaciones que haya sugerido el conocimiento de los indígenas que frecuentan las escuelas.

Todos los señores intendentes a quienes me dirigí, excepción hecha del de Arauco, tuvieron a bien contestar mis comunicaciones.

Copio la parte pertinente de las comunicaciones que se me han enviado al respecto.

En nota dirigida por el visitador de escuelas de la provincia de Malleco, al Intendente de la misma, decía lo siguiente:

[326] Rodolfo Lenz, "De la literatura araucana. Discurso leído en la sesión pública de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile el primero de octubre de 1897", en *Revista del Sur* vol. 1, n.º 7 (Chillán, 1897), separata.

A las escuelas fiscales concurren:

	Cantidad	Asistencia media
Hombres	13	36
Mujeres	66	42

La conducta en general es regular.

Se nota entre los indígenas marcada habilidad para el aprendizaje de los ramos técnicos y de los trabajos manuales, siendo refractarios a los ramos científicos por las dificultades con que tropiezan para posesionarse del idioma; pero una vez que dominan el castellano, les es sumamente fácil adquirir cuanto se les enseñe.

La contestación que el Señor visitador de escuelas de Cautín dirigió al Intendente acerca de los datos pedidos por mí es la que sigue:

Número 189
Temuco, 28 de diciembre de 1901
Señor Intendente:

En mi visita a las escuelas de la provincia he podido recoger los siguientes datos referente a los indígenas que frecuentan las escuelas públicas.

I. El número de niños araucanos matriculados alcanza solamente a la insignificante cantidad de 18 alumnos: 7 en Temuco en la escuela regentada por don Manuel A. Neculman, y 11 en diferentes escuelas del departamento de Imperial.
II. La asistencia media de estos alumnos es más o menos de 15.
III. Los araucanos, en general, son inteligentes y asimilan los conocimientos que aprenden en la escuela con la misma facilidad que los demás alumnos.
IV. Observan generalmente buena conducta en la escuela; son juiciosos, contraídos, atentos, y los maestros me han expresado que se hallan satisfechos de su buen comportamiento.
V. Los indígenas no se resisten a enviar sus hijos a la escuela; y si asombra que en esta provincia, en que la población araucana es numerosa, haya tan escasa concurrencia de ellos en las escuelas del Estado, es debido a que los araucanos viven retirados de los centros de población y su estado de pobreza no les permite mandar a sus hijos a educarse en los pueblos. Los caciques acomodados les dan la educación correspondiente, mandándolos a Temuco y aun a Chillán y a Santiago.

En Temuco existe un colegio especial para la educación de la mujer araucana, dirigido por monjas. En él las alumnas aprenden no solamente a leer y escribir, sino también el canto, el dibujo y los trabajos propios del sexo.

En la población Padre Las Casas, de este departamento, en la Misión de Boroa y en el colegio Evangélico de Cholchol, en el departamento de

Imperial, se educan gran número de indígenas; establecimientos que son internados, donde se proporciona gratuitamente a los alumnos indígenas el vestuario, la comida y la educación.

Con lo expuesto creo dejar contestada la nota de Ud. de 21 de noviembre último. Dios guarde a US.

J. Salvador Castañeda.

El Señor Intendente de Valdivia comunicó a esta Oficina los datos contenidos en la nota que trascribo:

Número 193

Valdivia, 17 de noviembre de 1901

El Visitador de Escuelas de la provincia, en nota número 187, de 14 del actual, me dice lo que sigue:

En los registros escolares no se anota el lugar del nacimiento ni la raza de los alumnos, y la urgencia con que necesita los datos el señor Protector de Indígenas, impide comunicarlos y recibirlos con oportunidad en época de vacaciones. Sin embargo, atendido a mis observaciones, puedo decir que entre los cuatro mil alumnos de todas las escuelas serán unos cuatrocientos de raza indígena. La asistencia media es más o menos proporcional a la que se nota entre los alumnos de raza latina. Esos niños poseen facilidad para el aprendizaje de todos los ramos memorativos y de observación y aplicación práctica, como dibujo, caligrafía, física, etc. Con rapidez admirable, teniendo algún cuidado, aprenden a expresarse correctamente en castellano, sin encontrar dificultades en la pronunciación. La conducta de los alumnos araucanos es buena, y si se ponen reacios, es cuando sus guías los tratan sin miramientos ni consideraciones, lo que no deja de acontecer algunas veces por las ideas preconcebidas que se tienen contra las aptitudes intelectuales de esta raza. Si los indígenas tuvieran escuelas, indudable es que asistirían a ellas, pero en la provincia escasean hasta para todos los habitantes, no solo para ellos. A fin de instruirlos se necesitarían ubicar más de treinta escuelas entre los de esta provincia, impidiendo a la vez, por medios indirectos, el establecimiento de ventas de alcohol en las reducciones donde se las estableciera. Aunque yo mismo dirigí dos años una escuela de indígenas, antes de la sumisión de ellos, en Bajo Imperial, nada de anómalo encontré jamás en mis discípulos. Su carácter era pacífico, casi tímido, obedientes siempre, aunque manifestando en ocasiones repugnancia en cumplir órdenes consecutivas o de poca dilación. Siendo ignorantes, poco se cuidan de escuelas, pero sería raro que los indios que han recibido cierta instrucción no procuren que aprendan algo sus hijos. Reconocen y agradecen mucho el buen tratamiento, así como no olvidan las injurias ni siquiera la indiferencia. En las casas donde colocan como servidores a sus niños, recomiendan que se les provea de ropa, que se les alimente, que se les mande

a la escuela; y si van a visitarlos, se informan primero de lo que comen, y si están gordos y contentos. De las respuestas obtenidas y del aspecto de los niños deducen el grado de aprecio que se les dispensa, observación que les decide a llevárselos o a dejarlos ahí o en otra casa. Además de las escuelas primarias, debería fundar el Gobierno varios internados de niños y de niñas indígenas, en que se les instruyera por buenos profesores y se les vigilara por misioneros. Esos internados de enseñanza teórica y profesional, se situarían en los centros de mayor y más homogénea población araucana, pues la vecindad de los latinos los perjudica, regalándoles vicios, pleitos y pobrezas; lo que no es raro, sabiendo que se avecinan a ellos, cuando tienen ganados y trigo, ciertas personas que carecen de medios de ganarse la vida en otros puntos de mayor cultura, y que poseen suficiente impudencia para explotar la ignorancia y la pasión de los indios por las bebidas alcohólicas.

Lo que trascribo a Ud. en contestación a su nota número 80 de 30 del mes próximo pasado. Dios guarde a Ud.

Anselmo de la Cruz.

Dirigí igual comunicación al Intendente de Llanquihue y se me contestó que en las escuelas públicas de la provincia no había indígenas.

V

En esta ciudad existe un establecimiento que presta señaladísimos servicios a la civilización de los araucanos: me refiero a la Casa de la Providencia dirigida por la Reverenda Madre Sor Matilde de la *Purísima Concepción*. He visitado varias veces este establecimiento. Ocupa, como Ud. sabe, un edificio que hace honor a la población y que tiene a sus pies montañas que sirven a sus educandos para esparcirse en horas de recreo.

Me he admirado del orden y aseo que reina en él. Sus salas de estudio son amplias, higiénicas y de mucha luz. En sus dormitorios se nota correctísima limpieza y orden admirable. Tienen a la montaña espléndida vista; sus salas son grandes, alumbradas, alegres. Están situadas en el segundo piso.

He visitado a menudo el establecimiento en horas de clase. Al acaso he llamado a algunas indiecitas de cortos años con el objeto de hacerles algunas preguntas y para que me leyeran en castellano. He quedado complacido con sus respuestas y admirado de su lectura con correcta pronunciación, con la valoración debida a cada palabra y pasaje y penetrados de su contenido.

Hay en el establecimiento un taller de costuras y bordados y he quedado sorprendido con algunos prolijos trabajos de bordado artístico. Existe también un departamento especial para enfermos.

En noviembre del año próximo pasado envié a su Superiora un oficio en que le pedía los siguientes datos referentes a los indígenas: a, número de educandos

existentes en el establecimiento; b, su asistencia media; c, conocimientos que se les da y si les proporciona enseñanza manual; d, distribución del trabajo; e, observaciones acerca de su capacidad intelectual, de su mayor o menor facilidad para el aprendizaje de artes manuales y acerca de su aptitud para civilizarse; f, si se tiene conocimiento de que los indígenas después de educados vuelven a sus antiguas costumbres; g, si han tenido que vencer muchas resistencias para que los indígenas permitan educar a sus hijos; h, recursos de la Casa; i, una reseña histórica de su establecimiento.

Con gusto reproduzco el informe que me fue enviado por su digna Superiora:

Casa de la Providencia
Temuco, noviembre 28 de 1901

En contestación a la nota que tuvo a bien dirigirnos con fecha 20 del presente mes, tenemos el honor de dar a usted las informaciones que en ella nos pide sobre la marcha de nuestro establecimiento para educación de niños indígenas:

I. El número de niños indígenas que en el presente año se han recibido en la Casa es de 244; 82 hombres de 6 a 12 años y 162 mujeres de 6 a 15; de este número 14 han vuelto a sus casas durante el año, quedando en el colegio 230.

II. Mientras estén en el establecimiento los niños tienen cuatro horas de clase, en las cuales se les enseña a leer, escribir, castellano, cuentas, elementos de geografía y la historia del país; el resto del día lo ocupan en diversos trabajos manuales. A las niñas se les enseña a coser, bordar, tejer, lavar y hacer la cocina; los hombres, después de sus clases, hacen, unos el calzado para todos los asilados y otros cultivan el huerto y cortan leña. Se nota en estos niños gran deseo de instruirse y miran como un castigo dejarlos sin clase.

III. Para los trabajos manuales tienen las mujeres mucha disposición natural y se aplican particularmente a los trabajos de aguja. En los niños hombres también se nota empeño por aprender algún oficio. Por falta de recursos, no se ha podido establecer para los niños otro taller que el de zapatería, en el cual trabajan ya bastante bien. Los trabajos de pintura que se ven en la capilla de la Casa son hechos por los niños con un maestro; prácticamente se ha visto que los indiecitos son capaces de aprender cuanto se les enseñe.

IV. Cuando se fundó nuestra Casa, hace siete años, los indios se mostraban muy desconfiados y costaba conseguir de ellos que dejaran sus hijos para educarlos; teníamos que salir a los campos para buscarlos y rogarles que vinieran al colegio; pero cuando vieron que sus hijos sabían leer un libro, escribir cartas y que podían coserles una camisa, entonces se manifestaron muy contentos y no necesitamos ahora

pedirles sus niños; ellos vienen voluntariamente, y a veces de largas distancias, para rogar con instancia que se les eduque a sus hijos y que se les enseñe algún oficio. Con pena tenemos que negarnos a recibir mayor número de niños por no tener fondos para hacer frente a los gastos de alimentación y vestuario.

V. Desde la fundación de este establecimiento se han recibido 533 niños internos; 166 hombres y 367 mujeres; de este número 303 han vuelto a sus familias llevando alguna instrucción. Sabemos que algunas de estas niñas forman ya una familia arreglada según las leyes y religión del país; otras se sostienen con el trabajo de sus manos y algunas han entrado a servir en casas respetables.

Lo que no se puede conseguir aun de los indios es que dejen a sus hijos más de dos años en el colegio, y por este motivo algunos niños olvidan pronto lo que han aprendido.

VI. Fuera del internado para niños indígenas, la Casa sostiene una escuela gratuita para niñas, a la que asisten de 120 a 140 alumnas.

VII. Los indios enfermos que vienen del campo acuden a nuestra Casa en busca de remedios; los enfermos del pueblo que no tienen con qué medicinarse, solicitan también remedios de nuestra Casa por no haber en Temuco un dispensario para los pobres; en el presente año se han dado remedios a 2.261 enfermos.

VIII. Nuestro colegio de niños indígenas se fundó el 24 de febrero de 1894 por iniciativa de nuestra Congregación de la Providencia, quien lo sostuvo los primeros años. En 1896 el Supremo Gobierno le concedió una subvención de $4.000 anuales, cantidad que se aumento a $10.000 cuando la Casa educaba a 140 internos. Al presente esta renta no basta para alimentar el crecido número de alumnos que tenemos. Por mucha economía que se tenga no se puede alojar, vestir y alimentar a un niño pobre con menos de veinte centavos diarios; según este cálculo, para sostener a 230 niños se necesitaría una renta de $16.790. Por este dato se comprenderá los afanes en que está siempre la administración de esta Casa para buscar recursos con que sostener a tan crecido número de educandos.

En el año entrante el edificio dará lugar para alojar cien niños más; pero si no se consigue que el Supremo Gobierno aumente la subvención de la Casa, será imposible dar mayor desarrollo a esta importante obra.

Deseando que estos datos sirvan para probar que es posible civilizar a los niños indígenas, tiene el honor de suscribirse del señor Protector de Indígenas muy atenta servidora. Sor Mechtilde de la Santísima Trinidad.

Al señor Protector de Indígenas.

Temuco.

Ojalá que los poderes públicos socorrieran con más largueza a este bellísimo y humanitario plantel.

En Angol hay otro establecimiento semejante regentado por las Hermanas Terciarias Franciscanas y acerca del cual copio lo siguiente de una nota que me envió el Prefecto de los Misiones Franciscanas de esa ciudad:

Tenemos además en esta ciudad un colegio de niñas araucanas, bajo el título de Santa Ana, regentado por las Hermanas Terciarias Franciscanas, y que cuenta a la fecha 12 años de existencia.

En este colegio se enseñan todos los ramos que se cursan en las escuelas públicas. Además se han establecido las oficinas de lavado, zapatería, carpintería y costura. También muchas de las niñas se dedican a la tipografía y son las que trabajan en la imprenta de la revista mensual que sostenemos con el nombre de *El Misionero Franciscano*.

VI

También he solicitado de misioneros franciscanos y capuchinos, datos referentes a la educación que dan a los indígenas.

Como no me han llegado todos los que he pedido a los primeros, no puedo presentar un cuadro completo del movimiento de sus escuelas e indicaré únicamente lo que enseñan.

En las escuelas franciscanas se enseñan: lectura, religión, aritmética, gramática, geografía, historia sagrada y de Chile, caligrafía y canto. En algunas se enseñan también urbanidad y gimnasia.

Enseñanza industrial no se les da.

En cuanto a las escuelas regentadas por misioneros capuchinos trascribo íntegro el informe que me ha pasado su Prefecto Apostólico:

Número 24

Valdivia, 31 de enero de 1902

Señor Protector de Indígenas: Recibí su atenta nota fecha 2 de enero y con mucho gusto le proporciono los datos que me pidió y que por ahora puedo comunicarle. Otros hechos relacionados a los abusos y arbitrariedades que se cometen contra los indígenas, los están recogiendo los P. P. Misioneros y se los comunicaré luego que lleguen a mi conocimiento.

I. Número de niños indígenas a quienes educa cada misión:

Nombre	Alumnos	Asistencia Media
Bajo Imperial, Escuela Rural en Huapi	17	12
Boroa, Colegio y escuela en Boroa	45	40
Boroa, Colegio y escuela en Las Casas	45	40
Pelchuquin, departamento de Valdivia	30 niños españoles, 6 alumnos indígenas	2

Nombre	Alumnos	Asistencia Media
Purulón, departamento de Valdivia	8 alumnos indígenas	5
Quinchilca, departamento de Valdivia	7	4
Río Bueno, departamento de La Unión, colegio y escuela de niños indígenas	17	17
San José, departamento de Valdivia, tenía escuela rural en Loncoche	6	6
Villa Rica	32	32

No tenemos en todas las misiones escuelas de indígenas, en parte por la absoluta falta de recursos para levantar y mantener colegios en las misiones que están en los campos o montañas; por otra parte, en algunas misiones no son necesarias, habiendo escuelas fiscales que también los indígenas pueden frecuentar. En algunas escuelas son muy pocos los niños indígenas, porque viven lejos de las misiones; los misioneros no pueden proporcionarles alojamiento y comida, por otra parte, por ejemplo en Loncoche, donde abrí la escuela este año, están mirando con cierto recelo cómo anden las cosas, a veces no mandan a sus hijos, porque no tienen vestido. Este año pienso proporcionarles vestido y comida a medio día a los que viven algo lejos de las escuelas de Huapi y Loncoche para atraerlos mas.

El año pasado tenían subvenciones del Supremo Gobierno:

Escuela	Subvención del Supremo Gobierno ($)
Boroa	2.000
Las Casas	2.000
Villa Rica	1.000

Los demás establecimientos no estan subvencionados del Supremo Gobierno,

II. Se enseñan religión, lectura, escritura, aritmética, gramática, geografía, historia y canto.

III. Enseñanza industrial no se les dio el año pasado por falta de recursos; solamente en Boroa se les enseñó la agricultura práctica y racional. El año antepasado se les enseñó zapatería en Las Casas. Hace como cuatro años establecimos un taller de carpintería en Itahue. Pero no dio resultado satisfactorio, pues, pasados unos meses, cuando los niños sabían cepillar y clavar unos clavos, le sacaron sus padres, pensando que eran ya perfectos carpinteros. En aquel tiempo teníamos la intención de establecer un taller de herrería; teníamos listos dos hermanos legos, herreros de oficio, recién llegados de Europa, pero viendo mi predecesor el mal resultado que dio el

taller de Ruhue, desistió de su proyecto. Este año espero establecer un taller de sastrería en Las Casas y otro de carpintería en Boroa. Ya tengo listos los maestros y para el año venidero espero hermanos legos de Europa para enseñar otros oficios más.

En decenios pasados se enseñó a niños indígenas oficios, por ejemplo, la carpintería, zapatería, hasta se les mandaron a Santiago para perfeccionarse. Pero vueltos a sus casas no los ejercían, ni los ejercen. No pocos de los que se habían educado en las misiones vivían por algún tiempo en los pueblos, aprendieron los vicios de la gente baja, las maniobras de los tinterillos, robaron, engañaron y dieron mal ejemplo a los demás.

IV. Algunos tienen todavía recelo a la instrucción diciendo que los que van a escuela se ponen pícaros no más. En general, se puede decir que el araucano de hoy quiere que sus hijos sean cristianos, que aprendan a leer, escribir, sacar cuentas para que los *huincas* no puedan engañarles, pero quieren que lo aprendan lo más pronto posible. Muchos no quieren que sus hijos aprendan oficio, otros, sí, lo desean. Una dificultad muy grande en la educación de los indígenas es la costumbre de no dejar a sus hijos en las escuelas hasta la conclusión de los estudios, sino le sacan a veces después de un año, a veces ya después de nueve meses de enseñanza, pensando que ya saben bastante.

Muchos de los niños indígenas son muy capaces, aprenden a leer y escribir; muchos tienen la letra bien bonita. Más dificultad tienen en sacar cuentas.

V. Los primeros misioneros de los araucanos fueron los Padres Franciscanos y los Jesuitas. Los Jesuitas fueron expulsados en 1767; se hicieron cargo de todas las misiones los Padres Franciscanos. En 1818 el Supremo Gobierno de Chile llamó a los P. P. Capuchinos y les asignó siete estaciones misionales, situadas entre el río de Cautín y el río Maipue, esto es entre el grado 38" 18' y 40" 55' de latitud sur, y fueron: Valdivia, residencia del Prefecto, y San José de la Mariquina, fundadas en 1633; Quinchilca y Río Bueno, fundadas en 1778; Daglipulli, 1787; Quilacahuin y Coyunco, 1794; San Juan de la Costa, 1806; Pilmaiquen, 1843; Trumag, 1847. La misión de Pilmaiquen o Tramalhue, hoy llamada San Pablo en honor de su fundador el padre Pablo de Royo, se había fundado en 1843, pero al entregarse la misión a los misioneros capuchinos en 1849 no había ningún cristiano y ninguna cultura material. El lugar fue una montaña, habitada de indios salvajes. Hoy es una floreciente villa con 800 habitantes con 4.000 españoles y 1.000 indios civilizados en los alrededores. Se quemó la misión en 1864 y apenas reedificada se quemó otra vez en 1868 y fue otra vez levantada con las economías del misionero y con limosnas de bienhechores.

En 1850-51 se fundó la misión de Bajo Imperial entre los indios salvajes, con muchas dificultades y peligros, hasta peligros de vida; se establecieron escuelas para niños y niñas subvencionadas por el Supremo Gobierno.

En 1869 se quemaron la misión y las escuelas. El P. Constancio "el Padre de los indígenas" las levantó otra vez y siguió con las escuelas hasta que el Supremo Gobierno le quitó la subvención. En 1891 se quemó la iglesia misional. En 1894 se trasladó la misión e iglesia, que antes habían estado encima del cerro, al pueblo mismo de Bajo Imperial.

En 1850 se hicieron todas las diligencias para establecer misión entre los indígenas de Pitrufquen, los indígenas habían consentido; pero cuando el misionero fue a establecerse, casi lo mataron y no quisieron más admitirlo. Todavía hoy hace mucha falta la fundación de una misión en Pitrufquen porque hay muchos indios en los alrededores y entre ellos muchísimos mozos.

En 1853 y después en 1855 se hicieron tentativas para hacer una misión entre los indígenas salvajes de Toltén, departamento de Valdivia. Pero los indios amenazaban a los misioneros con la muerte y así tenían que retirarse. En 1860 se hicieron nuevas tentativas. El Prefecto capuchino mandó al padre Pedro de Reggio. Muchas veces los indios le amenazaron con la muerte, le negaron los víveres, le molestaban de todas maneras; pero el misionero lo soportaba todo. Con sus propias manos tenía que cortar la madera y llevarla con sus propias espaldas para levantar una choza, donde vivía unos años una vida de anacoreta. Pasados unos años, ya había ganado los corazones de los indios y le ayudaban a levantar la misión. En 1865 estableció definitivamente la misión y la plaza de Toltén. (Antes había misión en Toltén fundada por primera vez por los Jesuitas en 1683, pero, abandonada de ellos en 1752, fue restablecida por los franciscanos observantes en 1776; en 1787 fue destruida en un alzamiento general de los indios).

Después de haber fracasado la fundación de la misión de Toltén en 1853 se fundó otra misión, unas leguas más al sur, en Queule, en 1854; se levantó la casa misional, la iglesia, escuelas de niños y niñas, que eran bien frecuentadas, hasta que en 1882, un voraz incendio destruyó la misión con todos los edificios. Por falta de recursos no se levantó más.

Pelchuquin, cerca de la antigua misión de Nanihue, departamento de Valdivia, destruida a principios del siglo XIX, fue fundada en 1860.

La misión de Coyunco, departamento de Osorno, llamada Rahue, en 1868.

En 1874 se levantó una misión en Purulón, departamento de Valdivia, en medio de indios salvajes. Al principio se resistieron y amenazaban al misionero con la muerte y con incendios. Pero el comandante de San José mandó tropas en su ayuda y los indios se humillaron. Los indios en los alrededores de la misión son cristianos y civilizados, los que viven más adentro hacia la cordillera son todavía moros[327] y no saben hablar el castellano.

Después del último alzamiento de indígenas pidió el cacique Neculman la fundación de una misión en Boroa, departamento de Nueva Imperial.

[327] = infieles, no bautizados.

A fines del año 1883, se mandó el primer misionero a Boroa que levantó la casa misional. En los primeros años los misioneros tenían que sufrir muchas vejaciones y persecuciones de los indios, que eran los más bravos, y son todavía los que resisten más a la cristianización y civilización. Por falta de recursos no se pudo levantar la iglesia hasta el año pasado, en que con limosnas del norte y del extranjero se levantó una iglesia, y actualmente una casa que servirá de colegio.

En 1898 se fundó la misión de Villa Rica, en que se estableció un colegio de niños indígenas. Por falta de recursos no era todavía posible levantar la iglesia y sirve actualmente un salón de la casa de iglesia.

Según esta corta reseña histórica tiene esta Prefectura Capuchina actualmente dieciséis estaciones misionales atendidas por el Prefecto y veinte padres capuchinos.

Espero tener en poco el gusto de saludarle en Valdivia. Como le avisé por telégrafo, los naturales de los departamentos de Valdivia, La Unión y Osorno le esperan con mucha ansia y con gran esperanza y confianza para contarle las injusticias, etc., de que son víctimas. Ojalá pudiera quedarse alguna temporada, a lo menos una semana en cada uno de los susodichos departamentos en bien de los pobres naturales.

Le saluda con todo respeto su atento y S. S. y C.

Fray Burcardo de Roettingen, Prefecto Apostólico Capuchino.

VII

No solamente sacerdotes católicos se han dado la tarea de enseñar a los indígenas sino también los evangelistas.

Tengo conocimiento que existen misiones evangelistas en Quepe y en Cholchol, a las cuales me he dirigido pidiéndoles datos acerca de la educación que dan a los indígenas.

Respecto de la misión de Quepe, puedo comunicar a usted los datos que se contiene en la nota que copio:

Misión Araucana, Maquehue, 3 de diciembre de 1901

Señor don Eulogio Robles Rodríguez, Protector de Indígenas

Temuco.

Muy señor mío: En contestación a su atenta nota número 32 de fecha 2 del presente, puedo dar a usted los siguientes datos:

I. Número de niños indígenas a quienes educa la Misión:

La asistencia ha sido durante los años 1897-1901, de niños matriculados en la escuela 112, como sigue:

Abril - Diciembre inclusive			1897	4	niños
”	”	”	1898	8	”
”	”	”	1899	47	”

”	”	”	1900	46	”
”	”	”	1901	58	”

II. Su asistencia media a la escuela:

Abril - Diciembre inclusive			1899	era 23	niños
”	”	”	1900	” 24	”
”	”	”	1901	” 33	”

III. Conocimientos que se les proporcionan:

Curso primario	Curso secundario
1 Lectura	6 Historia de Chile
2 Caligrafía	7 Geografía
3 Dictado	8 Gramática
4 Aritmética	Inclusive números 1-5.
5 Estudios Bíblicos	
Industrias	
1 Carpintería	4 Herrería
2 Agricultura	5 Zapatería
3 Apicultura	6 Horticultura y varias otras

En la carpintería han sido más adelantados; en los demás ramos no se ha podido adelantar sus conocimientos todavía por falta de instructores.

IV. *Capacidad intelectual de los naturales*. Es sin duda igual a los del resto de los chilenos.

V. Si revelan aptitudes para trabajo manual y para la agricultura De esto puedo decirle con mayor satisfacción que tienen aptitudes para los trabajos manuales y que revelan mucha aplicación e interés a medida que avanzan en sus conocimientos.

VI. *Si los indígenas ponen resistencia a la educación y civilización de sus hijos*. En esto hemos notado que la mayor parte no ponen resistencia y los que lo hacen es por falta de mozos para guardar sus animales. También manifiestan muchos deseos para civilizarse, especialmente entre los que ya tienen algún conocimiento de la civilización.

VII. *Manera y forma como propagamos entre los naturales la instrucción primaria y de inculcarles conocimientos industriales y de agricultura*. La manera en que damos instrucción primaria es acompañado con la Industrial, esto es con trabajos más simples y según la edad. Con los más avanzados o secundarios la educación secundada con teoría e industria práctica.

VIII. *Los recursos de la Misión son proporcionados por suscripciones voluntarias, principalmente de Inglaterra, habiendo también contribuido algunos del país.*

IX. Viendo los grandes resultados de escuelas industriales de América del Norte y otros países entre indígenas, fue acordado en el año 1897

establecer una Escuela Industrial entre los indígenas de Chile, adoptando el mismo sistema de la famosa Escuela Industrial de Carlisle, Pa., en los Estados Unidos, uniendo el trabajo con la enseñanza secular.

Con este propósito, una hijuela de cuarenta hectáreas fue comprada en Maquehue, en la ribera del río Quepe.

Con pequeños recursos se principió la obra y con pequeños resultados, pudiendo en estos últimos años, proporcionárseles a los alumnos una regular casa para sus estudios y un establecimiento de máquina aserradora con taller de carpintería.

Ahora podemos con más facilidad recibir los niños de caciques de larga distancia y en el año próximo quedará concluido un nuevo establecimiento con capacidad como para cien niños.

Saluda a Ud. su A. y S. S.
p.p. Carlos A. Sadleir
Percy E. Class, suplente.

VIII

De la Misión Evangélica de Cholchol, puedo comunicar a Ud. los datos que se contienen en la nota que también copio:

Misión Araucana, Cholchol, 4 de enero de 1902

En contestación a su atenta nota de fecha 21 del mes próximo pasado, en la que se sirve pedirme algunos datos acerca de la marcha del colegio, sostenido por la Misión en este pueblo, tengo el honor de comunicar a Ud. los siguientes, siguiendo el orden indicado en ella:

I. El número de niños indígenas matriculados en el año 1901 ha sido 53.

II. Asistencia media durante el mismo año, 30; pero hay que observar que son muy pocos los que asisten antes de haber terminado sus siembras. Así es que se puede dividir la asistencia media en esta forma: marzo a junio 15, y de julio a diciembre 37.

III. Los ramos que se cursan son los siguientes: historia, geografía, aritmética, lectura, caligrafía, dictado, historia de Chile, gramática castellana, higiene, gimnasia y canto.

IV. Los araucanos no son refractarios a la instrucción y aprenden con facilidad, siendo sí necesarios métodos especiales.

V. En cuanto a sus aptitudes para ejecutar trabajos manuales, no podemos contestar con cabal conocimiento por no tener todavía establecida esta enseñanza.

VI. Los araucanos, aunque no hacen una resistencia activa para la instrucción de sus hijos, la oponen sí pasivamente; pues, no conociendo los beneficios de la educación, prefieren aprovechar el trabajo de sus hijos en el laboreo de sus campos o en el cuidado de sus rebaños; sin embargo, se encuentran algunos que están verdaderamente interesados en la enseñanza de sus hijos.

VII. La respuesta a la séptima pregunta acerca a la manera de propagar entre los naturales la instrucción primaria es un tal difícil, porque hay que luchar con los prejuicios, superstición, indolencia, vicios y desconfianza de los indígenas. Los datos que a este respecto podemos dar están resumidos en la reseña histórica de esta Misión.

VIII. Esta obra depende de la Sociedad Misionera Sud-Americana de Londres, la que suministra los fondos necesarios, siendo estos obtenidos por suscripciones voluntarias.

IX. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la reseña histórica que va en cuaderno separado.

X. Las observaciones que nos ha sugerido el conocimiento de los naturales y a que se refiere su pregunta décima, son las siguientes: los niños indígenas son por naturaleza tímidos y su manejo no es difícil, manteniendo una buena disciplina desde el primer momento. Son de fácil comprensión y de notable inteligencia, habiendo muchos que son verdaderamente contraídos al estudio. Sin embargo, estas buenas disposiciones son en cierta manera neutralizadas por la indolencia de la mayor parte de los padres que no tienen interés alguno en la educación de sus hijos y prefieren aprovechar su trabajo material, y aun mantenerlos ociosos antes de mandarlos a la escuela; y si nuestro colegio ha tenido éxito, ha sido merced al internado gratuito, a los servicios médicos y la dispensaría[328], medios que nos han hecho adquirir su confianza.

XI. En cuanto a los abusos y arbitrariedades cometidos contra ellos, son innumerables y sería muy difícil precisarlos, por cuanto los explotadores siempre dan cierto viso de legalidad a sus actos, siendo en su mayoría tinterillos y comerciantes de baja ley; pero nos consta y es la voz pública que los indígenas son vergonzosamente robados y explotados en mil maneras. El alcoholismo es el factor más poderoso en la explotación de los naturales, y causa lástima y horror ver las tabernas y chincheles[329] diariamente atestados de mapuches en estado de ebriedad y allí en este estado los hacen firmar documentos, vender sus granos en yerba a precios exiguos y les arrebatan criminalmente todo cuanto pueden. El alcoholismo ha embrutecido esta noble raza y si no se pone remedio a este estado de cosas, ella será pronto extinguida.

Tenemos la satisfacción de decir que muchos de los alumnos indígenas de nuestro establecimiento son abstinentes en absoluto de licores alcohólicos.

En cuanto a los hechos concretos que Ud. pide, dada la premura del tiempo para evacuar este informe, nos es difícil darlos.

Saluda a Ud. muy atentamente.

Gmo. Wilson, Director del Colegio de la Misión Araucana.

[328] = dispensario o enfermería.

[329] = cantinas, expendios de vino.

Una reseña histórica de la Misión Araucana

Origen de la Misión

En uno de los buques enviados a la América por el Gobierno Británico con motivo de las guerras de la independencia de las naciones hispanoamericanas, vino como Oficial de Marina el señor Allen Francis Gardiner, hombre cristiano y muy amante de la civilización, quien tuvo la oportunidad de oír hablar de los araucanos, de la triste condición a que estaban reducidos y de su indomable valor, motivos que lo interesaron sobre manera en la evangelización y civilización de estas tribus.

Entre los años 1810 y 1820, en su calidad de marino, hizo varios viajes a la América, acariciando siempre su idea acerca de los aborígenes de Chile.

En el año 1826 obtuvo su retiro de la armada, con el título de capitán, y concibió el proyecto de establecer misiones entre los araucanos, que al mismo tiempo que les trajeron la civilización les hicieran conocer los principios cristianos. En efecto, en el año 1838, se embarcó para América acompañado de su familia, con el fin de ver la posibilidad de llevar a cabo su intento. Desembarcó en Rio de Janeiro, de donde pasó a Buenos Aires, esperando allí hasta que los pasos de la cordillera quedaron expeditos para continuar su viaje a Chile. En diciembre del mismo año llegó hasta las márgenes del Biobío, límite entre la República de Chile y el territorio ocupado por los indios araucanos. Allí, venciendo muchos obstáculos, consiguió internarse entre los naturales y entrar en relación, por medio de intérpretes, con los principales caciques; pero, a consecuencia de la desconfianza natural del aborigen, las continuas luchas de estos con los chilenos y la propaganda en contra hecha por los misioneros del clero romano, le hicieron ver la imposibilidad, al menos por el momento, para establecerse allí.

El señor Gardiner no se desanimó por esto, sino que continuó trabajando por espacio de tres años con el mismo objeto. Se internó varias veces en el territorio indígena, pero siempre con el mismo resultado de antes, hasta que en el año 1841, convencido de la inutilidad de sus esfuerzos, partió a Valparaíso, de donde se embarcó con destino a las islas de Falkland con la idea de ver si era posible establecer obra entre los patagones y fueguinos.

Decidido a esto último, volvió a Inglaterra, con el fin de obtener de la Sociedad Misionera de la Iglesia Anglicana los recursos necesarios. Pero no le fue posible proporcionarse los medios en esta sociedad, a causa de escasez de fondos y del mantenimiento de varias estaciones misioneras, ya establecidas en África, Asia y otros puntos.

No desanimó el señor Gardiner este nuevo contratiempo, sino que lo decidió a buscar en otra parte los recursos que necesitaba.

Recorrió, al efecto, todo el país, trabajando sin descanso, hasta ver coronados sus esfuerzos con el establecimiento de una nueva sociedad, que se denominó Sociedad Misionera a los Patagones. En el año 1850 se dirigió

nuevamente a la América a bordo del vapor "Ocean Queen E.", acompañado de seis personas, entre las que se contaba un médico, dos marinos y un carpintero. Traía además dos lanchas para hacer las exploraciones en las islas fueguinas y demás viajes misioneros.

El buque a cuyo bordo venían se dirigía a California y los dejó en la Isla de Picton, de donde se dirigieron a Tierra del Fuego en sus lanchas.

Allí los esperaban nuevos obstáculos. Los naturales se mostraron hostiles y aunque no atentaron contra sus vidas, se apoderaban de sus víveres obligándolos por esto a vivir a bordo.

El clima les fue en extremo fatal y para colmo de desgracias una terrible tempestad hizo naufragar la lancha en que tenían la mayor parte de sus víveres y, lo que fue más sensible, la pólvora con que contaban cazar para su alimentación en aquellas regiones. La embarcación que les quedaba escapó muy averiada y completamente inútil para una larga travesía. Pronto empezaron a experimentar grandes privaciones y la terrible enfermedad del escorbuto vino a hacer más terrible su desesperante situación; y allí, lejos del centro habitado, sufriendo tormentos indecibles, sucumbieron estos siete héroes, víctimas de su amor a la humanidad y a la civilización.

Este luctuoso suceso causó honda consternación en Inglaterra, especialmente entre los miembros de la nueva Sociedad, despertando mayor interés en la evangelización de esas regiones.

La institución, a pesar de la muerte de su fundador, tomó mayor incremento, y resolvió trabajar, no ya solamente entre los patagones, sino entre todos los aborígenes de América del Sur; y al efecto cambio su nombre por el de Sociedad Misionera Sud-Americana. En efecto, pronto estableció una estación en Tierra del Fuego y más tarde entre los indios del interior del Brasil; luego en el Chaco en Paraguay y por último entre los araucanos, sueño dorado del malogrado capitán Gardiner.

Misión Araucana

En el año 1895, la sociedad acordó establecer esta Misión, en el centro de la Araucanía, y al efecto envió cuatro misioneros para empezar la obra.

El lugar designado para la primera estación fue la población de Quino, distante pocas leguas de la ciudad de Traiguén.

Los misioneros recorrieron todo el territorio araucano buscando centros para establecer otras estaciones y después de maduro examen eligieron a Cholchol y Quepe como base para los trabajos futuros.

En abril de 1896 se dio comienzo a la obra en Cholchol, lugar en que se establecieron cuatro misioneros, que empezaron inmediatamente sus trabajos, visitando a los indios en sus *rucas* y estudiando la manera de establecer colegios y que los naturales enviaran a ellos sus niños.

En el mes de septiembre se consiguió establecer una pequeña escuela en la reducción del cacique Coñuepan, a dos leguas de la población, la que

tuvo que ser pronto clausurada con motivo de la llegada de las cosechas y de que los indios retiraron sus niños para ocuparlos en la recolección de sus granos. El resultado de esta escuela hizo comprender que el sistema adoptado no daría buenos resultados y se proyectó edificar un colegio en la población, dotado de un internado, donde los alumnos estarían obligados a asistir con regularidad.

En el año 1898 fue terminado el edificio y el establecimiento fue abierto en el mes de octubre, asistiendo ese año solo siete niños mapuches.

La obra ha ido acrecentándose paulatinamente y ha dado alentadores resultados y abrigamos la esperanza de que ella continuará por la vía del desarrollo.

Lo que ha contribuido en gran manera al buen éxito del trabajo de la Misión, ha sido, sin duda, el establecimiento de una dispensaría[330] que desde los primeros tiempos prestó incalculables servicios a los indígenas, y no solamente a ellos, sino también a los chilenos.

A continuación expresamos algunos datos estadísticos acerca de la existencia media al colegio y de los casos tratados en la dispensaría por el médico de la Misión.

Esta es, narrada a grandes rasgos, la historia de la Misión y en pro de la brevedad se han omitido muchos datos; pero es de creer que con lo dicho bastará para formarse una idea más o menos aproximada de la marcha de la obra misionera en ésta.

Asistencia media al colegio

Año	Chilenos	Mapuche
1899	25	18
1900	27	22
1901	30	30

Matrícula general

Año	Chilenos	Mapuche
1899	45	33
1900	40	36
1901	51	53

Número de enfermos tratados en la dispensaría de 1896 a 1901: 13.500 más o menos, chilenos y mapuches, mayoría del último.

Gillermo Wilson, Director del Colegio de la Misión Araucana.

[330] = dispensario, enfermería.

IX

Para completar el cuadro que me he propuesto esbozar acerca de las condiciones de los indígenas para adoptar la vida civilizada, creí interesante consignar algunos datos sobre su aptitud como agricultores, y los pedí a un distinguido e inteligente hacendado, el señor Víctor M. Chiappa, que los conoce muy de cerca desde tiempo atrás y que los estudia y observa con interés. El señor Chiappa, como se sabe, ha sido eficaz colaborador del distinguido sabio alemán, doctor don Rodolfo Lenz, en sus estudios sobre el idioma y costumbres araucanos.

Recibí larga y luminosa comunicación del señor Chiappa en que me detalla algunos de los puntos tratados en esta Memoria; pero, por haber llegado a mi poder cuando estaba bastante adelantada su redacción, solo puedo consignar su última parte, que se refiere a las aptitudes agrícolas de los araucanos, y que es la siguiente:

> Si la distribución metódica del trabajo, aunque no normal para nuestro criterio, la unidad de miras y el severo espíritu de economía constituyeron la familia agrícola, nuestros aborígenes, en general, forman un tipo práctico de lo que es aquello.
>
> El hombre labra la tierra, según los hábitos adquiridos por el ejemplo y el compañerismo con los criollos, sin tener condiciones propias, individuales para que su trabajo reúna caracteres sobresalientes al que la práctica le ha enseñado.
>
> Realizado el cultivo y la siembra, entra ya la mujer a ayudar al hombre en las labores, especialmente en la escarda de los cereales, y la cosecha, auxilio eficaz y positivo que, contadas escasas excepciones, constituyen una superioridad sobre la familia agrícola criolla.
>
> Realizada la cosecha y la venta de los productos excedentes al probable consumo del año, emigra, la familia, a veces, pero si siempre el jefe de ella, y va a los pinales andinos a coger los frutos que han de aumentar su provisión alimenticia del año.
>
> Luego, la siembra, en seguida, un viaje a la Argentina en busca de algunos animales.
>
> Entre tanto, la mujer o las mujeres, parten la leña y la acarrean para la habitación, preparan sus alimentos, hilan y tejen durante todo el año; atienden a la crianza de aves; son dueñas del ganado lanar; le esquilan sin vender, sino en ocasiones extraordinarias, los vellones. La lana les permite fabricar sus vestidos exteriores, y el excedente lo emplean en tejer mantas y pellones que, llevados por el hombre a la Argentina, le trae en retorno animales que aumentan la importancia de la familia.
>
> La mujer preferida guarda el escaso dinero que pueda tenerse.
>
> Las muchachas hilan y cuidan a veces el ganado.
>
> Los muchachos cuidan el ganado lanar y siempre el vacuno y caballar.

La vida de la familia indígena es severa y de trabajo. En la tribu solo hay ociosos y corrompidos el cacique –resultado del comunismo[331]– y uno que otro ratero que vegeta y medra a la sombra y amparo de aquél.

La mujer no descansa jamás; cuando el hombre no está, ella vela con energía sobre la hacienda y sobre las sementeras.

A mi juicio, esto es lo que constituye la familia agrícola, que cultiva la tierra, el hogar y la crianza; que se fabrica sus vestidos, produce sus alimentos, economiza y prospera.

Resultado elocuente, que pone de manifiesto cuales son las sobresalientes condiciones agrícolas y productivas de esta raza, y que, llegada la época de suprimir el comunismo, serían colonos excelentes, por cuanto están aclimatados sin gérmenes patógenos y con condiciones nacionales inmejorables.

No cabe duda que las excepciones son numerosísimas, pero esto no es debido a falta de aptitudes sino que, únicamente, consecuencia funesta del régimen comunal que desde hace veinte años a esta parte debióse haber iniciado su extirpación.

Ensáyese la radicación de familias por hijuelas en que tenga parte la experiencia adquirida, y se comprobará la existencia de un factor de riquezas, prosperidad y aumento de población crecientes.

He aquí la escala de los cultivos por los cuales tienen preferencia: trigo, cebada común, arvejas, papas, habas, quinua.

Sabiendo que algunos indígenas habían sido enrolados en la Guardia Nacional, solicité del jefe de la 4ª Zona se sirviera comunicarme algunos datos que le detallé, acerca de las cualidades del araucano como soldado, y de su mayor o menor facilidad para asimilarse a la vida de cuartel. Estos datos, que habrían sido importantes, no me fueron comunicados. Omito, entonces, considerar bajo este punto de vista el problema de la civilización de los araucanos, punto de vista interesante y práctico.

Y para dar remate a todos estos antecedentes en que he querido establecer que los indígenas no merecen el desprecio con que se les mira y que pueden útilmente servir como elemento colonizador y como productores de riquezas, copio lo que, con antecedentes de larga experiencia, observaba mi predecesor en su última Memoria, sobre los servicios que estaban a su cargo:

Cábeme la satisfacción de dejar constancia que algunos indígenas han alcanzado un grado de relativa civilización y que se dedican al trabajo sin tener el vicio consuetudinario de las bebidas alcohólicas, que, por desgracia, domina a una gran parte, y que los hay, en fin, algunos que saben leer

[331] Entiéndase el régimen de propiedad comunal.

y escribir con más o menos perfección, lo cual los hace ciudadanos útiles para la patria.

Conozco indígenas que por su propio esfuerzo han salido de su estado semibárbaro e incorporádose de lleno a la vida civilizada. Muchos han convertido su antigua vivienda, la legendaria *ruca* araucana, en casa de madera a la usanza de la gente civilizada. Hay indígenas como Pascual Paillalef que tienen máquinas para sembrar y segar. Un hijo de este Paillalef, Eulario, ha presentado a la Inspección General una solicitud en que pide se saque a remate una extensión de terreno fiscal, al lado de su reserva, que pretende adquirir con el producto de su trabajo. Los hay como Raiman, Manquelef y otros, que envían sus hijos al Liceo de esta ciudad, en el que los he visto rendir satisfactoriamente los exámenes que corresponden al primer año de humanidades. Muchos van mirando con repugnancia su antiguo uso de contraer matrimonio y ocurren al Oficial Civil para verificarlo en conformidad a la ley. Algunos inscriben espontáneamente el nacimiento de sus hijos. Otros han reconocido, en conformidad a las leyes comunes, los hijos habidos en su matrimonio celebrado con arreglo a la costumbre indígena.

De paso advertiré que he tratado, en lo que ha estado a mi alcance, evitar los matrimonios que se contraen según la costumbre araucana, en que el padre obliga a su hija a que tome por marido a quien él quiere, sin consultar para nada la voluntad de ella, previo pago de cierta cantidad de dinero o de animales. Cada vez que he tenido conocimiento de la celebración de estos matrimonios, he citado a los contrayentes y he inquirido su voluntad al respecto, y encontrando que quieran seguir tratándose como marido y mujer, los he mandado a regularizar esta unión ante el oficial civil. Algunas indias han puesto ante mí la queja de que su padre las ha vendido para que se casen, y he hecho comparecer al padre, a quien he obligado a devolver las especies recibidas en pago por su hija, y lo he amonestado para lo futuro.

Se podría fácilmente concluir, a mi ver, este resto de barbarie dictando una ley prohibitiva, con una ligera sanción: los indígenas, una vez que tuvieran conocimiento de esta prohibición, abandonarían tal costumbre. Muchos semicivilizados que persisten en ella, interrogados por mí al respecto, han contestado que la seguían, porque nadie les había hecho ver "que era malo".

Con esto y estableciendo, además, que a los indígenas que constituyan familia en conformidad a la ley, se les adjudicará mayor extensión de tierras al ser radicados, se podría concluir con sus bárbaros ritos para celebrar matrimonio y hacer eficazmente extensivas a ellos las leyes nacionales que reglan la constitución del estado civil.

En páginas anteriores ha quedado establecido con abundancia de observaciones que los indígenas son susceptibles de ser civilizados fácilmente, y es doloroso dejar constancia que los poderes públicos nada o casi nada han hecho por civilizarlos, pues, para ello no es bastante el poco dinero que se invierte

en pago de misioneros que los cristianicen y les inculquen conocimientos rudimentarios.

La magna y humanitaria tarea de civilización de los araucanos deberá emprenderse de manera sistemática por el Estado y no dejarla, como hasta hoy, entregada a intereses religiosos.

Creo que con escasos desembolsos e incalculables beneficios se podría crear un cuerpo de maestros que recorriera las reducciones comunicando a los indios en su propio idioma la instrucción que se da en nuestras escuelas primarias y nociones de agricultura, sin descuidar de hacerlos aptos para el desempeño de un oficio.

Da lástima al visitar las *rucas* de los indios ver numerosos pequeñuelos que se desarrollan descuidadamente y que mañana aumentarán nuestra población inútil porque no tienen quien los inicie en la civilización.

En mi concepto, los poderes públicos no pueden mirar con indiferencia la suerte de millares de nuestros compatriotas que anhelan los beneficios de la cultura: pero que, por desidia, no se ponen a su alcance los medios de obtenerlos.

Concluyo citando la palabra del distinguido sabio extranjero –el doctor don Rodolfo Lenz– que en honrosa carta que me dirigió decía lo siguiente: "Existe todavía en la raza mapuche un buen núcleo de elementos que hay que salvar para la civilización por medio de enseñanza y estricta justicia".

Saluda muy atentamente al señor Inspector General.

Eulogio Robles Rodríguez

1902
EULOGIO ROBLES
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS[332]

Señor Inspector General:

En la Memoria del año pasado expuse latamente la labor de esta Oficina; estudié con algún detenimiento la legislación especial a que estan sometidos los indios, haciendo notar algunos de sus defectos y permitiéndome señalar las reformas que, a mi juicio, se imponían en ella, y di a conocer los abusos de que son víctimas, valiéndome para ello de casos concretos conocidos por mí, para hacerlos más palpables. Creí también de mi obligación, como el funcionario público que más de cerca está en contacto con los indígenas, y que, por lo mismo, puede observarlos mejor, comunicar a Ud. mi opinión acerca de sus condiciones favorables para ser incorporados de lleno a la vida civilizada.

El trabajo de la Oficina ha sido análogo al del año pasado, los abusos que se perpetran con los indios son los mismos, si bien en este departamento en que puede hacerse valer con toda eficacia la acción del Protectorado, han disminuido considerablemente; las necesidades de reforma que indiqué subsisten, y mantengo mi modo de sentir respecto de las cualidades felices del indio para adoptar la vida civilizada.

Durante el tiempo que abraza esta Memoria el movimiento de esta Oficina puede conocerse, en parte, por medio de los números siguientes:

Han salido de ella 957 piezas que se distribuyen así:

Escritos presentados al Juzgado de Letras de Temuco	99
Escritos presentados al Juzgado de Imperial	3
Escritos presentados al Juzgado de Collipulli	2
Oficios a los Promotores Fiscales	36
Oficios a diferentes autoridades Administrativas	303
Informes al Ministerio, Inspector General, Intendentes y Juzgados de Letras, etc.	137

[332] "Protectorado de Indígenas", en *Memoria de la Inspeccion Jeneral de Tierras i colonización, 1902* (Santiago, Imprenta Cervantes, 1903), pp. 26-43. Encabezado por el siguiente párrafo del Inspector General: "Orijinal trascribo a US. la Memoria pasada por el señor Protector. En ella verá US. confirmados los abusos de que en mis anteriores Memorias y recientes notas he dado cuenta al Ministerio de su digno cargo".

Notas al Presidente de la Comisión Radicadora	21
Notas al Prefecto de Gendarmes	217
Ordenes de divisiones de terreno al Ingeniero del Protectorado y comisiones diversas al mismo	139
Total	957

Entre las atenciones de esta oficina, debo hacer notar las que han merecido solicitudes de indígenas que piden la división de las hijuelas poseídas en común, con lo cual van en vías de concluirse las querellas numerosas entre comuneros acerca del mejor derecho a un retazo determinado del terreno de la comunidad. Así se constituye poco a poco la propiedad individual entre los indígenas, y se evitan los abusos de los caciques que se consideraban dueños absolutos de la totalidad del terreno entregados para ellos y los individuos de su reducción; y que lo daban, en su mayor parte, en arrendamiento a extraños mientras ellos permanecían largo tiempo en la Argentina.

Según la ley del 66 estas divisiones de comunidades indígenas deben hacerse en el momento mismo de la radicación en la forma presenta por su art. 7 números 3 y 6, y por los funcionarios que están encargados de ella. Las que practica el ingeniero del Protectorado se verifican mucho después; de modo que no tienen fuerza legal y sería conveniente se les revistiera de ella para no hacer revivir en lo futuro las dificultades que mediante este procedimiento se van concluyendo.

Las actas de partición acompañadas del plano respectivo, las hago pasar al señor Presidente de la Comisión Radicadora a fin de que las agregue al título a que se refieren.

El ingeniero de esta Oficina presta, además, servicios valiosos trasladándose al terreno a imponerse de cuestiones de deslindes y dirimirlas, a veces, entre rematantes, colonos e indígenas, y para comunicar también datos al infrascrito que solo pueden recogerse por una visita ocular. Además, proporciona copia de planos que son necesarios para acompañar a las presentaciones que se llevan a los juzgados. Anexa encontrará usted su Memoria en que se anotan observaciones dignas de ser tomadas en consideración.

Me permitiré insistir en lo deficiente del servicio de defensa a los indígenas, que tiene dos causas principales. La primera consiste en que la acción del Protectorado está circunscrita a los territorios fronterizos, que, según el decreto-ley de siete de diciembre de 1852 es el comprendido entre el Biobío y el Toltén y entre los Andes y las cordilleras de la costa, y el que se extiende desde el Carampangue y la cordillera de la costa hasta el mar; de modo que queda excluida de la acción del Protectorado la zona que sigue al sur del Toltén en que viven numerosos indios. La segunda consiste en que la acción de esta Oficina no tiene sino una débil eficacia fuera de este departamento. A individuos que, ya por arriendos leoninos, ya por el fraude o a viva fuerza se apoderan de tierras de indios, cuando no obedecen la notificación administrativa que les hago por medio de las intendencias o gobernaciones, no hay manera de inclinarles al

respeto de esta propiedad, pues el decreto de diez de septiembre de 1883 que ordena a los promotores fiscales a tomar la defensa y representación de los indígenas en estos casos es letra muerta para su mayor parte.

Se remediaría esta anómala situación si se diera un defensor a los indios del sur del Toltén, servicio indispensable, para que en conformidad a la ley intervenga en las radicaciones que hoy se llevan a efecto en esa zona como para defenderlos de los que abusiva y criminalmente se apoderan de sus tierras. En Pitrufquen, Gorbea, etc. en que van adquiriendo valor, debido en gran parte al ferrocarril en construcción a Valdivia, los indios están expuestos a cada instante a ser despojados de ellas. Indígenas de esta zona han reclamado ante mí manifestándome que se les ha destruido sus casas, arrebatado sus sembrados y me he visto en la imposibilidad de asumir su defensa, limitándome a indicarles que ocurran a la Subinspección de Valdivia y al promotor fiscal de ese departamento.

Para hacer efectiva con toda eficacia la defensa de los indios fuera de este departamento sería necesario crear un Protectorado para la provincia de Arauco y darle al de Temuco agentes judiciales que se trasladarían a otros departamentos, en su representación, a deducir las acciones legales correspondientes cuando fuera desconocido el derecho de los indios.

Al infrascrito no le es posible, sino en señalados casos, abandonar esta localidad, pues como Ud. sabe, además de la defensa judicial de los indios, le incumben otras obligaciones importantes.

Insisto también en la necesidad que manifesté el año pasado de reglamentar desde luego la ley de 4 de diciembre de 1866, fijándose un minimum a las adjudicaciones de terreno a los indígenas, que son insuficientes para sus necesidades, pues nunca pasan de cinco hectáreas por persona, si llegan a dos, tres y cuatro. Al notificárseme por el secretario de la Comisión Radicadora cada título, cuando conceptúo escasa la adjudicación, interpongo el competente reclamo para que se aumente su cabida; pero sin ningún fruto, pues de todos los que formulé el año pasado, no fue acogido ninguno. Si en el cuadro anexo aparecen indígenas hasta con ocho hectáreas por cabeza, estas adjudicaciones son antiguas; en la actualidad se les da menos tierra.

No es equitativo el reparto de terreno a los indígenas, dueños originarios de este suelo, comparado con el reparto a los colonos, quienes por lo menos obtienen cuarenta hectáreas y veinte más por cada hijo varón, mayor de diez años. A los indígenas debería colocarse, en el peor de los casos, en pie de igualdad con los colonos.

La ley de 13 de enero de 1903 que prorrogó por diez años la de 20 de enero de 1883, omitió corregir una anómala que viene desde tiempo atrás y que es indispensable que hoy se tome en cuenta en el proyecto de codificación que se le ha confiado al eminente jurisconsulto don José Francisco Vergara Donoso.

No hay razón alguna atendible para que las prohibiciones a que se refieren las mencionadas leyes rijan solo dentro de la zona determinada en el art. 6 de la ley de 4 de agosto de 1874 y no dentro de todo el territorio denominado fronterizo.

Para asegurar las pocas tierras de indios que quedan fuera del radio de la zona prohibitiva es urgente extenderla cuanto antes.

Los indios a quienes no han alcanzado las garantías de las leyes citadas, están en la más espantosa miseria.

Dejo constancia de esta observación.

Para concluir de una vez con las frecuentes usurpaciones de las tierras de indios, conviene completar la ley de 13 de enero de 1903 sancionando con una fuerte multa conmutable en prisión su inobservancia.

Puede esta medida, a primera vista, considerarse inaceptable, por cuanto entraña una marcadísima excepción; pero hay que hacer presente que también es excepcional el régimen legal a que están sometidos los indios.

Voy a exponer someramente las razones que me asisten para proponer este temperamento.

Prohibida la ocupación de tierras de indios, los que pretenden violarlas no se arredran, estimulados por el lucro; las ocupan a título de haber pagado por el indígena la contribución municipal que las grava, las ocupan arrendándolas por alcohol o mediante el pago de vil precio. Aún más: el arrendatario de una cuadra, pongo por caso, toma dos, tres y cuatro, arrebatándoselas a indígenas que no han intervenido en el contrato. Si reclama el perjudicado, se frustra el reclamo inventándosele un proceso por hurto o robo de animales y se le hace aprehender; o se previene por medio de amenazas que bien sabe el indio que se le harán efectivas.

Justo es advertir que dentro de la jurisdicción de este juzgado no son frecuentes semejantes maquinaciones, y que cuando han ocurrido, el meritorio magistrado que lo sirve las ha descubierto.

Una vez que alguien ha tomado posesión de esta tierra su interés consiste en hacer desaparecer a su dueño; y para ello no se omiten medios, se echa mano al crimen, si es preciso; y cuando se adoptan procedimientos más benignos se le hace salir para la Argentina o se le embrutece por el alcohol. He conocido zonas en que los indios, sin elementos extraños en sus tierras, trabajaban tranquilamente; pero en las que ha habido caciques que, seducidos por las ventajas que les pintaban falaces amigos, han consentido en arrendarlas, los arrendatarios han llevado luego a ellas negocios de licores y los indígenas se han vuelto alcohólicos. Últimamente se me ha denunciado que en el lugar Curileo de Pillanlelbun un indígena llamado Curamil arrendó tierras a un sujeto, quien implantó en ellas un negocio de licores y al mismo tiempo estableció una casa de préstamos clandestina. Poco a poco fueron desapareciendo los animales de los indígenas vecinos, vendidos a vil precio para comprar alcohol; los objetos de plata que elaboran para adorno de sus mujeres; los artísticos tejidos de lana que fabrican estas y que, llevados a la Argentina, les sirven para adquirir animales, empeñados en la "agencia" se han perdido para sus dueños, recargados con los intereses penales del préstamo que obtuvieron para comprar licor; y los indígenas, en la miseria, se han convertido en ladrones.

Podría multiplicar ejemplos análogos.

En lugares apartados, lejos de la vigilancia de las autoridades, se cometen asesinatos y lesiones por individuos que se embriagan en los negocios de licores que indignos traficantes han establecido en tierras de indios.

Todavía hay más.

En las comunas rurales, adonde muy débilmente puede llegar la acción del Protectorado, se confabulan el alcalde, el subdelegado y el juez de subdelegación para explotar a los indios arrebatándoseles sus tierras.

La sanción que reclamo, enérgicamente aplicada, concluiría con estos irritantes prevaricatos.

En partes donde no hay extraños entre los indios he notado cierta relativa holgura y apego al trabajo: en estas tierras no se ha introducido el alcohol, los indios no estan degenerados, tienen animales y sementeras más o menos bien cultivadas.

La sanción que pedimos para las leyes prohibitivas traería otro bien inapreciable a estas regiones: la seguridad de los campos.

Los indios son hospitalarios y cualquiera, si pone empeño en ello, se capta su adhesión. Esto lo saben algunos malhechores, quienes contraen amistad con ellos, se hacen hospedar en sus casas y de ellas excursionan por los campos vecinos para robar animales; y de este modo algunas reducciones de indígenas se han convertido en temibles receptáculos de ladrones, que más astutos que éstos, se defienden mejor al ser descubierto el delito; y dejan al indígena que, a veces, es su cómplice, y otras no lo es, bajo la presunción legal que afecta a aquellos en cuyo poder se encuentra la especie hurtada, por cuanto en sus casas se han visto los despojos del animal robado.

Creo de interés rememorar aquí ciertos rumores alarmantes que circularon el año pasado acerca de un absurdo levantamiento de los indígenas, rumores que acogió la prensa de la capital para patentizar, muy cuerdamente, su absoluta falta de fundamento.

A fines del año pasado el señor Intendente de la provincia recibió telegramas de Nueva Imperial en que se le comunicaba haberse descubierto que los indígenas desde tiempo atrás venían tramando una conspiración contra la vida y haciendas de sus moradores; que pocos días antes se había visto a muchos ejercitándose en el manejo de la lanza; que se sabía que habían comprado armas de fuego, proyectiles armas blancas y cantidades de parafina para incendiar el pueblo; que se había notado que indígenas que iban continuamente al comercio de la localidad, varios días no volvían; que reinaba mucha alarma, pues se calculaba que de un momento a otro podrían descargarse sobre ella no menos de cinco mil indígenas. Agregábase que gente de los campos había llegado a la población a ponerse en salvo. Hasta circuló el rumor de haber sido asesinado por los indios el comandante de policía de Nueva Imperial.

Se pedía al señor Intendente que solicitara el pronto envío de un batallón y de alguna caballería para arrostrar o prevenir el peligro.

El señor Intendente no acogió, por supuesto, semejante rumor; pero para tranquilizar al pueblo hizo salir un piquete de la compañía de infantería montada "San Martín" que guarnecía la ciudad, al mando de un subteniente.

Creí necesario trasladarme a Imperial para inquirir el origen del rumor.

Con este objeto, hice citar a la Gobernación a los principales caciques de Boroa y Quepe; concurrieron también algunos de Bajo Imperial.

Al darles a conocer el objeto de la citación algunos se mostraron bastante sorprendidos, pues, solo en ese momento se imponían del rumor y manifestaron que nunca habían pensado en "volver otra vez a pelear con el Gobierno," tanto porque estaban acostumbrados a su nueva vida y se iban civilizando como porque carecían de elementos; no disponían de armas ni de buenos caballos como en otros tiempos y comprendían muy bien que no podían medirse con la fuerza de línea del Gobierno y que si por sorpresa obtuvieran alguna ventaja, después quedarían a merced de las tropas, porque no tenían tampoco como antes la retirada libre a la Argentina, estando sus tierras rodeadas de "españoles".

Otros, como Pedro Painen, indígena, bastante acomodado, rico, podría decirse, se mostró alarmadísimo, pues, decía que un levantamiento de sus paisanos significaría "el acabo de su nación" y la pérdida de todos sus bienes. Él tenía mucho que arriesgar y pedía, en consecuencia, se averiguaran los autores del rumor "para que fueran castigados por el Gobierno".

Aprovecharon los indígenas esta ocasión para renovar ante mí sus eternas quejas contra sus explotadores, tinterillos, autoridades subalternas y comerciantes inescrupulosos.

Supe después que al retirarse de la reunión, habían expresado algunos que más valdría sublevarse para morir pronto y no a pausas, devorados por sus explotadores.

Ya que esta reunión no había dado ningún resultado para inquirir el verdadero origen del presunto levantamiento, recorrí con este fin algunas reducciones y los indígenas a quienes interrogué, me contestaron uniformemente que no sabían lo que se les preguntaba.

Al cabo pude imponerme de lo siguiente: el cacique Antonio Neculman, descendiente de prestigiosos caciques de Boroa, de regreso de un viaje a Santiago, con el objeto de formular ante S. E. el Presidente de la República reclamos sobre sus tierras, convocó a una reunión a numerosos indígenas para darles cuenta del resultado de su viaje. A los ocho días después hubo en Boroa un *guillatun,* fiesta religiosa, rogativa, y los *guillatunes* se siguieron con alguna frecuencia, Semejantes fiestas terminan de rigor con una borrachera. Algunos indios en estado de ebriedad se pusieron a considerar su situación, a enumerar los motivos de sus resentimientos contra los que les arrebataban sus tierras y embargaban sus animales, y recordaron tal vez como remedio sus antiguos *malones*[333]; oído lo cual

[333] = ataque sorpresivo, razzia.

por algunos campesinos, lo hicieron circular, dando por concertado el propósito de revuelta, el que bastante extendido y agrandado llegó a Nueva Imperial.

Pude comprobar la efectividad de haberse ido a refugiar, a consecuencia de estos rumores, varios vivientes de los campos al pueblo nombrado.

El señor Subinspector de Colonización y antiguos vecinos de la localidad me manifestaron que semejantes rumores se producían cada vez que el Supremo Gobierno acordaba poner en remate los terrenos baldíos de estas provincias. Y como Ud. sabe, se había fijado para el 15 de diciembre próximo pasado la fecha en que debían subastarse algunos miles de hectáreas fiscales de esta zona.

A fin de hacer resaltar, si es posible, la deplorable situación a que se tiene reducidos a los indígenas, y con el propósito de que se adopten eficaces medidas para corregirla, voy a insertar aquí la palabra imparcial y autorizada de un distinguido magistrado de una de las cortes superiores de justicia, el señor Juan N. Parga, que en una comunicación elevada a la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, con motivo de una visita extraordinaria practicada en el juzgado de Temuco, decía lo siguiente acerca de los indígenas.

> No me sería posible dar a V. S. Iltma., una idea exacta de las condiciones deplorables en que se encuentran los indígenas en lo que se relaciona con la administración de justicia, y lo que es peor todavía, el régimen actual creado por nuestras leyes y disposiciones administrativas, no ofrece medios de cambiar esa situación; y aun dado caso que nuestra legislación se mejorase, siempre sería impotente para cortar los graves males que existen desde tiempo antiguo, y a lo sumo, podría moderar su intensidad, si no se hace descansar la reforma legal en esta materia sobre un fundamento enteramente distinto y si no se la dirige a fines también diversos.
>
> El indígena, hoy como ayer, y como sucederá mañana, se halla constituido en un estado más miserable que el de la más dura esclavitud. Se le arrebatan sus tierras, se le roban sus demás bienes, se le tortura y se le mata, y cuando se emplean medios menos crueles para arrojarlo o despojarlo, se le inventa un delito o se le promueve un pleito; y porque el indígena no entiende la jerga judicial de los tiempos de don Alfonso el Sabio y no comprende qué cosas son autos de estrados, emplazamientos, rebeldías y contumacias, no conociendo el español, se pronuncia en su contra una sentencia con todos los requisitos que enseña el formulario, la cual sentencia lo condena, según los casos, ora a entregar sus bienes, ora a presidio y a sufrir azotes o a muerte sin defensa cierta y positiva. Esto sería un sarcasmo si no entrañara una evidente iniquidad.
>
> ¿Cambiará un estado de cosas semejante? ¿Puede esperarse que en algún tiempo cese esta acción exterminadora de la población indígena? Creo que no, por razones que apenas me será dado indicar, ya que los términos estrechos en que debe encerrarse un informe como el presente no permiten extenderse demasiado sobre la materia, por interesante que sea.

El empeño que ponga un juez honradamente inspirado y el amparo que dispense un Protector de Indígenas, no bastarán a contrarrestar las exacciones y vejámenes que a impulso de la codicia ejecutan los particulares, amparados por las autoridades locales, para lucrar de todas maneras a costa de los indígenas, aprovechando la superioridad intelectual y material que sobre ellos tienen.

Las leyes y disposiciones administrativas que a ellos se refieren parten del antecedente de que la población indígena ha de permanecer siempre en el mismo estado; y por eso nunca han tendido a que el indio desaparezca como tal sin que para ello sea preciso exterminarlo. En esto consiste precisamente el defecto capital de estas leyes y decretos, que forman un conjunto complicado, confuso y contradictorio de remedios empíricos que, por lo mismo, no atacan la causa del mal.

La verdad es que existen en el país dos razas y dos civilizaciones distintas, siendo una de ellas muy superior en todo a la otra, y sucede lo que ha acontecido en otras partes, a saber, que la raza más aventajada trabaja incesantemente en extinguir, pertinaz y despiadadamente, a la otra bajo los estímulos del lucro, sin descansar en otras tareas.

Sabido es que la coexistencia de dos civilizaciones distintas en un mismo país constituye una de las fuentes más copiosas de grandes y perennes males, que han durado siglos en otras naciones; y no han terminado sino después de centenares de años por la expulsión de la raza más débil o por el exterminio de la una por la otra.

Lo que acontece entre nosotros tiene lugar en una escala muy inferior; y por fortuna, si bien se mira, este estado anómalo puede concluir sin grandes sacrificios, que en todo caso serían con el tiempo ampliamente compensados.

La población indígena está calculada en setenta mil habitantes; pero los datos que he tomado me hacen creer que este censo peca por defecto, y que la cifra más aproximada a la verdad es la de cien mil indígenas, que ciertamente no debe despreciarse.

Absolutamente todos, salvo los que habitan la Tierra del Fuego, viven en contacto más o menos directo con nuestra población civilizada, lo que ofrece grandes facilidades para la radicación completa de ellos en los extensos territorios que posee el Estado, pero la radicación no sería bastante si al mismo tiempo no se procede resueltamente a civilizar a todos los indígenas susceptibles de este incomparable beneficio.

La educación de los adultos presenta obstáculos insuperables; pero no así la enseñanza de los que se hallan en la infancia o de aquellos que no han salido de la adolescencia, y como el indígena se encuentra en una situación especial, su educación debe encaminarse no solo a darles los conocimientos que suministra la escuela, sino también y principalmente, a infundirle todo lo que se comprende en la palabra civilización: traje, hábitos, ideas en el orden

moral, etc., lo que no puede conseguirse sino asilando a los hijos de indígenas, en cada comarca, de la respectiva radicación, en establecimientos semejantes a nuestras casas de expósitos.

Costará esto, sin duda, bastante dinero; pero se puede tener la seguridad de que trascurrida una generación el indígena habrá desaparecido en Chile de una manera humana y con gran provecho para el Estado, que además de arribar a la unidad de su civilización, habrá conquistado de ese modo para ella y para la prosperidad pública a millares de personas que, en caso contrario, les estaría deparada la desgraciada suerte de los que hoy son tratados de una manera que desdice mucho de la cultura que el país ha alcanzado.

No se comprende, y a lo menos yo no lo concibo ¿por qué razón el Estado, sin más antecedentes que el haber nacido en Chile bajo la protección de sus leyes, recoge, alimenta y educa al hijo de padres desnaturalizados que lo abandonan al nacer; y no recoge, alimenta y educa al hijo del indígena, que también es chileno y debe ser amparado por las leyes, y lo deja entregado a la barbarie, que equivale casi a la pérdida de vida, pues le espera solamente la miseria y la servidumbre?

En la Memoria del año pasado, con gran acopio de datos y observaciones, quise poner en evidencia las condiciones de los indígenas para asimilarse la vida civilizada, demostrando que era injusta la desfavorable prevención con que se les miraba.

Omití entonces un dato, que, aunque conocido por mí, no lo había suficientemente verificado: me refiero al comercio que hacen con la Argentina.

He observado que de cada familia indígena hay dos o tres individuos, por lo menos en ese país.

Habiéndome llamado la atención la generalidad de esta circunstancia, he constatado que los tejidos de lana que durante el invierno fabrican las mujeres los llevan a la Argentina y obtienen en cambio un buen precio en animales: una manta cuando es buena la venden en dos bueyes de regular calidad; con una *lama* o debajero de silla de montar adquieren un novillo, etc.

Además, los individuos solteros que no tienen esas especies que cambiar se van también a la Argentina y permanecen en ese territorio dos o tres años arrendando por animales en las estancias ultra-andinas sus servicios en calidad de "camperos", los que después introducen al país.

Otros más acomodados practican estas compras y para adquirir buen precio se internan hasta la Patagonia.

He conocido indígenas que todos los años llegan hasta la laguna de Nahuelhuapi para invertir en animales baratos el producto de sus cosechas.

Los indios, que tienen bastante extendido el negocio de animales con el pueblo vecino, constituyen, pues, un factor económico de relativa importancia para la República.

Existe una disposición administrativa que obliga al Protector de Indígenas a proponer al Supremo Gobierno las medidas que estime conducentes a la pronta civilización de los naturales.

En cumplimiento de esta disposición, voy a proponer a Ud., a fin de que, si lo estima conveniente, se sirva proponerlo al Gobierno, el siguiente plan para la civilización de los indios.

Creo que el Estado puede proveer a esta necesidad sin el desembolso de un solo centavo, y con dinero de los indígenas mismos.

Para ello se presenta un medio sencillísimo: convertir la contribución municipal que pagan los indios en fiscal y dedicar todo su producido a su educación.

En el fondo, esta idea no es nueva y tiene precedentes honrosos en nuestra legislación.

El senado-consulto de primero de julio de 1813 dispuso que se formaran pueblos indios, se diera a estos ciertos útiles de labranza, se les edificaran casas y se les costearan maestros de escuelas.

Los fondos para sufragar a estos gastos deberían obtenerse del remate público de sus tierras.

Y quiero hacer notar la inversión que ese senado-consulto daba al sobrante del producto de tales remates, una vez llenadas las necesidades a que quiso proveer:

> "este sobrante, ordena, que espera el Gobierno sea de bastante consideración, desde ahora y para siempre lo declara, aplica y consigna con acuerdo del Senado, privativamente, para fomentar la educación pública, científica, moral e industrial del Estado que lo componen indios y españoles".

Por otra parte, el número 9 del art. 26 de la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades, obliga a estas corporaciones a mantener escuelas de adultos y de niños con fondos propios.

No tenemos conocimiento de que alguna Municipalidad de estas provincias cumpla con esta disposición legal.

Hay que agregar que los servicios municipales no son aprovechados por los indígenas, sin embargo, contribuyen a su sostenimiento.

Ellos viven lejos de las poblaciones, y los fondos municipales se invierten en éstas.

Es necesario que se tenga presente que el pago de esta contribución que en nada beneficia a los indios, se resuelve en abusos irritantes que para percibirlos se cometen contra ellos.

Me consta que los indígenas pagan centuplicado el impuesto que les corresponde.

Desde luego, los tasadores municipales incluyen en el rol de avalúos todas las propiedades indígenas, aun las que por valer menos de dos mil pesos, deben ser exceptuadas en conformidad a la ley, y las aprecian a todas ellas en el doble

o triple de lo que valen, a fin de aumentar, a costa de los indígenas, las entradas de las municipalidades, siempre ávidas de rentas.

No hay palabras con qué representar los abusos que los recaudadores del impuesto cometen con los indios.

Así, cobran una misma contribución dos o tres veces.

Exageran hasta lo increíble los gastos de la cobranza: como los indios viven lejos de las poblaciones, el recaudador tiene que recorrer algunas leguas para ello, y cobran, por lo regular, veinte pesos por viaje, y nunca hacen uno solo.

He visto recibos por siete pesos, por ejemplo, que han subido a más de setenta, recargado con los costos de la cobranza.

Convirtiendo esta contribución en fiscal para dedicarla al objeto que hemos dicho, sería aprovechada por los contribuyentes y se concluirían los abusos que hemos mencionado, porque, en primer lugar, el Estado no tendría el interés de las municipalidades de exagerar el valor de las tierras de indios para gravarlas con mayor contribución, y los recaudadores, que tendrían sueldo fijo, no estarían tampoco interesados en recargar los gastos de la cobranza.

El procedimiento que se emplearía para la percepción del impuesto sería el siguiente: se avaluarían las tierras de los indígenas radicados por un ingeniero de la Comisión Radicadora o de la Sección Topográfica y por el del Protectorado. Los reclamos sobre avalúos serían resueltos breve y sumariamente por la justicia ordinaria, interviniendo por parte de los indios el Protector y por parte del Fisco el Promotor Fiscal.

A los indígenas no radicados se señalaría por la Comisión Radicadora el valor del terreno adjudicado para los efectos del pago de la contribución.

Omito otros detalles que podrían ser consultados en un reglamento.

Si se aceptara este plan, podría presentar al señor Inspector General, un estado del monto actual de la contribución que pagan los indios; y presentaría también el valor aproximado de los terrenos adjudicados a estos y los proyectados para adjudicárseles.

Saluda atentamente al señor Inspector General,

Eulogio Robles Rodríguez

Temuco, 15 de mayo de 1903.

1903
EULOGIO ROBLES
MEMORIA DEL PROTECTOR DE INDÍGENAS[334]

Señor Inspector General:

He de repetir ahora someramente en esta tercera Memoria que tengo el honor de elevar a Ud., lo que he venido haciendo notar en mis anteriores en orden a la deplorable situación en que se encuentran los indígenas y al constante atropello de las leyes que se han dictado para ampararlos en el goce de sus tierras.

He hecho observaciones y reclamos acerca del poco terreno que se les adjudica: cinco, o menos hectáreas, por persona es extensión escasa para individuos que apenas últimamente están ensayando trabajos agrícolas, por cuya causa he pedido que se fije un mínimum a estas adjudicaciones, ya que no es justo que sean inferiores a las que se hace a los colonos.

Contribuye a esta situación la incertidumbre en que se encuentran los indios que no han obtenido título de merced, pues, sus derechos están aun vacilantes y son desconocidos por extraños que a título de colonos nacionales se introducen a sus tierras y las cercenan en gran parte, reduciéndolos a los términos de la extrema miseria. Urge entonces concluir de una vez con la radicación con la cual se beneficiará también el Estado, pues, así podrá saberse la cifra exacta de hectáreas de terreno de que dispone en esta zona.

El malestar existente entre los indígenas es debido también a que se les radica en común sistema que trae innumerables dificultades entre comunero y comunero originales en pretensiones encontradas acerca del derecho a ocupar un determinado retazo de terreno. Es esta, entre otras, una de las causas de que a veces quede sin cultivo el campo de los indios. El año pasado se destinó un ingeniero para esta Oficina a fin de que dividiera estas comunidades, lo que produjo notable desahogo en las reducciones; pero, desgraciadamente, hoy no se dispone de tan útiles servicios por no haberse consultado el empleo en el presupuesto vigente. Para subsanar tal inconveniente tratándose de indios radicados, sería necesario restablecer el empleo suprimido y tratándose de lo que no lo estan, para que la Comisión Radicadora pueda expedir títulos por familias, y no por reducciones o conjuntos de familias, habría que aumentar el personal de sus ingenieros, pues con el actual apenas si podría llevarse a efecto tan importante medida.

[334] Archivo Nacional de la Administración (en adelante ARNAD), Fondo IGCI, vol. 60, 1904.

He dicho que no se cumplen las leyes que resguardan la propiedad indígena y que impiden su ocupación a cualquier título: la manera más frecuente de violarlas es por medio de contratos, simulados o verdaderos, de arrendamiento.

Se explota a los indios con crueldad en esta clase de contratos y muchas veces no son los que tienen derecho al suelo los que lo arriendan, si no terceros que arbitrariamente se arrogan semejante facultad. Algunos arrendatarios pagan por canon de arrendamiento nada más que la contribución municipal que grava la propiedad.

A mi ver y fundado en la experiencia en los cuatro años que desempeño este puesto, creo que se corregirían los abusos a que aludo si se consultaran las medidas propuestas en mis anteriores memorias y se diera a los jueces letrados la facultad de proceder de oficio contra los conculcadores de las leyes sobre indígenas.

Habría necesidad también de consultar otra medida indispensable para el cumplimiento de las leyes amparaderas de los indígenas: notificar personalmente al Protector en todo juicio que directa o indirectamente se refiera a sus tierras. Así se evitarían falsas notificaciones, o su remedo irrisorio, porque no sabiendo ellos el idioma nacional ni comprendiendo cuando lo saben la importancia de una notificación, es como si no fuera practicada. Los indios dan cuenta de ello a esta Oficina, cuando se producen sus efectos, es decir, en la mayoría de los casos, fuera de toda oportunidad. Con una medida de esta naturaleza no se sorprendería tan a menudo como acontece a los jueces letrados arrancándoles decretos y haciéndoles dictar sentencias en abierta pugna con la letra o el espíritu de estas leyes.

Los naturales al sur del Toltén a donde no alcanza la acción del Protectorado, por estar circunscrita solo al territorio denominado fronterizo, día a día se ven despojados de sus tierras no ya por fraudes si no por medios violentos que llegan hasta el crimen.

El señor Sub Inspector de Valdivia y el infrascrito en repetidas ocasiones han denunciado a la Inspección los abusos irritantes que se perpetran contra estos infelices.

El primero de los funcionarios nombrados agregó a su última Memoria un anexo en que detallaba los reclamos que le fueron presentados por los indígenas y que no puede atender, por más voluntad que tenía de remediarlos, por no ser de su incumbencia.

Creo que bastaría leer esa pieza para que los poderes públicos se apresuraran de poner fin a semejante estado de cosas.

El año pasado en el proyecto de presupuesto para el actual presentado por el Ejecutivo a las Cámaras se consultó, a instancias de la Inspección General, sueldo para el cargo de Protector de Indígenas de Valdivia; pero por las economías que se quiso introducir en los gastos públicos, la creación de ese servicio no pasó más allá.

Para hacer resaltar la necesidad absolutamente indispensable de proveer cuanto antes a la defensa de los indios de Valdivia, me bastara trascribir la siguiente carta que he recibido, advirtiendo que lo que en ella se denuncia no es un caso aislado, sino que constituye la regla:

Panguipulli abril 27 de 1904.
Señor Eulogio Robles Rodríguez, Protector de Indígenas
Mui distinguido señor:

Pongo en su conocimiento que el 21 de abril fueron lanzados con la fuerza pública por orden del Juez Letrado 5 familias de indios en el lugar denominado Cascos de Panguipulli.

El lanzamiento se hizo sin previo aviso, repentinamente, a petición de Joaquín Mera, en esta estación de invierno. Los indios no fueron avisados jamás que debían retirarse de sus posesiones.

Según informe que recogí, he sabido que dos indios, Manuel Treulen y José Martin Curipillan, habían hipotecado su fundo a Joaquín Mera. Como no podían pagar toda la suma adeudada, quería Mera quitarles el terreno. Los indios para salvarlo, lo declararon fiscal de manera que el Promotor fiscal anulara la hipoteca.

Joaquín Mera dice que puso en seguida pleito al Fisco a quien ganó el juicio. De la sentencia nadie supo algo, y notificación al promotor fiscal no aparece. Porque el promotor fiscal hubiera apelado sin duda alguna, siendo que en este caso el Fisco no debe perder el juicio.

Mera mandó inscribir su título y pidió al momento lanzamiento de los indios, orden que le fue dada por el juez interino González.

El modo como fueron lanzados los indios se puede llamar bárbaro. Los indios no tenían idea de lo que les amenazaba. Joaquín Mera se presentó con 4 carretas, un juez encargado por el juez letrado publica la orden de lanzamiento; y en el acto, los soldados y mozos de Mera sacan los trastes de los indios de las casas, queman tres habitaciones, voltean dos y hacen inhabitables dos casas más. Todos los ruegos de los indios [de] darles algunos días de plazo eran inútiles. Luego entraron grandes lluvias y los indios han sufrido cosas indecibles.

Apelamos a su energía y buena voluntad para que ampare a los pobres indígenas y nos indique los caminos que debemos tomar para remediar el mal antes que perezcan los indios.

Saluda a Ud., muy respetuosamente su servidor afmo.
(Firmado)
P. Sigifredo Frauenhäusl. Misionero Apostólico Capuchino

El nombramiento de Protector de Indígenas para Valdivia es indispensable, no solo para que ampare las pocas tierras que en esa provincia van quedando

a los naturales, sino también para resguardar los intereses del Estado, porque como Ud. sabe, siendo en los terrenos de indios donde aun no se ha operado su radicación, común la propiedad entre ellos y el Fisco, favoreciéndose los intereses de la comunidad, se favorecen al mismo tiempo los fiscales.

Y para concluir llamaré la atención a la dolorosa circunstancia de que los indígenas, resguardados apenas en pequeña parte por las leyes especiales dictadas para mantenerlos en el goce de sus tierras, están, puede decirse, fuera de las garantías del derecho común, porque si éstas, a lo menos, en los departamentos a donde no alcanza con eficacia la acción de la Oficina a mi cargo están a merced del primer audaz que quiera apoderarse de ellas, su vida misma no está más segura, pues, son numerosos los homicidios de indígenas que quedan impunes.

Algunos observadores superficiales hablan mucho de la pereza de los indios y no quieren encontrar la explicación en su verdadera causa, esto es, en la poca seguridad que tienen de lograr el producto de sus esfuerzos, arrebatados por mil medios maliciosos. Lo que debe llamar la atención es precisamente lo contrario, es decir, que los indios se resuelvan a cultivar sus tierras en medio de la incertidumbre de si lograran el premio de sus afanes.

Si se arbitraran medidas para hacer gozar plenamente a los indígenas, aunque fuera solo de las garantías del derecho común, no podría menos que acrecentarse la riqueza de estas regiones.

Saluda atentamente al Sr. Inspector General,

Eulogio Robles Rodríguez

Temuco, 13 de junio de 1904.

1904
EULOGIO ROBLES
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS[335]

Señor Inspector General de Tierras y Colonización:

La Oficina a mi cargo se ha ocupado en el curso del año que espiró, en cautelar los derechos de los indígenas, lesionados como siempre, por individuos que, abusando de su situación, les usurpan sus terrenos, ya violentamente, ya por medio de procedimientos maliciosos; en perseguir ante la justicia ordinaria la responsabilidad de los que atropellándolos, los hacen víctimas de delitos irritantes; en concurrir a la constitución de la propiedad indígena, tomando conocimiento de las operaciones de la Comisión de Títulos de Merced; en dirimir las dificultades de todo género que se suscitan entre indígenas, arreglándolas como amigable componedor, y evitándoles así ocurrir por asuntos de escasa importancia a la justicia ordinaria y caer en manos de agentes judiciales de pocos escrúpulos que se labraban, mediante su intervención en esta clase de juicios, alguna renta con procederes no siempre correctos; pero siempre perjudiciales a los indios. En lo que he podido he tratado también de inducir a los araucanos a llevar sus hijos a los establecimientos de enseñanza; y me cabe la satisfacción de expresar a Ud. que muchos niños que se habrían perdido para la vida útil, siguiendo las costumbres de sus mayores, han ingresado a los colegios y han adquirido hábitos cultos. Me he permitido igualmente proponer a esa Inspección, a fin de que se digne indicarlas al Gobierno, las medidas que he estimado eficaces a la protección de los indios y a su pronta y completa refundición en el resto de los pobladores del país.

Para llevar a cabo estos trabajos, he mantenido constante comunicación con los intendentes y gobernadores de las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín, con promotores fiscales de este departamento, con alcaldes de algunas comunas, con la Comisión Radicadora y la Inspección General, como puede verse en los libros copiadores del Protectorado.

He presentado solicitudes y he asistido a comparendos en los juzgados de letras, en algunos juzgados de menor cuantía de la localidad y en el de Lautaro, en defensa de los indios.

[335] "Memoria del Protectorado de Indíjenas", en *Memoria de la Inspeccion General de Tierras y Colonización, 1904* (Santiago, Imprenta Cervantes, 1905), pp. 179-204.

Para tomar conocimiento de los reclamos de éstos, les he dado audiencias en la Oficina, los días en que las obligaciones de mi cargo no exigían mi presencia en otra parte.

Creí conveniente el año pasado dar estas audiencias en Imperial, en que la población araucana es bastante densa, y en que también los abusos que se perpetran con los naturales exceden a toda ponderación.

Creo que mi estadía en el departamento nombrado alivió un tanto la situación de esos infelices e impidió en parte la continuación de los atropellos a que aludo.

En cumplimiento de una orden superior me trasladé al Budi a imponerme personalmente de los denuncios que los indios de la isla de Huapi, situada en la laguna de ese nombre, hacían contra la Empresa de Colonización del señor Domínguez, permaneciendo varios días en ella y en sus alrededores. El resultado de esta Inspección lo comuniqué detalladamente a Ud. en oficio número 701 de 27 de diciembre último[336].

Debo dejar constancia de la situación de los indígenas a quienes aún no se ha entregado su título de merced; pero a quienes se ha medido su terreno y se ha proyectado en los planos una reserva para su radicación definitiva.

Estos individuos no están garantidos en la posesión de su suelo, pues se lo disputan aspirantes a colonos nacionales, quienes toman posesión de él de modo disimulado entrando a trabajar a medias con sus dueños, arrendándoselos o como simples inquilinos; pero que una vez que han desmontado el terreno, introducido mejoras o ocupándolo algún tiempo, se creen con derecho a pedirlo en calidad de colonos.

De este modo se reduce la extensión de terreno proyectado para la radicación de familias indígenas y cuando esta operación esté terminada se las deja bastante estrechas.

En estos casos, como el terreno de los indios no está resguardado con título de propiedad, se hace difícil, por no decir imposible su defensa, y los que formulan reclamos contra esos ocupantes se ven obligados a esperar se llenen todas las morosas tramitaciones necesarias para expedirlos a fin de poder ser amparados, pero entretanto el que se ha introducido en sus tierras les va disminuyendo poco a poco su cabida y dejándolos en condiciones bastante precarias.

Existe un oficio de la Inspección a la Comisión Radicadora, al que se ha dado tal vez más alcance que el que realmente tiene, en que le recomienda respete a los ocupantes, y por las dificultades de todo orden a que dicho oficio ha dado lugar me atrevo a rogar a Ud. se digne dejarlo sin efecto.

Antes de ese oficio, cuando reclamaba en esta Oficina algún indio no radicado, consultaba los planos respectivos y con la copia del plano y certificado de extensión y deslindes del terreno que me daba un ingeniero, me presentaba

[336] Véase en Fuentes Complementarias.

a la justicia y hacia salir al ocupante ilegítimo; pero hoy, como no se sabe si tal individuo que se ha introducido a estas tierras ha de quedar o no dentro de ellas cuando se radique definitivamente a los indios, es inútil gestionar a su favor.

A consecuencia de esto, las hijuelas que en definitiva se adjudican a los indios resultan pequeñas, lo que motiva numerosos reclamos que traen a esta Oficina los que se creen perjudicados y las solicitudes que envían, ya a la Inspección, ya al ministerio del ramo, cuando no resuelven ir a Santiago a reforzar con su presencia esas reclamaciones.

Forma contraste la extensión de terreno que se adjudica a los colonos extranjeros o nacionales con la exigua que se entrega a quienes tenían la posesión originaria de este suelo.

Y este contraste adquiere marcadísimo relieve si se comparan las minúsculas hijuelas que se va dejando a los indios con las dilatadas extensiones que se conceden a empresas particulares de colonización.

Sobre esto, me permito llamar la atención del señor Inspector General y estoy seguro que en su elevado criterio y sentimientos de equidad, ha de arbitrar los medios de dejar a los indígenas, no en las condiciones precarias a que se les va reduciendo, sino en situación holgada para allanarles su completo ingreso a la vida culta, más fácil en el que dispone de algunos bienes que el que está en la miseria.

La escasa adjudicación de terrenos no permite a los indios desarrollar sus labores agrícolas, ni les da alientos para el trabajo, y los va sumiendo en una especie de conformidad fatalista que mata todo brío y apaga todo entusiasmo para la vida activa.

Desde luego, por mi parte, me permito insinuar al señor Inspector General con el objeto de mejorar la situación de los indígenas en el reparto de hijuelas, mientras se aprueba el proyecto de ley pendiente sobre tierras, se sirva solicitar de S. E. el Presidente de la República se digne poner en ejercicio la atribución que le confiere el art. 73 (82) número 2 de la Constitución Política y reglamente la ley de 4 de diciembre de 1866 para fijar un minimum a las adjudicaciones de terrenos a los indígenas.

Creo que esto no sería invadir la esfera propia del Poder Legislativo.

He visitado los establecimientos de enseñanza para indígenas que mantienen en Cholchol y en Quepe los misioneros evangélicos y la escuela sostenida por los misioneros capuchinos de Padre las Casas y he podido constatar con agrado que la educación que se les proporciona es práctica y va encaminada a hacerlos salir de su situación.

He prestado mi concurso a estos establecimientos, ya induciendo a los indígenas lleven a ellos a sus hijos, ya valiéndome de mi ascendiente moral a fin de conseguir que sus padres los mantengan en los colegios el tiempo que requiere su preparación.

Para los establecimientos referidos obtuve el año pasado de la Inspección General de Instrucción Primaria útiles de enseñanza y me cabe la satisfacción

de dejar constancia de la buena voluntad y facilidades que me concedió el digno jefe de este servicio, señor Marco Antonio de la Cuadra.

A fin de que los misioneros capuchinos de Padre las Casas pudieran disponer de un terreno apropiado para la experimentación de la enseñanza agrícola, hice gestiones ante la Inspección con el objeto de que se concediera a estos religiosos una hijuela vecina al colegio, lo que fue acordado; pero hasta la fecha no han podido entrar en posesión de ella.

Ud. tiene conocimiento de esto, pues como Intendente de Cautín, les prestó en la ocasión recordada, su valioso apoyo.

Ojalá el señor Inspector se sirviera considerar este asunto y allanar las dificultades que se han opuesto para que esa escasa extensión de suelo sirva a tan laudable objeto.

Estimando la conveniencia que existe de conocer el guarismo exacto de la población indígena, aproveché la oportunidad de hallarse en preparación el censo decenal de la República para enviar a Ud. un oficio en que le solicitaba pidiera a la comisión encargada de este trabajo impartiera las instrucciones necesarias para averiguar de modo cierto el número de habitantes de esa raza que hay en nuestro país. Ud. tuvo a bien trascribir mi nota al señor Director de Estadística y este funcionario, contestándola, manifestó a Ud. que haría presente en el seno de la mencionada comisión lo indicado por mí, pues, según el señor Director, consideraciones de carácter etnológico y económico lo hacen digno de tomarse en cuenta.

Se ha emprendido una campaña tratando de demostrar que los indios son refractarios al progreso, que no son aptos para refundirse en el núcleo civilizado de nuestra población, y que, por consiguiente, las adjudicaciones de terrenos que se les hace serían a modo de una obra de beneficencia que no responde a los bien entendidos intereses generales.

Se ha querido ver en esto como un obstáculo opuesto al progreso, pues, dándose terrenos a quienes poco provecho obtienen de ellos, impiden que manos más inteligentes los pongan en condiciones de servir con eficacia al desarrollo de la riqueza general, como si el progreso consistiera solamente en propender al incremento de la riqueza pública y no fuera en él factor importante el respeto al derecho ajeno y más si este derecho reside en los débiles y desvalidos.

Con tal motivo, se han hecho publicaciones en la prensa y en ésta, tanto las apreciaciones respecto a la condición legal de los araucanos como a su estado actual, distan mucho de la exactitud de las cosas.

Se ha considerado este problema por un solo aspecto, mirando a la conveniencia de los agricultores de la frontera, a quienes les sería útil para redondear sus fundos la colocación en otras zonas de los indígenas vecinos, aun cuando estos la ocuparan desde tiempo inmemorial.

Ud. como ex Intendente de Cautín, está impuesto de la verdad de las cosas y ha emitido su parecer en Memoria, justamente aplaudida, que elevó al Gobierno en el desempeño de ese cargo.

A fin de contribuir a la exacta apreciación de este problema, y no escapándoseme que tal campaña podría ir en perjuicio de los intereses que estoy llamado a cautelar, he enviado a la prensa diferentes comunicaciones, e inserto en esta Memoria la más completa, que fue la publicada en *Las Últimas Noticias.*

La comunicación a que me refiero es la siguiente:

El Problema Indígena
Señor Director de El Mercurio:

Con motivo de una comunicación enviada al Ministerio del ramo por la Inspección General de Tierras, denunciándole irritantes abusos cometidos con los indios de Valdivia y en que se pide se nombre un funcionario que los proteja en esa provincia, *El Mercurio* aborda, en sus líneas generales, el problema indígena.

La experiencia que he podido adquirir en cuatro años que desempeño el cargo de protector de indígenas, tal vez me autoriza para manifestar mi modesta opinión sobre la materia.

Pido, con este objeto, hospitalidad en las columnas del importante diario que dirige.

Debo declarar que los abusos denunciados no constituyen excepción, sino que, desgraciadamente, forman regla. En 1900 el señor Juan Larraín Alcalde, subinspector de Tierras y Colonización de Valdivia, envió al Ministerio una valiente comunicación en que se exponen los atropellos inauditos de que son víctimas esos infelices. Afirma el expresado funcionario que la colonización de Valdivia y Llanquihue se ha llevado a cabo en gran parte merced al incendio y al asesinato. Por lo demás, esos atentados no son peculiares de la provincia de Valdivia, sino que se perpetran en menor escala y con caracteres menos graves, es cierto, en la mayor parte del territorio habitado por indígenas.

II

El problema propuesto no es baladí, pues se trata de la suerte de cerca de cien mil de nuestros compatriotas, cifra calculada a los araucanos que viven en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco, Cautín, Valdivia y Llanquihue, sin contar algunas reducciones de la misma raza que existen en las islas Guaitecas. Para resolverlo, hay que contemplar cuál es hoy su situación jurídica y la expondremos brevemente.

Los indios gozan de los mismos derechos políticos y de las mismas garantías constitucionales –esto último solo en teoría– que el resto de los chilenos. Y no se descuidan del ejercicio del sufragio en las elecciones populares, practicándolo en muchas ocasiones, como casi la generalidad de sus conciudadanos, mediante el pago del voto.

Respecto a los derechos civiles, hay diferencias entre ellos y los demás habitantes de la República. Se ha dicho, aun por personas ilustradas, que los indios son considerados menores de edad. Error. Los que están en situación de ejercitar la plenitud de esos derechos pueden ejecutar, sin el ministerio o autorización de nadie, todos los actos y celebrar todos los contratos de que son capaces los mayores, excepto cuando se trata de sus bienes raíces en lo que se encuentran en situación aun más restringida que los mismos menores, puesto que les está absolutamente prohibido enajenarlos, gravarlos con hipoteca, darlos en anticresis, arrendarlos y celebrar cualquier otro contrato en virtud del cual puede privárseles directa o indirectamente de su posesión o tenencia.

La otra diferencia que existe es relativa a la prueba de su estado civil para los efectos de la herencia y está consignada en el art. 10 de la ley de 4 de agosto de 1874, en la forma siguiente:

"La posesión notoria del estado de padre, madre, marido, mujer o hijo, se tendrá como título bastante para constituir a favor de los indígenas los mismos derechos hereditarios que establecen las leyes comunes a favor de los padres, hijos y cónyuges legítimos".

No se dictó de golpe la absoluta prohibición impuesta a los indígenas de desprenderse de sus propiedades inmuebles, sino que se procedió gradualmente y para resguardar, no solo sus intereses, sino también los del Fisco.

Las disposiciones anteriores a la ley prohibitiva resultaron ineficaces, porque el espíritu tinterillesco y la mala fe encontraron siempre resquicios por donde barrenarlas y volverlas ineficaces.

Mediante dicha prohibición se ha evitado que los indios vendan a vil precio o por aguardiente sus tierras, y el Estado ha podido conservar –así lo ha reconocido la Inspección General de Tierras y Colonización– terrenos que, sin ella, habría perdido, porque el indio que aun no tiene título de merced es comunero con el Fisco en lo que ocupa, y de este modo la ley que ampara la propiedad indígena, ampara al mismo tiempo la fiscal.

III

Una de las maneras de preparar la solución de este problema –que no es de un día– sería consultar la forma de dar estricto cumplimiento a la ley prohibitiva de que se ha hablado. En memorias enviadas a la Inspección General de Tierras y Colonización, he indicado los medios que, a mi juicio, corresponderían a este objeto y que no es la oportunidad de exponer en estos momentos.

El actual régimen de la propiedad indígena no es, ni puede ser, definitivo; pero conviene mantenerlo hasta la radicación total de los indios y hasta que se practique la división de los terrenos que se les ha dejado en

común, a fin de preparar la correcta trasmisión de estos bienes, por los medios legales, cuando cese su imperio.

En las partes que he podido hacer cumplir estrictamente la ley prohibitiva, he visto con satisfacción, contra los que pronosticaban un fracaso, que terrenos de indios, antes arrendados u ocupados arbitrariamente por extraños, han sido trabajados por éstos, e individuos que vivían en la miseria y ociosidad por haber cedido a vil precio el uso de sus tierras, han mejorado su situación por medio del trabajo propio.

Desgraciadamente, para llegar a este resultado contra las protestas irritadas de ilegítimo interés particular herido, es necesario muchas veces hacer gestiones judiciales, y a un solo funcionario no es posible llevarlas a cabo al mismo tiempo en la extensa zona en que debe ejercer sus funciones, que es la comprendida, en la Alta Frontera, entre el Carampangue y el Toltén, la cordillera de la costa y el mar; y en la Baja, entre esta cordillera y la de los Andes, el río Biobío y el Toltén en que hay diez departamentos y diez juzgados de letras distintos.

IV

Decía *El Mercurio*, en el editorial que motivan estas líneas, que la experiencia parece demostrar no solo en Chile, sino en todos

"los países que han tenido que luchar con el problema indígena, que estas razas aborígenes, cualesquiera que hayan sido sus virtudes primitivas, ni se funden jamás con la raza conquistadora, ni son susceptibles de perfectibilidad".

Creo aventurada, a lo menos en lo que se refiere a nuestros aborígenes, esta afirmación, porque los araucanos se han fundido en gran parte con la raza conquistadora; nuestras clases populares, basta contemplar sus rasgos fisonómicos y estudiar su organización mental, tienen a lo menos tres cuartas partes de sangre indígena.

La fusión de razas está patente, salta a la vista.

Las personas que por primera vez visitan la frontera al ver a los *mapuches* observan, valiéndome de su expresión pintoresca, que no son ni más ni menos que "rotos vestidos de indios".

Los araucanos son susceptibles de perfectibilidad y se han asimilado mucho de las razas que los han conquistado, y hasta la conquista incásica, precaria como fue, les dejó sus vestigios civilizadores. Antes de ella, los indios chilenos no contaban sino hasta diez y tomaron de los peruanos su sistema completo de numeración. Basta comparar el *quichua* con el *mapuche* para notar inmediatamente la absoluta identidad de la manera de contar en estas dos lenguas. Hay que hacer ver que las palabras *pataca*, ciento y *huaranca*, mil, con que se designan estos guarismos en el idioma *quichua*, tienen la misma significación en el araucano.

Aprendieron también el cultivo de algunos vegetales, como el poroto, el zapallo, el maíz, etc.; los indios del norte empleaban los canales de regadío. Hasta domesticaron y propagaron el llama peruano que, según el señor Guevara, no es otro que el *hueque* de los cronistas.

A los pocos años de la conquista española, se servían contra sus invasores del caballo y de las armas de fuego traídas por éstos.

Entiendo que esto es progreso y que revela aptitudes de asimilación.

Hoy los indígenas no son nómades: han adquirido desde mucho tiempo hábitos de vida sedentaria. Siembran y cosechan en épocas oportunas, empleando bueyes y arados, y algunos hasta máquinas trilladoras que han adquirido con su propio dinero.

En la actualidad llevan camisa y las demás prendas de vestir usadas generalmente en el país y se valen de los utensilios domésticos que la civilización ha hecho indispensables: platos, fuentes, cucharas, ollas, etc.

Las tres cuartas partes hablan español; muchos no quieren constituir familia a la usanza de sus antepasados, tomando dos o tres mujeres: la monogamia se abre paso con firmeza entre ellos, a pesar que la ley tolera y aun consagra la poligamia. Hasta acuden al oficial civil a regularizar sus relaciones maritales.

Hay indígenas que tienen grande interés en educar a sus hijos y acuden a solicitar con empeño que se los admitan en los establecimientos de educación que sostienen misioneros católicos y protestantes. Hasta se cuentan algunos que con sacrificios los envían a las escuelas públicas y al liceo de esta ciudad.

Luego que me hice cargo del puesto que desempeño, emprendí, sin prejuicios de ningún género, la tarea de investigar si los indios eran o no susceptibles de civilizarse, y al cabo de algún tiempo, me convencí que lo eran efectivamente; y queriendo confirmar mi experiencia con la de personas que habían vivido más en contacto con ellos o que habían estado a cargo de su enseñanza, les dirigí comunicaciones solicitándoles ciertos datos y pidiéndoles su opinión acerca de si eran refractarios al progreso; y todos, entiéndase bien, todos sin excepción, me contestaron que los niños indígenas asimilaban los conocimientos con la misma facilidad que los nacionales, que eran disciplinados y que tenían cierta viveza intelectual. Estos datos corren publicados en extensa Memoria que envié en 1902 a la Inspección General de Tierras y Colonización.

El señor Tomas Guevara, rector del liceo de Temuco y autor de una obra titulada *Civilización de Araucanía* premiada por la Universidad[337]; el doctor señor Rodolfo Lenz, autor de aplaudidos y originales estudios sobre el idioma

[337] En 1904, Tomás Guevara ya ha publicado tres volúmenes de la serie *Historia de la civilización de Araucanía*: vol. 1. *Antropología araucana*, 1898; vol. 2. *Arauco español*, 1902 y vol. 3. *Los Araucanos y la República*, 1902, todos en Santiago, Imprenta Barcelona.

mapuche, y el misionero capuchino y doctor en medicina graduado en una universidad alemana, fray Félix José de Augusta, que vive entre los indios, los estudia con talento, y que ha sido el primero en exponer científicamente de modo completo el mecanismo gramatical de la lengua araucana; estas tres personas distinguidas que han estudiado el problema de la civilización de nuestros indígenas, han llegado a la misma favorable conclusión.

V

Se afirma que los indios son en extremo perezosos y refractarios a todo esfuerzo, y que la mayor parte de sus tierras las tienen sin cultivo y entregadas a otras manos.

En estas aseveraciones hay evidente exageración y es necesario que llame la atención a lo que expongo en seguida a fin de que se aquilate la justicia de lo que se afirma.

La mayor parte, casi la totalidad del comercio de los pueblos pequeños de la frontera, como el caserío de Padre Las Casas, Cholchol, Pitrufquen, Galvarino, Bajo Imperial, etc., lo mueven los indígenas.

En la época de las cosechas, basta ver el considerable número de carretas cargadas de trigo que llevan a las grandes bodegas de Temuco e Imperial, para deducir que no son tan negligentes como se les pinta.

El representante de la casa Bunster en la ciudad que se acaba de nombrar, señor Slater, me ha expresado que entre sus clientes mejores y más estrictos en el cumplimiento de sus compromisos, se cuentan los araucanos.

Antes del impuesto verdaderamente prohibitivo que grava el ganado vacuno que se importa de la Argentina, los indígenas internaban al país, al año, cerca de $1.000 en animales, según cálculos que he hecho con hacendados y personas conocedoras de este tráfico. Y hacían esto realizando un verdadero milagro económico: llevaban cosas de poco valor o arrendaban sus servicios para obtenerlos. Los casados cambiaban por animales, en la Argentina, tejidos de lana que sus mujeres e hijos elaboran durante el invierno; y los solteros servían de cuidadores de vacadas a los estancieros argentinos y recibían sus salarios en tanta cantidad de novillos o terneras, que traían después al país.

No es, pues, exacto que los indígenas sean ineptos para la vida económica.

Es cierto que no obtienen de sus tierras todo el provecho que podrían dar, es cierto que, en general, son más perezosos que el resto de sus conciudadanos, pero esta mala cualidad no es exclusiva de la raza araucana, sino que es inherente a todas las razas que se encuentran en el mismo nivel; es cierto que no son previsores, pero hay que recordar que la previsión es el producto de una cultura intensa.

Debo observar que lo admirable es que los indios trabajen, pues les falta la seguridad en la expectativa de gozar del producto de sus esfuerzos,

expuestos, como se hallan, a los mil embrollos en que los envuelven la rapacidad de sus explotadores, que muchas veces simulan créditos para embargarles sus cosechas y animales.

VI

Doloroso es constatar que los poderes públicos no han hecho ningún esfuerzo para acelerar la civilización de los araucanos.

Y entiendo que mientras no se emprenda de un modo sistemático esta obra de patriotismo y de humanidad, no se tiene derecho para decir que los indios chilenos son refractarios al progreso.

Valdría la pena de intentar esta empresa de verdadera necesidad nacional, y ojalá la prensa estimulara en este sentido el celo de nuestros gobernantes.

En comunicaciones que he enviado al Supremo Gobierno, me he permitido exponer un plan para arbitrar fondos a fin de educar niños indígenas, sin gravar en nada al Fisco. El medio propuesto no es otro que convertir la contribución de haberes que pagan los indios que tienen títulos de merced, de municipal en fiscal, y dedicar todo su producido a este objeto. Se conseguiría otro buen resultado con esta medida, evitándose los abusos de que son víctimas de parte de algunas Municipalidades que les cobran centuplicado –me consta– el impuesto que les corresponde. En forma no igual, pero análoga, esta idea no es nueva y tiene un precedente honroso en nuestra legislación: el senado-consulto de 1 de julio de 1813.

En mis excursiones por tierra indígena he podido notar que la población infantil de esta raza es numerosa, y a esos niños de mirada inteligente, ágiles y robustos que, amparados por el Estado, podrían incrementar espontáneamente nuestra población útil, se les deja en el abandono; y cuando crecidos, adoptarán el modo de ser de sus mayores.

Es esto una negligencia punible, pues el Estado debe procurar que haya unidad de cultura en todos los habitantes de nuestro territorio.

Se comprende que en una comunicación de esta naturaleza no se pueden abarcar todos los detalles, muchos de ellos de orden administrativo, que comporta el problema indígena que, a nuestro juicio, en sus caracteres generales, no es de difícil solución y que creemos se reduce por ahora a lo siguiente: garantir con eficacia a los indígenas lo que poseen; acelerar su radicación; adjudicarles terreno, no en común sino por familias; dividir las comunidades existentes y propagar sin economías entre ellos una enseñanza adecuada.

Creyendo que podría tal vez tomarse en cuenta la experiencia que he recogido en cuatro años que sirvo el puesto que desempeño, por la comisión que estudia el proyecto de ley sobre tierras que pronto ha de someterse a la consideración del Congreso, me permití enviar a Ud. algunas observaciones que

me sugirió el estudio del título v de ese proyecto que trata "De la constitución de la propiedad indígena".

Inserto ese título y en seguida mis modestas observaciones.

Título v
De la constitución de la propiedad indígena

Art. 84. Los terrenos actualmente ocupados por indígenas que no hubieran sido radicados antes de la fecha en que comience a regir la presente ley, se reputarán de su propiedad y serán distribuidos entre ellos por familias en conformidad a las disposiciones que a continuación se expresan.

Art. 85. A cada jefe de familia le corresponderán 40 hectáreas de terreno y diez más por cada hijo mayor de 12 años o por cada agregado a la familia.

Art. 86. En los casos en que el jefe de familia haya muerto, se constituirá la propiedad en nombre de la primera mujer si hubiere tenido hijos y, en caso contrario, en la que le siga en antigüedad que los haya, debiendo entregársele la misma cantidad de terreno que habría correspondido a aquél.

Art. 87. Para los efectos de los artículos anteriores, el Presidente de la República ordenará que en un solo día, y dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de esta ley, se haga el empadronamiento general de los indígenas no radicados que existan en las provincias de Biobío, Malleco, Arauco, Cautín, Valdivia y Llanquihue, nombrando las comisiones necesarias y dividiendo el terreno en donde deban funcionar, en secciones que no bajen de 20.000 hectáreas, según son mayores o menores las agrupaciones de indígenas que en ellas se conozcan.

Art. 88. Las comisiones matriculadoras entregarán a cada indígena una boleta de matrícula que expresará la filiación y edad del jefe de familia, el nombre y edad de sus mujeres, el nombre, edad, sexo, de los hijos de cada una de éstas, y el nombre y edad, sexo y filiación de cada uno de los indígenas que, por parentesco menos inmediato, forman parte de la familia.

Las edades se computarán el día de la matrícula y, en caso de duda, serán apreciados por dos vecinos honorables que designará en cada caso la comisión matriculadora.

Esa computación servirá en adelante como certificado suficiente en todos los casos en que lo exija la ley civil.

Art. 89. Hecho el empadronamiento, se nombrarán comisiones de ingenieros de cada una de las cuales formará parte uno de los ingenieros de tierras y colonias, para que practiquen la mensura y subdivisión de los terrenos y entreguen a cada familia de indígenas su respectivo lote.

Art. 90. La copia del acta de entrega constituirá un título provisional, y el original será enviado al Presidente de la República para su aprobación.

El decreto aprobatorio servirá de autorización bastante al Inspector de Tierras y Colonización para hacer extender, ante el notario que corresponda, el título definitivo de propiedad.

Art. 91. Si al distribuir los lotes se notare que el terreno no alcanza para todas las familias ocupantes, se instalará a las que no puedan ser allí radicadas, en los terrenos fiscales que designare el Inspector General de Tierras y Colonización.

Art. 92. Los indígenas que, mediante falsas informaciones, pretendan adulterar la edad de sus hijos, aumentar su número, o con cualquier pretexto obtener mayor cantidad de terreno que el que les corresponda, como también los que, habiendo sido radicados, pretendan nuevamente obtener los terrenos que concede esta ley, y los que habiéndose desprendido de los terrenos que poseían intenten adquirir nuevos lotes, serán puestos a disposición de la justicia ordinaria para que los juzgue por tentativa de defraudación.

Art. 93. La propiedad se regirá por la ley civil una vez que termine el plazo fijado por la ley de 11 de enero de 1903. Mientras subsistiere dicho plazo, habrá tres abogados que con el nombre de "Protectores de Indígenas" asistirán gratuitamente a estos en el ejercicio y defensa de sus derechos y los representarán ante los tribunales de justicia.

Art. 94. Los hijos de indígenas que nacieren después de la promulgación de la presente ley, no se considerarán como legitimarios en los casos de sucesión sino cuando el nacimiento haya sido registrado ante el oficial civil respectivo. Y en los casos de sucesión por causa de muerte de ellos solo se consideran legítimos los hijos que sean habidos en el matrimonio contraído conforme a la ley.

Art. 95. Se autoriza al Presidente de la República para invertir hasta la suma de $100.000 en preparar el empadronamiento de los indígenas; pagar las comisiones matriculadoras y los demás gastos que exigiere la radicación de las familias.

Art. 96. Se autoriza al mismo magistrado para que indemnice a los indígenas que hubieren de mudar de residencia, el costo que ocasione el cambio de las habitaciones, no pudiendo exceder este de $50 por ruca.

Observaciones

Art. 85. Tal vez convendría que al agregado de la familia, siempre que fuera mayor de 20 años, pudiera entregársele la porción que le corresponde por separado.

Art. 86. Creo que lo justo sería, y así se evitarían dificultades y rencillas, que en caso de muerte del jefe de familia, cuando este tuviere varias mujeres, el terreno que habría de entregárseles se dividiera por igual entre cada una de ellas.

Art. 87. Por conveniencia pública es de desear que este artículo sea ley lo más pronto posible, pues, con el actual sistema de radicación de indígenas, no se concluirá sino en muchos años esta operación. Habrá radicados definitivamente, esto es, con título de merced, un poco más de la tercera parte de los indígenas y según cálculos que he hecho con el secretario de la Comisión Radicadora,

en cada título se ha gastado no menos de $1.500, suma en muchas ocasiones superior al valor del terreno adjudicado.

Art. 89. Al agregado de la familia a que se refiere el art. 85 podría entregársele su lote aparte cuando los ingenieros practiquen la mensura y subdivisión de los terrenos.

Convendría agregar que al practicar estas operaciones se fijaran deslindes de modo visible y claro, como está ordenado por la ley vigente sobre radicación (art. 5, inciso 2 y 7, número 7 de la ley de 4 de diciembre de 1866.)

Actualmente, a pesar de lo ordenado por la ley, se presentan numerosísimas y engorrosas dificultades sobre deslindes que dan lugar a intrincados debates judiciales.

Art. 90. Convendría, a mi ver, consultar en un inciso de este artículo o en disposición aparte la idea de que los indígenas que se creyeran perjudicados podrían, en un plazo perentorio, llevar sus reclamos ante el respectivo Protector, quien, calificándolos los trasmitiría al Inspector General y serían resueltos por el Presidente de la República en el decreto aprobatorio de que se habla. Se evitarían inconvenientes y tal vez abusos con esta precaución. Medida análoga contempla la Ley de Radicación vigente (art. 7, inciso 1 y art. 8 inciso 1 de la ley de 4 de diciembre de 1866.)

A fin de constituir pronto la propiedad indígena ¿no convendría fijar un plazo dentro del cual las comisiones de ingenieros practiquen la mensura y subdivisión de los terrenos de indígenas? Es de conveniencia pública la terminación de la constitución de esta propiedad.

Art. 91. ¿Dentro de qué límites del territorio de la República se hará la designación de terrenos fiscales de que se habla? ¿Podrían instalarse en Magallanes, por ejemplo, a los indígenas que no cupieren en el lugar que ocupan? La ley no distingue y convendría aclarar este punto.

Art. 93. Desde luego, hay que enmendar un pequeño error: la ley citada no es de 11 sino de 13 de enero de 1903.

Este artículo es uno de los más delicados de este título. En él se deja vigente la actual legislación sobre la propiedad indígena.

Como se sabe, la referida ley prorrogó por 10 años la de 11 de enero de 1893, que a su vez había prorrogado el art. 1 de la ley de 20 de enero de 1883, que fue dictada para regir durante ese plazo y que dispone que dentro de la zona indicada en el artículo 6 de la ley de 4 de Agosto de 1874, se prohíbe a los particulares, no solo la adquisición de terrenos de indígenas, sino las hipotecas, anticresis, arriendos o cualquier otro contrato, en virtud del cual pueda privar a los indígenas directa o indirectamente de su posesión o tenencia.

Se llegó a este extremo porque todas las medidas tomadas en el espacio de cerca de medio siglo para el resguardo de la propiedad indígena, íntimamente ligada a la fiscal, habían resultado ineficaces.

Las prohibiciones en vigor han sido beneficiosas a los indios y al Fisco porque han impedido a los particulares la apropiación fraudulenta de terrenos exclu-

sivamente de ellos o en que son comuneros con el Estado; pero han fracasado en gran parte, porque si los particulares no se han apropiado de derecho de estos suelos los han ocupado de hecho expulsando a los indios por mil medios vejatorios y maliciosos.

Esto último ha acontecido porque los que dictaron la ley prohibitiva no arbitraron un procedimiento adecuado y en correspondencia con su letra y espíritu. Tratándose de una ley sustantiva de carácter excepcional, lo lógico habría sido que la ley adjetiva revistiera el mismo carácter.

Hay necesidad de salvar el vacío que se nota, pues, de otro modo el artículo que me merece estas observaciones será letra muerta.

Con la experiencia recogida en más de cuatro años que sirvo el cargo de Protector de Indígenas, he llegado a la convicción que la manera de aplicar la ley de que se trata sería adoptando un procedimiento como el que paso a indicar.

Puesto en conocimiento de los protectores de indígenas que han sido ocupados por extraños terrenos pertenecientes a indios harían citar a los denunciados, y después de oírlos y cerciorarse por cualquier medio fehaciente de la realidad de la ocupación, ordenaría al ocupante que en un término prudencial desaloje la hijuela, y cumplido, pediría a la autoridad administrativa el auxilio de la fuerza pública para hacer efectivo lo resuelto. Se levantaría acta de lo obrado. El que se creyera perjudicado podría ocurrir a la justicia ordinaria, que fallaría el reclamo breve y sumariamente, oyendo al Protector, y dejaría sin efecto lo obrado solo en el caso de establecerse que el ocupante no lo era de terrenos de indígenas.

Hay hoy muchas dificultades para notificar judicialmente a los infractores de la ley prohibitiva, pues, como se practican a individuos que viven en los campos, se comete la diligencia al juez de distrito o de subdelegación más cercano, pero acontece que estos han autorizado la ocupación de terrenos de indios, los ocupan ellos mismos o sus amigos o piden a los indígenas una suma exorbitante por la diligencia y de este modo, no se practica la notificación. Para obviar tales dificultades, convendría establecer que dichas notificaciones serían llevadas a efecto por la fuerza pública.

Para facilitar la acción de los protectores, debería establecerse que cuando litigaren en defensa de los indios, emplearían papel común y no causarían ninguna clase de derechos. Esto está prescrito hoy por el artículo 10 de la ley de 4 de agosto de 1874.

Tengo todavía que hacer otras observaciones a este artículo.

Es necesario uniformar la condición legal de las tierras de indígenas, y con la disposición que estudio no se consigue esto.

Hoy hay una zona en que los indios pueden libremente celebrar toda clase de contratos sobre tierras, otra en que pueden hacerlo con ciertas restricciones y, finalmente, la señalada en el art. 6 de la ley de 4 de agosto de 1874 en que rigen las prohibiciones de que he hablado.

Semejante anomalía podría corregirse estableciéndose que los terrenos de indios situados en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco, Cautín, Valdivia, Llanquihue y Chiloé serían regidos por la ley de 13 de enero de 1903.

La aplicación de la ley prohibitiva ha provocado conflictos con la ley municipal que es oportuno salvar.

En un luminoso informe expedido por el abogado-jefe de la Sección de Defensa, don Ramón Briones Luco, acerca de este conflicto, llega después de detenido estudio, a las siguientes conclusiones:

> Los indígenas radicados deben pagar la contribución de haberes, porque la ley no los exceptúa; pero hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
>
> a) En la zona de prohibición de la ley de 1874 no pueden embargarse ni rematarse los terrenos de indígenas desde aquella fecha. Entre el río Paicaví y el Tirúa, en Cañete, pudieron rematarse desde 1875 a 1877;
> b) En las provincias situadas al sur de aquella zona no pueden efectuarse esos embargos y subastas desde 1893;
> c) En los departamentos situados al norte de la zona indicada pueden efectuarse dichos remates.
>
> Indudablemente, se preguntará el señor Inspector General, cómo se podría armonizar la extraña situación en que se encuentra el municipio, si, por una parte, está obligado el indígena a pagar la contribución y, por la otra, no puede procederse por el municipio a una ejecución nula ante la ley.
>
> Solo la ley puede entrar a resolver esta gran dificultad; convendría que la Inspección General sometiera, para el efecto, este asunto al elevado criterio y sabiduría del Gobierno.

Señalo por ahora esta dificultad; más adelante me permito proponer la manera de evitarla.

Paso ahora a un punto bastante difícil de la disposición en estudio: según este artículo, las prohibiciones contenidas en la ley de 13 de enero de 1903, expirarán el 13 de enero de 1913; y desde esa fecha la propiedad raíz indígena será regida por la legislación común. No creo prudente dar esa libertad y propondría se difiriera hasta el año 1920 a fin de que, si se acepta, se pudiera sin tropiezos desarrollar el plan de civilización de los indígenas que indicaré. Además, no sería conveniente otorgar de golpe esa libertad, que no es pedida por los indígenas, sino que sería necesario consultar análogas precauciones a las que tomó el decreto ley de 14 de marzo de 1853; pero refiriéndolas en absoluto a toda clase de contratos sobre tierras de indios.

Noto la falta de algunas disposiciones que completen este título.

Es necesario adoptar algún temperamento respecto de las comunidades que existen entre los indios que tienen título de merced.

Hasta hoy, la forma frecuente de radicar a los indios es adjudicando hijuelas en común, por reducciones, no por familias.

Estas comunidades las estoy dividiendo por un ingeniero que la Inspección se ha servido poner a las órdenes de la Oficina a mi cargo y concluyendo así con las dificultades de todo género que a diario surgen entre los comuneros; pero las operaciones que practica ese empleado no tienen fuerza legal, pues esas divisiones deben hacerse, según la ley vigente, por los encargados de la radicación de los indígenas y al tiempo de la radicación, como se desprende del art. 7 de la ley de 4 de diciembre de 1866.

Entonces, sería de desear que se agregara un artículo que dispusiera que las divisiones hechas en las radicaciones de indígenas radicados de orden del Protector y por medio del ingeniero de su dependencia, tendrán fuerza legal y que el acta que se levanta al efecto se agregará al título de merced y se inscribirá en el Registro Conservador de que habla el art. 5, inciso 2 de la ley de 4 de diciembre de 1866.

Otra cuestión. Hoy los indios tienen su Conservador de Bienes Raíces especial, que lo es el Secretario de la Comisión Radicadora, quien guarda en su poder todos sus títulos de propiedad.

¿A poder de quién pasarían estos títulos?

¿Sería esto indicado en la ley o en el decreto que dicte el Presidente de la República para su aplicación?

Respecto de la contribución municipal, me permito proponer lo siguiente que ya en otras ocasiones he propuesto: convertir la contribución municipal que grava los predios indígenas en fiscal y dedicar todo su producido a establecer escuelas entre los indios. Se conseguirían dos objetos con esta medida, pues se concluirían los abusos, sin cuenta que se cometen con motivo del cobro de la contribución, y el Estado proveería a la civilización de los indios, sin desembolso alguno de su parte.

El Presidente de la República dictaría los reglamentos del caso para determinar la forma en que se haría el cobro, lo referente al avalúo de las propiedades, etc.

Antes de concluir, me permito todavía hacer presente que tal vez sería necesario agregar una disposición en que se contemple la prohibición absoluta de vender alcohol en tierras de indios, tal como está establecido en el Canadá.

Tal es, señor Inspector General, la labor llevada a cabo por la Oficina a mi cargo el año próximo pasado y que someto a la consideración de Ud.

Saluda atentamente, a Ud.

Eulogio Robles Rodríguez

Temuco, 17 de mayo de 1905.

1905
EULOGIO ROBLES
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS[338]

Señor Inspector General:

Tengo el honor de elevar a usted la Memoria anual del servicio a mi cargo.

La labor de la Oficina puede apreciarse, en parte, por el movimiento que se detalla en la siguiente enumeración:

Oficios a la Inspección General	43
Informes a la Inspección General	53
Oficios a los gendarmes	166
Oficios a autoridades distintas	350
Oficios a jueces letrados	10
Oficios a Intendentes	13
Oficios a Gobernadores	145
Oficios a Promotores Fiscales	4
Oficios a la Comisión Radicadora	13
Oficios al Ministro de Colonización	2
Oficios a Alcaldes	4
Escritos al Juzgado	18
Oficios a Tesorerías Fiscales	3
Ordenes de partición y deslindes al Ingeniero de la Oficina	146
Total	970

He dado audiencia a los indígenas en Temuco los días en que las obligaciones de mi cargo no exigían mi presencia en otra parte.

Les he servido, como siempre, de árbitro en las dificultades que se promueven entre ellos, a fin de evitarles que ocurran a la justicia ordinaria patrocinados por tinterillos que los estafan.

Ha sido esta una de las labores más pesadas que han preocupado mi atención, por cuanto es difícil llegar con los indígenas a algún acuerdo cuando está de por medio lo que estiman su interés.

Me he visto obligado también a ir varias veces a Concepción para defender en segunda instancia los juicios que han sido fallados en primera.

[338] "Memoria del Protector de Indíjenas", en *Memoria de la Inspeccion Jeneral de Tierras i colonización, 1905* (Santiago, Imprenta Cervantes, 1906), pp. 152-164.

Debo advertir que en el Juzgado de Temuco obtuve el año pasado una sentencia que viene a sentar jurisprudencia en lo relativo a los medios legales que deben emplear las municipalidades para compeler a los indios morosos en el pago de las contribuciones de haberes que gravan sus hijuelas.

Habiéndose embargado un predio de un indio que no había enterado[339] la contribución referida y estando fijado el día para el remate, me hice parte y conseguí que se alzara el embargo y se anulara todo el procedimiento, por cuanto se declaró que las tierras de indios eran absolutamente inalienables.

Quedó resuelto implícitamente que solo se podría perseguir la contribución de haberes en los bienes muebles de los indios.

Creo de interés insertar las observaciones que me ha merecido un estudio detenido que he hecho al proyecto de ley y que lleva fecha 16 de agosto de 1905 y que se las envié a un honorable Senador miembro de la comisión que estudia ese proyecto.

He aquí dichas observaciones.

Observaciones al proyecto de ley sobre tierras fiscales, colonización e inmigración en el título que trata "de la constitución de la propiedad indígena

El proyecto de ley sobre Tierras Fiscales, Colonización e Inmigración que estudia una Comisión Mixta de Senadores y Diputados, fue elaborado por una Comisión compuesta por los señores Temístocles Urrutia, Inspector General de Tierras y Colonización; Alejandro Álvarez, Consultor Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores; Ramón Briones Luco e Isidoro Vásquez Grille, abogados de la Sección de Defensa Fiscal de la Inspección de Tierras y Colonización; Ricardo del Río, secretario de esa Inspección y Pedro Luis González, secretario de la Sociedad de Fomento Fabril. Fue presidida primero por el Ministro de Colonización, señor Luis Antonio Vergara, y después por el Ministro señor Agustín Edwards.

Esa Comisión tomó por base de sus trabajos el proyecto redactado por los señores José Francisco Vergara Donoso y Agustín Baeza Espiñeira.

La parte de este último proyecto que trata de la cuestión indígena tiene por rubro "De la Constitución de la Propiedad Indígena" y va inserta, con observaciones mías, en la Memoria del año pasado.

Antes de referirme en detalle a cada artículo del título que estudio, haré una observación general.

Todos estamos de acuerdo en que es necesario tratar de acelerar la civilización de nuestros aborígenes alcanzándose así la unidad de cultura entre los pobladores de nuestro país, y concluiríamos con las consecuencias derivadas de la situación de tener frente a frente dos razas, una civilizada y la otra a medio civilizar.

[339] = pagado.

No hay ni en el proyecto de los señores Vergara y Baeza ni en el de la Comisión indicada, ninguna disposición que envuelva la idea de civilizar a los araucanos.

Y es necesario advertir que alguna vez se preocuparon –platónicamente, es cierto, nuestros legisladores de mejorarles su situación.

Así, el senado-consulto de 1° de julio de 1813, entre diversas disposiciones tendentes a garantir el suelo ocupado por los indios y medidas encaminadas a civilizarlos, estableció que el sobrante de los terrenos destinados a formar pueblos de indios, se vendieran en pública subasta para fomentar su educación.

Todavía más: la ley de 2 de julio de 1852 que creó la provincia de Arauco dispuso en su artículo 3:

"Se autoriza a Presidente de la República para dictar las órdenes que juzgue convenientes para el mejor gobierno de la frontera, para la más eficaz protección de los indígenas, para *promover su civilización* y para arreglar los contratos y relaciones de comercio entre ellos".

El art. 5 de la misma estatuyó que esa autorización sería por el término de cuatro años y que en cada año se daría cuenta al Congreso de las disposiciones que se dictaran en virtud de ella *y se expedirán los fondos para los gastos que la ejecución de las providencias dictadas requieran.*

Sensible fue que el Presidente de la República no hiciera uso en bien de un considerable número de nuestros compatriotas, de la autorización tan amplia que le otorgaba el Poder Legislativo para promover su civilización.

Disposiciones análogas a las citadas hacen falta en el proyecto en estudio; pero en una disposición general se podría dar la fórmula a un artículo que contuviera esa idea, dejando al Presidente de la República campo para dictar reglamentos.

Aprovechemos la oportunidad que se nos ofrece para hacer algo en bien de una raza vigorosa, que por desidia se la tiene entregada al embrutecimiento por el alcohol y a la desesperación que engendra la vasta explotación de que es víctima.

Mi experiencia de cinco años que sirvo el cargo de protector de indígenas me ha llevado al convencimiento que ellos son susceptibles de civilizarse, que han progresado y que están fundiéndose en el resto de nuestros pobladores.

Conviene acelerar por medidas legislativas el proceso de esta fusión.

En una comunicación que envié el año pasado a las "Últimas Noticias" y que fue insertada en mi Memoria anterior, se estudia el problema de la civilización de los araucanos y queda, a mi entender, establecido, con datos abundantes, los progresos que han hecho y la posibilidad de mejorarles su estado, siempre que se adopten medidas con este objeto.

Debo dejar constancia que la mayoría de la Comisión que elaboró el proyecto desestimó mis observaciones porque opinó que las medidas que en ellas se insinuaban eran absolutamente excepcionales y que no guardaban armonía con nuestra legislación, sin fijarse que a una situación excepcional como lo es la de los indios, se impone también una legislación excepcional.

Entro ahora al estudio en detalle de cada artículo del proyecto.

Art. 46. Se considera indígena para los efectos de esta ley, a los aborígenes del territorio nacional que conserven el nombre, el idioma, la tradición y costumbres indígenas y que posean el suelo con ánimo de dominio y permanentemente.

No creo aceptable esta definición y la conceptúo injusta y peligrosa. Con la última frase se excluye a los indios de Magallanes y de la Tierra del Fuego; pero quedan incluidos los mapuches o araucanos y los indígenas que existen en la provincia de Tarapacá para quienes se ha indicado que es tiempo se le constituya a firme su propiedad. Estas dos razas tienen hábitos de vida sedentaria. Pero, aquí viene la injusticia de la definición: se niega los beneficios de esta ley a los indios de raza araucana y peruana que, mediante cualidades más felices, han conseguido civilizarse y han abandonado el idioma, tradición y costumbres de sus mayores; aunque posean el suelo con ánimo de señores. Como de los requisitos exigidos copulativamente para ser comprendidos en la definición, solo tienen el de poseer el suelo a firme y con ánimo de dominio, se sigue, de rigor, que quedan fuera de ella, y por lo tanto, sin derecho a ser radicados. En la actualidad, a pesar de que la ley no define la palabra indígena, no es difícil determinar quiénes lo son.

Art. 47. Cada miembro de familia indígena recibirá a título de donación, hasta cinco hectáreas de terreno en el lugar que ocupa.

El título correspondiente a los menores de edad, se otorgará, en representación del menor, al jefe de familia o la persona que haga sus veces.

Como antecedente hay que recordar lo dispuesto por los art. 3 y 4 del senadoconsulto de 1 de julio de 1823. El art. 3 referido dice: "Que lo actual poseído, según ley, por los indígenas, se les declara en perpetua y legal propiedad". El art. 4 ordenó que *las tierras sobrantes* se vendan por cuenta del Estado.

El inciso 2 del art. 6 de la ley de 4 de diciembre de 1866 dice:

"Se reputarán como *terrenos baldíos* y de consiguiente de propiedad del Estado, todos aquellos respecto de los cuales no se haya probado una posesión efectiva y continuada de un año por lo menos".

El número primero del art. 7 de la misma ley establece: 87, 88, 89 y 90 del proyecto primitivo y me refiero a las observaciones que de tales disposiciones he hecho (página 197 y 198 de la Memoria del año pasado.)

En este proyecto se suprimió el art. 91 del anterior que decía:

> "si al distribuir los lotes se notare que el terreno no alcanza para todas las familias ocupantes, se instalará a los que no puedan ser allí radicados en los terrenos fiscales que designe el Inspector General de Tierras y Colonización".

Es este un vacío, porque muchos indígenas a consecuencia de los remates, concesiones para colonización nacional, se les ha dejado en hijuelas reducidísimas, y es posible que muchos de ellos queden sin terrenos.

La legislación vigente contempla la situación de los indígenas que por no reunir los requisitos legales –posesión efectiva y continuada por más de un año– pueden quedar sin terreno y les da derecho a ser radicados como colonos nacionales. Así, el art. 8 de la ley de 4 de agosto de 1874 dice lo siguiente:

> "A los indígenas que no probaren la posesión a que se refieren los art. 6 y 7 de la ley de 4 de diciembre de 1866 se les considerará como colonos para el efecto de adjudicarles hijuelas, sin que por ello queden sujetos a las condiciones impuestas a los demás colonos".

> Art. 52. Después de expedido el título a que se refiere el artículo anterior, la propiedad indígena se regirá por las leyes comunes.

Corresponde al 93 del proyecto primitivo que dispone que la propiedad indígena será regida por la ley común una vez que termine el plazo fijado por la ley de 13 de enero de 1903.

Para los que ven las cosas desde lejos, y quieran resolverlas en teoría, este artículo es muy natural, pero el criterio tiene que modificarse, si se trata de resolver este asunto, con antecedentes dados por la experiencia.

Hay que ver cual es la situación especial de las tierras de indígenas. A estos se les radica en común, por reducciones, o conjunto de familias, y no por familias.

Una vez cambiado el actual régimen prohibitivo para disponer de sus bienes raíces por el de libertad, es imposible, o a lo menos, muy difícil, que la totalidad de los individuos de una reducción quiera vender la hijuela común. Por lo general, los araucanos son muy apegados a la tierra en que han nacido. Si se trata de venta, venderán dos o tres o diez individuos de la reducción y venderán la acción y derecho que tengan en su hijuela. Habrá que dividirla, y tendremos un pleito. En los antiguos títulos de merced, no se designaba nominativamente a todos los individuos que componían una reducción, sino que se decía que tenían derecho a la adjudicación, Fulano, casado, tiene tres hijos, sin designar el

nombre de la mujer o de los hijos, como sucede hoy, con menores probabilidades para suplantaciones. No faltará un tinterillo que aconseje a un indio cualquiera que haga rendir una información para probar que es él el hijo de Fulano o de Mengano, que no se designe con su nombre en tal título de merced. Y tenemos otro pleito. Podrían multiplicarse los ejemplos de litigios que se presentarán más tarde, y que hoy están detenidos a causa de la salvadora ley de 20 de enero de 1883, que fue dictada para regir diez años, pero que ha sido prorrogada por las leyes de 11 de enero de 1893 y 13 de enero de 1903. Los terrenos de los indios que se cree que bajo el régimen de libertad pasarían a manos más progresistas, pasarían a manos inescrupulosas y se convertirán en litigiosos. Los enredos legales serían interminables.

Además, hoy a los indios se les despoja de sus bienes muebles suponiéndoles créditos; mañana se les arrebatarán sus tierras por medio de ejecuciones comenzadas con los mismos créditos supuestos.

Tienen grandísimo interés comerciantes inescrupulosos y vecinos de la Frontera en que los indios puedan disponer de sus tierras porque les han hecho avances de mercadería o de dinero a interés usurario, y no les cobran en la actualidad esperando que la deuda suba a fin de poder, con escaso desembolso, hacerse de buenas tierras.

Pero se podrá argüir que el régimen prohibitivo no puede ser eterno y que alguna vez hay que dar a los indígenas la facultad de disponer sin restricciones de sus inmuebles. Nadie piensa que dicho régimen deba durar siempre; pero es necesario no pasar al extremo bruscamente, sin tomar precauciones.

Desde luego, como condición indispensable, hay que practicar la división de las hijuelas de indígenas radicados ya, a quienes la Comisión de Títulos de Merced las ha entregado en común. Esta operación la practico en la actualidad por medio de un ingeniero que la Inspección ha puesto a mis órdenes, pero estas operaciones no tienen fuerza legal y es necesario revestirla de ella.

Los indios, por consiguiente, no podrían vender terrenos, mientras vivan en comunidad; las ventas de acciones y derechos quedarían, en consecuencia, prohibidas.

Las ventas se harían de una determinada extensión de terreno, previa la identificación de la persona del vendedor hecha ante un Gobernador o ante el Protector de Indígenas.

¿Convendría hacer inembargables estas propiedades para frustrar las verdaderas estafas que se preparan para cuando los indígenas tengan la facultad de disponer libremente de ellas?

Hay que ver si esta medida es equitativa y de previsión.

Me refiero, por lo demás, a las observaciones al art. 91 del proyecto primitivo (página 198 de la Memoria citada).

Habría que tomar precauciones también respecto de las hipotecas, anticresis, arrendamientos, y demás contratos que tuvieren relación con los inmuebles indígenas.

> Art. 53 Los indígenas que no sepan leer y escribir no podrán enajenar ni gravar sus bienes raíces sin la intervención del Gobernador respectivo, con citación del Protector de Indígenas, quienes se cerciorarán si el indígena presta libremente su consentimiento.

No figura en el proyecto de los señores Vergara y Baeza. Análoga a esta es la disposición del decreto ley de 14 de marzo de 1853. Esta disposición está ligada con la solución que se dé a la anterior.

> Art. 54 Desde la promulgación de la presente ley, el estado civil de los indígenas se regirá por las leyes comunes.

El estado civil de los indios, pero solo para el efecto de gozar de los beneficios de la herencia, se rige hoy por el art. 9 de la ley de 4 de agosto de 1854 que establece que:

> "La posesión notoria del estado de padre, madre, marido, mujer o hijo, se tendrá como título bastante para constituir a favor de los indígenas los mismos derechos hereditarios que establecen las leyes comunes en favor de los padres, cónyuges o hijos legítimos".

Son regímenes opuestos, y hay necesidad de alguna prudencia para pasar del uno al otro.

> Art. 55 Habrá en los territorios de indígenas un Protector, quien tomará la representación de los indígenas en todos los casos que se ofrezcan, y litigará como pobre en su defensa.

Es más o menos la reproducción del art. 8 de la ley de 4 de diciembre de 1866 que establece que:

> En los territorios fronterizos de indígenas habrá un letrado con el título de Protector de Indígenas, el cual ejercerá las funciones que atribuye a Intendentes y Gobernadores el decreto de 14 de marzo de 1853 y representará los derechos de los indígenas en todas las circunstancias que se ofrezcan y especialmente en el deslinde de sus posesiones y en todos los contratos traslaticios de dominio.

A pesar de la claridad de esta disposición, la Corte de Concepción ha negado la personería al Protector para representar en segunda instancia a los indígenas; la ley dice: "que representará *sus derechos en todas las circunstancias que se ofrezcan*" *sin distinguir*, y siendo esto así, cabe esta representación tanto en primera como en segunda instancia.

Hablando con un ministro del Tribunal, me manifestó que no se había admitido mi representación, por cuanto la ley la refería nada más que a los negocios que se promovieran dentro del territorio indígena, y no fuera de él. Creo arbitraria semejante interpretación, pero como ha habido dudas acerca de su alcance, tal vez convendría prevenirlas.

Podría redactarse así:

"El Protector de Indígenas intervendrá en los actos administrativos de estos en que la ley autorice esta intervención, y los representará judicialmente tanto en primera como en segunda instancia, pudiendo delegar su representación".

En el proyecto en estudio se dice que el "Protector de Indígenas litigará como pobre" y según el art. 134 del Código de Procedimiento Civil, el que litigue con privilegio de pobreza podrá usar papel de menor valor ¿Para qué este gasto en una oficina pública?

El proyecto de los señores Vergara y Baeza consultaba[340] tres Protectores, porque se consideró que un solo funcionario no podría atender al servicio en la vasta zona de su jurisdicción.

Podría consultarse un Protector y agentes que obraran en su representación y bajo sus órdenes, distribuidos del modo que estimare conveniente.

Acompaño a ésta la Memoria del Ingeniero del Protectorado en que hay algunas observaciones dignas de tomarse en cuenta.

Al concluir, debo dejar constancia de las facilidades que Ud. me ha dispensado para el buen servicio de esta Oficina como asimismo de la equidad con que Ud. ha resuelto las dificultades diversas que con relación a los indígenas ha tenido Ud. que tomar conocimiento.

Saluda atentamente a Ud.

Eulogio Robles Rodríguez.

Santiago, 30 de abril de 1906.

[340] = establecía.

1906
EULOGIO ROBLES
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS[341]

Señor Inspector:

Creo que mi deber primordial como Protector de Indígenas en la presente oportunidad es insistir en que se considere con detenimiento la situación aflictiva de la raza araucana y que pida se acuda con las medidas necesarias que le pondrían fin.

Minuciosamente hasta llegar, por vía de ejemplo, a la cita de nombres propios, lugares y fechas, he puesto a la vista en mis anteriores Memorias y en otras comunicaciones, los atropellos y crímenes de que son víctimas los indígenas y debo manifestar con franqueza que abrigué más de una vez la creencia que las exposiciones contenidas en documentos oficiales emanados del funcionario a quien el Estado ha confiado su tuición inducirían a los Poderes Públicos a que echaran mano de algún arbitrio que hiciera cesar semejante estado de cosas; pero, desgraciadamente, en lo relativo a la adopción de medidas legislativas, protectoras de los indígenas, la situación es hoy la misma que la de hace siete años cuando me hice cargo de mi puesto.

De tiempo en tiempo se levantan en la prensa voces bien intencionadas para hablar de la desfavorable condición de los araucanos; pero, como quiera que los periodistas que se preocupan de ella se encuentran en medio distinto del que viven, lejos de la zona que pueblan o la conocen con la superficialidad del turista, atribuyen esa situación generalmente a su descuidada defensa, radicando en este detalle administrativo, que podría corregirse de una plumada, la causa única del mal.

Esas publicaciones se limitan a deplorar la condición desgraciada de los araucanos, pero no proponen medidas para cambiarla.

Me he de ver en la precisión de trascribir alguno de estos artículos, como no sea sino con el objeto de que otra pluma ponga de manifiesto la condición desventurada de los indígenas, ya que he sido tachado frecuentemente de recargarla con caracteres resaltantes. Y obedeciendo a este propósito, copio el editorial de *El Sur* de Concepción, correspondiente al siete de febrero del año

[341] "Memoria del Protectorado de Indíjenas", en *Memoria de la Inspeccion Jeneral de Tierras i colonización, 1906* (Santiago, Imprenta Nacional, 1907), pp. 100-115.

en curso, diario que, por lo general, trata de estos asuntos con conocimiento de causa y siempre con elevado criterio.

Lo reproducimos a continuación, a intento de lo dicho, bien que tengamos que hacerle algunos reparos:

Protección a los Araucanos

La ambición y la maldad han ido paso a paso empujando los últimos restos de la raza araucana hacia los vicios y hacia la más desesperante miseria, en tal forma que parece que no se deseara otra cosa que conseguir su completa extinción.

Los araucanos piden justicia contra los irritantes atropellos y vejámenes de que son víctimas, y no la encuentran. Se les despoja de sus tierras, se les incendian sus chozas, se les roban sus animales, se les trata como a bestias feroces, y los autores de tantos crímenes quedan impunes, gozando del fruto de sus vandálicas hazañas.

Oír el relato de la triste condición en que el araucano vive, causa espanto. No se concibe cómo ha podido sostenerse, impunemente, un estado de cosas semejante. Los infelices indios formulan sus protestas ante las autoridades y no se les responde más que con halagadoras promesas que jamás se cumplen.

Las leyes que se han dictado para ampararlos han quedado en el papel. La habilidad tinterillesca ha inventado mil argucias para burlarlas. Con el amparo de algunas autoridades inferiores se ha llegado a crear una situación que es una vergüenza para un país civilizado. Se les inventan crímenes que sirven de base a procesos calculados, expresamente, para hacerlos víctimas de alguna inicua exacción. El araucano que posee algunos bienes de fortuna está expuesto a los mayores peligros para su seguridad personal, la de su familia y la de lo que es dueño. Tarde o temprano llega la hora fatal en que ha de quedar sin recurso alguno.

Los confabulados, para poder ejercer su explotación, los acusan de ladrones, de asesinos, de holgazanes, de corrompidos, para mistificar la opinión pública y dar apariencias de justificación a los actos que en su contra ejecutan. Generalmente, los delitos vulgares los comete el indio impulsado por el hambre o la desesperación. Las injusticias de que es víctima y los atropellos que sufren hacen nacer en él hondos sentimientos de venganza y de exterminio que lo llevan a convertirse, inconscientemente, en enemigo de todo lo que no pertenece a su raza.

Los defectos de las leyes que prohíben la trasmisión de las propiedades raíces araucanas, han servido para que, innumerables usurpadores, se formen un título falso de dominio, que les da base para arrebatar sus derechos a los legítimos dueños y que sirve, especialmente, para entorpecer las acciones judiciales del Fisco mismo, que no ha querido o que no puede hacer justicia.

Una vez en posesión de una extensión determinada de terreno araucano los usurpadores se han apropiado de centenares de hectáreas adyacentes en las que ejercen dominio absoluto y que el Gobierno o sus legítimos sucesores no pueden recuperar. Los que han logrado una reivindicación la han alcanzado después de enormes esfuerzos, teniendo que luchar con toda clase de obstáculos, que los han encontrado hasta en las autoridades judiciales mismas.

Por estos medios y por cien otros, la raza araucana ha ido perdiendo sus tierras. Poco a poco se ha visto obligada a abandonar sus antiguos lares para confinarse en las selvas más incultas y apartadas. En los lugares relativamente centrales, donde se conserva en reducciones numerosas, vegeta en la mayor miseria y en la más completa ignorancia. Allí el Estado ha debido hacer toda clase de esfuerzos para instruirla y asimilarla a la raza del país; pero no lo ha hecho, o lo que ha hecho no ha producido resultados satisfactorios. El araucano ha continuado, generalmente, tan torpe, tan ignorante y tan inculto como antes. Su vida ha seguido siendo la de un paria.

Razones de humanidad, de justicia, de conveniencia pública y hasta de dignidad y decoro, aconsejan la adopción de las medidas necesarias que pongan término a estos hechos, que constituyen una verdadera ignominia, para conseguir que cese la tristísima condición en que se hallan los descendientes de los heroicos y esforzados aborígenes de nuestro pueblo.

En lo referente a que el araucano, como acaba de decirse, haya continuado tan torpe, tan ignorante y tan inculto como antes, hay palmaria inexactitud.

La raza mapuche –así afirman todos los que la conocen con detención– es dúctil e inteligente.

A ojos vistas se puede constatar su progreso comparando el estado que conocemos tenía en la época de la conquista con el actual, pues el indio no obstante su desventajosa situación, ha tomado de la raza civilizada en cuyo contacto vive, sus métodos en el cultivo del suelo y recolección del fruto, sus utensilios domésticos, su manera de preparar los alimentos, la práctica del comercio en pequeña escala y hasta, por lo general, su vestuario: los araucanos son como nuestros campesinos, con la diferencia de que sus trajes, cuando no los lleva iguales, son hechos por ellos mismos, desde la tela, fabricada con la lana de sus ovejas; de trabajar menos y de expresarse en el idioma mapuche, sin que por eso no haya, aproximadamente, un cuarenta por ciento que habla español.

No concurrimos con el redactor de *El Sur* en su modo de pensar al apreciar las leyes que reglan la propiedad inmueble de los indígenas, porque esas leyes, al prohibir todo contrato sobre esos bienes ha detenido su usurpación beneficiando también al Fisco, pues en las zonas habitadas por indios que aun no han sido radicados, la prohibición que ampara la posesión de su suelo, ampara al mismo tiempo la de su comunero, el Estado. Creo que grandes extensiones de terreno usurpadas por particulares podrían reivindicarse fácilmente invocando las leyes que prohíben la adquisición de tierras de indios.

Debo manifestar también que en la provincia de Cautín y en particular en el departamento de Temuco, a donde puede llegar constantemente y con eficacia la Oficina a mi cargo, no podría aplicarse con facilidad la pintura hecha en el editorial preinserto, salvando casos bochornosos que ocurren en algunos juzgados de menor cuantía, verdaderas máquinas de fraudes y robos con aspecto legal.

El remedio de la situación no sería otro que procurar que no hubiera indios, que no estuviera incrustada en nuestra población una raza que le es inferior en cultura; pero obvio es decir que el desaparecimiento de los indígenas no debería efectuarse como se está haciendo, arrebatándoles sus tierras, privándoles de sus cosechas por medio de tortuosos procedimientos judiciales o embruteciéndolo con el alcohol, mas antes, refundiendo la raza araucana en el núcleo civilizado de nuestro país. No es tarea de romanos alcanzar el ideal que se propone, porque esta raza ha hecho bastante camino en la evolución hacia él, y podría conseguirse prontamente dando facilidades para que los indígenas llevaran a sus hijos a las escuelas públicas de los centros urbanos creándoles internados en algunos de estos establecimientos en las provincias de Malleco y Cautín y en el departamento de Cañete y difundiendo la cultura en el corazón mismo de las reducciones.

Ya he indicado en otras memorias y en comunicaciones oficiales cómo se obtendría dinero sin gravamen del Fisco para este objeto, y señalado también el procedimiento que, a mi juicio, debería seguirse para conseguirlo.

Es sabido que a la enseñanza de los indígenas se ha hecho la objeción de haberse observado que los niños que han asistido a los establecimientos públicos de educación o a las escuelas de los misioneros al volver después a sus hogares, han quedado *tan indios como antes*, como si jamás hubiesen pasado por los colegios. Aunque esta observación no es tan exacta como se afirma, pues conocemos muchos indios que han abandonado abiertamente sus costumbres y que contribuyen con su esfuerzo a la elaboración del progreso común, habría una manera de evitar el mal que se nota, y es no dándoles aisladamente educación sino purificando el medio mismo en que viven llevándola hasta él.

Y no habría que vencerse resistencia alguna para que los araucanos recibiesen la cultura, pues ellos mismos la desean y la procuran.

Por instinto de conservación tratan de ilustrarse y, aun, para conseguirlo, hacen peticiones en este sentido a las autoridades.

Una demostración de las ansias de mejoramiento que sienten los araucanos, es la solicitud que elevaron el año próximo pasado centenares de caciques al Supremo Gobierno y sobre la cual recayó el siguiente informe de la Oficina a mi cargo.

Señor Inspector General de Tierras y Colonización:

Los indígenas Ambrosio Paillalef, Domingo Painevilu, Bernardo Aburto, Ambrosio Mariqueo y demás firmantes, caciques de las provincias de Cautín

y Valdivia piden que, al aprobarse el art. 47 del Proyecto de Ley de Colonización y Tierras Públicas, se tenga presente que la cabida de suelo que ese artículo fija a cada indígena es insuficiente y que debe ser aumentada por lo menos a diez hectáreas; que se mantenga la ley prohibitiva de 13 de enero de 1903; que para su más eficaz defensa se nombren otros protectores o se dé al infrascrito agentes que obren a sus órdenes; que el Protector presente al Gobierno una nómina de los indígenas que actualmente se encuentran perjudicados por particulares que se han aposentado en sus tierras o a quienes la cabida de suelo que se les ha adjudicado es insuficiente; que se convierta la contribución de haberes que pagan a los municipios en impuesto fiscal para que sea dedicado su producido a la educación primaria y laica indígena bajo el patronato del Estado, empleando, en cuanto sea posible, jóvenes araucanos que, por su conocimiento de la lengua araucana, sean capaces de enseñar a la actual juventud.

Respecto al primer punto, debo manifestar a Ud. que esta Oficina ha reclamado constantemente de la escasa extensión de suelo que se adjudica a los indígenas, por ser insuficiente para satisfacer sus necesidades, y respecto a la cantidad de cinco hectáreas que fija el Proyecto de Ley sobre Tierras Públicas e inmigración, pendiente ante el Soberano Congreso, la estimo exigua y, además, si se aprobara, vendría a dar efecto retroactivo a las leyes vigentes sobre tierras de indígenas, pues estas dan derecho al indio a toda la extensión que ocupan, y siendo esta extensión menos de cinco hectáreas, se les privaría del resto. Ojalá se tuviera presente esta observación en su oportunidad.

Las leyes que prohíben celebrar contrato sobre bienes raíces de indígenas han sido salvadoras de estos y han amparado los derechos del Estado vinculados a los de los indios en la zona en que estos no han sido radicados, en las que existe comunidad entre él y ellos.

Como este régimen es provisorio podría poco a poco ir preparándose a los indígenas para disponer de sus tierras: sería conveniente, entonces, se les diera facultad de arrendarlas con la intervención del protector, quien se cercioraría si lo arrendado pertenece al que arrienda, si el canon es justo y si se ha pagado o asegurado convenientemente el pago. Es de advertir que, a pesar de la prohibición de la ley, hoy se arrienda a los indígenas sus tierras, cometiéndose muchos abusos, tanto de parte de los arrendadores como de los arrendatarios. Si se levantara hoy la prohibición de hacer arrendamientos en los terrenos de indios y se diera intervención al Protector en los contratos respectivos se corregirían los abusos y se evitaría la diaria infracción de la ley.

La defensa de los indios es hoy muy deficiente, a causa de haberse nombrado solo en este año un protector para Valdivia y Llanquihue, provincias a donde no podía alcanzar legalmente la acción del infrascrito, por haberle señalado la ley un territorio cuyo límite sur es el río Toltén; y de tener que patrocinar a los naturales de las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y

Cautín, haciendo gestiones en los juzgados que existen en esta vasta zona, atender la segunda instancia y la casación, además de llevar las variadas funciones de carácter administrativo que le competen; lógica es, pues, la petición de los solicitantes, al exigir se dé al infrascrito agentes que obren bajo sus órdenes. Esto mismo viene solicitando la Oficina de mi cargo desde que comencé a servirla.

La formación de una lista de los indígenas a quienes actualmente se atropella por los particulares daría lugar a una seria investigación practicada en el terreno mismo acerca de los desmanes, tropelías y crímenes que se cometen con la raza araucana y se llamaría con ello la atención de los Poderes Públicos para que concurrieran con pronto remedio. No sería tarea esta que podría llevarse a cabo solamente por el infrascrito, como lo piden los solicitantes.

Esa investigación se extendería también a averiguar el por qué de la escasa adjudicación de tierras a los indígenas.

La conversión de la contribución municipal sobre haberes que pagan los indios en fiscal y su destino a crearles escuelas, es medida que también el infrascrito ha solicitado constantemente, pues con ello, además de concluirse los abusos que se perpetran en su percepción, se proveería a la civilización de los araucanos sin gravamen para el Estado y con fondos propios.

Esto es todo lo que por ahora puedo informar en la presente solicitud.

Victoria, 6 de agosto de 1906.

(Firmado).

Eulogio Robles Rodríguez.

Entre las manifestaciones de estas ansias de los indígenas por salir de su situación, debemos aludir a las publicaciones que han hecho en la prensa Francisco Zenon Melivilu y Manuel Manquilef en bien de su raza.

Sentimos no tener a la mano lo publicado por el primero, pero no está de más que advierta que ha ofrecido al Supremo Gobierno, por intermedio de la Asociación de Educación de Cautín, un retazo del terreno de su reserva, en Maquehue, centro de numerosa población *mapuche*, con el objeto de que se funde en él una escuela de agricultura con campo anexo de experimentación.

Me doy el placer de insertar un artículo publicado con fecha 23 de abril del presente año, por Manuel Manquilef, indígena que se ha titulado normalista en la Escuela de Preceptores de Chillán y que es hoy inspector y bibliotecario del liceo de esta ciudad.

Es el siguiente:

Araucanía

El autor de este artículo es un mapuche de pura sangre que ha logrado instruirse hasta obtener el título de profesor en la Escuela Normal de Chillán.

Hacemos con todo gusto esta publicación para que se vea bien lo infundado del prejuicio de que son víctimas numerosas personas, que niegan la capacidad evolutiva de la raza indígena.

Los bravos defensores de las tierras cuyo nombre encabeza estas líneas se encuentran hoy, sin excepción, en la mayor miseria, esperando tranquilamente que la muerte venga a dar fin a sus tristezas.

Algunos de mis lectores preguntarán, tal vez: ¿Por qué es esta situación desesperante de los araucanos?

Contestaré a ellos, y si no quedaren satisfechos estaré listo para probar lo que digo por medio de documentos que bien guardados tengo.

Al pobre araucano se le encuentra todavía usando su escasa y primitiva indumentaria a causa de que aun se halla en un estado semibárbaro.

¿Cómo lo sacaremos de aquí? Es una cosa fácil, muy fácil; solo algunos señores la encuentran difícil, pues les conviene mantener al infeliz indio en ese estado para explotarlo mejor.

Para sacar al desgraciado mapuche de la barbarie ¿qué costaría fundar escuelas en esos lugares más poblados por los aborígenes? Nos encontraríamos en peor situación si no fuera por las misiones, principalmente por la de los ingleses. La misión araucana, dirigida por el Rvdo. Carlos A. Sadleir, ha sacado de las selvas de Pelal y Maile, de las lomas de Maquehue y Ragñintuleufu, a miles de araucanos de ese estado bárbaro y miserable que nos han legado nuestros abuelos.

¿Y por qué no se dará más tierra a los indígenas? Este es el difícil problema algebraico que hasta ahora no se ha podido resolver por los encargados de buscar la solución, pues a ellos no les conviene, parece, entender ese difícil problema.

Casi todos aquellos no tienen donde trabajar, pues lo poco y nada de terreno que poseen apenas les alcanza para talaje de sus escasos animales y nada les queda para sembrar. ¿Qué hacer? Ya que arar no pueden, se tienden a cuidar sus animales y por eso se les encuentra ociosos, siendo por esto el objeto de admiración y burlas de muchas personas que se tienen por bien educadas. Nada digo de otros.

Hoy día es engañado el mapuche como un tonto: pues cada osado o inescrupuloso abusa a diario de la ignorancia de aquel infeliz, quitándole el fruto de su trabajo o parte de sus tierras. ¿Cómo salvaríamos a los indígenas de un engaño semejante? Del modo más sencillo: instruyéndoseles, para lo cual deben fundarse escuelas en las reducciones más pobladas.

Una inmensa mayoría de mapuches están sin título, porque desgraciadamente tienen en sus tierras un pedazo de montaña que ha llamado la atención de algún huaso rico, y éste, quizas con qué derecho, quita al pobre indígena su selva; privándolo así de todo lo que constituía su bienestar, su misma vida.

Ruego encarecidamente a los encargados de dar los títulos que lo hagan, si no tienen inconveniente, lo más pronto que puedan, para evitar que se concluya la raza que ha legado a los chilenos la pujanza y el valor de su alma grande y generosa.

Manuel Manquilef.

La circunstancia de estar pendiente hoy de la aprobación de las Cámaras un proyecto de ley sobre colonización y tierras públicas, se presenta la oportunidad de que se dicten medidas legislativas para mejorar la condición de los araucanos.

En la introducción a un estudio que hizo el infrascrito al título que en dicho proyecto se destina a la constitución de la propiedad indígena, expuso lo siguiente, que me permito copiar:

Todos estamos de acuerdo en que es necesario tratar de acelerar la civilización de nuestros aborígenes, con lo cual alcanzaríamos la unidad de cultura entre los pobladores de nuestro país y concluiríamos con las consecuencias derivadas de la situación de tener frente a frente dos razas: una civilizada y la otra a medio civilizar.

No hay en el proyecto actual ninguna disposición que envuelva la idea de civilizar a los araucanos.

Y es necesario advertir que alguna vez se preocuparon nuestros legisladores de mejorarles su situación.

Así, el senado-consulto de 1 de julio de 1813, entre diversas disposiciones tendentes a garantir el suelo ocupado por los indios, estableció que el sobrante de los terrenos destinados a formarles pueblo se vendiera en pública subasta para fomentar su educación.

Todavía más, la ley de 2 de julio de 1852, que creó la provincia de Arauco, dispuso en su art. 3 lo siguiente:

Se autoriza al Presidente de la República para dictar las órdenes que juzgue convenientes para el mejor gobierno de las fronteras, para la más eficaz protección de los indígenas, para *promover su civilización* y para arreglar los contratos y relaciones de comercio entre ellos.

El art. 5 de la misma ley estatuyó que esa autorización sería por el término de cuatro años y que en cada uno se daría cuenta al Congreso de las disposiciones que se dictaran y que *se expedirían* los fondos para los gastos que la *ejecución de las providencias dictadas requirieran.*

Sensible fue que el Presidente de la República no hiciera uso, en bien de un considerable número de nuestros compatriotas, de la autorización tan amplia que le otorgaba el Poder Legislativo.

Disposiciones análogas a las citadas hacen falta en el proyecto en estudio y ojalá se agregara algún artículo que contuviera una idea general sobre la materia, dejando al Presidente de la República campo para dictar reglamentos.

Aprovechemos la oportunidad que se nos ofrece para hacer algo en bien de una raza vigorosa que por desidia se la tiene entregada al embrutecimiento por el alcohol y a la desesperación que engendra la vasta explotación de que es víctima.

Mi experiencia de seis años que sirvo el cargo de Protector de Indígenas me ha llevado al convencimiento de que son susceptibles de civilizarse, que han progresado y se están refundiendo espontáneamente en el resto de nuestros pobladores.

Conviene acelerar con medidas legislativas el proceso de esta fusión.

Debo ahora dar cuenta de la labor de la Oficina a mi cargo durante el año próximo pasado y hacer presente los tropiezos encontrados en el servicio.

Han salido de ella, según consta de sus libros copiadores, mil doscientas cincuenta piezas, entre oficios dirigidos a los intendentes, gobernadores, promotores fiscales, municipios, comunicaciones e informes a esa Inspección, etc.

Me he trasladado, en comisión del servicio, a Mehuenco, Quepe, Freire, Lautaro, Quillen, Perquenco, Victoria, Nueva Imperial, Carahue, Collipulli, Renaico, Traiguén, Angol, Sauces, Purén y Los Ángeles.

He hecho también un viaje a Santiago a activar una apelación en el juicio seguido, a nombre de Juan Ailla Varela y Juan Rainado, contra Toribio Benavente, y he alegado en los estrados de la Corte de Concepción.

Solo en este departamento pude reclamar del avalúo de las propiedades indígenas afectas a la contribución de haberes, y que habían sido tasadas exorbitantemente. Me es satisfactorio expresar que en todos estos reclamos obtuve el éxito buscado.

La liquidación de las comunidades de indígenas radicados, que la practico por medio del ingeniero don Luis Conrady, ha demandado cada día mayor atención, porque la casi unanimidad de ellos desean tener su propiedad aparte, les repugna ya el régimen de comunidad, señal evidente de cultura. Con la división de estas propiedades se va concluyendo poco a poco el sinnúmero de rencillas y enredos que se suscitan entre comuneros sobre el mejor derecho al goce de este o de aquel pedazo de terreno. El reparto de estas comunidades entre los individuos que la componen, tiene grande importancia para la trasmisión de estos bienes cuando cese el imperio de las leyes prohibitivas que las rigen. El trabajo que tiene sobre sí el funcionario encargado de la distribución de los lotes que resultar de esta partición, es imponderablemente engorroso y difícil y solo puede llevarse a cabo de un modo satisfactorio, mediante la larga experiencia que ha adquirido en él. A pesar del laudable celo y actividad que el señor Conrady emplea en esta tarea, tiene sobre sí numerosas órdenes urgentes por cumplir. Y para poner el servicio al día sería conveniente que se destinara a esta Oficina otro ingeniero, pues estando a cargo de una sola persona, con las

nuevas solicitudes que se presentan continuamente, tendrá que ir atrasándose más y más.

En el anexo acompañado, que contiene la Memoria del ingeniero de esta Oficina, se podrá apreciar la labor que ha hecho.

Debo manifestar que me ha sido materialmente imposible, a causa del gran trabajo que sobre mí pesa, defender a los indígenas en los juzgados de menor cuantía, que es donde más se requiere mi intervención, pues en algunos de ellos se les estafa de un modo irritante.

El infrascrito para el desempeño de su puesto solo tuvo el año pasado un escribiente; el que no podía desamparar la Oficina para que le sirviera de agente en esos juzgados. Aprovecho la oportunidad de manifestar en esta ocasión lo que ya he hecho presente en reiteradas comunicaciones a esa Inspección y es que hasta la fecha no se me ha nombrado un empleado auxiliar, pues como Ud. sabe el que me servía de escribiente ha sido suprimido en el presupuesto de este año.

El servicio a mi cargo tendrá que resentirse notablemente por este motivo, sin culpa alguna del funcionario que lo asiste.

Ojalá se arbitrara alguna medida para evitar la verdadera descompaginación de este servicio.

Continuamente recibo del Ministerio del ramo y de esa Inspección órdenes para trasladarme a distintos puntos de la Frontera con el objeto de informar solicitudes de indígenas que llegan a esas oficinas, imponiéndome personalmente de los denuncios que se les hace y corrigiéndolos en cuanto me es posible.

Me veo en el duro caso de dejar constancia de que desde el mes de mayo del año pasado no se me abonan los gastos que de mi bolsillo he hecho en cumplimiento de estas comisiones, ni se me abonan los viáticos que he devengado con motivo de ellas.

Igual cosa acontece al ingeniero del Protectorado, a quien se le obliga a mantener mozos, cuyos sueldos se les cubre con notable atraso.

Me permito expresar que en tales circunstancias no se puede exigir se haga el servicio en forma correcta y prontamente.

Debo también manifestar que, a causa del exiguo sueldo que se paga al intérprete de la Oficina, treinta pesos mensuales, me voy a ver en la imposibilidad de encontrar quien sirva este empleo, porque la persona que lo desempeña me ha notificado que quiere dejarlo.

A pesar del empeño que he puesto en buscarle remplazante, no lo he hallado hasta la fecha, pues todas las personas a quienes he hablado me han dicho que no les conviene un destino con tan escasa remuneración.

He pedido en reiteradas ocasiones a esa Inspección se sirva recabar de quien corresponda se libere de porte telegráfico y postal las comunicaciones oficiales de esta Oficina, y la Inspección ha acogido favorablemente esta solicitud, poniéndola en conocimiento del Gobierno, pero solo se ha obtenido la liberación por telégrafo y se ha negado la del correo. No obstante, al señor Protector de

Indígena de Valdivia y Llanquihue se ha otorgado esta última franquicia, a pesar de no tener un radio de acción tan vasto como el de la Oficina a mi cargo.

Saluda atentamente a Ud.

Eulogio Robles Rodríguez.

1907
CARLOS G. IRRIBARRA
MEMORIA DEL PROTECTOR DE INDÍGENAS DE VALDIVIA Y LLANQUIHUE[342]

Señor Inspector:

Muchos fueron los factores que movieron al Supremo Gobierno a crear un Protectorado de Indígenas para las provincias de Valdivia y Llanquihue.

Si esta Oficina hubiera abierto sus puertas veinte años antes, de seguro que la situación en que se encuentran los indígenas de las provincias situadas al sur del río Toltén no sería tan extrema y los terrenos fiscales no habrían experimentado tan alarmante menoscabo.

Puede decirse que los particulares han entrado a saco en el territorio austral usurpándolo a la sombra de la más vergonzosa impunidad.

Se ha improvisado fundos cuyas cabidas fluctúan alrededor de 15, 20, 30 y 40.000 hectáreas.

La distancia enorme y la ausencia de vía rápida de comunicación con el centro y capital de la República favoreció en otro tiempo el apetito desordenado por las tierras.

Últimamente, la presencia del ferrocarril y la creación de la Ilustrísima Corte de Apelaciones con asiento en Valdivia, a la vez que dieron más importancia a esta región económicamente hablando, trajeron elementos de moralidad y cultura y, sobre todo, hicieron más eficaz la fiscalización sobre los servicios públicos, porque, salvo honrosas excepciones, los funcionarios dormían tranquilos autorizando así los medios más escandalosos empleados por los acaparadores de tierras fiscales y de indígenas.

Fue así como el Fisco ha perdido cientos de miles de hectáreas en las provincias australes y fue de este modo como casi se esquilmó a la raza araucana.

Duele dejar anotado aquí que en la adquisición de las tierras por los particulares, rarísimas veces ha presidido la honradez.

Muchos hay que han mirado y continúan mirando como un fenómeno natural y lógico la actuación de los usurpadores y de provecho para la civilización y progreso del país.

[342] "Memoria del Protector de Indijenas de Valdivia y Llanquihue", en *Memoria de la Inspeccion Jeneral de Colonizacion e inmigración, 1907* (Santiago, Imprenta y Encuadernacion Universitaria de S.A. García Valenzuela, 1908), pp. 211-267.

Es menester sacar las tierras de manos muertas, sostienen, trabajarlas, arrancarles el fruto y labrar sus maderas.

Prima facie se tiene razón, pero los procedimientos jamás se justifican, cuando más se explican.

Y, cosa singular, nadie ha querido exhibir los hechos desnudos de toda experiencia justificativa, ninguno ha abordado la cuestión con franqueza y sin egoísmo.

Toquemos la parte legal y moral, sin sentimentalismo; patriótica y económicamente.

En nombre de la civilización y progreso de la República unos pocos, sí, unos escogidos, han incendiado y dejado hogares huérfanos y sembrado lágrimas en terreno indígena. Por el bien del país, los mismos agraciados han arrebatado al Fisco el dominio de cientos de miles de hectáreas. ¿Para qué, acaso para trabajarlas? Simplemente para mantenerlas improductivas y esperar que mejores tiempos aconsejen enajenarlas por sumas pingües y después de lanzar bárbaramente a los que allí nacieron y crecieron.

¿Es esto legal, es siquiera moral?

¿Puede haber justificación en el acaparamiento de enormes extensiones de tierras por personas audaces y sin capital, incapaces de hacerlas producir?

Respondan las miles de miles de hectáreas usurpadas si alguna vez las ha tocado la planta del hombre, si las ha surcado el arado y si el fuego ha limpiado sus malezas (!).

Cabe preguntar ¿dónde está entonces la razón para usurpar, dónde la ventaja de desposeer al aborigen del suelo, dónde la conveniencia de privar al Fisco del dominio de tierras que divididas en pequeños lotes y vendidas en pública subasta darían múltiples resultados, entre ellos, dinero para las arcas fiscales y, como consecuencia, la división de la propiedad?

La agricultura hace crisis cuando la propiedad rural está en manos de unos pocos. Por muy inteligente y acaudalada que sea una persona, no podrá trabajar con beneficios para la agricultura en general, un predio cuya cabida no le permita una atención personal.

Tal vez sorprenda la afirmación de que casi la mitad del enorme departamento de Valdivia aparece en manos de unos cinco o seis.

Numerosas son las escrituras públicas con deslindes como éstos: Norte, un palo quemado; Sur, una quebrada en cuya parte más honda hay una piedra; Este, un estero sin nombre; Oeste, un roble marcado con una cruz y una O. Total de diez mil a veinte mil hectáreas (10.000 a 20.000 hectáreas).

La provincia de Valdivia en cuanto a la constitución de la propiedad no tiene par en el país: es un maremagnum.

Las víctimas de tan singular situación han sido el Fisco y los indígenas.

Preocupación del Supremo Gobierno es la defensa y protección de éstos; pero por desgracia esa defensa y protección dispensada con decretos y leyes bien intencionados nunca han hecho sentir alivio suficiente a los eternos perseguidos.

Los indígenas moradores de las provincias situadas al norte del río Toltén son y han sido felices.

La ley proteccionista de 4 de diciembre de 1866, aparte de los decretos que la precedieron, les dio un protector y disposiciones amparadoras de sus tierras; y casi las cuatro quintas partes de ellos están en posesión de un título de merced expedido por la Comisión Radicadora que los pone a cubierto de abusos y hace problemática la expoliación.

Los del sur permanecieron abandonados, condenados a vivir en lucha desigual con los particulares hasta el 11 de enero de 1893, fecha de la ley que hizo extensivas a las provincias de Valdivia, Llanquihue y Chiloé las prohibiciones que venían amparando a sus compañeros del norte.

A este abandono u olvido inexplicable para con los aborígenes de las provincias nombradas y a la casi ninguna diligencia de algunos defensores fiscales de tiempos idos, se debe en gran parte la babilonia en que viven en la región austral el Fisco, los indígenas y los particulares con relación a la propiedad.

Así se explica la dificultad que presenta en la zona sur la defensa de los intereses fiscales, indígenas y particulares.

Ahora ¿cómo se formó esta madeja y cómo evitar aumente el enredo? Se tratará de contestar estas proposiciones por su orden.

Se operó está confusión mediante el aislamiento en que hasta hace poco vivió esta región austral, circunstancia que debió aconsejar una legislación especial y transitoria para ella; la originó la poca vigilancia de algunos funcionarios públicos; el ningún valor de la propiedad en ese entonces; la ociosidad e ignorancia de los poseedores primitivos (aborígenes).

El aumento inusitado de la población de la República en el centro y norte hizo que afluyera al sur.

Se ocupó la tierra sin dificultad, se formaron nuevos pueblos y con ellos se improvisaron enormes predios rurales.

Vino la locomotora y pregonó con su silbato el aumento del valor de la propiedad.

Los particulares, hasta entonces modestos e inofensivos, se apresuraron a correr sus cercos, volteadas y líneas imaginarias, encerrando cabidas solo medidas por su ambición.

En su principio este ensanche no encontró tropiezos. El poseedor natural miraba el avance con indolencia salvaje, no adivinaba que se le iba invadiendo.

De este modo el ocupante llegado del centro o norte del país llegó a poseer por sí y para sí tierra fiscal y de indígena.

Contribuyó a facilitar el acaparamiento, como se dijo más arriba, la indiferencia de los indígenas.

Estos, poseedores como eran de grandes extensiones de tierras, flojos y sin ninguna cultura, se contentaban con mantenerse de lo que les producía un pequeño retazo que malamente cultivaban.

Como no trabajaban la tierra, se veían obligados año por año a ubicar sus siembras en diversos lugares y cada vez más apartados de sus rucas, la que jamás trasladaban por tradición.

Esta posesión tan extensa, sin acción actual, la vida agrícola tan rudimentaria que hacían, y lo montañoso del terreno, permitieron usurparles sus tierras con facilidad suma.

Estrechado ya, el indígena se hizo fuerte y entorpeció el avance aunque sin pararlo.

Mientras tanto el Fisco permanecía impasible. Puede decirse que fueron los aborígenes los únicos centinelas de sus derechos.

En este estado y a virtud de la débil resistencia al avance, se presentó el cuadro bien singular: el indígena paso a ser comunero con el *inofensivo* ocupante, convertido en usurpador después.

¿Y el Fisco? Está aun en espera de lo que arroje la liquidación, que solo en estos últimos tiempos se viene provocando con la constitución de los títulos particulares fundados en la prescripción adquisitiva, en la radicación de los indígenas y en sentencias judiciales en pleitos de sorpresas.

Lo que reste, desenredada la madeja, será fiscal.

¿Quedará algo? Depende del tiempo que aun dure el enredo.

Evitar que aumente el enredo es nuestra segunda proposición.

Que el Fisco no sabe lo que tiene es evidente, es claro como la luz meridiana y quien sabe si es hasta poco edificante.

Un ejemplo basta.

La Concesión Ortiz[343] quedó en el papel. Los encargados de tomar posesión hubieron de contentarse con dar un paseo por estas provincias, admirar su exuberante naturaleza; sus comunicaciones fluviales, sus caminos de hierro, sus abundantes bosques, sus industrias, sus pintorescos pueblos, etc.

Se hace preciso, pues, precipitar la liquidación.

Comenzar por acelerar la radicación de los indígenas es fuera de toda discusión. Radicados éstos, los terrenos sobrantes, si quedan, se entregarían inmediatamente a la colonización nacional y extranjera. En ningún caso dejarlos abandonados a los artistas de birlibirloque.

A falta de colonos interesados, se impone la creación de una policía especial de terrenos fiscales.

Postergar diez o más años la dación de títulos de merced a los indígenas importaría si no la extinción absoluta, a lo menos la dispersión inhumana, artificial y prematura de una raza más digna que lo que se cree.

Día por día irán aumentando las dificultades derivadas de la escasez de tierras, pues a la par que el terreno disminuye, los futuros radicados se multiplican.

[343] Concesión dada en 1905 a un tal Hernán Ortiz para instalar una planta de pulpa para papel, que por obstáculos que no se expresan, no se logró hacer. El titular de la concesión pidió prórroga años después, que no le fue concedida. Véase *Cuarta Memoria del Director de la Oficina de Mensura de Tierras al Ministerio de Colonización* (Santiago, Imprenta y Encuadernación Universitaria, 1911), pp. 77-78.

Como el único título que tienen es la posesión, la que de la noche a la mañana pierden, se impone afirmar esa posesión con el título de merced.

Pero aquí se presenta otro problema gravísimo si se considera que los susodichos títulos expedidos por la Comisión Radicadora a favor de los naturales de las provincias de Valdivia, Llanquihue y Chiloé van a ser materia de serias y muy vidriosas discusiones judiciales que han de gravitar hacia la nulidad de esos títulos.

Ya comienza a insinuarse la idea de desconocer como tales los títulos de merced conferidos a una veintena de moradores de la zona que nos viene ocupando: se negará a la comisión respectiva la legalidad de sus funciones.

Provocáronse resoluciones judiciales que en el mejor de los casos no tendrán fuerza sino para el caso en que actualmente se pronunciarán: habrá fuente inagotable de recursos dilatorios.

Se arguye, y creemos que con razón, sintiéndolo mucho, por supuesto, que la ley de 4 de diciembre de 1866 que creó la Comisión Radicadora fijó a esta como radio de acción los terrenos fronterizos, calidad que no tienen las tierras ubicadas al sur del río Toltén; y se agrega que la ley de 11 de enero de 1893 no hizo extensivas a estos últimos terrenos sino las prohibiciones.

Se comprende la trascendencia de semejante expectativa que se ofrecen a los que anhelan desde muchos años fundar su futura y relativa tranquilidad en la obra de aquella comisión.

El caso aun no se ha presentado, pero creemos que llegará, toda vez que los particulares apartarán de su camino aquellos títulos de dominio.

Se replicará ¿y la posesión no es título suficiente para ponerlos a cubierto de las usurpaciones?

Es esta una verdad inconcusa, pero en derecho. En el hecho no vale nada (precisamente porque es un hecho), no es arma de defensa cuando se desea desposeer a los infelices indígenas. La astucia marcha decidida y casi sin tropiezos a la consumación de sus planes, se apura, quiere abarcar todo lo que alcancen sus tentáculos, previendo la promulgación de leyes adversas.

Obsérvese la eficacia del doloso procedimiento que enseguida explicamos.

Ante todo, es necesario no olvidar que en las provincias australes el setenta por ciento (70%) de los pleitos versan sobre la posesión, pues es esta el título predominante. Esto está indicando que la propiedad aun no está constituida.

Son, precisamente, los interdictos con su inconsulta tramitación que les señala nuestro Código de Procedimiento Civil, las armas que con habilidad y éxito digno de otro orden de cosas se esgrimen con alarmante frecuencia para arrebatar y adueñarse de la tierra indígena.

Adelantemos algo; veamos cómo se insulta al derecho y se pisotea la justicia: relatemos cómo la iniquidad, la brutalidad, hacen tabla rasa de los sentimientos humanitarios, base fundamental de nuestra existencia y de nuestra relativa cultura.

Cuando alguien no ha podido desarraigar al indígena de su terruño, que es su vieja patria, con halagos ni amenazas, deduce en su contra un interdicto en solicitud de amparo, restitución, restablecimiento, etc.

Como la víctima escogida a su voracidad es casi siempre morador de sitios lejanos al asiento del juzgado, se encarga su notificación al juez de Subdelegación o de distrito (pintaremos a estos más adelante).

Practicada la notificación, el ignorante querellado o se queda tranquilo en su casa o se consulta con cualquier vecino.

Lo común es que lleguen al Protectorado después de seis o más días, por ignorancia a veces y por imposibilidad material otras. Más adelante se ampliará este punto.

Mientras tanto, la providencia del juez ordena a las partes concurrir a la audiencia del quinto día hábil después de la notificación, con sus medios de prueba, sin la advertencia de que querellante y querellado deben presentar lista de testigos antes de las doce del día anterior a la audiencia. (No criticamos la providencia).

El astuto, no, decimos mal, el malvado querellante rinde de este modo una *magnífica* prueba, sin fiscalización la que menos, y, finalmente, obtiene una sentencia que satisface sus propósitos.

Con este fallo, el audaz querellante realiza en seguida el más atrevido e inhumano lanzamiento del querellado, que solo entonces corre presuroso a dar cuenta al Protector.

¡Defecto tremendo, olvido horrible del legislador que no midió las consecuencias de esta terrible arma que colocó en manos de cobardes y criminales!

¡Cinco días de plazo para el querellado residente en el pueblo asiento del juzgado, *cinco* para el que mora en la espesura del bosque que crece al pie de nevadas cordilleras y *cinco* para los separados mil o más kilómetros!

Con el lanzamiento no terminan estos hombres fieras. Condenado en costas el querellado, se le ejecuta y se le embargan sus escasos animales.

Apena el alma oír a las desgraciadas víctimas de brutalidad semejante. Expulsados de sus tierras, sin elementos de trabajo, rodeados de sus hambrientas familias, hemos visto llegar hasta nuestra Oficina, a ancianos indígenas y humedecer con sus lágrimas nuestra mesa de trabajo.

¿Y el Protector, qué hace?

Este funcionario examina los autos y *sin sorpresa* concluye por cerciorarse de que no se ha infringido el Código de Procedimiento Civil (!).

¿Y la víctima? ¡Continúa protestando con dolor y salvaje impotencia contra su Protector que se niega redondamente a proveerlo de una orden de lanzamiento contra el *huinca*[344] que a su vez lo lanzó!

La ignorancia de los indígenas no les permite ser diligentes en sus defensas y las hacen fracasar.

Por muy buena voluntad y mucha diligencia que gaste el Protector tropieza a menudo con dificultades insubsanables.

[344] = chileno no indígena, colono nacional o extranjero.

Cuántas veces, parece increíble, oye a reclamantes que ignoran su propio nombre y apenas si conocen su *apodo* y se manifiestan incapaces de nombrar a cinco o seis personas en estado de abonarlos con sus testimonios en sus defensas.

Ha habido ocasiones en que han llegado con testigos diversos a los de la lista agregada a los autos, sin mencionar los que se presentan una vez expirado el término y tenido lugar la sesión de prueba.

Ellos creen solucionarlo todo con el Protector y con la explicación de que estuvo enfermo, de haber estado barbechando, de no estar la bestia en buen estado, de haber enviado un recado con un *quilla*[345], de haber hecho declarar a sus testigos ante un juez de Subdelegación o Distrito, etc.

Pudiera pensarse que el Protector no les da instrucciones en cada caso.

Acostumbramos a dárselas en castellano y en su *lengua* por medio del intérprete y muchas veces escritas.

Entonces, ¿cómo ocurren estos errores y omisiones tan graves?

Muy sencillo y muy explicable, dada la ninguna ilustración y la peculiar desconfianza en los extraños, proveniente de la eterna persecución en que han vivido.

Pocas veces aceptan las instrucciones del Protector sin beneficio de inventario. Salen de la Oficina y cuentan el motivo de sus trajines y las instrucciones recibidas al primero que se les insinúa en los alrededores del juzgado (suelen encontrarse con un espía o delegado ad hoc de su contendor).

Vienen los consejos hasta despertar desconfianza del Protector y junto con obtener este resultado pasan algunos facinerosos a ser el árbitro de la situación y del bolsillo de los infelices.

¡Cuántas veces hemos visto en las oficinas de los juzgados a indígenas entregados a la dirección de torpes tinterillos!

Terminado el pleito y solo en la hora de la desgracia o en la undécima llegan nuevamente al Protectorado.

Contamos por cientos en nuestra Oficina las solicitudes, en papel sellado o en simple, redactadas y suscritas a ruego por individuos que se ocupan de estafar unos cuantos pesos a los indígenas que concurren al Protectorado haciéndoles creer que deben presentarse por escrito.

Es fácil adivinar las proporciones de esta explotación ante los juzgados de mínima, menor y mayor cuantía.

Hemos tenido que arrojar uno por uno a los *agentes oficiosos y apoderados* que acompañaban a los reclamantes en las audiencias del Protectorado.

No es aventurado afirmar que el noventa por ciento (90%) de las solicitudes que llegan al Ministerio de Colonización sean obra de esos *compadecidos*.

La experiencia nos autoriza a creer que del diez por ciento (10%) restante hay solo seis con fundamentos atendibles y que las cuatro (4) que quedan son,

[345] Ngillañ = pariente, cuñado, o también amigo. Agradecemos al lingüista mapuche Gabriel Llanquinao esta información.

con raras excepciones, inspiradas por personas que buscan en el indígena al instrumento para alcanzar algo de la exclusiva conveniencia del inspirador.

Conviene llamar la atención a la letra y al estilo de esas numerosísimas presentaciones. A veces nos llegan cinco o más solicitudes diversas en petición de informes, que exhiben la misma letra y la misma reducción y firmadas a ruego por un mismo individuo. Idéntico se observa en las presentaciones al Protector.

Si se tuviera cuidado de examinarlas en sus detalles, se tendría el cuadro más decidor de que el ochenta por ciento (80%) de las de la provincia de Valdivia son siempre de puño y letra de las mismas cuatro personas.

Igual observación merecen las de Llanquihue.

Este dato demuestra que ellas se deben, en su mayor parte, a insinuaciones de terceros que explotan la ignorancia y el bolsillo.

Nos consta, por la confesión de los indígenas que estos han pagado hasta veinticinco pesos ($25) por una solicitud de protección en papel sellado presentada a esta Oficina.

Una continuada propaganda del Protector en contra de esas presentaciones inútiles ha venido concluyendo con ese negocio innoble.

Cerradas las puertas de esta Oficina a esos libelos, el tinterillaje continúa su comercio explotándolo con el envío de su *artículo* a las altas oficinas de la capital.

Así se explica esa cantidad enorme de peticiones de amparo, etcétera, que llegan a la Moneda sin haber pasado previamente por el Protectorado. De aquí la dificultad del Protector para informar con conocimiento de causa sobre ellas.

Es de este modo como las oficinas del Ministerio, Inspección de Colonización, Oficina de Mensura, Intendencia, Gobernaciones y Protectorados de Indígenas se ven atareadas con una labor inútil que absorbe el tiempo a asuntos urgentes y de preferente atención.

¿A qué conduce ese papeleo, ese cambio de notas etc., en estas oficinas públicas cuando las de arriba las envían en informe a las de abajo?

Sería más lógico que las solicitudes se hicieran a la oficina respectiva y su tramitación caminara de abajo para arriba, a excepción de las que denunciaran los abusos e incorrecciones de los empleados, las que se dirigirían al superior jerárquico.

Con un ejemplo queremos darnos a entender mejor.

Un indígena sufre los vejámenes y atropellos de un usurpador y su queja la eleva al Ministerio respectivo. Este pide informe al señor Inspector de Colonización, el que a su vez lo recaba del Protectorado.

¿Cómo procede el Protector? Registra sus libros y como no encuentra antecedentes llama al interesado, lo oye y lo somete a un interrogatorio para averiguar el grado de verdad de la queja, sin perjuicio de proporcionarse datos por otro conducto, y, con lo que arroja este sumario, instruido sin elemento alguno, evacúa su informe.

¿Cuánto tiempo ha trascurrido y a qué se ha avanzado en el intertanto? Uno o dos meses perdidos y la probable agravación de las dificultades que pudieron motivar el reclamo.

Diverso resultado daría una tramitación más en armonía con las exigencias del servicio, el que por su naturaleza debiera ser rápido, por tratarse de plazos judiciales o legales con frecuencia.

Obligado el indígena atropellado a llevar sus quejas a la Oficina del Protector antes que a ninguna otra, este funcionario procedería desde luego, inmediatamente, y en conformidad a sus atribuciones y obligaciones.

Es ya tiempo que la corruptela deje de tener fuerza de ley de procedimiento administrativo.

Pasar por sobre una Oficina cuando se trata de asuntos que la ley le encomendó conocer especialmente importa rodearla de desprestigio, matarle su autoridad moral, a la par que aumentarle inútilmente su labor.

Examínese donde está el fin práctico de las solicitudes de amparo etc., que, desentendiéndose del Protectorado, llevan los indígenas al Ministerio.

Si en esta alta repartición se proveyeran: "*Ocurra donde corresponda*" es seguro que en cortísimo tiempo desaparecerían esas montañas de papel formadas con las presentaciones atropelladoras de la Oficina llamada a conocer de ellas en primer lugar y se cegaría para siempre una fuente que explotan los tinterillos.

Con la adopción de este temperamento iría desapareciendo además, poco a poco, el espectáculo que anualmente dan con su visita grupos de araucanos en el palacio de la Moneda.

Empeñados como estamos en dar a conocer la verdadera situación de los araucanos, séanos permitido continuar como hasta aquí sin ambages ni reticencias. Pensamos que haríamos un flaco servicio al Congreso y al Ejecutivo si no le ofreciéramos en estas apuntaciones datos y pormenores que ojalá inspiraran leyes futuras.

Creemos que tanto a la gente honrada como al Fisco y a los indígenas interesa normalizar un estado de cosas que tiende a alejar la división y constitución de la propiedad en estas provincias australes.

Que venga la liquidación y con ella la tranquilidad para todos, especialmente para los indígenas.

Muchos hay que sostienen la necesidad de dejar sucumbir a estos pues es un fenómeno natural que en la lucha secular de la civilización contra la barbarie, debe sucumbir ésta: que se defiendan solos, no hay razón para ampararlos con leyes especiales.

Los que así piensan preconizan el derecho del más fuerte, divinizan la justicia por sí mismo, consagran el homicidio, el incendio etc., y olvidan que todos los pueblos cultos registran en sus códigos disposiciones protectoras de los que no disciernen.

La defensa de los indígenas se impone, es el complemento de su radicación.

A la sombra de leyes que hoy burla la malicia y que relativamente respetó la buena fe de mejores tiempos, se expolia y carnea a los reductos de una raza que con sus hazañas inspiró a Ercilla hasta el lirismo.

Ya hemos hablado de algunos abusos. Para patentizar más aun la situación extrema en que se hallan los aborígenes, se va a entrar en otros detalles de cuya veracidad se responde.

A los medios de adquirir el dominio y posesión que señala nuestro Código Civil, hay que agregar algunos de facilísimo y rápido resultado. Los más comunes y más inhumanos son:

Homicidio. Con mucha frecuencia la prensa del país registra en sus columnas asesinatos de indígenas cuyos autores, por motivos que no es dable apuntar aquí, quedan generalmente en la más absoluta impunidad.

Agotados los halagos y las amenazas, y en presencia de un indígena rebelde a toda componenda y a todo fraude, se impone el asesinato del porfiado y con su muerte viene la dispersión de sus herederos por el terror.

Así se ha logrado en ocasiones entrar en posesión y dominio de tierras que fueron defendidas mientras el puñal del asesino asalariado no terminó con el defensor de ellas.

Desaparecería este *medio de adquirir*, si en lugar del abandono del suelo que se sucede a la muerte del primitivo dueño, viniera la toma de posesión de parte del Fisco.

Los herederos de la víctima, si deja, tímidos e ignorantes, movidos solo por el instinto de su propia conservación, se conforman con señalar al victimario o al ciego instrumento de éste, cuando el trascurso del tiempo ha borrado las huellas del crimen o cuando han cesado para él las primeras e hipócritas dulzuras con que el asesino logra comprar el silencio.

Incendio. Algunos colindantes de indígenas, prevalidos de la indolencia de éstos, aprovechan circunstancias favorables para estrecharlos en sus posesiones corriendo paulatinamente los cercos o volteadas[346]. La protesta del ofendido viene siempre tarde, cuando ya el usurpador puede alegar posesión de más de un año, tranquila, pacífica y no interrumpida.

Es frecuente encontrar familias de indios habitando miserables rucas, defendidas por palizadas y rodeadas enteramente de plantíos y siembras de un audaz usurpador que ha llegado hasta el umbral de la puerta y se ha detenido aquí en espera de una ocasión propicia para incendiarlas.

Reducido a su simple habitación, sin una hectárea que cultivar, no emigra sino que sale por la mañana a trabajar para volver por la noche.

Esta débil y última resistencia concluye con el incendio, que dos criminales saben rodear con los caracteres de un caso fortuito. Lo demás viene naturalmente: se les impide reedificar, se barbecha el sitio que ocupaba la antigua *ruca*, se borran cercos y volteadas y se confunde todo en un mismo paño.

Es tan común el incendio que ha habido casos en que las llamas han devorado en un mismo día y en una extensión de cuarenta cuadras seis casas, dejando a la intemperie a treinta y seis personas entre ancianos, mujeres y niños.

[346] Las volteadas o cercos de volteada eran cercos naturales, hechos de árboles volteados.

Secuestros. Es este un medio eficacísimo cuando se persigue arrancar el consentimiento a un indígena para la realización de un acto cualquiera que afecte a su suelo.

No son raros los casos en que se han presentado al Protector de Valdivia indígenas que han recobrado su libertad después de bárbaros tormentos, exhibido las huellas infamantes y referido haber otorgado *un papel* ante cualquier mandoncillo regional y testigos.

Los libros de la Oficina registran en sus páginas muchos e inhumanos ejemplos.

Imputación de delitos. No todos los acaparadores de tierras han podido anular con violencias directas a sus poseedores primitivos. El carácter conservador del aborigen y algunas veces el espíritu de cuerpo, han servido de dique infranqueable a la ola invasora.

La reedificación de las *rucas* ha hecho más de una vez fracasar el incendio como *medio de adquirir.*

Pero la maldad siempre triunfa mediante una acusación en que aparece el indígena como el autor del hurto de un animal de propiedad de su perseguidor.

Testigos de *buena voluntad* establecen el hecho punible, se le reduce a prisión y se le conduce a ella con el cuero y osamenta que se afirma habérsele encontrado en su *ruca.*

Cuando el autor de esta original intriga es *humano*, habla a un tercero, quien, con su previo acuerdo, se ofrece como fiador de cárcel segura exigiendo al reo como precio de su servicio su contratación de inquilino durante un año o más en el fundo de su fiador.

El proceso se eterniza, duerme sin que nadie lo despierte intempestivamente y con esto se logra postergar cuanto se desea la vuelta del procesado a la posesión que se le arrebató de modo tan extraño.

Este punto da materia para muchas páginas negras.

Contratos. Resoluciones judiciales en el sentido de que los indígenas provistos de títulos inscritos pueden enajenar su suelo, cuando lo han adquirido con su peculio, han multiplicado los contratos.

La indiferencia culpable de algunos notarios y conservadores de la zona en que el Protectorado ejerce sus funciones y la ignorancia de los indígenas, han sido alicientes para conspirar contra los propietarios de éstos.

Con promesas y engaños hábilmente urdidos, se les conduce a la notaría donde se procede al otorgamiento de escrituras que los deja sin sus tierras.

Aparte de las suplantaciones de persona, conocemos escrituras públicas en que aparecen indígenas que nos consta que no hablan español y que, sin embargo, han vendido sin la presencia de un intérprete; hemos visto otras en las que los vendedores indígenas declaran previamente no tener la calidad de tales, no obstante de vestir a la usanza y no poseer del castellano sino esta frase: "*no ser indígena*".

El temor de extendernos demasiado no nos permite explayarnos como deseáramos. Con todo, veamos algunos casos.

Un indígena fue traído por un *timador* y conducido a una notaría donde otorgó una escritura de venta, creyendo otorgar un mandato como se le hizo creer.

Otro vino a Valdivia a cancelar una deuda y se encontraba en la plaza de la República en espera de su acreedor cuando se le presentó alguien que hacía tiempo lo perseguía, diciéndole que la Ilustrísima Corte había declarado que las *escrituras de los indígenas eran válidas* (textual) y que lo acompañara a la notaría donde le haría dar una copia del título de su fundo. El audaz se proponía arrancar una escritura de compraventa y se encontró con la negativa del notario.

No se detuvo aquí, se presentó al juzgado y en las gestiones para obtener declaración que obligara al notario a proceder, aparece el indio dando poder "*a ruego*". En este acto fue suplantado.

No pretendemos ser más papistas que el Papa: declaramos que algunos indígenas se dan cuenta cabal y exacta de sus actos y su concurrencia al otorgamiento de esos contratos es maliciosa. Esta no es la regla general.

Inquilinaje. La condición actual de los aborígenes y sobre todo su natural tendencia al ocio permite halagarlos con facilidad. Es malicioso y desconfiado mientras no mide las ventajas positivas y próximas del acto a que se le invita, pero se paralogiza en presencia de cualquier suma de dinero.

Así, cuando no se allana a vender o si las circunstancias no son propicias para burlarlo con el contrato de compraventa sorpresivo, se le hace caer con un convenio que, aparte de no prohibirlo la ley, es, al parecer, absolutamente inocente.

Con este contrato denominado *inquilinaje* (muy explotado) se proporcionan algunos *caballeros* un título que les entrega la posesión del indio. Por él se compromete este a servir como inquilino durante un año o más a un astuto vecino que tiene cuidado de especificar que el contratado servirá dentro de tales y cuales deslindes que para el objeto los fija comprensivos del terreno que trata de acaparar.

Expirado el término, el *patrón* se presenta al juzgado correspondiente, exhibe el contrato, desahucia, solicita y obtiene el lanzamiento de su *inquilino* detentador.

A las víctimas de este convenio se les coloca animales a talaje en su propio terreno, se les entrega una suma adelantada y se les encarga el cuidado de ellos.

Cobro ejecutivo de pesos ante los jueces de mínima y mayor cuantía. Por insinuación de terceros interesados o por verdadera necesidad, algunos indígenas suscriben (a ruego en su mayor número) pagarés a cortos plazos y por sumas que permitan su cobro ante los jueces de Distrito o de Subdelegación.

Trascurrido el plazo del mutuo[347], se exige su cancelación por la vía ejecutiva, formando el título con rebeldías acusadas.

Es llegado el caso de volver sobre los jueces de Distrito y de Subdelegación como hemos ofrecido anteriormente.

[347] = contrato por el cual se emite el pagaré.

El estado de atraso en que viven aun la mayor parte de los pueblos apartados de los centros relativamente cultos, y muy especialmente los de la región austral, la influencia incontestable de la política lugareña, que obliga a barnizar con cierta autoridad culturas agrestes que lo solicitan como aureola de respeto y baluarte de impunidad, todo esto excusa, hasta cierto punto, el nombramiento de personas desprovistas de toda delicadeza e ilustración para puestos de honor y responsabilidad.

Descartando honrosísimas excepciones, los jueces de Subdelegación y Distrito de las provincias australes, extralimitando sus atribuciones, han servido de viles y odiosos instrumentos a algunos usurpadores de suelo indígena o fiscal, como así mismo, explotado sus cargos en beneficio propio.

Conocemos jueces de Subdelegación que se han prestado villanamente a tramitar y fallar un juicio sobre desahucio de indígenas sin otra notificación a estos que la del auto que ordenaba el lanzamiento. Sabemos de otros que han mantenido indígenas secuestrados hasta arrancarles la promesa de no destruir una volteada que se deseaba mantener como deslinde. Por incidencia contaremos de un alcalde que, de acuerdo con el juez de Subdelegación, prestó la fuerza armada para obstruir la pasada de un puente a un grupo de indígenas que se dirigían a dar cuenta a nuestra Oficina de lo que les estaba ocurriendo. Hablaremos de otro que decretó para si y ejecutó personalmente un allanamiento de una casa de indígena y que después de trascurridos quince o más días de hecho el denuncio al juez del Crimen por esta Oficina, se presentó con un sumario instruido con posterioridad, pero retrotrayendo la fecha de la iniciación. Otro rompió cercos con sus propias manos y con su sola autoridad.

A los autores de estas pilatunadas[348] se les exhorta diariamente para la notificación de los infelices que persigue la malicia (!).

No es extraño, pues, que muchos desgraciados sean civilmente condenados sin noticias de la existencia de un proceso.

Menos es dudoso que simples pagarés o mutuos, como los que nos vienen ocupando, se vuelvan títulos ejecutivos a virtud de falsas rebeldías.

Continuando. Se traba embargo en el retazo de tierra o en una *acción* y *derecho*, se remata y se adjudica al ejecutante o a su palo blanco.

Tasador y receptor corren pareja con los jueces y es aplicable a aquellos lo expuesto respecto de estos.

Cuando el ejecutado logra darse cuenta del peligro que corre con esa inusitada ejecución, reúne el dinero y solicita de su acreedor la cancelación del documento; el acreedor lo evita, toda vez que ese no es su objetivo.

Como corolario citaremos un oficial del Registro Civil que estorbó hasta hace poco la legalización de los matrimonios entre indígenas a quienes exigía como precio de sus servicios en la Oficina ocho pesos y cuatro más por cada hijo nacido antes de la celebración del contrato matrimonial.

[348] = pillerías.

Juicios de partición. Pudiera pensarse que en estos no hubieran sorpresas de trascendencia y que no fueran *modos de adquirir* como los anteriores.

Sin embargo, han sido las particiones y siguen siendo, por aquí, medios eficacísimos para la apropiación fraudulenta de tierras de indígenas.

Generalmente los predios rurales nos presentan a los particulares en comunidad con los indios. Aunque muy de prisa, hemos tratado ya de cómo los *huincas*[349] llegaron a ser comuneros con los aborígenes.

Posteriormente, la entrada a la comunidad, base del *medio de adquirir* que nos ocupa, ha sido también fácil.

Del abandono o enajenación de una cuota en la comunidad, a favor de un tercero, nacieron los títulos de las acciones que los extraños han hecho valer para entrar en ella.

Cuando la violencia no ha podido llenar su propósito, la adquisición de esa cuota o *acción* y *derecho*, como impropiamente se la llama, lo ha consentido todo.

Ahora, como el adquirente de esa cuota o acción, se ubica, desde luego, donde mejor le cuadra, o cuando menos, en el sitio que poseía su vendedor, en ambos casos, ha podido poner en práctica sus fines perseguidos, la expansión.

Reunidas en sus manos la mayor parte de las acciones, mediante compras a precios irrisorios, y detenido en su avance por los últimos tercios, siente la necesidad de constituir un título y, al efecto, provoca el nombramiento de juez partidor en el mayor silencio posible.

Apoyándose en el art. 57 del Código de Procedimiento Civil, solicita y obtiene que la notificación de sus co-accionistas se practique por avisos en el Diario Oficial y órgano de publicidad del departamento. En este último, aparece el aviso en cuarta página, confundido con otros que por su naturaleza pasan desapercibidos.

La partición principia y continúa, pues, solo con los accionistas que se sirvió nombrar su provocador y algunos más que llegan a tener noticias de ella; otros no concurren por no darse cuenta de la trascendencia del acto y por creer en la imposibilidad de ser movidos de sus muy antiguas posesiones.

Llega el momento de nombrar perito tasador, mensurador e hijuelador. El nombrado procede y concluye con la presentación de su plano y la solicitud de su honorario, ¡y qué plano!

Hemos llegado al punto que lo sintetiza todo y hacia el cual convergen los abusos.

Mucho de lo dicho sobre los jueces de Subdelegación y de Distrito pudiera recordar y aplicarse a los peritos nombrados en las particiones.

Conocemos nombramientos recaídos en personas sin título profesional, en simples dibujantes cuyos honorarios han sido fijados por el juez partidor en la *modesta* suma de *sesenta centavos por hectárea*.

[349] = chileno no indígena, colono nacional o extranjero.

Se acuerdan estos enormes honorarios evitando lo sepan las víctimas señaladas para su cancelación, o cuando hay el convencimiento de que no se dan cuenta de lo que significa sesenta centavos por hectárea.

Nos imaginamos que esto es inexplicable si se considera que el más interesado en obstruir ese honorario es el que solicitó la partición, pues a él, como mayor accionista, toca casi su total cancelación.

No, señor, es este un error aunque muy fundado. Los únicos que pagan a sesenta centavos la hectárea son los infelices, son los poseedores primitivos, son los aborígenes.

Esta claro. Antes de la partición, su provocador ha escogido a su partidor y a su perito.

El escogido para partidor se presenta al juez letrado, le cuenta que se va a provocar una partición y que no habrá acuerdo en el nombramiento de compromisario.

Obtenida la palabra del Juez Letrado *por esta* o *por la otra razón*, y extendido el nombramiento a su favor, un nuevo desacuerdo de los accionistas permite al compromisario nombrado designar, por *esta* o por *la otra razón*, al perito.

Este, en reciprocidad, cobra a su verdadero pero indirecto proponente la tercera parte o nada de lo que le corresponde pagar como honorarios de perito, y consiente en suscribir un recibo (para la exportación se entiende) por el todo.

Con este recibo y a falta de pago de la parte de los demás inocentes accionistas, solicita el perito la formación de la hijuela pagadora[350] que, subastada, produzca para él y para el partidor.

La ubicación de hijuela da materia para muchas y extensas líneas. Baste decir que se escoge el terreno ocupado por los indígenas a quienes se ha desconocido expresamente sus derechos o a quienes no se ha tomado en cuenta por no haber sido partes en el juicio.

Se adjudica esta hijuela, rematada entre gallos y media noche, previo los avisos publicados en periódicos de escasa circulación, a un feliz mortal, escogido también, o a un palo blanco del promotor de esta comedia.

Con la terminación del juicio de compromiso llega el deseado título para el que tan hábilmente rompió la comunidad.

Numerosos son los indígenas que han sido lanzados de sus posesiones gracias a los juicios de partición.

No podemos ni debemos citar hechos concretos, pero séanos permitido contar que a los aborígenes de cierta zona les produce el más hondo terror el solo nombre de un obligado partidor de otros tiempos que con su actuación llevó la miseria a cien familias.

Sin exhumar podríamos decir barbaridades; pero queremos contentarnos con decir que es muy frecuente la concurrencia a nuestra Oficina de infelices que

[350] Hijuela reservada para cubrir deudas. Véase también la entrada Hijuela en el Glosario.

llevan la noticia de su lanzamiento como la primera tenida sobre una partición pasada ya en autoridad de cosa juzgada.

No exageramos, decimos la verdad, y en abono de que la decimos con altura de miras, dejamos con gusto constancia de que también ha habido y hay particiones correctas en las cuales han actuado y actúan honorables abogados y caballerosos peritos, como asimismo cumplidos accionistas. Valga esta misma salvedad para algunos jueces letrados en los nombramientos de partidores.

La natural indivisión de la propiedad, la ausencia de deslindes bien definidos, han permitido someter a juicios de partición enormes extensiones de tierra en la seguridad de que es difícil que haya alguien que tenga título para alegar dominio exclusivo sobre una parte o el todo. Agréguese a esto los planos esponjosos confeccionados a puro ojo por los mensuradores *escogidos*.

Es bien singular lo que ocurre en los reclamos de los indígenas cuando los reclamos se defienden con la exhibición de sus títulos. Interrogados sobre el motivo que han tenido para tratar de arrojar al indígena, o para entrar y tomar posesión del terreno de este, contestan con toda tranquilidad: "Tenemos títulos, hemos comprado antes de la ley prohibitiva".

Examinados esos títulos, resultan ser simples *acciones* y *derechos*, cuotas.

No es aventurado afirmar que el noventa por ciento (90 %) de las escrituras públicas versan sobre simples *acciones* y *derechos*. Estas han sido y siguen siendo los títulos que han servido y continúan sirviendo para *todo*.

Es oportuno contar que hemos tenido algunas ocasiones, en nuestra actuación como Protector, para cerciorarnos de que la multiplicación de los títulos de *acciones* y *derechos* no ha reconocido límite, lo que se comprende dado el natural proceso de la propiedad, entre otras razones.

Pero hay todavía una otra singularísima, y que ojalá su evidencia contribuya a alejar de una vez por todas las vacilaciones de nuestros legisladores para entrar de lleno al estudio y despacho de una ley que acelere la radicación de los indígenas y los ampare contra los avances de la maledicencia.

La comunidad en su origen estuvo holgada: pocos comuneros y mucho terreno. Más tarde, se invirtieron los factores y hoy la tenemos con poco terreno y muchos comuneros.

La multiplicación asombrosa de los comuneros multiplicó a su vez y en igual proporción la de las cuotas y trajo como consecuencia la depreciación de estas, circunstancia que hizo fácil adquirirlas.

Así se explica esa cantidad inmensa de títulos de simples cuotas o *acciones y derechos* que entorpecen la rápida y tan anhelada constitución de la propiedad en la provincia de Valdivia más que en ninguna otra; como también la confusión de particulares con indígenas en las comunidades y su rol en la división de estas.

Con la adquisición de una cuota insignificante vemos a diario a los *huincas* ser los factotum en las particiones.

A este estado de cosas contribuyó poderosamente el tupé con que algunos extraños a la comunidad vendieron cuotas de ella. Esta sorpresa ha salido a luz

solo cuando ha sido menester la confesión del entroncamiento o árbol genealógico.

Nace de estas observaciones la necesidad de vigilar en la provincia de Valdivia los juicios de compromisos y rodearlos de más seriedad y, si es posible, sacarlos del conocimiento de jueces especiales, a fin de que cesen de ser *modos de adquirir*, conforme a la clasificación que hemos hecho y cuyo estudio terminamos aquí.

No obstante, presumimos que aun no basta lo que dejamos relacionado para llegar al fin que nos hemos propuesto. Completar lo ya dicho sobre la defensa de los indígenas, exhibir la ineficacia de las leyes y sus actuales defectos e insinuar los remedios, son materia de las líneas que siguen.

Creemos oír: ¿cómo y con qué leyes se han protegido a los indígenas de la provincia de Cautín, Malleco, etc.?

Hemos afirmado y creemos haber demostrado que la provincia de Valdivia no tiene par en el país. Nuestra relación habla bien alto en el sentido de que las leyes llegaron tarde y que no dieron el resultado apetecido.

Fue en estado de pobreza suma, reducidos, puede decirse, a unas cuantas hectáreas, perseguidos hasta el último rincón del bosque, testigo mudo de sus salvajes penas, enervados por el alcohol, como encontró a los indígenas del sur del río Toltén la ley de 11 de enero de 1893.

Estimamos oportuno llamar la atención a un hecho que por sí solo nos lleva a la convicción de que la persecución de los indígenas de esta zona austral ha sido sistemática.

La ley de 11 de enero fue llamada a gritos y esperada con ansias por los interesados.

Sin embargo, los buenos servicios que esa ley ha podido prestar desde el día de su vigencia, por una aberración de la fortuna, han sido apenas insignificantes, comparados con los inmensos males que les produjo una fatal inadvertencia de los legisladores de entonces.

Hacer extensivas las prohibiciones de las leyes de 1874 y 1883 a las provincias de Valdivia, Llanquihue y Chiloé, fue materia de un proyecto que se discutió y se convirtió en ley con toda publicidad, como asimismo la fijación del día para su vigencia.

Esa discusión pública dio a estas, entonces aisladas provincias, la voz de alerta para montar la guardia y cargar, por última vez, con impunidad y furia salvajes contra los últimos tercios de una raza que se batía en retirada, llevando a cuestas solo los harapos de sus antiguos y celebrados triunfos.

Baste decir que durante el lapso de tiempo que medió entre la fecha en que fue estudiada la ley y el día inicial de su vigencia, 11 de enero de 1893, se extendieron en la Notaría de Valdivia muy cerca de *dos mil* escrituras que afectaban a las tierras de los indígenas.

Por la relación de algunos vecinos sabemos que quince y más amanuenses contratados exprofeso, trabajando hasta altas horas de la noche, apenas si daban

abasto a los numerosos y *urgidos* interesados que concurrían en solicitud de los servicios del notario.

Cientos de indígenas pululaban por los afueras de la oficina notarial, ávidos de sellar su futura desgracia, delirantes por cambiar su suelo por un plato de lentejas.

Felices y contentos, ebrios de alegría y alcohol, iban y venían, entraban y salían de tiendas, almacenes, restaurantes y figones[351] bien o mal gastando el *precio* de lo *vendido*.

¡Si pudiéramos penetrar en las profundidades de ese arcano y sorprenderle en sus misteriosos secretos! ¡Cómo reconstituir escenas que solo nos es dable imaginar!

Volviendo al camino por donde veníamos, abandonado en abono de nuestra orientación y fin, repetimos que la ley protectora de indígenas vino tarde a estas provincias, aunque no tan tarde para calificarla de absolutamente inútil, y si sus efectos no se hicieron sentir en más alto grado, se debió a que junto con ella no se creó su complemento: el Protector.

Trece años después de la ley de 11 de enero de 1893, se creó el Protectorado de Indígenas para las provincias de Valdivia y Llanquihue, que también fue solicitado a gritos y esperado con ansias.

La creación del Protectorado se debió a un clamor general del cual se hizo eco el doctor don Federico Puga Borne, como Ministro de Colonización.

Abiertas las puertas de la Oficina, ha sido visitada por numerosísimos indígenas trayendo los más espeluznantes y variados reclamos. Entraban y saludaban cariñosa y respetuosamente al Protector, celebraban gozosos que el "*señor Gobierno*" se haya acordado de ellos, exponían sus reclamos y terminaban solicitando *protección*.

Exhibamos al Protector en acción. Examinemos su labor, sus elementos, sus atribuciones y su prestigio.

Para ello haremos desfilar algunos reclamos, pues creemos que los hechos por si solos harán la fotografía exacta de la situación de los araucanos, y de la imposibilidad absoluta del Protector para ampararlos práctica y eficazmente.

Convencidos, como estamos, de que muy poquísimos de nuestros legisladores conocen de cerca las necesidades y exigencias actuales de la defensa de los indios, escribiremos con franqueza y hasta con indiscreción. Todo lo sacrificamos en interés del mejoramiento del servicio de una oficina que por su nombre debiera ser escudo defensor de los infelices para quienes fue creada.

Llevamos un libro foliado en el que, por orden estricto de fechas, se van anotando las solicitudes verbales y quejas de los que buscan nuestra protección; se llama "Reclamos"; en otro dejamos copia de las medidas adoptadas, el que también nos sirve para dejar copia de los informes, notas y demás piezas del

[351] = fondas, expendios de comida barata.

servicio, y en un tercero copiamos cartas y telegramas. La práctica nos aconsejó abrir un nuevo libro que hemos intitulado "Comparendos y Advenimientos" con el objeto que indica su nombre.

Presentemos una semana de labor, cuidando de no repetir quejas análogas ni idénticas, damos estas en extracto y en lo posible con los giros y fraseología de los reclamantes.

Lunes

N.º 1. El otro *día* llegó a mi casa don... acompañado de cuatro mozos armados y de a caballo, me *pegaron* (presenta contusiones y heridas leves) y me echaron con mi mujer y chiquillos y con mis trastes al camino público.

N.º 2. La semana *pasá* me sembraron un barbecho que hice con un tío mío e íbamos a sembrar en medias.

N.º 3. Cuando llegué de la cordillera a donde fui a traer unos animalitos encontré dentro de mi terreno una casa que había fabricado don... y en ella un inquilino de este. Mi familia que dejé se opuso, pero no le hicieron caso.

Martes

N.º 1. Me fueron a notificar y el juez de Subdelegación me entregó este papel (lo da al Protector). Me dijeron que aquí en Valdivia habíamos *perdido la sentencia*. Le pregunté a mi abogado (un tinterillo) y me dijo que no tuviera cuidado porque *iba pa la Corte*.

N.º 2. Nos contaron que don... había perdido el *reparto*. El alemán no ha tenido nunca ningún *pedazo* de *posesión* en el potrero de los naturales. No *querimo reparto* porque nos echan *pa fuera* después.

N.º 3. Los trabajadores de don... sacaron mi *voltiá pa* pasar una máquina que dejaron en mi montaña. Están cortando *reulí*. No me dejaron sacar *niun* palo. Yo vendía antes los trozos de *reulí* en la *sierra* de don...

Miércoles

N.º 1. Yo tenía un roce[352], como dos años que lo quemé y lo tenía *chapuado*[353] *pa'* echarle trigo y en la semana que pasó un colono le regó pasto porque no le quise vender el roce.

N.º 2. Vengo a acusar a... que me echa sus animales a mi trigo. Ayer le animé los perros a sus bueyes y me los mató con una *garabin*". Yo quiero que saquen esa crianza de mi siembra.

[352] = terreno desmalezado.

[353] Puede ser una transcripción aproximada de la forma verbal españolizada derivada de *chapüz* o *chupüd*, ambos vocablos referidos a la tierra de labranza. El sentido general es que tenía un terreno preparado para sembrar trigo. Agradecemos al lingüista mapuche Gabriel Llanquinao su orientación al respecto.

N.º 3. El sábado estaba barbechando un pedazo donde siempre *hai* sembrado; estaba con mi mujer y mi hijito más grande cuando llegó don... con cuatro más y nos dieron con garrotes por la cabeza y me mataron un buey con revólver. (La mujer exhibe tres heridas graves en la cabeza y el brazo izquierdo fracturado; y el marido varias contusiones y graves heridas en el cráneo.)

N.º 4. Yo quiero decirle a usted, *señorío*, que mi primo va a venderle *al alemán* y este nos dijo que nosotros también teníamos que venderle *por bien* y que mejor fuéramos amigos porque si no, me demandaba en Valdivia y me ponía preso. Mi primo no tiene parte, ha vendido como tres veces ya. Yo le dije que estaba prohibido a la *indígena (sic) vender*[354].

Jueves

N.º 1. Unos colonos me están cosechando mis manzanas, no me dejan recoger ninguna. El año pasado lo hicieron lo mismo. Se juntan muchos y me amenazan.

N.º 2. Desde la semana pasada que tienen encerrado a mi padre en casa de don... Se lo llevaron de noche con un soldado gendarme. Mi padre no quiso arrendarle la vega. No lo pudieron llevar a la buena a donde el Oficial Civil a hacer *un papel*.

N.º 3. Se me perdió una vaca y la busqué hasta que di con ella. La tenían amarrada y le habían puesto la marca de don... No me la quisieron entregar. Me dijeron que no era mía y que yo se la había robado y que si decía en Valdivia, me agarraban preso.

N.º 4. Unos caballeros de la Concesión... me dijeron que mi terreno se lo habían dado en Santiago a ellos y que mejor me saliera por bien. Yo no hice caso y unos gendarmes me avisaron que me iban a quemar mi *ruca* si no me iba. Yo no creí y una noche le allegaron fuego y alcancé a arrancar apenas con mi mujer y cinco chiquillos. Quise hacer la *ruca* de nuevo y no me dejaron.

Viernes

N.º 1. Cuando pasaron los ingenieros (Comisión Radicadora) nos dijeron que los *españoles* que estaban posesionados en nuestras reservas que nos entregaron, tenían que salirse y les dieron un mes de plazo. Estos colonos dicen que no se salen nunca aunque los maten. Fui a hablar a Temuco y me echaron *pacá*.

N.º 2. (Entre indígenas) Collimil está haciendo una casa en mi reserva, no quiere respetar la línea que le dieron los ingenieros. Dice que él ha sembrado siempre ahí y que no se sale. Yo reclamo por qué me dan terreno que está ocupado, y es cierto que Collimil siempre ha vivido en esa loma. Quiero que me den el terreno que tenía yo antes.

[354] Creemos que quiere decir que está prohibido a los indígenas ('indígena') vender.

N.º 3. Yo no quiero que me den tan poco terreno, no me alcanza para mi familia. Tengo siete hijos y dos mujeres. El colono del lado se ha *agarrado* lo mejor, dice que los ingenieros se lo dieron. No puedo tener animales como antes. Mejor no me dieran nada.

N.º 4. Hace tiempo me sacaron unos *pacos* de mi casa y me dejaron en el camino. Estos *pacos* los mandaba el juzgado de Subdelegación porque no quise salirme *a la buena*. Me quitaron una yegua, dos corderos y una vaca. Me dijeron que no me había tocado nada en el *reparto*. Estoy de *allegado* en la casa de un *quilla*[355].

Sábado

N.º 1. Un *huinca* está tapando el camino y barbechándolo. Con el cerco que está haciendo estamos encerrados. El camino lo *conocimos* más de treinta años, lo hizo el caciquillo Curipan y por él pasaban todos los mocetones del *finao caciquillo* y los que venían de los otros *potreros*. Todos los años este español se *agarra* terreno. Por él se ha ido *mucha indigená* para la Argentina.

N.º 2. Aquí le traigo este periódico (lo pasa al Protector). Dijeron que tiene un aviso que están *escriturando* mi terreno. Yo no he vendido nunca, es herencia. El que vendió fue otro que nunca ha sido de la familia. La indigená no puede vender *tierra*.

N.º 3. Don... me amenaza con hacerme matar como perro si vengo a Valdivia a contar a su *señorío* que me tienen *agarrao* como once cuadras con un cerco nuevo que hizo el año pasado. Dice que yo sea buen amigo. Me dio un caballo y seis pesos.

N.º 4. El juez de Distrito me notificó que el pleito lo había ganado el *alemán* y que él me había condenado a sacar mi *voltiá*[356]. Dos veces fui con mis testigos a hablar con el juez de Distrito y me dijo que no tuviera cuidado y que me fuera tranquilo. Yo le avisé al juzgado del pueblo y el juez me *retó*.

N.º 5. Me *voltiaron*[357] una casa, le pusieron una cadena y le amarraron dos yuntas de bueyes. El mismo mayordomo me dijo que había mandado el patrón don... Este *rico* me dio tablas y me dijo que hiciera mi casa cerca del monte. Me tiene *agarrao* casi todo mi terreno limpio.

Estos ejemplos extractados del libro respectivo no pintan sino a medias lo difícil de la audiencia y engorroso de la defensa.

Escribamos un reclamo completo, uno relativamente fácil. Interroguemos a un indio que posea el español.

–¿Cómo te llamas?
–José.

[355] Ngillañ = pariente, cuñado, o también amigo.
[356] = volteada; entiéndese cerco hecho con árboles tumbados.
[357] = tumbaron, echaron al suelo.

–¿Tu apellido?
–Epulef.
–¿Tienes padre?
–Si.
–¿Cómo se llama?
–José Antillanca.
–Entonces, ¿cómo dijiste que eras Epulef?
–Mi madre se llama Rosario Epulef.
–¿De modo que llevas el apellido de tu madre en lugar del de tu padre?
–Me dicen todos Epulef.
–Tu padre, ¿es casado con tu madre?
–Sí, a la usanza.
–¿Por qué no vino tu padre?
–Se fue para la Argentina.
–¿De dónde eres?
–De Loncoche.
–¿Vives en ese pueblo?
– No.
–Dime donde.
–Con mi madre, tres hermanos i...
–Te pregunto simplemente si vives en Loncoche o en el campo.
–Vivo en la posesión de mi padre que está en...
–¿Cómo se llama ese terreno?
–Pelepuye.
–¿Hay más indígenas ahí?
–Maipúe tiene naturales por dos lados, pero no son de mi familia.
–¿Qué es eso Maipúe?
–Bah, esa es la posesión donde vivo.
–Pero si acabas de decir que vives en Pelepuye.
–Es todo un mismo paño, todo se llama Pelepuye.
–¿De manera que Maipúe está dentro de los límites de Pelepuye?
–Cómo no, pué; Maipúe se llama el pedazo de mi padre.
–¿Desde cuándo vives allí?
–No tengo recuerdo.
–¿Hará más de un año?
–Yo nací en Maipúe.
–Bueno, ¿a qué vienes, qué deseas?
–Como me dijeron que el *señor Gobierno* había mandado a su *señorío pa* defender *a la indigená* y que...
–Dime luego, ¿a qué vienes?
–Le están quitando la posesión a mi madre.
–¿Quiénes?
–Mi madre no pudo venir porque es muy vieja y como...

–No me cuentes lo que no te pregunto, responde quien le quita terreno a tu madre.
–*El Alemán.*
–¿Cómo se llama?
–Donde sé decir el *apelativo*, cuando es tan rudo; le dicen el *Alemán Rico.*
–¿Tampoco sabes el nombre?
– Parece que algunos lo *mientan* Manuel, creo que Albran.
–Voi a preguntar a un natural (sale a la portería y vuelve con el dato qué recoge entre los que esperan audiencia).
–¿Dónde vive ese alemán?
–En su fundo que está ahí *mesmo.*
–¿Cómo ahí mismo, está vecino?
–Cerca, *pué.*
–¿Habrá una cuadra de Maipúe?
–Creo que sí.
–¿Habrán veinte cuadras?
–¡Eso debe ser!
–¿Pero sabrás el nombre del fundo del *Alemán*?
–Es Lliu.
–Cuéntame que es lo que ha hecho este alemán.
–Hizo *tira una voltiá* y vino a poner varones[358] cerca de la casa de nosotros; yo he sacado dos veces esos varones, pero ayer me *agarró* a *guascasos* y puso un cuidador.
–¿Cuanto tiempo que hizo ese cerco?
–*Cuantuá*[359].
–¿Hará un año?
–Después que mi *taita* se fue *pa lotro lao.*
–¿Cuando se fue tu padre para la Argentina?
–Hace tiempo ya.
–Yo necesito saber si hace más de un año o hace menos desde que el alemán entró en la posesión de ustedes.
–Fue después de la cosecha.
–Ahora me vas a decir los deslindes de Maipué; fíjate bien en este papel (se dibuja un pequeño croquis con los puntos cardinales). Oye, ¿quien vive al Norte?
–El alemán.
–¿Al Sur?
–Al Sur... Al Sur... Espérese... Espérese. Al Sur están los colonos, *pué.*
–¿Al Este, es decir, a la derecha.
–Los Huenchules.

[358] = deshizo el cerco hecho de árboles tumbados e hizo cerco nuevo con varas gruesas.
[359] Parece transcripción de "cuanto hará".

–Dime el nombre del que hace cabeza entre los Huenchules.
–Antonio.
–¿Al Oeste, o izquierda?
–A la izquierda están los naturales;
–Nómbramelos.
–Juan, José María, Pedro...
–Basta; nómbrame ahora seis personas que puedan venir a declarar al juzgado como que es verdad que el alemán, cuyo nombre te dijeron era... ha usurpado o entrado en la posesión de ustedes, construido un cerco y colocado un cuidador: y que sepan además que este alemán nunca ha poseído en Maipué sino en Lliu y que ustedes han poseído más de un año, tranquilamente y sin interrupción.
–¡Qué su *señorío*! Si este alemán *no nos deja tranquilos* desde hace mucho tiempo.
–Dame los nombres que te pido.
–Traeré a mi tío Pedro.
–No sirven tus parientes.
–Bueno, traeré a Nicolas Loncon.
–Otro.
–Juan Aucal.
–Otro.
– José Segundo.
–¿Y el apellido de éste?
–Le dicen *Chindo*.
–Continúa nombrando otros.
–Casi todos los *quilla*[360] saben que el terreno es de mi madre.
–Yo necesito me nombres tres más, a lo menos.
–¿Qué no sirven los que le nombré ya?
–Son pocos dos.
–Pero si le dije tres.
–José Segundo no sirve, nombra otros.
–¿Por qué no?
–Ya te he dicho que nombres otros.
–Clemente Coipayante.
–Otro.
–Juan Epuyao.
–Otro.
–No sé ninguno más.
–¿Todos los que nombraste trabajan en el campo?
–Sí.

[360] Ngillañ = pariente, cuñado, o también amigo.

–Te quiero decir si son agricultores. ¿Dónde viven estos testigos?
–En el campo.
–Loncon, ¿dónde vive?
–En Futa Mapu.
–¿Aucal?
–En Padagua.
–¿Y los otros?
–En Pelepuye todos.
–Fíjate mucho en lo que te voy a encargar.
–Bueno, *señorío.*
–Irás, desde el martes adelante a saber todos los días a donde el Juez de Subdelegación, a preguntarle el día que notificará al alemán y, cuando lo notifique traerás a Valdivia tus testigos que has nombrado de modo que están aquí en la mañana del quinto día después de la notificación. Mejor sería que llegaran un día antes.
–Aucal no va a querer venir.
–¿Por qué?
–Se está muriendo de *enfermedad.*
–Trae los demás.
–Mire su *señorío*, ¿por qué no me da una orden mejor *pa* romper el cerco al alemán?
–No se puede, vete y no olvides lo que te he dicho.

Con estos datos salidos de boca de un ignorante, procedemos a redactar el respectivo interdicto y, obtenida la providencia y despachado el exhorto, quedamos entregados a la buena fe y diligencia de un Juez de Subdelegación a quienes hemos solicitado se exhorte para la notificación (!).

Pensemos ahora que hay meses, de septiembre a enero inclusive, en que se oyen hasta diez y quince reclamos como estos por día; imaginémonos ver al Protector redactando, no queremos diez o quince demandas judiciales cada día, sino cuatro, y durante solo seis meses del año. Total, descartando los domingos; *seiscientas veinticuatro demandas* (624) anuales.

Piénsese, ahora, en que cada reclamante ocupa, como término medio, treinta minutos de la audiencia diaria. Muchísimos absorben hasta una hora y media.

Preguntamos: ¿Y los comparendos, las sesiones de prueba, los alegatos, en una palabra, la tramitación misma de los seiscientos veinticuatro pleitos iniciados?

Hasta aquí hemos mostrado al Protector atacando, tomando la ofensiva. Es menester agregar entonces que la defensa de los indígenas atacados judicialmente por terceros, aumenta considerablemente su labor.

Pero hay más: los informes que debe evacuar en solicitudes que vienen del Ministerio y de la Inspección de Colonización, el papeleo con la Comisión Radicadora, las Intendencias y Gobernaciones, etc.

Todavía queda algo: el Protector tiene obligación de defender y representar a los indígenas en cuatro juzgados de letras de cuatro distintos departamentos.

Hemos visto la labor que corresponde al Protector y que tiene la obligación de llenar.

Pasemos a estudiar sus atribuciones.

Hoy por hoy, el Protectorado no es otra cosa, ni más ni menos, que el bufete de un abogado a quien el Fisco paga un honorario anual para atender a más de *cuarenta mil* (40.000) indígenas cada vez que estos necesiten sus servicios *profesionales*. Esto mismo hacen los bancos, compañías de seguros, casas fuertes de comercio, etc.

La palabra Protector no tiene otro fundamento hoy que ser el *título* que le dio la ley de 4 de diciembre de 1866, en su art. 8, inciso 1.

La disposición antes citada dice:

> En los territorios fronterizos de indígenas habrá un letrado con el título de Protector de Indígenas, el cual ejercerá las funciones que atribuye al Intendente y Gobernadores el decreto de 14 de marzo de 1853, y *representará los derechos de los indígenas en toda circunstancia que se ofrezca, y especialmente en el deslinde de sus posesiones* y en todos los contratos traslaticios de dominio.
>
> Será también de su obligación, defender y agitar la resolución definitiva *de las cuestiones pendientes sobre validez o nulidad* de los contratos de venta o arriendo de terrenos indígenas efectuados con anterioridad a esta ley.

La ley de 4 de agosto de 1874, la de 20 de enero de 1883, con sus disposiciones prohibitivas y sobre todo, nuestro Código Civil, derogaron el Decreto Supremo con fuerza de ley de 14 de marzo de 1853, reduciendo en consecuencia el papel del Protector, a lo único que quedó vigente del inciso 1 del trascrito art. 8 de la ley del 66 cuya parte hemos subrayado, esto es, *representará los derechos*, etc.

Respecto del inciso 2, creemos que jamás ha tenido aplicación en las provincias de Valdivia y Llanquihue, a donde llegó el Protector después de trece años de haberse hecho extensivas a ellas las prohibiciones sobre tierras de indígenas, 1893-1906.

En cuanto a nosotros, declaramos que desde la fundación del Protectorado no hemos tenido ocasión de conocer "*cuestiones pendientes sobre validez o nulidad de los contratos de ventas*" de fecha anterior a 1893.

Despojado, pues, el Protector de las *atribuciones* que le daba el decreto de 1853 incluido en el art. 8 de la ley del 66 (intervenir en las ventas etc.), quedó hasta hoy solo con *obligaciones*.

Sin embargo de lo dispuesto en el inciso 1 del art. 8, tantas veces citado, en su parte vigente, al Protector de Valdivia y Llanquihue no se le reconoce su personería, y se le ha sometido a discusión y se le continuará discutiendo como recurso dilatorio.

Se ha argüido por los litigantes, de buena o mala fe, que el Protector de Valdivia y Llanquihue no tiene existencia legal, puesto que la ley que creó el empleo estableció que este sería uno solo y que residiría en los territorios fronterizos.

Este funcionario existe y reside en Temuco. No hay ley alguna que cree otro Protector para Valdivia y Llanquihue. El Protector de Temuco no puede tener la representación de los Indígenas de Valdivia y Llanquihue, porque estas provincias no son territorios fronterizos.

Refiriéndose a nosotros agregan:

> "El Supremo Gobierno ha querido facilitar a los indios de Valdivia sus defensas en juicio y ha designado un abogado que los atienda y los sirva gratuitamente; pero el Gobierno no le ha dado, porque no podía ni tenía derecho a daría, la *representación* de los indios".

Los señores jueces letrados de Valdivia y La Unión piensan lo mismo. El primero desconoció la personería a solicitud de parte, en juicio contradictorio; y el segundo, de oficio e implícitamente, ordenándonos reemplazar el papel simple por sellado. El señor juez de Osorno nos la ha aceptado.

La Iltma. Corte aun no ha conocido ni pronunciádose sobre la materia en grado de apelación; pero nos ha reconocido explícitamente nuestra personería cuando nos hemos hecho parte por los indígenas sin previo mandato de éstos.

Es oportuno dejar constancia de que este alto tribunal no ha estado indiferente a la suerte de los indígenas. En ausencia de disposición legal en qué apoyarse, ha conseguido, solo a virtud de la atmósfera de respeto de que lo ha rodeado su imparcialidad y honradez en sus fallos, imponer, sin protestas de nadie, de oficio o a petición de parte, un trámite que permite al Protector conocer los autos en que tengan interés los indígenas: "*Póngase en conocimiento del Protector de Indígenas para los fines a que haya lugar*".

Desconocida nuestra personería, se nos obliga a exhibir poder de los indígenas en cada caso, lo que, aparte de dificultar la defensa, hace perder el derecho de litigar como pobre, franquicia acordada en el art. 10 de la ley de 1874.

Terminado el estudio de las atribuciones del Protector, continuamos con sus elementos.

Este funcionario, digámoslo claro, no cuenta con medio alguno, pero absolutamente ninguno, entiéndase bien, para llenar su cometido.

Cualquier abogado, cualquier tinterillo a quien se encomienda la defensa de intereses particulares, está colocado, respecto al Protector, en situación ventajosísima.

Su clientela es reducida, o al menos regulada, nunca exagerada; es relativamente culta y como tal proporciona: exposición clara, metódica, precisa, verdadera o verídica de los hechos; documentación ordenada y pertinente; testimonios ilustrados o fáciles de ilustrar; atención, cuidado y conocimiento diario de las actuaciones; fidelidad, confianza y rapidez en la ejecución de las instruc-

ciones que recibe; hombría y resolución cuando las circunstancias lo exigen; dinero que proporciona atenciones, simpatías y afectos.

El Protector, por el contrario: clientela numerosísima, increíble, inverosímil a la par que ignorante; exposición larga, pesada, vaga, confusa y en ocasiones falsa de los hechos; ausencia absoluta de documentación o existencia de una embrollada, impertinente o sin valor legal; testigos agrestes, indolentes, tímidos, vacilantes, influenciables y desleales; olvido, indiferencia y abandono de las actuaciones diarias; alteración, desconfianza, pesadez y dificultad en la ejecución de las instrucciones que se le dan; cobardías, infidelidad y componendas en situaciones agudas; pobreza o miseria que alejan comedimientos.

He ahí las diferencias entre el abogado particular y el defensor fiscal.

Reducido el Protector al papel de un simple abogado con cuarenta mil (40.000) clientes con derecho a exigir sus servicios, y con los antecedentes que hemos exhibido, ¿habrá alguien que piense en la posibilidad de su acción inmediata, rápida y eficaz? ¿Cabe imaginar mil y más defensas dirigidas y tramitadas personalmente por un solo hombre en cuatro distintos juzgados de diversos departamentos?

Por eso hemos dicho más atrás que los hechos por sí solos pintarían la situación de los araucanos y la imposibilidad absoluta del Protector para ampararlos; por eso, dijimos, imaginémonos al Protector redactando, no queremos diez o quince demandas judiciales cada día sino cuatro, y durante solo seis meses del año. Total: seiscientas veinticuatro (624) demandas anuales.

¿De manera que el Protector de Valdivia y Llanquihue no ha hecho nada, porque, según él, nada ha podido hacer por los indígenas?

No nos creemos muy distantes de contestar a los que de buen o mal grado se hagan esta pregunta.

Contestamos, pero muy quedo, no deseamos que se nos oiga por aquí, no queremos mostrar nuestro lado flaco, nuestras desnudeces; contestamos con ingenuidad, pero con el sano propósito que preside esta exposición y seguros de que nos encontrarnos en vísperas de una nueva situación: hemos hecho más que lo que debimos hacer y menos que lo que pensábamos.

¿Cómo? Entramos a explicar.

Llegamos a Valdivia en la segunda mitad del año 1906. Existía un cuerpo armado denominado Gendarmes de las Colonias que nos albergó en su cuartel. Sin ingeniero, sin escribiente, sin intérprete, sin una silla en qué sentarnos, sin un papel, ni menos mesa en qué escribir, inauguramos nuestra Oficina.

Quiera creérsenos que en los quince primeros días oímos cerca de ciento cincuenta (150) reclamos. Confesamos ¡nos confundimos! Oíamos y oíamos y en oír se nos iba el día entero para de nuevo empezar al siguiente.

Convencidos de que no se nos había mandado a oír sino a obrar, a amparar, a defender, a proteger, etc.; creyéndonos protectores más que abogados; en presencia de un trabajo superior a las fuerzas de un hombre, estudiamos, pensamos y resolvimos hacer práctica nuestra labor.

La ocasión nos fue propicia. Protector y gendarmes éramos del ramo de Colonización, vivíamos bajo el mismo techo: con maña impusimos la ley.

Apoyados por los gendarmes, distribuidos en destacamentos hasta en los últimos rincones de las provincias australes, aprovechamos esa distribución y buena voluntad e hicimos de ellos nuestros colaboradores obligados, como informantes y notificadores.

Veamos el procedimiento que nos impuso la ocasión, la práctica y la imposibilidad absoluta de iniciar acción o gestión judicial en cada caso y la ignorancia y timidez de algunos atropelladores.

Ejemplos

"En la semana pasada Don... me echó a tierra mi casa y me lanzó al camino público".

(Telegrama)

Jefe Gendarmes en...

Sírvase informar sobre situación indígena... a quien destruyósele casa, arrojándolo camino público.

(Fecha y firma).

Con este informe y la relación del reclamante ocurríamos a la justicia ordinaria.

"Hace cinco días, Don... corrió su cerco quitándome como cuatro cuadras de tierra".

(Oficio) Nº...

Sírvase notificar a Don... a fin de que concurra a esta Oficina trayendo sus títulos.

Hágasele saber que debe volver su cerco al sitio donde estaba.

(Fecha, firma y timbre)

Al jefe de los gendarmes en...

"El lunes pasado me lanzó de mi terreno Don... ayudado de sus mozos, colocó un inquilino en mi casa".

Después de cerciorarnos de que el Juzgado de Letras no había expedido orden de lanzamiento contra el indígena y que ese acto era simple abuso de Don... oficiábamos:

Sírvase notificar a Don... a fin de que se abstenga de atropellar al indígena... Repóngase y ampárese a este en su posesión a la cual deberá volver inmediatamente por no existir orden judicial de lanzamiento en su contra.

Si Don... cree tener algún derecho al terreno puede concurrir a la justicia ordinaria.

Infórmese a esta Oficina para con su mérito proceder a la adopción de otras medidas.

Fecha, firma y timbre

Al jefe de los gendarmes en...

(Entre indígenas)

"José Aillapan pasa la línea y va a sembrar en mi terreno. Esto lo hace porque son muchos en la familia y yo no tengo con qué defenderme".

N°...

Cítese al indígena José Aillapan para que dentro de quince días venga con Manuel Huentutripai (el reclamante) a un comparendo para arreglar sus diferencias.

(Fecha, firma y timbre.)

Al jefe de los Gendarmes en...

¿En qué disposición legal descansaba este procedimiento? En ninguna. Simplemente en nuestra voluntad, en nuestro título de Protector, en la timidez de algunos usurpadores y, quien lo pensara, en el membrete del papel que empleamos, en el timbre que usamos y sobre todo en los botones amarillos del uniforme de *nuestro Ministro de fe* a quien encomendábamos la diligencia.

Habíamos logrado, pues, si no imponernos en absoluto, por lo menos rodearnos de cierta autoridad moral respecto de los tímidos, que en cuanto a los audaces recibían siquiera nuestra notificación o protesta.

Sin base alguna legal, este procedimiento hubo de desaparecer tanto por la paulatina instrucción de a quien lográbamos atemorizar con nuestra franca y enérgica actitud, como por la desaparición de nuestros colaboradores, los gendarmes.

Temerosos de contarlo todo, no queremos continuar explayándonos. Creemos que bastará terminar afirmando nuevamente que hemos hecho más de lo que debimos y menos que lo que deseábamos.

Los reclamos fueron disminuyendo considerablemente.

La acción del Protector devolvió así la tranquilidad a zonas extensas ocupadas por indígenas y muy apartadas del asiento del Protectorado.

Concurría con los buenos oficios de la gendarmería, el interés y buenos sentimientos que manifestó por los indios, el digno, activo e inteligente ex jefe de la provincia, Don Enrique Cuevas.

Seríamos ingratos si no apuntáramos aquí el nombre de una persona que carga los hábitos del misionero capuchino que con su inteligencia, abnegación y actividad colosal, ha llegado a ser el paño de lágrimas de los infelices indios de cierta zona y el azote de sus victimarios, el Padre Sigifredo de Frauenhauls.

Este culto y valiente religioso se ha impuesto de tal manera que suele ser con frecuencia el árbitro en situaciones vidriosas.

Volviendo al norte de nuestro propósito, continuamos.

Ilustradas las masas, como se dice, y sin el recurso oficioso de la gendarmería, el Protectorado está hoy reducido al triste e impotente rol que las leyes vigentes le señalan, esto es, al de un simple abogado y dudoso procurador de los indios.

Exhibida nuestra labor con el factor de la gendarmería con que contamos en un principio, estudiémosla ahora sin ese recurso de cartón, pero de efecto.

Como siempre, a los ejemplos.

El Ministerio o la Inspección piden informe al Protectorado sobre una solicitud en la que un indígena ha denunciado un atropello y señalado a su autor.

Nuestro superior jerárquico nos ordena oír a un indígena que ha elevado solicitud en grado de queja y notificarlo de la providencia administrativa recaída en ella.

Oímos el reclamo de un indígena contra otro natural que lo atropella en su posesión.

Se nos trae el denuncio de una invasión de suelo indígena por un extraño.

Necesitamos testigos, deslindes de una hijuela, etc.

¿Cómo proceder? ¿A quién recurrimos en solicitud de datos, cómo notificamos, cómo citamos, etc.?

Parécenos oír: Ahí está el Juez letrado, señor Protector.

¿Sí? Pues, bien, aprovechemos la advertencia.

Pongamos de juez al mortal más complaciente.

(Solicitud.)

S. J. L.

El Protector de indígenas que suscribe, a US. dice:

Que a objeto de informar al Ministerio de Colonización en una solicitud de ... se hace preciso notificar a... a fin de que (envíe datos sobre... o concurra a esta Oficina a...)

Sírvase ordenar se envíe exhorto para la notificación que se solicita al Juez de Subdelegación de... Firma.

Providencia: "como se pide"

Aceptado este proveído que creemos dudoso obtener, preguntamos ¿donde estaría la sanción del notificado rebelde? ¿Quién pagaría el exhorto, quién la diligencia de la notificación, quien lo diligenciaría?

Pero sigamos. Volvamos al art. 8, inciso 1 de la ley del 66. Esta disposición nos ordena atender a los indígenas *especialmente en el deslinde de sus posesiones.*

Precisamente es este el punto en que exigimos más atención, por ser los deslindes de las posesiones la manzana de más discordias y dificultades.

Declaramos que no tenemos hoy elementos para cumplir este mandato expreso.

El cincuenta por ciento (50 %) de los reclamos de indígenas contra particulares y viceversa, o entre indígenas, se derivan de líneas divisorias dudosas.

Desde que fundamos el Protectorado hemos sentido la necesidad de un colaborador ingeniero para el servicio exclusivo de la Oficina.

Cuando dábamos la campaña para obtenerlo, vimos con sorpresa que al Protector de Temuco se le dejaba sin él, suprimiéndolo.

A cada momento se nos exige ingeniero. Estamos seguros que con este empleado se satisfarían las exigencias del servicio en grande escala.

Es necesario conocer lo que ocurre a diario, es menester estar en las interioridades del servicio para llegar a la convicción de que el Protector de Valdivia sin ingeniero no puede ni podrá jamás llenar su cometido.

¡Cuántos abusos cometen algunos peritos que actúan en particiones con sus planos hinchados mediante el lubricante de los interesados! ¡Cuántas veces esos peritos hacen entrar en el polígono que mensuran posesiones de inocentes indígenas! ¡Con qué frecuencia miden a puro ojo!

No queremos hablar de cómo hijuelan, porque no terminaríamos nunca.

Desearíamos se nos viera trabajar en un comparendo en que se trata de esclarecer cuál es la línea que separa dos posesiones. Quisiéramos que se nos ayudara en una de esas audiencias en que se exhiben las más embrolladas escrituras en cuanto a deslindes.

Nos agradaría que se nos sorprendiera *dibujando croquis* con lápiz de color para ubicar el punto discutido entre indígenas que rara vez conocen los puntos cardinales.

Agreguemos las peticiones de indígenas que exigen se les entregue lo que les corresponde en la comunidad y en conformidad a la reserva o título de merced que se ha dado al jefe de ella.

Hablemos todavía de las invasiones mutuas entre indígenas sin otro título que la posesión.

Tratemos además de las reclamaciones sobre la cabida, calidad y ubicación de la reserva que se les ha señalado por la Comisión Radicadora.

Dejamos de la mano variadísimos casos que exigen ingeniero, entre otros, la ubicación antojadiza de caminos vecinales; cierros *acordados* con vecinos *inteligentes,* que llegan a nuestra noticia solo cuando vienen las diferencias, etc., etc.

Repetimos que necesitamos ingeniero, insistimos en que debemos tenerlo porque conocer del "*deslinde de las posesiones de los indígenas*" es una de las fases especiales de nuestra misión de Protector, según lo que hemos recordado de la disposición legal citada.

Por si se nos tratara de satisfacer nuestros justos y anhelados deseos diciéndosenos que para esto está la "Oficina de Mensura de Tierras", a donde el Protector deberá dirigirse cuando se le presentaren casos que exijan ingeniero, nos anticipamos a decir que el remedio es peor que la enfermedad.

Por mucha voluntad que nos dispensara el dignísimo jefe de la aludida Oficina, nunca nos satisfaría. Nosotros le distraeríamos un ingeniero que exigiríamos saliera en comisión de servicio cada mes, o cuando hubiéramos acumulado trabajo suficiente que autorizara una salida al terreno.

No queremos descansar en providencias como estas: "Atenderemos su petición apenas nos permita el servicio" "Lo tendremos presente", providencias que traerían postergaciones gravísimas.

Hablaremos más claro: vamos detrás de evitar cien viajes a los indígenas en busca de noticias, perseguimos cerrar las puertas a las excusas en el cumplimiento del deber y, más que todo, evitar que crezca más ese ogro que tan robusto nace y crece entre nosotros, consumiendo tiempo y embrollando todo, en menoscabo de la buena administración de la República, el papeleo.

Tócanos dar a conocer el prestigio del Protectorado.

No necesitamos entrar en muchos detalles para demostrar que la labor imposible, la ausencia absoluta de atribuciones y elementos ha tenido que desprestigiar la Oficina para ante los ojos de los que la burlan con impunidad.

La notoriedad de la impotencia de nuestra Oficina para cruzar el camino a los abusos y atropellos contra los indígenas exige medidas inmediatas.

Un montañés, entre muchos, acusado de atropellar a un indio al que, a petición de éste, hicimos notificar en la seguridad de amedrentarlo, se rió de nuestra pretensión y nos envió de palabra y por escrito un recado que nadie calificaría de incoloro ni de inodoro.

Sin embargo de tener apenas el nombre de Protector, por carecer de atribuciones y elementos, creemos por las razones antedichas que durante el año 1907 y meses del 1906, período de que da cuenta esta Memoria, mejoramos la situación de los indígenas aunque, como hemos dicho, hemos hecho menos de lo que deseábamos.

Se hace preciso rodear a este funcionario de ciertas atribuciones y elementos que justifiquen el nombre de Protector. La protección, propiamente hablando, no existe hoy, porque el Protector no está en condiciones de cuidar con eficacia de los derechos o intereses de las comunidades a su cargo. Protector que no protege es como el protagonista de aquella zarzuela chica que con su eterno "yo te empujo", "yo te protejo", ilusionó a los poetas y músicos.

En un memorándum que pasamos a la Intendencia de Valdivia hacíamos el estudio de nuestra labor y terminábamos afirmando que por la vía administrativa el Protector había conseguido más que por la judicial en la protección de los indígenas.

De los ochocientos y más indígenas que hemos oído, el noventa y cinco por ciento (95%) de sus reclamos han sido atendidos por vía administrativa.

Sólo en los casos graves y extremos, cuando ya se han agotado todos los recursos pacíficos, cuando no se nos ha querido ceder lo que nos ha parecido justo exigir, llevamos la cuestión a la justicia ordinaria.

Dijimos que llevamos un libro de Comparendos y Advenimientos donde levantamos actas de los debates entre las partes y de nuestras resoluciones. No sabemos si se nos aplaudirá esta medida.

Nuestra norma de conducta la hemos ajustado al ambiente donde trabajamos. Evitar los pleitos ha sido para nosotros un propósito firme. La experiencia nos ha enseñado con algunas amarguras que no debemos recargarnos de pleitos.

Hemos ya observado la situación que crearía al Protector la iniciación de un pleito por cada reclamo: (624 por año).

Entendemos que el papel del Protector es cuidar, vigilar los intereses de los indígenas. Y, convencidos de que con la iniciación de numerosos pleitos, daríamos gusto a los particulares que están deseosos de formar títulos con sentencias judiciales, que en su mayor parte nos serían adversas por el contexto de esta Memoria, los evitamos manteniéndonos en espera de leyes que den al Protector medios de defensa.

Pensamos e insinuamos la idea de que el estado actual de cosas en estas provincias australes exige leyes especiales y transitorias que, respetando los derechos adquiridos por los particulares, guarden los intereses indígenas y fiscales.

Téngase muy presente que la generalidad de las sentencias judiciales contra indígenas han sido el producto de juicios tramitados con tinterillos y últimamente cuidando de que no lleguen a noticias del Protector.

Aquí salta una inconsecuencia y una diferencia: la ley ha dado un defensor y mandatario a los indígenas y el derecho de litigar como pobre. Sin embargo, los juicios que afectan a estos se tramitan sin conferirle traslado de la demanda a su representante genuino, el Protector. Es esto una inconsecuencia. Se demanda al Fisco y se comunica traslado a su representante. ¿Por qué esta diferencia?

Si los tribunales oyeran al Protector en todas las demandas contra indígenas, se matarían muchos juicios de sorpresas y zancadillas.

Necesitamos leyes preventivas más que elementos para defender miles de pleitos.

¿Se demanda a indígenas? Traslado al Protector.

¿Se provoca alguna partición en el territorio fronterizo? Traslado al Protector. ¿Un indígena solicita los servicios del notario? Óigase al Protector, etc., etc.

Se arguye que los jueces y notarios no pueden saber quién tiene la calidad de indígena y que del Toltén al sur no es terreno fronterizo ni territorio indígena.

Estos funcionarios hasta cierto punto tienen razón. Sin embargo, si ellos gastaran algún interés por los aborígenes, fácil les sería evitarles muchas de sus desgracias. El apellido les indicaría el camino, y la comparecencia personal decretada de oficio sacaría a los jueces de toda duda respecto a la calidad del litigante.

Ha sido el apellido indígena que ha inspirado a la Iltma. Corte cuando nos ha puesto en conocimiento algunos autos.

El apellido ha guiado al caballeroso y desinteresado Notario de Valdivia, don Gerardo Ríos, para negarse a autorizar contratos que las leyes prohíben.

Atendiendo al apellido ha conferido traslado al Protector, como juez subrogante, el honrado y activísimo Promotor Fiscal de este departamento, don Luis González H.

Multiplicar los detalles no tendría objeto, toda vez que tenemos la pretensión de llenar las omisiones con la confección de un proyecto de ley que refunda nuestras ideas que hemos expuesto en forma vaga y confusa.

La verdadera y singularísima situación de los araucanos de Valdivia y Llanquihue no ha podido ser conocida por los altos poderes del Estado. Y esto se comprende si se considera el aislamiento en que hasta hace poco vivieron estas provincias.

Así se explica que se los haya creído aliviar con la sola creación del Protectorado que contempló la ley de presupuestos del año 1906.

Este primer recuerdo, esta primera mirada después del año 1903 para la Araucanía, fue el precursor de la nueva situación de tranquilidad que les ha sido ofrecida.

Si los buenos deseos del Supremo Gobierno, manifestados con el nombramiento de un Protector no alcanzaron completo éxito, en cambio, la ineficacia relativa de las funciones de este funcionario concluyó por evidenciar lo que aparecía cubierto por sombras.

El año 1907, la prensa toda del país, principalmente *El Correo de Valdivia, La Unión, El Mercurio* y *El Diario Ilustrado* exhibieron en sus columnas verdaderos martirologios y sostuvieron una formal campaña en favor de los indios.

Movida la opinión pública, la grita de los eternos perseguidos se abrió paso hasta hacer eco en las altas esferas del Gobierno.

Formado el convencimiento de que el Protector casi nada podía por sí solo y convencido de la gravedad de la situación, el Ministro del ramo, doctor señor don Federico Puga Borne, el mismo a quien se debe la fundación del Protectorado, estudió, con humano interés, y terminó por redactar un proyecto de ley sobre la Constitución y defensa de la propiedad indígena, proyecto que, sin egoísmo y altura de miras, nos hizo el honor de someterlo a nuestra consideración.

Llamados telegráficamente a la capital con este objeto, elaboramos allá, en noviembre último, un contraproyecto con fundamentos y razones recogidas en la práctica de más de un año de Protector, trabajo que entregamos lleno de esperanzas al señor Ministro, y que él recibió y leyó con marcadas señales de interés.

En ese proyecto de ley vertimos algunas de las ideas que se contienen en esta Memoria.

Más tarde pudimos ver que nuestro trabajo había sido considerado en un segundo y definitivo proyecto con la previa aprobación del honorable Consejo de Estado; pende hoy de la consideración del Congreso Nacional.

En nuestro afán de obtener la practicabilidad y eficacia en las funciones del Protector, en la esperanza de allegar nuevos factores para fundamentos de la ley en proyecto, en la convicción de que las leyes deben ser preventivas más que represivas, sobre todo la que nos ocupa, en consideración a la calidad y número de los que van a ser beneficiados y teniendo presente que aun es oportuno contribuir a la obra en que está empeñado el actual Ministro de

Colonización, resolvemos rematar nuestro trabajo con un proyecto de ley elaborado, teniendo a la vista el último del señor Ministro y el nuestro a que nos hemos referido más atrás.

Proyecto de ley
Constitución y defensa de la propiedad indígena

Art. 1: Son indígenas los aborígenes del territorio situado al sur de la provincia de Arauco que conserven el idioma, los apellidos paterno o materno de su raza y siquiera en parte las costumbres.

Suscitada duda sobre la calidad de indígena, resolverá el Presidente de la Comisión Radicadora o el Protector de indígenas respectivo, en su caso.

Art. 2: Se aplicarán las disposiciones de esta ley al territorio de indígenas, que es el comprendido en las provincias de Malleco, Cautín, Valdivia, Llanquihue, Chiloé y territorio de Magallanes.

Art. 3: No se podrá disponer de ninguna porción de terrenos fiscales habitados por indígenas, sin que previamente hayan sido estos radicados.

Art. 4: La radicación de indígenas se hará por cabezas, otorgándose a cada individuo la propiedad de una hijuela de terreno. La extensión de esta no podrá ser mayor de veinticinco hectáreas ni menor de ocho.

Las hijuelas correspondientes a los menores serán entregadas al jefe de la familia o a quien tenga su tutela o curatela[361].

El indígena será radicado en el terreno que ocupa.

En los casos que el indígena lo acepte o lo solicite, la radicación podrá hacerse en un terreno fiscal distinto del que ocupa.

Art. 5: Para determinar la cabida que debe asignarse al jefe de la familia, las comisiones tomarán en cuenta:

1º Si sabe leer y escribir.
2º El grado de civilización de la familia.
3º La calidad, del terreno que ocupa y el tiempo que haya habitado en él.
4º La cantidad del terreno que tenga cultivado, los cierros que haya construido y las limpias que haya hecho.
5º El número de animales que los miembros de la familia posean en propiedad.
6º La conducta observada por el jefe de la familia.
7º Haber constituido la familia conforme a la Ley de Registro Civil.
8º Cualesquiera otros antecedentes del carácter de los anteriores y que puedan obrar en el ánimo de la Comisión.

[361] Palabra compuesta de 'curaduría' y 'tutela'. Tutela de adulto incapacitado legalmente. Conforme al derecho indiano, los indígenas en Chile fueron considerados "incapaces relativos" en lo tocante a la propiedad.

Art. 6: La radicación de los indígenas se efectuará por comisiones nombradas por el Presidente de la República, cada una de las cuales se compondrá de un presidente abogado, dos ingenieros, y un secretario que será ministro de fe.

El número de estas comisiones se fijará en relación a los fondos que consulte la ley de presupuestos de cada año. Durante el actual será de tres. Los sueldos de que gozarán sus miembros serán:

El abogado jefe

Los ingenieros

El secretario

Art. 7: Una vez terminado por la Oficina de Mensura de Tierras el plano general de cada región, la respectiva Comisión Radicadora, constituida en el terreno a lo menos con tres de sus miembros, extenderá acta provisoria de entrega a favor de los indígenas a que se refieren las disposiciones de la presente ley, levantarán un plano del terreno y darán a los indígenas copia de todo lo obrado.

El acta original será elevada al Presidente de la República para su aprobación. El decreto aprobatorio servirá de título suficiente de dominio, que se inscribirá en el respectivo Registro Conservador de Bienes Raíces, a petición del Presidente de la Comisión Radicadora de Indígenas que haya intervenido en su formación.

Art. 8: Las Comisiones Radicadoras formarán por triplicado un registro en el que anotarán el nombre, el sexo, la edad, el lugar del nacimiento de los indígenas que radiquen, las declaraciones que hagan sobre su estado civil y relaciones de parentesco que los liguen.

Un ejemplar de este será enviado al Ministerio de Colonización, otro al Oficial del Registro Civil correspondiente, quien lo incluirá en el archivo de su Oficina, y el tercero al Protector de Indígenas de la provincia.

Las anotaciones contenidas en este registro servirán como medio de prueba de que los indígenas que figuren en él tenían en esa fecha la posesión notoria de su estado civil, en conformidad al art. 9 de la Ley de 4 de agosto de 1874.

Los registros se harán por distritos.

Art. 9: Serán considerados como colonos nacionales para los efectos de su radicación, si así lo solicitan.

1º Todo varón indígena que contrajere matrimonio y reconociere los hijos habidos en su esposa, en conformidad a la Ley de Registro Civil.

2º Las madres viudas que inscribieren a sus hijos en el Registro Civil.

3º Las madres repudiadas por el matrimonio civil del primitivo esposo y que reconozcan a sus hijos con las formalidades de la ley.

Art. 10. Los particulares que, sin motivo justificado, opongan resistencia a la radicación de los indígenas incurrirán en las penas señaladas en el art. 272 del Código Penal.

Si la oposición se fundara en título inscrito más de un año, el Presidente de la Comisión Radicadora requerirá al respectivo Protector para que demande al

opositor; y si no tuviere título inscrito, se procederá a la radicación sin perjuicio de que el opositor ocurra a la justicia ordinaria.

No serán títulos suficientes para oponerse a la radicación las sentencias judiciales recaídas en las querellas de amparo, restablecimiento y restitución salvo que cuenten con dos años de inscripción.

En ningún caso paralizarán la radicación los títulos de cuotas, denominados acciones y derechos.

Art. 11. Se prohíbe a los indígenas enajenar terrenos y celebrar contratos de hipoteca, anticresis o arrendamiento. Igualmente se prohíbe a los particulares adquirir por cualquier motivo terrenos de indígenas.

Los derechos reales de los indígenas son inembargables.

Son nulos y de ningún valor los contratos que contravengan a esta ley.

Art. 12. Todo juicio en que sean parte o tengan interés los indígenas será de la competencia del Juez letrado y estos litigarán con privilegio de pobreza.

Art. 13. Habrá un funcionario abogado que, con el nombre de Protector de Indígenas, tendrá la representación de estos y será parte en sus juicios para las dos provincias de Malleco y Cautín, otro para cada una de las provincias de Valdivia y Llanquihue. Su sueldo será de 7.200 pesos anuales cada uno.

Cada Protector tendrá un ingeniero, un agente judicial, un escribiente y un intérprete-portero con un sueldo anual de 5.000, 2.400, 1.200 y 720 pesos, respectivamente.

Si se crearen nuevos departamentos dentro de las provincias arriba nombradas, las funciones del Protector de Indígenas serán desempeñadas por el Promotor Fiscal del departamento creado, quien gozará de 2.400 pesos anuales como gratificación.

Art. 14. La representación de los indígenas que da esta ley al Protector no releva al demandante o iniciador de cualquiera acción o gestión, de notificar al o a los demandados indígenas.

Notificados que sean éstos, se pondrá todo lo obrado en conocimiento del Protector.

Art. 15. Serán nulas las sentencias o resoluciones judiciales expedidas contra indígenas en juicios tramitados sin conocimiento del respectivo Protector.

Esta disposición comprende a los juicios de compromisos o particiones en que tengan parte o interés los indígenas.

Art. 16. Las dificultades entre indígenas derivadas al deslinde de sus posesiones serán resueltas, sin ulterior recurso, por el respectivo Protector, previo dictamen del ingeniero del Protectorado.

Podrá el Protector compelerlo por la fuerza dependiente de la autoridad administrativa cuando se manifestaren rebeldes a acatar sus resoluciones o cuando, citados por asuntos del servicio, no concurrieren a la Oficina.

Art. 17. Se prohíbe a los particulares hacer cercos, volteadas, fosos u otras obras que importen fijación de deslindes con posesiones de indígenas o mudar de sitio las actuales sin citación del respectivo Protector.

Caso de desacuerdo en la fijación de la línea divisoria, este funcionario, previo dictamen del ingeniero del Protectorado, ocurrirá a la justicia ordinaria.

La inobservancia de este artículo hará presumir usurpación y será penada en conformidad a los artículos 457 y 458 del Código Penal.

Art. 18. Los indígenas que fueren lanzados de sus posesiones serán amparados y repuestos en ellas por el Protector, quien solicitará la fuerza de la autoridad administrativa acompañando a su solicitud certificación como que el lanzamiento no ha sido efectuado en cumplimiento a una sentencia o resolución de la justicia ordinaria, sin perjuicio de la acción que proceda contra el autor del abuso o atropello.

Art. 19. Queda prohibido a los notarios, oficiales del Registro Civil, jueces de Subdelegación de distrito y receptores, bajo pena de privación de su empleo y multa de 100 a 500 pesos a beneficio municipal, autorizar, protocolizar o certificar firmas de instrumentos públicos o contratos privados sobre materias que estén prohibidas por la presente ley. Si los jueces letrados les ordenaren extender algunos de éstos, cumplirán la orden; pero darán cuenta en el mismo día que la reciban al Protector de Indígenas respectivo.

En caso de duda sobre la calidad de indígena del ocurrente, los funcionarios públicos arriba indicados deberán recurrir al respectivo Protector en consulta previa, el que resolverá a virtud del inciso 2 del art. 1.

Art. 20. Los indígenas que estén en posesión de un título inscrito de propiedades que adquieran o hayan adquirido por compras, podrán enajenarlas, hipotecarlas, darlas en anticresis o en arrendamiento, sin otra limitación que la concurrencia del Protector respectivo al acto o contrato, quien se cerciorará sobre si hay justo precio y espontáneo consentimiento del indígena.

Art. 21. No será válida ninguna escritura pública o privada suscrita por un indígena, si no es asistido en el momento de la firma por el respectivo Protector de Indígenas, el cual deberá suscribirla personalmente ante el ministro de la fe y en presencia del indígena.

La penalidad establecida en el artículo precedente se aplicará a las infracciones de éste.

Art. 22. Para desempeñar el puesto de Protector de Indígenas se exigirán cinco años de ejercicio en la profesión de abogado.

Art. 23. Se prohíbe a todos los empleados que crea esta ley celebrar contratos o comerciar con los indígenas. La infracción de este precepto será penada con multa de 100 a 1.000 pesos a beneficio municipal, sin perjuicio de la destitución.

Art. 24. Los indígenas quedan obligados a enviar a la escuela a sus hijos mayores de diez años hasta que aprendan el idioma español, las primeras letras y un oficio manual, siempre que funcione uno de dichos establecimientos a menos de cinco kilómetros.

La infracción de este precepto será penada con multa de diez pesos o diez días de prisión.

Art. 25. El servicio militar es obligatorio para todos los varones indígenas de veinte años de edad. Lo prestarán por un año continuado y en los cuerpos de ingenieros militares.

Art. 26. Todo indígena está obligado a vacunarse, bajo pena de veinte pesos de multa o veinte días de prisión, la cual se aplicará al padre de los menores de edad.

Art. 27. Las disposiciones de la presente ley en cuanto a radicación de indígenas se aplicarán a los que no hubieren obtenido título de merced a la fecha de su promulgación, salvo la contenida en el art. 9, que podrá aplicarse a todos.

Art. 28. Trascurridos diez años de la fecha de la presente ley para los indígenas actualmente radicados, y el mismo término desde la radicación de los aun no radicados, los particulares podrán recibir en hipoteca, anticresis y arrendamiento terrenos de indígenas con las condiciones que se contemplan en el art. 20.

Art. 29. Se derogan todas las disposiciones de excepción a favor de los indígenas, sin perjuicio de los derechos adquiridos hasta la fecha en conformidad al art. 9 de la ley de 4 de agosto de 1874 y a lo prescrito en la presente.

* * *

Séanos permitido mostrar siguiera algunos de los fundamentos que nos han aconsejado una de las principales reformas que hemos hecho al Proyecto del señor Ministro.

Las leyes de excepción, en nuestro humilde concepto, deben y han debido tener carácter transitorio, nunca permanentes, porque son odiosas e irritantes cuando con los tiempos se han ido las causas que las originaron. Pensamos que ya ha llegado el caso de libertar a cierta región de leyes especiales que consideramos que ya no llenan su objeto.

Nos ha parecido exagerado (hablamos con respeto) mantener las prohibiciones en Arauco y Biobío y, en consecuencia, darles un Protector a cada uno de los departamentos de estas provincias.

Creemos no equivocarnos cuando sostenemos que los indígenas de Arauco y Biobío están tranquilos confundidos ya con los particulares, olvidando los hábitos y costumbres de su raza, y sus propiedades o profesiones, han entrado de hecho en el comercio pues las han vendido o las tienen inscritas.

En cuanto a Chiloé y Territorio de Magallanes, pensamos que no existen motivos para darles un Protector.

Estamos cerca de dos años en las provincias australes y jamás hemos oído ni leído que haya una población considerable de indígenas propiamente tales en la provincia y territorio nombrados y que sea víctima de los desmanes de los particulares.

Para demostrar nuestro acierto agregaremos que como Protector de Llanquihue no hemos tenido reclamos de indígenas que no sean del departamento

de Osorno, pues en año y medio de funciones han correspondido a los otros dos departamentos solo dos solicitudes de amparo y una denuncia de crimen.

Indígenas propiamente tales, esto es aborígenes, que conserven sus hábitos y costumbres, que vivan en reducciones, en comunidades, etc., creemos que no los hay en Chiloé y Territorio de Magallanes.

Según nuestra observación personal, datos y referencias, la verdadera Araucanía está hoy concretada a las provincias de Malleco, Cautín, Valdivia y departamento de Osorno. Aquí están los cien mil (100.000) y tantos indios, a quienes la civilización todavía no les ha pulido sus asperezas.

Si en nuestro Proyecto dejamos a Chiloé y Magallanes como territorios de indígenas, ha sido no en consideración a que allí existe el problema indígena, ya que no hay población con esa calidad, sino previendo sucesos aislados y en respeto al art. 2 de la ley de 11 de enero de 1893.

Y si miramos con criterio más amplio todavía, más en armonía con las circunstancias actuales, más en conformidad con el espíritu de la legislación moderna, llegaríamos a circunscribir la Araucanía a la provincia de Valdivia y departamento de Osorno, pues en el radio señalado es donde vemos al aborigen con su peculiar característica más importante: la posesión como único título de sus propiedades.

La circunstancia de carecer de título presenta difícil su situación y defensa y justifica leyes proteccionistas.

En Malleco y Cautín no pasa lo mismo, no presentan ya dificultades serias. Allí la propiedad está casi completamente constituida, está dividida gracias a los numerosos remates de hijuelas fiscales, a la radicación puede decirse terminada de los indígenas y a que sufrieron a tiempo los efectos de las leyes del 66, 74 y 83 y decretos que precedieron a éstas.

Sin embargo, opinamos que no ha llegado la época de quitarles la calidad de territorio indígena ni el Protectorado: sus títulos son nuevos y quedan indígenas por radicar y la cultura y civilización aún no han terminado su obra paulatina.

Apoyados en estas consideraciones y con la venia del distinguido y honorable autor del Proyecto que observamos, nos hemos atrevido a dejar a Arauco y Biobío fuera del territorio indígena, y sin Protector a Chiloé y Territorio de Magallanes.

Si se aprueba nuestro Proyecto u otro análogo, pero que contenga también condiciones preventivas que hagan alejar la concepción de planes o empresas fraudulentas contra los indios, y si se dan al Protector los colaboradores que exigimos, nos aventuramos a afirmar que bastan tres Protectores para la Araucanía.

Francamente, tenemos miedo de que los ingentes desembolsos que exigirá la creación de veinte y tantos Protectores que contempla el Proyecto que nos ocupa postergue indefinidamente la discusión de leyes de absoluta e inmediata necesidad.

Sin contar veinte y tantos arriendos de oficinas, alumbrado, útiles de escritorio, etc., para cada una de ellas y dando al Protector solo escribiente e intérprete, subirían de ciento veinte mil pesos ($120.000) anuales.

Acogida nuestra fórmula, aumentando el sueldo al Protector y dándole cuatro empleados, la defensa de los indígenas, con las cualidades que exigimos a las leyes futuras a la vez que eficaz, exigiría apenas cincuenta mil pesos ($50.000) anuales.

Lo que hemos dicho respecto a las provincias de Malleco y Cautín nos ha autorizado para darles un solo Protector a las dos.

No obstante, no creeríamos injusto que a este Protector se le fijara mayor sueldo, sobre todo si se considera la persona del actual, don Eulogio Robles R., funcionario honrado e inteligente y con mucha experiencia en el servicio.

Mucho nos costó resolvernos a tratar la cuestión sueldos, pero hubimos de renunciar a nuestras vacilaciones cuando vimos que se trataba de reducirnos el actual en cien ($100) pesos, y cuando examinamos los de los miembros de la Comisión Radicadora.

Jamás hemos acertado a explicamos el por qué del errado concepto de nuestras funciones. Hablamos sin egoísmo, abogamos en razón del prestigio e independencia de una Oficina que ha sido una verdadera dignidad en todos los países donde ha existido.

Un abogado de la Defensa Fiscal en provincia, funcionario de simple bufete, con labor tranquila, con agente judicial, gana seis mil pesos (6.000) anuales.

Un ingeniero de cualquier repartición pública tiene un sueldo de cinco mil (5.000) pesos.

Se proyecta fijar el sueldo del Protector, funcionario de labor pesada y compleja, odiosa y abrumadora por la calidad del público que atiende, en solo tres mil cuatrocientos ($3.400) pesos. En circunstancias que hace más de cuarenta años, con el cambio casi a la par, se fijó en tres mil quinientos ($ 3.500) pesos.

Es importante hablar o explicar la razón que hemos tenido para permitir enajenar sus propiedades a los indígenas que tengan título inscrito, pues estimula el trabajo y el espíritu de economía y también porque esa es la tendencia de nuestros tribunales.

De todos modos es de absoluta necesidad que la ley futura exprese clara y terminantemente si los indígenas pueden o no deshacerse de las propiedades que adquieran o hayan adquirido por compras y de las cuales tengan títulos inscritos.

Alejar las dudas en nuestra legislación de indígenas es matar fraudes y recursos dilatorios. Se impone, pues, declarar o que los indígenas no podrán enajenar sus propiedades cualquiera que sea la forma o el origen de la adquisición, es decir, en absoluta (prohibición absoluta) para mayor claridad; o especificar, taxativamente, qué propiedades pueden enajenar y cuales no.

También hemos querido en nuestro Proyecto preparar el campo a situaciones futuras. Somos partidarios de liberalizar poco a poco las leyes sobre indígenas, nuestra tendencia es hacer desaparecer paulatinamente las leyes de excepción.

Terminado y sintiendo que las proporciones de esta Memoria no nos permitan explayarnos más sobre puntos que hemos omitido en nuestro Proyecto de Ley, insinuamos la idea de que lo que hemos expuesto aquí, sea considerado aunque solo como dato ilustrativo.

Nuestro Proyecto de Ley tal vez peque de largo. No obstante, si la precisión y la claridad, indispensables en las leyes, fueran para nosotros factores fáciles de alcanzar, habríamos presentado un proyecto más reducido en artículos, pero más rico en disposiciones prácticas y preventivas.

Esta circunstancia y el deseo de no exigir demasiado nos hizo omitir mucho.

Saluda a Ud.

Carlos G. Irribarra Stuardo

Valdivia, junio de 1908.

Núm. 141.

Señor Inspector:

Atento a su advertencia, paso a apuntar las datos omitidos en mi Memoria de 1907.

En los libros de la Oficina hay 626 páginas escritas que se traducen en 304 piezas distribuidas así:

	Piezas
A los gendarmes de las Colonias	91
A la Inspección	55
A jueces letrados	21
A la Comisión Radicadora	16
A intendentes y gobernadores	21
A jueces de Subdelegación y Distritos	18
A los reclamados	48
A varios	34

Hemos intervenido en 28 defensas judiciales de indígenas: 11 en 2ª instancia y 17 en 1ª; 19 civiles y 9 criminales. Calculo en 150 piezas las no copiadas en los libros: escritos de cajón, borradores de solicitudes de radicación, instrucciones escritas, escritos durante estadías en La Unión, etc.

Total: 454 piezas.

En 1907 no tuvo escribiente esta Oficina.

Saluda a Ud.

Carlos G. Irribarra

1908
CARLOS G. IRRIBARRA
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS. PROVINCIA DE VALDIVIA[362]

Señor Inspector:

Las condiciones en que esta Oficina defiende y ampara a los indígenas son, puede decirse, las mismas que existían el año próximo pasado y descritas con detalles en el Memorandum de 1907.

En él creíamos haberlo dicho todo. Sin embargo, día por día han venido surgiendo nuevas dificultades.

El Supremo Gobierno ha comenzado a hacerse cargo de la verdadera situación derivada de la ausencia de leyes especiales. Adelantándose al advenimiento de estas ha creado dos nuevas oficinas protectoras, en Arauco y Osorno.

Hablaremos de un inconveniente que vienen presentando ¡cosa singular! los mismos indígenas.

La conducta de estos habrá de complicar el problema cuya solución persiguen los poderes públicos en bien de los intereses fiscales, indígenas y particulares.

Queremos hablar de las protestas que se traen a esta Oficina por indios que se manifiestan abiertamente reacios a su radicación.

Arguyen que les es más favorable a sus intereses renunciar su calidad de indígenas y ponerse al amparo de las leyes comunes, por cuanto estas les permiten alegar la prescripción como medio de adquirir grandes extensiones de tierras que han poseído más de treinta años.

Rechazan las leyes especiales vigentes porque ellas les obligan a radicarse y porque con esta operación se les limita la cabida de sus posesiones a un pequeño número de hectáreas que fluctúa entre cinco y ocho por cabeza.

Ha habido casos en que después de oírnos discurrir sobre la conveniencia de la radicación ya que ella los provee de un título que los pone a cubierto de cualquier despojo, han replicado sosteniendo que aparte de reducírseles en su cabida se les priva con frecuencia de terrenos que ellos han limpiado con sus propios recursos y se les entrega en cambio uno de montaña que les exige nuevos esfuerzos y pérdida de tiempo.

[362] "Memoria Protectorado de Indíjenas, Provincia de Valdivia", en *Memoria de la Inspeccion Jeneral de Colonizacion e Inmigración, 1908* (Santiago, Imprenta i encuadernación Ercilla, 1909), pp. 352-360.

Este síntoma de descontento, por felicidad no muy generalizado aun, nos presenta un nuevo y grave tópico del problema indígena y que es menester alejar muy de prisa.

Es indudable que él es hijo de la postergación que ha venido sufriendo la dación de los títulos de merced.

Está claro. Los particulares, ávidos como están por complicar el estado de cosas, se esfuerzan por difundir esta idea que, generalizada, puede privar al Fisco de los restos de tierras que se propone destinar a la colonización.

El procedimiento sería tan sencillo que en un par de años los particulares podrían acaparar todos los terrenos en que aún no ha actuado la Comisión Radicadora.

Y cuidado, que de los veintiséis mil indios que cuenta la Provincia de Valdivia apenas la cuarta parte está en posesión de un título de merced.

Este dato es bien decidor y exhibe trascendencia que calificamos de grave para los intereses fiscales.

Pues bien, supongamos que un sindicato[363] de particulares encabezado por un par de diligentes abogados de la localidad recorran la provincia e inviten a los poseedores indígenas a renunciar explícitamente su calidad de tales y, por supuesto a los privilegios que las leyes vigentes les acuerdan.

Provisto este sindicato de igualas[364] (!!) celebradas con ellos, provocarán en seguida una multitud de pleitos dirigidos a obtener títulos derivados de sentencias judiciales para oponerlas a su tiempo a la actuación de la Comisión Radicadora.

Se dirá que ésta es alarma infundada por cuanto a los particulares les está prohibido adquirir por cualquier medio tierras de indígenas.

Muy bien, pero no se piensa que no existe ley alguna que prohíba a los indígenas renunciar su calidad.

Solo por vía de ejemplo, sin ánimo sospechoso, por el solo y único anhelo de ser oídos, trascribimos a la letra una escritura pública.

Año 1909.
Núm. 340.
fj. 338.
Compraventa.
Don Juan de Dios Huanquil y Manuel Huanquil (un particular).

En la ciudad de La Unión a cuatro de mayo de mil novecientos nueve, ante el Notario y Conservador que autoriza y el número de testigos requeridos por derecho que se indicarán, comparecieron dos hombres desconocidos y con las declaraciones de los testigos don... y don... de este domicilio, cono-

[363] = agrupación.
[364] = acuerdos, pactos.

cidos del Notario, comprobaron llamarse Juan de Dios Huanquil y Manuel Huanquil domiciliados en San José del departamento de Valdivia, mayores de edad, y expusieron: que venden a don... las acciones y derechos de terreno que por cualquier título les corresponda en el fundo "Traiguén" ubicado en la subdelegación de San José del departamento de Valdivia, siendo los deslindes generales del fundo: Norte, el río San José; Este, el estero Palleco; Sur, el estero que lo separa de terrenos de la Fraca, y Oeste, los fundos Llongo y Dollinco. El precio de la venta son trescientos pesos que los vendedores exponen que ya los tienen recibidos del comprador. En consecuencia, trasfieren en el comprador todos los derechos y acciones que tienen en el indicado fundo, asegurándole que no tiene gravámenes, embargos ni prohibiciones y se comprometen al saneamiento y evicción de lo que venden, y facultan al mismo comprador o a cualquiera persona que exhiba la copia de esta escritura para que requiera y firme la inscripción de ella en el Registro del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Los vendedores obtuvieron del señor juez letrado la resolución que sigue: La Unión, cuatro de mayo de mil novecientos nueve.

Vistos: Juan de Dios y Manuel Huanquil, agricultores, domiciliados en San José del Departamento de Valdivia, piden se ordene al Notario extender una escritura de venta de acción y derechos que ellos desean otorgar, y que el Notario se niega a autorizar so protesto de que tienen apellido indígena.

Alegan que ellos son chilenos, sujetos al derecho común y no a las leyes prohibitivas de los indígenas por más que su apellido tenga aquel origen. El Notario informando dice haberse negado a la extensión de la escritura pública porque, aunque los individuos en su vestuario, idioma y maneras en general no manifiestan ser indígenas, su apellido parece serlo.

Teniendo en consideración que los solicitantes, por su aspecto, vestuario, idioma y comportamiento en general no revelan ser indígenas, que han manifestado de una manera consciente no querer aprovecharse de las leyes dictadas a favor de los indígenas, y que siendo esas leyes un privilegio en favor de los de esa raza, a ninguno se le puede obligar si libre y conscientemente manifiesta no desea aprovecharse de lo que mira a su interés individual, y visto lo que dispone el art. 12 del Código Civil, se declara que ha lugar a lo solicitado y notifíquese al Notario para que proceda a extender la escritura pública de que se trata.

Anótese, dese copia y archívese. R. V. Ramírez.

Pronunciada por el Promotor Fiscal don Rafael Ramírez, desempeñando el juzgado por el ministerio de la ley.

M. A. Garay Burr.

Conforme con su original que corre en el expediente respectivo, archivado en la Oficina a mi cargo. La Unión, mayo cuatro de mil novecientos nueve.

M. A. Garay Burr, secretario judicial.

Concuerda con el documento presentado que se agrega al legajo de este año con el número veintinueve.

Presente a este acto don... (el comprador) domiciliado en Valdivia, mayor de edad, a quien también conozco y expuso: que aceptaba para sí la presente escritura. Así lo otorgaron, previa lectura, y exponiendo los vendedores Juan de Dios y Manuel Huanquil que no sabían firmar, rogaron al testigo don Darío Díaz firmara por ellos y firmó el comprador con los testigos de conocimiento y el instrumental don Félix Díaz, ambos testigos de este domicilio; doy fe.

Darío Díaz.

Felipe Díaz.

Ante mí, Pedro J. Díaz Álvarez, Notario y Conservador.

Pensemos a donde podría llegarse con unas doscientas o más escrituras semejantes a la trascrita y a favor del sindicato en cuestión por las que los indígenas cedieran parte de sus derechos en cambio de un título que les consintiera retener mayor número de hectáreas que las que la Comisión Radicadora les adjudica.

Nunca como hoy se deja sentir con más intensidad la falta de leyes especiales.

Bien se comprende que no es obra fácil legislar sobre la materia sin provocar protestas.

Respétense los derechos adquiridos; liquídese la situación en cualquier forma. Nada importa que sea poco lo que quede después de la operación. Está de por medio el interés de los particulares, el del Fisco y el de los indígenas, en una palabra, el progreso y tranquilidad de esta región.

Repetimos que es de urgencia legislar sobre la constitución y defensa de la propiedad indígena. Cerrar la puerta a los abusos que se amparan en las deficiencias de las leyes vigentes es fácil.

Legíslese con disposiciones que contengan presunciones de derecho para los actos o contratos que afecten a tierras de indígenas. Defínase el territorio y la calidad de la de indígena. Cuatro artículos sobre la materia, pero preventivos, he ahí todo.

Ya hemos expuesto nuestras ideas en un proyecto de ley.

¿Qué no se puede legislar? Bien. No retardemos el progreso de esta zona extensa y rica. Permítase que la liquide de una sola vez la vorágine.

Copiaremos otra escritura en nuestra avidez por ser oídos.

Declaración

Cuante, Francisco y otros (indígenas) a... (aquí el nombre del particular.)

En la ciudad de La Unión a veintitrés de junio de mil novecientos cinco, ante mí, el Notario y Conservador autorizante y testigos que se indican, comparecieron don Francisco Cuante, José María Mopuy, José Antonio Catrinahuel, Tránsito Berequeo, Pascuala Naillauca y María Rosario Gueiquipan, estas dos últimas viudas, todos mayores de edad, a quienes conozco

y expusieron: que reconocen que don... es dueño del fundo Fiqueco ubicado en la subdelegación de la Esperanza de este Departamento y cuyo fundo tiene los siguientes límites: Norte, el estero Tarrahue; Sur, ríos Chirri y Pilmaiquen; Este, el fundo Litran, y Oeste, el estero Pincheco, pues dentro de estos deslindes han estado de inquilinos más de tres años a la fecha reconociendo como a dueño a don... y continuarán viviendo en el expresado fundo gratuitamente y por el tiempo que quiera el señor... Presente al otorgamiento de esta escritura don... de este domicilio, mayor de edad, a quien también conozco y dijo: que aceptaba para sí y en todas sus partes la presente escritura y declaraciones que contiene. Así lo otorgaron, previa lectura y firmaron los que saben y los que no, lo hizo a ruego de ellos el testigo, etc. Concuerda con su matriz que existe en el protocolo correspondiente de mi cargo. Notaría Pública, Unión, octubre doce de 1906.

Pedro J. Álvarez, Notario y Conservador.

Dígasenos si tenemos o no razón para exigir leyes especiales ¿Es posible desentenderse por mayor tiempo de estos hechos que descarnadamente exhibimos?

No creemos que haya un solo miembro de las Cámaras Legislativas que continúe indiferente en presencia de estas anormalidades que presentamos como ejemplos.

Pensamos que no hay interés en prolongar este estado de cosas.

Sin embargo, a fines del año último tuvimos en nuestras manos una solicitud firmada por personas de situación espectable[365], y dirigida, creemos, que a una alta personalidad y encaminada a desvirtuar sino a estorbar el proyecto que pendía de la consideración del H. Congreso sobre la propiedad indígena.

¿Por qué aquella alarma? ¿Qué intereses legalmente adquiridos pudieron verse amenazados con esas leyes futuras?

No entendemos, no sospechamos el motivo de tanta nerviosidad de parte de la gente honrada.

Estamos ciertos de que los firmantes de esa solicitud no se han dado cuenta de la inocencia de ese proyecto de ley elaborado con entera buena fe y aconsejado por la solidaridad humana.

Ese proyecto brinda beneficios, porque deja a cada cual lo que legítimamente ha adquirido.

No se comprende que se repugnen leyes fundadas en las exigencias de una situación anómala.

Nuestro Gobierno viene haciendo fuertes desembolsos para mantener un servicio de defensa de los indígenas, perseguidos con inhumanidad increíble. Es lógico entonces esperar los resultados apetecidos: tranquilidad para los indios y terrenos para colonizar esta vasta y floreciente provincia.

[365] = ilustre, estimable.

Existen grandes extensiones de tierras que no trabaja ni el indígena, ni el particular, ni el Fisco.

¿Por qué? Sencillamente porque al indígena se les han muerto sus escasas iniciativas con los vejámenes, porque el particular teme que de un día a otro se le diga "Ud. no está bien ahí" y finalmente porque el Fisco no sabe si le pertenece o no.

¿Puede entonces justificarse la oposición o alarma de algunos con motivo del advenimiento de leyes dirigidas a una liquidación reclamada por los hechos?

No seamos egoístas; miremos las cosas con más humanidad. Dejemos a los naturales con sus pequeñísimas exigencias, no seamos crueles, dejémosle vivir que también tienen derecho a la existencia, dejémosles en sus *rucas*, allá en el rincón del bosque, hasta que el torbellino de la civilización los confunda con sus victimarios civilizados.

La atención de esta Oficina ha sido circunscrita a la provincia de Valdivia. Se ha creado un protector para la de Llanquihue. No obstante tenemos 26.000 indios que pueden solicitar nuestros servicios.

Durante el año de 1908 esta Oficina ha oído 407 reclamos que significan audiencias para más de 500 personas, por cuanto a un solo reclamo concurren a veces hasta 3 y más individuos.

Se han despachado 344 piezas distribuidas así:

Inspección	54
Carabineros	57
Jueces	76
Reclamados	35
Comisión Radicadora	16
Interesados	20
Varios	86

Consecuentes con nuestro propósito y en atención a la ineficacia de las leyes vigentes, hemos continuado haciendo primar la vía administrativa para hacer más eficaz nuestra labor.

Para ello hemos contado con la buena voluntad del Cuerpo de Carabineros y con la autoridad que nos ha dado la siguiente nota que el señor Intendente de Valdivia recibió del señor ex Ministro de Colonización con fecha 18 de julio de 1908.

> Acompaño a US. una solicitud de varios indígenas de Valdivia en que reclaman amparo de sus derechos de propiedad seriamente amenazada por individuos que se ocupan en arrebatarles sus tierras. El Gobierno está dispuesto a impedir que violentamente se despoje a los indios de sus terrenos, cumpliendo a la autoridad administrativa el deber de cautelar con la fuerza de carabineros sus propiedades.

Espera en consecuencia el Departamento que US. dispondrá que la fuerza de carabineros impida todo despojo arbitrario. En caso que fuera necesario US. requerirá al Protector de Indígenas a fin de que inicie gestiones judiciales en defensa del derecho de los ocurrentes.

F. Puga Borne.

Presentamos por separado una nómina de las gestiones judiciales practicadas por esta Oficina en amparo de los indígenas.

Tenemos el gusto de dejar constancia de que los vejámenes y atropellos a los indios no aumentan aunque disminuyen lentamente.

La obra de los particulares en contra de los intereses indígenas está hoy, si no neutralizada, por lo menos dificultada por la vigilancia y labor del Protectorado.

Saluda a Ud.

Carlos G. Irribarra S.

Valdivia, junio de 1909.

Señor Inspector:

Sírvase corregir el inciso 2 del art. 21 de mi proyecto que lleva mi Memoria.

Se puede arreglar fácilmente borrando la palabra precedente y colocar en su lugar el número 19, pues a este artículo y no al precedente se refiere el inciso 2 del art. 21.

Para que no quede tan aislado el número 19 se podría borrar precedente y completar Art. y quedaría: Art. 19.

Ruégole, señor, corregir este grave error.

Saluda a Ud.

Carlos G. Irribarra.

Valparaíso, julio 31 de 1908.

Al señor Inspector de Colonización.

1908

DANIEL CERDA
MEMORIA DEL PROTECTOR DE INDÍGENAS DE LLANQUIHUE[366]

Señor Inspector General de Colonización:

Tengo el honor de elevar a US. la Memoria correspondiente al cargo de Protector de Indígenas de la provincia de Llanquihue en el tiempo comprendido entre el 1 de septiembre de 1908 y el 1 de febrero de 1909, durante el cual ha funcionado esta Oficina con residencia en Osorno.

Nombrado el infrascrito para desempeñar dicho cargo por decreto Supremo número 1.008 de 14 de agosto de 1908, me ocupó los días siguientes de ese mes en instalar la Oficina y hacer saber a los indígenas mi nombramiento como Protector.

El 1 de septiembre entré al desempeño efectivo del cargo y mis primeras medidas fueron de carácter preventivo a fin de impedir que los indígenas continuasen siendo víctimas de sus explotadores.

Solicité de los notarios de Osorno se abstuvieran de extender contratos en que aparecieren como otorgantes personas que por su apellido o idioma pudiera creérsele indígena, sin un previo certificado de esta Oficina por el cual consta que el compareciente no es indígena y que por consiguiente puede otorgar libremente cualesquier contrato.

Esta medida, que fue aceptada por los notarios y sancionada su legalidad por el señor Juez Letrado de Osorno, ha dado espléndidos resultados, pues anteriormente se otorgaban con toda frecuencia por los indígenas contratos de venta de sus propiedades, contratos en los que estos eran engañados y servían a sus compradores para despojar a los indígenas de sus terrenos.

Solicité así mismo de los alcaldes de las comunas rurales se abstuvieran de conceder a los jueces de menor y mínima cuantía la fuerza pública para desposeer o los indígenas, debiendo conceder en ese caso la fuerza solo al señor Gobernador, quien antes de concederla debía oír previamente al infrascrito a fin de informarle sobre la legalidad del lanzamiento a los indígenas.

Todas estas medidas fueron aceptadas por dichos funcionarios, y en virtud de ellas desde que ejerzo este cargo no se ha despojado ningún indígena de sus terrenos, ni se ha llevado a efecto contrato alguno en que tengan estos intervención.

[366] "Memoria Protectorado de indíjenas de Llanquihue", en *Memoria de la Inspeccion Jeneral de Colonizacion e Inmigración, 1908* (Santiago, Imprenta i encuadernación Ercilla, 1909), pp. 361-377.

El departamento de Osorno tiene una población indígena de más de once mil habitantes, y es difícil que en otro departamento se hayan ejecutado más actos de violencia contra los indígenas que en este departamento.

La calidad superior de los terrenos de Osorno, la absoluta ignorancia de los indígenas, el gran número de agentes judiciales que se ocupa de explotarlos, la poca atención y amparo que han encontrado en las autoridades, la escasa escrupulosidad de los jueces de menor y mínima cuantía y el ningún respeto que se ha tenido a las leyes prohibitivas de adquirir terrenos de indígenas, todo ha hecho que en el departamento de Osorno los indígenas hayan sido casi en la mayoría desposeídos de sus propiedades y vivan en general en la más absoluta miseria.

Con esta ocasión, desde el primer día del funcionamiento del Protectorado se ha visto invadida la Oficina por los indígenas que reclaman amparo y la devolución de lo que se les ha quitado violentamente.

El infrascrito se limitó en los dos primeros meses a tomar nota de los reclamos formulados, estampando los pocos antecedentes que, dada la ignorancia de los indígenas, han podido proporcionarles, y que le han servido en parte para investigar los verdaderos fundamentos de los reclamos.

Conjuntamente me hice parte en los juicios en tramitación que se ventilaban en el Juzgado de Osorno y en que tenían interés los indígenas, que reclamaban mi intervención.

Estos juicios, que en general aparecían como demandados los indígenas, han sido casi todos paralizados por sus actores, que fiaban para el éxito en la ninguna defensa que antes tenían los indígenas.

La comunidad en que han vivido los indígenas de esta provincia desde hace un siglo más o menos ha dado ocasión a continuas disputas entre los comuneros, disputas que antes de instalarse este Protectorado eran llevadas a la justicia ordinaria y en la que ambos litigantes eran generalmente engañados por sus defensores, los que en vez de hacerse dar poderes para juicios, abusando de la ignorancia de sus patrocinados se hacían extender poderes generales con facultades de vender, arrendar o celebrar cualesquiera clase de contratos referente a los terrenos de los mandantes.

En una palabra, generalmente los agentes judiciales, además del dinero no escaso que se hacían pagar por las defensas, se hacían dueños en alguna forma y desposeían por sí o por intermedio de terceros a los indígenas de sus propiedades.

El infrascrito ha procurado de impedir dichos juicios y en caso de desacuerdo entre los comuneros les invita a un comparendo en el que les arregla sus diferencias, que en el hecho son de escasa importancia, pues ellas versan ya sobre rotura de un cerco, pastoreo de tres o cuatro animales, destrucción de un pequeño sembrado, cambio de deslindes de los terrenos que ocupan los comuneros y por cuyos cambios nacen disputas entre los colindantes por una o dos cuadras de terrenos a lo más, y los reclamos más frecuentes son por mejor derecho a

ocupar un terreno de un comunero que se ha ausentado o ha fallecido sin dejar herederos forzosos; en fin, son disputas como he dicho de escasa importancia pero que antes eran llevadas a los Tribunales y que hoy día las arregla esta Oficina, arreglos que aceptan con agrado los indígenas disputantes.

Hasta la fecha he tenido treinta y cinco comparendos entre indígenas y dos entre indígenas y personas que no lo son, y en todos ellos he obtenido un arreglo amigable entre los disputantes.

Adjunto como documento número 1 una lista de las personas que han intervenido en estos comparendos[367].

En un principio tuve algunas dificultades para celebrar estos comparendos, a consecuencia de que los agentes judiciales, interesados en el mayor número de juicios, aconsejaban a los indígenas no venir al Protectorado sino darles poder a ellos; en estos casos con el denuncio respectivo, me hacía parte en el juicio iniciado y revocaba el poder que el indígena demandante había conferido y así en esa forma obtenía que el indígena, mal aconsejado, viniese a formular su reclamo al Protectorado, en donde no tendría gastos que hacer y obtendría un arreglo fácil y justiciero sobre su reclamo.

También se pretendió en algunos casos acompañar a los indígenas a los comparendos en el Protectorado, pero el infrascrito negó a los agentes judiciales el derecho de patrocinar a los indígenas ante esta Oficina.

Además, en un principio se quiso tener con el Protectorado una nueva oficina que diera ocasión a los agentes judiciales de hacer escritos para que se presentaran los indígenas; el infrascrito rechazó de plano estos escritos que, además de innecesarios, no daban al Protector los datos suficientes para posesionarse del reclamo y que servían solo para ocasionar gastos indebidos a los indígenas, a quienes indiqué que sus reclamos debían formularlos verbalmente.

Muchos indígenas se han presentado manifestándome que sus colindantes no indígenas pretenden despojarlos o los atropellan introduciéndose a sus terrenos y poniéndoles animales en ellos, destruyendo los cercos de sus sementeras, cerrándoles los caminos de acceso a los caminos públicos y así otra clase de atropellos; en todos estos casos he pedido al señor Gobernador de Osorno el envío de fuerza de Carabineros a amparar al indígena atropellado y a notificar al que le atropella que debe abstenerse de ejecutar actos indebidos, pues de lo contrario la fuerza pública amparará de hecho al indígena e impedirá nuevos atropellos.

Esta medida ha dado excelentes resultados, pues con ella se ha obtenido que los indígenas continúen tranquilos en los terrenos que poseen y puedan dedicarse a sus trabajos agrícolas sin temor de perderlos.

Los reclamos formulados por los indígenas que han sido desposeídos de sus terrenos se concretan a pedir la devolución de lo que se les ha quitado y sobre lo que ellos creen tener un derecho indiscutible.

[367] Los documentos anexados por el Protector Cerda no son incluidos en este volumen, p. ??.

Sobre este punto debo hacer alguna diferencia sobre los fundamentos de los reclamos.

Las Leyes de 11 de enero de 1893 y 13 de enero de 1903 ampliaron a la provincia de Llanquihue las prohibiciones de adquirir, por cualesquier medio, terrenos de propiedad indígena.

Aunque la generalidad de los reclamos de los indígenas se refieren a actos ejecutados después del año 1993, hay muchos reclamos fundados también en actos realizados antes de dicho año.

Desde luego he debido hacer diferencia entre una y otra clase de reclamos.

Me referiré primeramente a los desposeimientos de terrenos de indígenas llevados a cabo después del año 1893.

Los indígenas después de esa fecha han sido desposeídos por las siguientes causales:

1º En virtud de ventas que han celebrado los indígenas después de 1893.

2º En virtud de remates judiciales llevados a efecto en ejecuciones o juicios posesorios seguidos contra los indígenas, ya ante el señor juez letrado del departamento o ya ante los jueces de menor o mínima cuantía del departamento.

3º En virtud de juicios de compromisos constituidos después de la fecha indicada y en cuyos juicios se han rematado hijuelas pagadoras[368], formadas en terrenos ocupados por indígenas, los que han sido desposeídos de ellos.

4º En virtud de la fuerza mayor usada por los usurpadores de terrenos de indígenas, los que han desposeído a estos por medios violentos y valiéndose de la ignorancia y falta de defensa en que vivían los indígenas, y en muchos casos usando de amenazas a fin de evitar el correspondiente reclamo.

Me he dedicado primeramente a estudiar estos reclamos y buscar los antecedentes en que ellos se basan.

Para ello he debido buscar en el archivo del Juzgado de Letras de Osorno y en las notarías del departamento ya sean juicios posesorios, ejecuciones o juicios de compromisos o ya las escrituras, documentos que han servido de base para el lanzamiento de los indígenas.

De las ejecuciones seguidas ante los jueces de menor o mínima cuantía no me ha sido posible obtener dato alguno, sino en la respectiva escritura de remate o adjudicación, cuyos originales están en las notarías de Osorno.

En mi concepto, hay acción legal para obtener la reivindicación en favor de los indígenas de todos los terrenos de que hayan sido desposeídos después del año 1893, sea cualesquiera la causa del desposeimiento.

La prohibición absoluta establecida en las leyes antes citadas de 1893 y 1903 para adquirir terrenos de indígenas es lo que ha formado mi criterio en tal sen-

[368] Hijuela reservada para cubrir deudas. Véase también la entrada Hijuela en el Glosario.

tido y de ahí es que gestionaré judicialmente la devolución a los indígenas de sus terrenos de que han sido desposeídos después de 1893.

Desde luego tengo reunidos todos los antecedentes y preparadas las respectivas demandas en veinte reclamos de indígenas, demandas que presentaré ante el Juzgado de Letras de Osorno inmediatamente que termine el feriado de vacaciones; en otras me faltan aun algunos antecedentes.

En el documento adjunto número 2 encontrara US. una lista de las expresadas demandas.

Respecto a los reclamos basados en actos ejecutados antes de 1893, estimo que ellos no deben acogerse, desde que solo en esa fecha se extendió a esta Provincia la prohibición de enajenar la propiedad indígena; por consiguiente, estimo que deben reconocerse y respetarse los títulos derivados de actos o contratos celebrados con los indígenas antes de la fecha indicada.

Esto no obsta para iniciar alguna acción en favor de los indígenas, siempre que los dichos contratos celebrados antes de 1893 adolezcan según las leyes generales de algún vicio de nulidad.

Otra cuestión jurídica que se ha presentado a esta Oficina en varias ocasiones es la de saber si la prohibición establecida en las leyes de 1893 y 1903 se hace extensiva a los terrenos que algunos indígenas han comprado legalmente a terceros, con el producto de su trabajo, o si dicha prohibición se refiere solo a la propiedad indígena, esto es, a los terrenos que los indígenas han heredado en comunidad de sus antepasados y que ha sido constituida primitivamente como propiedad indígena.

En mi concepto, la ley no puede referirse sino a la propiedad indígena, por cuanto esta propiedad, que fue en su principio concedida por el Estado, es la que es susceptible de limitarse su dominio, en la forma que lo han hecho las expresadas leyes; los demás bienes que adquieren libremente de terceros algunos indígenas lo hacen usando del derecho que tiene cada ciudadano de celebrar cualquier contrato lícito, adquiriendo en este caso el dominio pleno de lo que compre, con las facultades inherentes al mismo dominio, cuales son las de gozar y disponer arbitrariamente de la cosa comprada.

Hay otra razón de carácter filosófico que afianza más mi opinión sobre este asunto.

Las leyes prohibitivas antes expresadas fueron establecidas en amparo de los indígenas que, víctimas de su ignorancia y de su pereza habitual, eran engañados fácilmente y se desprendían de sus terrenos a precios irrisorios.

Pero el indígena que no tiene de tal sino la sangre y el idioma, que no solo conserva y hace prosperar la propiedad de sus antepasados indígenas sino que se esfuerza por medio del trabajo de dar mayor ensanche a sus negocios, y que adquiere nuevas propiedades de terrenos, es posible que una ley basada en un principio de justicia viniese a limitarle sus negocios y el dominio de lo que ha adquirido no como indígena sino como todo ciudadano.

En mi concepto es indudable que no tiene este alcance la expresada ley.

Sin embargo de mi opinión sobre este asunto, me he abstenido de autorizar a los indígenas que celebren contratos sobre terrenos adquiridos en esa forma, mientras no se me dé por mis superiores un informe ilustrativo al respecto.

Aunque el art. 9 de la ley de 4 de agosto de 1874 establece que basta la posesión notoria del estado civil para constituir derechos hereditarios entre los indígenas, el infrascrito ha prestado especial interés a fin de legalizar el estado civil de éstos, recomendándoles que sin perjuicio del matrimonio religioso que ellos deseen celebrar, deben contraer matrimonio ante el Oficial del Registro Civil respectivo y legitimar los hijos habidos fuera del matrimonio legal entre los cónyuges.

Los indígenas, en general, se contentan con bautizar sus hijos sin inscribirlos en los registros de nacimientos; yo les he indicado que deben cumplir con la ley, inscribiendo sus hijos en las oficinas del Registro Civil y les facilito la inscripción ante los oficiales respectivos.

Los misioneros capuchinos, que han prestado a los indígenas servicios de consideración y que, dicho sea en honor a la verdad, han sido hasta hace poco sus únicos defensores leales, por un espíritu religioso mal entendido han descuidado de dar a conocer a los indígenas que deben respetar las leyes del Registro Civil y darles cumplimiento.

El servicio militar ha producido beneficios positivos entre los indígenas.

Sin embargo, en noviembre último acudieron a este Protectorado la generalidad de los conscriptos indígenas a pedir les obtuviese la eximición del servicio, a lo que me negué terminantemente, exponiéndoles que no solo no haría gestión en tal sentido sino que coadyuvaría a la acción de las autoridades a fin de que ningún indígena de veinte años fuese remiso en el servicio militar.

Los indígenas de esta provincia, que en general viven en estado de absoluta ignorancia, es necesario no hacerles perder la ocasión propicia que tienen para adquirir una mediana instrucción siquiera, y para que destierren la ociosidad y desaseo, que es habitual entre los indígenas.

Por otra parte, es menester despertar en estos individuos, sin la menor noción de patriotismo, los sentimientos de amor a la patria y sus deberes para con ella como ciudadanos.

Es lástima que en el espacio de un año no pueda obtenerse del indígena el abandono de todos los defectos propios de su raza.

Como lo he expresado anteriormente, los indígenas en general viven en esta provincia en la más absoluta ignorancia y no pocos de ellos ignoran aun el idioma nacional.

De los once mil y tantos indígenas de Osorno, estimo que ni el cinco por ciento no es analfabeto y los que no lo son se debe a unas pocas escuelas que sostienen los misioneros capuchinos, entre las que es digna de mencionarse el Internado de Indígenas de Quilacahuin, dirigido por el reverendo P. de Bamberga y por cuatro Hermanos cristianos, maestros de La Santa Cruz.

En este colegio se da educación, hospedaje, alimentación y vestuario gratuitamente a más de cien indígenas de ambos sexos.

Estas escuelas, especialmente la de Quilacahuin, merecen una preferente atención de los poderes públicos.

Las escuelas misionales tienen un radio de acción un poco estrecho para las necesidades de los indígenas, de ahí es que vengo solicitando del Supremo Gobierno, por intermedio de US. la creación, por ahora, de cuatro escuelas para indígenas en el departamento de Osorno, escuelas que traerán un positivo beneficio contribuyendo a la civilización de los indígenas.

A menudo acuden a este Protectorado indígenas que disputan por deslindes o por cabida con sus vecinos comuneros; el infrascrito les arregla sus diferencias, pero a fin de hacerlos tomar un acuerdo definitivo es necesario que esta Oficina tenga a sus órdenes un ingeniero que se encargue de las mensuras y entregas respectivas.

Este funcionario, además, se encargaría de la demarcación y mensura de las propiedades de indígenas a fin de hijuelarlas y distribuirlas a los comuneros e iniciar así la terminación de la comunidad de la propiedad, que ha sido la principal causa de los juicios y despojos que han sido víctimas los indígenas.

Aunque legalmente creo no tener obligación de defender a los indígenas en causas criminales, sin embargo, cuando encuentro que el indígena es víctima de acusaciones infundadas que muchas veces se traman con el objeto de quitarles sus terrenos, tomo la defensa del indígena y le ayudo a establecer su inculpabilidad.

La errada concepción que tienen los indígenas de las atribuciones del Protector, los hace comúnmente formular peticiones exageradas, que el infrascrito carece de facultad para poderlas atender en la forma que ellos desean.

Han creído que el Protector es un funcionario que no solo está ocupado de la defensa de sus intereses sino que tiene facultades judiciales para resolverles de plano los reclamos que ellos formulan, y que además en todo caso debe gestionar sus reclamos, aunque ellos no tengan fundamento.

En repetidas ocasiones se presentan indígenas por quienes debo iniciar acción judicial a su favor, con exigencias de que en un plazo perentorio debo ordenar la entrega del terreno que se les ha quitado; les manifiesto que carezco de facultades para aquello, pero que gestiono judicialmente su petición, la que en su duración está sometida a las contingencias de todo juicio; no aceptan esta explicación y atribúyenla a mala voluntad del Protector en defenderlos, creencia que les afianza generalmente algún agente judicial, interesado en que el indígena acuda ante él y no al Protectorado.

Ahora en los reclamos que formulan y que el infrascrito les manifiesta no tener la razón, no aceptan jamás que ello sea así, sino que lo atribuyen a negligencia del Protector o acuerdo con el contrario, y aconsejados por sus antiguos defensores formulan acusaciones en su contra.

Así por ejemplo, ocurre que se presentan reclamando la devolución de terrenos que sus padres o abuelos con derecho legítimo a ellos mismos han enajenado

legalmente antes del año de 1893, arguyéndome en muchas ocasiones "que la venta es inexacta", no obstante de estar la escritura en el protocolo respectivo; otras veces, y es en lo normal, me dicen: "mi padre o mi abuelo será vendedor; pero yo no lo soy", y es inútil manifestarles que siendo ellos solo herederos de sus antepasados no han podido heredar los que sus causas habientes no tenían; atribuyen como he dicho a desatención de sus deberes de parte del Protector y formulan acusaciones que felizmente me es fácil desvanecer.

Ocurre también que se trata de dar cumplimiento a sentencias de primera y segunda instancia que tienen el carácter de sentencias de término, y sobre cuyos juicios no hay recurso alguno que poder formular y basados en títulos perfectamente legales, sin embargo los indígenas exigen al Protector les ampare en sus posesiones, siéndome inútil manifestarles que mi misión es defender a los indígenas ante los Tribunales de justicia y que, tratándose de juicios con sentencias de término, no hay defensa ya que poder formular a su favor, les agrego lo siguiente:

> "el Protector es en los juicios como un médico ante un enfermo, que su misión termina con la muerte del doliente, así también el juicio con sentencia de término es como un muerto ante el cual el Protector nada puede hacer en favor de los indígenas a quienes afecta la dicha sentencia".

Todas estas explicaciones las rechazan los indígenas y, como lo he dicho, las atribuyen a confabulación del Protector con sus contrarios.

El infrascrito tiene que desentenderse de esas quejas desde que no le sería posible, solo por agradar a los reclamantes, iniciar juicios absolutamente infundados.

La comunidad de la propiedad de los indígenas ha sido en mi concepto la causa principal del sinnúmero de juicios de los indígenas de este departamento, y de los continuos despojos de que estos han sido víctimas, y la mala constitución que tiene en general la propiedad y que ha dado y dará ocasiones para mayor número de juicios que impiden o retardan el progreso de esta importante región del país.

En primer lugar, la comunidad de la propiedad de los indígenas durante varias generaciones ha hecho que estos vivan agrupados, conservando el idioma y costumbres primitivas, manteniéndose reacios a todo espíritu de civilización.

En seguida, algunas personas no indígenas, guiadas por el interés de adquirir terrenos de calidad superior ocupados por indígenas, compraban a algunos comuneros, a precios generalmente supuestos, sus acciones y derechos sobre alguna propiedad indígena; con ese título pedía la posesión proindivisa del terreno y entraba a ocupar no solo lo que pudiera corresponder a su vendedor sino que estrechaba y desposeía a otro comunero, el que iniciaba querella por despojo contra el atropellante, querella que perdía el indígena porque su defensor, que

lo era un agente judicial, se entendía con el contrario: cuando el indígena no era despojado por una transacción, lo era por ejecución que se le seguía por las costas judiciales del despojo, y así se continuaba el desposeimiento de los indígenas de sus terrenos.

Este método, que principió a usarse antes del año de 1893, se ha practicado con toda actividad después de esa fecha, no obstante la prohibición establecida para adquirir terrenos de indígenas, ley que en este departamento no se ha respetado en absoluto.

Por eso estimo que la manera de civilizar completamente a los indígenas y de impedir los despojos de estos es concluir con la comunidad en que viven, procediéndose a la demarcación y entrega de lo que les corresponde a cada indígena según sus derechos hereditarios.

El proyecto de ley sobre indígenas aprobado por el honorable Senado y cuya aprobación pende de la honorable Cámara de Diputados traerá beneficios de consideración a los indígenas de esta provincia y al progreso mismo de ella.

Desde luego, terminando la indivisión de la propiedad y estableciendo entre los indígenas la instrucción obligatoria, se conseguiría en corto tiempo la civilización de éstos, que no se ha conseguido con el régimen actual durante más de un siglo, y la desaparición de los indígenas como raza.

Muchas resistencias ha despertado dicho proyecto de ley entre los propietarios de este departamento, que ven con él una amenaza a sus derechos.

Ese temor ha venido de las disposiciones que establecen que no se reconocerán los títulos basados en compras de acciones y derechos y que se radicará al indígena en el terreno que ocupa. Con estas disposiciones los indígenas, mal aconsejados, se han creído que se les radicará donde viven, sean en él dueños o no y ha habido casos en que indígenas que me dicen ser inquilinos en un fundo se oponen a que se les retire de él por creerse legítimos dueños por los derechos que dicen les reconoce el mencionado proyecto.

Esa interpretación no puede ser más absurda; lo que establece dicho proyecto es lo natural, es lo que generalmente se hace cuando se procede a la división de un bien poseído en comunidad, se prefiere adjudicar al comunero la hijuela que ocupa en donde ha hecho trabajos y tiene habitaciones, lo mismo entre los indígenas, dice el proyecto, se le radicará en el terreno que ocupa, esto es, en el terreno que posee con ánimo de dueño como comunero del fundo, y no puede creerse que una ley basada en un principio de justicia viniere a sancionar una violación del derecho de propiedad ordenando se radique al indígena donde vive, sea o no dueño.

Se le radicará en el terreno que ocupa como dueño y con derechos hereditarios legítimos, pero en ningún caso podrá creerse que se le va a radicar en un terreno ajeno, en el que un tercero tiene títulos de propiedad, legítimamente constituidos.

Ahora, respecto a la disposición que establece que no se reconocerán los títulos basados en compra de acciones y derechos, es indiscutible que ella no puede

referirse sino a las adquisiciones hechas después de la prohibición de la ley, por cuanto los títulos constituidos antes de esa fecha son perfectamente legítimos y no podrían ser desconocidos desde que ellos fueron constituidos al amparo de las leyes vigentes a la época en que se constituyeron; ahora, respecto a las compras de acciones y derechos realizados después de 1893, ellas son nulas en absoluto desde que existen las leyes prohibitivas, y no hay necesidad que una nueva ley venga a reconocer esa nulidad.

Con el respeto que debo a mis superiores, me permito manifestar que esta última disposición es en mi concepto absolutamente innecesaria y que solo ha servido para despertar resistencias a la expresada ley.

Como tengo conocimiento que los enemigos del proyecto de ley sobre indígenas dificultarán su aprobación definitiva, he confeccionado un nuevo proyecto sobre indígenas, el que consulta los puntos más esenciales para la defensa y radicación de los indígenas y que no tiene los inconvenientes (sin fundamento) del proyecto en discusión.

Adjunto dicho proyecto como documento número 3.

Esta Oficina hasta el 1 de enero estuvo solo a cargo del infrascrito y desde esa fecha presta sus servicios como escribiente don Eudoro Robles B., y como portero-intérprete don Arturo Fuentes, propuestos ambos por el infrascrito para dichos cargos al Supremo Gobierno por intermedio de US.

Es de desear que sus nombramientos sean extendidos tan pronto como sea posible, pues sus servicios son absolutamente indispensables para el buen funcionamiento de esta Oficina.

Como US. tiene conocimiento, mi acción como Protector de Indígenas ha estado circunscrita hasta ahora al solo departamento de Osorno que tiene, como he dicho, una población de once mil trescientos cuarenta indígenas, y que materialmente me ha sido imposible ir a los otros departamentos que, unidos, tienen solo cuatro mil indígenas, pues la atención diaria de los reclamos de los indígenas de Osorno, la falta de otro empleado que el infrascrito en esta Oficina antes del 1 de enero es lo que ha impedido hasta hoy trasladarme como lo he deseado a Puerto Montt; sin embargo, el 10 del presente mes de febrero me trasladé a aquel lugar a atender a varios reclamos que tengo formulados por los indígenas de ese departamento.

En consecuencia, la presente Memoria se refiere solo al servicio de este Protectorado en el departamento de Osorno.

Mi constante preocupación en el cargo que desempeño ha sido trabajar en bien de los indígenas, que con tanta injusticia han sido desposeídos de sus terrenos en esta provincia. Dentro de lo posible he obtenido lo que he deseado en este departamento en el desempeño de mi misión impidiendo nuevos contratos y nuevos despojos de indígenas y gestionaré con todo entusiasmo la devolución de lo que se les haya arrebatado injustamente, sin considerar en absoluto quienes sean afectados por las acciones que iniciaré en favor de los indígenas.

Creo en esa forma hacerme digno de la confianza con que me honró el Supremo Gobierno al confiarme este cargo.

Daniel Cerda A.

Osorno, febrero 9 de 1909.

1909
EULOGIO ROBLES
MEMORIA DEL PROTECTOR DE INDÍGENAS DE TEMUCO[369]

Señor Inspector:

El trabajo de la Oficina a mi cargo en el año próximo pasado solo puede hacerse normalmente en los último seis meses, pues, en los anteriores, con motivo del incendio del 18 de enero que consumió veintidós manzanas de esta población, resultó destruida la casa en que funcionaba el Protectorado; y para atender al servicio hube de recurrir a la Intendencia en demanda de un local mientras se concedían fondos para pagar otro y reponer los muebles y útiles perdidos.

Debo dejar constancia que el Intendente señor Diego Rivera y su secretario señor Vera Pinto me proporcionaron las facilidades de que podían disponer, permitiéndome que ocupara la pieza del propio secretario en las horas que no despachaba.

En tales condiciones, el servicio tuvo por fuerza que resentirse y me vi obligado a circunscribirlo preferentemente a dar audiencias al público, ya que no era posible que muchos de los que con sacrificios acudían en solicitud de la intervención de la Oficina quedaran defraudados en sus expectativas.

Los informes y otros trabajos que exigían algún estudio y más atenta consideración tuve que postergarlos.

No se ha dejado copia de muchas de las piezas que salieron de la Oficina, pues se careció por algún tiempo de libros copiadores; pero, por las cifras que van a continuación, puede Ud. formarse idea de cual ha sido su labor.

Notas a la Inspección, a Intendentes, Gobernadores, Subdelegados y escritos a los Juzgados de Letras	613 piezas
Informes al Ministerio, a la Inspección, al Intendentes y Juzgado de Letras	101 piezas
Total	774 piezas

Como siempre, los reclamos más graves han sido originados por invasiones de extraños a terrenos de indígenas, llevados a cabo por colonos y rematantes que con ellos deslindan.

[369] "Memoria del Protector de Indígenas de Temuco", en *Memoria de la Inspeccion Jeneral de Colonización e Inmigración, 1909* (Santiago, Imprenta Cervantes, 1910), pp. 336-351.

En estos casos no son tan culpables, como pudiera creerse, los invasores, por cuanto las líneas divisorias no han sido bien definidas y porque los indios no cierran sus predios, obligación que, a juzgar por lo dispuesto en el art. 11 de la ley de 4 de diciembre de 1866, no reza con ellos, recayendo de lleno en los subastadores de tierras fiscales y en los que han sido agraciados con una concesión a titulo de colonos.

La infracción de las prohibiciones legales dictadas con el objeto de resguardar el dominio y posesión de los terrenos de indígenas por parte de estos mismos motivan odiosas complicaciones. Es de advertir que hay pocos araucanos que ignoran que no pueden desprenderse a título alguno de la tenencia de sus terrenos y, sin embargo, lo hacen por medio de arrendamientos o dejándolos encargados a extraños en sus frecuentes viajes a la Argentina.

Los arrendatarios pagan siempre cánones bajos y, cumplido el plazo, se resisten hacer entrega de la casa arrendada.

Los guardadores se resisten asimismo a la devolución de las tierras que tenían en custodia.

En esto casos, cuando se arriba a un buen avenimiento con el indio, mediante el pago razonable por el tiempo de la ocupación, se les permite hacer sus cosechas, y cuando el avenimiento no se verifica se somete la cuestión al conocimiento de la justicia ordinaria.

Muchos de estos ilegítimos ocupantes, al oírles la respuesta del reclamo que en su presencia formulaban los indios, han expuesto como argumento aplastador la circunstancia de que viven en las tierras de estos por más de diez o doce años, lo que a su juicio les daba derecho para quedarse definitivamente en ellas, sin rendirse a la consideración hecha por nuestra parte que la violación por tan largo tiempo de las leyes que prohíben ocupar bajo pretexto alguno estas tierras, antes de favorecerlos, agravan su situación.

No pocos esfuerzos han sido necesarios, señor Inspector, para hacer comprender aun a personas de relativa preparación y, al parecer, de criterio común la fundamental diferencia existente entre terrenos fiscales y terrenos de indígenas, que querían considerarlos como una misma cosa y, mirando los terrenos fiscales como de todos, al amparo de este error han querido adueñarse de los de los indios.

Reclamos numerosos y complicados han motivado las radicaciones, en que casi siempre los indios se creen lastimados en sus derechos, alegando que se les deja menos suelo que el realmente poseído; pero la causa de estas dificultades desaparecerá en breve a juzgar por el impulso que se está dando a estas operaciones, que hace esperar fundadamente que está próxima su terminación, dejando así constituida a firme la propiedad indígena.

Por lo que se refiere a las provincias de Cautín y Malleco, me es grato dejar constancia que ya no se producen reclamos tan graves como los de antes y si existen abusos de que se hace aún víctimas a los indios, son muchas veces inevitables, por la fuerza misma de las cosas, dada la desigualdad de cultura entre

ellos y los demás pobladores, y porque es humanamente imposible extirpar en corto tiempo abusos y atropellos seculares.

El año pasado, como el anterior, careció esta oficina del Ingeniero que le venía prestando sus servicios desde 1901 y que pasó por disposición superior a prestarlos a las órdenes del Director de la Oficina de Mensura de Tierras, teniendo en esa repartición administrativa el mismo cargo que tenía en el Protectorado, el de subdividir la propiedad indígena, operación que, como lo he repetido, es de la mayor importancia, porque el régimen de comunidad hizo su época entre los araucanos, cuyo anhelo es disponer cada familia de una extensión determinada de terrenos que cultivar sin verse molestados por otros que pretenden, a título de comuneros, derecho al usufructo de ese mismo retazo de suelo.

En el año actual dispondrá el Protectorado de Temuco de este funcionario que se dedicará no solo a la tarea de la subdivisión de la propiedad indígena, sino a la de auxiliarlo con informaciones de hecho que son previamente indispensables para iniciar juicio reivindicatorios y de deslindes, los más frecuentes que se presentan.

Se ha segregado del Protectorado de Temuco la provincia de Arauco, medida acertadísima, cuya adopción he estado solicitando constantemente, porque los indios que la pueblan estaban excluidos en la práctica del amparo de que podía prestarles, tanto por la dificultad de los viajes a ella como por lo complejo de sus reclamos.

No me era posible efectuar a Arauco, Lebu y Cañete viajes cortos como los que hago, sin desatender mis obligaciones de Temuco, a otros puntos de este lado de la Cordillera de Nahuelbuta. Además, en cortas temporadas en esos pueblos no habría podido llevar a cabo labor eficaz, porque tendría que haber instaurado muchos juicios que habrían exigido mi presencia constante hasta su terminación, dejando de mano mis tareas en Temuco, tanto administrativas como de índole contenciosa.

Con motivo de varios e insistentes reclamos que venían de Arauco, no pude menos que dirigirme a ese pueblo para ver modo de remediarlos, como no fuera con paliativos, y permanecí en él parte de febrero y marzo.

Di audiencia en la Gobernación, tomando nota minuciosa y detallada de los reclamos que me llevaron buen número de indios y saqué el convencimiento que mi viaje había sido inútil y que para hacer algo práctico debía resolverme a permanecer indefinidamente en ese pueblo.

Son tanto más difíciles las cuestiones de Arauco y Lebu cuanto que ninguno de esos indios tiene título de merced.

Más sencillos son los del departamento de Cañete en que hay muchos que han sido radicados, pero cuyos suelos están ocupados en gran parte por usurpadores.

A los reclamantes del nombrado departamento los proveía de oficios para el Gobernador en que exponía la materia del reclamo, la circunstancia de tener el reclamante título de merced, que lo hacía dueño de un terreno cuya cabida,

ubicación y deslinde expresaba, agregando que el suelo delimitado en el título solo podía ser poseído por las personas que en el mismo se enumeraban, porque las leyes de 20 de enero de 1883 y 13 de enero de 1903 prohibían a los particulares celebrar con los indios contrato alguno que pudieran privarlos directa o indirectamente del dominio, posesión o tenencias de sus terrenos, y concluía pidiendo al señor Gobernador hiciera notificar al injusto ocupante para que abandonara la reserva indígena, bajo apercibimiento de deducir ante la justicia ordinaria la acción correspondiente.

Varios de estos oficios surtieron buen resultado, porque algunas de las personas contra las cuales reclamaban los indios creían de buena fe ocupar terrenos fiscales y los abandonaban cuando se les hizo saber que no lo eran.

Otros fueron rebeldes a estas amonestaciones y hubo que recurrir a la justicia, para lo cual proveí a los interesados de las competentes presentaciones, aparejados del título de merced respectivo, encargando entregaran el escrito en la Secretaría del Juzgado de Letras y dándoles minuciosas instrucciones; pero, según me impuse, los indígenas se contentaban con dejarlos en la secretaría, sin activarlos y sin cumplir ninguna de mis prescripciones.

Aun con la creación de un nuevo Protectorado en el territorio fronterizo, resulta, no obstante, que no se provee en forma a la defensa judicial de los araucanos, pues no se remueve la dificultad que estriba en que no es practicable su defensa y representación simultánea en siete departamentos.

Bien sabe el señor Inspector que el tiempo es uno de los elementos más importantes para la eficacia de una acción judicial, pues en los plazos fijados por la ley han de producirse todas las tramitaciones y diligencias, y dejando de hacer valer un derecho en el término concedido, se extingue irrevocablemente. Por esto es que un mandatario judicial, calidad que por el ministerio de la ley tiene el Protector de Indígenas, debe estar atento a los plazos, y a la producción de las actuaciones en la debida oportunidad, y esto es imposible si tiene varios litigios en distintos departamentos.

Sin agentes que me secunden no es dable, sino en casos muy calificados, promover litigios en varios departamentos a la vez, porque no es difícil que resultara que no pudiéndolos atender simultáneamente, se corriera el peligro de consagrar con todas las apariencias de la justicia los abusos mismos que se trataba de remediar.

Por falta de cumplimiento de la ley de alcoholes, se continúa en la primitiva forma de pacificar la Araucanía, mediante la intoxicación por bebidas espirituosas de pésima calidad.

A vista de las autoridades se sigue envenenando a esta raza, sobre todo en los suburbios de las poblaciones y en aldeas cuyas pulperías son a modo de cantinas de indios, adonde acuden después de medio día a hacer libaciones de jamaica y de vinos adulterados, a los cuales se agrega fuerte dosis alcohólica.

En las ventas de los campos y de los caseríos se expende frecuentemente bebidas alcohólicas sin haber obtenido sus dueños la respectiva patente, y en esos lugares se promueven a menudo reyertas sangrientas.

Aun he presenciado el triste espectáculo de mujeres a caballo, paradas frente a las varas que se colocan delante de los despachos y que sirven para las "topeaduras"[370] con sus pequeñuelos en los brazos, apurando en amarillento líquido el veneno que ha de concluir con su salud y que traerá por consecuencia la muerte o degeneración de los hijos que amamantan.

Dejo constancia de estas graves infracciones a la ley de alcoholes, ejecutadas muchas veces con la complicidad de aquellos que están encargados de velar por su cumplimiento.

En la Memoria de esta Oficina, correspondiente al año pasado, hice completa exposición de todos los proyectos de ley que se han presentado al Congreso en los últimos veinticinco años con la mira de legislar sobre tierras públicas y sobre indígenas. Dos de esos proyectos alcanzaron a ser aprobados en la Cámara de Senadores. En esta situación se encuentra el elaborado por el Ministro señor Puga Borne; pues parece que no se convertirá en ley.

Así también lo estima el señor Director de la Oficina de Mensura de Tierras, de quien he recibido la siguiente comunicación:

Santiago, 17 de noviembre de 1908.
Señor Protector de Indígenas.
Temuco.
Presente.
Muy señor mío:

El proyecto de ley sobre indígenas, pendiente de la consideración de la Cámara de Diputados, ha encontrado tropiezos que harán inútil toda tentativa de despacho en esa forma, por lo que el infrascrito ha creído que sería oportuno someter a la consideración del Supremo Gobierno un nuevo proyecto que, consultando las ideas urgentes de ser aceptadas, no encuentre los obstáculos del otro proyecto, y del que me permito adjuntarle una copia, a fin de que Ud. se digne manifestarme su opinión o presentarme las indicaciones que juzgue oportunas al caso.

Me es grato saludar a Ud. atentamente.
E. Risopatron.

Santiago, noviembre de 1908.
Nuevo proyecto de ley relativo a los indígenas.

1º Se declara que la acción de la Comisión Radicadora de Indígenas y de los diversos Protectores de Indígenas se extenderá a las provincias de Biobío, Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Llanquihue.

[370] Gustave Verniory cuenta que frente a las cantinas había siempre una vara, contra la cual se solía hacer el juego llamado "topeadura": "una fila de jinetes, junto, bota con bota, los pechos de los caballos contra la vara. A un extremo de la vara, colocado perpendicularmente a los otros, un jinete trata de pasar entre la vara y la fila, barriendo a ésta". Gustave Verniory, *Diez años en la Araucanía, 1889-1999* (Santiago, Pehuén, 2001), p. 104.

2º Los sueldos de estos funcionarios serán los que fije anualmente la ley de presupuesto de gastos.

3º Solo el Juez de Letras será competente para conocer en los juicios en que los indígenas sean parte o tengan interés y que se refieran a los terrenos en que hubieren sido radicados. Los indígenas litigarán con privilegio de pobreza.

Siempre que hubiese duda sobre la calidad de indígena, resolverá en definitiva el Presidente de la Comisión Radicadora o el Protector de Indígenas, según los casos.

Deferente a los deseos del expresado funcionario, formulé a su proyecto las siguientes observaciones:

Art. 1. En cuanto al radio al cual legalmente hoy la Comisión Radicadora y de los Protectores de Indígenas, hay que recordar que algunos estiman que la ley de 4 de diciembre de 1866, modificada únicamente en cuanto a la composición de esa Comisión, por el art. 2 de la ley de 20 de enero de 1883, debe ser aplicada solo en lo que antiguamente se llamaba la Araucanía y que, por consiguiente, no podría llevar sus operaciones a los territorios de ultra Toltén.

Hay respetables opiniones en este sentido; pero es de advertir que han sido desestimadas por el Supremo Gobierno, por cuanto las ha hecho extensivas al sur del mencionado río.

Aun cuando está fuera de lugar reproducir los argumentos aducidos en pro y en contra de este modo de resolver la aplicación de la ley de radicaciones, nosotros creemos que para sostener la opinión contraria a la del Gobierno, se han confundido dos expresiones a las cuales la ley da distinto alcance: la de "territorio fronterizo de indígenas", que es el determinado por el art. 3 del decreto ley de 7 de diciembre de 1857, y la de "territorio habitado por indígenas" que, como literalmente suena, es aquel en que viven indios. Esta equivalencia de expresiones no puede, a nuestro modo de ver, sostenerse, una vez que se conozca la ley de 2 de julio de 1852, que creó la provincia de Arauco, cuyo artículo primero en su tercer inciso, dice lo siguiente:

"Los territorios habitados por indígenas y los fronterizos, se sujetarán al régimen que, atendidas sus circunstancias especiales, determine el Presidente de la República".

Con todo, para evitar anfibologías, estimo aceptable el artículo propuesto por el señor Director, pero considerándolo como ley interpretativa y redactándola en la forma siguiente en lo que se refiere a la Comisión de Títulos de Merced: "Se declara que la acción de la Comisión Radicadora se extiende, etc.", suprimiendo "se extenderá", frase que podría interpretarse que antes la ley no la extendía a ellos, dejando así sin base legal las radicaciones efectuadas en la provincia de Valdivia.

En cuanto a la acción de los Protectores de Indígenas en ejercicio, está determinado por la ley de presupuesto vigente, y todos según lo expresa esa ley, tienen las mismas facultades que el Protector de Temuco.

> Habrá en cada una de las provincias de Arauco, Cautín, Valdivia y Llanquihue un letrado que, con el título de Protector de Indígenas, estará encargado de la defensa y representación de estos con las atribuciones contempladas en las leyes. Habrá un solo Protector para la defensa y representación de los indígenas de Biobío y Malleco.
>
> Estos funcionarios tendrán los empleados que designe el Presidente de la República, según los fondos que para ello se consultaren anualmente en la ley de presupuestos.

Art. 2 Estimo que no hay razón ni conveniencia en sustraer los sueldos del Presidente de la Comisión Radicadora y de los Protectores de Indígenas a la regla general que fija a los empleados públicos en la ley que los crea los emolumentos respectivos.

Es peligrosa esta situación porque el empleado no sabe con qué entrada contará el año venidero y de esta falta de estabilidad puede derivarse el inconveniente de que quiera abandonar su puesto, para labrarse situación segura, y así no se consigue formar funcionarios que tengan todo el conocimiento que solo puede dar la experiencia.

Propondría que se les fijara el sueldo.

Art. 3 En casi todos los asuntos contenciosos que versan sobre terrenos y en que son parte o tienen interés los indígenas, entienden hoy los jueces letrados. De modo que nada se reforma con esta disposición y le daría la forma que tiene en el proyecto del señor Puga Borne, modificando una frase:

> "Todo juicio en que sean parte o tengan interés los indígenas son de la competencia del juez letrado y usarán en ellos papel simple y no causarán derecho de ninguna especie".

En los juzgados de menor cuantía se estafa y se roba al indio del modo más inicuo y es deber de moralidad poner remedio a tan bochornosa explotación, hecha a la sombra de la justicia y llevada a cabo muchas veces por los mismos encargados de administrarla, como me consta.

El segundo inciso de este artículo me sugiere la observación que es peligroso librar a la infabilidad de uno de los funcionarios propuestos la resolución definitiva cuando se susciten dudas acerca de la calidad de indígenas, de la cual fluyen derechos importantes.

Propondría el siguiente inciso en vez del inciso del proyecto:

> Siempre que hubiese duda acerca de la calidad de indígena se estará a la resolución conforme del Presidente de la Comisión Radicadora, del Protector de Indígenas y del Promotor Fiscal.

No produciéndose la conformidad, resolverá en definitiva, breve y sumariamente el juez letrado oyendo a dichos funcionarios.

Se da entrada al Promotor Fiscal porque en esta resolución puede resultar interesado el Fisco.

Agregaría al proyecto el artículo siguiente: "Es absolutamente nula toda escritura pública o privada otorgada por indígenas si no son asistidos en el momento de la firma por el respectivo Protector".

Creo oportuno no dejar en silencio la afirmación contenida en el siguiente párrafo de un artículo publicado en *El Mercurio* de Santiago por el señor Ramón Briones Luco, ya que la hace un inteligente e ilustrado ex funcionario del servicio a su cargo que, comentando su última Memoria, dice lo siguiente:

> Es sensible también que en la "Memoria" se insista en desconocer la situación real del indígena, y los tropiezos que su inferioridad opone al progreso de la región austral.
>
> Uno de los distinguidos protectores, el señor Irribarra, pinta con abundancia de datos y en un estilo ameno, que llamaríamos alegre si el tema no fuera tan triste, los embustes y traiciones de que son víctimas los indígenas, y a los cuales a veces estos mismos se prestan voluntariamente, incitados por el aliciente del vicio.
>
> Asesinatos, robos, falsificaciones, incendios, suplantación ideal dejando la civilización de los araucanos en poder de la iniciativa privada de las confesiones religiosas, que han tomado esta obra humanitariamente a su cargo, sino llevándose a cabo de modo sistemático por la acción del Estado.
>
> Afortunadamente, ya nadie opone a este alto deber la objeción basada en que los araucanos son refractarios a la cultura, como lo han repetido órganos serios de la prensa santiaguina, ni puede leerse la misma errónea afirmación en documentos oficiales que se creería tan autorizado para hacerla, como lo son las Memorias de la Inspección de Tierras y Colonización de otros tiempos.
>
> Incrementar la población útil de un país con elementos nativos, vinculados fuertemente a su suelo por amor y por tradición, entiendo que es ideal superior al de poblarlo artificialmente con habitantes exóticos que no dominan el idioma, que no pueden fundirse por completo en el pensamiento nacional, que, junto con enfermedades antes desconocidas, traen ideas disolventes y que, a la postre, burlando los sacrificios del Estado, se dirigen en parte a la Argentina u otros países.
>
> Bien sé que el criterio que mueve a los poderes públicos a votar fondos para el fomento de la colonización con extranjeros no es solo hacer productivas por medio del trabajo zonas que no lo son, sino que se consultan también las aptitudes, mejores métodos de trabajo, mejor preparación, en una palabra, de los nuevos pobladores para que sirvan de ejemplos vivien-

tes; pero ese criterio no excluye de ninguna manera al de fomentar la población del país, por medios más lentos, convirtiendo en ciudadanos chilenos útiles a los indígenas que vegetan en los campos en estado muy próximo a la semi barbarie.

El problema indígena es problema de cultura.

No alcanzo a comprender cómo, después de leerse lo anterior, se pueda decir que se insiste en desconocer la situación real del indígena, siempre que no se afirme que son refractarios a la cultura.

Tendré que repetir que esta Oficina no cree que deba conservarse al indio como una curiosidad étnica.

No están los araucanos tan distantes de nuestro pueblo como estaban los indígenas de Tasmania y los maoríes de Nueva Zelandia de los europeos que los subyugaron.

Queremos que sea un extranjero quien conteste a semejante injusta afirmación.

El distinguido pedagogo alemán, Doctor don Rodolfo Lenz, en una obra de grande aliento titulada *Diccionario etimolójico de las voces chilenas derivadas de las lenguas indígenas americanas,* en el prólogo de la primera parte dice lo siguiente:

Escribo para aquellas personas eruditas que desean saber como habla el pueblo chileno, y en particular, cuántas cosas tuvieron que aprender los orgullosos castellanos de los pobres indios a quienes tanto despreciaban. Verán cuantos útiles conocimientos del pueblo chileno actual son debidos al indio que puso nombre a tantas plantas y a tantos animales, que enseñó a gozar de la naturaleza del país para la mantención física con los numerosos guisos de su cocina y para la conservación de la salud con los innumerables remedios. Quizás con sorpresa oirán que aun industrias como el telar no las debe el chileno a España sino al indio.

Escribo para todos los que buscan el significado y el origen de tantas palabras que, por más que se diga, forman parte del patrimonio chileno.

No hace un siglo todavía que los chilenos se gloriaban de ser descendientes de la más valerosa raza americana por la mitad de su sangre. En mi libro verán sin falsa vergüenza hasta qué grado le deben también su lengua, su pensamiento. Este enorme número de palabras araucanas y quechuas incorporadas en la lengua castellana son como las cicatrices de la lucha gigantesca en que el español de Chile venció al indio de Chile, y lo obligó a aprender un idioma europeo y a formar con él una nacionalidad nueva y firme, la más sólida y homogénea que se engendró en suelo americano pisado por españoles. (...)

Los mismos chilenos no saben apreciar como está la cuestión de razas y lenguas en la mayor parte de las demás naciones sud-americanas. Talvez en ninguna de ellas el indio de un modo tan completo ha dejado de ser un factor

de importancia como en Chile, donde solo en las provincias de la antigua frontera quedan indígenas cuya asimilación al chileno adelanta cada año y cada día. (...)

Ojalá que mis estudios contribuyan a hacer simpática la figura del indio para que se comprenda que esos millares –mas de cincuenta, quizas ochenta– no deben ser aniquilados cuanto antes, sino civilizados y asimilados a la nación chilena[371].

La razón que consulta en todas las legislaciones garantías para los incapaces es la misma que se ha tenido para dictar las leyes que resguardan la propiedad indígena.

¿Querrían suprimirse inconsideradamente esta legislación especial?

Si, como lo reconoce el señor Briones, hay delitos como los de robo, incendio, falsificaciones, suplantación, etc., que peculiarmente se cometen contra los indios ¿sería desconocer su situación real si se pide la represión enérgica de tales hechos delictuosos?

Las leyes que se dictaran con este objeto no aparecerían en nuestra legislación como algo nuevo, sino que tendrían la misma razón de ser que las que especialmente se han dictado para reprimir los homicidios, hurtos, robos, incendios y accidentes de ferrocarriles, pues, si recrudece un género de delitos hay que tratar de combatir esa manifestación especial de delincuencia.

No es desconocer la situación real de los araucanos si se proponen medidas, no para evitar su absorción por nuestra raza, que tiene mucho de su sangre, sino para evitar su destrucción.

La tendencia moderna no es la extinción del indígena sino su incorporación a la vida civilizada.

Es lo que pasa en Estados Unidos y en el Canadá, pues, como lo hice ver en la exposición contenida en mi anterior Memoria, en el primero de los países nombrados se gasta anualmente dos millones de dólares para sostener escuelas para sus aborígenes que apenas alcanzan a ciento treinta mil, y cuatro cientos mil en funcionarios que tengan a su cargo los servicios que se relacionan con su defensa y civilización. También cité el caso de existir en el Canadá un Departamento de Negocios Indígenas.

Me es grato reproducir párrafos de una carta que sobre el particular recibí de fray Jerónimo de Amberga, religioso capuchino que, con apariencia modesta, oculta vasta ilustración y criterio clarísimo. No está de más que manifieste que este padre fue repetidor en las asignaturas de lenguas orientales en una universidad alemana.

Los párrafos aludidos son los siguientes:

[371] Rodolfo Lenz, *Diccionario etimológico de las voces chilenas derivadas de las lenguas indíjenas americanas* (Santiago, Imprenta Cervantes, 1905-1910), pp. 41-42.

No solamente en los Estados Unidos y el Canadá se ha abierto camino la idea de proteger y defender al indígena, sino que Francia y Alemania quieren hacer lo mismo en estilo grande con sus colonias. El axioma fundamental que estableció el director general de las colonias alemanas es: "*El capital más precioso de la colonia es el Indígena*". Después de duras luchas, desengaños, fracasos, llegan los europeos a esta máxima fundamental y sencilla; se han establecido comisiones para estudiar los derechos de los indígenas; se exige una preparación especial para los empleados, conocimientos lingüísticos y económicos, se crean intendentes al lado de los gobernadores con el destino de solucionar las dificultades; se crean escuelas agrícolas, etc., y todo esto para negros cuyo estado de civilización es inmensamente inferior al de los indios de aquí.

Es de desear que nosotros, que tanto copiamos del extranjero, imitemos el ejemplo que respecto a los indígenas nos ofrecen, en su país, Estados Unidos y Canadá, y en sus colonias, Alemania y Francia.

Saluda atentamente a Ud.

Eulogio Robles Rodríguez.

1910
MANUEL LABBÉ
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS DE ARAUCO[372]

Señor Inspector General de Colonización:

Tengo el honor de elevar a Ud. la Memoria correspondiente al Protectorado de Indígenas de Arauco a mi cargo, durante el año de 1910 próximo pasado.

El movimiento de la Oficina durante el año en Memoria, ha sido el siguiente:

Reclamos oídos	70
Notas dirigidas a la Inspección y otras autoridades	62
Informes evacuados	12
Cartas dirigidas	85
Juicios tramitados	21
Apelaciones diligenciadas ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción	14

Los juicios iniciados y tramitados, con indicación de la acción entablada y su estado actual, son como sigue:

Del cacique Lorenzo Pilquiman y su reducción contra Ané del C. y Pascual González, por reivindicación de cincuenta cuadras, más o menos, de terreno que le detentan en el lugar de Ranquilhue, 8ª subdelegación del departamento de Cañete, que es donde está ubicada esta reducción. El juicio se encuentra actualmente en estado de alegar de bien probado, por mi parte.

El mismo cacique y su reducción contra Francisco Leal, por reivindicación de veinticinco cuadras, más o menos, de terreno, en el mismo lugar. La causa se encuentra actualmente en estado de que se practique en marzo próximo una inspección ocular del juez al lugar del juicio.

Del cacique Lorenzo Lepin Millahual y su reducción contra don José Campelo, sobre reivindicación de veinte cuadras, más o menos, de terreno en el mismo lugar de Ranquilhue. Se encuentra actualmente en estado de que el demandado responda al alegato de bien probado, de mi parte.

El mismo cacique contra Froilán Fernández, sobre reivindicación de tres retazos de terreno en el mismo lugar. Se encuentra en estado de rendir prueba.

El mismo cacique contra Jerónimo Aguayo, sobre reivindicación de veinte cuadras de terreno, en el mismo lugar. Se encuentra en apelación ante la Iltma.

[372] "Memoria de la Oficina del Protectorado de Indíjenas de Arauco", en *Memoria de la Inspección Jeneral de Colonizacion e inmigración, 1910* (Santiago, Imprenta i Encuadernacion Ercilla, 1911), pp. 393-401.

Corte de Apelaciones de Concepción, para que se vea un incidente deducido de contrario, ocurrido durante la sesión de prueba.

De Saturnino Quintriqueo y otros contra don Fidel Cáceres, sobre amparo. Se falló en 1ª instancia dándose lugar a la querella en todas sus partes, deduciéndose por el querellado los recursos de casación en la forma y de apelación. El primero se vio ya y no se le dio lugar, con costas. El de apelación se verá en marzo próximo y presumo que también se desechará.

Del cacique Juan Lincopau y su reducción contra don Pedro José Leal y otros, sobre entrega de más de cien mil cuadras de terreno, en el lugar de Ranquilhue. Se falló en 1ª instancia, dándose lugar a la demanda. Se encuentra actualmente en apelación.

Del cacique Lorenzo Quintrileo y su reducción contra José del Carmen Méndez, sobre reivindicación de un retazo de terreno en el lugar de Quideco de este departamento. Se encuentra en apelación para que se resuelva un incidente deducido de contrario sobre puntos de prueba.

De Pascual Millaleo y otros con don Juan Gastigau, sobre nombramiento de juez partidor para dividir un terreno que poseen los primero en Quiapo, 3ª subdelegación del departamento de Lebu. Hay pendiente un incidente sobre nulidad de la citación al comparendo en que debía nombrarse el juez comisario.

Del cacique Juan 2° Marileo y su reducción con don José Campelo, sobre delimitación de los terrenos de la reducción con terrenos fiscales ocupados por Campelo. Se encuentra en apelación ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

De Manuel Alcamau y otros con la sucesión de don Félix Gajardo, sobre nulidad de escritura y reivindicación de sesenta hectáreas de terreno en el lugar de Paicaví, 5ª subdelegación de este departamento. Se encuentra en prueba.

Del indígena Manuel Maliqueo con Manuel Oñate, sobre abandono de posesiones. Se falló en 1ª instancia, dándose lugar a la demanda en todas sus partes.

Del cacique Juan Cayupi y su reducción con Antonio Fuentes sobre entrega de terrenos. Se encuentra en apelación ante la Corte de Santiago para resolver un incidente formulado por el Promotor Fiscal.

Del cacique Pascual Coña y su reducción con José Amador Arriagada, sobre reivindicación de terrenos en el lugar de Lleu Lleu, 7ª subdelegación de este departamento. Se encuentra en apelación ante la Corte de Concepción para resolver un incidente formulado de contrario sobre ineptitud del libelo.

Del cacique Francisco Namoncura y su reducción contra José del Carmen 2° Méndez, sobre amparo. Se falló en 1ª y 2ª instancia dándose lugar a la demanda en todas sus partes.

Del cacique Nicolás Calbullanca y su reducción con don Nicolás Núñez, sobre entrega de cuarenta cuadras de terreno en Lleu Lleu. Se falló dándose lugar a la demanda en todas sus partes.

Del cacique Esteban Yevilao con Nicanor Valenzuela, sobre abandono de posesiones. Se dio lugar a la demanda, debiendo el demandado dejar la posesión el 31 de marzo próximo.

Del indígena Pascual Colil con Victorio Burgos, sobre entrega como de veinte cuadras de terreno en el lugar de Quidico. Esta causa no se alcanzó a tramitar, pues el demandado buscó arreglo y se transigió en el sentido de que continuaría en el goce del terreno hasta el 1 de marzo próximo en que lo abandonaría, dejando todas las mejoras a beneficio del indígena.

Del cacique Lorenzo Pilquiman con Alfredo Salazar, sobre entrega como de cien cuadras de terreno. Se transigió en las mismas condiciones que el anterior.

Del indígena Juan Melin con Gregorio Saavedra y otros, sobre nulidad de un nombramiento de juez compromisario. Se tramita.

Además de los juicios anteriores en que figuran los indígenas como actores, también he patrocinado los siguientes, en que los indios han sido demandados.

Del deducido por Jacinto Ramírez y otros contra la reducción del cacique Andrés Porma por cobro de 5.000 pesos sobre mejoras introducidas en el terreno. Se encuentra en prueba y estimo que se obtendrá que nada deben pagar los indígenas.

Del instaurado por Sebastián Riffo contra Ignacio Huilipan por cobro de mil y tantos pesos de perjuicios por incendio de una siembra de trigo atribuido a descuido e imprudencia de Huilipan. Creo no será condenado el indígena.

En el presente año, tengo antecedentes reunidos para entablar los siguientes juicios.

Por la reducción en que es cacique Francisco Huelate, ubicada en el lugar de Licauquen, 7ª subdelegación de este departamento, contra los siguientes individuos por reivindicación de más de cien cuadras de terreno:

Jovino Rojas, Luciano Rojas, Juan de Dios Vivanco, Crispino Gutiérrez, Celestino Zurita, Lorenzo Fernández, Pedro Flores, Aniceto Mora, Santos Ulloa y Avelino Islas.

Por la reducción del cacique Juan Rañiqueo, ubicada en el lugar de Huallepen, 7ª subdelegación de este departamento, contra Juan Esteban Soto, Serafín Placencia y otros, por reivindicación de más de cincuenta cuadras de terreno.

Por la reducción de la indígena Juana Millahual, también de Huallepen, contra Félix Ortiz y otros por reivindicación de treinta o más cuadras de terreno.

Por la reducción del cacique Esteban Yevilao, ubicada en Choque, 7ª subdelegación de este departamento, contra la sucesión de don Andrés Villagrán, por reivindicación de cien hectáreas de terreno más o menos.

Por la indígena Lucía Cayulao vda. de Cariman, sobre nulidad de una escritura de venta otorgada a favor de don Bernardino de Sena Araneda, de las acciones y derechos que le correspondían en el fundo "San José de Caramávida", ubicado en la 7ª subdelegación del departamento de Lebu.

Por la indígena María Gutrapeguey, contra José Antonio Peralta, por nulidad de una escritura de venta otorgada por la primera al segundo, de las acciones

y derechos que le correspondían en el fundo Ponotro, ubicado en la 5ª subdelegación de este departamento.

Por los indígenas Francisco e Isabel Maricura, contra la sucesión de don Simón Martínez, sobre nulidad de una escritura de venta otorgada por los primeros a favor del segundo de un retazo de terreno de seis cuadras, ubicado en Pangueco, 4ª subdelegación de este departamento.

Por Francisco Namoncura, contra doña Carmen Rodríguez vda. de Carrasco, por reivindicación de diez cuadras de terreno en Quidico.

En diversas ocasiones he tenido el honor de manifestar al señor Inspector que, para iniciar los juicios sobre reivindicación de terrenos, necesitaba la cooperación de un ingeniero, quien me proporcionaría la cabida y deslindes; pero como dicho empleado no ha podido serme enviado y urgía la necesidad de iniciar estos juicios ha sido preciso que yo mismo tomara estos datos trasladándome al terreno. Con el auxilio de una pequeña brújula y una huincha, he mensurado y deslindado, más o menos, aproximadamente, los diversos retazos de terreno, acerca de los cuales he de entablar en marzo próximo nuevas demandas reivindicatorias.

Como me permití manifestarlo en mi Memoria anterior, tiene graves inconvenientes la radicación de indígenas por reducciones pues, en la práctica, se ha visto que el ideal de la radicación sería por familias, pues el régimen de comunidad tiene el inconveniente de que se suscitan de continuo querellas más o menos agrias entre los comuneros, provenientes ya sea porque uno considere que tiene menos extensión de terreno que su vecino o de inferior calidad y desearía quitarle un pedazo, ya sea porque estime que el terreno que posee está cansado y desearía cambiarlo por otro; o porque traspasando los deslindes de su posesión se introduce en los del vecino, haciendo siembras o pastando animales, etc., etc.

Constantemente ocurren ante el infrascrito indígenas de las reducciones de la región ubicada al sur del río Paicaví con reclamos de esta naturaleza, no pudiendo el protector hacer otra cosa que aconsejarles la avenencia, pues no tiene autoridad para obligarlos al cumplimiento de las resoluciones que diera en sus querellas entre sí. Es uno de los varios inconvenientes que tiene la legislación actual de indígenas, pues el Protector debiera ser un funcionario que, teniendo la representación legal en sus juicios con terceros, tuviera también imperio o autoridad judicial para dirimir en única o en primera instancia las cuestiones que ocurriesen entro los indios sobre dominio, posesión y deslinde de sus terrenos.

Los inconvenientes que tiene la radicación por reducciones, como lo he dicho, creo se subsanaría haciendo las subdivisiones correspondientes entre las distintas familias de que se compone.

Esta división la podría practicar el Protector de Indígenas respectivo con la coadyuvación de un ingeniero, y se haría tan pronto como no hubiese cuestión de posesión o de dominio con terceros, que resolver ante la justicia ordinaria.

En este estado se encuentran en Cañete las siguientes reducciones: la de los caciques Ignacio Huilipan, Nicolás Cabullanca, Ignacio Antinao, Mariano Huenul, Andrés Porma y Juan 2° Marileo.

Antes de concluir, estimo conveniente manifestar al señor Inspector que se hace indispensable reformar la legislación actual sobre constitución de la propiedad indígena, tramitación de sus juicios y atribuciones de los Protectores, tomando por base los diversos proyectos elaborados por los señores Protectores de Temuco, Valdivia y otros.

En esa ley podían incorporarse disposiciones como éstas: que siendo los indígenas chilenos como todos los que nacen en el territorio de la República, les obligarán las leyes de Registro y de Matrimonio Civil; pues no se ve la razón ni la conveniencia de autorizar entre los indios la poligamia y el concubinato. Para la prueba del estado civil de los indios, es indispensable que sus matrimonios, nacimientos y defunciones se registren ante el oficial del Registro Civil respectivo.

Igualmente es muy necesaria a la cultura y civilización indígena, el obligarlos a hacer, si es posible, sin excepción para los varones de 18 años y menores de 30, el servicio militar, e imponerles la instrucción primaria obligatoria, fundando escuelas ambulantes en aquellos lugares donde, por la escasa población escolar, no se pudiese establecer una escuela permanente.

Se dictarían reglamentos en que los protectores se encargarían del cumplimiento de estas y otras disposiciones que se dictasen en este sentido.

No debo dar término a esta Memoria sin manifestar antes a Ud. que se hace necesario, en equidad y justicia, se nos mejore la renta de que actualmente disfrutamos, pues esta no ha sufrido modificación desde el año 1866 en que se asignó al único Protector que en ese entonces existía, la cantidad de $3.500 anuales.

Esta cantidad hoy día la percibe el último de los oficiales de los Ministerios, siendo inoficioso el que haga una comparación entre la importancia de uno y otro puesto, para hacer resaltar la justicia que habría en que se nos aumentase nuestro sueldo.

Es de advertir que los Protectores de Indígenas, aunque pueden mejorarse su renta con la defensa de juicios en que no tengan interés los indios, en el hecho no ocurre, pues a los Protectores en general no les encomiendan la defensa de sus juicios, pues es raro con el que no tenga o haya tenido cuestiones o juicios este funcionario y, como represalia, por lo menos, cuando no pone en práctica otra de mayor entidad, se contenta con no encomendarle gestión o defensa alguna. Por lo demás, la defensa de los numerosos juicios de indígenas no le deja tiempo disponible para dedicarlo a defensas particulares.

Ya que se ha aumentado la renta a la mayoría de los servidores de la Nación, es preciso que, también, el Soberano Congreso se acuerde de los Protectores de Indígenas, elevándoles su sueldo por lo menos al doble del que disfrutan en la actualidad.

Me permito proponer la siguiente planta de empleados de cada Protectorado con su sueldo anual respectivo:

Empleados	Sueldo anual ($)
Protector de Indígenas	10.000
Ingeniero	6.000
Secretario del Protector	3.600
Escribiente	1.800
Portero-intérprete	1.200

Concluyo, señor Inspector, manifestando que, en el cumplimiento de mi deber, procuro hacerme acreedor de la confianza del Gobierno y de Ud. en el puesto para que fui nombrado atendiendo honrada y diligentemente cuanto reclamo justo y serio reciba del indígena de la provincia a mi cargo que se presente impetrando mi protección.

Saluda atentamente al señor Inspector.

Manuel A. Labbé.

Cañete, febrero 13 de 1911.

1910
MANUEL LABBÉ
INFORME DEL PROTECTOR DE INDÍGENAS DE ARAUCO A LA COMISIÓN PARLAMENTARIA[373]

Cañete, abril 8 de 1911.

Dando cumplimiento a lo solicitado por Ud. en telegrama de fecha 3 de marzo último, referente a que no debiendo tener ya lugar en Angol una reunión que se había proyectado entre los diversos Protectores de Indígenas y la Honorable Comisión Parlamentaria, debía el suscrito enviar, por conducto de la Inspección, un memorial que contuviera las reformas que la experiencia, en el desempeño del cargo en esta región, me haya sugerido respecto de la constitución y defensa de la propiedad indígena, tengo el honor de elevar a Ud. dicho memorial, que contiene algunas ideas al respecto.

I

Considero que es de primordial importancia que se determine a qué habitantes del territorio nacional debe considerarse como indígenas o aborígenes de él. Al efecto, permítome indicar la siguiente definición: Son indígenas los aborígenes del territorio nacional que, no teniendo otra prueba del estado civil de padre, madre, marido, mujer o hijo legítimos, que la posesión notoria de dicho estado, sea la *ocupación* el título de dominio que puedan hacer valer sobre los terrenos que posean; y los que estando radicados, posean un título de merced concedido por autoridad competente.

Como se ve, en dicha definición no se toma en cuenta el apellido, el idioma y la costumbre de los naturales para considerarlos como tales, pues ocurre con frecuencia que adoptan apellidos españolizados, hablan únicamente el español y visten como éstos.

[373] "Anexo IV: Informe del Protector de Indígenas de Arauco, don Manuel Labbé, en Comisión Parlamentaria de Colonización, *Informe, Proyectos de Ley, Actas de las Sesiones y otros antecedentes* (Santiago, Imprenta y Litografía Universo, 1912), pp. 123-130.

II

Sería territorio de indígenas el comprendido en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco, Cautin, Valdivia, Llanquihue, Chiloé y territorio de Magallanes.

III

En lo sucesivo, sería obligatorio para los indígenas el constituir su estado civil con arreglo a las leyes de Matrimonio y de Registro Civil, respetándose los derechos adquiridos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley de 4 de agosto de 1874.

IV

Debe prohibirse en absoluto a los particulares la celebración de cualquiera clase de contrato sobre los terrenos en que estén radicados indígenas y tengan título de merced concedido por la Comisión Radicadora respectiva y por los cuales se constituyera algún derecho real, o se les privara directa o indirectamente de la posesión o tenencia de ellos, intertanto no se practique la subdivisión de que trata el número 6 de este Memorial.

V

Como en el departamento de Cañete, al norte del río Paicavi y en el de Lebu, existen indígenas propietarios de terrenos, que no han sido radicados, conviene que en los contratos de venta y constitución de derechos reales sobre ellos, intervenga el Protector de Indígenas, a objeto de que se cerciore si habría o no conveniencia por parte del indígena para celebrar el contrato; de que presta su libre consentimiento y de que recibe el precio convenido.

VI

Como la experiencia aconseja que no es conveniente el régimen de la comunidad o cacicazgo de la propiedad indígena, convendría que, una vez que no hubiese cuestiones de dominio o de posesión, con particulares ante la justicia ordinaria, en las hijuelas en que existiesen reducciones de indígenas radicados, se procediera por el Protector, de oficio o a petición de un indígena jefe de familia, a la subdivisión de la hijuela entre las distintas familias de que se componga. La subdivisión sería proporcional, tomando por base la cabida total de la hijuela

y el número de individuos de que consta la reducción. El Protector observaría en la sustanciación del juicio divisorio el procedimiento contemplado en el párrafo segundo, del Título IX, del Libro III del C. de P. C.

VII

La sentencia pronunciada por el Protector en un juicio divisorio sería sometida a la aprobación judicial, y hecho y ejecutoriada que fuera, se procedería a inscribir en el Conservador de Bienes Raíces respectivo el título particular de la hijuela que le hubiese correspondido a cada jefe de familia, a los cuales se les entregaría, una vez inscrito.

VIII

El expediente del juicio divisorio formado con el título de merced y demás actuaciones y diligencias sería archivado, una vez concluida la partición, en la secretaría del juzgado de la residencia del Protector.

IX

Practicada la subdivisión a que me he referido en los tres números anteriores, el indígena padre de familia podrá contratar libremente sobre sus terrenos, sin más limitación que la intervención del Protector para los fines indicados en el número 5. En uno y otro caso, el Protector, con motivos justificados, podrá denegar la autorización. La denegación sería apelable ante el Juez de Letras del departamento de la residencia del indígena.

X

Cualquiera otra obligación exigible en dinero, no podría contraerla el indígena sin la intervención del Protector.

XI

Debe prohibirse a los notarios, bajo pena de suspensión, el autorizar cualquiera clase de contratos de indígenas sin la intervención del Protector. Si tuviere dudas acerca de si algún contratante es o no indígena debe pedir informe a este funcionario.

XII

La contravención a lo dispuesto en los números 4, 5, 9, y 10 de este memorial produciría nulidad absoluta y podría pedir su declaración el Protector de Indígenas respectivo.

XIII

Habría cinco Protectores de Indígenas: uno para la provincia de Arauco; otro para Biobío y Malleco; otro para Cautín; otro para Valdivia y otro para Llanquihue, Chiloé y Territorio de Magallanes. La residencia de cada Protector sería la que designara el Presidente de la República.

XIV

Cada Protectorado tendría la siguiente planta de empleados, con los sueldos anuales que se pasan a indicar:

Empleados	Sueldo anual ($)
Protector de Indígenas, Jefe de Oficina	10.000
Ingeniero, asesor técnico	8.000
Secretario escribiente	3.600
Agente judicial	3.000
Portero	1.200

El ingeniero es indispensable para que asesore al Protector en todo lo que se relaciona con la mensura y deslindes de los terrenos de indígenas y forme las hijuelas y confeccione los planos de las subdivisiones que se hiciesen de las radicaciones a que se ha hecho referencia en los números 6, 7 y 8 de este memorial.

El secretario escribiente, además de su desempeño como escribiente de la Oficina, haría las veces de ministro de fe encargado de autorizar todas las providencias, despachos y actos emanados del Protector en las funciones judiciales que desempeñe.

El agente judicial coadyuvaría al Protector en la tramitación de los juicios, imponiéndose en secretaría de las providencias recaídas en las solicitudes presentadas por el Protectorado o la parte contraria, asistiendo a los comparendos, buscando o instruyendo testigos y proporcionándose cuanto dato sea necesario al buen éxito de las acciones judiciales que se inicien.

XV

El Protector de Indígenas sería el representante legal de los indios en todo lo que se refiera al dominio o posesión de sus terrenos y en todo lo demás de que

trata este memorial, siempre que no sean incompatibles con otras funciones que en él se le encomienden; y litigará como pobre en los juicios que, en su representación, defienda, no causando derechos de ningún género ante cualquier funcionario del orden judicial.

XVI

Como los Protectores de Indígenas, a la fecha, no tienen autoridad alguna para hacer obligatorias las decisiones que pronuncien en las cuestiones o litigios de indígenas entre sí, convendría dar a estos funcionarios facultades judiciales para que, como jueces de 1ª instancia, resolviesen los asuntos que sobre dominio, posesión y deslindes de sus terrenos, ocurriesen entre indígenas.

XVII

El Protector observaría para la tramitación de tales juicios, el procedimiento establecido en el Título XII del Libro III del Código de Procedimiento Civil; y sus resoluciones serían apelables ante el Juez de Letras del departamento de la residencia del Protector.

XVIII

El procedimiento en los juicios de indígenas con terceros sería el mismo contemplado en el Código de Procedimiento Civil, según fuere la acción entablada, no suspendiendo el cumplimiento de la sentencia los recursos de casación en la forma o en el fondo, y procediéndose para los efectos de la elevación de los autos, con arreglo a lo prevenido en el art. 220 de dicho Código.

XIX

Al Protector de Indígenas, en los departamentos de su jurisdicción donde no tuviere su residencia, lo representaría en juicio el promotor fiscal, y en los asientos de Corte, el fiscal de turno.

XX

Se derogarían todas las leyes y decretos de excepción contrarias a las ideas sustentadas en este Memorial, quedando en lo sucesivo los indígenas sometidos en

todo a las leyes comunes. Sin embargo, el decreto de 14 de marzo de 1853, ley de 4 de diciembre de 1866, de 4 de agosto de 1874, de 13 de octubre de 1875, de 20 de enero de 1883 y de 11 de enero de 1893 solo se entenderían derogadas en lo que fueren contrarias a las disposiciones contenidas en este memorial.

Manuel A. Labbé.

1910
MANUEL OÑAT
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS DE MALLECO[374]

Señor Inspector General.

En cumplimiento de mi deber, tengo el honor de presentar a Ud. la Memoria del Protectorado de Indígenas de Malleco, correspondiente al año 1910.

La labor de esta Oficina durante el año 1910, ha sido la siguiente:

1. Se atendieron 316 reclamos de indígenas;
2. Se dirigieron 346 notas a la Inspección General y otras autoridades;
3. Se iniciaron 21 juicios;
4. Se evacuaron 7 informes;
5. Hubo 21 comparendos entre indígenas.

La población indígena en esta provincia alcanza a 12.000 individuos que en su mayor parte están reducidos a la miseria más espantosa.

Por lo general, solo poseen una pequeña extensión de los terrenos en que han sido radicados; se los han usurpado, los han vendido o los tienen arrendados a particulares.

Las leyes de prohibición que rigen la propiedad indígena son letra muerta para los particulares, y aun para ciertos funcionarios y autoridades.

El contrato de *medias* le saben explotar muy bien los particulares, no dando a los indígenas la parte que le corresponde, sino lo que ellos quieren hacerles *la merced* de darles.

Hay personas que se constituyen en protectores oficiosos de los indígenas, haciéndose extender amplísimos poderes para representarlos, *desinteresadamente,* en todos sus negocios, y juicios, y que después se hacen pagar su desinteresada protección, arrebatándoles sus terrenos, los que son vendidos a un tercero, quien vuelve a vendérselos al protector oficioso, formándose así un título aparente que, con toda desfachatez y cinismo, exhiben a la justicia ordinaria para mantenerse en la posesión de los terrenos que indebidamente ocupan.

Realmente señor Inspector, da pena ver a los pobres indios abatidos, tristes y reducidos a la mayor miseria sin que los poderes públicos se preocupen de mejorar su situación.

Ya es tiempo que el Supremo Gobierno tome medidas enérgicas en favor de los indígenas y que tiendan a darles una protección rápida y eficaz, conclu-

[374] "Memoria del Protectorado de Indíjenas de Malleco", en *Memoria de la Inspección Jeneral de Colonizacion e inmigración, 1910* (Santiago, Imprenta i Encuadernacion Ercilla, 1911), pp. 403-411.

yendo de una vez por todas con los abusos y atropellos que a diario cometen los particulares.

Esta Oficina ha tenido que atender a muchos indígenas radicados al norte de los ríos Malleco y Picoiquen, y que reclaman la nulidad de la venta de sus terrenos, por no haberse verificado en conformidad a las prescripciones del Decreto de fecha 14 de marzo de 1853.

En efecto, señor Inspector, el Decreto Supremo de 14 de marzo de 1853, que tiene fuerza de ley por haber sido dictado en uso de la facultad que se confirió al Presidente de la República por los art. 3 y 5 de la ley de 2 de julio de 1852, dispone en su artículo 1 que toda compra de terrenos hecha a indígenas o de terrenos situados en territorio de indígenas debe verificarse con intervención del Intendente de Arauco y del Gobernador de Indígenas del territorio respectivo que el Intendente comisione especialmente para cada caso.

Esta atribución del intendente y gobernadores pasó después por disposición del art. 8 de la ley de 4 de diciembre de 1866, al Protector de Indígenas.

El art. 5 del Decreto ley del año 1853 dispone que las ventas de terrenos en los territorios de indígenas que se hiciesen sin la intervención del Intendente de Arauco y del funcionario que él hubiese comisionado, son nulas.

El art. 1 de la ley de 2 de julio de 1852, dispone:

> "Establécese una nueva provincia con el nombre de Provincia de Arauco, que comprenderá en su demarcación los territorios de indígenas situados al sur del río Biobío y al norte de la provincia de Valdivia".

El inciso 2 del art. 4 de la ley de 4 de diciembre de 1866, ordenó que los contratos traslaticios de dominio de los indígenas se celebren con arreglo a las prescripciones del Decreto de 14 de marzo de 1853, el cual queda vigente en todo lo que no sea contrario a la presente ley.

La ley de 13 de octubre de 1875, que dividió la antigua provincia de Arauco en dos provincias, la de Biobío y Arauco, y creó el Territorio de Colonización de Angol, en su art. 15 dispuso que la venta de los terrenos indígenas se hará conforme a las prescripciones del Decreto de 14 de marzo de 1853.

Ninguna ley posterior ha derogado el Decreto ley de 14 de marzo de 1853, y por consiguiente está en pleno vigor en el territorio do indígenas comprendido entre los ríos Biobío por el norte, y Malleco y Picoiquen por el sur, adoleciendo por consiguiente del vicio de nulidad absoluta las ventas de los terrenos de indígenas que se hayan verificado sin la intervención del Intendente de Arauco o del Protector de Indígenas, y así lo han declarado en repetidas ocasiones los Tribunales Superiores de Justicia.

En vista de las disposiciones legales citadas he iniciado algunos juicios para reivindicar los terrenos de indígenas situados en el territorio expresado, y que han sido vendidos sin la intervención del funcionario designado por la ley para la validez de dichas venias.

En la zona situada al sur de los ríos Malleco y Picoiquen he iniciado también varios juicios sobre nulidad de ventas de terrenos de indígenas; pues aunque estos terrenos de indígenas están regidos por las disposiciones contenidas en el art. 6 de la ley de 4 de agosto de 1874 y leyes de 20 de enero de 1883, 11 de enero de 1893 y 13 de enero de 1903, que prohíben en absoluto a los particulares adquirir por cualquier medio dichos terrenos de indígenas, sin embargo, debido a las complacencias de los notarios, que hacen caso omiso de la disposición contenida en el inciso 2 del art. 2 de la ley de 11 de enero de 1893, se han otorgado y se siguen otorgando escrituras de ventas de terrenos de indígenas situados en la zona de prohibición absoluta.

La comunidad en que viven los indígena, es origen de serias dificultades que surgen entre ellos mismos, degenerando algunas veces en verdaderas batallas; pues sucede que el jefe de la reserva se toma para sí el mejor terreno o la mayor parte de él, dejando a los demás comuneros reducidos a una pequeña extensión.

A fin de arreglarles sus dificultades, los llamo a comparendo, y en ellos trato de armonizarles sus diferencias, lo que generalmente se obtiene, prometiéndoles que tan pronto como llegue el ingeniero irá a dividirles sus reservas de una manera equitativa y hacerles entrega a cada cual de su respectiva hijuela.

El infrascrito procura también que los indígenas cumplan con las leyes de Reclutas y Reemplazos y del Registro Civil.

La legislación vigente sobre indígenas, en general, es buena pero tiene algunas deficiencias que hay necesidad de subsanar cuanto antes.

La representación y defensa de los indígenas está mal organizada y presenta grandes dificultades en la práctica.

Los defensores de indígenas carecen de ingeniero que coopere a sus defensas, y de un agente judicial.

Los protectores de indígenas se dedican de lleno a atender sus oficinas y a defender y proteger, por todos los medios que están a su alcance, a los indígenas de sus respectivas jurisdicciones, pero la acción de estos funcionarios se encuentra hasta cierto punto entrabada por las deficiencias de la ley.

Cada Protectorado debe contar con un ingeniero, para que coopere a la defensa de la propiedad de los indígenas. Este funcionario es absolutamente indispensable en los Protectorados, pues no hay juicio, gestión o reclamo de indígenas en que no se necesiten los servicios del ingeniero. El Supremo Gobierno haría obra verdaderamente humanitaria, contratando un ingeniero para cada Protectorado de Indígenas; el desembolso sería insignificante, y en cambio los beneficios para los indígenas serían inmensos.

Debe dotarse también a cada protector de un agente judicial; este empleado no solo es conveniente sino necesario; contando con el agente judicial, el protector no tendría que abandonar su oficina, a veces por varios días para ir a presentar escritos o imponerse de providencias en los juzgados de departamento.

Los fondos que se destinan para atender a la defensa judicial de indígenas son insuficientes, y deben aumentarse, con mayor razón ahora que se ha autorizado

a los funcionarios dependientes de la autoridad judicial para cobrar doblados sus derechos, y es sabido que el único privilegio de que gozan los protectores de indígenas en los juicios es usar papel simple, teniendo que satisfacer como cualesquier otro litigante los derechos judiciales.

Los protectores de indígenas gozan en la actualidad del mismo sueldo de tres mil quinientos pesos ($3.500) que hace 45 años les asignó la ley de 4 de diciembre de 1886, sueldo que si en los tiempos en que se fijó era muy bueno, hoy es absolutamente exiguo y no basta para satisfacer las necesidades más premiosas de la vida; no se crea que un Protector de Indígenas puede dedicarse a ejercer libremente su profesión de abogado, pues las múltiples y delicadas atenciones de su puesto y los continuos viajes que tienen que estar haciendo de un departamento a otro por asuntos del servicio, le absorben todo su tiempo.

Un Protector de Indígenas tiene sobre sí una enorme responsabilidad y un trabajo abrumador; tiene que batallar contra los tinterillos que inventan toda clase de argucias y artimañas para alargar indefinidamente los juicios, y contra los usurpadores de terrenos de indígenas que hacen uso de cuanto medio está a su alcance para impedir que se les lance de los terrenos que indebidamente ocupan.

Así lo comprendieron los legisladores que dictaron la ley de 4 de diciembre de 1886, asignándoles el sueldo de tres mil quinientos pesos ($3.500) igual al que gozaban los jueces letrados de cabecera de provincia.

En los últimos tiempos se han mejorado los sueldos de todos los empleados públicos, menos el de los protectores de indígenas. Estos funcionarios han permanecido como olvidados o ignorados de los poderes públicos.

La exigüidad del sueldo de que gozan los protectores de indígenas ha sido causa de que en ciertos artículos de la prensa diaria se haya puesto en tela de juicio la honorabilidad de estos funcionarios.

Si bien es cierto que esos sueldos son por demás escasos, también no es menos cierto que todos los abogados que al presente desempeñan estos cargos son personas honorables, y que en todo momento y en toda circunstancia sabrán cumplir con honradez los deberes que les impone su puesto, sin dejarse influenciar de nadie: de ello puede estar seguro el señor Inspector General.

Conviene, pues, que la Inspección General, inspirándose en la más estricta equidad y justicia, procure mejorar la situación de los protectores de indígenas, pidiendo al Ministerio se asigne a estos funcionarios un sueldo igual al que gozan los abogados de colonización residentes en la frontera.

Por otra parte, el viático de que gozan los protectores cuando salen del lugar de su residencia, en comisión del servicio, es insignificante y no les basta para cubrir los gastos del viaje; es sabido que los hoteles, coches, etc., han subido al doble sus tarifas, teniendo estos funcionarios que sacrificar una parte de su escaso sueldo cuando están de viaje por asuntos del servicio.

Por decreto número 177, de 24 de enero último, el Ministerio del Interior fijó en 20 pesos diarios los viáticos de los inspectores de boticas, es decir el do-

ble del que gozan los protectores de indígenas; las razones para establecer una diferencia tan enorme entre el viático que percibe un inspector de boticas y el que percibe un protector de indígenas, cuando andan en comisión del servicio, no acierto a comprenderlas. Ambos son funcionarios públicos, andan en comisión del servicio y tienen las mismas exigencias y quizas si las exigencias de un protector de indígenas sean muy superiores a las de un inspector de boticas.

Convendría que el señor Inspector General haga presente al Ministerio que el viático de que actualmente gozan los protectores de indígenas cuando salen en comisión del servicio es muy escaso y que no les alcanza para cubrir los gastos de viaje, y pida se asigne a estos funcionarios un viático igual al que gozan los inspectores de boticas.

Cree el infrascrito que con la ley número 2.465, de fecha 9 del presente, y que autoriza al Presidente de la República para invertir hasta la suma de doscientos mil pesos ($200.000) en dar cumplimiento a las leyes de 4 de diciembre de 1866 y 20 de enero de 1883, que son precisamente las que tratan de los Protectorados de Indígenas, se podrían organizar estas oficinas de una manera definitiva, dotándolas del personal de empleados necesario y mejorando la situación de estos funcionarios.

Me permito proponer al señor inspector el siguiente personal de empleados para cada Protectorado y su sueldo anual:

Empleados	Sueldo anual ($)
Un Protector	10.000
Un Ingeniero	7.000
Un agente judicial	3.600
Un escribiente	2.400
Un portero-intérprete	1.500

No se crea que los sueldos que propongo son excesivos; pues el abogado de colonización que reside en Angol y que tiene una labor tranquila y simplemente de bufete, goza de una renta anual de diez mil ochocientos pesos ($10.800), y el agente judicial que tiene este abogado percibe cuatro mil trescientos veinte pesos ($4.320).

Con toda consideración saluda al señor Inspector General.

Manuel Oñat.

Angol, 20 de febrero de 1911.

1910
MANUEL OÑAT
INFORME DEL PROTECTOR DE INDÍGENAS DE MALLECO A LA COMISIÓN PARLAMENTARIA[375]

Honorable Comisión Parlamentaria:

En cumplimiento del encargo con que se sirvió honrarme el señor Presidente, vengo en presentar a la consideración de la Honorable Comisión el presente memorándum sobre la defensa de la propiedad indígena, organización de los Protectorados y reformas que deben introducirse en este servicio para la más pronta y eficaz protección a los indígenas.

I
Radicación

El Estado concede al indígena que cumple con ciertos requisitos un título de merced, que le otorga la propiedad del suelo.

El título de merced es expedido por una comisión especial, que se llama Comisión Radicadora de Indígenas y que reside en Temuco.

Para otorgar dicho título, la Comisión Radicadora se sujeta a las reglas que establece el art. 7 de la ley de 4 de diciembre de 1866.

A los indígenas que no cumplen con las condiciones o requisitos que exige el art. 7 de la ley del 66, se les considera como colonos para el efecto de adjudicarles hijuelas, sin que queden sujetos a las condiciones impuestas a los demás colonos.

La posesión notoria del estado civil de padre, madre, marido, mujer o hijo, se tendrá como título bastante para constituir a favor de los indígenas los mismos derechos hereditarios que confieren las leyes comunes a favor de los padres, cónyuges e hijos legítimos.

La primera Comisión Radicadora la estableció el art. 5 de la ley de 4 de diciembre de 1866, y se componía de tres ingenieros, asesorada por el Juez de Letras más inmediato.

[375] "Anexo III: Informe del Protector de Indígenas de Malleco, don Manuel Oñat", en Comisión Parlamentaria de Colonización, *Informe, Proyectos de Ley, Actas de las Sesiones y otros antecedentes* (Santiago, Imprenta y Litografía Universo, 1912), pp. 105-122.

La segunda Comisión, la estableció el art. 7 de la ley de 4 de agosto de 1874, y la componía un Ministro de la Corte de Concepción asesorado de uno o más ingenieros.

La tercera, la estableció la ley de 20 de enero de 1883, y se compone de dos ingenieros y un abogado que la preside; por la ley núm. 2.465 de fecha 9 del presente mes, se aumentó a cuatro el número de ingenieros de la Comisión Radicadora.

El título de merced se notifica al promotor fiscal del departamento en donde está situado el terreno y al Protector de Indígenas, y se inscribe en un registro especial que lleva la Comisión Radicadora en Temuco.

Hecho esto, se entrega al indígena su título y un plano del terreno en que se ha radicado.

II

Legislación vigente sobre indígenas

Radicado un indígena, en conformidad a la ley, es dueño del terreno que le asigna su título de merced, pero no puede disponer de él libremente.

La ley de 2 de julio de 1852, que creó la antigua provincia de Arauco, dispuso en su artículo 1 que esta nueva provincia comprendería en su demarcación los "territorios indígenas" situados al sur del río Biobío y al norte de la provincia de Valdivia.

En sus artículos 3 y 5, esta ley autorizó al Presidente de la República, por el término de cuatro años, para que dictara las órdenes que juzgara convenientes para el mejor gobierno de las fronteras, para la más eficaz protección de los indígenas, para promover su más pronta civilización y para arreglar los contratos y relaciones de comercio con ellos.

En uso de esta autorización legislativa, el Presidente de la República dictó el decreto de 14 de marzo de 1853, disponiendo que toda compra de terrenos situados en territorios de indígenas debía verificarse con intervención del Intendente de Arauco y del Gobernador del territorio respectivo, que el Intendente comisionara especialmente para cada caso. La misma formalidad se exigía para el empeño de terrenos o para el arriendo por un tiempo que excediera de cinco años. Los poderes para litigar sobre cuestiones de terrenos debían sujetarse a los mismos trámites.

El art. 8 de la ley de 4 de diciembre de 1866 dispuso que pasara al Protector de Indígenas la atribución que el decreto de 14 de marzo de 1853 concedía al intendente y gobernadores.

El art. 4 de la misma ley, estableció que los contratos traslaticios de dominio sobre terrenos situados en territorios de indígenas solo podrían celebrarse válidamente cuando el que enajena tuviera el título escrito y registrado competentemente.

Siendo indígena alguno de los contratantes, se necesitaba, además, que el contrato se celebrase con arreglo al decreto de 14 de marzo de 1853.

El art. 5 de la ley de 4 de agosto de 1874 dispone que la prohibición de enajenar contenida en el inciso 1 del art. 4 de la ley de 4 de diciembre de 1886 se extiende a las hipotecas, anticresis, arriendos, o cualquier otro contrato sobre terrenos situados en territorio indígena.

El art. 6 de la misma ley prohibió a los particulares la adquisición por cualquier medio de "terrenos indígenas" dentro de los límites siguientes: por el norte, el río Malleco, desde su nacimiento en la cordillera de los Andes hasta su desembocadura en el Vergara y de este punto, siguiendo al sur, el curso del río Picoiquén hasta su nacimiento en la cordillera de Nahuelbuta, y desde allí una línea hasta la laguna de Lanalhue, situada en dicha cordillera y el curso del río Paicaví hasta su desembocadura en el mar; por el sur, el límite que separa el departamento de Imperial de la provincia de Valdivia; por el este, la cordillera de los Andes; y por el oeste, el mar.

Esta prohibición no rige respecto de los fundos cuyos títulos estuvieren ya inscritos en la forma legal.

La ley de 13 de octubre de 1875, por su art. 14, suspendió esta prohibición en los departamentos de Lebu, Cañete e Imperial; pero la ley de 9 de noviembre de 1877 dejó sin efecto la disposición anterior y volvió a establecer la prohibición en los territorios situados entre el río Toltén y el antiguo límite norte de la provincia de Valdivia.

La ley de 20 de enero de 1883 dispuso que la prohibición de adquirir terrenos de indígenas hecha a los particulares en el art. 6 de la de 4 de agosto de 1874, en el territorio designado en dicho artículo, se extiende a las hipotecas, anticresis, arriendos o cualquier otro contrato en virtud del cual se prive directa o indirectamente a aquellos de la posesión o tenencia de terreno, sobre terrenos situados dentro de esos límites, aun cuando el indígena o la reducción a que pertenezca tenga registrado su título de propiedad.

La ley de 11 de enero de 1893 prorrogó por diez años la subsistencia del art. 1 de la ley de 20 de enero de 1883, e hizo extensivas todas estas prohibiciones a las provincias de Valdivia, Llanquihue y Chiloé y al territorio de Magallanes.

III
Protectorados de Indígenas

Los encargados de la defensa de los indígenas son los Protectores de Indígenas. El art. 8 de la ley de 4 de diciembre de 1866 dice:

> "En los territorios fronterizos de indígenas, habrá un letrado con el título de Protector de Indígenas, el cual ejercerá las funciones que atribuye al intendente y gobernadores, el decreto de 14 de marzo de 1853, y 'representará

los derechos de los indígenas en todas circunstancias que se ofrezcan, y especialmente en el deslinde de sus posesiones y en todos los contratos traslaticios de dominio'".

Este funcionario es nombrado por el Presidente de la República, y gozará de un sueldo de tres mil quinientos pesos anuales ($3.500).

El cargo de Protector de Indígenas se mantuvo hasta el año 1876, fecha en que siendo promovida a otro puesto la persona que lo servía, quedó acéfalo.

Se creyó que el artículo final de la ley de 15 de octubre de 1875 había suprimido este puesto; pero el art. 3 de la ley de 20 de enero de 1883 lo restableció con el mismo sueldo de tres mil quinientos pesos ($3.500) que le asignó la ley de 4 de diciembre de 1866.

El Decreto Supremo de 10 de noviembre de 1884 dispuso que los promotores fiscales de los departamentos fronterizos tomaran la defensa y representación de los indígenas en los juicios sobre propiedad o posesión de sus tierras y en los contratos de compraventa que celebraren.

Las Cortes han declarado que los promotores fiscales no tienen la representación de los indios.

Según la ley, es uno solo el Protector de Indígenas para todos los territorios fronterizos.

En la actualidad hay cinco Protectorados de Indígenas, cuyo sueldo de tres mil quinientos pesos ($3.500) se consulta[376] anualmente en la ley de presupuestos.

De manera que hay cuatro Protectores que han sido creados por la ley de presupuestos, y algunos litigantes les han desconocido su personería.

Los Protectores son abogados y procuradores de los indígenas en sus juicios, y no cuentan con medio alguno para llenar su cometido; cualquier tinterillo a quien se encomienda la defensa de los intereses particulares, está colocado, respecto de los Protectores, en situación mucho más ventajosa.

Los Protectores tienen que atender a una clientela numerosísima y muy ignorante, y que ni siquiera saben expresarse en castellano; tienen que valerse de testigos igualmente ignorantes, tímidos e influenciables.

Cada Protector tiene que atender cinco o seis departamentos y pasarse en continuos viajes de un a otro para atender los juicios, abandonando su oficina, a veces por cinco o más días.

Un Protector de Indígenas tiene sobre sí una enorme responsabilidad y un trabajo abrumador; ha de batallar a diario contra los tinterillos, que inventan toda clase de argucias y artimañas para complicar y alargar indefinidamente los juicios, y contra los usurpadores de terrenos de indígenas, a veces ricos e influyentes, que hacen uso de cuanto medio está a su mano para impedir que se les lance de los terrenos que indebidamente ocupan.

[376] = se establece.

A medida que sube el valor de la propiedad, aumenta también la codicia de los particulares por apoderarse de los terrenos de indígenas y, por consiguiente, aumenta asimismo la labor de los Protectores.

En todos los juicios, gestiones o reclamaciones de los indígenas, se necesita la intervención de un ingeniero para que coopere a la labor de los Protectores.

Sin ingeniero, la labor de los Protectores es casi nula.

Los Protectores no tienen ninguna clase de atribuciones o facultades; ni siquiera las tienen para citar a un indígena cuando se le necesita por asunto del servicio.

Carecen de facultades o atribuciones para dirimir las cuestiones que surgen entre los mismos indios. Si estos quieren, aceptan las resoluciones que dictan los Protectores, pues la ley no los obliga a cumplirlas ni les manda tampoco obedecer a estos funcionarios.

La comunidad en que viven es origen de serias dificultades, que surgen entre ellos mismos, degenerando algunas veces en verdaderas batallas; pues sucede que el jefe de la reserva se toma para sí el mejor terreno o la mayor parte de él, y deja a los demás comuneros reducidos a una pequeña extensión.

Otras veces ocurre lo contrario: algunos comuneros arriendan la mayor parte de la reserva a particulares, y estos expulsan de los terrenos a los indígenas que no han querido arrendar.

Los Protectores carecen de un agente judicial.

Este empleado es necesario en los Protectorados de Indígenas.

De manera, pues, que los Protectores de Indígenas son simples abogados, que reciben una exigua remuneración del Estado, por atender a miles de indígenas, sin contar con ninguna clase de elementos y con ninguna facultad o atribución.

Los Protectorados de Indígenas deben estar servidos por los siguientes funcionarios: un Protector, que debe ser abogado y tener los requisitos necesarios para ser Juez Letrado de cabecera de provincia, y su nombramiento debe hacerse en la forma dispuesta por la ley para el de los oficiales del Ministerio Público; un ingeniero titulado; un agente judicial; un escribiente secretario y un intérprete portero.

IV

Deben darse facultades a los Protectores para dirimir las contiendas que surgen entre los mismos indígenas, procediendo estos funcionarios como árbitros arbitradores, debiendo llevar libros copiadores de sentencias, las que serán autorizadas por el Secretario del Protectorado y se archivarán anualmente en los juzgados de letras del departamento en que se pronuncien.

Debe, también, concedérseles facultades para hacer citar por la fuerza pública a los indígenas, cuando se les necesite por asunto del servicio, pudiendo compelerlos por la fuerza, en caso de negativa.

Debe facultárseles para que procedan, por medio del ingeniero del Protectorado, a practicar la división de las reservas, adjudicar a cada comunero la parte que le corresponda, tomándose razón de estas divisiones en los títulos correspondientes, agregándoles actas complementarias y un plano explicativo.

Es necesario, también, que se inscriban los títulos de merced en el Conservador de Bienes Raíces del departamento en donde están ubicados los terrenos a que se refieren los títulos. Pues sucede que, como esos terrenos no aparecen inscritos en el Conservador del departamento en donde están situados, se presenta un particular cualquiera vendiéndolos a otro particular, y como no aparecen inscritos en el registro, se publican los avisos legales, y vencidos los treinta días de la publicación, el Conservador inscribe la venta, formándose así el particular un título aparente, que para anularlo hay que iniciar y tramitar un juicio largo y engorroso, permaneciendo mientras tanto el particular en posesión de los terrenos litigados.

Debe imponerse una pena a los notarios que otorgan escrituras públicas sobre terrenos de indígenas, contraviniendo a la prohibición que establece el inciso 2 del art. 2, de la ley de 11 de enero de 1893.

Debe, también, establecerse que el procedimiento para las acciones judiciales en los juicios de indígenas será el prescrito por el título 12 del libro 3º del Código de Procedimiento Civil, salvo que se trate de interdicto posesorio.

Que el juez letrado es el único competente para conocer de los juicios, cualquiera que sea su cuantía, en que sean parte o tengan interés los indígenas, quienes deberán litigar con privilegio de pobreza.

Que los Protectores de Indígenas tendrán la representación legal de estos en sus juicios, los representarán en primera y segunda instancia, litigarán en papel simple y no causarán derechos de ninguna clase. Hoy día el único privilegio de que gozan los Protectores es el de usar papel simple en los juicios, teniendo que satisfacer todos los derechos judiciales, como cualquier otro litigante.

Debe establecerse también que los indígenas no pueden desistir por sí mismos de las acciones judiciales entabladas por los Protectores, y que no están obligados a pagar la contribución de haberes.

Debe darse existencia legal a los Protectorados de Arauco, Malleco, Valdivia y Llanquihue, que han sido creados por la ley de presupuestos.

Debe asignarse a los Protectores de Indígenas el sueldo de diez mil pesos ($10.000) anuales, igual al que gozan los jueces letrados de departamento.

La ley de 4 de diciembre de 1866, que creó el puesto de Protector de Indígenas, lo consideró de tanta responsabilidad y labor, como el cargo de juez de cabecera de provincia y le asignó una renta igual a la que gozaban estos funcionarios en aquella época.

A los jueces se les ha mejorado su renta, asignándoseles doce mil pesos ($12.000) anuales; a los Promotores Fiscales, que gozaban de un sueldo muy inferior al de los Protectores, se les asignaron ocho mil pesos ($8.000) anuales.

Los abogados de Colonización residentes en Angol, Temuco, etc., que tienen una labor tranquila y simplemente de bufete, con clientela reducida, que

todos los juicios se tramitan en el juzgado de la cabecera de provincia, que no tienen que molestarse en continuos viajes de un departamento a otro, y que defienden asesorados de los Promotores Fiscales, perciben diez mil ochocientos pesos ($10.800) al año.

Ahora, si se compara la labor de un promotor fiscal o de un abogado de Colonización con la de un Protector de Indígenas, se ve que la de este último funcionario es "cien veces" más difícil, pesada y laboriosa que la de los otros dos.

Por consiguiente, no solo es justo sino muy equitativo que se asigne a los Protectores el sueldo de diez mil pesos anuales.

Debe también asignarse a cada Protector una suma de dinero para atender a la defensa judicial de los indígenas.

Ningún funcionario hace gratuitamente las notificaciones o diligencias judiciales de los indígenas.

Es inútil decirles que los Protectores gozan de privilegio de pobreza por la ley: reciben las diligencias, pero no las practican jamás.

Si se exhorta a los jueces de menor cuantía, que generalmente son amigos de los usurpadores de las tierras de los indígenas, o dan por perdido el exhorto después de dos o tres meses que lo han tenido en su poder, o dicen que no han podido encontrar a la persona que se quiere notificar, a pesar de que todos los días están juntos.

Se rinde información para justificar que el demandado está en el lugar del pleito, y se le manda notificar por cédula.

Se dirige de nuevo exhorto al juez de subdelegación o de distrito, haciéndole presente que está autorizada la notificación por cédula y que se sirva dejarla a la brevedad posible.

Al mucho tiempo, contesta el juez que ha estado enfermo de un gran divieso[377]; pero que tan pronto pueda subir a caballo, irá a hacer la notificación.

Uno o dos meses después devuelve el exhorto, diciendo que fue a notificar a don... pero que no le quisieron recibir la cédula y no pudo hacer la diligencia.

Nuevo oficio, diciendo que deje la cédula pegada en la puerta de la casa.

Pasan otros dos meses, y devuelve el exhorto diligenciado.

Muchas veces, en los juzgados de departamentos los demandados formulan incidencias cuando saben que el Protector está en otro departamento lejano; dejan pasar los tres días y acusan rebeldía.

De aquí que los indígenas crean que el Protector, o no toma interés en sus defensas, o está coludido con el contrario.

Los particulares saben perfectamente bien que los Protectores de indígenas no cuentan con ninguna clase de elementos para sus defensas; que no tienen los empleados suficientes; que no tienen fondos para satisfacer los derechos judiciales, y que por esta causa, los juicios tienen que sufrir atrasos; que no cuentan

[377] = forúnculo.

con un ingeniero que coopere a sus defensas; en suma, saben que los Protectores no tienen más que buenos deseos de trabajar y la mejor voluntad para proteger y defender a los indígenas, lo que no basta, por cierto.

Si los Protectores tuvieran, siquiera, un agente judicial que fuera a los juzgados de departamento a presentar escritos y a imponerse de las incidencias formuladas en los juicios, dando cuenta inmediatamente al Protector; si tuvieran ingeniero que cooperara a sus defensas, y fondos suficientes con que satisfacer los derechos judiciales, los juicios no sufrirían los retrasos que hoy sufren, con perjuicio manifiesto para los indígenas, y la acción de estos funcionarios sería eficaz y rápida.

El escaso sueldo ha dado origen a que la prensa publique artículos depresivos e hirientes contra los Protectores, poniendo en tela de juicio su honorabilidad y haciéndolos aparecer como influenciados o cohechados por los propietarios.

Muchas de las deficiencias que se notan en la organización de los Protectorados y en la defensa y representación de los indígenas, se pueden subsanar administrativamente.

La ley núm. 2.465, de fecha 9 del presente mes, facultó al Presidente de la República para invertir hasta la suma de doscientos mil pesos ($200.000) en dar cumplimiento a varias leyes, entre otras a las de 4 de diciembre de 1866, y 20 de enero de 1883, que son precisamente las que tratan en sus art. 8 y 3 respectivamente, de los Protectores de Indígenas, y cree el infrascrito que a esta ley se podría imputar el mayor gasto que demandara la reorganización de los Protectorados.

Como lo he manifestado más arriba, cada Protectorado de Indígenas debe estar servido por los siguientes funcionarios y con los sueldos anuales que se expresan:

Funcionarios	Sueldo anual ($)
Un protector	10.000
Un ingeniero	7.000
Un agente judicial	2.600
Un escribiente secretario	2.400
Un intérprete portero	1.500

Los ingenieros segundos de la Oficina de Mensura de Tierras ganan siete mil pesos anuales ($7.000), de manera que conviene fijar a los ingenieros de los Protectorados el sueldo que indico.

El agente judicial que tiene el abogado de Colonización, residente en Angol, gana cuatro mil trescientos veinte pesos anuales ($4.329); pues en atención a lo cara que es la vida en Angol, se le fijó en el presupuesto una gratificación especial de mil doscientos pesos anuales, de manera que el sueldo de tres mil seiscientos pesos ($3.600) que yo propongo para los agentes judiciales de los Protectores, no es excesivo.

Bastaría un simple decreto supremo para dar a los Protectorados de Indígenas la organización que dejo expresada, imputándose el mayor gasto a la ley número 2.465.

V

Proyecto de ley sobre la organización de los protectorados

En el siguiente proyecto, que someto al estudio de la Honorable Comisión Parlamentaria, sobre organización de los Protectorados y defensa de la propiedad indígena, cree el infrascrito que se consultan en general las disposiciones necesarias para este objeto:

Art. 1.- Se declara que la acción de la Comisión Radicadora de Indígenas y de los diversos Protectores de Indígenas se extiende a las provincias de Arauco, Biobío, Malleco, Cautín, Valdivia, Llanquihue Chiloé, y al territorio de Magallanes.

Art. 2.- Habrá un Protector de indígenas en cada provincia del territorio indígena, con excepción de la de Biobío, que será atendida por el de Malleco, y de la de Chiloé, que será atendida por el de Llanquihue.

Cada Protectorado de Indígenas será servido por los siguientes funcionarios y con los sueldos anuales que se expresan:

Funcionarios	Sueldo anual ($)
Un protector	10.000
Un ingeniero	7.000
Un agente judicial	2.600
Un escribiente secretario	2.400
Un intérprete portero	1.500

La residencia de los Protectores dentro de cada provincia será la que designe el Presidente de la República.

Art. 3.- Los Protectores de Indígenas deberán ser abogados, tener los requisitos necesarios para ser juez letrado de cabecera de provincia y serán nombrados en la forma dispuesta por la ley para el nombramiento de los oficiales del ministerio público.

Art. 4.- Los Protectores de Indígenas tendrán la representación legal de estos y serán parte en sus juicios; los representarán en primera y segunda instancia; litigarán en papel simple y no causarán derechos de ninguna clase; protegerán, ampararán y defenderán a los indígenas en todas circunstancias que se ofrezcan, especialmente en el deslinde de sus propiedades.

El procedimiento para las acciones judiciales será el indicado por el título 12 del libro 3º del Código de Procedimiento Civil, salvo que se trate de un interdicto posesorio.

Las Cortes de Concepción y Valdivia darán preferencia, en la formación de las tablas, a las causas en que sean parte o tengan interés los indígenas.

Art. 5.- Los jueces letrados serán los únicos competentes para conocer, cualquiera que sea la cuantía de los juicios en que sean parte o tengan interés los indígenas, quienes litigarán con privilegio de pobreza.

Art. 6.- Se prohíbe a los indígenas vender terrenos y celebrar contratos de hipoteca, anticresis, arrendamiento o cualquiera otro, en virtud del cual se les prive directa o indirectamente del dominio, posesión o tenencia de los terrenos que ocupan.

Igualmente se prohíbe a los particulares adquirir por cualquier medio terrenos de indígenas.

Los derechos reales de los indígenas son inembargables.

Son nulos y de ningún valor los contratos que contravengan esta ley.

Las prohibiciones establecidas en este artículo regirán por el plazo de veinte años.

Art. 7.- Se prohíbe a los notarios, conservadores de bienes raíces, oficiales del registro civil, jueces de subdelegación, de distrito y receptores, bajo pena de privación de su empleo y multa de quinientos a mil pesos, a beneficio municipal, autorizar, inscribir, protocolizar o certificar firmas de instrumentos públicos o contratos privados sobre materias que estén prohibidas por la presente ley. Si los jueces letrados les ordenaren extender alguno de estos, cumplirán la orden, pero darán cuenta en el mismo día que la reciban al tribunal de alzada y al Protector de Indígenas respectivo.

En caso de duda respecto de la calidad de indígena del recurrente, el funcionario arriba indicado deberá ocurrir al Juez en consulta previa.

Art. 8.- Será nula y de ningún valor toda escritura pública o privada suscrita por un indígena, si no es asistido en el momento de la firma, por el respectivo Protector de Indígenas, quien deberá suscribirla personalmente ante el ministro de fe y en presencia del indígena.

La penalidad establecida en el artículo precedente se aplicará a las infracciones de éste.

Art. 9.- Los indígenas que fueren lanzados de sus posesiones sin orden de la justicia ordinaria serán amparados y repuestos en ella por el respectivo Protector, quien solicitará la fuerza pública de la autoridad administrativa, acompañando a su solicitud certificación de que el lanzamiento no ha sido ejecutado en cumplimiento de una sentencia o resolución judicial, sin perjuicio de la acción que proceda contra el autor del abuso o atropello.

Art. 10.- Las notificaciones en los asuntos judiciales y en los administrativos a que dé lugar la acción del Protector de Indígenas se harán por la fuerza pública dependiente de la autoridad administrativa.

En la misma forma serán citados los indígenas cuando el Protector los necesite para asuntos del servicio, pudiendo compelerlos por la fuerza en caso de negativa.

Art. 11.- Las dificultades que se susciten entre indígenas se ventilarán ante el Protector de Indígenas respectivo, quien procederá como árbitro arbitrador, y las resoluciones que dicte, autorizadas por el secretario del Protectorado, serán sin ulterior recurso y no podrán ser invalidadas sino por las causales que anulan las resoluciones de los árbitros arbitradores, según el derecho común.

Para este efecto, los Protectores de Indígenas llevarán libros copiadores de sentencias, que cerrarán anualmente y remitirán al juez letrado del departamento en que haya pronunciado la resolución para su archivo en la forma ordinaria, dejando copias que se conservarán en el respectivo Protectorado.

El Protector podrá compelerlos por la fuerza dependiente de la autoridad administrativa, cuando se manifestaren rebeldes a acatar sus resoluciones.

Art 12.- Las reducciones a que actualmente se ha otorgado título de merced podrán subdividirse a petición de uno de los comuneros o del Protector de Indígenas respectivo.

Se tomará razón de estas subdivisiones en los títulos correspondientes, agregándoles actas complementarias con un plano explicativo.

Las actas serán suscritas por el ingeniero que las practique, por el Protector de Indígenas respectivo y por el presidente de la Comisión Radicadora.

Art 13.- En los departamentos en que no tiene su residencia el Protector de Indígenas, representará a estos el Promotor Fiscal, sin perjuicio de la representación que pueda asumir el respectivo Protector cuando se traslade a aquel departamento.

Art. 14.- Es aplicable a los juicios en contra de los indígenas lo dispuesto por el art. 925 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 15.- Los indígenas quedan obligados a enviar a la escuela a sus hijos mayores de diez años, hasta que aprendan el idioma español, las primeras letras y un oficio manual, siempre que funcione uno de estos establecimientos a menos de tres kilómetros de su habitación.

Art. 16.- El servicio militar es obligatorio para todos los varones indígenas de dieciocho años de edad. Lo prestarán por un año continuado en los cuerpos de ingenieros militares, salvo los que no sepan leer ni escribir, cuyo servicio será de dos años.

Art. 17.- El Presidente de la República dictará dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de esta ley los reglamentos necesarios para el buen servicio y eficacia de la acción de los Protectores de Indígenas.

VI

La población indígena en la provincia de Biobío, alcanza a mil individuos y en la de Malleco a doce mil, casi en su totalidad reducidos a la mayor miseria.

Este Protectorado empezó a funcionar en Angol, el 10 de abril de 1910. Se iniciaron 21 juicios nuevos; se atendieron 316 reclamos de indígenas; se dirigie-

ron 346 notas a la Inspección General y otras autoridades; se evacuaron 7 informes; y hubo 21 comparendo entre indígenas.

Esta Oficina hasta la fecha, y a pesar de haberlo hecho presente en repetidas ocasiones a la Inspección General, carece de local, pues la casa particular que arrienda la Intendencia para sus oficinas, no tiene local para que funcione el Protectorado de Indígenas.

Tampoco ha sido dotada esta Oficina de todo el mobiliario y útiles de escritorio necesarios para su correcto funcionamiento.

VII

Terminaré este memorial rogando a la Honorable Comisión Parlamentaria se sirva influir con el señor Ministro para que a la brevedad posible se contrate un ingeniero y un agente judicial para este Protectorado; se den fondos para atender a la defensa judicial de indígenas, y se proceda de una vez a la reorganización de este servicio.

Esperando que en algo sirvan las ideas que dejo expuestas en este memorándum, tiene el honor de saludar a la Honorable Comisión Parlamentaria.

Manuel Oñat
Angol, 27 de febrero de 1911.

1910
EULOGIO ROBLES
MEMORIA DEL PROTECTOR DE INDÍGENAS DE CAUTÍN[378]

Señor Inspector:

Al cumplir diez años en el servicio, que me es grato dejar constancia que algo se ha avanzado en lo que a la defensa de los indios se refiere, y desde luego, es un gran paso la creación de cinco funcionarios más que cooperen a este fin.

La mayor parte de este largo espacio de tiempo he servido bajo las órdenes de Ud. y me es muy grato también dejar constancia de la forma caballeresca y benévola en que Ud. ha desarrollado sus relaciones con esta Oficina como asimismo de los esfuerzos gastados por Ud. en el sentido de la mejora del servicio en condiciones que garanticen su eficacia.

No puedo presentar hoy el cuadro que tracé cuando asumí el ejercicio de mis funciones, exhibiendo y detallando atropellos inauditos practicados con los indios. No han concluido por completo, ni es posible que concluyan; pero se han disminuido notablemente en gravedad y en número.

Se respeta mucho más hoy la tierra y las personas de los indios.

Es en los juzgados de menor cuantía, servidos generalmente, con honrosas excepciones, por personas inescrupulosas, en donde se han asilado los fraudes que se perpetran con los indios.

Los reclamos que estos traen a la Oficina no constituyen, por lo general, atropellos de particulares sino que versan sobre querellas que se suscitan entre los mismos indígenas.

Esas cuestiones solo pueden ser tomadas en consideración asumiendo el Protector el papel de amigable componedor y viendo modo que los indios obedezcan lo que resuelva en cada caso, ejerciendo sobre ellos únicamente el influjo moral alcanzado como su defensor.

El malestar que se nota en las reducciones tiene como primera causa el régimen de comunidad y no podrá removerse hasta que no se subdividan las reservas.

Este trabajo, como Ud. no lo ignora, corría a cargo del Protector, y se llevaba a cabo sin tropiezo de ningún género hasta que le fue sustraído y confiado a la Comisión de Títulos de Merced.

[378] "Memoria del Protector de Indíjenas de Cautin", en *Memoria de la Inspección Jeneral de Colonizacion e inmigración, 1911* (Santiago, Imprenta i Encuadernacion Ercilla, 1911), pp. 413-432.

Es sensible que, por atenciones de otros órdenes, la expresada Comisión no lo haga marchar con la rapidez que sería de desear, lo que ha obligado a muchos indios a dirigirse a ingenieros particulares para que le partan sus reservas. Desgraciadamente, la intervención de los ingenieros particulares llamados por los mismos indios y remunerados por ellos, no ha logrado el objeto de llevar la tranquilidad a las reservas, porque los interesados, por lo regular, no se conforman con sus operaciones, y lo que más, formulan acerca de ellas reclamaciones ante esta Oficina que no puede atenderlas por cuanto la subdivisión de la propiedad indígena no le está encomendada y porque el trabajo no fue ordenado por ella.

Entre las sentencias que han recaído en las gestiones judiciales promovidas por la Oficina, hay dos que merecen mención por verse en ellas aplicadas correctamente las leyes especiales a que están sometidos los terrenos de indígenas, por acogerse el procedimiento sumario que hace más eficaz la acción, y por establecerse, en una de ellas, jurisprudencia sobre si están comprendidas dentro de los contratos que veda la ley de 20 de enero de 1883, el de aparcería o de trabajo a medias, tan frecuente entre indios y particulares y tan fecundo en abusos de parte de estos últimos.

Las sentencias referidas son las siguientes:

Vistos: Don Eulogio Robles Rodríguez, Protector de Indígenas, domiciliado en Temuco, calle Claro Solar núm. 21, por el natural Valentín Namuncura y demás comuneros de la reducción, todos agricultores, residentes en el lugar denominado Peu Peu de este departamento, a quienes representa por ministerio de la ley, a fojas cuatro, expone: que según el título acompañado, a estos indígenas se les ha hecho una adjudicación de 55 hectáreas de terreno y que deslindan: noreste, una recta que nace en el camino público y muere en el estero Peu Peu, que lo divide del señor Frioche; noroeste, el camino público; sudoeste, una recta que nace en el estero Peu Peu y muere en el camino público, separándola del señor Alonso.

La extensión, así delimitada, debe ser ocupada exclusivamente por indígenas y no puede ser materia de ningún contrato que traiga por consecuencia la privación de su posesión ni aun de su mera tenencia.

Constatado que algún particular ocupe terrenos de indígenas, no podría excepcionarse con ninguna alegación para permanecer en ella. Así lo disponen y se desprende de las leyes de 20 de enero de 1883 y 13 de enero de 1903.

Que no obstante esto, don Gregorio González, agricultor, domiciliado en Peu Peu, se ha apoderado de 40 hectáreas de terreno más o menos al Oriente de la reserva, al lado del estero Peu Peu, a pretexto de trabajar en medias con otro indio, y también tiene pastoreo de animales.

Que en esta virtud entabla demanda en procedimiento sumario y pide del juzgado se declare que el expresado González debe hacer entrega del terreno referido dentro del segundo día bajo apercibimiento de derecho. El juzgado

tuvo por deducido el procedimiento sumario y mandó citar las partes a la audiencia de estilo. Tuvo lugar ésta con asistencia del señor Protector de Indígenas, don Eulogio Robles Rodríguez y del demandado Gregorio González. El primero reprodujo lo expuesto en la demanda y pide que se dé lugar a ella. El demandado a su turno solicita que se deseche la demanda por cuanto tiene pendiente un contrato de arrendamiento con Valentín Namuncura que corre en el expediente sobre cumplimiento de contrato seguido entre el expresado González y Namuncura. El juzgado mandó traer a la vista el proceso en referencia y estimando la cuestión de mero derecho dejó citadas a las partes para sentencia.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que consta del título de fojas 2 que a los indígenas demandantes se les ha hecho una concesión de 55 hectáreas de terreno en este departamento.

2° Que el demandado en comparendo de fojas 8, reconoce implícitamente tener la posesión del terreno cuya entrega se solicita excepcionándose con un contrato de arrendamiento que corre a fojas 1 del proceso traído a la vista para resolver.

3° Que el contrato en referencia carece de eficacia legal.

Y visto lo dispuesto en los artículos 1.681, 1.698 del Código Civil, ley de 20 de enero de 1883 y 13 de enero de 1903, 151, 331 y 389 del Código de Procedimiento Civil, se declare que ha lugar a la demanda debiendo efectuarse la restitución dentro del décimo día a contar desde que cause ejecutoria esta sentencia.

No se condena en costa de demandado por estimarse que ha tenido fundamento plausible para litigar.

Anótese.

Fernando Soro B.

Germán Rios G.

Valdivia, 12 de diciembre de 1910.- Vistos: Con el mérito del certificado que antecede y de acuerdo con lo prevenido en el art. 224 del Código de Procedimiento Civil, se declara desierta la apelación interpuesta por don Gregorio González contra la sentencia de 2 de diciembre de 1909, que se registra a fojas 9 con costas del recurso.

Agréguese el papel y devuélvase.

Lautaro, veinticuatro de enero de mil novecientos once. Vistos: Don Eulogio Robles Rodríguez, Protector de Indígenas, domiciliado en Temuco, calle Mackenna, entre Portales y Rodríguez, por el natural José Quilaleo y demás individuos de su reducción, todos agricultores. Residentes en Nilpe, de este departamento, a quienes represento por el ministerio de la ley a fojas tres, expone: que según el título que acompaña, a estos indígenas se les ha hecho

una adjudicación de un mil sesenta y cuatro hectáreas de terreno, cuyos deslindes son los siguientes: Norte, con las hijuelas números 1.233 y 1.122, por una parte en línea recta y otra por una quebrada y esterito afluente del estero Nilpe, por el sur y oriente, estero Nilpe por medio con las hijuelas números 1.130, 1.187, 1.188, 1.190, 1.193, 1.192, 1.191; y por el poniente, con terrenos fiscales aun sin medir.

Que la extensión así delimitada debe ser ocupada exclusivamente por indígenas y no puede ser materia de ningún contrato que traiga por consecuencia la privación de su posesión y ni aun de su mera tenencia. Constatado que algún particular ocupe terrenos indígenas, no podría exepcionarse con ninguna alegación para permanecer en ella. Así lo dispone y se desprende de las leyes de 20 de enero de 1883 y 13 de enero de 1903.

Que no obstante esto, don Gregorio Venegas, agricultor, domiciliado en Nilpe, se ha apoderado de diez hectáreas de terreno, más o menos, al suroriente, al lado del estero Nilpe, a pretexto de haberle arrendado a un indio que se fue a la Argentina; este tiene siembras y pastoreo de animales. Termina pidiendo que el expresado Venegas debe hacer entrega del terreno referido dentro del segundo día bajo apercibimiento de derecho.

El juzgado tuvo por interpuesto el procedimiento en juicio sumario y mandó citar a las partes a comparendo a la audiencia del quinto día hábil. A fojas trece tuvo lugar el comparendo con asistencia de ambas partes. En esta audiencia el demandante reproduce lo expuesto en su demanda y el demandado expresa que es efectivo que ocupa doce hectáreas de suelo, más o menos, en el punto que se indica en la demanda, porque las trabaja a medias con Juan de Dios María Quilaleo. Agrega que tiene animales y siembras en ese terreno, como así mismo una casa. Por tratarse de una cuestión de derecho en vista de la confesión del demandado, el juzgado dejó citadas a las partes para sentencia.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que consta del documento de foja una que a José Quilaleo y otros se les otorgó título de merced de mil sesenta y cuatro hectáreas de terreno en Nilpe, de este departamento;

2° Que el demandado Gregorio Venegas, confiesa a fojas trece que ocupa doce hectáreas de suelo, más o menos, en el punto que se indica en la demandada y comprendidas en la adjudicación aludida, las que trabaja a medias con Juan de Dios Marín Quilaleo;

3° Que el expresado Venegas no ha podido celebrar con Quilaleo el contrato a que refiere en su confesión, y por tal motivo debe restituir el suelo que ocupa indebidamente.

Y visto lo dispuesto en el artículo mil seiscientos noventa y ocho del Código Civil, leyes de 20 de enero de 1883 y de 13 de enero de 1903; art. 151 y 189 del Código de Procedimiento Civil, se declara: que ha lugar a la demanda de fojas tres, fijándose para la restitución el término de diez días. No

se condena en costas al demandado por haber tenido fundamento plausible para litigar. Se habilita el presente feriado de vacaciones para dictar sentencia.

Anótese y reemplácese el papel.

Fernando Soro B.

Germán Ríos G.

De los informes que ha evacuado la Oficina, trascribo uno que le fue pedido por el señor Ministro de Colonización en que se desarrolla un aspecto de la legislación especial a que están sujetos los indios.

Es el siguiente:

Informe sobre una consulta hecha al Ministro de Colonización por el señor Protector de Indígenas de la provincia de Arauco sobre a quien obliga el pago de las mejoras introducidas por particulares en terrenos de indígenas antes de expedírseles títulos de merced.

Señor Ministro:

El señor Protector de Indígenas de la provincia de Arauco elevó a la Inspección de Colonización la consulta sobre a quien obliga el pago de las mejoras introducidas en terrenos de indígenas por particulares y dice que muchos individuos que tienen posesión en tales suelos, alegan que son ocupantes nacionales de tierras del Fisco y que de acuerdo con lo prescrito en el inciso 3 del art. 6 de la ley de 4 de agosto de 1874 para abandonarlas necesitan que previamente se les abonen dichas mejoras. Estima el señor Protector que el derecho a ese pago es indubitable y que la dificultad estriba en quien está obligado a satisfacerlo, si el Fisco o el indio, y avanza la opinión que competería al primero, dado los términos en que está concebida la citada disposición del año 74.

El señor Inspector de Colonización e Inmigración, antes de dar curso a la consulta, quiso que el funcionario que la formulaba aclarara los hechos en el sentido de que expresara si los referidos ocupantes estaban en posesión de terrenos indígenas con anterioridad a la radicación de éstos.

Elevados los antecedentes al Departamento del digno cargo de US. se dispuso que informara el Consejo de Defensa Fiscal y su presidente ordenó que lo hiciera previamente el abogado jefe de Colonización.

El mencionado funcionario expresa que: "Aunque el artículo 6 de la ley de 4 de agosto de 1874 no dice a quien corresponde el pago de las mejoras es indudable que debe efectuarlo la persona que obtiene por concesión del Estado el terreno en que se encuentra, por la sencilla razón de que ella es la que se beneficia con esas mejoras".

Agrega más adelante que: "Es de suponer que solo por un error de la Comisión Radicadora de Indígenas puede presentarse un caso de esta naturaleza. Según los artículos 6 y 7 de la ley de 4 de diciembre de 1866, la radicación

de los indígenas debe hacerse en los terrenos que ellos hubieren ocupado durante el año anterior a lo menos. Esta ocupación excluye la de un tercero, por consiguiente, pugna con la existencia de mejoras que no sean materia de un reclamo previo. Si el indígena no probase posesión, se aplica para el efecto de radicarlo lo preceptuado por el art. 8 de la ley de 4 de agosto de 1874, esto es, se le considerará como colono, con ciertas condiciones especiales".

Tanto en este caso como en el anterior, la Comisión de Títulos de Merced debe asignarles hijuelas en terrenos libres y evitar así todo conflicto.

El Consejo de Defensa Fiscal acordó absolver la consulta en la forma siguiente:

Cree que el pago de dichas mejoras, en caso de haberse efectuado en la forma indicada, correspondería a quien se hubiere enriquecido con ellas, pero que en rigor, observando lo dispuesto por los art. 6 y 7 de la ley de 4 de diciembre de 1866 y por el art. 8 de la ley de 4 de agosto de 1874, el conflicto es fácil de evitar asignando las hijuelas en terrenos libres en que no existan mejoras de terceros.

El señor Ministro, para resolver ha hecho el honor al Protector de Indígenas de Cautín de pedirle dictamen.

A nuestro modo de ver, no tiene cabida en el caso propuesto lo estatuido por el inciso 3 del art. 6 de la ley de 4 de agosto citada.

Examinando en conjunto ese precepto, vemos que consulta: a) en el primer inciso la demarcación territorial en que está impedida la adquisición por particulares de terrenos indígenas, por cualquier medio; b) en el segundo, la excepción a la regla general anterior en el sentido que no rige el impedimento respecto de los fundos cuyos títulos estuvieren ya inscritos en forma legal, excepción aclarada por la ley de 9 de noviembre de 1877 que dispuso que ella solo se refería a los fundos cuyos títulos estaban ya inscritos a la fecha de la promulgación de la ley que examinamos; c) en el tercero, que es el que ha motivado las fundadas dudas del señor Protector de Arauco, la disposición que literalmente copiamos: "Los que estén establecidos o se establecieren dentro del territorio no podrán pretender otro derecho que el de abono de las mejoras que hubieren introducidas en ellas cuando el *Estado disponga* de esos terrenos"; d) en el cuarto, una excepción a la regla sentada precedentemente excluyendo a los colonos y a los indígenas.

Los dos primeros incisos legislan, como puede notarse, sobre los *terrenos de indígenas*, para los efectos de prohibir su adquisición por cualquier medio, sustrayéndolos al comercio humano.

Los dos últimos incisos no se refieren ya a terrenos de indígenas sino a los situados dentro del territorio y de que puede disponer el Estado.

Siempre se ha comprendido que los terrenos de los cuales puede disponer el Estado son los fiscales y éstos, cuando el Fisco los remata y tienen mejoras, son tasados por ingenieros y abonadas cuando el que las introdujo no es el subastador de los terrenos.

Los dos últimos incisos en examen bien podrían constituir un artículo aparte, porque miran situaciones distintas.

Tomando las cosas bajo este punto de vista, no puede tener cabida la aplicación del inciso 3 del art. 6 a los casos concretos circunscritos en la consulta del señor Protector de Arauco, pues en esa consulta se habla de terrenos de los cuales se ha concedido título de merced a los indios, esto es, de aquellos que contempla el art. 5, inciso 1 de la ley de 4 de diciembre de 1866 y que deben ser deslindados por los funcionarios que el mismo artículo designa.

Nótese que los suelos en que se radica a los indios son de su dominio aún antes de que la Comisión Radicadora les extienda el respectivo título, de manera que la Comisión no viene a ser a modo de un tribunal que constituye esa propiedad sino una junta que debe practicar operaciones técnicas para los efectos de "deslindar los terrenos pertenecientes a los indígenas", según expresiones literales de la ley.

Nótese, además, que tales terrenos no son denominados fiscales y que la ley misma define, para los efectos de la radicación, lo que debe entenderse por propiedades del Fisco como puede verse en el inciso 2 del art. 6, de la ley de 4 de diciembre de 1866 que reputa como terrenos baldíos y de consiguiente, de propiedades del Estado todos aquellos respectos de los cuales no se haya probado (por los indígenas) posesión efectiva y continuada de un año por lo menos.

Entonces, de rigor, los terrenos pertenecientes a los indígenas, es decir, aquellos que deslinda la Comisión nombrada, no son de propiedad del Estado, y en consecuencia, el Estado no puede disponer de ellos, y siendo esto así, la frase "cuando el Estado disponga de ellos" contenida en el inciso 3° de la ley de 4 de agosto de 1874, no se aplica a terrenos de indígenas a aquellos deslindados por la Comisión tantas veces citada y a los que se refiere la consulta que motiva este informe.

Hasta aquí no vemos aun cómo podría tener asidero en la ley la oposición sustentada por el Consejo de Defensa Fiscal en el sentido de que a los indios afecta el pago de las mejoras introducidas en sus suelos por particulares antes de que le sean deslindados por los funcionarios a quienes el legislador ha encomendado este cometido.

Con mucha anterioridad a la ley de 4 de diciembre de 1886, ya los indígenas eran dueños de los terrenos que ocupaban. En efecto, el senadoconsulto de 10 de junio de 1823 dispuso en su art. 2: "Que lo actual poseído, según ley, por los indígenas se les repute en perpetua y segura propiedad" y declaró que las tierras sobrantes, aquellas no poseídas por los indios, eran de propiedad del Estado.

Desde entonces, pues, se viene haciendo esta distinción entre *propiedad fiscal* y *propiedad indígena* y asignando al Estado lo no poseído por los indios. Nadie, ni aun el Estado, puede *disponer* de lo que no le pertenece.

Establecido que el Estado *no dispone* de los terrenos de indígenas cuando se practica su radicación y que, en consecuencia, no tiene aplicabilidad el

precepto legal en estudio, nos queda por examinar otra solución dada a la consulta por el Consejo de Defensa Fiscal en el sentido de que, en rigor, observando lo dispuesto por los art. 6 y 7 de la ley de 4 de diciembre de 1886 y por el art. 8 de la ley de 4 de agosto de 1874, el conflicto es fácil de evitar asignando las hijuelas en terrenos libres en que no haya mejora de terceros.

El Consejo, para resolver rigurosamente el conflicto, propone simplemente una nueva indicación que cree podría hacerse en la forma ordinaria (artículo 6 y 7 citados); o en la forma extraordinaria (art. 8 de la ley de 4 de diciembre de 1886).

Lo primero no podría hacerse legalmente por cuanto los indígenas estarían en aptitud de probar posesión efectiva y continuada por más de un año en el terreno libre que se les asignase, después de practicada ya la asignación, que es el caso propuesto por el señor Protector de Arauco.

Lo segundo tampoco podría hacerse por cuanto se necesitaría que los indios no hubieren sido radicados en ninguna parte, y la consulta en Informe dice que los indios han sido radicados en la forma ordinaria y para ello han debido probar posesión donde se encuentran, es decir, en hijuelas con mejoras. Y para los dos temperamentos hay el obstáculo de la regla 7ª dada en el art. 7 de la ley de 4 de diciembre que dice: "Al fijar los linderos, sea en posesión indígena particulares, sea en las de una reducción, se preferirán los límites naturales, cuando los poseedores no presenten los límites precisos, y a fin de adoptar esos límites se podrá establecer compensaciones de terrenos colindantes, pero en ningún caso de aquello en que los indígenas tuvieren planteles o destinasen a siembras".

No haciéndonos cargo sino de la segunda parte de esta disposición, tendríamos que para trasladar a los indígenas a una hijuela libre, estos deberían abandonar los terrenos que destinan a sus siembras, temperamento no aceptado por la ley.

El Consejo estima que hay imposibilidad legal para la coexistencia en terrenos de indígenas de la posesión de estos y de su ocupación por terceros. Sin embargo, el Supremo Gobierno no lo ha estimado así en el decreto supremo de 19 de mayo de 1910, y desarrolla una doctrina adversa a la sustentada por el Consejo en las siguientes luminosas consideraciones:

1.ª Que según lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7, número 1 de la ley de 4 de diciembre de 1866, el antecedente que debe servir de base para el otorgamiento de títulos de merced a favor de indígenas, respecto de los terrenos ocupados por estos, es la posesión efectiva y continuada durante un año, por lo menos;

2.ª Que ocurre con frecuencia que los indígenas que solicitan títulos de merced ante la Comisión respectiva, no pueden acreditar la tenencia material de sus terrenos por hallarse estos ocupados por extraños que los detentan contra la voluntad de sus poseedores;

3.ª Que esta situación no puede privar a los indígenas del derecho que la citada ley les reconoce para obtener título de dominio sobre los terrenos que hubieren poseído por el tiempo indicado.

En sentir del Supremo Gobierno no hay, pues, incompatibilidad legal en la coexistencia de la ocupación de un terreno por extraños y la posesión en él mismo por indígenas.

Debemos, entonces, desechar el temperamento que de rigor estima el Consejo de Defensa Fiscal que debe adoptarse para dirimir el conflicto que se ha presentado al señor Protector de Indígenas de Arauco.

Preciso es, para resolver la cuestión, que recordemos todas las formalidades que preceden al otorgamiento de un título de merced, que son bastante prolijas: levantamiento de un plano de las posesiones indígenas, citación de los colindantes, intervención del Protector en el deslindamiento, y aprobación del Supremo Gobierno que debe recaer sobre las operaciones practicadas por la Comisión de Títulos, (Ley de 4 de diciembre de 1866, inciso 3° del artículo 2 de la ley de 20 de enero de 1883 y decreto supremo núm. 733 bis de 31 de mayo de 1907).

Ahora, afinado un título, la Comisión Radicadora de Indígenas, de acuerdo con el art. 26 del decreto reglamentario de 20 de mayo de 1896, debe dar cuenta al Protector de sus operaciones para que ampare a los indígenas en las respectivas adjudicaciones.

En la serie de preliminares que preceden a la radicación, los terceros que se creyeren perjudicados tienen tiempo sobrado para formular los reclamos del caso.

Una vez cumplidas las formalidades expresadas, los terceros no podrían ni siquiera gestionar ante la justicia ordinaria para los efectos de obtener un pronunciamiento acerca de lo obrado por la Comisión Radicadora de Indígenas.

Sobre el particular llamamos a US. la atención hacia la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema en sentencia expedida con fecha 11 de octubre de 1895 en el juicio posesorio seguido por el indígena Juan Tomas Lincopi contra el Fisco y para ello trascribimos a la letra la parte segunda del considerando 2° de esa sentencia:

> "Los tribunales ordinarios no tienen, por que la ley no les concede, atribución para conocer de las cuestiones que pueden suscitarse sobre si existe o no la posesión originaria del territorio araucano, ni sobre si esta posesión reúne o no las condiciones requeridas por la ley para obtener título de merced, ni la tienen tampoco para rever, mediante algún recurso legal, y para el efecto de pronunciarse sobre ellas, las resoluciones que la Comisión antes mencionada de (Títulos de Merced) haya adoptado o adopte en el ejercicio de las funciones que especialmente le ha conferido la ley".

Ahora, volviendo al caso concreto propuesto por el señor Protector de Arauco, estimamos que este funcionario, con los títulos que le presenten los indios debe gestionar judicialmente la entrega de los terrenos ocupados por los particulares que tienen en ellos mejoras, ciñéndose estrictamente a sus títulos.

Los ocupantes no podrían obtener de la justicia un pronunciamiento contrario a lo obrado por la Comisión Radicadora de Indígenas, y constatado que alguien ocupe terreno dentro de las hijuelas adjudicadas a los indios, serían compelidos a su entrega, pues esta clase de terrenos están virtualmente fuera del comercio humano y no pueden ser sustraídos en ningún momento, no ya de la posesión, sino aun de la mera tenencia de los indios (artículo de la ley de 20 de enero de 1883, 2° inciso de la ley de 11 de enero de 1893, y único de la ley de 13 de enero de 1903).

Según esto, los ocupantes no podrían acogerse a la disposición del art. 914 del Código Civil para retener los terrenos en que tuvieren mejoras.

Planteada así la cuestión, lo demás es del resorte de la aplicación de la ley común, esto es de las reglas dadas en el párrafo 6, del título XIV, del libro II del Código Civil.

En suma, cree el infrascrito que el pago de las mejoras de que se trata debe hacerse en conformidad a esas disposiciones, ateniéndose, en consecuencia, para ser efectuadas, a la posesión de buena o mala fe del que las pretenda.

Como siempre, esta Oficina se ha preocupado de arbitrar, en lo que está a su alcance, medios para civilizar a los indios, ya proponiendo proyectos, ya dando facilidades a los jóvenes para que se eduquen.

La adopción de parte del Gobierno de medidas encaminadas a la pronta civilización de los indios, aun cuando importaran desembolsos inmediatos, constituirían, en definitiva, un fuerte ahorro por cuanto, alcanzada la unidad de cultura media entre todos los habitantes de la República, los indios ingresarían sin inconveniente a la plenitud de la vida civil sin regirse por las leyes de excepción que la prudencia y los bien entendidos intereses nacionales aconsejan mantener mientras tanto, dando así lugar al alivio del presupuesto en los gastos que comporta el funcionamiento de esas leyes especiales. Esto, sin contar, con la ventaja de elevar el nivel de cultura de una cuota no despreciable de nuestros conciudadanos.

Aprovechando la oportunidad de la celebración del Centenario, propuse como miembro del Comité de Vecinos designado en esta ciudad para elaborar el programa de esas fiestas, la ceremonia de la colocación de la primera piedra de un establecimiento destinado a la educación de los indígenas y que se denominaría "Internado Centenario" y que debería fundarse en dos quintas fiscales de esta población.

La idea fue acogida.

A fin de abrirle camino publiqué en algunos diarios de la capital y de provincias el artículo que se inserta en que trata de explicar la oportunidad del proyecto.

Un número para el Centenario

En reunión de autoridades y vecinos habida en Temuco con el objeto de acordar un programa para la celebración del centenario, fue acogida con entusiasmo la idea de colocar en dicha ciudad, precisamente el 18 de septiembre

de 1910, la primera piedra de un edificio que serviría de gran internado para niños indígenas, a imitación de los que existen en Estados Unidos y el Canadá.

La prensa ya había querido asociar a los araucanos a la celebración de la gran fecha y aun se había propuesto –y hubo con tal motivo una pequeña polémica– la idea de llevar a Santiago algunos indios, con el fin de que hicieran las fiestas denominadas *guillatun*[379].

Pareció a muchos impracticable este número dentro del programa de las fiestas santiaguinas porque para ello habría habido necesidad de acarrear a la capital centenares de mapuches, con sus mujeres y niños, ya que todos toman parte en esa ceremonia religiosa.

Difícilmente los indios, que son respetuosos de sus ceremonias tradicionales y que las efectúan después de correr muchos trámites, se habrían prestado para hacer una parodia.

Con el propósito, también, de asociar a los araucanos a la solemnización del centenario, se ha lanzado la idea de elevar una estatua a Caupolicán; pero ello no llenaría el fin perseguido, porque el monumento solo serviría de ornato a la ciudad en que se erigiera, y ningún provecho práctico reportaría a esta raza.

Si se quiere tener presente a los araucanos en la solemne ocasión de que se trata, hay que recordar antes de todo, que su nivel de cultura es inferior al del resto de sus compatriotas y que se impone la integración de los indios en la corriente del progreso.

Si se encontrara la forma de realizar un propósito que al mismo tiempo de beneficiar a nuestros aborígenes se rindiera homenaje a los padres de la patria, sería realmente un bello número para el centenario.

Y esa forma no puede ser otra que la creación de un gran establecimiento para educar a los niños araucanos, realizándose así por la generación que honraría el primer centenario de la independencia, uno de los más fervorosos anhelos de los fundadores de nuestra nacionalidad.

El 1° de julio de 1813, se dictó un senado-consulto que lleva las firmas de próceres tan esclarecidos como Francisco Antonio Pérez, José Miguel Infante, Agustín Eyzaguirre, Camilo Henríquez, Juan Egaña, Joaquín de Echeverría, Francisco Ruiz Tagle y Mariano de Egaña, en que se ordenaba la adopción de medidas encaminadas a la civilización de los indios.

Conviene hoy traer a la Memoria el preámbulo de ese senado-consulto en que se reflejan anhelos de los padres de la patria: "Deseando el Gobierno hacer efectivos los ardientes conatos con que proclama la fraternidad, igualdad y prosperidad de los indios y teniendo una constante experiencia de la extrema miseria, inercia, incivilidad, falta de moral y educación en que viven abandonados en los campos, con el supuesto nombre de pueblos, y

[379] = Rogativa.

que a pesar de las providencias que hasta ahora se han tomado, se aumenta la degradación y vicios *a que también quedaría condenada su prosperidad, que debe ser el ornamento de la patria*, decreta con el acuerdo del ilustre Senado".

Vienen en seguida minuciosas disposiciones de las cuales vale rememorar estas dos:

1° Todos los indios verdaderamente tales y que hoy residen en los que se nombran pueblos de indios, pasarán a residir en villas formales que se erigirían en dos, tres o más de los mismos pueblos, designados por una comisión, gozando de los mismos derechos sociales de ciudadanía que corresponde al resto de los chilenos.

2° Estas villas tendrán necesariamente una iglesia o capilla, con su cura, sotacura o capellán, una casa consistorial, una cárcel, una escuela de primeras letras, escritura y doctrina cristiana y aseo y policía conveniente.

Como se ve, la idea propuesta en la comisión de vecinos de Temuco coincide en el fondo con los propósitos de los padres de la patria, y llevándola a cabo, se impediría, como se dice, en bando de 4 de mayo de 1819, firmado por O'Higgins y Echeverría "que esa porción preciosa de nuestra especie continúe en tal estado de abatimiento".

Las razones que hay para erigir un internado son numerosas. Desde luego, se arranca a los niños de sus rucas y se les hace adquirir hábitos que no abandonan después, como experimentalmente se ha demostrado con los jóvenes araucanos que han estado en los cuarteles en calidad de conscriptos.

Los externados para indígenas fracasarían por completo, pues para ello habría que fundarse precisamente escuelas rurales que no tendrían alumnos sino en los primeros días; pero después la asistencia sería precaria.

Hay que tomar en cuenta que los indios no viven hoy agrupados en caseríos, sino diseminados en vastas zonas y que si bien las rucas de los miembros de la misma reducción están más o menos cercanas, no sería posible encontrar un punto céntrico para ubicar la escuela y aun encontrada esa situación ventajosa, no podrían salvarse otros serios obstáculos, como los malos caminos, el rigor del tiempo, a lo que se agrega la falta de método en la vida de individuos de escasísima cultura, que interrumpiría con frecuencia la continuidad que es indispensable para el aprovechamiento escolar.

Se elegiría la ciudad de Temuco para asiento de ese plantel, porque la provincia de Cautín es la más densamente poblada por indígenas, pues se encuentran en ella casi la mitad de los araucanos.

Entiendo que el mejor modo de celebrar nuestro Centenario es dejar concluidas o iniciadas obras permanentes que recuerden siempre a las generaciones venideras la gloriosa fecha que motivó su erección.

Eulogio Robles Rodríguez

Se llevó a cabo la realización de este número del programa de fiestas como se ve en el acta que se copia:

Acta de la colocación de la primera piedra del Internado Centenario, dedicado a la educación de jóvenes indígenas: Gobierno del Excmo. señor don Emiliano Figueroa Larraín

Homenaje al primer Centenario de la Independencia Nacional
1810-1910

En Temuco, a las 10 horas A. M. del 19 de septiembre de 1910, con la asistencia de las autoridades locales y numerosa concurrencia. Después de leído el Decreto Supremo que más abajo se inserta, se procedió por el señor Intendente de la provincia don Ricardo Vélez Lamberry, acompañado del Protector de Indígenas de Cautín don Eulogio Robles Rodríguez y del presidente de la Comisión Radicadora de Indígenas, don Leoncio Rivera Cruzat, a colocar las piedras fundamentales de los cimientos de los edificios a que se refiere dicho decreto, en las dos manzanas vacías, ubicadas en la Avenida José Manuel Balmaceda, al sur de los terrenos de la Quinta Agrícola.

Usó de la palabra el expresado protector de indígenas, don Eulogio Robles Rodríguez.

El Supremo Decreto dice: He acordado y decreto: Destínase a la construcción de una Escuela Industrial y Asilo Fiscal de Indígenas en Temuco, las dos quintas vacantes situadas en la Avenida Balmaceda, de dicha ciudad al sur de los terrenos ocupados por la Escuela Agrícola. El Agrónomo Regional de la tercera zona procederá a hacer entrega de dichas quintas al Intendente de la provincia, quien efectuará su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, afectándolas al objeto indicado.

Tómese razón y comuníquese.

(Firmado).

Elías Fernández Albano.

Fidel Muñoz R.

Se firman para constancia dos ejemplares del mismo tenor por el señor Intendente, demás funcionarios y algunas personas asistentes al acto,–Ricardo Vélez L.–Eulogio Robles Rodríguez.–Leoncio Rivera.–Evaristo Soto.–Horacio Novion. –Eduardo Sepúlveda.–E. Saint Anne.–Robt. Wilke.–Carlos A. Sadleir.–Enrique Abel.–Diego A. Reyes.–Carlos B. Frías.–Pedro J. Alvarez.–Alfredo Cortínez.–Eulogio Navarro.–Juan Maliqueo.–Miguel Santos Coliqueo.–(Siguen las firmas).

Me resta decir a Ud. que han salido de esta Oficina 690 piezas, entre oficios a distintas autoridades, solicitudes a los juzgados e informes al Ministerio o la Inspección.

Saluda atentamente al señor Inspector.

Eulogio Robles Rodríguez.

Temuco, junio de 1911.

1910
EULOGIO ROBLES
INFORME DEL PROTECTOR DE INDÍGENAS DE CAUTÍN A LA COMISIÓN PARLAMENTARIA[380]

SUMARIO

I. Exposición de la legislación vigente sobre indígenas

1. Indicación del contenido. 2. Síntesis de la condición legal del indígena: igualdad del indio y del chileno ante la Constitución; dos fundamentales excepciones ante la ley civil; los indios no son considerados menores de edad. 3. La radicación de los indígenas; regla general para constituir a su favor un título de dominio; procedimiento; radicación excepcional del indígena; leves alteraciones de la ley de radicación de 4 de diciembre de 1866. 4. Antecedentes legislativos de la ley de radicación; senados consultos de 1813 y 1823. 5. Leyes que prohíben contratar sobre bienes raíces de los indígenas. 6. Las leyes de prohibición no rigen uniformemente en todo el territorio de indígenas: zona de prohibición absoluta; zona de prohibición relativa. 7. Antecedentes de las leyes que prohíben contratar a los indígenas sobre sus bienes raíces; se establecieron previamente formalidades y algunas prohibiciones; ineficacia de estas medidas; motivos que se tuvo presentes para consultarlos. 8. Efectos de las leyes prohibitivas; han permitido la correcta constitución de la propiedad donde han regido; desorden existente al sur del Toltén; la propiedad sin consistencia; no se puede inmovilizar. 9. Estado civil de los indígenas solo para los efectos de constituir derechos hereditarios: razón del precepto. 10. El Protector de Indígenas; fue creado únicamente para el "territorio fronterizo"; sus atribuciones; inconstitucionalidad del decreto que confiere algunas de ellas a los promotores fiscales; litiga como pobre; creación posterior de los cargos del Protector de Indígenas para Valdivia y Llanquihue, Arauco, Biobío y Malleco; se crea un solo protector para Llanquihue.

[380] "Anexo V: Informe del Protector de Indígenas de Cautín don Eulogio Robles Rodriguez", en Comisión Parlamentaria de Colonización, *Informe, Proyectos de Ley, Actas de las Sesiones y otros antecedentes* (Santiago, Imprenta y Litografía Universo, 1912), pp. 131-167.

II. De la aplicación de la legislación especial sobre indígenas

1. Observación general; no se ha liquidado, en primer lugar, la comunidad de terrenos entre el Fisco y el indio; para disponer de ellos, no se ha seguido el método indicado por la ley; en ocasiones se ha procedido en sentido inverso; razón de la escasa cabida adjudicada a los indios. 2. Aplicación práctica de la ley de radicación. 3. Intervención posterior del Protector en el deslindamiento de las propiedades de indígenas; reclamos sobre aumento de cabida. 4. Radicación preferente hoy por familia; se va abandonando el sistema de radicar por reducciones. 5. Subdivisión de la propiedad indígena. 6. Enumeración de las tareas del Protector.

III. Reformas que deben adoptarse

1. Reformas administrativas que deben introducirse en la radicación y defensa de los indios. 2. Medidas administrativas para ayudar a la constitución del estado civil de los indios. 3. Tentativas para legislar sobre indígenas: enumeración de los proyectos presentados desde 1892 a 1907. 4. Proyecto de ley que el Protector de Indígenas de Cautín somete a la consideración de la Honorable Comisión Parlamentaria. 5. Razones para suprimir dos artículos del proyecto aprobado por el Senado. 6. Antecedentes legislativos acerca de la intervención de un miembro de los tribunales de justicia en la radicación de los indígenas. Consideraciones para someter al Protector los asuntos contenciosos entre indio e indio, en los casos que se indican.

IV. Civilización de los indígenas.

Propósito constante del Gobierno para conseguirla; esfuerzos aislados; falta de plan sistemático. El Internado de Indígenas del Centenario; se destinan dos manzanas de Temuco; acta de la ceremonia para colocar la primera piedra.

HONORABLE COMISIÓN

I

1. Cumplo con el cometido de presentar a la Honorable Comisión el memorándum que se sirvió indicarme que elaborara. He creído conveniente hacer brevísima exposición de la legislación especial a que están sometidos los indígenas y sus terrenos, seguida de la manera cómo se aplica, y proponer las medidas,

tanto de administración cómo de carácter legislativo, que deberían adoptarse para resolver el problema indígena.

He estimado del caso exponer, también, las tentativas que se han hecho para civilizar a los araucanos y los medios que, a mi juicio, debiera implantar el Estado para llegar a ese fin.

2. Los indígenas gozan de todas las garantías constitucionales del resto de los pobladores del país, y tienen las mismas obligaciones que los chilenos. Pueden, reuniendo los requisitos legales, ser elegidos para cargos y funciones públicas; gozan del derecho de sufragio; están obligados a prestar el servicio militar y a contribuir a los gastos públicos, con la garantía para ellos de no poder hacer efectivo el impuesto sobre haberes en sus bienes raíces. En cuanto a su condición civil, los indígenas mayores de edad son capaces de todos los actos y contratos de que es capaz el resto de los habitantes de Chile, con la sola limitación de no poder celebrar contratos sobre sus bienes raíces adquiridos mediante su calidad de indígenas. Esta prohibición, si bien transitoria, pues caduca el 20 de enero de 1913, es absoluta; pero no rige en todo el territorio habitado por indígenas, como se verá más adelante.

Otra diferencia de los indígenas con los demás habitantes de Chile en la legislación civil, es la establecida para constituir, en parte, su estado civil, pues basta la posesión notoria del estado de padre, madre, marido, mujer e hijo para radicar en ellos los mismos derechos hereditarios que establecen las leyes comunes en favor de los padres, cónyuges e hijos legítimos.

Son estas las diferencias más salientes, ante la ley civil, entre los indios y el resto de los habitantes de la República.

3. Las leyes de 4 de diciembre de 1866 y 20 de enero de 1883, establecen la manera de radicar a los araucanos en el terreno que ocupan.

Domina la regla general de que basta la posesión efectiva y continuada por más de un año, para constituir a favor del indígena el derecho de dominio sobre los terrenos que ocupa. (Art. 6 y 7 de la ley de 4 de diciembre de 1866).

La radicación se efectúa hoy, deslindando "los terrenos pertenecientes a indígenas", por una comisión de un abogado y cuatro ingenieros.

Para proceder, dicha comisión debe fallar las cuestiones de deslindes que se susciten y fijar en el terreno de modo claro y preciso tales deslindes. De todo esto se extiende acta en un libro que lleva un ministro de fe pública, y expide a favor del indígena o indígenas poseedores, un título de merced a nombre de la República. Se inserta copia del acta y se anota el título en otro libro que sirve de registro conservador. (Art. 5º).

La operación de deslindes debe practicarse con citación de los poseedores colindantes y con intervención del Protector de Indígenas.

El art. 7 de la citada ley de 4 de diciembre de 1866 da reglas detalladas para proceder al deslindamiento de estos terrenos.

Los indígenas que no se radicaren por no probar posesión efectiva y continuada por más de un año en un terreno determinado, serán considerados como

colonos para los efectos de adjudicarles terrenos sin sujeción a las obligaciones impuestas a los demás colonos. (Art. 8 de la ley de 4 de agosto de 1874).

La ley de radicación ha sufrido algunas alteraciones, pero solo en lo que se refiere a la composición de la comisión Radicadora: la ley del 66, art. 5, estableció que dicha Comisión constaría de tres ingenieros asesorados por el Juez de Letras más inmediato; la de 4 de agosto de 1874, art. 7, dispuso que las funciones atribuidas a esos tres ingenieros serían desempeñadas por un Ministro de la Corte de Concepción, quien podría valerse de uno o más de los ingenieros existentes en la frontera; y la de 30 de enero de 1883 (Art. 2) estableció que la radicación se haría por una comisión compuesta de un abogado, que la presidiría, y de dos ingenieros.

Una ley última, muy reciente, aumentó a cuatro los ingenieros.

4. Como antecedentes legislativos de la Ley de Radicación, hay los que siguen:

a) Senado-consulto de 1º de junio de 1813. Entre otras cosas estableció que cada familia de indios tendría en poblaciones que se exigirían al efecto una casa y una propiedad rural, ya unida a la casa, o en las inmediaciones de la villa. (Art. 3 y 4). Para todo lo prescrito en ese senado-consulto, se designó una comisión de reducción y venta de pueblos de indios;

b) Senado-consulto de 10 de junio de 1823. Estableció la idea matriz que hoy domina en cuanto a la radicación, en esta forma "que lo actual poseído, según ley por los indígenas, se les declare en perpetua y segura propiedad", y que se tasen y paguen en subasta los terrenos sobrantes por cuenta del Estado. Es de notar que la ley actual de radicaciones es un desarrollo y una como reglamentación del Senado-consulto del 23.

c) Conviene también rememorar, si bien no es antecedente legislativo, pero que revela la opinión del Gobierno, el decreto del 28 de junio de 1830, que mandó llevar a efecto la ley senatorial que acaba de citarse.

5. Según ley de 13 de enero de 1903, rige hasta el 13 de enero de 1913 la prohibición de adquirir terrenos de indígenas, contenida en el art. 6 de la ley de 4 de agosto de 1874, 20 de enero de 1883 y 11 de enero de 1903.

El primero de los preceptos citados marcó la extensión territorial en donde "se prohíbe a los particulares la adquisición, por cualquier medio, de terrenos de indígenas".

La ley de 20 de enero (Art. 1) hizo extensiva la prohibición a las hipotecas, anticresis, arriendos o cualquiera otro contrato, en virtud del cual se prive, directa o indirectamente, a los indígenas de la posesión o tenencia de sus terrenos.

Esta ley, a la par que amplió el precepto restrictivo de la del 74, limitó la prohibición a diez años.

La ley de 11 de enero de 1893 prorrogó por otros diez años las prohibiciones mencionadas y amplió el territorio en el cual regirían, extendiéndolo a las provincias de Valdivia, Llanquihue, Chiloé y territorio de Magallanes, y dio más vigor a lo que vedaba el inciso 2º de su art. 2, prohibiendo a los notarios extender escritura alguna de venta, hipoteca, anticresis, arriendo o cualquier

otro contrato en virtud del cual se prive directa o indirectamente a los indígenas del dominio, posesión o tenencia del terreno que ocupan.

6. Las prohibiciones legales referidas en el número anterior, no rigen en todo el territorio habitado por indígenas, y para los efectos de estas prohibiciones, se pueden señalar las siguientes zonas:

a) Zona de prohibición absoluta, que constituye la marcada en el art. 6 de la ley de 4 de agosto de 1874, más las provincias de Valdivia, Llanquihue, Chiloé y territorio de Magallanes;
b) Zona en que pueden enajenarse los terrenos con ciertas formalidades. Es la que sigue al norte de la anterior, en la cual se aplica el decreto ley de 14 de marzo de 1854, dictado por el Presidente de la República, en uso de las facultades que le otorgó la ley que creó la provincia de Arauco (2 de julio de 1852).

7. Para ver históricamente los motivos de la enérgica prohibición a que están sujetos los terrenos de indígenas, conviene enumerar sus antecedentes y tomar nota de las consideraciones que dieron lugar a la adopción de formalidades y prohibiciones, hasta llegar al régimen actual. Estos son:

a) Decreto ley de 14 de marzo de 1853. En el orden que nos ocupa, dispuso que toda compra hecha a indígenas o de terrenos situados en territorios de indígenas, debería verificarse con intervención del Intendente de Arauco y del Gobernador de Indígenas del territorio respectivo. La intervención tendría por objeto cerciorarse de que el indígena que vende presta libremente su consentimiento; que el terreno vendido le pertenece en realidad y que se ha asegurado debidamente el pago del precio. Igual formalidad dispuso para el "empeño de terrenos" y para el arriendo que excediese de cinco años. Los contratos de venta, arrendamiento o "empeño", verificados sin la intervención de los funcionarios nombrados, adolecían de nulidad. El art. 8 de la ley de 4 de diciembre de 1866, atribuyó al Protector de Indígenas el ejercicio de las funciones que en estos casos competía al intendente de Arauco o al gobernador del territorio.

   La razón de la formalidad prescrita la da el considerando 1º de ese decreto ley:

> Que las ventas de terrenos de indígenas, sin intervención de una autoridad superior que proteja a los vendedores contra los abusos que pudieran cometerse para adquirir sus terrenos, y que dé a los compradores garantías contra las protestas u objeciones de falta de pago o falta de conocimiento, que a veces sin fundamento se alega por los indígenas, son origen de pleitos y reclamaciones que producen la irregularidad e insubsistencia de las propiedades raíces de esos territorios.

b) Decreto ley de 4 de diciembre de 1855. Hace extensivas las formalidades del decreto de 14 de marzo a la provincia de Valdivia.

c) Decreto ley de 9 de julio de 1856. Hace extensivas las mismas formalidades a la provincia de Llanuihque.
d) Decreto ley de 5 de junio de 1856. Ordenó que los poderes para litigar que otorgaran los indígenas se extendieran con las mismas formalidades que las escrituras de compraventa.
Dispuso, también, que dichos poderes

"contendrían la designación precisa de la situación y límite de la propiedad reclamada, el título en que se funden los derechos del reclamante y la fecha del acta o contrato que da origen a la reclamación".

Los motivos de este decreto están expresados en los siguientes considerados:

1º Que los repetidos abusos que se cometen en el otorgamiento de los poderes conferidos por los indígenas para ventilar en juicio las cuestiones de terrenos hacen indispensable la intervención de una autoridad superior en estos actos; 2º Que sin esta medida, se dejan en pie, hasta cierto punto, los mismos vicios que trató de corregir el supremo decreto de 14 de marzo de 1853; 3º Que es frecuente que se instigue a los indígenas a promover tales juicios, haciéndose otorgar amplísimos poderes, abusando de su falta de inteligencia en esta materia.

e) Decreto de 23 de marzo de 1857. Dispuso que no tuvieran valor los poderes para vender, hipotecar o arrendar que extendieran los indios, sin que fueran visados por el intendente de la provincia.

Los motivos del decreto se expresan en los siguientes considerandos:

1º Que el supremo decreto de 14 de marzo de 1853 prescribe, como condición indispensable para la validez de los contratos de venta, empeño o arriendo por más de cinco años, de terrenos pertenecientes a indígenas o situados en aquel territorio, la intervención del intendente de la provincia o del funcionario que él comisionare; 2º Que esta intervención tiene por objeto evitar fraudes, asegurándose que el indígena que vende, empeña o arrienda, obra con entera libertad y dispone de lo que realmente le pertenece; 3º Que semejantes prescripciones serían de todo punto ilusorias desde que, pudiendo celebrarse dichos contratos en virtud de poderes otorgados al efecto por los indígenas, no se sujetase el otorgamiento a formalidades análogas.

f) Ley de 4 de diciembre de 1866, (Art. 4). Prescribe que los contratos traslaticios de dominio sobre terrenos situados en territorio de indígenas solo podrían celebrarse válidamente cuando el que enajena tenga título escrito y registrado competentemente, y que siendo indígena uno de los

contratantes, se necesita, además, que el contrato se celebre con arreglo a las prescripciones del decreto de 14 de marzo de 1853.

g) Decreto de 6 de julio de 1872. Dispuso que los escribanos públicos de Nacimiento, Angol, Lebu e Imperial no extendieran escritura alguna de venta, hipoteca, anticresis, arriendo o cualquiera otro contrato que tenga por objeto gravar o enajenar los terrenos de indígenas, sin que por parte de los que pretenden celebrar dichos contratos, se les presente el respectivo título escrito y competentemente registrado, del cual se tomará razón en la misma escritura, anotándose la fecha, nombre del escribano que hizo la inscripción y demás circunstancias que lo determinen y especifiquen; y que si eran indígenas los que enajenaban o pretendían gravar la propiedad, no se extendiera el respectivo instrumento, si no se presenta copia legalizada, que previamente ha debido otorgarse en conformidad al art. 6 del supremo decreto de 14 de marzo de 1853 y art. 4 y 5 de la ley de 4 de diciembre de 1866.
Los escribanos que contravinieren a lo ordenado serían suspendidos de sus oficios.
Los motivos de este decreto son los siguientes:

1º Que según lo dispuesto por la ley de 14 de marzo de 1853, en lo que no sea contrario a la de 4 de diciembre de 1866, que lo declaró vigente, son nulos todos los contratos sobre ventas, empeños o arriendos por más de cinco años, de terrenos indígenas, cuando en dichos contratos no se observen las formalidades prescritas en aquella disposición; 2º Que con motivo de los abusos a que daba lugar la inobservancia de tales formalidades, se prohibió a los escribanos de la provincia de Arauco que extendieran escrituras referentes a terrenos de indígenas, según lo dispuesto en el supremo decreto de 16 de octubre de 1863; 3º Que no obstante estas medidas tendientes a evitar fraudes y abusos, que se cometen en la enajenación y demás actos que celebran los indígenas para trasmitir o gravar la propiedad del territorio en que se encuentran, ha llegado a noticias del Gobierno que estos abusos continúan con perjuicio de la propiedad del Estado, que es la que de ordinario sirve de materia para estas transacciones.

h) Decreto de 2 de marzo de 1873. Establece que los escribanos de las provincias de Arauco se abstengan, so pena de suspensión, de otorgar escritura alguna en que los indios contraigan obligaciones personales o confieran algún derecho real, sin que concurra al acto, declaración o contrato, el Protector de Indígenas.
Vale la pena transcribir los considerandos que se tuvo presentes para dictar esta disposición:

Considerando que al prescribir el art. 8 de la ley de 4 de diciembre de 1866 que haya un letrado con el título de Protector de Indígenas, que ejerza las

funciones que atribuye al Intendente y Gobernador el decreto de 14 de marzo de 1853, y represente los derechos de los indígenas en todas las circunstancias que se ofreciesen, ha tenido por objeto asegurarse de que los indígenas comprenden los contratos que intentan otorgar, que consienten en ellos y, en general, que las obligaciones que contraen son efectivas, por haber concurrido las circunstancias dispuestas por la ley para la validez del acto o declaración de voluntad.

Que, no obstante las prescripciones del citado art. 8, los escribanos públicos de la provincia de Arauco otorgan escrituras en que los indígenas, sin intervención del expresado Protector, se confiesan deudores a favor de terceros por cuantiosas sumas que, atendida sus facultades, su ninguna versación en los negocios, su falta de hábitos industriales, ofrece fundadas dudas la efectividad de los préstamos;

Que del estado de los pleitos pendientes sobre terrenos situados en territorio indígena, remitido por el Juez de Letras de Arauco, y de datos fidedignos que sobre el particular se han obtenido, se ha venido en conocimiento de la frecuencia con que los indígenas se constituyen deudores a breves plazos; de que son numerosas las ejecuciones que se ejercitan en su contra y de que los embargos que de ellos proceden, se ejecutan de ordinario en predios pertenecientes al Estado o en terrenos de que los deudores no tienen dominio legal por no habérseles discernido títulos de merced en conformidad a la citada ley, resultando de esta manera de proceder perturbaciones que son origen de reclamos y pleitos; y, por último, que es indispensable dictar una medida que haciendo efectiva la representación de los indígenas, garantice la eficacia de los contratos que otorguen.

Como se ha visto, en la enumeración de los antecedentes de la ley prohibitiva que afecta a los terrenos de indígenas se adoptaron, antes de implantarse, medidas que a primera vista pudieran aparecer eficaces para evitar fraudes y abusos, y para sustraer los terrenos fiscales de estos fraudes. Se ha visto también cómo los particulares encontraban manera de volver ineficaces esas medidas, lo que obligó al legislador a dictar la absoluta prohibición de contratar sobre terrenos de indios.

8. Conviene poner de relieve el efecto de la ley prohibitiva haciendo notar únicamente que en zona en que ha regido se ha podido constituir con pocos tropiezos la propiedad raíz: al norte del Toltén está saneada la propiedad: el Estado ha podido rematar terrenos, colonizar, radicar indios, etc.

Al sur, en donde la ley prohibitiva rige solo desde el 11 de febrero de 1893, la propiedad rural no está constituida y no sirve para ninguna transacción con base seria: los bancos e instituciones de crédito no admiten ninguna obligación con la garantía de propiedad rural de Valdivia o Llanquihue.

9. La ley no ha establecido de modo completo el estado civil de los indios, que se rige por el art. 9 de la ley de 4 de agosto de 1874 que dispone:

> "La posesión notoria del estado de padre, madre, marido, mujer o hijo se tendrá como título bastante para constituir a favor de los indígenas, los mismos derechos hereditarios que establecen las leyes comunes en favor de los padres, cónyuges e hijos legítimos".

La razón de este precepto excepcional es que el Estado no quiso despojar de un terreno determinado a los herederos de los indios poseedores.

Sin este precepto, no estando la familia indígena constituida legalmente, los bienes del que falleciere caerían indudablemente en poder del Fisco, por lo menos a título de heredero a falta de legitimarios, que no los había, o de institución testamentaria.

10. El art. 8º de la ley de 4 de diciembre de 1866 dispone:

> "En los territorios fronterizos de indígenas habrá un letrado con el título de Protector de Indígenas, el cual ejercerá las funciones que atribuye al Intendente y Gobernadores, el decreto de 14 de marzo de 1853 y representará los derechos de los indígenas en todas las circunstancias que se ofrezcan, y especialmente en el deslinde de sus posesiones y en todos los contratos traslaticios de dominio".

Es de notar que, a pesar de que el decreto de 14 de marzo de 1853 se hizo extensivo a las provincias de Valdivia y Llanquihue, el Protector de Indígenas debería ejercer sus funciones únicamente en el "territorio fronterizo", que no comprende esas provincias, según el tenor literal del artí. 3 de la ley de 7 de diciembre de 1852, que dice:

> El territorio comprendido entre el Biobío y el Toltén y entre los Andes y la cordillera de la costa, será regido como territorio fronterizo. Lo mismo se observará con el comprendido entre el Carampangue y el Toltén, la cordillera de la costa y el mar.

La ley de 4 de agosto de 1874 (Art. 10) confirió al Protector de Indígenas la representación de los intereses fiscales en todo el territorio, en lo que no estuviere implicado por razón de su cargo. Le dio la misma ley la franquicia de litigar como pobre en defensa de los indios.

Por decreto de 10 de noviembre de 1884, considerando

> "que en cuanto a la representación de los derechos de los indígenas en los litigios sobre propiedad o posesión de sus tierras, los promotores fiscales pueden y deben ejercer sus atribuciones",

se dispuso que los promotores fiscales de los departamentos fronterizos, tomaran la defensa y representación de los indígenas, en los juicios sobre propiedad o posesión de sus terrenos y en los contratos de compraventa que celebrasen.

En los casos de incompatibilidad de intereses entre el Fisco y el indígena, sustituirá al promotor fiscal el procurador de la municipalidad respectiva.

Este decreto, en cuanto al aumento de atribuciones del promotor fiscal y del procurador municipal, ha sido tildado con fundamento, según pensamos, de inconstitucionalidad, por cuanto contradice al art. 28 (37), número 10 de la Constitución Política del Estado, que solo permite a la ley determinar o modificar las atribuciones de los empleados públicos.

En la ley de presupuestos de 1906, se creó un Protector de Indígenas para Valdivia y Llanquihue.

Posteriormente, en la misma ley, se han creado para Arauco, Biobío y Malleco, y se ha segregado del protector de Valdivia, la provincia de Llanquihue, nombrándose para ella otro funcionario.

II

1. La ley de 4 de diciembre de 1866 contempla en los territorios indígenas, (frase más comprensiva que territorio fronterizo de indígenas) dos condueños de sus suelos, el poseedor originario y el Estado; y sienta la regla general de que todo terreno en el cual los indios no prueben posesión efectiva y continuada por más de un año, será reputado terreno "baldío" o fiscal. (Art. 6 y 7 núm. 1).

Para proceder con el método indicado por la ley, se debió, en primer término, radicar a los indios en lo que ocupaban, y hecha la radicación, habría quedado determinado el sobrante que es de propiedad del Estado: el Fisco habría sabido matemáticamente la extensión de terreno que le pertenecía. No se obró así. Al mismo tiempo que se radicaban indígenas, se formaban hijuelas para remates, se daban lotes de terreno en arrendamientos, se donaban suelos a colonos, y se hacían enormes concesiones de suelos a particulares para que los colonizaran.

Todavía más: en muchas ocasiones, se procedió primeramente a rematar hijuelas, a colonizar, etc., y en el sobrante se radicó a los indios.

Es decir, se aplicó la ley en sentido inverso: el Fisco dispuso de lo que quiso, y en el resto de los suelos se radicó a los indios. De aquí los conflictos y enredos de todo género. De aquí la escasa cabida de suelos que ha tocado a los indios, lo que motiva las romerías de araucanos que periódicamente van a la capital a interponer quejas por el despojo de sus terrenos.

De aquí la desigualdad en la adjudicación de terrenos: al paso que a empresas particulares se conceden millares de hectáreas; a los indígenas de algunas zonas, principalmente Quepe, Metrenco y Maquehua, apenas si alcanzan a dos o tres hectáreas por persona.

2. Para radicar a los indios se toma matrícula, regularmente por el secretario de la Comisión Radicadora, de los indígenas existentes en una zona y se levanta el plano respectivo por un ingeniero. Los interesados deben ocurrir a la secretaría de la Comisión Radicadora a establecer que son indígenas y que

han ocupado el terreno de que se trata por más de un año efectiva y continuadamente. Se levanta acta que se extiende en un libro.

Se expide título por la Comisión, que es notificado al Protector de Indígenas, y con lo que exponga éste, o si nada expone, se envía al Supremo Gobierno para su aprobación. Aprobado, se inscribe en el Registro Conservador a cargo del secretario de la Comisión nombrada.

3. El Protector no interviene en el deslindamiento de las propiedades indígenas; no se le cita para el acto porque materialmente no podría hacerse, por confiarse este trabajo a dos o más ingenieros que operan en distintas zonas. La intervención tiene lugar cuando el título está ya hecho y listo para ser enviado a Santiago.

Regularmente, el Protector de Cautín, cuando estima que ha habido escasa adjudicación, formula reclamo para los efectos del aumento de cabida.

La Comisión se pronuncia sobre el reclamo, generalmente desechándolo. En seguida, se envía a Santiago el expediente a fin de obtener resolución sobre el reclamo interpuesto.

4. Se va acostumbrando hoy a radicar por familias y no por reducciones o conjunto de familias; pero las familias no constan regularmente del jefe, las mujeres y los hijos, sino que se comprenden suegros, hermanos, tíos y sobrinos, y aun primos hermanos. La radicación en esta forma es origen de rencillas continuas entre los comuneros. Antiguamente se comprendían muchas familias en cada adjudicación, y los inconvenientes son, como se comprende, mayores.

5. Para obviar estos inconvenientes, y llevar la tranquilidad a las reducciones, este Protectorado consiguió se le diera un ingeniero para dividir las hijuelas entre sus comuneros.

Esta subdivisión fue entregada desde 1906 a la Comisión Radicadora.

Es de advertir que esto es solo un modus vivendi, por cuanto no tienen fuerza legal las particiones hechas en esta forma.

Según el art. 7 número 6 de la ley de 4 de diciembre de 1866, esta subdivisión debe hacerse por la Comisión Radicadora al tiempo del deslindamiento.

6. Prácticamente, el Protector de Indígenas entiende en lo siguiente:

a) Concurre a la constitución de la propiedad de los indios, tomando conocimiento de los títulos de merced que se les otorgan y formulando los reclamos del caso, cuando ha habido escasa adjudicación de terrenos, y cuando se ha omitido entre la lista de los comuneros a indígenas que tienen derecho al terreno de que se trata;
b) Examina los planos del remate de terrenos fiscales, que periódicamente manda llevar a cabo el Gobierno; y cuando en ellos se comprende alguna hijuela en que hay vinculados derechos indígenas, practica las gestiones administrativas conducentes a la eliminación de la subasta de la hijuela así efectuada;
c) Patrocina ante la justicia ordinaria a los indígenas que son despojados de sus suelos por particulares, instaurando las acciones legales que competan. Atiende este trabajo en el juzgado de Temuco, Imperial y Llaima y, en

segunda instancia, ante la Corte de Valdivia y la de Santiago, cuando en la litis se afectan intereses fiscales. Antes de la vigencia del Código de Procedimiento Civil, las gestiones judiciales se ventilaban en juicio ordinario; pero con su promulgación, se emplea con éxito el procedimiento establecido en el título XII del libro III, cuando se trata de la aplicación de la ley prohibitiva;

d) En lo posible, patrocina a los indígenas en los juzgados de menor cuantía. Es de advertir que en tales juzgados se les estafa, confabulándose el juez, el actuario, y el acreedor. Es corriente que se instauren ejecuciones con pagarés firmados a ruego por indígenas, pagarés que son extendidos con el mismo tipo de letra desde el principio hasta el fin, incluyendo las firmas de los testigos, que se dicen llamados a suscribir a ruego;

e) Practica gestiones dirigidas a obtener que las municipalidades no cobren a los indios contribuciones indebidas haciendo eliminar del rol de avalúos las propiedades que no deben gravarse por no haber obtenido aun el indígena título de merced. Hay que notar que los indios que tienen título de propiedad no están exentos del pago de esta contribución porque la ley no exceptúa expresamente dichos predios; pero la contribución no puede hacerse efectiva en sus bienes raíces, por ser inalienables. (Sobre el particular hay un luminoso informe del exabogado, jefe de la Sección Defensa Fiscal, de la Inspección de Tierras y Colonización, don Ramón Briones Luco, que corre impreso en el Glosario de Colonización, de que es autor el mismo señor Briones Luco, 4ª edición, 1905, pág. 187);

f) En las dificultades que de continuo ocurren entre los indios con motivo de cobro de pesos, de la posesión de este o aquel retazo de terreno, de la cuota con que debe concurrir cada comunero al pago de la contribución municipal, interviene el protector, como árbitro arbitrador, y sus resoluciones son obedecidas, cuando algún agente de pleitos no ha tomado al indígena para hacerlo promover un juicio de cuya defensa se encarga, haciéndole ver que el protector no es autoridad competente para dirimir las dificultades que tenga con otro de su raza;

g) Algunos indios conservan aun restos de sus antiguas costumbres para contraer matrimonio y los padres venden a sus hijas a los padres del novio que la pretende, sin consultar la voluntad de ellas. Sucede muchas veces que la vendida no se allana a seguir al marido, o que el padre, para venderla por segunda vez, no la entrega u opone dificultades al comprador. Los perjudicados ocurren ante el protector a exponer su queja. Sucede, también, que matrimonios antiguos mal avenidos ocurren a presencia del protector en demanda de justicia. Se dice a los padres que no tienen derecho de vender a sus hijas; que el matrimonio de estas debe estar fundado en libre voluntad y se les apercibe con ponerlos a disposición de la justicia, si reinciden. En caso de querer tratarse como marido y mujer, se les envía al Registro Civil a regularizar su unión.

A las mujeres a quien sus maridos, no casados legalmente, las maltratan, se les dice que no puede obligárseles a seguir a ese marido y así quedan libres de ellos;

h) A los indígenas que quieran educar o completar la educación de sus hijos, el protector les gestiona lo conveniente, hasta conseguir facilidades para enviarlos a las escuelas prácticas de agricultura, a las escuelas normales, etc., etc.;

i) Da consultas, tanto a particulares como a indígenas, sobre los distintos puntos de la legislación especial a que están sometidos.

III

1. En cuanto a la radicación de indígenas, deberían adoptarse las siguientes reformas administrativas:

a) Reglamentar la ley de 4 de diciembre de 1866, fijando un mínimum de las adjudicaciones de terrenos a los indios, para impedir que sean radicados en forma que absolutamente les impiden satisfacer sus necesidades, adjudicándoseles, como ha pasado en algunos títulos de merced, una hectárea por cabeza;

b) Fijar a la Comisión Radicadora un máximo de tiempo para que expida título de merced a los indígenas. Deben pedirse y tenerse presentes para este efecto los siguientes datos: número de familias indígenas a quienes se ha proyectado reservas en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco, Cautín, Valdivia y Llanquihue y número de hectáreas reservadas;

c) Disponer que la Comisión Radicadora proceda estrictamente a radicar por familias o individualmente, evitando que en un mismo título se incluyan individuos ajenos a la familia, aun cuando estén vinculados por parentesco;

d) Recomendar a los ingenieros que fijen en el terreno deslindes materiales de las hijuelas de los indios;

e) Dar a los Protectores agentes judiciales para que coadyuven a la defensa de los indios, e ingenieros que los ilustren acerca de los reclamos sobre internación de deslindes, que con tanta frecuencia formulan, y que les informen sobre las cuestiones de hecho que deben ventilarse, antes de instaurar alguna acción judicial. Sucede a menudo que los indígenas reclaman al Protector que un particular les ha tomado una gran extensión de terreno, y el particular dice que es el indio quien le usurpa. En presencia de afirmaciones contradictorias, es indispensable que un técnico ponga en claro la verdad de las cosas. Así se evitan muchos juicios.

2. Para facilitar administrativamente a los indígenas la constitución de su estado civil, en conformidad a la ley, y evitar la posibilidad de los cobros indebidos de derechos de que, con o sin razón, se quejan los indios que se les hace en algunas oficinas del Registro Civil, lo que los ahuyentaría de ellas, convendría

dictar un decreto dando alguna fiscalización al Protector de Indígenas en las inscripciones de matrimonios de los indios y declaraciones sobre legitimación y reconocimiento de hijos.

3. Conviene, antes de proponer el proyecto que la Honorable Comisión nos ha encomendado, hacer mención de las diferentes tentativas que ha habido para legislar sobre la materia. Los proyectos que se han elaborado son los siguientes:

a) El de 25 de julio de 1892, que alcanzó a ser aprobado por el Senado. Fue presentado por el Ejecutivo y se contrae de preferencia a legislar sobre terrenos fiscales. Se refieren a indígenas sus art. 1, 2, 10, 17 y 18;

b) El de 22 de diciembre de 1892. Presentado por el Ejecutivo. Tiene por objeto la reforma de la radicación de los indígenas.

Es de notar lo siguiente, que tomamos del preámbulo del mensaje en que fue presentado, cuya exactitud hemos podido comprobar en diez años que servimos el cargo de Protector de Indígenas.

El indio mismo ha sido desalojado de todas partes por la ambición y poca escrupulosidad de muchos. Porque es un hecho digno de tomarse en cuenta el de que la casi totalidad de la población indígena se encuentra en los terrenos que la previsión legislativa ha arrancado de la explotación indebida de los particulares; o en los que hasta hace poco eran desconocidos, por estar muy lejos de los centros de actividad y comercio.

La explicación de este hecho es sencilla: allí donde los particulares no han podido adquirir, el indio ha sido el amparo del suelo que se cultiva; y allí donde los particulares han podido adquirir, el indio ha sido un obstáculo, y como tal se le ha desalojado del terreno, en cuanto ha sido posible;

c) El de 17 de agosto de 1897. Presentado por el Ejecutivo: legisla sobre tierras fiscales y se refiere a indígenas en los arts. 1, 2 y 7;

d) El de junio de 1900. Presentado por el Ejecutivo: se refiere a indígenas en los arts. 1 y 7;

e) El de 16 de agosto de 1905. Presentado por el Ejecutivo: legisla sobre tierras fiscales y de indígenas. No pasó de la comisión del Senado, nombrada para informarlo. Este proyecto tomó por base uno elaborado por el señor José Francisco Vergara Donoso en 1904. El proyecto del señor Vergara destinaba el título v a la constitución de la propiedad indígena, comenzando por definir lo que debe entenderse por "indígena". En el del Ejecutivo, se trata de la materia desde el art. 46 hasta el 55 inclusive;

f) El proyecto denominado del señor Puga Borne, presentado en 1907 y que alcanzó a ser aprobado por el Senado, con algunas modificaciones e informado por la respectiva Comisión de la Cámara de Diputados.

Ese proyecto tomó muchas ideas de un memorándum elaborado por el protector de Indígenas de Cautín y de uno elevado al ministerio por el protector de Valdivia.

En la Memoria del protector de Cautín, correspondiente a 1907 y publicada como anexo a la Memoria de la Inspección de Colonización e Inmigración en 1908, vienen antecedentes completos acerca de ese proyecto y algunas observaciones al que aprobó el Senado.

4. Proponemos a la consideración de la Honorable Comisión Parlamentaria el siguiente

PROYECTO DE LEY

Art. 1. Son indígenas, para los efectos de esta ley, los aborígenes del territorio situado al sur de la provincia de Concepción que conserven, siquiera en parte, sus costumbres o idioma, o apellido paterno o materno, que aleguen posesión presente o pretérita sobre terrenos ubicados en dicho territorio y sus herederos forzosos.

La posesión pretérita debe haberse perdido en diez años, contados hacia atrás, desde la promulgación de esta ley.

En caso de duda acerca de la calidad de indígena, se estará a la resolución conforme del presidente de la Comisión Radicadora de Indígenas, del Protector de Indígenas y del promotor fiscal que corresponda.

No produciéndose la conformidad, resolverá en definitiva, con conocimiento de causa, el juez letrado, oyendo a dichos funcionarios y al interesado.

Art. 2. Se aplicarán las disposiciones de esta ley al territorio comprendido en las provincias que siguen al sur de la de Concepción, y a Magallanes.

Art. 3. En las zonas habitadas por indígenas, no se podrá disponer de ninguna extensión de terreno, sin que preceda su radicación.

Art. 4. Se procederá a deslindar los terrenos pertenecientes a indígenas por comisiones nombradas por el Presidente de la República, cada una de las cuales se compondrá de un presidente abogado, de dos ingenieros y de un secretario, que será ministro de fe.

El número de estas comisiones se fijará en relación de los fondos que consulte la ley de presupuestos de cada año. Los sueldos de que gozarán sus miembros serán:

Un abogado jefe $12.000

Cada ingeniero $8.000

El Secretario $5.000

Art. 5. Precederá al deslindamiento la matrícula de los indígenas a quienes se vaya a radicar, tomada por un ingeniero y el secretario, los que entregarán a cada jefe de familia y a los mayores de edad, que no siéndolo ocupen un terreno determinado, una boleta firmada por estos funcionarios que expresará el nombre, estado civil y lugar de nacimiento de cada una de las personas empadronadas.

De la matrícula, se formará por triplicado un registro con las anotaciones indicadas y las declaraciones que hagan los indígenas sobre las relaciones de parentesco que los ligan.

Uno de estos ejemplares será enviado al Ministerio de Colonización, otro al oficial civil correspondiente y el tercero al protector de indígenas.

Las anotaciones contenidas en este registro servirán de prueba para establecer el estado civil de los indígenas.

Los registros se harán por subdelegaciones.

Art. 6. La Comisión Radicadora constituida en el terreno, previa citación del Protector de Indígenas, extenderá acta provisoria de entrega a favor de los indígenas a quienes se refiere esta ley, levantará un plano del terreno, dando al indígena copia de lo obrado.

El acta original se elevará al Presidente de la República para su aprobación. El decreto aprobatorio servirá de título definitivo de dominio que se inscribirá, a petición del Presidente de la Comisión Radicadora, en el Registro Conservador de bienes raíces respectivo.

El funcionario nombrado entregará el título inscrito a los interesados.

Los derechos que se causaren serán de cuenta fiscal.

Los indígenas tendrán quince días contados desde la fecha de la entrega de la copia a que se refiere el inciso 1º de este artículo para formular, por conducto del protector, ante el Supremo Gobierno, los reclamos que le sugiera lo obrado por la Comisión, que serán resueltos en el decreto aprobatorio.

Art. 7. A los indígenas que no ocupen actualmente un terreno determinado, se les radicará en suelo de propiedad fiscal, que de preferencia se dedicará a este objeto.

La adjudicación se les hará, tomando por base cinco hectáreas de terreno por cabeza.

Art. 8. Para la aplicación de esta ley, en cuanto a la radicación de indígenas al sur del río Toltén, la Comisión Radicadora, presidida por un ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, designado por el tribunal, resolverá con conocimiento de causa, las dificultades entre indígenas y particulares y que se refieran al mejor derecho acerca de un terreno determinado sobre el cual lo alegaren, derivado de títulos legalmente inscritos y les otorgará el correspondiente título de dominio.

El particular afectado por la resolución de la Comisión, podrá apelar de ella para ante la Corte de Valdivia, que conocerá en segunda instancia, con exclusión del ministro implicado.

La apelación será resuelta breve y sumariamente; pero el tribunal podrá, para mejor resolver, de oficio o a petición de parte, en la forma dispuesta por el art. 166 del Código de Procedimiento Civil, ordenar todas o algunas de las medidas a que se refieren los números 1º, 3º y 4º de dicho artículo.

No podrán los particulares constituir en otra forma su propiedad en zonas en que tengan derechos afectados por intereses indígenas.

La interposición del recurso, suspende la aprobación del acta original a que se refiere el artículo 5.

Art. 9. Los títulos de merced expedidos con anterioridad a la presente ley, serán inscritos en el Registro Conservador correspondiente, a requisición escrita del funcionario a que se refiere el artículo 6.

Los derechos que se causaren serán de cuenta fiscal.

Art. 10. Las comunidades indígenas a que actualmente se ha expedido título de merced, podrán subdividirse, solicitándolo uno de los comuneros o el Protector de Indígenas, por un ingeniero nombrado por el Presidente de la República.

La partición se practicará con citación del Protector de Indígenas.

Se levantará acta, que será suscrita por el ingeniero y visada por el Protector de Indígenas y el presidente de la Comisión Radicadora, quien cuidará de dar cumplimiento a lo que le previene el precedente artículo.

Las particiones de comunidades, que han sido verificadas de orden del Protector de Indígenas por ingeniero designado para el efecto y posteriormente por la Comisión Radicadora, en la misma forma, tendrán fuerza legal y serán inscritas a requisición legal del funcionario indicado al efecto en el inciso precedente.

Los derechos que se causaren serán de cuenta fiscal.

Art. 11. Los particulares que opongan resistencia, en cualquier forma, a las operaciones que practiquen en el terreno los funcionarios encargados de la radicación o de la subdivisión de la propiedad indígena, incurrirán en las sanciones designadas en el artículo 272 del Código Penal, quedándoles a salvo sus derechos para hacerlos valer ante quien corresponda.

Art. 12. Quedan prohibidos los contratos de enajenación, hipoteca, anticresis y cualquiera otro en virtud del cual se prive directa o indirectamente a los indígenas del dominio, posesión o tenencia del terreno que ocupan.

Los notarios, bajo la pena de la privación de su empleo, y de multa de 100 a 500 pesos, a beneficio municipal, no podrán extender escritura alguna que verse sobre los contratos a que se refiere el artículo precedente.

Los derechos reales de los indígenas son inembargables.

Art. 13. Podrán los indígenas celebrar contratos de arrendamiento de terrenos, con autorización escrita del Protector de Indígenas, que no los autorizará por más de cinco años, y sin que se haya pagado adelantado el canon correspondiente al primer año y asegurado competentemente el resto.

Podrán, asimismo, celebrar contratos de sociedad para explotar sus terrenos, con autorización escrita del Protector de Indígenas, quien tomará las precauciones debidas para que no sean burlados en el reparto de utilidades.

Art. 14. No será válida ninguna escritura pública o privada suscrita por un indígena, si no es asistido en el momento de la firma por el respectivo protector, que deberá suscribirla personalmente ante un ministro de fe y en presencia del interesado.

Art. 15. Las prohibiciones establecidas en los artículos precedentes regirán por el plazo de veinte años.

Art. 16. Los indígenas quedan obligados a enviar a la escuela a sus hijos mayores de diez años, hasta que aprendan el idioma español, las primeras letras y un oficio manual, siempre que funcione uno de dichos establecimientos a menos de cinco kilómetros de su habitación, o que el Estado sostenga un establecimiento destinado a la enseñanza de los indígenas.

Art. 17. Un funcionario, que se denominará Protector de Indígenas, tendrá la representación de estos y será parte en sus juicios.

Habrá un Protector de Indígenas en cada una de las provincias de Arauco, Cautín, Valdivia y Llanquihue, y en el territorio de Magallanes.

Las provincias de Biobío y Malleco será servidas por un solo protector.

El promotor fiscal de Ancud, con sobresueldo de tres mil pesos, servirá el cargo de Protector de Indígenas de la provincia.

Los protectores de indígenas gozarán de una renta anual de..... pesos, y tendrán a su cargo los siguientes empleados: el de Arauco: un ingeniero con sueldo anual de..... pesos; un secretario con dos mil cuatrocientos pesos anuales, y dos agentes judiciales con tres mil pesos cada uno. El de Biobío y Malleco: un ingeniero con..... pesos; un secretario con dos mil cuatrocientos pesos y tres agentes judiciales con tres mil pesos cada uno. El de Cautín: un ingeniero con..... pesos; un secretario con tres mil pesos y tres agentes judiciales con tres mil pesos cada uno. El de Valdivia: un ingeniero con..... pesos; un secretario con dos mil cuatrocientos pesos y dos agentes judiciales con tres mil pesos cada uno. El de Llanquihue, un ingeniero con..... pesos; un secretario con dos mil cuatrocientos pesos y dos agentes judiciales con tres mil pesos.

Los de Chiloé y Magallanes tendrán un agente judicial con tres mil pesos cada uno.

Los Protectores de Indígenas de las provincias de Arauco, Biobío, Malleco, Cautín, Valdivia y Llanquihue tendrán un intérprete portero con mil doscientos pesos anuales.

Art. 18. Los agentes judiciales, con autorización escrita del Protector de Indígenas respectivo, tendrán en primera y segunda instancia la representación de éstos.

Art.. 19. Solo los jueces letrados serán competentes para conocer de los juicios en que los indígenas sean parte o tengan interés y que se refieran a los terrenos en que hubieren sido radicados.

Cuando el Protector de Indígenas lo solicite, el juez letrado se abocará el conocimiento de las causas en que sean parte o tengan interés los indígenas y que se sigan ante tribunales inferiores.

Art. 20. El procedimiento que se aplicará ante la justicia ordinaria para ejercitar las acciones judiciales a que se refiere la presente ley, cuando no pueda instaurarse un interdicto, será el indicado en el título xii del libro iii del Código de Procedimiento Civil.

En casos calificados, el juez, a petición de parte, podrá disponer otra forma de procedimiento.

El plazo a que se refiere el artículo 704 del Código de Procedimiento Civil será de quince días, tratándose de indígenas, sin perjuicio de aumentarse a treinta en casos calificados.

Art. 21. El Protector y los agentes que obren autorizados por él usarán papel simple y no causarán derechos de ninguna clase.

Art. 22. Los litigios entre indígenas y que se refieran al goce de terrenos adquiridos en su carácter de tales, y los que se deriven de sus relaciones de parentesco, siempre que su estado civil no haya sido constituido conforme al derecho común, serán resueltos por el Protector de Indígenas, cuyas resoluciones serán sin ulterior recurso, y no se invalidarán sino por las causales que anulen las resoluciones de los árbitros arbitradores.

Art. 23. Para el cumplimiento de las resoluciones a que se refiere el artículo precedente, como para hacer comparecer a algún indígena con el objeto de la aplicación de la presente ley, podrán los protectores valerse de la fuerza pública, que les deberá proporcionar la autoridad administrativa.

Art. 24. El Protector de Indígenas podrá impetrar[381] ante la autoridad o funcionarios que correspondan el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, que se refieren a asegurar algún derecho o alguna garantía a los indios.

Art. 25. Es prohibido a todos los empleados que cree esta ley celebrar contratos o comerciar con los indígenas. La infracción de este precepto será penada con multa de ciento a mil pesos, sin perjuicio de la destitución.

Art. 26. Los presidentes de las Comisiones Radicadoras y los protectores de indígenas deberán reunir los requisitos exigidos para desempeñar el cargo de juez letrado de cabecera de provincia y serán nombrados en la forma prescrita para éstos.

Art. 27. Se derogan todas las disposiciones existentes sobre las materias tratadas por esta ley; sin perjuicio de los derechos adquiridos en conformidad al art. 9 de la de 4 de agosto de 1874.

5. En el proyecto que queda presentado hemos acogido muchas de las ideas del proyecto Puga Borne, aprobado por el Senado; pero hemos desechado otras. Muy especialmente llamamos la atención de la Honorable Comisión hacia los motivos que nos inducen a rechazar el inciso 6º del art. 11 y el art. 19 del proyecto aprobado por el Senado. El inciso de que se trata fue agregado en dicha Cámara y está concebido en los siguientes términos:

> El abandono o ausencia por más de cinco años continuos de las hijuelas en que hayan sido radicados los indígenas, hará volver al Estado la propiedad de dichas hijuelas.

Esta disposición daría lugar a muchos abusos. Conocemos casos de propietarios colindantes de indígenas, que han ahuyentado a éstos, hostilizándolos o proporcionándoles dinero para que emigren a la Argentina. Despejada la hijuela, han entrado en posesión e introducido mejoras. Los dueños han regresado y no las han recuperado hasta que el gobierno ha desechado la solicitud de los usurpadores en que han pedido se les concedan esos terrenos en calidad de colonos por estar vacantes y abandonados por los indios. Nos ha correspondido

[381] = solicitar, instar.

informar varias de esas solicitudes, que deben ser rechazadas por cuanto los bienes de los indios son propiedad privada, que no puede pasar al Estado, sino en su carácter de heredero abintestato, a falta de otro de mejor derecho. Conocemos, también, solicitudes en que se ha tenido la audacia de pedir se saquen a remate o se adjudiquen a alguien, en calidad de colono nacional, terrenos de indios que no se han movido de ellos, pretendiendo probar que los indígenas existentes no son los que fueron matriculados, sino otros, radicados en terrenos distintos y que arbitrariamente se han apoderado del de que se trata.

Podríamos, también, criticar en este inciso hasta la falta de propiedad en el uso de los términos: así, por ejemplo, la frase "hará volver al Estado la propiedad de dichas hijuelas" no se armoniza con los derechos adquiridos por los indios, según la legislación vigente, por cuanto pretende dar a entender que esa propiedad ha sido antes del Estado, lo que es inexacto.

El art. 19 citado y que estimamos, también, peligroso dice:

> "Esta ley de excepción se aplicará tan solo a los indígenas 'que se radiquen en conformidad con ella'; pero no a sus descendientes, quienes se regirán por las leyes comunes".

Desde luego, tenemos fuera de ella a los indígenas radicados ya, los cuales podrían libremente disponer de sus tierras y no les afectarían las prohibiciones que cuidadosamente establece el proyecto. (Arts. 11, 14 y 15).

Quedando excluidos los descendientes de los indios, que se radicaren en conformidad a la ley que se dicta, de las excepciones que ella establece, antes de mucho palparíamos sus perniciosos efectos. Queremos únicamente referirnos a la inalienabilidad de sus propiedades. Muertos padres de menores, nacidos después de entrar en vigor la nueva ley, al año por ejemplo, no faltará quien quiera encargarse de la guarda de esos menores; y ya obtenida, podrá el flamante guardador presentarse a la justicia, acreditando que su pupilo no tiene otros bienes raíces heredados y pedirá la venta para proveer a su crianza y educación. Se autorizará la enajenación, y aun cuando dichos bienes se vendan en pública subasta, se echará mano de recursos conocidos para que la publicidad lo sea solo en el nombre, insertando los avisos, intencionalmente borrosos, en periódicos inéditos o en hojas suplementarias del periódico que se acompaña al juzgado, para acreditar la formalidad de la publicación de avisos, cuando la verdad es que las hojas suplementarias se imprimen después. No faltaría un palo blanco que adquiriera las hijuelas de que se trata. Y tenemos estafados a los menores.

Siendo juez letrado de un departamento de la provincia de Arauco, tuvimos oportunidad de presenciar una verdadera batalla para obtener la curatela[382] de

[382] Palabra compuesta de 'curaduría' y 'tutela'. Tutela de adulto incapacitado legalmente. Conforme al derecho indiano, los indígenas en Chile fueron considerados "incapaces relativos" en lo tocante a la propiedad.

un hijo único de un cacique fallecido, dueño de regular fundo. Se comprende que estos combates a papel sellado no se llevan a cabo con fines humanitarios.

6. En cuanto a la innovación que se establece en el proyecto que presentamos para radicar a los indios del sur del Toltén, la Honorable Comisión ha recogido en el terreno datos suficientes, que indican que es necesario un procedimiento legislativo distinto para deslindar la propiedad indígena de la zona referida.

Antecedentes que podrían invocarse en favor del art. 8 de este proyecto, son el art. 5 de la ley de 4 de diciembre de 1866 y el art. 7 de la de 4 de agosto de 1874.

En cuanto a la innovación establecida en el art. 22 de nuestro proyecto, esto es, que los indígenas quedan sujetos a la jurisdicción del protector para resolver los asuntos contenciosos que en él se indican, diremos que es prácticamente lo que está establecido, a lo menos en la provincia de Cautín. Las dificultades pequeñas sobre el mejor derecho a determinado retazo de terreno común; las cuestiones sobre separación de los cónyuges que no han contraído matrimonio según la ley común, sino conforme a la costumbre araucana; el cuidado de los hijos habidos en estas uniones, cuando se separan sus padres y mil asuntos de índole análoga, que requieren conocimientos del modo de ser de los indios y que tardarían mucho en ser resueltos por la justicia ordinaria, ante la cual los embrollarían los agentes de pleitos, conviene que sean de la incumbencia del protector. Se daría así fuerza de ley o una especie de derecho consuetudinario que la necesidad y la equidad han hecho nacer.

IV

1. No formada aun nuestra organización política, los fundadores de nuestra independencia quisieron implantar medidas legislativas para civilizar a los indios. Hemos citado más atrás el senado-consulto de 1º de julio de 1813. Entre sus disposiciones se encuentran medidas encaminadas a este fin, como ser: que los indios pasarían a residir en villas que se fundarían para el efecto, en las que habría una iglesia o capilla y una escuela de primeras letras, escritura y doctrina cristiana, y que se destinen a este fin fondos de los producidos por el remate de tierras de indios que el Gobierno

> "los declara, aplica y consigna desde ahora y para siempre, con acuerdo del Senado privativamente, para fomentar la educación pública, científica y moral del Estado, que la componen indios y españoles".

Por decreto de 11 de enero de 1832, se establecieron los misioneros de Chillán, teniéndose presente lo expuesto en el preámbulo que vamos a copiar:

> Cuando después de haber conquistado nuestra emancipación política y cimentado ya el orden interior, se trabaja por dar un impulso a todos los ra-

> mos de prosperidad y por adelantar la civilización en todos los ramos del Estado, es preciso que este conato se haga extensivo a todos los habitantes del territorio de la República.
>
> Desgraciadamente, existe una gran porción de hombres que separados de la población civilizada, forman un conjunto de seres que más bien parecen brutos que racionales. Estos son los indios bárbaros, que desparramados en hordas, ocupan una parte considerable del Estado.

Estos infelices no tienen más comunicación que, o con los malvados que, huyendo por sus crímenes, poseen un refugio entre ellos, o con aquellos hombres a quienes conduce un interés sórdido y que cifran su fortuna en proporcionarles el fomento de toda clase de vicios, sosteniéndoles, así, en el último grado de abyección y barbarie y originando por esta causa terribles males a los pueblos que se hallan a sus inmediaciones.

Por estas consideraciones, el Supremo Gobierno ha creído necesario fomentar una sociedad de hombres filantrópicos que, arrostrando los peligros, se les acerquen y procuren por medios pacíficos atraerlos a costumbres más suaves y reducirlos a formar sociedades arregladas. Con el mismo objeto, estos hombres benéficos deberán tener a su cargo un colegio en que se eduquen jóvenes, que atraerán de entre estos mismos indios para que, cultivando su razón y prosiguiendo los principios de la sana moral, puedan trasmitirlos a sus familias y compañeros y lograr así su civilización.

Después, con fecha 20 de mayo de 1847, se decretaron medidas para asegurar, por parte de los misioneros, el cumplimiento de las obligaciones que contraían, entre las cuales, es de notar que se les ordenaba presentar al Gobierno cada año, listas de alumnos indígenas matriculados en los colegios del convento, y se dispuso que la remuneración de los preceptores estaría en relación con el número de educandos.

Por decreto de la misma fecha, animado el Gobierno del propósito de propender eficazmente a la civilización de los indios, se dispuso que todos los religiosos a quienes se encomendara el servicio de alguna misión, deberían precisamente comprometerse, antes de tomar posesión del cargo, a aprender dentro de un tiempo determinado, que no debería exceder de cuatro años, el idioma de los indios.

El Gobierno, en decreto de 7 de julio de 1847, acentuó su propósito de civilizar a los araucanos por medio de las misiones, y al establecer la de Tucapel, tuvo en vista

> "que uno de los más eficaces medios de facilitar los buenos resultados de las misiones es establecer en cada una de ellas escuelas primarias, destinadas a la educación de los indígenas".

Al año siguiente, el Gobierno dio muestras de querer perseguir, también, en otra forma el propósito de civilizar a los indios, y en decreto de 7 de septiembre

de 1848, se votaron mil pesos, con imputación a la partida 44 del presupuesto del Ministerio del Interior de ese año, que se entregarían al Intendente de Concepción para que proporcionara habitaciones sólidas y estables, dentro de sus respectivos territorios, a los caciques que lo solicitasen. El Gobierno decretó lo anterior

> "persuadido de las inmensas ventajas que se obtendrían de reducir a los indios a la vida social, cuyo fin nunca podrá alcanzarse mientras no reconozcan domicilio fijo y adquieran hábitos de propiedad".

En la ley que creó la provincia de Arauco (2 de julio de 1852) hay dos artículos que se refieren a la civilización de los indios, el 3 y el 5. Por el primero, se autorizaba al Presidente de la República

> "para dictar las órdenes que juzgara convenientes para el mejor gobierno de las fronteras, para la más eficaz protección de los indígenas, para promover su pronta civilización, etc., etc.".

El segundo de los artículos citados dispuso que la autorización antedicha duraría cuatro años; que en cada año debería darse cuenta al Congreso de las medidas tomadas, y que se expedirían fondos para los gastos que la ejecución de las providencias adoptadas requirieran.

Cuando se estableció la misión de Mulchén –decreto de 2 de junio de 1862– se dispuso que en el edificio que sirviera de templo, habitación de misioneros y escuela de niños, debería consultarse[383] un departamento especial para internado de niños indígenas.

Por decreto de 26 de diciembre de 1895, se concedió en la población de Carahue a los misioneros recoletos franciscanos, el uso y goce de media hectárea de terreno para casa misional y colegio de niños indígenas.

Existe en Temuco un establecimiento para educar niños araucanos de ambos sexos, denominado "Casa Providencia" y servido por religiosas, para el cual se viene anualmente, desde 1884, consultando fondos en la ley de presupuestos. En 1889, el Ejecutivo presentó al Congreso un mensaje con el objeto de conceder de una sola vez 50.000 pesos para concluir su edificio. En él se deja constancia de la importancia atribuida por el Gobierno a la civilización de los indígenas.

Desde hace algún tiempo, se consultan en el presupuesto fondos para ayudar a la enseñanza indígena, y son favorecidos, entre otros establecimientos, los colegios indígenas sostenidos por misioneros capuchinos en Padre Las Casas, Boroa, Bajo Imperial, etc.

De la anterior exposición se deduce que, si bien los poderes públicos atribuyen la importancia merecida a la civilización de los indígenas, los esfuerzos, en

[383] = establecerse.

este sentido, han sido aislados y no se ha adoptado el plan sistemático, puesto en vigor en Estados Unidos y Canadá, para civilizar a los aborígenes y cuyos resultados han sobrepasado a las expectativas que se tuvieron en vista.

Parece que hoy se piensa entre nosotros reaccionar en el sentido de adoptar mejores medios para incorporar de lleno a los araucanos a la vida civilizada.

El Gobierno ha cedido dos quintas de la población de Temuco para destinarlas a erigir un establecimiento que llene este fin y que se denominará "Internado Indígena Centenario".

Para la conmemoración de la gran fecha nacional, entre los números del programa de festejos, se llevó a cabo en esta ciudad la colocación de la primera piedra del futuro edificio.

He aquí el acta de la ceremonia:

Gobierno del Excmo. Señor don Emiliano Figueroa Larraín, Vice-Presidente de la República.
Homenaje al Primer Centenario de la Independencia Nacional.
(1810-1910)

En Temuco, a diez horas A.M. del 19 de septiembre de 1910, con la asistencia de las autoridades locales y numerosa concurrencia, se procedió por el señor Intendente de la provincia don Ricardo Vélez Lamberry, acompañado del señor Protector de Indígenas don Eulogio Robles Rodríguez y del señor Presidente de la Comisión Radicadora de Indígenas, don Leoncio Rivera Cruzat, a colocar las piedras fundamentales de los cimientos de los edificios a que se refiere el Decreto Supremo que se inserta, en las dos manzanas vacías, ubicadas en la Avenida José Manuel Balmaceda, al lado de la Quinta Agrícola. Usó de la palabra el expresado señor Protector de Indígenas, don Eulogio Robles Rodríguez, que lo es de esta provincia de Cautín. El Decreto Supremo dice: "He acordado y decreto: Destínanse a la construcción de una Escuela Industrial y Asilo Fiscal de indígenas, las dos quintas vacantes, situadas en la Avenida Balmaceda de dicha ciudad, al sur de los terrenos ocupados por la Escuela Agrícola. El Agrónomo Regional de la 3ª zona procederá a hacer entrega de dichas quintas al Intendente de la provincia, quien efectuará su inscripción, afectándolas al objeto indicado.

Tómese razón y comuníquese.
(Firmado).
Elías Fernández A.
Fidel Muñoz R.

Se firman para constancia dos ejemplares del mismo tenor, por el señor Intendente y demás funcionarios y algunas personas asistentes al acto.- Ricardo Vélez, Eulogio Robles Rodríguez, Leoncio Rivera C., Evaristo Soto A. (siguen muchas firmas).

Dejo cumplido lo encomendado por la Honorable Comisión y me es grato suscribirme de sus distinguidos miembros como obsecuente servidor.

Eulogio Robles Rodríguez.

Temuco, 15 de abril de 1911.

1910
CARLOS G. IRRIBARRA
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS DE VALDIVIA[384]

Señor Inspector

En los memorándum que presentamos en los años 1907, 1908, 1909 y 1910 creemos haber manifestado con detalles nuestras ideas sobre la situación de los indígenas de la provincia de Valdivia.

Sin embargo, de la profusión de datos que se registran en esos memorándum, hemos de ampliar algunos de sus puntos capitales y estudiar otros nuevos.

En 1907 hablamos, entre otras cosas, de los juicios de partición y señalamos sus peligros. Hoy exhibimos una nueva fase que en nuestro sentir es de vital importancia y que ojalá se piense en ella cuando se legisle sobre la materia.

Los juicios de partición se multiplican de un modo alarmante y por regla general son los accionistas indígenas los perjudicados.

En la partición del fundo Nolgehue, por ejemplo, sobre la cual informamos a esa Inspección, han desfilado cerca de cien indígenas como comuneros o accionistas de ese predio de los cuales quince o veinte habrán de abandonar sus posesiones en cambio de la suma de $11.65, que les cupo en ese juicio divisorio.

Esta *barbaridad legal* proviene de que esos accionistas no han tenido derecho ni siquiera a una hectárea de tierra porque el valor asignado a cada hectárea alcanza a $60, según la tasación del perito.

Cabe preguntar ¿qué papel corresponde al Protector en presencia del lanzamiento de esos indígenas que han nacido y creado dentro de ese predio? ¿Cuál sería la acción que correspondería iniciar para amparar a esos desgraciados?

Se dirá que el Protector debió oponerse oportunamente a la partición fundándose en que está prohibido a los particulares adquirir terrenos de indígenas.

Pero hay que considerar que en este caso los particulares que provocan la partición son poseedores de un título de cuota o cuotas y, en consecuencia, son comuneros con los naturales y que esos títulos de cuotas o acciones y derechos los hubieron antes de la ley prohibitiva.

[384] "Memoria del Protectorado de indíjenas de Valdivia", en *Memoria de la Inspeccion Jeneral de Colonizacion e inmigración, 1910* (Santiago, Imprenta i Encuadernacion Ercilla, 1911), pp. 433-440. Esta misma Memoria del Protector Irribarra fue luego incluida como Anexo en: Congreso Nacional. Comisión Parlamentaria de Colonización, *Informe, Proyectos de Ley, Actas de las Sesiones y otros antecedentes* (Santiago, Imprenta y Litografía Universo, 1912).

Por otra parte, cómo impedir una partición cuando el artículo 1.317 del Código Civil ampara los derechos de los consignatarios que pretenden la división.

El señor promotor fiscal del departamento de La Unión, antes de la creación del Protectorado de indígenas en la provincia de Valdivia, se opuso a la partición del fundo Nolgehue apoyándose en que los terrenos que se trataban de partir eran de indígenas. Su oposición no fue acogida ni en primera ni en segunda instancia.

El resultado de esta partición fue desastroso para muchos accionistas indígenas, que han tenido que abandonar sus posesiones a los adjudicatarios de ellos. En nota número 200 de 14 de diciembre último, motivada por reclamo del cacique Hermenegildo Pailañir, informamos al señor inspector sobre el particular.

Los descontentos trajeron sus quejas al Protectorado. Nos apersonamos al expediente, estudiamos su tramitación y pudimos constatar que había una *barbaridad legal.*

Últimamente los juicios de compromiso se han multiplicado considerablemente, pero con caracteres algo más favorables a los intereses de los accionistas indígenas. Somos parte en las particiones en que aparecen afectados terrenos de indígenas.

Ya hemos hablado de lo que significaba y significa en algunos casos la hijuela pagadora[385]. Ya no son tan frecuentes los lanzamientos de indígenas derivados de la subasta de esa famosa hijuela.

Deseamos hablar de un hecho que es menester no dejar pasar desapercibido; creemos divisar un síntoma de futuras complicaciones. Nos referimos a la continua divergencia, desacuerdo o falta absoluta de armonía en que viven los indígenas entre sí.

Hemos notado que cada día se traen nuevas quejas de indígenas contra indígenas. Son algunos los casos en que un indígena ha vencido en juicio y lanzado del terreno a su comunero indígena.

Opinamos que estos choques nacen de causas extrañas a sus hábitos, costumbres, etc. Creemos no engañarnos si afirmamos que esas diferencias son de carácter económico.

Nos permitimos avanzar que está próxima la fecha de acontecimientos que habrán de sorprendernos con escenas de hambre. No exageramos. Cerca de cinco años hace que estamos sirviendo la Oficina del Protectorado. Solo en estos últimos tiempos, hará más o menos dos años, que venimos notando que los reclamos de indígenas contra indígenas aumentan en proporción alarmante.

Como detalle curioso citamos un juicio iniciado por Carileo, indígena de Quilche, quien pretendió anular por medio de un pleito la actuación de la Comisión Radicadora y lanzar a todos los demás comuneros que habían sido radicados con él.

[385] Hijuela reservada para cubrir deudas. Véase también la entrada 'hijuela' en el Glosario.

Por fortuna nuestra defensa impidió se consumara ese propósito, que habría sido un fatal precedente. Contestamos la demanda y la aparejamos con documentos y planos que solicitamos y obtuvimos de la Oficina de Temuco.

No son raros los casos en que se ve a indígenas prestar sus testimonios en favor de particulares en litigios contra indígenas.

En los comparendos a que muy a menudo los citamos para arreglar sus diferencias se manifiestan intransigentes, y si logramos arrancarles prestaciones mutuas, estas quedan en el papel. Más confianza tienen en un particular que en igualdad de circunstancias les hace promesas en pro de un arreglo amistoso que en sus paisanos.

La explicación de este fenómeno que no conocimos en los primeros años de nuestra labor pensamos encontrarla en la forma en que se efectúa la radicación. Es la radicación por familias y la asignación de pequeñas cabidas a reducciones numerosas una de las principales causas de ese malestar.

Así se comprende por qué antes que actuara la Comisión Radicadora no apareciera este descontento.

Está claro. La mencionada Comisión los ha reducido en sus posesiones y, por consiguiente, los ha obligado a acercarse, a conocerse y tratarse más íntimamente, lo que los ha hecho darse cuenta más exacta de lo que significa la vida en comunidad.

De aquí también el motivo que tienen los indígenas para solicitar que no se les radique y su disposición para renunciar su calidad de tales.

Reducidos, pues, a pequeñas cabidas de terrenos, radicados por familias y con el sistema de comunidad, rompen su tradicional espíritu de cuerpo unidad y compañerismo para defender su propia conservación, individualmente hablando. Los medios de subsistencia cada día más difíciles y la natural multiplicación de los miembros de cada familia coloca a los unos frente a lo otros.

Esta lucha por la vida, dadas las condiciones en que se efectúa y los nuevos factores que habrán de entrar en ella, habrá de ser a muerte.

Estimamos que es muy poco el terreno que se entrega con la operación de la radicación. Fluctúa entre cinco y ocho hectáreas por cabeza.

Pensamos que habría conveniencia en aumentar la cabida asignada en los títulos de merced. A decir verdad, no acertamos a encontrar la razón de la economía en la dación de tierras a los naturales.

Solicitudes de aumento de cabidas se nos traen a diario a la Oficina. El señor Presidente de la Comisión Radicadora se manifiesta atento a nuestras peticiones de aumento de cabidas pero no siempre le es dable, a pesar de su buena voluntad, satisfacer nuestros deseos.

Cabe aquí recordar a propósito de la radicación lo que hemos dicho muchas veces. La operación de radicación se va complicando con su postergación, proveniente del reducido número de comisiones. Hemos podido palpar los inconvenientes que ha tenido la mencionada Comisión para radicar en el departamento de La Unión adonde, en nuestro concepto, se ha llegado tarde.

Francamente no queremos examinar qué lo que les está reservado a los infelices que están en espera de su radicación y que no tienen otro título que la simple posesión y todavía dentro de un predio que puede partirse de un día a otro.

Abogamos, pues, por la multiplicación de los miembros de la Comisión Radicadora, por la radicación por cabeza y por el aumento de cabida. Si esta forma de radicación se estimara muy difícil por el tiempo que exigiría, autorícese a las comunidades para dividirse o al respectivo Protector para dividirlas.

La labor del año último de que da cuenta esta Memoria nos ha sugerido la necesidad de someter a la consideración del señor Inspector algunos puntos que nos merecen dudas y que para mayor claridad redactamos en forma interrogativa.

Iniciada una partición en circunstancias que la Comisión Radicadora actúa en el terreno ¿Cómo se armonizarían las atribuciones e intereses de esta con los del juez partidor? Al revés, pendiente una partición ¿cómo se armonizaría la actuación de la Comisión Radicadora? ¿con la del juez partidor? En ambos casos, ¿qué fuerza tendría la matrícula previa de los indígenas?

¿Pueden los indígenas renunciar su calidad de tales? ¿Podrían, en consecuencia, después de matriculados rechazar su radicación y refugiarse en las leyes comunes para alegar la prescripción, por ejemplo, fundados en una posesión de treinta años? ¿Qué sanción cabría al indígena que afirmara no tener esa condición?

¿Quiénes son indígenas? ¿Bastaría que su nombre apareciera en la matrícula respectiva para considerarlos como tales?

¿Cómo se procedería cuando un indígena se niega a ser radicado alegando que tiene una escritura de compra? ¿Podría la respectiva Comisión cercenarle sus derechos escriturados?

¿Puede la Comisión radicar indígenas en un suelo ocupado por terceros, con,o sin título? Caso afirmativo ¿tocaría al Protector iniciar las acciones contra esos terceros? ¿Qué quedaría de la radicación si los Tribunales no acogieran la demanda?

Conferido un mandato judicial por un indígena a favor de un tercero ¿puede y debe el Protector tomar su representación? ¿Quedaría en este caso sin efecto aquel poder?

¿El Protector debe ser requerido para patrocinar a los indígenas en los juicios o debe proceder de oficio?

¿Puede el Protector tomar la defensa de un indígena contra otro indígena? ¿Es de la obligación del Protector defender a los indígenas en causas criminales que no digan relación con sus terrenos?

¿Incumbe al Protector defender en segunda instancia a indígenas a quienes no ha defendido en primera?

¿Puede enajenar su propiedad raíz un indígena que la ha adquirido con su peculio, por herencia o donación?

¿Puede el indígena sin herederos forzosos disponer de sus bienes raíces por acto testamentario a favor de un particular, o sería el Fisco su heredero forzoso?

¿Debe el Protector reivindicar el suelo abandonado por un indígena y que en su ausencia de más de un año ha sido ocupado por otro indígena o particular?

¿Cómo deberá procederse con los particulares que en razón de su matrimonio con indígenas entran y toman posesión de terrenos de la comunidad de indígenas y contra los cuales se interponen quejas por abusos y atropellos?

Labor de la Oficina:

Desde el 15 de marzo al 31 de diciembre del año último se presentaron al Protectorado cuatrocientas sesenta y ocho reclamantes indígenas. Con tal motivo el Protector hizo las siguientes presentaciones:

A los juzgados de Valdivia y La Unión	75
A la Iltma. Corte de Apelaciones	16
A Jueces Compromisarios	16
Al tercer grupo de carabineros	61
A la Inspección de Colonización	17
A la Comisión Radicadora	29
A los jueces de menor cuantía	106
Oficios varios	42
Total de piezas	362

Se acompaña un cuadro o minuta de los juicios en que actualmente es parte el Protector.

Con la creación del departamento de Villarrica tiene el Protector que atender a la defensa de los indígenas en tres juzgados, Valdivia, La Unión y Villarrica.

Esta circunstancia aconseja solicitar del señor Inspector se sirva crear para esta Oficina el empleo de agente judicial, como asimismo nombrar un ingeniero para asesorar al Protector en los casos que sea menester.

Sin otro particular, Saluda a Ud.

Carlos G. Irribarra.

Valdivia, mayo de 1911.

1910
DANIEL CERDA
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS DE LLANQUIHUE[386]

Señor Inspector General:

Tengo el agrado de elevar la Memoria del Protectorado de Indígenas de Llanquihue correspondiente al año 1910 próximo pasado.

Esta Oficina funciona en Osorno a cargo del infrascrito como protector de indígenas de la provincia y tiene a su servicio un escribiente y un portero-intérprete.

He gestionado en repetidas ocasiones, pero sin éxito, por obtener el nombramiento de un ingeniero que, asesorando al Protector, permita a este formular, con conocimiento pleno de los hechos, las acciones procedentes en favor de los indígenas.

Asimismo este funcionario podría evitar los continuos litigios o disputas que tienen los indígenas comuneros por los deslindes o cabida del terreno que cada uno ocupa.

Es de desear que en el presente año se nombre el ingeniero solicitado y pueda prestar a esta Oficina servicios indispensables para su debido funcionamiento y para el éxito de las gestiones judiciales que se inician en favor de los indígenas.

El gran número de juicios que atiendo en este departamento y el sinnúmero de consultas y reclamos diarios que se me presentan en Osorno, no me permiten, como es mi deseo y como es necesario, trasladarme a Puerto Montt a atender los intereses de los indígenas del departamento de Llanquihue.

La designación de un procurador judicial vendría a salvar este inconveniente y los indígenas de aquel departamento podrían estar atendidos por este funcionario que recibiría instrucciones directas del infrascrito.

Los juicios en favor de los indígenas continúan a una marcha muy lenta por el sinnúmero de artículos dilatorios y los continuos tropiezos que ponen a los juicios los litigantes contrarios a los indígenas.

Es norma general negar a los indígenas litigantes su calidad de tal, y es menester probar la calidad de indígena por medio de prueba testimonial que acre-

[386] "Memoria del Protectorado de Indíjenas de Llanquihue", en *Memoria de la Inspeccion Jeneral de Colonizacion e inmigración, 1910* (Santiago, Imprenta i Encuadernacion Ercilla, 1911), pp. 441-457. Esta misma Memoria del Protector Cerda de Llanquihue fue luego incluida como Anexo en: Congreso Nacional. Comisión Parlamentaria de Colonización, *Informe, Proyectos de Ley, Actas de las Sesiones y otros antecedentes* (Santiago, Imprenta y Litografía Universo, 1912).

dite que el demandante es indígena porque sus ascendientes lo fueron, por su idioma, costumbres y apellidos: sin embargo esta prueba se trata de desvirtuar por medio de perjuros que generalmente, tienen intereses arrebatados a otros indígenas; se dificulta la prueba de los indígenas con continuas postergaciones de las sesiones de prueba y con amenazas y cohecho a los testigos de mis representados.

En 1906 se formó una matrícula general de indígenas de la República, cuyos registros originales están en poder del señor presidente de la Comisión Radicadora de Indígenas; pues bien, he tomado por resolución obtener de dicho funcionario un certificado por el cual conste que la persona por quien litigo está matriculada como indígena y presento dicho certificado como parte de prueba; sin embargo, el señor juez letrado de Osorno no da mérito jurídico alguno a dicho certificado, pero confío que la Iltma. Corte de Valdivia ha de revocar dichas resoluciones en los juicios apelados que tengo pendiente por los indígenas ante aquel Iltmo. Tribunal.

De todos modos, y a fin de evitar interpretaciones equívocas de los tribunales, estimo indispensable se dicte una ley que se establezca quienes son indígenas, pudiendo dicha ley tomar por base para establecer dicha calidad el hecho de estar matriculado como indígena en el registro antes expresado, previas publicaciones de dicha matrícula en el *Diario Oficial*. Toda persona incluida en la lista publicada en el *Diario Oficial* se debe presumir de derecho que es indígena, sin que haya prueba alguna en contrario que trate de negar dicha calidad.

Hay conveniencia a la mejor defensa de los indígenas en radicar todos los juicios de estos ante los jueces letrados pues, aparte de que el protector no puede atender los juicios ante los jueces de menor y mínima cuantía, son estos funcionarios de muy dudosa honorabilidad, lo que se justifica que más del 50 por ciento de los despojos arbitrarios de que se ha hecho víctima a los indígenas provienen de orden de estos funcionarios.

La defensa en 2ª instancia de todos los juicios de indígenas debe estar encomendada a un protector especial, pues hoy día se hace en forma inconveniente y lenta la defensa, por cuanto los protectores no pueden desatender los juicios de 1ª instancia y además diariamente deben atender los reclamos y consultas de los indígenas.

Como lo he expresado en mis memorias anteriores, con las medidas tomadas por el infrascrito he impedido que continúen llevándose a efecto los contratos referentes a terrenos de indígenas ante los notarios de la provincia, contratos que antes de ejercer el infrascrito este cargo, eran continuos, no obstante de la prohibición legal que tenían los notarios para ello, salvando esos funcionarios su responsabilidad, aparentemente, con la declaración de los testigos que expresaban que el compareciente no era indígena, aunque su apellido, su idioma, sus costumbres y físico le demostrasen al notario la falsedad de los testigos.

El 30 por ciento de los desposeimientos de los indígenas de sus terrenos han sido motivados por dichos contratos, absolutamente ilegales.

Estimo que una ley debe declarar resueltos ipso facto dichos contratos y autorizarse la cancelación de ellos con solo la comprobación de que el vendedor era indígena, y como consecuencia de la cancelación debe autorizarse al Protector para recuperar por el indígena la posesión material del terreno, materia del contrato, debiendo la entrega ser decretada por la autoridad judicial con la sola presentación de la escritura de cancelación.

Estimo indispensable se aplique a los juicios en contra de los indígenas la disposición del art. 925 del Código de procedimiento Civil, en el sentido de que toda sentencia que sea dictada contra los indígenas necesita, para su cumplimiento, que ésta sea ordenada por un decreto Supremo.

Reitero mis congratulaciones hacia las autoridades administrativas de la provincia que siempre han estado dispuestas a secundar los intereses de los indígenas.

Como lo he expresado en mis Memorias anteriores, la labor más pesada de esta Oficina no es la defensa de los indígenas ante los Tribunales de Justicia, sino la atención especial a los intereses de estos que generalmente se ven amenazados con desposeimientos y atropellos sin más razón que la fuerza, y el abatimiento y pobreza a que se tiene reducidos a los indígenas.

Continuamente solicito el auxilio de carabineros para amparar a los indígenas y debo decir, en honor a la verdad, que este auxilio es generalmente eficaz y es proporcionado con toda oportunidad por el jefe del Escuadrón Osorno.

Las continuas disputas entre los indígenas comuneros impone a esta Oficina una pesada labor.

La propiedad permanece en la indivisión en el departamento de Osorno desde hace más de cien años entre los indígenas y durante este tiempo cada familia y sus descendientes han ocupado partes de terrenos sin cabida limitada a consecuencia de ser en general terrenos boscosos, pero ahora, con la estrechez de terrenos en que viven los indígenas y con el roce de los bosques, han venido las disputas sobre deslindes y cabidas y hay que remontarse al estudio de tres o más generaciones para ver quienes son los que están en la razón.

El infrascrito trata de armonizar estas disputas en forma equitativa, prescindiendo muchas veces de los derechos hereditarios, generalmente oscuros, y preocupándose principalmente en la posesión durante los últimos veinte años.

En esta tarea y para proceder a hacer arreglos justicieros y definitivos es cuando más se necesita la acción del ingeniero tantas veces reclamado para el servicio de esta Oficina.

Como lo he expresado en mi Memoria anterior, se ha objetado al infrascrito el derecho de representar en juicio a los indígenas, alegando que la ley de 4 de agosto de 1866 creó solo el Protectorado de Indígenas, hoy radicado en Temuco; sin embargo la Ilustrísima Corte de Valdivia acogió siempre como legal mi representación por los indígenas, lo que a mayor abundamiento han venido a sancionar las leyes de presupuestos.

En 1910 han tenido término varios juicios seguidos desde muchos años atrás en contra de los indígenas y, a pesar de las gestiones tanto judiciales como

administrativas que hice, no se pudo obtener se paralizase el desposeimiento de algunos indígenas.

Entre estos juicios han estado el seguido desde catorce años a la fecha por don Adolfo Richther contra los indígenas Cania de Chanchan, departamento de Llanquihue. En este juicio hubo una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema que dio la razón al demandante y ordenó el desposeimiento de los indígenas, declarando que está establecido en el juicio que estos no fueron jamás propietarios de aquel terreno sino que entraron a ocuparlo violentamente y teniendo títulos antiguos inscritos el Señor Richther; el infrascrito, ante una sentencia del primer Tribunal de la República, no pudo más que resignarse a acatar su cumplimiento.

También se siguió un juicio contra unos indígenas de la hijuela Ireumun de la subdelegación de Río Negro del departamento de Osorno; en este juicio se resolvió por la Ilustre Corte de Valdivia que debía desposeerse a los indígenas en virtud de los títulos legalmente constituidos e inscritos que presentaran los demandantes. Aunque obtuve del señor gobernador de Osorno dilatase el cumplimiento de dicha sentencia, ésta se llevó a cabo porque no era posible eludir su cumplimiento, no sin obtener antes que los indígenas recogieran sus sementeras pendientes.

Sin embargo, sobre este último juicio estimo que hay acciones que poder iniciar, y al efecto estudio los antecedentes a fin de promover un juicio que sea procedente. Una resolución de la Ilustre Corte de Valdivia que niega el derecho al protector de asumir la representación de los indígenas en contra de la voluntad de estos trae perjuicios considerables a la defensa de los indígenas.

Estos por lo general son ignorantes y se imaginan que los juicios deben seguirse con toda rapidez e inculpan cualquier atraso a desidia del Protector y se buscan otro defensor que les explota vergonzosamente y les hacen presentaciones que sirven solo para interrumpir la marcha regular de los juicios.

Por otra parte, hay juicios seguidos por los indígenas, patrocinados por agentes judiciales, juicios mal iniciados, mal atendidos y en los cuales los pobres indígenas tienen que pagar por honorarios a sus defensores los pocos animales que les restan y cuando ya el defensor nada tiene que sacarle al indígena le abandona el juicio o celebra transacciones que, naturalmente, jamás son en beneficio del indígena.

En esos juicios no puede tener intervención el Protector por la resolución antes expresada de la Ilustrísima Corte de Valdivia.

Respetando la doctrina sentada por dicho tribunal, me parece que ella no es estrictamente ajustada a la ley.

El papel del Protector es, respecto a los indígenas, el mismo que el de un curador respecto a su pupilo, puede y debe atender a la representación de los incapaces sin considerar la voluntad de éstos.

Sin embargo, a fin de salvar esta dificultad, estimo que debe establecerse en la ley el verdadero carácter del Protector de Indígenas dando a este el derecho de asumir, en todo caso, la representación de los indígenas.

Creo excusado manifestar a US. que el infrascrito ha atendido los intereses de los indígenas con el celo y actividad debida, aunque, como lo he expresado, la defensa de estos se hace en condiciones difíciles, tanto por los artículos dilatorios que formulan los contrarios a los indígenas cuanto por las amenazas y cohecho que se ejerce contra los testigos de éstos; además las postergaciones continuas decretadas por el juzgado de Osorno de las sesiones de pruebas dificultan la defensa de los indígenas; aunque debo declarar que dichas postergaciones son debidas generalmente a la excesiva labor del Juzgado de Letras de este departamento.

Como lo he expresado anteriormente, las autoridades administrativas de la provincia prestan a esta Oficina la cooperación debida.

El señor gobernador de Osorno no da curso a peticiones de fuerza pública para el desposeimiento de indígenas sin que previamente tome conocimiento el infrascrito y estudie los antecedentes en que incide la prestación de fuerza pública. Esta medida tiende a impedir los atropellos y violencias contra los indígenas y a vigilar que las sentencias judiciales se cumplan dentro de los deslindes decretados pues, anteriormente, al cumplirse las resoluciones de los tribunales, se dejaba al criterio de jueces inferiores, sin precisarse las cabidas y estos desposeían no solo a los litigantes vencidos sino a los indígenas colindantes aunque no hubiesen litigado.

El siguiente ha sido el movimiento interno de esta Oficina durante el año 1910:

Oficios despachados	118
Oficios recibidos	48
Informes	14
Reclamos de indígenas en audiencia	465
Comparendos entre indígenas	63
Juicios de indígenas en tramitación en Osorno	31
Juicios de indígenas en tramitación en Puerto Montt	4
Apelaciones atendidas por Protector	18
Escritos presentados por Protector ante las autoridades administrativas y judiciales	228

Como lo he expresado en mis memorias anteriores, la legislación vigente sobre indígenas es buena, pero es deficiente, necesítase otra ley que venga a subsanar los inconvenientes que se presentan en la práctica al atender la defensa de los indígenas y que venga a establecer una sanción efectiva a la violación de las leyes pendientes.

El infrascrito ha confeccionado un nuevo proyecto de ley sobre indígenas, el que si no es una pieza de mérito jurídico a lo menos consulta con claridad los medios que tiendan a remediar los males existentes en las leyes vigentes y especialmente en la aplicación de éstas.

Dicho proyecto lo presenté a la Honorable Comisión Parlamentaria y es como sigue:

Proyecto de ley sobre indígenas

Art. 1. La acción de las Comisiones Radicadoras y de los Protectores de Indígenas se extenderá a las provincias de Arauco, Biobío, Malleco, Cautín, Valdivia y Llanquihue.

Art. 2. Habrá dos Comisiones Radicadoras de Indígenas, cada una de las cuales será servida por los siguientes funcionarios y con los sueldos anuales que se expresan:

Funcionario	Sueldo anual ($)
Un Ingeniero	8.000
Un secretario Ministro de fe	4.000
Un portero	1.200
Un presidente abogado	10.000

La residencia y jurisdicción de cada comisión será la que indique el Presidente de la República.

Art. 3. La radicación de indígenas se hará por cabezas, otorgándose a cada individuo la propiedad de una hijuela de terreno.

La extensión de esta será de quince hectáreas por cada jefe de familia y de cinco por cada hijo.

El indígena será radicado en el terreno que ocupa, sin embargo, si la cabida no fuera suficiente se le radicará por el exceso en un terreno fiscal.

Los terrenos fiscales baldíos se destinarán de preferencia para radicación de indígenas.

Art. 4. Los indígenas radicados quedan obligados a enviar sus hijos de diez años de edad a la escuela por el término de dos años, siempre que funcione a menos de dos kilómetros de distancia uno de estos establecimientos.

Art. 5. El servicio militar es obligatorio para los varones indígenas de 18 años de edad. Lo prestarán por un año continuo en los Cuerpos de Ingenieros Militares, salvo los que no sepan leer ni escribir cuyo servicio será de dos años.

La infracción de la disposición del presente artículo y del precedente será penada con la pena indicada en el número 15 del art. 494 del Código Penal, sin perjuicio de las demás sanciones que establezcan las leyes vigentes.

Art. 6. Habrá un Protectorado en cada Provincia del Territorio Indígena, con excepción de las de Biobío y Malleco, que serán servidas por una sola Oficina.

Cada Protectorado tendrá los siguientes funcionarios y con los sueldos anuales que se expresan:

Funcionario	Sueldo anual ($)
Un Protector abogado	10.000
Un Ingeniero	7.000
Un Procurador Judicial	3.600
Un Escribiente	2.400
Un Portero	1.200

Los Protectores de Indígenas y los Ingenieros no tendrán el ejercicio libre de sus profesiones.

La residencia de los Protectorados dentro de cada provincia será la que indique el Presidente de la República.

Art. 7. El Protector de Indígenas tendrá la representación legal de estos, siendo nulo todo acto o contrato que celebren los indígenas sin intervención de dicho funcionario.

Art. 8. Todo juicio en que sean parte o tengan interés los indígenas será de la competencia de los jueces letrados y litigarán con privilegio de pobreza.

Será título suficiente para establecer la calidad de indígena un certificado del Inspector General de Colonización por el cual conste que la persona de que se trata está matriculada en el Registro General de Indígenas de la República.

Para los efectos de este artículo se procederá por la Inspección General de Colonización, dentro del término de tres meses después de la promulgación de esta ley, a publicar en el *Diario Oficial* el nombre y residencia de los indígenas matriculados como tal en el territorio de la República, sirviendo de base la matrícula original que existe en la Oficina de Radicación de Indígenas.

Las personas incluidas en dicha publicación se presume de derecho que son indígenas para los efectos de esta ley y de las demás leyes vigentes sobre indígenas.

Art. 9. Se declaran resueltos todos los contratos sobre terrenos de indígenas, cualesquiera que sea su naturaleza, celebrado en contravención a las leyes vigentes a la época de su otorgamiento.

Los protectores gestionarán la cancelación de dichos contratos comprobando solamente la calidad de indígena del otorgante y la justicia ordinaria decretará sin más trámite dicha cancelación.

La escritura de cancelación será título ejecutivo suficiente para que los indígenas puedan obtener la devolución de los terrenos de que hayan sido privados en virtud de los expresados contratos.

Esta disposición se aplicará no solo a los contratos que aparecen los indígenas celebrando voluntariamente sino también a las enajenaciones forzadas llevadas a cabo ante los tribunales de justicia o ante árbitros.

Art. 10. Prorrógase en todas sus partes y por cinco años más los efectos de las leyes de 20 de enero de 1883, 11 de enero de 1893 y 13 de enero de 1903, que se refieren a la prohibición de celebrar contratos referentes a los terrenos de indígenas.

Expirado el término antes fijado, podrán los indígenas celebrar dichos contratos previa autorización concedida por el Presidente de la Ilustre Corte de Valdivia, y por necesidad o utilidad manifiesta, y debiendo intervenir con el indígena en el otorgamiento del contrato el respectivo protector.

Esta disposición no se aplicará a los terrenos que los indígenas hayan adquirido a otro título que el de herencia.

Art. 11. Los Protectores de Indígenas serán competentes para conocer en los juicios civiles que tuviesen los indígenas entre sí, debiendo darse a estos juicios la tramitación de los juicios sumarios establecida en el Código de Procedimiento Civil.

Serán apelables ante el Presidente de la Ilustre Corte de Apelaciones de Valdivia las sentencias que dictasen los Protectores cuya cuantía sea superior a la suma de un mil pesos, y se procederá a fallar estas apelaciones con el solo mérito de los autos y sin audiencia de las partes. Contra las sentencias de 2ª instancia no es procedente otro recurso.

Art. 12. Es aplicable a los juicios en contra de los indígenas seguido ante los Tribunales Ordinarios y jueces árbitros la disposición del artículo 925 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 13. Los terrenos en que son accionistas los indígenas con personas que no lo son podrán ser repartidos entre los comuneros, y servirá de árbitro de derecho en dichos juicios de compromiso el Protector de Indígenas respectivo.

Cualquier comunero podrá provocar el juicio de partición.

Art. 14. Será competente para conocer en 2ª instancia en los juicios de indígenas la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Art. 15. Establécese en Valdivia un Protectorado de Indígenas extraordinario que tendrá a su cargo la defensa y representación en 2ª instancia en todos los juicios de indígenas.

Este Protectorado será servido por un Protector Abogado y por un escribiente y con los sueldos y prohibiciones que establece el artículo 6 de esta ley.

Art. 16. La presente ley empezará a regir desde su publicación en el *Diario Oficial*.

Antes de terminar la presente Memoria me permito hacer algunas observaciones generales sobre la situación especial de la propiedad indígena en las provincias de Valdivia y Llanquihue que tiene algunas diferencias con las otras provincias del territorio indígena.

Las provincias que formaron la antigua Araucanía fueron sometidas a la civilización solo hace poco más de treinta años, y el Gobierno de la República, por el derecho que le dio la ocupación militar, declaró al Estado dueño de todos los terrenos conquistados y empezó a formar los planos de dichos terrenos para entregarlos a los remates fiscales o a concesiones o mercedes a los indígenas, vencidos en la contienda militar, pero todos esos remates y concesiones fueron hechos en planos en que se determinaban los deslindes y cabidas, así es que el

origen de la propiedad indígena en aquellas provincias es muy reciente y todos los terrenos tienen su cabida y deslindes fijos.

Por otra parte, desde el principio de las concesiones a los indígenas en aquella región ha regido la ley que prohíbe a los particulares adquirir a cualesquier título terrenos de indígenas.

Entre tanto, en las provincias de Valdivia y Llanquihue el origen de la propiedad indígena es algo más remoto, no ha existido aquí cabida ni deslindes fijos, ni tampoco ha regido sino hace dieciocho años la ley que prohibió a los particulares adquirir terrenos de propiedad de los indígenas.

Precisando mis observaciones a la provincia de Llanquihue, en donde desempeño mis funciones, puedo manifestar que la propiedad indígena data desde el año 1793, o sea desde la repoblación de Osorno, llevada a cabo de orden del gobernador de Chile don Ambrosio O'Higgins, por el coronel don Juan Mackenna.

Los indígenas de Osorno al celebrar el pacto de 8 de septiembre de 1793[387] con el representante del gobierno español en aquel tiempo, se reservaron la propiedad de las dos terceras partes del actual departamento de Osorno.

La propiedad indígena continuó en esa época en el estado de indivisión y pronto surgieron dificultades entre los comuneros y de ahí vino la resolución del Gobierno de la República en 1822, más o menos, de designar un funcionario que, con el nombre de Comisario de Naciones y ayudado por el Alcalde de la región, procediera a deslindar los terrenos entre los indígenas y a dejar constancia por medio de actas de la demarcación y entrega dentro de ella a determinadas familias de indígenas que comprobaban ser poseedores en los terrenos demarcados.

Tales actas permanecieron muchos años extraviadas, y después de múltiples gestiones se han encontrado algunas en la parroquia de Calle Calle, lugar donde vivió largos años el nombrado Comisario de Naciones, y otras actas se han encontrado en el archivo del Convento de los Franciscanos en Chillán, posiblemente llevadas por algún misionero a quienes se las encargarían los indígenas.

El hecho es que dichos documentos son la base de la propiedad indígena, especialmente del departamento de Osorno en donde están las cinco sextas partes de la población indígena de la provincia.

Dichas actas prestan algunos servicios como títulos originarios de dominio, pero los deslindes fijados son tan pocos precisos y con radicaciones tan vagas que generalmente es imposible comprender qué terreno es el deslindado en los expresados documentos.

Así, por ejemplo, algunos fundos están deslindados por un palo botado, otros por un pellín marcado, otros por un zanjón y muchos por humedales; to-

[387] Conocido como Tratado de las Canoas.

das estas indicaciones, como es fácil comprenderlo, han variado en absoluto en el espacio de un siglo.

No es raro, por consiguiente, que con estas determinaciones tan inciertas se haya originado un semillero de juicios en que muchos tratan de hacer comprender algunos fundos en otros, y así otras alegaciones según sean los intereses que convengan.

Otra dificultad para precisar los verdaderos propietarios es que en aquellos títulos se indican los nombres de indígenas sin precisión alguna, pues, como infieles que eran, tenían nombres caprichosos y sus hijos o nietos al ser bautizados han adoptado otros nombres o apellidos, así es que es difícil formar el em-padronamiento de las familias en más de cuatro generaciones, máxime cuando los mismos interesados no saben quienes forman las familias de los descendientes primitivos propietarios.

Además nos encontramos con que, no existiendo sino desde 1893 la prohibición de adquirir terrenos de indígenas, aparecen títulos de compras a indígenas desde más de ochenta años, sin poderse precisar si los vendedores eran o no accionistas en lo que vendían y mucho menos saberse la proporción que les pudiera corresponder en la comunidad de lo que vendían.

Todas estas son dificultades casi absolutas para establecer la verdadera propiedad de los terrenos de los indígenas, así es que en cada caso debe el protector hacer un estudio penoso de todos los antecedentes de un terreno determinado y si del estudio resulta título que pueda establecerse en favor de los indígenas, se iniciarán las acciones procedentes.

Como se ve, la constitución de la propiedad indígena es en este departamento un problema completamente arduo por los caracteres especiales antes señalados, lo que no pasa en las provincias de la antigua Araucanía.

Por ahora el infrascrito solo ha podido iniciar juicios referentes a contratos celebrados por indígenas después de 1893, esto es, después de la prohibición legal para adquirirse terrenos de indígenas, contratos que han servido para arrebatar y reducir a la miseria a un gran número de indígenas del departamento de Osorno.

Con los antecedentes expuestos se verá que la misión de esta Oficina es penosa ¡por qué no decirlo! algo ingrata respecto a sus defendidos, pues estos se imaginan que el no iniciarles los juicios sobre títulos oscuros y con ninguna probabilidad de éxito es porque el Protector no quiere atender los intereses de los indígenas; también exigen una marcha rápida en los juicios pendientes, sin considerar los tropiezos que ponen sus contradictores en los juicios y los medios de que se valen para dificultar la defensa de los indígenas.

Concluyo manifestando que en el desempeño de mi cargo atiendo con todo interés y entusiasmo los derechos de los indígenas, sin preocuparme de otros intereses que pueda lesionar, pero también debo manifestar que no creo proceder honrado de una Oficina iniciar acciones improcedentes y en las cuales no hay posibilidad alguna de obtener resoluciones favorables; de ahí es que,

estimando que las adquisiciones hechas a los indígenas antes del año 1893 son perfectamente legales, me haya resistido a las peticiones de muchos indígenas de iniciar acciones fundadas en contratos celebrados antes de la fecha expresada.

Muchas veces los indígenas formulan cargos a esta Oficina porque no les ampara contra resoluciones de término de los Tribunales Superiores de Justicia, pero, siendo dichas peticiones ilegales y contrarias al orden público, no pueden ser atendidas y por consiguiente debo desoír los cargos que se formulan sin razón alguna.

Réstame, señor Inspector, agradecer la confianza con que esa Inspección General siempre me ha honrado y las facilidades que encuentro en esa Oficina para el debido desempeño de mi cargo.

Saludo a US.

Daniel Cerda A.

Osorno, marzo 16 de 1911.

1911
EULOGIO ROBLES
MEMORIA DEL PROTECTOR DE INDÍGENAS DE CAUTÍN[388]

Señor Inspector:

La naturaleza de los trabajos de esta Oficina la he detallado ampliamente en todas mis anteriores Memorias, como asimismo la conveniencia de la adopción de medidas administrativas y legislativas en pro de la defensa y de la civilización de los araucanos.

Por ahora me limitaré a exponer a usted datos estadísticos.

Se ha dado audiencia alrededor de dos mil indios.

Se han despachado mil diez piezas entre oficios a la Inspección, a la Comisión Radicadora de Indígenas, a la Intendencia y Gobernadores de la provincia y a autoridades subalternas.

Se han defendido cincuenta y siete causas, de las cuales se han fallado trece y de estas favorablemente, once.

He informado cincuenta y dos solicitudes.

He tenido el honor de concurrir a las sesiones de la Honorable Comisión Parlamentaria encargada de estudiar los ramos de colonización cuando se ha tratado de la reforma del régimen legal a que están sometidos los indígenas.

Para cooperar en la medida de mi escasa influencia a la civilización de los indios, he enviado el año pasado algunos jóvenes a la Escuela Agrícola de Chillán, siguiendo la costumbre de los años anteriores.

En el presente mandaré quince jóvenes a ese establecimiento.

Las tareas a mi cargo han sido más eficaces el año que transcurrió porque dispuse en él de los servicios de un ingeniero y de un agente judicial.

Saluda atentamente al señor Inspector.

Eulogio Robles Rodríguez

[388] "Memoria del Protector de Indíjenas de Cautin", en *Memoria de la Inspección Jeneral de Colonizacion e inmigración, 1911* (Santiago, Imprenta i encuadernación Ercilla, 1912), pp. 635-636.

1911
MANUEL LABBÉ
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS DE ARAUCO[389]

Lebu, abril 19 de 1912

Señor Inspector:

Tengo el honor de elevar a usted la Memoria del Protectorado de indígenas a mi cargo, correspondiente al año de 1911 próximo pasado.

El movimiento de la Oficina durante el año en memoria fue el siguiente:

Se oyeron 90 reclamos. Se dirigieron a la Inspección y a otras autoridades 83 notas y 16 telegramas. Se evacuaron 9 informes. Se dirigieron al abogado que tiene a su cargo ante la Iltma. Corte de Concepción la defensa de las causas de indígenas 37 cartas. Se tramitaron 36 causas civiles. Se dio término a 15 causas civiles. Y hay pendientes 21. Se tramitaron 26 apelaciones, hay pendientes ante la Iltma. Corte de Concepción 5, en la de Santiago 3, y en la Excma. Corte Suprema 1.

Los juicios terminados son los siguientes:

1. El del cacique Francisco Namoncura contra José de C. Méndez sobre amparo. Se dio lugar a la demanda del indígena con costas. Este juicio fue iniciado el 23 de diciembre de 1910 y terminó el 27 de febrero de 1911;
2. El del cacique Nicolas Calbullanca contra Nicolás Núñez sobre reivindicación. Se dio lugar a la demanda con costas, rescatándose como 60 cuadras de terreno. Se inició el 13 de julio de 1910 y terminó por sentencia ejecutoriada y cumplida el 1° de enero de 1911;
3. El del cacique Esteban Gevilao contra Nicanor Valenzuela por abandono de posesión. Se dio lugar a la demanda lanzándose de la posesión al usurpador. Se inició el 15 de julio de 1910 y terminó por sentencia ejecutoriada y cumplida el 13 de noviembre de 1910;
4. El de Pascual Colil contra Victorio Burgos sobre reivindicación. Se inició el 19 de octubre de 1909 y terminó por sentencia ejecutoriada y cumplida, dándose lugar a la demanda reivindicatoria de 20 cuadras en junio de 1911;

[389] "Memoria Protectorado de Indíjenas de Arauco", en *Memoria de la Inspección Jeneral de Colonizacion e inmigración, 1911* (Santiago, Imprenta i encuadernación Ercilla, 1912), pp. 623-631.

5. El del cacique Lorenzo Pilquiman contra Alfredo Salazar sobre reivindicación. Se dio lugar a la demanda mandándose entregar al indígena como cien cuadras de terreno. Se inició el 20 de marzo de 1909 y terminó el 12 de mayo de 1911;
6. El del cacique Juan 2º Marileo contra Manuel Oñate sobre abandono de posesión. Se dio lugar a la demanda lanzándose al usurpador de una extensión como de 50 cuadras de vega de excelente calidad. Fue iniciado el 15 de julio de 1910 y terminó el 13 de enero de 1911;
7. El de Saturnino Quintriqueo contra don Fidel Cáceres, sobre amparo. Se dio lugar a la demanda con costas. Se inició el 15 de julio de 1911 y terminó por sentencia ejecutoriada el 30 de agosto del mismo año;
8. El de Lucía Cayulao contra Saturnino Araneda, sobre restitución. Se dio lugar a la demanda con costas, restituyéndose a la indígena su pequeña posesión como de cinco cuadras de terreno de vega de excelente calidad. Se inició el 6 de junio de 1911 y terminó el 6 de noviembre de mismo año;
9. El de Luisa Cayupi y otros contra Abelardo Peralta, sobre nulidad de una escritura y reivindicación. Se dio lugar a la demanda con costas, rescatándose como seis cuadras de terreno de muy buena calidad. Se inició el 20 de mayo de 1911 y terminó el 8 de noviembre del mismo año;
10. El de Ramon Catrileo contra Abelardo Peralta sobre nulidad de escritura y reivindicación. Se dio lugar a la demanda con costas, rescatándose como doce cuadras de terreno de muy buena calidad. Fue iniciado y terminado en la misma fecha que el anterior;
11. El de Ramon Guirriman contra Abelardo Peralta, sobre nulidad de escritura y reivindicación. Se dio lugar a la demanda con costas. Fue iniciado y terminado como los dos anteriores en la misma fecha;
12. El de Luisa Cayupi y otros, sobre nulidad y reivindicación. Se dio término al juicio por transacción, aceptando la parte contraria para evitar costas la declaración de nulidad solicitada y la entrega del terreno. Fue iniciado el 30 de junio de 1911 y terminó el 23 de noviembre del mismo año;
13. El del cacique Lorenzo Pilquiman contra Ané y Pascual González, sobre reivindicación. Se dio lugar a la demanda con costas, rescatándose como cien cuadras de terreno. Se inició el 13 de abril de 1909 y terminó por sentencia ejecutoriada el 17 de diciembre de 1911;
14. El del cacique Lorenzo Lepin Millahual contra Jerónimo Aguayo, sobre reivindicación. Se dio lugar a la demanda con costas, rescatándose como quince cuadras de terreno. Fue iniciado el 15 de julio de 1909 y terminó el 23 de diciembre de 1911;
15. El del cacique Ignacio Huilipan sobre Sebastian Riffo, por cobro de pesos por perjuicios. En este juicio fue demandado el indígena por los perjuicios causados por el incendio de un roce que injustamente se le quiso hacer

responsable de él. No se dio lugar a la demanda con costas. Fue iniciado el 21 de diciembre de 1910 y terminó el 24 de diciembre de 1911.

Las causas que se tramitan son las siguientes:

1. La del cacique Lorenzo Lepin Millahual José Campelo, sobre reivindicación. Fue fallada en primera instancia favorablemente, encontrándose a la fecha en apelación;
2. La del mismo cacique contra Froilán Fernández, también sobre reivindicación. Fallada favorablemente en primera instancia. Actualmente en apelación;
3. La del cacique Juan Lincopan y otros contra Pedro Leal y otros, sobre reivindicación de casi la totalidad de los terrenos de que se compone la reducción, que consta de 400 hectáreas. Fue fallada en primera y segunda instancia favorablemente, encontrándose a la fecha en Casación ante la Iltma. Corte Suprema;
4. La del cacique Lorenzo Quintrileo contra José del C. Méndez, sobre reivindicación. Se encuentra en estado de alegar de bien probado;
5. La del cacique Juan 2º Marileo contra don José Campelo, sobre entrega de terrenos. Se encuentra suspendida por parte del demandante que es el señor Campelo;
6. La del cacique Manuel Alcaman contra la sucesión de don Félix Gajardo, sobre reivindicación de la totalidad del terreno que consta la reducción que es de 60 hectáreas. Se encuentra en estado de pronunciarse sentencia y será favorable a los indios;
7. La del cacique Juan Cayupi contra Antonio Fuentes sobre reivindicación. Se encuentra en apelación en la Corte de Santiago desde el año 1910.

   Sobre estas y otras causas que se hallan en apelación en dicha Corte, he hecho presente a la Inspección que es necesario se arbitre algún temperamento para que sean falladas, pues en el interés de los demandados esta en que permanezcan allí eternamente, por cuanto de esa manera podrán permanecer en la misma forma, eternamente, en posesión del terreno que sin título alguno les detentan a los indígenas. La Inspección prometió encomendar la defensa de esas apelaciones a alguno de los abogados de Colonización, a fin de que obtengan su pronto fallo.
8. La del cacique Pascual Coña contra J. Amador Arriagada, sobre reivindicación. Fue fallada favorablemente en primera instancia, y se encuentra a la fecha en apelación;
9. La del cacique Francisco Huelate contra Jovino Rojas y otros. Este justo fue iniciado en marzo del año en memoria contra trece individuos que detentan a la reducción de Huelate como 400 hectáreas de terreno; y desde poco después se encuentra suspendido de orden del señor Ministro de Colonización de esa época, señor Enrique Rodríguez;
10. La del cacique Andrés Porma contra Jacinto Ramírez, sobre cobro de mejoras. Se encuentra en apelación ante la Corte de Santiago; para resolver

acerca de un incidente sobre competencia suscitado entre los jueces de Lebu y Cañete;

11. La de Lucía Cayulao contra la sucesión de don Bernardino de Sena Araneda, sobre nulidad de una escritura de compraventa y reivindicación. Se encuentra en estado de contestar la demanda por parte de los demandados;
12. La del cacique Juan 2º Marileo contra Harismendy Hermanos y Larroulet sobre fijación de un deslinde. Se encuentra en estado de practicarse un peritaje;
13. La de Luis Hueuchunas con don Jorge G. Ebensperger sobre partición del fundo Copihue. Se encuentra en tramitación;
14. La de María Catrilelbun con Manuel Gallardo y otro, sobre nulidad de escritura. Se encuentra en estado de alegar de bien probado;
15. La de Juan Melin con Gregorio Saavedra y otro, sobre partición, se encuentra en tramitación;
16. La de Juan Lincoguir y otros con sucesión de Santiago Silva, y de don José Manuel Maldonado, sobre nulidad de escrituras de compraventa y reivindicación. Se encuentra en estado de fijarse por el Juez puntos de prueba por tachas de los testigos de la prueba principal;
17. La de José Macheo con Santiago Aguirre, sobre nulidad de escritura. Se encuentra en apelación en la Corte de Concepción;
18. Pascual Macheo Illiman con Filadelfo Salazar, sobre nulidad de escritura. Se encuentra en apelación en la Corte de Concepción;
19. La del cacique Esteban Yevilao con la de don Andrés Villagrán, sobre reivindicación como de cien cuadras de terreno. Se encuentra en estado de alegar de bien probado;
20. La de Pascual Millaleo con Juan Gastigar, sobre nulidad de unas diligencias sobre nombramiento de juez compromisario. Se encuentra suspendida; y
21. La del cacique Lorenzo Pilquiman con Francisco Leal, sobre reivindicación. Se encuentra suspendida.

Desde junio del año en memoria ha contado la Oficina con un agente judicial, el que ha prestado positivos servicios a la labor realizada por el Protectorado.

Su concurso será mucho más eficaz aún durante el presente año por cuanto, habiendo fijado la inspección la residencia de la Oficina principal en esta ciudad, el Agente Judicial se ha radicado en Cañete para que allí atienda a la tramitación de los juicios que se ventilan ante el Juez de ese departamento y oiga y trasmita al infrascrito los reclamos que se interpongan por los indígenas.

Se hacía ya necesario, mejor dicho, indispensable, el que el Protectorado tuviese su residencia en la capital de la provincia pues eran numerosos los reclamos de indígenas que había necesidad de atender y hacerlos efectivos ante la justicia, presentando las demandas respectivas.

Ya en Cañete, durante los dos años y medio que ha actuado el infrascrito en el Protectorado, se ha hecho una labor bastante fructífera pues se han iniciado más de treinta juicios y obtenido resultado favorable en la mitad más o menos, esperándose reobtener el mismo éxito en los restantes, y era conveniente por lo tanto que igual o parecido resultado se procurase obtener en este departamento, donde también los indígenas han sido el bocado apetitoso de los tinterillos y de los poco escrupulosos vecinos que se han adueñado a poco costo, a ninguno en muchos casos, de la casi totalidad de los terrenos de indígenas.

Por otra parte, era lógico y natural que esta Oficina de tanta importancia no tuviese su asiento en Cañete, sino que en la cabecera de la provincia, sobre todo cuando el servicio no se resiente en absoluto con la actuación que hace el Agente Judicial en aquel departamento.

Debo insistir, como lo he hecho en otras memorias, en la petición de que se provea a este Protectorado de un ingeniero, que necesita, ya no tanto para que dé la ubicación, mensura y deslindes de los terrenos que se habían de reivindicar, pues el infrascrito de la manera como pudo se proporcionó aquellos datos, sino que para proceder a la división de las distintas reducciones que existen al sur del río Paicaví y que ya no tienen discusión con terceros sobre la posesión o dominio de alguna extensión de terreno.

Esta división es indispensable se haga, por cuanto el régimen de comunidad en que viven a la fecha los indígenas en extensiones muy limitadas de terreno y apenas suficientes para que con su labor agrícola puedan sustentarse los diversos individuos de que se compone una reducción, es de una inconveniencia probada, por cuanto ella da origen a frecuentes disputas y a veces a riñas, más o menos agrias, que no siempre puede resolver administrativamente el Protector.

Sin duda este grave inconveniente se subsanaría dividiendo el terreno de cada reducción entre las distintas familias de que cada una se compone, asignándole proporcionalmente la parte que le corresponda.

En estas divisiones intervendría el infrascrito de acuerdo con lo resuelto por el Ministerio de Colonización que esa Inspección puso en mi conocimiento por oficio núm. 212 de fecha 5 de enero último.

En el departamento de Cañete habría no menos de veinte reducciones en estado de que se les divida los terrenos en que están radicados.

Antes de concluir, creo de mi deber hacer presente a usted que en enero del año próximo venidero caduca la ley de enero de 1903 que prorrogó por diez años la prohibición que contenía la ley de 1893 de adquirir por los particulares terrenos de indígenas dentro de los límites señalados por el art. 6 de la ley de 4 de agosto de 1974, ampliada por la de 30 de enero de 1883.

En consecuencia, si durante el corriente año el poder legislativo no dictare la ley que hay tanto tiempo en estudio sobre la constitución y defensa de la propiedad indígena o no prorrogase por otro lapso de tiempo la prohibición contenida en la ley próxima a expirar, los indígenas quedarían sometidos como todos los demás habitantes del territorio nacional, en lo referente a la venta y

demás contratos que puedan celebrarse, en conformidad a nuestras leyes sobre sus propiedades, al fuero común.

Dios guarde a Ud.

Manuel A. Labbé

1911
JAVIER ARRIETA
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS DE MALLECO[390]

Señor Inspector General:

Tengo el honor de presentar a US. la Memoria del Protectorado de Indígenas de Malleco, correspondiente al año 1911.

Movimiento de la Oficina

No obstante la circunstancia de haber sufrido la Oficina, en el año pasado, las consiguientes perturbaciones que ocasiona siempre el cambio de Jefe, el movimiento ha sido superior al de 1910.

Prueba de ello es la siguiente clasificación de piezas que paso a hacer con su correspondiente enumeración:

1. Oficios dirigidos a la Inspección General y diversas oficinas públicas o autoridades	230
2. Informes evacuados de orden superior	10
3. Reclamos de indígenas atendidos	415
4. Comparendos celebrados	42
5. Ordenes impartidas al Ingeniero	25
6. Escritos presentados a los Juzgados de letras	103
7. Juicios iniciados en 1911	8
8. Juicios en tramitación	32
9. Informes expedidos por el Ingeniero	25

La población indígena de la provincia alcanza a cerca de 12.000 individuos, los que en su mayor parte viven en la miseria más espantosa, miseria que tiende de poco a poco a desaparecer, gracias a la protección enérgica y eficaz de este Protectorado que en los tres años de vida que lleva, ha conseguido rescatar por la vía judicial, para sus protegidos, grandes extensiones de terreno, y por la

[390] "Memoria del Protectorado de Indíjenas de Malleco", en *Memoria de la Inspección Jeneral de Colonizacion e Inmigracion, 1911* (Santiago, Imprenta i encuadernación Ercilla, 1912), pp. 611-620.

vía administrativa ha impedido que chilenos siembren en medias o celebren contratos usurarios con indígenas, contratos y medierías que han sido y serán siempre un medio positivo de explotar al pobre indio.

A este respecto, el infrascrito ha notificado a todos los caciques de las reservas de la provincia, prohibiéndoles terminantemente y bajo apercibimiento de tomar enérgicas medidas en su contra, que admitan a chilenos en sus reservas, sea a título de medieros o de inquilinos, o de arrendatarios, etcétera.

Personal de empleados

El personal de empleados se completó solamente en el mes de mayo, fecha en que fueron nombrados un ingeniero y un agente judicial, empleados que eran de imprescindible para el correcto funcionamiento de esta Oficina.

En consecuencia la Oficina consta hoy del Protector infrascrito, que se hizo cargo de ella a fines del mes de septiembre último, de un ingeniero, de un agente judicial, un escribiente, y de un portero-intérprete, con cuyo personal se basta a sus necesidades del momento.

Mobiliario de la oficina

Como la mayoría de las oficinas fiscales, esta cuenta apenas con los muebles y útiles más indispensables.

Se deja sentir en forma imperiosa la falta de amoblados para las salas del Ingeniero y del Agente Judicial.

Pero lo que se hace sentir en forma tal que reclama su inmediata dotación, es una máquina de escribir.

Con las disposiciones vigentes del actual Código de Procedimiento Civil, la mayor parte, por no decir casi todos los escritos que se presentan en juicios ante los tribunales de justicia, necesitan que vayan acompañados de copias.

Pues bien, con la facilidad que presentan las máquinas de escribir para sacar una o varias copias al mismo tiempo que se escribe el original, se ahorraría un tiempo precioso que ahora se pierde por carecer de tan útil elemento.

Labor judicial

La labor judicial de la Oficina se hace un tanto dificultosa en razón de las múltiples incidencias que formulan los detentadores de tierras de indígenas amparados la mayor parte de las veces por tinterillos inescrupulosos pero aunque tardíamente la justicia se abre paso y obtienen por fin los indígenas las tierras que se les han arrebatado.

A fines del año último se logro el fallo favorable de unos siete juicios de importancia que se ventilaban ante el Juzgado de Letras de Angol y si bien algunos de ellos han ido en apelación ante la Iltma. Corte de Concepción, a petición de la parte contraria, no han faltado algunos litigantes vinculados en esos juicios que han desistido de dicho recurso de su infructuosidad pues la Corte confirma invariablemente esas sentencias.

En algunas de esas sentencias aludidas, ha quedado sentado en el Juzgado de Letras de esta ciudad un precedente respecto de las transferencias de dominio de terrenos de indígenas situados al Norte del río Malleco, cuando ellas han sido extendidas sin la aquiescencia o intervención de Protector de Indígenas respectivo. Se declararon nulas esas escrituras en dos juicios seguidos en igual forma, uno contra don Federico Lermanda y el otro contra la sucesión de don Emilio Uribe, restituyéndose a los indígenas demandantes, junto con sus tierras, los frutos producidos durante el goce indebido de ellas.

Se tramitan actualmente ante los diversos Juzgados de Letras de la provincia 32 juicios, todos de grande importancia atendida su cuantía y tendientes a recuperar para los indígenas extensos suelos ocupados indebidamente por particulares.

Entre esos juicios, y tal vez el más importante, es el iniciado por don Ernesto Lagos como mandatario de doña María Luisa Edwards, ante el Juzgado de Letras de Mariluan en contra de los indígenas de la reserva del cacique Domingo Trangol. Ese juicio fue iniciado por el señor Lagos en el mes de agosto, y en la demanda pretende reivindicar para su mandante una gran porción de terreno que actualmente ocupan esos indios.

Como sabe el señor Inspector General, la cuestión que da origen al juicio data de muy antiguo, y en ella han intervenido varios altos funcionarios con el fin de llegar a un acuerdo con la sucesión Edwards, sin que hasta la fecha se haya conseguido nada.

La notificación de la demanda se hizo al infrascrito en los mismos momentos que se hacía cargo de este Protectorado, y como era natural, cuando no contaba todavía con ningún medio de defensa, ni datos, pruebas, etc. para contestar debidamente esa demanda.

No tuve otro camino, para ganar el tiempo necesario para reunir dichos medios y pruebas, que deducir un valiente artículo dilatorio fundado en falta de personería del demandante señor Lagos. Gracias a ese artículo se consiguió enviar el expediente en apelación a la Iltma. Corte de Concepción, y paralizar por consiguiente la marcha del juicio principal.

Todo el tiempo que se ha ganado con la interposición de ese artículo, lo he destinado a reunir los antecedentes de mi defensa; al efecto hice, asesorado del Ingeniero del Protectorado, una visita ocular a los terrenos en litigio, pedí a la Comisión Radicadora de Indígenas a Temuco los títulos y planos oficiales de la reserva, y dirigí a esa Inspección General dos notas pidiendo datos, norma de conducta y órdenes, etc., para mejor resolver esta vieja cuestión.

La visita ocular a la reserva, con el título y plano a la vista, me llevó al ánimo el convencimiento que al radicar los indígenas donde lo fueron, se hizo con falta absoluta de criterio, y con falta absoluta de justicia, porque el terreno que se les dio en nombre de la República no era el que ocupaban, no era el suelo en donde tenían sus rucas y sus siembras desde tiempo inmemorial, sino otro contiguo y que ellos jamás habían usufructuado.

En su ignorancia, los pobres indios se creen dueños del nuevo terreno que la Comisión Radicadora les entregó y del antiguo que poseían y en el que, como decía más arriba, hoy tienen y siempre han tenido sus chozas o rucas.

Como consecuencia lógica de esta injusta radicación, los indios tendrán necesariamente que abandonar ese antiguo terreno que han poseído cambiando sus rucas al suelo en que fueron radicados, y esto no será tarea fácil porque hay indios que preferirán dejarse matar antes que abandonar los terrenos que han heredado de sus mayores. Finalmente, señor Inspector General, no he podido explicar el por qué de esa injusta radicación.

Lo lógico, lo justo, lo legal habría sido radicar a los indígenas en el suelo que gozaban en el momento de la radicación, suelo que han explotado de generación en generación y que, obvio es decirlo, ellos lo creían suyo, por derecho propio. Pero como dejo dicho, no paso así, y al radicárseles en otra parte, se sacó a remate el año 1893 como terreno fiscal lo que ellos antiguamente poseían, adjudicándose ese terreno a la sucesión Edwards, propietaria entonces del fundo Huillinlebu, y hoy de propiedad de la señora María Luisa Edwards, demandante del juicio a que me refiero. En este estado está el litigio, y cuando en los primeros días de marzo próximo acompañe en la contestación a la demanda el plano Oficial que me envió la Comisión Radicadora, no haré otra cosa que dejar de manifiesto la justicia del demandante, porque dicho plano no reconoce que sea terreno indígena el suelo que se reivindica.

Comprendo, señor Inspector General, que la sentencia desfavorable a mis protegidos que se pronuncie en este juicio hará eco, y no dudo que individuos que no estén al cabo de lo que dejo expuesto pueden hacer caer la responsabilidad en el infrascrito, pero bien sabe US., que tal responsabilidad no me afecta, según se desprende, tanto de la presente exposición cuanto por lo dicho en mis oficios núm. 133 y 145, de fechas 30 de septiembre y 7 de octubre de 1911, respectivamente, dirigidos a esa Inspección General.

Un asunto interesante ligado con la mayor o menor intensidad de la labor judicial de este Protectorado es el que se refiere a lo difícil que es efectuar las notificaciones de los juicios y gestiones que se tramitan por la insuficiencia de la asignación que se da para este objeto.

Labor administrativa

Por la vía administrativa puede la Oficina subsanar muchas dificultades que se suscitan entre los indígenas, en forma rápida, y aun reparar muchos abusos que

se cometen con ellos, si de parte de las autoridades administrativas o judiciales de menor cuantía encontrara siempre buena voluntad, pero, por desgracia, no ocurre generalmente que esos funcionarios cumplan todos con su deber.

Jueces de Subdelegación hay como el de Purén, que también es Oficial Civil, de quien la Oficina no ha podido conseguir justicia para ciertos indígenas, por causa de mantener dicho funcionario negocio de siembra a medias con los propios indígenas, y aún más, según informe del Ingeniero, ocupar indebidamente terreno de propiedad de indígenas en contravención abierta con las claras y concluyentes leyes que rigen actualmente la propiedad indígena.

En cambio, si es necesario dejar constancia de los funcionarios que faltan a sus deberes, justo es reconocer la obra de los que ponen al servicio de la defensa de los indígenas todo el contingente de su autoridad, así como el concurso personal de su probidad y de su talento. Importaría no reconocer ese trabajo si no enumerara a todos los gobernadores de la Provincia, especialmente al de Collipulli y algunos subdelegados como el de Perquenco, y a otros muchos funcionarios que coadyuvan admirablemente a la acción del Protectorado.

Para hacer más efectiva la acción administrativa de esta Oficina, se hace sentir la necesidad de que se ponga a disposición del Ingeniero fuerza de Carabineros porque hoy por hoy, los particulares tenedores de los terrenos de indígenas y éstos, azuzados por los primeros, no acatan las resoluciones sobre deslindes, particiones, etc., que aquel funcionario efectúa, y llegando hasta el extremo de amenazarlo poniendo en peligro su vida.

Urge que esa Oficina Superior recabe del señor Ministro del Interior el auxilio de la fuerza de Carabineros para el mejor desempeño de las funciones encomendadas al Ingeniero del Protectorado.

Instrucción indígena

Si algo falta en la provincia para completar la obra de protección a la raza araucana, son escuelas destinadas exclusivamente a los niños indígenas.

En los cuatro extensos departamentos de que consta esta provincia, con una población indígena mayor de *diez mil* habitantes, no hay un solo plantel destinado a este objeto.

Es cierto que es difícil la instalación de escuelas, porque ahora los indígenas no viven como antes reunidos en grandes reducciones, sino que agrupados en pequeños caseríos, que día a día se diseminan más y más en razón de las divisiones de las comunidades que es necesario hacer, a solicitud de ellos mismos, para evitar las constantes rencillas que se promueven entre unos y otros.

Sin embargo, hay centros como Galvarino, Lumaco, Purén, Perquenco, y otros en que fácilmente podrían edificarse localidades para establecer escuelas mixtas de niños indígenas.

Sobre este particular, recomiendo a US. y por su intermedio al Supremo Gobierno, el Informe que el señor Visitador Titular de Escuelas de Malleco,

don Isaías Venegas, ha pasado a la Inspección del ramo con fecha siete de febrero último.

Es un documento en que se estudia este problema con mucha lucidez y con gran caudal de ideas, y en el que se propone al mismo tiempo la forma de resolverlo. Estimo indispensable hacer algo en el sentido indicado, pues la ignorancia en que permanecen es tal que muchos apenas saben cómo se llaman.

Sueldos

Antes de terminar la presente Memoria me permito manifestar a US. lo exiguo que son los sueldos que gozan los Protectores de indígenas y sus subalternos, exigüidad que se ha hecho más resaltante hoy con las leyes últimamente dictadas, y que aumentan sus sueldos a los empleados de Telégrafos y al Ejército. Según la nueva ley, un sargento, que es un individuo sin ilustración alguna, gana 200 pesos mensuales, y un Protector de Indígenas, que debe ser abogado y que pesa sobre sus hombros una enorme responsabilidad, gana solo 291 pesos mensuales.

Para poner más de manifiesto la exigüidad de nuestros sueldos, basta solo recordar que el año 1866 el Protector ganaba igual sueldo que el Juez Letrado de capital de provincia, y que hoy este funcionario gana 12.000 pesos al paso que el Protector de Indígenas disfruta del mismo sueldo que le asignó esa ley de 1866.

Sería un acto de estricta justicia que el Supremo Gobierno presentara al Congreso un mensaje a fin de mejorar la angustiosa situación de los empleados de los Protectorados de Indígenas.

También creo indispensable llamar la atención de US. respecto de la exigüidad de los viáticos que se asigna a los empleados de esta Oficina.

El Protector goza actualmente de diez pesos diarios de viáticos cuando por razón del servicio necesita salir fuera de su residencia. Con esa suma, fácil es comprenderlo sin necesidad de entrar en consideraciones, ya que el encarecimiento actual de la vida aumenta en forma alarmante día por día, no alcanza a subvenir a sus gastos más indispensables.

Pues si difícil le es al Protector poder atender a sus tareas en la forma más modesta y económica posible, mucho más lo es para el Ingeniero y el Agente Judicial, que tienen una asignación de cinco pesos diarios como viáticos, con cuya suma es verdaderamente imposible que puedan sostener los gastos que se originan, viéndose por la fuerza de las circunstancias en la necesidad de invertir en ellos una gran parte de sus modestos sueldos.

Haría US. obra de verdadera equidad si se empeñara por que se aumentara sus viáticos a los empleados del Protectorado, aunque este aumento comprendiera solo a los empleados subalternos.

Concluyo, señor Inspector General, asegurando que mis actos y procedimientos han estado y estarán siempre inspirados en estricta justicia, lo que prueba que mi norma de conducta es el recto cumplimiento de las funciones de mi cargo.

Me es grato saludar al señor Inspector General con la más debida consideración.

Javier L. Arrieta S.

Al señor Inspector General de Colonización e Inmigración, Santiago.

1911
CARLOS G. IRRIBARRA
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS DE VALDIVIA[391]

Valdivia, junio de 1912

Señor Inspector:

Muy poco tenemos que agregar a lo que hemos dicho en nuestros anteriores memorándums anuales.

No podríamos afirmar que hemos agotado la materia relativa a la constitución y defensa de la propiedad indígena, pero creemos haber tratado la cuestión de un modo práctico.

Desde que nos hicimos cargo del Protectorado de Indígenas hemos venido señalando los inconvenientes y deficiencias de las leyes sobre la materia y presentado observaciones francas y bien intencionadas con la pretensión de allegar antecedentes para una nueva ley.

Hemos estudiado el problema con criterio amplio por cuanto hemos abogado por leyes que amparen los intereses de los indígenas, de los particulares y del Fisco.

La sensiblería es un pésimo legislador. El cerebro legisla mejor que el corazón.

Las leyes deben fotografiar un estado de cosas, una situación, una época; de lo contrario, son artificiales.

Desentenderse de un conjunto de circunstancias obedeciendo al propósito de proteger un grupo o colectividad más o menos grande, importa una injusticia irritante.

Es así como se crean situaciones anormales, situaciones de choques por los que defienden, con el arma al brazo y la imprecación en los labios, sus derechos que la ley desconoció.

El respeto y el prestigio de las leyes perdura cuando han sido inspiradas por un sentimiento de relativa justicia. Las leyes de excepción son impuestas en razón de acontecimientos casi siempre precursores de épocas de transición.

Nos encontramos precisamente en una época de transición que comenzó hace más de veinticinco años y que reclama la derogación de las leyes de ex-

[391] "Memoria del Protectorado de Indíjenas de Valdivia", en *Memoria de la Inspección Jeneral de Colonizacion e Inmigracion, 1911* (Santiago, Imprenta i encuadernación Ercilla, 1912), pp. 638-654.

cepción. Se impone legislar sobre la base del respeto absoluto a los derechos adquiridos.

La ley prohibitiva de 11 de enero de 1893 llegó tarde, en plena transición.

El legislador de 11 de enero de 1893 no estudió, puede decirse, el organismo de la provincia de Valdivia, tan especial, tan sui generis, se limitó a hacer extensiva a ella leyes y decretos que las costumbres, situación, exigencias, etc., reclamaron otras zonas y otros tiempos.

Vino la ley sobre prohibición de adquirir terrenos de indígenas cuando estos y particulares estaban ya en posesión de mil títulos de dominio de cuerpos ciertos y especialmente de cuotas.

Las numerosas escrituras públicas permanecieron silenciadas, ignoradas para muchos, como los metales preciosos en las entrañas de la tierra, en espera de un rayo de sol deslumbrar al que los descubre.

El progreso inusitado de esta región despertó por los terrenos; la propiedad empezó a constituirse.

Se inició entonces una verdadera peregrinación al Areópago[392], el Protocolo del Notario, que dormía sumido en la indiferencia y en el polvo.

Cada cual quería consultarlo, ávido de descubrir alguna escritura que por cualquier motivo le otorgara un derecho a algún predio.

Es problema difícil la constitución de la propiedad indígena en esta provincia porque, si no estamos en un error, hace apenas seis años que la Comisión Radicadora está ocupada en la dación de títulos de merced a los indígenas.

Nadie como su digno Presidente, señor Leoncio Rivera, conoce las innumerables dificultades que se oponen a la radicación.

Los indígenas, se dice, vivían tranquilos y en posesión de extensiones más o menos grandes de terrenos que les fueron usurpadas por los particulares.

Hemos sostenido y seguimos afirmando que gran número de indígenas han sido perseguidos y despojados de sus posesiones, entiéndase bien, de sus posesiones, con verdadera brutalidad, pero con mayor estudio hemos modificado nuestro criterio en el sentido de que no solo los particulares, sino los propios indígenas y aun el Fisco mismo han quitado o estrechado a los indígenas en sus posesiones.

Los inconvenientes que encuentra la radicación de estos tiene natural explicación.

Cuando la ley prohibitiva de 11 de enero de 1874 se hizo extensiva a esta provincia, ya muchos indígenas y numerosos particulares habían adquirido por escrituras públicas miles de hectáreas de tierra.

Es aquí donde está la explicación de toda dificultad.

El indígena, inquieto como es y sin saberlo, ocupó o continuó ocupando un predio que sufría el dominio de un particular o de otro indígena.

[392] Símil con el tribunal supremo de la antigua Atenas.

El escasísimo valor de la propiedad hizo que los dueños indígenas o particulares toleraran la posesión de extraños.

Llegó la Comisión Radicadora a llenar su cometido, cuando la propiedad se constituía, a virtud del aumento del valor que le dieron diversos factores.

Gran número de indígenas que habían creído vivir en terrenos que nadie podía disputarles, fueron vencidos por particulares y por indígenas en juicios aparejados con títulos irredargüibles[393].

Como se ve, no solo los particulares dificultan la operación de la radicación sino los propios indígenas, porque estos y aquéllos creen defender sus derechos adquiridos.

Basta, dice la ley, la posesión de un año para dar derecho al indígena a exigir título de merced.

Esta disposición habría podido aplicarse casi sin obstáculos si las radicaciones hubieren sido practicadas 35 o 40 años antes.

La oportunidad fue el factor que permitió que la propiedad indígena en las provincias de Arauco, Malleco, etc., haya sido constituida sin inconvenientes apreciables.

Las inmensas extensiones de tierras absolutamente despobladas o pobladas por solo indígenas y el reducido número de títulos de dominio sobre ellas favorecieron en las citadas provincias la radicación de los naturales a quienes bastó probar la posesión que exige el precepto legal que nos ocupa.

Sigamos por un momento a la Comisión Radicadora y presentémosla actuando en el terreno y dentro de nuestra jurisdicción.

Llenados por los indígenas interesados los requisitos que exige la ley de 4 de diciembre de 1866 para proceder a la radicación, algunos de los poseedores colindantes, particulares o indígenas, citados para la operación de conformidad al art. 7 de la mencionada ley del 66, exhiben a la Comisión un título de dominio del todo o de una cuota del predio dentro del cual opera.

Con la escritura pública se oponen a la radicación alegando dominio del terreno que se trata de entregar al agraciado.

Suele ocurrir también que el terreno que se entrega al radicado no solo sufre el dominio de un tercero sino que este tiene además posesión en parte de él.

Conocemos planos que la Comisión Radicadora ha entregado a los interesados en los cuales se deja explícita constancia de que de las 35 hectáreas, por ejemplo, que reza el título de merced, hay 15 o más ocupadas por un particular con título.

Indígenas han venido a nuestra Oficina a protestar exhibiendo escrituras públicas de que dentro de sus compras hayan sido radicados, ellos y otros naturales a quienes no reconocen derecho alguno.

Tenemos compras, dicen, o rechazamos la radicación o exigimos que se nos entregue en conformidad a nuestros títulos.

[393] = indiscutibles, indisputables.

Ya hemos dado cuenta de juicios iniciado por indígenas solicitando el lanzamiento de los radicados por la respectiva Comisión y pidiendo la nulidad de lo obrado por ésta.

Viajemos un poco más con la Radicadora hasta presentarla anulada en su labor por los juicios de compromisos.

Se encuentra esta actuando en un fundo donde hay, por ejemplo, 20 indígenas y seis particulares, diez de aquéllos han vendido sus acciones y derechos (antes de 1893) a éstos, los cuales han tolerado que sus vendedores continúen dentro del predio.

La Comisión radica a los 20 indígenas, pero los particulares, en defensa de sus intereses, provocan la partición del fundo y los diez vendedores son lanzados porque el partidor en su laudo no les reconoció como accionistas.

Los otros diez indígenas que no han vendido aplauden este resultado y, haciendo caso omiso de la radicación, acogen a los beneficios del juicio de partición.

Los lanzados ocurren en solicitud de amparo a nuestra Oficina.

Vamos con la Radicadora a otra finca cuya cabida es de 200 hectáreas y donde hay 2 familias de indígenas con 21 miembros en todo y 4 particulares; éstos, con sus títulos de cuotas, provocan la partición, cuyo laudo acuerda 33 hectáreas para cada familia o troncos indígenas, esto es, 66 y 132 para los cuatro particulares.

Impuestos los indígenas de lo que les cupo en el predio partido, ocurren al Protector a quien exponen que se oponen a la partici**ó**n exigiendo se les radique porque la radicación les acuerda a lo menos cinco hectáreas por cada miembro de la familia, o sea, 105 hectáreas.

Trasladémonos a otro predio que mide 120 hectáreas y donde viven cinco indígenas jefes de familias aun no radicados y un particular con título de cuota. Provocado por este el juicio divisorio, se acuerda sacar a remate el fundo por no aceptar cómoda división, por cuanto no es posible subsistir explotando 20 hectáreas de terreno.

El subastador lanza a los indígenas y estos toman camino del Protectorado a solicitar amparo y su radicación.

Continuemos un poco mas. En un fundo existen indígenas y particulares con títulos de cuotas e indígenas con su posesión como único título. Provocada la partición del predio, los simples poseedores rechazan el juicio de compromiso y los otros lo aceptan.

Los descontentos traen sus pretensiones a nuestra Oficina solicitando se les radique.

Caminemos aún más. Durante la tramitación de un juicio divisorio, el partidor exige a los accionistas del fundo concurran con dinero para los gastos (avisos, notificaciones, honorario de perito mensurador, tasador e hijuelador, honorario del juez compromisario, etc.).

Sin recursos pecuniarios, los comuneros acuerdan sacar a remate un lote de terreno, que denominan hijuela pagadora.

El comprador de ella exige judicialmente la entrega de esa hijuela y viene el lanzamiento del que la ocupaba.

Si el lanzado es indígena, llega hasta nosotros en petición de amparo.

Un poco más todavía. Con motivo de la hijuelación de un fundo en partición, algunos indígenas son privados de parte de sus limpias o mejoras y aun de sus casas.

Rechazan esta operación y nos solicitan nuestros servicios. La Comisión Radicadora fue llamada, pues, a actuar en terrenos poseídos por indígenas sin títulos de dominio. El título de merced que se da a estos en nombre de la República no concede terrenos, no hace sino documentar un hecho, la posesión. No se radica en terrenos baldíos del Estado; los indígenas no reciben nada del Fisco: por el contrario, este quita a aquéllos; pues con la radicación los estrecha, los limita en sus posesiones para adquirir el sobrante.

Tan es así que en derecho, pero solo en derecho, las concesiones a Sociedades Colonizadoras están subordinadas a la radicación del indígena.

La operación de radicar no cabe, pues, donde existen títulos, porque sería previo la anulación de estos para la dación de otros.

Precisamente a la existencia de títulos de dominio anteriores a la ley prohibitiva en poder de particulares y de indígenas se debe que la dación de títulos de merced a los indígenas sea, en muchos casos, un "presente griego"[394].

Absoluta razón nos ha asistido entonces para afirmar que la ley prohibitiva de 11 de enero de 1893 llegó tarde y más tarde su complemento, la radicación.

Mientras más estudiamos esta provincia más singularidades tenemos que señalar.

Sin embargo de que en la zona comprendida entre el límite norte de la Subdelegación de San José y el río Toltén, antes departamento de Imperial, comenzaron a regir las leyes prohibitivas de 4 de diciembre de 1866 y 4 de agosto de 1874 hace más de cuarenta años (salvo un pequeño lapso), existen títulos que han dado margen a juicios que aún se tramitan en contra del Fisco y en los cuales se ventilan cientos de miles de hectáreas.

Preguntamos: fallados esos pleitos a favor de los particulares, ¿qué quedaría de las radicaciones de indígenas operadas dentro de la zona en litigio?

Sub lites[395] como están esas grandes extensiones de tierras. ¿Cómo defender a los indígenas, radicados o no, que reclaman nuestros servicios en contra de los pretendidos dueños? Defendemos solo juicios posesorios[396].

Nos atrevemos a contestar la primera pregunta. Vencido el Fisco en los juicios, las sentencias no afectarían a los indígenas, radicados o no, porque ellos no han sido demandados y poseen por sí y no a nombre del Fisco, y éste, como

[394] Es decir, que trae más problemas que beneficios (en alusión al caballo de Troya, engaño que conciben los griegos contra los troyanos).

[395] = lat.: sujetas a litigio.

[396] Juicios en que se determina la posesión del terreno.

venimos sosteniendo, no es dueño en el territorio indígena sino de lo que quede después de terminada la radicación.

En nuestro concepto, las acciones debieran iniciarse contra los poseedores; el Fisco en este caso no es legítimo contradictor.

Doctrina es esta que está corroborada con lo que ocurre en las demandas contra los indígenas.

Si tuviera interés el Fisco, se oiría a su representante.

El Fisco tampoco es comunero con el indígena, como se cree, porque si lo fuera, sería adjudicatario de hijuela en toda partición. Tan no es coaccionista o comunero, que de las apelaciones que se deducen contra el laudo conoce la Iltma. Corte de Valdivia.

Volviendo sobre los juicios de compromisos, es menester dejar apuntada aquí cuál es nuestra actitud como Protector.

Con motivo de la partición del fundo Riñinahue, nos hizo su víctima un seudónimo de un importante señor de publicidad de Santiago y nos llamó asalteadores de indios.

Deploramos que estos asuntos no se traten con seriedad y sin cálculo. Deseamos para la prensa de nuestro país todo el prestigio a que es dable aspirar.

Hace tres años pensábamos que era de nuestro deber oponernos o por lo menos estorbar toda partición que afectara a los intereses cuya defensa tenemos.

Conseguíamos con recursos dilatorios alejar la fecha del laudo y nada más.

Luego nos convencimos de que nuestro temperamento no era práctico y perjudicábamos a nuestros defendidos.

Para cambiar de frente consideramos la lentitud con que se efectúa la radicación, debido a las mil dificultades y a lo reducido del personal que opera.

Si supiéramos que la Radicadora terminaba sus funciones en esta provincia en dos años más, nos esforzaríamos por cruzarles el camino a los juicios divisorios de predios con poseedores indígenas.

De este modo conseguiríamos que la Comisión Radicadora llegara a tiempo a actuar.

Creemos no equivocarnos si sostenemos que la dación de títulos de merced en la provincia de Valdivia es obra de seis a ocho años más.

Trascurrido este lapso habría ocurrido que numerosos indígenas no conservarían tierras por ningún título. Hoy por hoy, defendemos las posesiones de los indígenas dentro de los juicios de compromisos y logramos obtener se les considere como accionistas y se les adjudiquen hijuelas no obstante de no tener otro título que la simple posesión.

En ocho años más el aumento natural del valor de la propiedad hará que se discutan los derechos con mayor egoísmo de parte de los accionistas con títulos de merced.

En presencia de una partición que no podemos impedir debemos hacer valer en ella los derechos de posesión de los indígenas y no cruzarnos de brazos en espera de la llegada de la Comisión Radicadora.

Si se respetan los derechos de los indígenas dentro de un juicio divisorio, no divisamos la causa o motivo ni aun la ventaja para oponernos a que entren los naturales como accionistas.

La oposición a un juicio divisorio no debe ser sistemática. Por otra parte, ¿cómo impedir una partición provocada por un accionista que exhibe un título inatacable?

Nuestro Código Civil estatuye que nadie está obligado a permanecer indiviso.

Los antecedentes expuestos nos han aconsejado nuestra actitud y continuaremos observándola hasta que se nos indique otro camino por nuestro jefe.

La multiplicación de las particiones es un fenómeno que hoy no debe alarmar porque atravesamos por una época en que la propiedad se constituye. La división y subdivisión de la propiedad es signo de buenos tiempos. La radicación de los indígenas y los juicios de partición precipitan la constitución de la propiedad.

Para contribuir a este progreso que se opera con factores tan encontrados, es ya tiempo que se liberalicen las leyes protectoras de los derechos de los indígenas, ya que aún no es oportuno abandonar a estos al derecho común.

Despojarles lo absoluto a las leyes prohibitivas para darles carácter de relatividad significaría un gran paso.

Los tiempos de transición en que vivimos exigen nueva legislación de indígenas.

Abogamos una vez más por que en cualquier forma se liquide esta situación de dudas y de intranquilidades que, devorando las iniciativas y energías, estancan el progreso.

La Oficina a nuestro cargo ha tenido a su servicio durante el año pasado al señor Leónidas Soto C.

Este caballero, como ingeniero del Protectorado, ha llenado una necesidad reclamada por las exigencias del servicio.

En efecto, a diario se nos traen reclamos referentes a deslindes, a encuentros entre comuneros, etc.

La labor de este empleado ha sido eficaz y ha trabajado con todo empeño e interés.

Esto se comprueba con el memorándum que trascribimos a continuación.

Señor Protector:

Llegué a esta ciudad a hacerme cargo del puesto que desempeño, en julio del año pasado.

En agosto me dirigí a distintos puntos de la provincia de donde provenían reclamos de indígenas para dar los informes que usted se sirvió pedir al infrascrito, en el carácter de Ingeniero del Protectorado.

El instrumento de ingeniería que más usé en mis operaciones, porque tiene una Declinatoria Sanguett de primer orden, es un taquímetro centesimal francés, con divisiones auto-reductoras y altimétricas grabadas por Khranass.

A veces me bastó aparatos sencillos como la Brújula Katter, el Prisma Salmoraighi, un Pantómetro, etc., etc. Creo conveniente comunicar a usted que todos estos aparatos son de mi exclusiva propiedad; ninguno es del Fisco.

El violento incendio que asoló gran parte de Valdivia, el 13 de diciembre de 1909, consumió los planos que había adquirido el Protectorado, entre ellos, un valioso plano de la provincia, de suma necesidad en al servicio de la Oficina.

Esta carencia de plano por una parte, y el estudio de los reclamos por otra, me dio a conocer que la zona más azotada por el litigio de los terrenos era el departamento de Villarrica, lo que me indujo a construir un plano de dicho departamento en escala de 1: 500.000. Luego han venido leyes, señor Protector, como usted bien lo sabe, modificando la división departamental de la provincia, subdividiendo los departamentos en varias subdelegaciones, tal como la ley núm. 2.364, de 15 de septiembre de 1920, y el decreto núm. 4.675 de 24 de octubre último, del Ministerio del Interior.

La obligación de cumplir con la ley y las contradicciones de los reclamantes en ubicar las subdelegaciones de donde eran, me llevó a construir un nuevo plano del departamento de Villarrica en escala de 1: 250.000. Más detallado en razón de la escala e indicando en colores los límites de las seis subdelegaciones que le fijó la ya citada ley. Este mismo trabajo, salvo mejor acuerdo de Usted, lo estoy ampliando a los departamentos de Valdivia y La Unión como trabajo complementario, supliendo las deficiencias de mi escasa labor.

He confeccionado, señor Protector, una cartilla del dialecto araucano, con las palabras y frases que más directamente se relacionan con mi trabajo, para darme a entender entre ellos, porque hay reducciones de indios, lejanas de centros civilizados, que desconocen por completo nuestro idioma. Anteriormente, me entregaba a los buenos servicios del lenguaraz, tipo del indio valiente, astuto y sobre todo embustero, que no se conforma con traducir lo que oye, sino que inventa y concluye por poner en boca de otro lo que él piensa, haciéndose indispensable llamarlo al orden por medio de los Carabineros y que traduzca corto y al pie de la letra. Estos inconvenientes se remedian con la cartilla.

Pidiendo a usted, señor Protector, escusas por estos preliminares que no encuadran en este informe que usted me ordenó presentar, debo decir que debido a la liberal confianza que usted tiene en mis trabajos, traducidos en amplia libertad de tiempo y acción, es que me ha sido fácil entregar a usted treinta y un informes de los cincuenta reclamos que había en la Oficina de su cargo. Cada uno de lleva una carátula que expresa el número de orden del reclamo, los nombres de los reclamantes y lugares donde viven, la materia que tratan, si acompaña plano, el departamento, subdelegación, semestre y año respectivo.

Dejo contestadas oportunamente y a la brevedad posible, por estar yo en viajes, sus notas número 251, 252, 220, 34, 255 y 259 que usted se sirvió dirigirme.

Repasando mis carteras se ve que he hecho los siguientes viajes:

A Pelchuquin, tres viajes; Corroco, Rucahue, Lanco, dos viajes; La Paz, tres viajes; Chanco, La Faja, Huefel, dos viajes; Lolorruca, dos viajes; Coihue, Huipel, Carilafquen, Loncoche, tres viajes; Huelquelelfun, dos viajes; Rucapuilly, dos viajes; Lago Ranco, Rupemeica, Pulingue, dos viajes; Villarrica, Putue, Huiscapy, Curaco, Lliu Lliu, Futa Alihuen, Piñoepillain, Coihueco, Chihuaihue, Huechulelfu, recorriendo gran parte de la provincia, haciendo llegar hasta el más lejano rincón y última ruca, tal era mí deseo, la palabra de aliento y esperanza, de que el Gobierno se preocupa de ellos, pagando muy bien, siendo lo contrario, abogados, ingenieros, agentes judiciales, etc., etc., para atenderlos gratuitamente en su defensa.

En estas comisiones he salido fuera de Valdivia desde agosto a marzo inclusive, un total de ciento noventa y cuatro días, cuyos viáticos deseo se me abonen.

Algunos aguaceros y la peste viruela sobre todo, me obligó a suspender mi trabajo en Nilcahuin, La Paz y últimamente en la región de Loncoche.

El servicio de los Carabineros, cuando lo he solicitado en mis comisiones lejanas, ha sido del todo correcto.

Es muy conveniente que usted solicite la liberación de telegramas oficiales del ingeniero porque en el trabajo se presentan muchos casos imprevistos de consultar y pedir instrucciones o autorización del Protector, facilitando solución y evitar nuevos viajes que se pueden aprovechar en estos reclamos.

He resuelto con equidad, en el campo, pequeñas rencillas, verdaderas chispas que, dado el carácter de los indígenas, pudieron convertirse en incendios para que no fueran a molestar su atención dedicada a otros indios, en asuntos más complicados.

Les aconsejo y enseño cómo deben acudir siempre al Registro Civil, siendo este otro servicio gratuito que les da el Gobierno.

Me hago un deber en reconocer la decidida y valiosa cooperación que dedica el señor Gobernador de Villarrica a los numerosos reclamos sobre caminos vecinales que a diario llegan a su oficina, y que por atravesar hijuelas de indígenas se digna oír la voz del infrascrito.

Sería, además de cansado, particularizarme, poner en su conocimiento las veces y personas que en distintas ocasiones me han prohibido y amenazado de bala, si trabajaba en el terreno usurpado por ellos. Felizmente para mí, nada ha sucedido hasta ahora.

El infrascrito, que conoce la provincia, que en sus excursiones lejanas tiene que hacer vida común con la gente pobre, que ve y palpa sus necesidades y oye sus más íntimas quejas y esperanzas, desearía decir algo sobre algunos interesantes temas de actualidad en materia de terrenos, etc.

Como, por ejemplo, la inconveniencia del régimen de comunidad en que algunos quedan, leyes de colonización que merecerían amplitudes, restricciones, etc., etc., pero no puede, porque sabe que sería extralimitarse del círculo estrecho que le corresponde, y con todo respeto, deja estos puntos para que el señor Protector, con más elevado criterio, los trate mejor en su Memoria.

Eso sí, que afirmo no haber salido hasta hoy del marco de mis atribuciones fijadas, no informando ni dando línea alguna sobre ninguna cuestión que previamente no haya puesto en su conocimiento y que, siendo visada por usted, no haya quedado estampada en los Libros de Reclamos que con este objeto se llevan en la oficina de su cargo. Por tanto, creo, señor Protector, haber cumplido mi deber. Saluda a usted.

Leónidas Soto Cañas,
Ingeniero del Protectorado

En cuanto al movimiento de la repartición que servimos ha sido el que sigue:

En el libro respectivo que se lleva por orden de fechas y foliado, hay constancia de cuatrocientos quince reclamos con la concurrencia de quinientos diez indígenas.

Estos reclamos han motivado doscientas ochenta y nueve piezas dirigidas al Ministerio de Colonización, Inspección de Colonización, Comisión Radicadora, etc.

El Protectorado es parte por indígenas en los juicios que siguen:

	Causas
Valdivia	17
Villarrica	27
La Unión	10
Total	34

Archivadas por falladas y abandonadas

	Causas
Valdivia	4
Villarrica	4
La Unión	4
Total	12

Actualmente en tramitación: 42

El Ingeniero de esta Oficina ha evacuado 27 comisiones; verificación de líneas remensuras, particiones de comunidades.

Quedan por evacuar treinta y ocho.

El Cuerpo de Carabineros continua facilitando la labor del infrascrito.

Este cuadro se completa con los estados mensuales que enviamos a esa Inspección, donde apuntamos los juicios que por los indígenas sostiene el Protectorado.

Saluda a usted.

Carlos G. Irribarra.

Señor Inspector General de Colonización e Inmigración - Santiago.

1911
DANIEL CERDA
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS DE LLANQUIHUE[397]

Osorno, 29 de enero de 1912.

Señor Inspector General

Tengo el honor de elevar a US. la Memoria correspondiente al año de 1911, referente al servicio del Protectorado de Indígenas de la provincia de Llanquihue que corre a cargo del infrascrito.

La Oficina ha funcionado en 1911 en forma debida, habiéndose aumentado el personal de ella con un Agente Judicial, con residencia en Puerto Montt.

El ingeniero que he gestionado tantas ocasiones para el servicio de este Protectorado no ha sido posible obtenerlo no obstante de haber pendientes múltiples cuestiones que necesitan para la mejor defensa de los indígenas la intervención e ilustración de un ingeniero.

De desear sería que en el presente año de 1912 se dote a esta Oficina del expresado funcionario.

Aunque el Agente Judicial, según Decreto Supremo, debe tener su residencia en Puerto Montt, no fue posible en 1911 enviarle a aquella ciudad, pues ha habido necesidad de imponerlo de los medios de que se vale esta Oficina para hacer efectiva la protección a los indígenas, y asimismo ha habido que ilustrarle en la forma en que se tramitan los juicios, a fin de que en Puerto Montt atienda por las indicaciones del infrascrito a los juicios de indígenas que se promuevan en el Departamento de Llanquihue.

En el presente año se trasladará definitivamente el Agente Judicial a Puerto Montt y estarán atendidos en forma debida los juicios de los indígenas de aquel Departamento.

Me hago un deber en reconocer la ayuda eficaz que ha prestado a este Protectorado para la defensa de los indígenas el señor Gobernador de Osorno, don Félix Ovalle Vicuña, quien en toda ocasión ha proporcionado los medios para amparar a los indígenas, y se ha negado siempre a proporcionar la fuerza pública que se le ha solicitado para el desposeimiento de éstos.

En honor de la verdad, debo declarar también que el cambio de Juez Letrado del Departamento de Osorno se ha hecho sentir en forma satisfactoria para la

[397] "Memoria del Protectorado de Indíjenas de Llanquihue", en *Memoria de la Inspección Jeneral de Colonizacion e Inmigracion, 1911* (Santiago, Imprenta i encuadernación Ercilla, 1912), pp. 657-670.

defensa de los indígenas pues hoy día con el digno funcionario que desempeña dicho cargo se encuentra justicia inmediata y eficaz.

Los decretos de lanzamiento de indígenas sin juicio previo, que eran frecuentes anteriormente, han desaparecido y ningún ocupante es desposeído de su terreno sin que previamente y en juicio legalmente tramitado se declare que hay otras personas con mejores derechos legales al expresado terreno.

La continua vigilancia que antes debía tener a los decretos judiciales sorpresivos en contra de los indígenas, ha desaparecido.

Por otra parte, la tramitación de los juicios de indígenas se ha facilitado notablemente, pues mientras antes se obligaba a estos a traer sus testigos tres y cuatro veces, con grandes sacrificios y mientras en muchas ocasiones se dejaba a los indígenas sin rendir prueba, postergando indebidamente las sesiones hasta que expirase el término probatorio, hoy día es régimen invariable del Juzgado de Letras de que las sesiones de pruebas son impostergables, salvo mutuo acuerdo de las partes.

Conjuntamente con las defensas de primera instancia ha atendido también a las defensas de los indígenas en los juicios que se han tramitado ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia en segunda instancia.

Siempre he encontrado en este alto Tribunal la mayor facilidad para la defensa de los indígenas que represento; sin embargo, debo llamar la atención a una resolución expedida por dicho Tribunal y que puede traer consecuencias desgraciadas para la defensa de los indígenas en general.

Se trata de lo siguiente: en mi concepto el papel de Protector de Indígenas es respecto a los indígenas lo que es el curador respecto a los menores en cuanto a la representación legal.

Sin embargo, la Iltma. Corte de Valdivia ha establecido una jurisprudencia que no estimo legal cuando declara que el Protector de Indígenas no tiene derecho de representar al indígena cuando este no lo quiere o cuando confiere poder a cualquiera otra persona.

De lo que resulta que con esa resolución se burlan fácilmente las disposiciones legales vigentes, respecto a la enajenación de terrenos de indígenas, como paso a demostrarlo con hechos prácticos.

Un indígena llamado Pedro José Purralef vendió hace poco más de un año un terreno de su propiedad a don Teodoro Schaefer. Impuesto el infrascrito de dicho contrato, gestionó judicialmente su nulidad e hizo notificar de la demanda al comprador señor Schaefer. Este, que procedía de acuerdo con Purralef, le hizo venir a otorgar un poder para el juicio a un Procurador Judicial y pidió la abstención del Protector en la defensa de dicho juicio. El Juzgado rechazó dicha petición estableciendo que el Protector de Indígenas tenía la representación legal de este y no podía él mismo quitarle dicha representación; apelada esa resolución, la Iltma. Corte de Valdivia la revocó declarando que el Protector no tenía derecho de representar al indígena contra voluntad y máxime cuando había designado otro mandatario.

En virtud de dicha resolución, tuve que abandonar la defensa del indígena y el juicio se ha tramitado solo por el comprador y el apoderado del indígena, defensa costeada mas no por este sino por el propio demandado. US. comprenderá la defensa que se hará en favor del indígena y por consiguiente el resultado que se obtendrá de la nulidad gestionada.

Con ese sistema se burlará fácilmente la prohibición legal que existe de la enajenación de los terrenos de los indígenas, desde que la nulidad que pueda gestionarse en juicio será rechazada con facilidad por la ninguna defensa del indígena y porque se establecerá lo que se quiera en el juicio por el comprador de terreno indígena.

Creo que el Iltmo. Tribunal no ha meditado en las funestas consecuencias que traerá a la defensa de los indígenas la jurisprudencia que ha sentado con semejante resolución. Sin embargo, espero que reaccione el expresado Tribunal y si esto no se obtiene, trataré de llevar esta cuestión en casación a la Excma. Corte Suprema.

Renuevo en esta Memoria mis observaciones hechas en mi anterior, referente a la conveniencia de dar competencia en los asuntos de indígenas solo a los señores jueces letrados, inhibiendo de ellos a los jueces de menor y mínima cuantía, funcionarios que han sido los culpables en los despojos de que se ha hecho víctima a los indígenas de este departamento en los últimos treinta años.

Insisto nuevamente en la conveniencia de que una ley establezca quiénes poseen la calidad de indígena, calidad que les es negada en todo juicio.

La forma indicada en mi Memoria anterior para que sirva de base a una ley que establezca dicha calidad la considero de fácil aplicación.

En un principio se me negaba en los juicios el derecho de asumir la representación de los indígenas, felizmente con las resoluciones uniformes de los Tribunales que establecen que los Protectores de Indígenas tienen por ley la representación de estos en los juicios, han terminado las objeciones respecto a mi personería como Protector.

Una de las cuestiones que más ha preocupado mi atención referente a la defensa de los indígenas es la de impedir la concesión de la fuerza pública para el desposeimiento de indígenas.

Dichas peticiones inciden generalmente en juicios de partición finiquitados en años anteriores, juicios seguidos con intervención de los indígenas y en los que, por lo común, estos han sido víctimas por la falta de defensa.

Mi labor en este punto se ha dirigido a obtener un Decreto Supremo que ordene a las autoridades administrativas no conceder la fuerza pública que se les solicite, sin que lo ordene el Supremo Gobierno de acuerdo con lo establecido en el artículo 925 del Código de Procedimiento Civil, y considerando que, mientras no haya radicación definitiva de indígenas, estos son solo ocupantes de terrenos fiscales.

La entrada al Ministerio del Interior del señor don J. Ramón Gutiérrez, Presidente de la Comisión Parlamentaria de Colonización, fue favorable a mis ges-

tiones, pues dicho señor Ministro, con fecha 7 de diciembre de 1911, dio la orden tantas veces gestionada y tan anhelada por el infrascrito para hacer efectivo el amparo de los indígenas que representa.

Los reclamos diarios de los indígenas han sido numerosos en 1911, y dichos reclamos se refieren a solicitar amparo contra atropellos de que se les hace víctimas, y en especial los reclamos son formulados por los indígenas entre sí y en virtud de la comunidad en que viven.

El Protector les oye sus reclamos y cita al reclamante y reclamado a comparendo para un día inmediato en el que generalmente el Protector logra armonizarles sus diferencias, no sin que antes tenga que vencer la tenaz oposición a toda armonía, que por carácter es peculiar a los indígenas.

Como lo he expresado en mis Memorias de otros años, la causa principal del desposeimiento de que se ha hecho víctimas a los indígenas en el departamento de Osorno han sido las continuas disputas entre los comuneros indígenas, disputas que antes del funcionamiento de este Protectorado eran llevadas a los Tribunales por consejos de Agentes Judiciales que normalmente se hacían otorgar poderes generales con amplias facultades, engañando a los indígenas, y concluían los defensores por enajenar los terrenos de sus defendidos quienes, aparte de los honorarios usureros que pagaban a sus defensores, concluían por ser ambos litigantes desposeídos de sus terrenos; esta ha sido la causa principal y tal vez única de los atropellos de que han sido víctimas los indígenas del departamento de Osorno, y que han tenido por consecuencia la pérdida material de sus terrenos.

Con el funcionamiento del Protectorado de Indígenas la mina que explotaban los llamados agentes judiciales o tinterillos, se les broceó, y de ahí es la guerra tesonera que estos hacen no solo al infrascrito sino al mantenimiento de esta Oficina.

He tenido por esta razón que soportar múltiples acusaciones de los indígenas, acusaciones formuladas por dichos agentes judiciales.

Los indígenas, por carácter, son en general absolutamente desconfiados, y además han tenido una idea errada sobre el verdadero papel del Protector de Indígenas; ellos se imaginan que este funcionario no es solo un abogado encargado de la defensa de sus derechos, sino un juez que, sin tramitación legal alguna, debe proceder en forma violenta a devolverles lo que antes les ha pertenecido, y como aquello no es posible, desde que el reclamo de los derechos debe formularse ante la justicia ordinaria y sufrir todas las consecuencias dilatorias de un juicio, se imaginan los indígenas que la lentitud en los procedimientos judiciales es causada por negligencia u otra culpa del Protector. Esa creencia se la afianzan sus antiguos defensores, quienes no pierden un momento en su trabajo de atraerse a sus lucrativos defendidos.

El infrascrito prescinde en general de dichos reclamos y continúa por todos los medios legales la defensa en los juicios que tiene formulados a favor de los indígenas.

Sobre este punto debo llamar la atención a otro inconveniente que ha venido a producir la resolución antes expresada de la Iltma. Corte de Valdivia de que el

indígena puede prescindir para su defensa del Protector y encomendaría a otro defensor.

Antes de dicha resolución, todas las disputas de los indígenas comuneros eran resueltas en forma armónica por esta Oficina: hoy hay ya varios juicios pendientes por esa causa, en cuyos juicios uno de los indígenas tiene un defensor y el otro ha pedido al Protector su defensa.

Sin dicha resolución no habrían estas cuestiones que son odiosas, dan mayor trabajo y ocasionan gastos judiciales a los indígenas litigantes.

En un proyecto de ley que propuse en mi Memoria de 1910, y en previsión de que pudiera venir la resolución que comento, indicaba en el art. 7 lo siguiente:

> "Artículo 7. El Protector de Indígenas tendrá la representación legal de éstos, siendo nulo todo acto o contrato que celebren los indígenas sin intervención de dicho funcionario".

Con la aprobación por medio de una ley de la idea propuesta en dicho artículo, se salvarían los inconvenientes antes expuestos y motivados por la resolución comentada.

El proyecto de ley que propuse en mi Memoria anterior contiene ideas que si llegan a ser acogidas y convertidas en ley traerá positivos beneficios para la defensa de los indígenas y, para terminar ¿por qué no decirlo? de una vez por todas con la raza indígena y fusionarla con el resto de los habitantes de la República.

No quiero la destrucción individual de los indígenas sino que estimo que es una obra patriótica buscar los medios para hacerlos desaparecer como raza.

¿Cuál ha sido la causa de que los indígenas de Osorno, durante más de cien años en contacto con la cultura y civilización con una propaganda levantada y activa de los misioneros religiosos, hayan mantenido como en primeros tiempos de barbarie, su hábitos, su idioma y todas las peculiaridades de su raza? ¿Por qué los indígenas de Malleco y Cautín, con treinta años solamente de dominación nacional, son menos incultos y están más dispuestos a abandonar sus antiguos hábitos y a fusionarse con los demás elementos nacionales?

En mi concepto, la causa única ha sido la absoluta comunidad que ha existido en la propiedad indígena.

En la antigua Araucanía, nuestros gobernantes se preocuparon de reservar terrenos a los indígenas, pero se les entregaron y principió inmediatamente la radicación y delimitación de cada propiedad; en Osorno existe la comunidad absoluta durante más de un siglo y no se sabe a punto fijo quienes son propietarios por derechos hereditarios y quiénes lo son por derechos de ocupación: allí cada familia indígena sabe cuánto tiene y cuáles son sus propios deslindes; así, jamás se han preocupado de aquello: todos viven en un terreno sin que sepan con fijeza si les pertenece o no. Por otra parte, los pocos deslindes que se han logrado fijar han sido tan vagos que es imposible precisarlos en forma alguna.

Mi proyecto antes aludido consulta ideas para la radicación individual de los indígenas: si fuera acogido estoy cierto que se conseguiría antes de veinte años

la absoluta fusión y el desaparecimiento como raza de los indígenas, lo que es una necesidad realmente sentida y llenaría una verdadera aspiración nacional.

Confío que US. y la Honorable Comisión Parlamentaria de Colonización, quienes tienen en su poder el expresado proyecto, se han de posesionar de él, y acogiendo alguna de las buenas ideas consultadas, han de proponer algún proyecto de ley que tienda a remediar este grave mal llamado la cuestión indígena.

Otro asunto que más ha preocupado la atención del Protectorado ha sido la llamada cuestión de la Isla de Coihueco, con motivo de los continuos conflictos que se presentan entre los indígenas Curriecos y los representantes de la Sociedad Agrícola Rupanco.

En abril de 1910, después de un viaje que hice al terreno cuestionado y después de estudiar detenidamente los títulos que exhiben ambos contendientes, elevé a la consideración del Supremo Gobierno, por intermedio de US. una nota en que, haciendo un detalle de los antecedentes y estudiarlos bajo el punto legal, manifesté mis temores de que los derechos de los indígenas hubiesen desaparecido sobre el terreno que reclaman, y propuse buscar medios conciliatorios que permitirían a los indígenas Curriecos adquirir la propiedad de terrenos en donde podrían vivir tranquilamente y dedicarse con toda contracción al trabajo.

Desgraciadamente mis indicados propósitos no han sido tomados en consideración y continúan latentes los conflictos entre los indígenas Curriecos y los representantes de la Sociedad Agrícola Rupanco, los que motivan continuos reclamos que el infrascrito atiende en la forma más favorable posible para los indígenas.

De desear sería que se diese a esta cuestión la solución propuesta, pues ella es beneficiosa a los indígenas desde que la Sociedad Rupanco ofrece conceder hijuelas a expresados indígenas en un lugar determinado y de no difícil explotación.

El interés que puede tener la Sociedad expresada para hacer esa concesión es que los indígenas estén radicados en un lugar y no que estén diseminados en toda la Isla de Coihueco, lo que sin duda es un perjuicio manifiesto para dicha Sociedad.

Varias cuestiones tengo sometidas en consulta desde hace algún tiempo al Honorable Consejo de Defensa Fiscal. Desgraciadamente aún no se han evacuado y me he visto privado por ello de luces que pudiera haber aprovechado en la defensa de los indígenas.

Voy a exponer algunas de dichas consultas a fin de que US. o el Supremo Gobierno, si lo tienen a bien, requieran los informes solicitados.

1.ª ¿Qué valor legal tienen las enajenaciones de terrenos hechas por los indígenas de la provincia de Llanquihue llevadas a cabo antes del año de 1893, fecha en que se hace extensiva a esta provincia la prohibición de adquirir terrenos de propiedad de los indígenas?

2.ª ¿La prohibición establecida en la ley de 11 de enero de 1893 es absoluta, o más bien dicho esta prohibición se extiende también a las ventas forzadas que se ha hecho a los indígenas por medio de ejecuciones seguidas ante la justicia ordinaria?

3.ª ¿Qué valor pueden tener las particiones de terrenos llevadas a cabo después del año de 1893, en que los indígenas son comuneros, particiones que generalmente han dado por resultado el privar a los indígenas de la propiedad y posesión de sus terrenos?

4.ª ¿Es legal la acción que se ejercita para desposeer a los indígenas de sus terrenos, en virtud de adjudicaciones llevadas a cabo en los expresados juicios de partición?

5.ª Los títulos de ocupación concedidos a los indígenas a principios del siglo XIX por el llamado Comisario de Naciones, ¿tienen el mismo valor legal que los títulos que concede la actual Comisión Radicadora de Indígenas?

6.ª ¿Es obligatorio a los indígenas aceptar la representación que por ellos puede asumir en los juicios el Protector o pueden ellos intervenir directamente en los juicios, ya sea por sí o por medio de otros mandatarios, quitando al Protector dicha representación?

7.ª ¿Deben las autoridades administrativas conceder la fuerza pública que se les solicite para el desposeimiento de indígenas, sin recabarse previamente un Decreto Supremo que ordene dicho desposeimiento?

8.ª ¿Puede el Protector de indígenas ser legalmente condenado en costas por los Tribunales de Justicia en los juicios que sigue en nombre de los indígenas, siendo que la ley establece que el Protector litigará como pobre en la defensa que haga a los indígenas?

Varias otras dudas tiene el infrascrito: pero aclarados con informes ilustrativos del Honorable Consejo de Defensa Fiscal los puntos antes expresados se facilitaría mucho la labor del Protector en la defensa de los indígenas.

El siguiente ha sido el movimiento habido en esta Oficina durante el año de 1911.

Oficios despachados	98
Oficios recibidos	49
Informes	15
Reclamos de Indígenas en audiencias	423
Comparendos entre indígenas	67
Juicios de indígenas en tramitación en Osorno	29
Juicios de indígenas en tramitación en Puerto Montt	3
Apelaciones atendidas por el Protector	23
Diferentes escritos presentados por *el Protector* entre las autoridades administrativas y judiciales	198

Antes de terminar esta Memoria manifestaré que, estando para caducar la Ley que prohíbe adquirirse terrenos de propiedad de los indígenas, puesto que regirá solo hasta el 20 de enero de 1913, es necesario obtener que con tiempo se dicte una nueva ley, ya sea ampliando el plazo fijado o tomando otras medidas

a fin de evitar la expoliación de que se haría víctima a los indígenas en caso que llegase al término la ley prohibitiva sin haberse consultado otra en su reemplazo.

Debo terminar esta Memoria manifestando una vez más que en el desempeño del cargo que ejerzo continuaré la norma de conducta que me he trazado de defender a los indígenas sin contemplar si mi defensa puede lesionar otros derechos.

Pero dentro de esa conducta también rechazaré cualquiera exigencia que se me haga para iniciar acciones por los indígenas cuando estas carecen de derecho alguno y cuando hay títulos legalmente constituidos y de mérito preferente al de los indígenas en favor de otras personas.

Confío que continuaré mereciendo la confianza del Supremo Gobierno y de US. para el desempeño de mi cargo.

Saluda a US.

Daniel Cerda.

1912-1913
TEMÍSTOCLES URRUTIA
MEMORIA DE LA INSPECCION GENERAL DE COLONIZACIÓN E INMIGRACIÓN[398]
[Extracto sobre protectorado de indígenas]

Los Protectores de Indígenas en el año 1912 atendieron 2.656 solicitudes de amparo, de las que 2.477 fueron resueltas extrajudicialmente, con la sola intervención de aquellos funcionarios, y 179 debieron ventilarse ante los Tribunales de Justicia.

Se terminaron con sentencias favorables para los indígenas 30 juicios, fueron elevados en apelación a las Cortes respectivas 42, y 107 quedaron en tramitación.

En el año 1913 se despacharon 1.930 solicitudes de amparo, de las que 1.760 obtuvieron una solución conveniente para los indígenas con la sola intervención de los Protectores, y 170 se ventilaron ante la justicia ordinaria por no haberse llegado a un avenimiento con los contrarios.

La labor de los Protectores, como se ve, ha sido de positivos resultados para la defensa de los indígenas. Mediante a su intervención se procuró una inmediata solución a numerosos reclamos, evitándose· que fueran llevados a conocimiento de la justicia.

La sola existencia de estos funcionarios, y su prestigio ante los detentadores de las tierras de indígenas, ha hecho que disminuyan en mui apreciable proporción los despojos de que se hace víctimas a los naturales.

Ha sido una ayuda eficaz, que será siempre indispensable, la prestada a estos funcionarios por los ingenieros que han cooperado en sus trabajos.

Aunque el presupuesto vigente consulta cinco de esos profesionales para auxiliar a la defensa de los indígenas, esta Inspección sólo ha dispuesto de tres de ellos, los que sirven a las órdenes de los Protectores de Malleco, Cautín y Valdivia. Los Protectores de Arauco y Llanquihue tropiezan con serias dificultades para imponerse de la naturaleza y cuantía de los reclamos que se llevan a su consideración, por carecer de este medio de información.

Materia que exige una atención particular, y que se presenta con caracteres de imprescindible necesidad, es la que se refiere a la división de las comunidades de indígenas.

El sistema, hasta ahora en uso, de radicar agrupadas numerosas familias bajo la dependencia puramente nominal de un cacique, da origen a la mayor parte

[398] Incluimos aquí la presentación y resumen que ofrece el inspector general Temístocles Urrutia sobre la actividad de los protectores para los años 1912 y 1913, incluida con el título "Protectorado de Indíjenas", en su *Memoria de la Inspeccion Jeneral de Colonizacion e Inmigracion correspondiente a 1912 i 1913* (Santiago, Imprenta Santiago, 1914), pp. 57-64.

de las dificultades que impiden a los indígenas dedicarse tranquilamente a sus trabajos de agricultura.

Mientras han disminuido considerablemente las cuestiones que se producen con los usurpadores, las que se promueven constantemente entre los mismos indígenas son las más numerosas, y casi la totalidad tiene su origen en el régimen de comunidad.

Es rarísimo el caso en que todos los miembros de una reducción estén satisfechos de la parte que a cada familia corresponde aprovechar en las tierras que les han sido designadas.

Generalmente el cacique o algún otro comunero se impone a los demás reservándose para sí la parte mejor de los terrenos.

La defensa de los indígenas en segunda instancia es siempre deficiente, debido a que no cuentan con representante alguno encargado de agitar la resolución de las apelaciones de que deben conocer las respectivas Cortes.

Los Protectores encomiendan a algún abogado particular su representación en estas diligencias, el que debe ser remunerado con los fondos que anualmente se consultan para atender a los gastos judiciales imprescindibles. Aquellos funcionarios se encuentran imposibilitados para tramitar personalmente las apelaciones, porque, dada la forma en que son tratadas por las Cortes, no pueden trasladarse oportunamente al lugar en que funcionan, y cada uno de los viajes que deberían realizar importaría, por viáticos y pasajes, tal vez más de lo que se invierte en el pago del abogado a que se ha hecho referencia, sin contar con que, por otra parte, deberían desatender los numerosos juicios que se ventilan en los juzgados de su residencia.

Respecto de las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia en segunda instancia, sobre indígenas, la Corte de Valdivia ha resuelto que cesa la representación del Protector cuando los indígenas dan poder a otra persona ya sea al iniciarse el juicio o durante su tramitación.

Para acreditar la calidad de indígena no ha aceptado los certificados de matrícula dados por la Comisión Radicadora de Indígenas, por lo que se hace necesaria la prueba testimonial, de tan poco mérito y tan desprestigiada en las provincias del sur.

Se ha resuelto que la contravención de la disposición legal que prohíbe enajenar y gravar terrenos de indígenas produce nulidad sólo relativa, debiendo prescribir, en consecuencia, en el plazo de cuatro años después de celebrado el contrato.

Todas las dificultades que hoy se presentan en materia de indígenas, ya se trate de su radicación, como de las múltiples dificultades emanadas de la deficiente legislación vigente, se subsanaran una vez aprobado el proyecto de ley que pende de la consideración del Congreso. Posiblemente habrían podido consultarse algunas otras disposiciones, pero su conveniencia no estaría claramente comprobada, y posiblemente sus resultados no corresponderían a las esperanzas que en ellas se han fundado.

Me permito insistir una vez mas, señor Ministro, en las ideas que he manifestado en Memorias anteriores, referentes a la fundación de escuelas especiales para la instrucción de los indígenas.

A fin de aprovechar el valioso elemento de trabajo que representa la población indígena, que hoy tan poca participación tiene en el fomento de la riqueza pública, debido al estado casi estacionario en que permanece porque carece de medios apropiados de instrucción, se hace necesaria la creación de establecimientos especiales destinados a proporcionarle enseñanzas prácticas de agricultura, a la vez que instrucción primaria, enseñanza que asimilaría fácilmente y pronto seria difundida entre los naturales.

Dichos establecimientos deberían tener el carácter de internados, pues en otra forma los indígenas no podrían concurrir, porque viven diseminados en los campos a larga distancia de las poblaciones.

Movimiento del personal

Los siguientes empleados se retiraron del servicio:

Don Luis Fredes. Ingeniero del Protectorado de Indígenas de Malleco, decreto núm. 661 de 17 de abril de 1913.

Don Rodolfo Wolleter de V., Agente Judicial del Protectorado de Arauco, decreto núm. 43 de 16 de enero de 1913.

Don Emiliano Arenas, Escribiente del Protectorado de Arauco, decreto núm. 362 de 10 de marzo de 1913.

Don Juan F. Pineda, Portero-intérprete del Protectorado de Arauco, decreto núm. 934 de 17 de junio de 1912.

Don Daniel Cerda, Protector de Indígenas de Llanquihue, decreto núm. 1305 de 14 de agosto de 1912.

Don Eudoro Robles, Escribiente del Protectorado de Indígenas de Llanquihue, decreto núm. 916 de 14 de junio de 1912.

Don Emilio Pacheco, Portero-intérprete del Protectorado de Indígenas de Llanquihue, decreto núm. 1973 de 15 de noviembre de 1912.

Don Alfredo Fontaine, Agente Judicial del Protectorado de Indígenas de Valdivia, decreto núm. 1139 de 12 de junio de 1913.

Don Gabino Jaramillo, Portero-intérprete del Protectorado de Indígenas de Valdivia, decreto núm. 2407 de 5 de diciembre de 1913.

Don Abdón Bustamante, Administrador de Colonias de Llanquihue, decreto núm. 807 de 30 de abril de 1913.

Don Manuel Labbé, Protector de Indígenas de Cautín, fue promovido al puesto de Notario del departamento de Temuco.

Don Eduardo Rojas, Administrador de Colonias de Cautín, fue separado de su puesto por decreto núm. 2052 de 30 de noviembre de 1912.

Se extendieron los siguientes nombramientos:

Administrador de Colonias de Malleco, don Guillermo Gerlach, decreto núm. 269 de 29 de febrero de 1912.

Administrador de Colonias de Llaima, don Francisco Donoso, decreto núm. 269 de 29 de febrero de 1912.

Administrador de Colonias de Cautín, don Miguel Palma, decreto núm. 269 de 29 de febrero de 1912.

Administrador de Colonias de Imperial, don Humberto Merino, decreto núm. 269 de 29 de febrero de 1912.

Agente Judicial del Protectorado de Malleco, don Juan B. Villouta, decreto núm. 271 de 29 de febrero de 1912.

Agente Judicial del Protectorado de Llanquihue, don Santiago Labbé F., decreto núm. 271 de 29 de febrero de 1912.

Ingeniero del Protectorado de Arauco, don Francisco Manterola, decreto núm. 666 de 17 de abril de 1912.

Escribiente del Protectorado de Llanquihue, don Elíseo Quintana, decreto núm. 916 de 14 de junio de 1912.

Portero del Protectorado de Arauco, don Teófilo Oportus, decreto núm. 934 de 17 de junio de 1912.

Protector de Indígenas de Llanquihue, don José Schwerter, decreto núm. 1305 de 14 de agosto de 1912.

Portero del Protectorado de Llanquihue, don Justo Escobar, decreto núm. 1973 de 15 de noviembre de 1912.

Protector de Indígenas de Arauco, don Francisco Muñoz Q., decreto núm. 2157 de 23 de diciembre de 1918.

Administrador de Colonias de Cautín, don Luis A. Stuardo, decreto núm. 2389 de 25 de noviembre de 1912.

Agente judicial del Protectorado de Arauco, don Alcides Millas J., decreto núm. 43 de 16 de enero de 1913.

Escribiente del Protectorado de Arauco, don Ismael Moreno V., decreto núm. 362 de 10 de marzo de 1913.

Oficial 2.º de la Inspección General, don Luis Morales Z., decreto núm. 735 de 24 de abril de 1913.

Archivero de la Inspección General, don José Robles Rodríguez decreto núm. 807 de 30 de abril de 1913.

Oficial l.º encargado de la mesa de partes, don Francisco Mozó M., decreto núm. 807 de 30 de abril de 1913.

Oficial 2. encargado de la mesa de partes, don Humberto Moreno G., decreto núm. 807 de 30 de abril de 1913.

Administrador de Colonias de Llanquihue don Jenaro Ávila, decreto núm. 807 de 30 de abril de 1913.

Agente Judicial del Protectorado de Valdivia, don Juan de la C. Fuentes, decreto núm. 1139 de 12 de Junio de 1913.

Portero del Protectorado de Valdivia, don Gabino Jaramillo, decreto núm. 2407 de 5 de Diciembre de 1913.

Protector de Indígenas de Cautín, don Eleazar Bravo C., decreto núm. 2071 de 20 de Octubre de 1913.

El·movimiento de expedientes e informes que hubo en esta Inspección durante el año 1912 fue el siguiente:

Se recibieron 2.475 expedientes y oficios varios a los cuales se les dio la tramitación correspondiente; se despacharon 1.607 informes, 2.127 providencias, 1.547 cartas y 263 telegramas.

En 1913 se recibieron 2.536 expedientes y oficios varios, se despacharon 1.791 informes, 2.357 providencias, 1.642 cartas y 289 telegramas.

Antes de terminar estimo conveniente hacer presente a US. la necesidad, que cada día se hace sentir más, de dar una organización estable a los servicios de colonización, que permita impulsar con mano segura el desarrollo e incremento de este importante ramo de la administración pública ligado tan íntimamente a la riqueza pública y porvenir del país.

La propiedad fiscal en el territorio de colonización representa intereses cuantiosísimos, cuya administración debe obedecer a un plan metódico, de paulatino desarrollo, y que necesita de largo tiempo para su completa ejecución.

Mientras esté sujeto este servicio a los vaivenes de la ley de presupuestos, siempre se verán entrabados los mejores propósitos del Gobierno por las modificaciones que anualmente se introducen en aquella ley.

El despacho de los proyectos que la Comisión Parlamentaria de Colonización presento en 1912 a la consideración del Congreso vendría a salvar esas dificultades, por lo que debo rogar a US. encarecidamente tenga a bien interponer la influencia del Gobierno para que pronto sean ley de la República.

Santiago, Abril de 1914.

Dios guarde a US.

T. Urrutia

1912
CARLOS G. IRRIBARRA
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS DE VALDIVIA[399]

Señor Inspector:

Habíamos pensado llenar nuestra obligación presentando únicamente datos estadísticos porque ellos acusan por sí solos la labor de esta Oficina durante el año 1912.

Una carta-consulta del señor Héctor Wood, inteligente y activo secretario de la Inspección General de Colonización e Inmigración, nos ha invitado a volver nuevamente sobre nuestro Memorándum del año 1910 y relacionarlo con el proyecto de ley de la Honorable Comisión Parlamentaria de Colonización. En el aludido Memorándum sometíamos al criterio de esa Inspección las siguientes cuestiones:

1. Iniciada una partición en circunstancia que la Comisión Radicadora actúa en el terreno, ¿cómo se armonizarían las atribuciones e intereses de ésta con los del juez partidor? Al revés, pendiente una partición, ¿cómo se armonizaría la actuación de la Comisión Radicadora con la del juez partidor? En ambos casos, ¿qué fuerza tendría la matrícula previa de los indígenas?
2. ¿Pueden los indígenas renunciar su calidad de tales? ¿Podrían, en consecuencia, después de matriculados, rechazar su radicación y refugiarse en las leyes comunes para alegar la prescripción, por ejemplo, fundados en una posesión de 30 años? ¿Qué sanción cabría al indígena que afirmara no tener esa condición?
3. ¿Quiénes son indígenas? ¿Bastaría que su nombre apareciera en la matrícula respectiva para considerarlos cómo tales?
4. ¿Cómo se procedería cuando un indígena se niega a ser radicado, alegando que tiene una escritura de compra? ¿Podría la respectiva Comisión cercenarle sus derechos escriturados?
5. ¿Puede la Comisión radicar indígenas en un suelo ocupado por terceros con o sin títulos?
6. Caso afirmativo, ¿tocaría al Protector iniciar las acciones contra esos terceros?

[399] "Memoria del Protectorado de Indíjenas de Valdivia", en *Memoria de la Inspección Jeneral de Colonización e Inmigración correspondiente a 1912 i 1913* (Santiago, Imprenta Santiago, 1914), pp. 121-130..

7. ¿Qué quedaría de la radicación si los tribunales no acogieran la demanda?
8. Conferido un mandato judicial por un indígena a favor de un tercero, ¿puede y debe el Protector tomar su representación? ¿Quedaría en este caso sin efecto aquel poder?
9. ¿El Protector debe ser requerido para patrocinar a los indígenas en los juicios o debe proceder de oficio?
10. ¿Puede el Protector tomar la defensa de un indígena contra otro indígena?
11. ¿Es de la obligación del Protector defender a los indígenas en causas criminales que no digan relación con sus terrenos?
12. ¿Incumbe al Protector defender en segunda instancia a indígenas a quienes no ha defendido en primera?
13. ¿Puede enajenar su propiedad raíz un indígena que la ha adquirido con su peculio, por herencia o donación?
14. ¿Puede el indígena sin herederos forzosos disponer de sus bienes raíces por acto testamentario a favor de un particular, o sería el Fisco su heredero forzoso?
15. ¿Debe el Protector reivindicar el suelo abandonado por un indígena y que en su ausencia de más de un año ha sido ocupado por otro indígena o particular?
16. ¿Cómo deberá procederse con los particulares que, en razón de su matrimonio con indígenas, entran y toman posesión de terrenos de la comunidad de indígenas y contra los cuales se interponen quejas por abusos y atropellos?

Hemos enumerado las cuestiones para facilitar su estudio.

N° 1. Habría que distinguir:

Si la partición afecta a un terreno con indígenas total o parcialmente radicados, pensamos que solo la actuación de la Comisión Radicadora tendría valor legal. En este caso los accionistas particulares podrían hacer valer sus derechos ante la mencionada Comisión y sus hijuelas se inscribirían en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

Al contrario, si la partición afectara un predio con accionistas indígenas y particulares en donde la Comisión Radicadora no haya actuado aun, los indígenas quedarían sometidos a la jurisdicción del juez partidor con la intervención del respectivo Protector, y sus hijuelas serían los títulos de merced indirectamente expedidos por el Estado y se inscribirían en el respectivo registro.

A este criterio hemos amoldado nuestra conducta funcionaria. No nos oponemos a las particiones provocadas por particulares de predios con indígenas no radicados y tomamos la representación de estos a quienes continuamos considerando como indígenas, a pesar de que sus hijuelas les han sido adjudicadas por un juez partidor.

La matrícula previa de los indígenas nos autorizan para establecer la calidad de estos y asumir su representación.

Por supuesto que en ninguno de los casos propuestos se miraría a los indígenas como sometidos a las leyes comunes.

Sus derechos en las particiones estarían fundados en las leyes de radicación y en conformidad a estas serían las cabidas asignadas a ellos, salvo que estuvieran en posesión de un título de cuota o acción y derecho que regulara su cabida.

No existe aun fallo judicial sobre estos puntos porque los accionistas particulares no han repugnado al comunero indígena con título ni sin título.

De la ubicación y adjudicación de la hijuela pagadora han nacido casi todas las dificultades. Sobre este particular ya hemos presentado consideraciones de hecho y de derecho en nuestras Memorias anteriores.

N° 2. Estimamos que a los indígenas les debiera estar permitido renunciar su calidad de tales siempre que alegaren dominio con títulos escriturados. Su sometimiento a las leyes comunes sería la única sanción.

Con este criterio liberal andaría más de prisa la confusión del indígena con el particular.

Nosotros hemos presenciado casos prácticos y visto aceptar la renuncia. Véase Memoria del año 1908, pág. 355.

N° 3. Este punto es muy importante. El proyecto de ley de la Honorable Comisión Parlamentaria modificó muy poco nuestra definición que aparece en nuestro proyecto que presentamos al señor Ministro de Colonización, don Federico Puga B.

La dejó así:

> "Art. l. Son indígenas los aborígenes que conserven siquiera en parte sus costumbres, el idioma o el apellido paterno o materno de su raza y que aleguen posesión sobre terrenos situados en la zona a que se refiere el art. 2. En caso de duda acerca de la calidad de indígena, resolverá en definitiva el competente Juzgado de Letras, con conocimiento de causa, oyendo al interesado, al Protector de Indígenas respectivo y al Promotor Fiscal del departamento".

Creemos que hacemos bien si insistimos en que debe oírse al Presidente de la Comisión Radicadora y no al Promotor Fiscal, porque aquél presentaría el antecedente de la matrícula en los casos de duda y este no daría luz alguna sobre la calidad de indígena, aparte de que habría situaciones de intereses encontrados entre el indígena y el Fisco.

N° 4. Nos referimos a lo que hemos dicho estudiando el número 2. Pensamos que la Comisión Radicadora estaría obligada a respetar al indígena y dejarlo abandonado al derecho común. Su escritura de compra lo pondría a cubierto de todo peligro. Sin embargo, podría en estos casos exigirse que sus actos o contratos fueran visados por el respectivo Protector u otro funcionario.

Ya hemos dicho en varias ocasiones que algunos indígenas prefieren sustraerse a la radicación porque sus escrituras de compras les asignan mayor extensión de terreno que el título de merced.

N° 5, 6 y 7. Opinamos que la Comisión Radicadora debe actuar en terrenos poseídos por particulares con o sin título y respetando los derechos adquiridos.

Aquí se presentaría el caso de radicación de indígenas y particulares, procediendo como indicamos en el numero 1, salvo que los particulares alegaren con justo título dominio exclusivo del predio.

Tocaría al Protector iniciar las acciones contra los terceros poseedores que pretendieran dominio exclusivo dentro de la zona prohibitiva, sin perjuicio de consumarse la radicación. Hablamos de respetar los derechos adquiridos dentro de la zona prohibitiva porque existen títulos anteriores a las leyes de prohibición. El procedimiento que indicamos alejaría la espectativa de que los Tribunales de Justicia dejaran sin efecto una radicación con un fallo de adjudicación de un terreno a un particular.

N° 8 y 9. Hemos creído siempre que el indígena que confiere poder a un tercero es porque renuncia al amparo de las Leyes de excepción.

En consecuencia, el Protector no tiene el derecho ni el deber de asumir su representación. Por regla general creemos que el Protector no debe obrar sino a requisición del interesado salvo cuando se trate de un indígena con título de merced que se vea envuelto en una cuestión que afecte al terreno que se le ha asignado en el referido título. En esta circunstancia deberá la Oficina proceder de oficio y apenas tenga noticias del hecho.

Asumida la representación en este último caso por el Protector, deberá entenderse revocado el poder conferido a terceros por el indígena.

N° 10. Como las únicas dificultades entre indígenas serían las derivadas del deslinde de sus posesiones, y teniendo presente que el Protectorado no podría sancionar sus resoluciones, creemos que la autoridad llamada a solucionar las diferencias sería la Comisión Radicadora.

N° 11. Obligar al Protector a defender a los indígenas en causas criminales que no afecten a sus tierras importaría desvirtuar el propósito perseguido por las leyes de excepción. Estas tienen por objeto poner a cubierto al indígena de cualquier detentador.

La ley cuida de la propiedad; mira por la conservación de ésta en poder del indígena. La persona de este está y debe estar sometida a las leyes comunes.

> Art. 20. Los protectores podrán asumir la representación y defensa de los indígenas en los procesos en que alguno de estos figure como reo. Los jueces letrados podrán requerir la intervención de los mismos funcionarios, cuando lo estimen conveniente.

Esta disposición del proyecto de ley de la Honorable Comisión Parlamentaria que dejamos transcrito es exagerado, sale del espíritu que ha aconsejado las leyes de excepción. La presencia del Protector sería necesaria en los procesos en que figure un indígena como reo siempre que aparezca afectada su propiedad.

No hay que olvidar que el indígena tiene pasiones: roba, incendia, asesina, etc., como cualquier prójimo. ¿Querrá la ley que el indígena tenga su abogado gratis para defenderse cuando robe, incendie, asesine, etc.?

El artículo 20 del Proyecto lo estimamos peligroso, aun que no es imperativo.

N° 12. Creemos que sí siempre que sea requerido para ello.

En esta forma hemos procedido siempre, a pesar de que algunos defensores de primera instancia se han obligado mediante el pago de cierta suma a defender también en segunda.

N° 13. Indudablemente que sí. Las leyes de excepción cuidan la propiedad del indígena que no tiene otro título que la posesión y la de aquel que ha sido radicado.

Prohibir al indígena vender lo que adquiere por otro medio que la radicación importaría sacar del comercio humano considerables propiedades, significaría matar las iniciativas, etc.

Si se abriga el temor de que se les defraude, exíjase ciertos requisitos y solemnidades para el acto o contrato, la intervención del Protector, por ejemplo.

No se divisa la inconveniencia para permitir a los particulares la adquisición de terrenos de indígenas cuando estos los han comprado, heredado, etc.

Es menester que se aclare este punto en la futura ley, agregando una disposición que permita al indígena, en el caso en estudio, disponer de lo suyo en cualquier forma, previo requisitos y solemnidades especiales.

N° 14. El Proyecto de ley, dice: "Art. 11. La propiedad raíz concedida al indígena por el Estado a título de Merced es intransferible por acto entre vivos e intransmisible por testamento". Observamos que esta disposición no es justa en cuanto hace intransmisible por testamento la propiedad en que el Estado radica al indígena.

Preguntamos: ¿Muerto un indígena abintestato, su terreno pasaría a la Comunidad o al Estado?

Opinamos que sería obra de justicia permitir a los indígenas transferir por acto entre vivos y trasmitir por testamento sus propiedades entre sí, cuidando simplemente que las transferencias o trasmisiones se efectuara siempre a favor de los miembros radicados en la respectiva comunidad.

Tampoco se ve el inconveniente de las compraventas, hipotecas, arrendamientos, etc., entre indígenas radicados en común. Menos se comprende la prohibición de favorecer por acto testamentario a sus parientes comuneros y a falta de parientes a los simplemente comuneros.

Por el contrario, así se despertaría el hábito de trabajo, y el ahorro nacería aguijoneado por la expectativa de llegar a adquirir alguna vez el total de la hijuela o a lo menos la parte de los comuneros indolentes. Estos saldrían de la hijuela a confundirse con los particulares en las luchas por la existencia.

Opinamos que en ningún caso debe ser el Estado el heredero forzoso del indígena radicador; debe declararse que tocaría heredarlo a la comunidad siempre que muriera abintestato.

El artículo 11 del proyecto de ley nos merece otra observación de capital interés. Nótese que en él se habla solo de la propiedad concedida al indígena

por el Estado. Preguntamos ¿podría transferirse y trasmitirse la propiedad que tiene el indígena aun no radicado?

El proyecto de ley se olvidó de que quedan más de veinte mil indígenas por radicar. Ha dejado abandonados a los que están en espera de sus títulos de merced.

Además el inciso 2° del art. 21 del proyecto dice: "Se derogan las leyes de 4 de diciembre de 1866, de 4 de agosto de 1874 y de 20 de enero de 1883".

Supongamos que en el curso de este año reciba el proyecto de ley referido su bautismo legal. Derogadas las leyes del 66, 74 y 83; y por consiguiente la de 11 de enero del año 1893 que hizo extensivas las prohibiciones a las provincias de Valdivia, Llanquihue, etc., no hay duda que los particulares podrían adquirir las tierras, de los indígenas aun no radicados y de consiguiente estos podrían vender, hipotecar, arrendar, etc., y disponer de sus terrenos por testamento.

¿Ha pensado el legislador en esta situación nacida de un grave olvido?

Esto se subsanaría con una disposición transitoria que dejara en vigencia hasta la radicación total de los indígenas las disposiciones que prohíben a los particulares adquirir, etc., las propiedades de los no radicados.

N° 15. Abandonado un terreno por un indígena y por más de un año y ocupado por un particular, tocaría al Promotor Fiscal reivindicarlo ya que el Fisco ha venido disponiendo de las tierras de los indígenas como verdadero dueño. Si lo ocupa otro indígena, el protector gestionaría su radicación, pero nunca lo reivindicaría para el que lo abandonó. Así lo hemos entendido siempre.

N° 16. Hemos tenido casos prácticos.

Procedemos con los particulares considerándolos como indígenas, a quienes llamamos a nuestra Oficina y les notificamos que si no se someten ni respetan nuestros procedimientos tendrán que salir del terreno en el cual quedaría solo su cónyuge indígena.

La Oficina ha tenido el siguiente movimiento durante el año próximo pasado.

En el libro respectivo que se lleva por orden de fechas y foliado hay constancia de 425 reclamos con la concurrencia de 466 indígenas.

Estos reclamos han motivado 306 piezas dirigidas a la Inspección de Colonización, Comisión Radicadora, jueces letrados, Ilustrísima Corte, etc.

El Protectorado es parte por indígenas en los juicios que siguen:

	Causas
Valdivia	11
Villa Rica	18
La Unión	4
Total	33

Archivadas por falladas y abandonadas:

	Causas
Valdivia	1
Villa Rica	4
La Unión	1
Total	6

Actualmente en tramitación quedan 27 causas.

El Cuerpo de Carabineros continúa facilitando la labor del infrascrito.

A esta labor ha contribuido con eficacia el Ingeniero del Protectorado señor Leonidas Soto Cañas.

Terminamos manifestando que no nos habría sido difícil hacer algunas otras observaciones al proyecto de ley.

Respetuosamente opinamos que el actual proyecto de ley, no obstante de ser el mejor de cuantos conocemos, no llenará el propósito perseguido con tan buena intención por sus inteligentes autores. Hemos creído señalar en muchas ocasiones los inconvenientes con que tropezamos a diario en la defensa de los indígenas y hemos abogado por leyes preventivas, únicas que alejan las sorpresas.

Por ejemplo, serán absolutamente nulas las sentencias que recayeren en todos los juicios que, afectando la propiedad indígena, no hayan sido tramitados y fallados con audiencia del respectivo Protector.

Todo juicio que afecte a la propiedad indígena y cualquiera que sea su cuantía será de la competencia del juez letrado.

Estas y otras disposiciones análogas llenarían los vacíos del proyecto de ley y harían siquiera posible la labor de un solo Protector en los tres juzgados de los tres departamentos de la provincia que señala la ley para el funcionario infrascrito.

Saluda a Ud.

Carlos G. Irribarra

1913
FERNANDO MUÑOZ
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS DE ARAUCO[400]

Lebu, 27 de marzo de 1914.

Señor Inspector General:

En cumplimiento a lo ordenado por esa Inspección, paso a elevar a Ud. la Memoria del Protectorado de Indígenas de la Provincia de Arauco durante el año próximo pasado, según consta del archivo y libros de esta Oficina.

El movimiento de la Oficina durante el citado año, es el siguiente:

1. Se oyeron 233 reclamos.
2. Se dirigieron a esa Inspección y otras autoridades 171 notas y 24 telegramas.
3. Se evacuaron 4 informes.
4. Se dirigieron al abogado que tiene a su cargo la defensa de las causas de indígenas de la Ilustrísima Corte de Concepción siete cartas.
5. Se mandaron a distintos particulares 99 cartas.
6. Se tramitaron 35 causas civiles y cuatro criminales.
7. Se fallaron en primera instancia siete.
8. Quedaron en tramitación para el primero de enero de 1914 treinta y dos.
9. Hay pendiente en la Ilustrísima Corte de Concepción cuatro.

Los juicios tramitados son los siguientes:

1. Lucía Cayulao con sucesión de don Bernardino de Sema Araneda, fue iniciado el 5 de marzo de 1911 sobre nulidad de escritura y se encuentra en tramitación.
2. El de Pascual Millaleo con Juan Gastigar sobre partición, fue iniciado el 6 de junio de 1910 y se encuentra la causa para un comparendo.
3. El de Juan Jacinto Necuñir con Félix R. Padilla sobre despojo violento, fue iniciado el 26 de agosto de 1913 y se encuentra en tramitación.
4. Francisca Huenchuleo con Juan Novoa, sobre cobros de pesos, fue iniciado el 18 de mayo de 1912 y se encuentra en tramitación.
5. Manuel Maril con Rufino Sepúlveda, sobre usurpación, fue iniciado el 8 de abril de 1913, en tramitación.

[400] "Memoria del Protectorado de Indíjenas de Arauco", en *Memoria de la Inspección Jeneral de Colonización e Inmigración correspondiente a 1912 i 1913* (Santiago, Imprenta Santiago, 1914), pp. 101-109.

6. Juan Aniñir con José María Hidalgo sobre querella de restitución, fue iniciado el 2 de julio de 1913, se encuentra fallado y en apelación.
7. Juan Jacinto Necuñir con Félix Rufino Padilla, sobre petición de herencia, fue iniciado el 16 de abril de 1913 y se encuentra en tramitación.
8. Pedro Chouquelen y otros con Pablo Tussaint y otros sobre flagelaciones, fue iniciado el 30 de septiembre de 1913 y se encuentra en tramitación.
9. Pablo Huenuhan y otros con Manuel Cáceres y otros, sobre querella de restitución, fue iniciado el 8 de octubre de 1913 y se encuentra en tramitación.
10. Juan Meliman y otros con Ramón Duhart, sobre querella de restitución fue iniciado el 8 de octubre de 1913 y se encuentra en tramitación.
11. José Huenteo, Segundo Antinao, Pedro Paillao y Juan B. Canupí por infractores a la Ley de Reclutas y Reemplazos, fue iniciado el 8 de octubre de 1913 y fue fallado a favor de los indígenas.
12. Mateo Quintre y Juan Epullan con Juan Bautista Hiriarte, sobre estafa, fue iniciado en noviembre de 1913 y se encuentra en tramitación.
13. María Catrilelvun con Manuel Gallardo y otros sobre nulidad de escrituras; fue iniciado el 27 de marzo de 1911; se encuentra en trámite un nombramiento de perito.
14. María Catrilelvun con Manuel Gallardo y otros, sobre medidas precautorias; fue iniciado en octubre de 1913 y se encuentra en tramitación.
15. Juan Segundo Marileo con Arturo Gajardo, sobre restitución, fue iniciado en 1913 y se encuentra fallado.
16. Juan Canupí con el Fisco sobre reivindicación, fue iniciado, en octubre de 1913 y se encuentra en apelación en la Corte de Santiago un incidente.
17. José Macheo Illiman con Filadelfo Salazar, sobre nulidad de escrituras, fue iniciado en octubre de 1913 fallado y en apelación.
18. Juan Meliman con Ramón Duhart, sobre restitución, fue iniciado el 25 de octubre dé 1913. Se encuentra fallado y en apelación.
19. Domingo Hunuhuan con Manuel Cáceres y otros, sobre restitución fue iniciado el 25 de octubre de 1913 y sé encuentra en prueba.
20. Lorenzo Lepin con Jerónimo Aguayo, sobre reivindicación fue iniciado el 13 de abril de 1910 y se encuentra en traslado.
21. Lorenzo Lepin con Jerónimo Aguayo, cuaderno ejecutivo, en traslado.
22. Esteban Yevilao con sucesión de don Andrés Villagrán, sobre nulidad de escrituras, citación, sentencia. Pendiente una notificación.
23. Ignacio Huilipan con Sebastian Riffo, sobre cobro de perjuicios, fue iniciado el 21 de diciembre de 1900 y se encuentra pendiente un embargo.
24. Ignacio Huilipan con Sebastian Riffo, sobre cobro de perjuicio, fue iniciado en febrero de 1913 y se encuentra en tramitación un exhorto.
25. José María Calvül con Félix Antonio Aguayo, sobre reivindicación, fue iniciado en mayo 1908 y se encuentra en tramitación.

26. Juan Melin con Gregorio Saavedra sobre partición, fue iniciado el 6 de enero de 1911 y se encuentra en trámite (ausente Juez Partidor).
27. Luisa Maricoi con Fidel Cáceres sobre reivindicación, fue iniciado el 10 de junio de 1912 y se encuentra ordenado archivar por acuerdo de las partes.
28. José Macheo Illiman con Santiago Aguirre sobre nulidad de escritura y se encuentra en trámite.
29. José Macheo Illiman con Santiago Aguirre sobre nulidad de escritura y se encuentra en trámite.[401]
30. Juan 2° Marileo con José Campelo, sobre entrega de terreno y se encuentra en trámite.
31. Juan 2° Marileo con Harismendi y Larroulet, sobre servidumbre de demarcación, fue iniciado el 21 de abril de 1911 y se encuentra en trámite.
32. Lorenzo Quintrileo con José del C. Méndez, sobre reivindicación, fue iniciado el 6 de junio de 1910 y se encuentra en trámite.
33. Francisco Huelato con Jovino Rojas, sobre reivindicación, fue iniciado el 11 de marzo de 1911 y se encuentra en apelación de la Ilustrísima Corte de Concepción.
34. Antonio Melita con Sara Díaz de Aguayo, sobre reconocimiento de deuda contra el indígena, fue iniciado el 10 de julio de 1911 y se encuentra en trámite.
35. Juan Lincopan y otros con Pedro Leal y otros, sobre entrega de terreno, fue iniciado el 2 de abril de 1909 y se encuentra fallada en primera y segunda instancia y pendiente en la Ilustrísima Corte de Santiago.
36. Pascual Coña con J. Amador Arriagada, sobre reivindicación, fue iniciado el 10 de diciembre de 1910 y se encuentra en trámite.
37. Andrés Polma con Jacinto Ramírez, sobre cobro de mejoras, fue iniciado el 6 de junio de 1910 y se encuentra fallado en primera y segunda instancia y pendiente en la Ilustrísima Corte de Santiago.
38. Pablo Quintriqueo con Ramón Rabal y otros, sobre nulidad de escritura, fue iniciado el 28 de marzo de 1912 y se encuentra para sentencia.
39. Pablo Quintriqueo con Exequiel Pinto, sobre nulidad de nombramiento de Curador, fue iniciado el 28 de marzo de 1912 y se encuentra para sentencia.

Durante el año que me preocupo se han oído los siguientes reclamos:

	Reclamos
Pidiendo separadamente se les entregue los pedazos de suelo que les corresponde según los Títulos de Merced	120
En contra de caciques y caciquillos que ocupan mayor extensión de terrenos que lo que les corresponde llevando a las hijuelas gente extraña a las reducciones como arrendatarios o medieros	50

[401] En original está repetido núms. 28 y 29.

Por infracción a la Ley de Reclutas y Reemplazos	10
Pidiendo radicación y se les conceda Título de Merced	20
Reclamos por otras causas que sería muy largo detallar	53

Tal ha sido la labor que en el año último ha pesado sobre esta Oficina, y en la cual se descartan todos los arreglos privados que había entre los indígenas que, por más que haya ocupado la mayor atención y dada la situación que esto se resolvía verbalmente, se ha estimado innecesario anotarlo.

El ahorro de los indígenas ha sido una preocupación tenaz de este Protectorado, y al efecto se han hecho 76 imposiciones.

La propaganda emprendida no ha dado, sin embargo, los resultados apetecidos, pues los indígenas han hecho solamente la primera imposición en la Caja Nacional de Ahorros, sin continuar haciendo nuevas imposiciones.

El objeto preferente en este sentido se persigue, no solo inculcarles a los indios el espíritu de ahorro sino también cimentarles una base tanto para sus familias como para su propia defensa como medida preventiva en orden a la expoliación.

Sabido es que el indígena que se encuentra en circunstancias de miseria es el maniquí de usureros y demás individuos que se dedican a explotarlos.

Referentes a los distintos reclamos de indígenas a indígenas, debo manifestar a Ud. que ellos en su mayor parte se deben al sistema de reducción en que viven, o sea el de comunidad.

La liquidación de estas reducciones se impone por cuanto es notorio que en comunidades los más fuertes estrechan al más débil lo que es naturalmente altamente odioso por cuanto produce discordias entre los mismos indios, con grave perjuicio para sus propios intereses, ya que terceros interesados en fomentarlas y encenderlas son precisamente los interesados, de donde resulta el despojo, el robo, y como consecuencia los pleitos.

Cree este Protectorado que si se acuerda la liquidación de las reducciones de indígenas, dándole a cada cual lo que le corresponde, se daría un gran paso en orden a la constitución de la propiedad, que vendría, a más de evitar las dificultades entre ellos, a levantar el espíritu de empuje para el trabajo, pues no es ignorado que en comunidades constituidas en la forma en que se habla es imposible que el interés personal puede desarrollarse en forma, ya que ningún comunero tiene seguridad de quedarse aposentado donde actualmente está y de aquí que solo se limitan a hacer rucas y labores ligeras de cultivo y no a edificar y a cerrar sus predios.

La práctica de esta liquidación para formarle a cada indio su hijuela la considero por más hacedera, y para esto bastaría poner a disposición de esta Oficina un ingeniero agrimensor que procediera a la hijuelación de acuerdo con el Protectorado.

La institución de la familia indígena, sobre una base estable, cierta y en conformidad a la Ley de Registro Civil, se impone cada día con mayor fuerza.

El matrimonio, nacimiento y defunción, que instituyen el estado civil y crean derechos recíprocos, en la situación de los indígenas y dentro de la for-

ma establecida en sus costumbres, reconocidas por la ley, para establecer su estado civil solo se hace por la posesión notoria de cada estado, lo que se presta a innumerables abusos y por eso no es extraño que haya indígenas que han vendido sus propiedades en años retrasados, que aleguen no haber tenido la menor intervención en esas ventas y que solo ha venido a comprender cuando han sido lanzados por la fuerza pública de sus predios.

Los indígenas son procesados en los tres departamentos de esta provincia casi en su totalidad por el delito de hurto de animales.

El indígena, puede decirse, está sindicado de esta clase de delitos, por cuya razón son arrastrados a los lugares de detención, procesados y condenados.

Puede decirse que es efectivo el espíritu de latrocinio de los indígenas; pero ellos tienen también sus circunstancias atenuantes, pues a ellos también los expolian, quitándoles sus animales y ellos ignorantemente buscan una compensación.

La defensa de los indígenas en estos procesos la he considerado como lo ha ordenado esa Inspección, completamente imperiosa por cuanto sin ella se abriría margen a nueva especulación, que ya tenía su máquina montada con gravísimos perjuicios para los intereses de indígenas, pues el tinterillo, el fiador que cobra por tal servicio y el que se interesa aparentemente a favor del reo, era el que en sus momentos de angustias aprovechaba esta situación para hacerles y simularles documentos en contra.

Estimo, pues que este servicio debe mantenerse a toda costa para evitar los desmanes que dejo indicados.

En orden al llamamiento conscripcional que se hace a los indígenas en cumplimiento a la Ley de Reclutas y Reemplazos debo manifestar a usted que el indio, por su carácter guerrero, tiene gran entusiasmo por militar en las filas del Ejército; mas resulta que, ignorantes de las fechas en que se les hacen sus llamados, no comparecen oportunamente con lo cual ordinariamente se ven procesados por la citada ley.

No se ocultará a la penetración de usted las ventajas positivas que se adquirirían para el indígena en la conscripción militar en orden a la instrucción, carácter y hábitos que en los cuarteles se les enseña.

El indígena es casi en su totalidad analfabeto, y de aquí que tiene gran importancia el que hagan su servicio militar, lo cual sería fácil con que el Ministerio de Guerra impartiera al señor Intendente de esta Provincia y a los gobernadores de Departamentos para que, con la oportunidad debida, notifiquen a los llamados al servicio militar.

La instrucción debe, a mi juicio, ser una atención preferente respecto al indígena para armarlos contra aquellos que abusan de su ignorancia.

El indígena no envía sus hijos a la escuela donde hay nacionales, por sentimientos refractarios a estos, y de aquí que se impone la creación de escuelas netamente para indígenas.

He tratado sobre este punto con el señor Visitador de Escuelas de esta Provincia, señor Oyarso, quien concuerda con el mismo sentir mío, y al efecto me

ha prometido crear una escuela para indígenas en este Departamento y otra en el Departamento de Cañete.

De desear sería, señor Inspector, que usted patrocinara con su valioso concurso ante la Inspección General de Instrucción Primaria estos buenos propósitos sometidos a su consideración.

La ley de datos estadísticos merece también una observación respecto a los indígenas, por cuanto siempre incurren en la omisión de llenar los formularios de esta ley, siendo en consecuencia procesados por su infracción y condenados a multas.

Creo que para evitar todo esto, ya que no hay negativa para dar los datos, proceder en la forma que dejo indicada con respecto al modo de proceder en el capítulo de la Ley de Reclutas y Reemplazos del Ejército y Armada.

Todas estas opiniones que dejo manifestadas anteriormente han sido producidas por el estudio que de ellas he hecho personalmente y quedan sometidas al elevado criterio de usted, con lo cual doy por terminada la presente Memoria.

Saluda a Ud.

F. Muñoz.

1913
JAVIER ARRIETA
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS DE MALLECO[402]

Señor Inspector General:

Tengo el honor de presentar a Ud. la Memoria del Protectorado de Indígenas de Malleco, correspondiente al año de 1913.

En las memorias de los años anteriores se ha dado a conocer a esa Oficina Superior la naturaleza de los trabajos de este Protectorado, los inconvenientes de la legislación que rige la propiedad indígena, la urgencia que hay en obtener la aprobación del proyecto de ley presentado a la consideración del Soberano Congreso por la Comisión Parlamentaria de Colonización, etc.; por lo que, estimando superfluo insistir nuevamente, me voy a permitir en esta Memoria elevar a conocimiento de Ud. solo los datos estadísticos de la labor administrativa y judicial de la Oficina a mi cargo durante el año último.

Labor administrativa

Se ha dado audiencia a más de seiscientos indígenas.

Reclamos atendidos	463
Comparendos celebrados entre indígenas	3
Oficios dirigidos a esa Inspección General y otras oficinas	464
Informes evacuados	9
Telegramas trasmitidos	13
Memorias confeccionadas	1
Ordenes impartidas al Ingeniero	26
Informes evacuados por el Ingeniero	11

[402] "Memoria del Protectorado de Indíjenas de Malleco", en *Memoria de la Inspección Jeneral de Colonización e Inmigración correspondiente a 1912 i 1913* (Santiago, Imprenta Santiago, 1914), pp. 99-100..

Labor judicial

Juicios afijados	7
Juicios desistidos de orden superior	1
Juicios iniciados	10
Juicios en tramitación	25
Juicio en preparación	6

Personal de empleados

Esta Oficina experimentó el año anterior el retiro del ingeniero don Luis Frédes y el ingreso del ingeniero señor Francisco Manterola, nombrado en reemplazo de aquel por Decreto Supremo número 661 de fecha 17 de abril de 1913.

Me es grato dejar constancia que los empleados subalternos han cumplido a satisfacción las funciones de sus cargos.

Saluda muy atentamente al señor Inspector General,

Javier L. Arrieta S.

1913
ELEAZAR BRAVO
MEMORIA DEL PROTECTOR DE INDÍGENAS DE CAUTÍN[403]

Señor Inspector:

Nombrado Protector de Indígenas de Cautín en los últimos días del mes de octubre del año recién pasado, y héchome cargo del puesto, mi labor ante los Tribunales ha sido todavía escasa.

Sin embargo, en cumplimiento a mi deber y atento a su oficio, remito a usted esta Memoria en que manifiesto la labor del año próximo pasado y las observaciones que he podido hacer sobre algunos puntos de trascendental importancia en el mejoramiento de la situación del indígena.

	Juicios
Pendientes	27
En apelación	10
Fallados en 1ª instancia	4
Para sentencia	6
En tramitación	7

Mi labor ante los Tribunales se ha reducido a seguir la tramitación de los juicios pendientes.

Hoy impuesto ya del sinnúmero de reclamaciones, investigado los fundamentos de muchos y estudiado las probabilidades de buen éxito ante los Tribunales, escogeré las de mayor urgencia e importancia para llevarlas ante la justicia y dedicarme especialmente a ellas. He tratado de arreglar extrajudicialmente algunas y creo que mi labor en este sentido ha sido útil.

El detalle de las cuestiones así terminadas es el siguiente:

Los franciscanos de Lautaro entregarán el 1° de abril al indígena Juan Manuel Cona cuarenta hectáreas de muy buen terreno que le tenían tomado, y que hasta hoy se habían negado a devolver.

Don Avelino Mora ha entregado como 10 hectáreas próximas a Temuco al indígena Ricardo Benavente Jineo.

[403] "Memoria del Protectorado de Indíjenas de Cautín", en *Memoria de la Inspección Jeneral de Colonización e Inmigración correspondiente a 1912 i 1913* (Santiago, Imprenta Santiago, 1914), pp. 111-120.

Don Juan de la Cruz Poza devolverá el 1° de abril 50 hectáreas de suelo al indígena Martín Rapiman, y demás comuneros.

Don Genaro Poblete, al indígena Juan Curin, 5 hectáreas próximas a la parte urbana de Temuco y sobre las cuales había hecho una manifestación minera y tiene actualmente una fábrica de ladrillos.

Don Francisco Cea a don Antinao Carmona 10 hectáreas de que está en posesión muchos años atrás en la reducción del nombrado indígena.

Don José Miguel Gutiérrez ha entregado 6 hectáreas a Valentín Namoncura.

Don Manuel Alfaro entregará en mayo próximo unos terrenos que ocupa en la reducción de Juan Mely, en Llaima.

Don Isaías Zapata, que en abril próximo desocupará unas posesiones en Vilcun en la reducción de M. Millaleo.

Don Abraham Leiva, como 35 hectáreas que ocupaba en el pueblo de Vilcun y que ha desocupado ya.

Don José Bernardo Moya devolverá en abril del año próximo al indígena Juan Meli de Llaima como 40 hectáreas que posee cerradas y empastadas[404]. En este caso, al aceptar la devolución en la fecha indicada lo he hecho en atención que, al iniciar juicio o exigir la entrega inmediata habría que pagarle las mejoras como poseedor de buena fe desde hace como 15 años, mejoras que valen mas de $ 4.000 y que dejará gratuitamente a favor del indígena.

Para asegurar la devolución, en los casos que ella no ha podido ser inmediata, he hecho reducir a escritura pública el convenio en que el obligado se compromete, y el indígena y Protector aceptan.

Actualmente, y en vías de arreglar definitivamente, hay varios asuntos de importancia con la sucesión de don Pedro Roselot con don Luis Marchant y don Manuel Carrasco.

Las gestiones de esta naturaleza, viajes al mismo terreno, etc., son inútiles en todo sentido.

Cuando no se llega arreglar las cuestiones de que se trata, son fuente de investigación y elementos de convencimiento que sirven a la mejor defensa de los juicios.

Audiencia de indígenas, consultas, particiones

A estas atenciones he dedicado hasta hoy tres a cuatro horas diarias.

Generalmente, todos los indígenas acuden al Protector en todos sus actos de alguna importancia: los divorciados, los que desean construir una casa, casarse con arreglo a la ley, ausentarse a la Argentina, hacer un cierro; en fin, hasta recoger el producto de un manzano.

[404] = cubiertas de pasto para el ganado.

A veces van ante la justicia, pero los juzgados, sobre todo el de Temuco, recargado de un gran trabajo, los dirige al Protector, quien, sin someterse a los procedimientos legales, arregla equitativamente con mejores antecedentes casi todas sus cuestiones.

Por momentos, y en vista de que esta labor es demasiado pesada, y estéril a veces, los mando a la justicia con el sentimiento de ver al otro día desvanecidos los más justos derechos con declaraciones juradas, hoy tan fáciles de conseguir por acá, donde la moralidad casi no existe. Generalmente triunfa ante la justicia el que ha tomado un defensor menos honrado, no el que tiene la justicia de su parte desde que, mal aconsejados y sin conocer el alcance del juramento, lo prestan sin escrúpulo.

Las consultas son numerosas y aumentan a diario, a medida que van adquiriendo el conocimiento de que el infrascrito los sirve en buena forma, y cuando no le es posible atender sus asuntos judiciales les recomienda defensores honrados a quienes, si no puedo dirigir, al menos fiscalizo, aunque sea de lejos.

En las particiones debo proceder antes a terminar los derechos hereditarios, y para ello citar a todos; saber quiénes fueron casados, los hijos que tuvieron, y muchos otros hechos.

El matrimonio civil como elemento indispensable al progreso indígena

Es mi modesto juicio que la base de un progreso, evidente es obligar al indígena en una u otra forma a dejar la poligamia. Hoy no lo hacen porque ello les ocasiona gastos y no les permite aprovechar mayores extensiones de suelo. Todos los indígenas saben que el matrimonio civil existe y no lo hacen porque económicamente se perjudican.

Creo que lo más grande que puede hacer el Gobierno en beneficio del indígena es convertir en ley de la República, cuanto antes, el art. 11 del proyecto de la Comisión Parlamentaria.

Extirpada la poligamia y sacado el indio de la comunidad en que vive, no necesitará después de cinco o seis años más ninguna ayuda especial; solo se civilizará y tras de la civilización vendrá el progreso; tanto Protectorados como ingenieros sostenidos por el Fisco acostumbran al indígena al tutelaje y gratuidad de servicios que, no siendo completos, más les perjudican que ayudan.

Me parece que cinco o seis años después de hecha la división de la comunidad, el papel del Protector de Indígenas debería, como lo establece el articulo 11 del proyecto a que he hecho referencia, ser un simple consultor del Juez de Letras para llenar los trámites ahí exigidos.

Debería imponérsele todavía la obligación de suscribir todas las escrituras públicas que hicieran conjuntamente con los otorgantes, cerciorándose en cuanto sea posible de la efectividad de los hechos que ahí se expresan.

Conforme a las ideas expuestas, es mi opinión que debe procederse inmediatamente a concluir con la comunidad, estado que no permitirá ningún adelanto ni vivir en otra forma que una verdadera guerra civil.

Estimo que imponérsele la obligación de dividirse por ingenieros fiscales es obligarles a sufrir miles de injusticias, ya que estos no alcanzarán las leyes que reglamentan los derechos hereditarios, no tendrán competencia de nadie ni otra fiscalización que el Gobierno.

Los juzgados pasan atestados de indígenas, casi todos denunciados o procesados por asaltos recíprocos y pequeños combates para arrebatar a los más débiles algún retazo de terreno; así, a veces violentamente, se arrebatan unos a otros sus rucas, denunciando a otros hurtos de animales, y tras de eso una información de testigos, luego una orden de prisión, y cinco o seis meses de cárcel, hacen sus cosechas, y se dejan, como es de suponer, a merced de la escasa caridad de los otros.

Acusar al indígena por estos hechos es injusto y casi puede decirse que la ley les obliga a vivir así. Si entre un hombre y una mujer que, después de conocerse mucho y mediar entre ellos el cariño propio de marido y mujer, hay continuas discordias por insignificancias económicas, con cuanta mayor razón las habrá entre comuneros medio civilizados y que muchas veces por una u otra causa tienen hambre.

Ninguna reducción quiere vivir en comunidad, y quien tal afirme, falta a la verdad y toma como fundamento el decir del cacique u otros de los más fuertes e ilustrados que explotan únicamente a sus comuneros más ignorantes o débiles.

Obligado el indio a cuidar su pequeño pedazo de terreno, no trabaja más que eso, y para matar sus forzados ocios, acude a los pueblos vecinos por cualquier pretexto y de allí vuelve a su casa ebrio y estafado de lo poco que puede cosechar el año próximo.

En estas condiciones, no sobresale entre ellos casi ninguno de los más honrados y enérgicos, porque a diario acontece que a un deudor se le embargan no sus animales, que muchas veces no tienen, sino que toman los mejores que por esos contornos pastan, y se los roban sin remedio.

Los cobradores municipales embargan los bienes al que tiene y con ese sistema de arrebatarle siempre al trabajador y económico, lo rebajan al grado de los demás y matan sus energías.

En informe número 8 manifesté a esa Inspección el avalúo exagerado que, de los campos de este departamento se hizo, que todos consiguieron rebajar a la mitad, menos los indígenas.

Sería muy justo, ya que pueden trabajar, ni saben de qué son dueños, se les eximiera de los impuestos municipales.

Se hace con ellos una doble injusticia porque se les cobra de más, en conjunto e individualmente considerados, cuando hecha la partición y adjudicado a cada cual lo suyo no debería pagar, ya que, como máximum, corresponden por personas 5 o 6 hectáreas, que no pueden valer más de $1.500.

Resulta de esto que entre los indígenas sobresalen solo aquellos que se asocian a algún tinterillo que les defienda y les ayude a explotar a los demás.

La comunidad es para el indígena la madre de todos los vicios, causa de su pobreza y malestar. Debe darse de una vez, si es permitido decirlo, un hachazo que termine esta situación a que quiere dársele carácter protectora de una raza, cuando cualesquiera otra forma estudiada con ese fin no la aniquilaría más que la pretendida protección.

Creo que sería bueno hacer las cosas, más o menos, como en seguida me atrevo a manifestarlo.

Forma de hacer la partición

El indígena que la deseara, debería presentarse al Protector, quien citaría a los demás comuneros por avisos fijados por tres meses en la Oficina, y por medio del tenedor del título se apercibiría a los parientes y amigos de los ausentes con la pérdida de los derechos de estos si no se presentaren dentro de ese plazo a un comparendo.

Reunidos los comuneros, se procedería a averiguar si estaban todos de acuerdo en el nombramiento de un ingeniero que hiciera la hijuelación, y en desacuerdo, lo nombraría el Protector, quien en todo caso tendrá derecho a aceptar o no el nombrado, procurando ceñirse a lo que la comunidad acuerde en cuanto sea posible, y evitando sea nombrada una persona sin competencia ni honradez.

Se llamaría al nombrado y se le haría suscribir el compromiso obligándose:

1. a levantar un censo de todos los indígenas vivientes dentro de la reducción;
2. a hacer nueva hijuela si hubiera alguna reclamación y el Protector asesorado por el ingeniero la estimaría justa;
3. a dar a cada comunero un planito y minuta de lo que en la partición le correspondiera.

Hecho el censo y establecidos por el Protector los derechos de cada cual, sin atenerse a otras relaciones de familia que entre padres, hijos y conyugue, procedería el ingeniero a hacer la partición, sin tomar en cuenta ningún ausente, salvo los que se hubieran presentado al comparendo; la parte de los demás acrecería a la comunidad.

Concluida la hijuelación, el acta de partición sería aprobada por el Protector de Indígenas, o bien con el visto bueno de éste, pasaría a la justicia ordinaria y de aquí al Conservador de Bienes Raíces sin otro trámite.

El pago del Ingeniero es de lo más fácil y cualesquier indígena a quien se dé por separado su título de 8, 10 o 12 hectáreas está pronto a pagar 200 o 300 pesos.

La hijuelación de mil hectáreas dará trabajo para ocho o diez días por el que se cobrarían en total más de $2.000 que, repartido proporcionalmente, no

daría sino 2 pesos por hectárea. Esto lo afirmo porque los indígenas esperan como al Mesías el día en que puedan ser dueños únicos de algo, aunque sea poco. Todos dicen que venderían lo más estimado a trueque de poder cerrar definitivamente sus terrenos e introducir en ellos algún adelanto.

Cada cual recibiría su cuota al momento de recibir su plano.

De modo que el gasto sería muy insignificante, ya que solo deberían remunerar al ingeniero y economizan juez partidor, posesión efectiva y demás trámites que para ello no tienen razón de ser.

Como complemento a la partición vendría la aprobación inmediata de los art. 9, 10, 11 y 13 del proyecto de la Comisión Parlamentaria.

Al exponer las ideas apuntadas no hago más que manifestar lo que hasta hoy se ha hecho, y dar estabilidad legal a lo que la fuerza de las cosas ha impuesto; así, hoy muchas reducciones que han hecho su partición por ingenieros remunerados por los interesados y autorizados por la Oficina, viven y trabajan tranquilos.

Después, los comuneros que desearan subdividirse deberían someterse a los trámites que la ley exige a los menores, y aprobada esta partición por la justicia, quedarían de hecho esos terrenos sometidos a las leyes comunes.

Los Títulos de Merced

Creo de mi deber hacer presente que en poco tiempo más se presentaran innumerables cuestiones motivadas por el hecho de las nuevas inclusiones de comuneros dentro de un título ya dado e inscrito.

Los indígenas conocedores de la poca estabilidad de los procedimientos de la Comisión Radicadora inmediatamente de recibir su título pasan a inscribirlo al conservador público de Bienes Raíces, y de aquí vendrán, sin duda, muchos juicios entre ellos.

Convendría evitar esas futuras cuestiones que vendrán a dar sobre el Protector y recargarán sin objeto los juzgados de las provincias del sur.

Conveniencia en dar a los protectores atribuciones judiciales para fallar en 1ª instancia las cuestiones entre indígenas que se refieran a sus terrenos

De hecho, el Protector resuelve estas cuestiones pero solo como amigable componedor; los juzgados, sobre todo el de Temuco, no atienden casi esos asuntos que jamás pueden apreciar con acierto y ya que la prueba testimonial, en general y especialmente la indígena, no da garantía de certeza.

Las declaraciones juradas desvanecen, como dice la Comisión Parlamentaria, los más justos derechos, y entre indígenas no se puede resolver nada sin imponerse personalmente o por medio del ingeniero.

Hoy no se promueven cuestiones sino valiéndose de algún comunero de quien se hacen dar poder. Hay no indígenas que arrebatan 50 o 60 hectáreas de suelo valiéndose de uno de ellos. El Protector inicia alguna acción posesoria y la pierde naturalmente porque terminado el comparendo se presenta el poder del indígena en nombre del cual posee.

Si el Protector tuviera atribuciones judiciales por el hecho de mezclarse algún natural tendrá jurisdicción sobre él y evitaría ese complot, a que mediante alguna remuneración se prestan muchos, que ni siquiera están radicados y cuyos poderes se refieren a pretendidas herencias que no existen pero parecen justificadas ante los tribunales.

El Protector de Cautín es de hecho juez, parte, abogado, consejero, comisionista, depositario, gestor administrativo, en una palabra, tiene por clientela 40.000 indígenas difíciles de entender, y a cuya Oficina acuden diariamente 80 a 100 a quienes en una audiencia o dos podría arreglar definitivamente si tuviera atribuciones para ello.

Diariamente se despachan 20 o 30 piezas entre cartas, notas, oficios, citaciones, contratos, recomendaciones, etc. El total de piezas del año próximo pasado es 831 sin contar la mitad de que no se deja copia.

Temuco 6 de marzo de 1914.

Eleazar Bravo C.

1913
JOSÉ SCHWERTER
MEMORIA DEL PROTECTORADO DE INDÍGENAS DE LLANQUIHUE[405]

Señor Inspector General:

Tengo el honor de elevar a US. la Memoria anual referente al servicio y funcionamiento del Protectorado de Indígenas de Llanquihue, a cargo del infrascrito, correspondiente al año de 1913.

Ha funcionado el Protectorado, como en años anteriores, con el siguiente personal: el Protector de Indígenas, un agente judicial, un escribiente y un portero-intérprete.

Reiteradas veces se ha solicitado el nombramiento de un agrimensor, cuyos servicios se hacen cada vez más necesarios en las labores de esta Oficina. También se ha manifestado la necesidad de encomendar la defensa y representación de los indígenas en segunda instancia a un funcionario especial, porque al Protector le es imposible atender al mismo tiempo los juicios que se tramitan ante la Corte de Apelaciones, y los juicios y diligencias dentro de su provincia. Ambas medidas son indispensables para el correcto y expedito funcionamiento del Protectorado, y con su implantación podrá atenderse la defensa de los indígenas con mayor regularidad y eficacia.

El movimiento de la Oficina durante el año de 1913 ha sido el siguiente:

Oficios e informes despachados	61
Oficios e informes recibidos	42
Reclamos verbales y audiencias	224
Comparendos entre indígenas	38
Juicios ante la Corte de Valdivia	24
Juicios ante la Corte de Santiago	1
Juicios ante la Corte de Osorno	16
Juicios ante la Corte de Llanquihue	5

No van incluidas en esta lista las comunicaciones a los Juzgados de menor cuantía, policías y carabineros, las solicitudes y escritos presentados a los juz-

[405] "Memoria del Protectorado de Indíjenas de Llanquihue", en *Memoria de la Inspección Jeneral de Colonización e Inmigración correspondiente a 1912 i 1913* (Santiago, Imprenta Santiago, 1914), pp. 131-141.

gados y autoridades, ni las diligencias sobre asuntos de jurisdicción voluntaria, tramitadas por el infrascrito a pedido de los indígenas.

Ha disminuido considerablemente el número de quejas o reclamos de indígenas contra particulares, y casi no se presentan ya casos de usurpaciones, atropellos y abusos cometidos por estos contra aquéllos. La terminación de antiguos juicios ya fallados y ejecutoriados, la eficaz y oportuna protección de las auto ridades a los indígenas en casos de amenaza, la instrucción y civilización paulatina, aunque lenta, de éstos, y la campaña patriótica y sostenida de la prensa de todo el país, han influido poderosa y conjuntamente para acercarnos a una situación de respeto recíproco, de tolerancia mutua, y de mayor condescendencia en las relaciones de todos.

No han disminuido, al contrario, tienen visos de aumentar, las reclamaciones de los indígenas entre sí. Es curioso y de difícil explicación el eterno descontento de éstos, que, aunque sumidos en la miseria y agobiados por la desgracia, al parecer no pueden vivir sin rencillas y son por instinto refractarios a la armonía. Indígena que llega al pueblo, se presenta al Protectorado a reclamar, aun por los asuntos más nimios, contra el vecino, extraño o pariente, aunque sea el propio hermano. Dos son, a mi juicio, las causas de este malestar: el estado de comunidad en que aun viven en su mayoría, y la indigencia suma a que están reducidos. Estrechados por los particulares y por el incremento natural de la población en predios muy reducidos y de ínfima calidad, no pueden ya ganarse el sustento en ellos, y como poseen el suelo en común, sin cercos divisorios ni deslindes demarcados, se suscitan entre ellos continuas controversias y disputas por la posesión y explotación del suelo.

Para concluir con esta rencilla permanente, no hay más remedio que dividir las comunidades y radicar individualmente a cada familia indígena en el suelo que ocupa, demarcando claramente sus deslindes, y obligándola a cerrarlo en plazo determinado y prudencial. Sensible es que la Comisión Radicadora de Indígenas no disponga de personal más numeroso para avanzar más rápidamente en esta operación, apenas iniciada en el verano último.

Creen los indígenas que una de las atribuciones y deberes del Protector es servirles de juez y árbitro en sus controversias sobre terrenos, y rara vez se presentan a los Tribunales ordinarios en tales casos. Por otra parte, si acuden a los jueces de menor cuantía, estos no los atienden, y para verse libres de esta inconformable y odiosa clientela, los mandan donde el Protector, diciéndoles que este es el funcionario encargado por la ley para dirimir sus divergencias.

Para este fin, el Protector cita a las partes a comparendo, y sin mayor fórmula de proceso resuelve arreglo a equidad, procurando siempre impedir toda innovación y amparar al poseedor, mientras se efectúe la radicación definitiva a la partición. En estas diligencias y resoluciones es donde se necesitan principalmente los servicios del ingeniero cuyo nombramiento se viene solicitando con tanta insistencia.

Cuando ambas partes acatan la resolución del protector, se restablece momentáneamente la armonía, pero tras corta tregua vuelven a suscitarse las mismas dificultades. A menudo una de las partes protesta contra el proceder del Protector, calificándolo de parcial y *vendido*, se consulta con algún tinterillo y lleva el asunto a los tribunales, donde en honorarios, gastos y costas consume lo poco que aun posee. Si en seguida se le cobran los honorarios y costas causadas, y se le embargan sus animales, vuelven donde el Protector a quejarse de haber sido engañados y explotados por el tinterillo y el juez, y a implorar su ayuda cuando comúnmente ya nada puede hacerse en su favor; y si se les dice que ya es demasiado tarde para reparar el perjuicio, no lo creen y repiten con mayores bríos sus quejas contra el Protector calificándolo de indolente y no cumplidor de sus deberes.

Estas escenas se repiten a diario, y se necesita de una paciencia inagotable para soportar tranquilo e impasible tanta impertinencia.

Varias interesantes resoluciones de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia han puesto fin a las contradicciones y dudas habidas sobre ciertos asuntos de indígenas, y han interpretado algunas prescripciones ambiguas de la legislación especial vigente respecto a terrenos e incapacidad legal de estos, en un sentido poco favorable a las expectativas y pretensiones de ellos. Como resultado de ellas, se han desechado las nueve décimas partes de las demandas sobre nulidad de ventas, remates y adjudicaciones de terrenos de indígenas entabladas por mi antecesor con el laudable propósito de recuperar para los indígenas el suelo de que habían sido desposeídos injustamente, aunque con todas las apariencias de la mayor legalidad y corrección. Con esta jurisprudencia, y conociendo ya la opinión uniforme de los tribunales y la interpretación que dan a la ley, sería inoficioso, inconveniente, y hasta poco correcto, intentar nuevas demandas para casos análogos, que habrían de tener forzosamente igual solución.

Ha resuelto la Corte de Valdivia que el Protector de Indígenas no representa a estos en juicio, cuando han encomendado su representación y defensa a otra persona. En consecuencia, no puede el Protector hacerse parte en juicios en que el indígena está ya representado por otro; y cesa la personería del Protector desde el momento que el indígena comparece encomendando su defensa a otra persona.

Se ha resuelto también que los certificados de matrículas expedidos por la Comisión Radicadora de Indígenas en conformidad a los Registros del Censo general de Indígenas, verificado en 1908, no son prueba suficiente para acreditar la calidad de indígena de las personas a que se refieren. En consecuencia, negada en juicio la calidad de indígena, debe acreditarse esta, a falta de toda otra prueba, por la prueba testimonial, la más incierta y falible de todas, sujeta en cada caso al criterio y apreciación individual del juez.

Se ha resuelto también que la prohibición de enajenar y gravar terrenos de indígenas produce nulidad solo relativa, que prescribe en cuatro años. Es, en consecuencia, inútil todo juicio de nulidad por tal contravención, después de cuatro años de celebrado el contrato.

También ha declarado la Corte que en las provincias de Valdivia y Llanquihue la prohibición de gravar y enajenar terrenos de indígenas no rige respecto a fundos cuyos títulos estuvieren ya inscritos en forma legal. Estos están en el comercio humano, y es válida y lícita toda transacción respecto a ellos, aun cuando sea indígena uno de los contratantes.

Otra resolución declara que la ley solo prohíbe a los indígenas vender sus terrenos cuando los hayan adquirido por ocupación o por título de merced del Estado, y es válida la transferencia de todo predio que el indígena haya adquirido por otro título.

Los notarios de Osorno se niegan invariablemente a otorgar escrituras de venta de terrenos de indígenas sin previa orden judicial, la cual solicita y obtiene el interesado acreditando sumariamente ante el juez el hecho de no ser indígena o no estar comprendido en los casos de prohibición que contempla la ley. Con estas precauciones es ya muy difícil que los indígenas sean engañados, y que los contratos respectivos adolezcan de vicios de nulidad que hagan procedente una acción judicial para pedir su invalidación.

En el juzgado de Osorno tengo que sostener y debatir una cuestión nueva y aun no resulta en forma definitiva. Se trata de una partición terminada hace años, en que la hijuela adjudicada a un indígena no se redujo a escritura pública ni se inscribió en el Conservador la adjudicación, habiendo fallecido el partidor o expirado el término de su nombramiento. Siguiendo la costumbre establecida anteriormente, pedí al juzgado copia autorizada de dicha hijuela para protocolizarla en la notaría e inscribir en el Conservador la copia de protocolización. Habiéndose negado a ello el notario acudí al juzgado, que tampoco accedió a lo pedido. Apelada esta resolución, fue confirmada por la Corte, pero con esta declaración: "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 791 del Código de Procedimiento Civil".

En conformidad a esta resolución y al artículo citado en ella, pedí al juez que ordenase reducir a escritura pública la hijuela, la que sería firmada por el mismo juez. Fue desechada mi petición por el siguiente auto.

> Teniendo presente que la Ilustrísima Corte no ha señalado el procedimiento que indica la solicitud que precede, que la petición de que la hijuela se reduzca a escritura pública y la firme el juez es un acto no sentencioso para el cual no hay ley expresa que requiera la intervención del juez; que dicha petición afecta a todos los interesados en la partición del fundo, que deben ser oídos; que el juez no tiene la representación de dichos interesados; que el artículo 791 citado solo indica cuál es el tribunal competente para ejecutar las sentencias definitivas u otra clase de resoluciones, sin alterar el procedimiento señalado por la ley para la tramitación de dichas ejecuciones; que en el presente caso se pide la ejecución de una resolución arbitral con arreglo al procedimiento que la ley señala. Por estos antecedentes, no ha lugar a lo pedido.

Apelada nuevamente esta resolución fue revocada por el siguiente auto de la Corte que acepta en todas sus partes mi petición:

> Valdivia, noviembre 14 de 1913.–Vistos y teniendo presente: que la hijuela de cuya inscripción se trata, forma parte del laudo o sentencia definitiva pronunciada en un juicio de partición, y tiene los caracteres de resolución judicial tanto en cuanto se relaciona con él interés del adjudicatario respectivo como también con sus demás copartícipes, y visto lo dispuesto en el artículo 791 del Código de Procedimiento Civil, se revoca la resolución apelada de fojas... y se declara que debe reducirse a escritura pública en la forma que se solicita a fojas 10 la hijuela de fojas 1 y 2.

Creí terminada aquí la dificultad, y en conformidad a la resolución preinserta, formulé igual petición para diecisiete casos enteramente análogos. El juez desechó todas mis peticiones por el siguiente decreto: "Tratándose de un acto no contencioso para el cual no hay ley expresa que requiera la intervención del juez, no ha lugar". Quedó apelado este decreto.

Sostiene el juez la teoría de que aquí se trata de una "obligación de hacer", y debe cada interesado demandar ejecutivamente a los demás comuneros del fundo, a fin de que comparezcan dentro de término a otorgarle escritura, bajo apercibimiento de hacerlo el juez.

Siendo numerosos e indeterminados los demandados, habría que notificarlos por el Diario Oficial, etc., y habría que adoptar muchos otros engorrosos y costosos procedimientos exigidos por la ley en los juicios de ausentes, incapaces, etc. Llevo anotadas más de setenta hijuelas de indígenas para reducirlas a escritura pública, y sin duda quedan aun muchas mas, de las numerosas particiones habidas en los últimos veinte años. Si en todas ellas mantiene el juez su extraña teoría, contraria a la opinión de los demás abogados y de la Corte de Apelaciones; si en cada caso me obliga a tramitar dos y tres apelaciones, no sé cuando poder concluir con estas diligencias ni con qué recursos llevarlas a término.

Y téngase presente que esta sola diligencia, tan nimia al parecer, pero de importancia suma, disminuirá en gran parte la labor de la Oficina, y está llamada a consolidar y sanear la propiedad de casi la sesta parte de la población indígena de Osorno. Con ella se evitarán muchas expoliaciones, y se impedirá el acaparamiento de suelo ajeno efectuado merced a la misión señalada, la que ha contribuido en gran parte a formar y acrecentar la fortuna de algunos.

Cierto público comenta y celebra con fruición estas incidencias que aun le dejan tiempo y oportunidad para consumar usurpaciones contra los indígenas, aprovechando la circunstancia de carecer estos de título legalmente inscrito. Los indígenas, en cambio, asaltan casi la Oficina del Protectorado reclamando sus hijuelas y títulos o escrituras, no creen o no comprenden la dificultad producida, y a veces en grupo ocurren a la Gobernación, a la Inspección General

de Colonización y aun al Ministerio, denunciando al Protector, e imputando a indolencia, desidia o parcialidad de este lo que única y exclusivamente debe atribuirse a la tenacidad del juez en mantener la opinión arriba enunciada, errónea, impracticable y no aceptada por la Corte de Apelaciones.

Aun no terminan del todo las dificultades en el fundo Forrahue. He podido comprobar que todas las víctimas del lanzamiento verificado por orden judicial, obtuvieron hijuela en el juicio de partición, y en algunos casos más extensa que el retazo de que fueran desposeídos. Mis esfuerzos por ubicar a cada uno en su hijuela, aun no han tenido éxito por dos razones ya indicadas: la falta de un agrimensor que remensure y demarque nuevamente las hijuelas en conformidad al plano agregado al expediente de partición, y la imposibilidad de dar a cada interesado su respectiva escritura pública, por las dificultades en el Juzgado de letras, a que me referí anteriormente. Mientras tanto los indígenas desesperados vagan de oficina en oficina repitiendo sus justos reclamos y formulando quejas injustas contra el Protector que ninguna culpa tiene en estos atrasos.

Se ha fallado en primera y segunda instancia el juicio que en Puerto Montt seguía la Sociedad Rupanco contra los Curriecos, en sentido adverso a éstos, y se ha decretado el lanzamiento de las posesiones que ocupan en la Isla de Coihueco. Tenía la Sociedad demandante un título inscrito indiscutible, embargo y remate a los mismos Curriecos en 1891, que hacía inútil la resistencia de éstos. He procurado retardar el cumplimiento de la sentencia, y vigilaré que este se limite a las personas que litigaren, en el juicio y al terreno, materia de éste, y a que se refiere el título que sirvió de fundamento de la sentencia, a fin de impedir que se haga extensiva a otras personas y terrenos, como es de costumbre en tales casos.

Dos procesos criminales inició el infrascrito en Puerto Montt, por delitos perpetrados contra indígenas y que causaron cierta alarma.

A principios del año, empleados y mozos de la Sociedad Rupanco, auxiliados de los carabineros, asaltaron e incendiaron la casa del indígena Seferino Catrilefen Coihueco y expulsaron a este al camino público. Denuncié este abuso al Juzgado, se instruyó el sumario correspondiente, el Ministerio Público pidió sobreseimiento definitivo, y el juicio aun se sigue tramitando.

En diciembre fue asesinado, también en la región de Rupanco, el indígena José María Marihual; también pedí la iniciación del sumario y varias diligencias indagatorias. Se tramita el juicio con actividad y éxito; hay un reo preso, y la completa seguridad de que el hecho no quedará impune.

En un informe elevado a US. con fecha 25 de febrero expuse diversas consideraciones sobre los juicios de partición en que tienen interés los indígenas, y sobre la conveniencia y mejor manera de poner pronto término a las comunidades de estos entre si y con particulares. Análogas y más extensas observaciones sobre el mismo tema formulé en un memorial elevada al Ministerio de Colonización el 17 de octubre de 1913, sobre el proyecto de constitución, goce y disposición de la propiedad indígena, aprobado ya por el Senado y pendiente ante la Cámara de Diputados.

Se espera con impaciencia el despacho de este proyecto, que con algunas pequeñas modificaciones pondrá término a la cuestión indígena en el sur.

Una palabra más sobre las reclamaciones que a veces se formulan contra el proceder de esta Oficina. Hay un pequeño contadísimo número de indígenas que, no poseyendo ya ni una vara de terreno, ni ánimo para el trabajo, han abrazado la profesión de acompañar y dirigir a los indígenas en todas sus diligencias, ya sea en el Protectorado, en la Gobernación, policía, etc. Como explotan a los infelices en forma a veces vergonzosa, el infrascrito ha tomado algunas medidas contra ellos.

Son estos los que van a Temuco y Santiago con quejas y reclamaciones contra el infrascrito, y fácil es comprobar, que son siempre los mismos individuos, y nadie más, y que sus exposiciones son siempre inexactas o sin fundamento.

El infrascrito prescinde de tales denuncias y atiende sus obligaciones en la mejor forma posible, ateniéndose siempre a la justicia y a las prescripciones legales.

Dios guarde a US.

J. Schwerter Q.

Osorno, enero 20 de 1914.

1915 y 1916
TEMÍSTOCLES URRUTIA
MEMORIA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COLONIZACIÓN E INMIGRACIÓN[406]
[Extractos sobre protectorados de indígenas, radicación de indígenas y movimiento del personal]

Señor Ministro:

Tengo el honor de presentar a US. la Memoria de la labor realizada por la Oficina de mi cargo durante los años 1915, 1916, 1917 y 1918.

El infrascrito se ha visto obligado a postergar la publicación de estas Memorias, a pesar de que ellas estaban hechas, por no contar con los fondos necesarios que le permitieran cubrir los gastos que demanda su impresión, circunstancia que he hecho presente a antecesores de US.

La ley de presupuesto promulgada en 1915 suprimió las partidas que en las leyes precedentes habían dado existencia a esta Inspección y a la Oficina de Mensura de Tierras, y consultó una partida especial "para reorganizar el servicio de mensura de tierras y colonización".

En 1916, el remate del 16 de marzo, comprendió 45 hijuelas y 18 sitios, con una cabida de 2.626,50 hectáreas y 51.407 metros cuadrados, respectivamente por un valor total de $147.988,67, y el 15 de octubre, 112 hijuelas y 85 sitios con una cabida de 10.191,72 hectáreas y 158.661 metros cuadrados, respectivamente, por un valor total de $316.656.

En resumen, el año 1916 se subastaron 12.818,22 hectáreas, en hijuelas y 210.068 metros cuadrados, en sitios, por un valor total de $464.644,67.

Protectorados de indígenas

Los Protectores de Indígenas establecidos en las provincias Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Llanquihue oyeron durante el año 1915 a 4.412 indígenas, y en 1916 a 3.156, los que concurrieron a formular diversos reclamos que fueron

[406] A partir del año 1914 se suspende hasta 1920 la impresión de la *Memoria de la Inspección General de Colonización e Inmigración*. En 1920 se edita la última Memoria que será impresa, incluyendo en ella los resúmenes relativos a la acción del Protectorado de Indígenas, elaborados por el inspector general Temístocles Urrutia. Incluimos aquí el resumen correspondiente a "Memoria de los años 1915 i 1916", en *Memoria de la Inspeccion General de Colonización e Inmigración correspondiente a los años 1915, 1916, 1917 y 1918* (Santiago, Imprenta y Encuadernación Universidad, 1920), pp. 41-47.

solucionados en 1.514 comparendos celebrados en 1915, y 1.344 en 1916. En el año 1915 se tramitaron 198 juicios y 178 en 1916.

Como he tenido la oportunidad de repetirlo en otras ocasiones, debe tenerse presente que la labor de mayor provecho que realizan los Protectores está en la solución extrajudicial de los reclamos de indígenas, que se lleva a cabo por medio de comparendos y notificaciones administrativas.

Al lado de esa labor debe considerarse también que con su sola existencia cada Protectorado evita innumerables abusos de que serían víctimas los indígenas si no se temiera su oportuna intervención.

Debo lamentar que en la ley de presupuesto aprobada para el presente año se hayan suprimido dos Protectorados de Indígenas, supresión que afectó a los que funcionaban en Arauco y Llanquihue, por ser de más reciente creación, aunque sus servicios eran tan necesarios como los otros Protectorados.

Por decreto numero 79, de 29 de enero de 1917, se dispuso que las funciones que correspondían al Protectorado de Arauco fueran atendidas por el de Malleco y las del Protectorado de Llanquihue por el de Valdivia. Este mismo decreto agregó al Protectorado de Cautín el Departamento de Villarrica, que correspondía al de Valdivia.

Radicación de indígenas

Durante el año 1915 la Comisión Radicadora de Indígenas preparó cuarenta expedientes de título de merced, que comprenden 761 personas, a quienes corresponden 5.763,60 hectáreas.

Se otorgaron y entregaron a los interesados 28 títulos de merced. Se recibieron 29 informaciones para nuevas radicaciones, y existían en secretaría otras 190, las que servirán de base a igual número de expedientes una vez que se completen los datos necesarios para la concesión de los títulos respectivos.

En el curso del año 1916 se prepararon 48 expedientes de título de merced con un total de 5.118,80 hectáreas para 856 indígenas.

Se expidieron 57 títulos de merced y se inscribieron en el Registro Conservador 185.

Para solucionar las dificultades nacidas del choque de intereses dentro de la comunidad en que han sido radicados los indígenas, se hicieron 32 particiones.

Desde hace cinco años pende la consideración del Congreso el despacho de los proyectos de ley presentados por la Comisión Parlamentaria de Colonización que presidió el señor don José Ramón Gutiérrez, proyectos cuya aprobación vendrá a poner término a una situación que cada día se hace más difícil en la administración de las tierras fiscales que forman el territorio de colonización.

Principal importancia debe darse a la creación de un Tribunal Especial, como el que ha propuesto esa Comisión, que permite poner término en plazo breve a los numerosos litigios que hoy afectan a las tierras fiscales y que se pronuncie

sobre la bandada de los innumerables títulos que constantemente se fabrican para apoderarse de las poca extensiones que aun no han sido objeto de la codicia de los detentadores.

Solo así podrá llegarse a constituir la propiedad particular en las provincias del sur en forma legal y definitiva, apartando la desconfianza con que hoy es mirado todo título que no tiene origen del Fisco, que tiene despreciadas extensas zonas de territorio y que mantiene alejados los capitales que servirían a incrementar la riqueza publica.

La situación de los indígenas, formada al amparo de leyes que han regido durante medio siglo sin modificación, necesita amoldarse al progreso que ha llevado a su territorio nuevas actividades y un estado social que necesariamente debe primar sobre la constitución de la familia y el régimen de comunidades actual, que debe someterse a las leyes ordinarias del país.

Aunque año a año deba repetirlo, no puedo dejar de manifestar una vez más la absoluta necesidad de dar estabilidad legal a los servicios de colonización, fijando sus atribuciones y personal permanente de empleados.

En los largos años que lleva de existencia esta Oficina será difícil citar uno solo en que no se haya introducido modificaciones en su personal, suprimiéndose empleados que después de constantes labores han adquirido especial competencia y preparación.

Mientras en 1914, antes de reorganizar el servicio, atendían al ramo de colonización la Oficina de Mensura de Tierras y esta Inspección General con un gasto total de $819.380, en 1915 se concedieron solamente, para todo el servicio, 336.000 pesos, incluidos en personal y gastos, quedó a cargo del infrascrito por supresión de aquella Oficina, y para el presente año, 1917, se destinó únicamente la suma total de $287.749,88, inferior en $531.631 a la suma destinada al servicio en 1914.

Como se ve por los números anotados, no se ha impuesto reducción igual a ningún otro servicio público.

El personal que actualmente debe atender en esta Inspección los mismos trabajos que antes estuvieron a cargo de dos oficinas, ha sido reducido a menos de la mitad.

Naturalmente esta enorme reducción en los medios de que dispone el infrascrito le impiden atender con oportunidad el desarrollo de los diversos servicios que le están encomendados, debiendo dar preferencia a aquellos que tienen mayor caracter de urgencia.

Movimiento del personal

Durante los años 1915 y 1916, se han retirado del servicio los siguientes empleados:

Don Salvador Pérez V., Escribiente del Protectorado de Malleco, decreto número 1439 de 14 de octubre de 1915.

Don Julio Munita Risopatrón, Oficial 3° de la Inspección General, decreto número 1566 de 15 de diciembre de 1915.

Don Guillermo Jaramillo Valle, Portero-intérprete del Protectorado de Indígenas de Valdivia, decreto número 939, de 26 de julio de 1915.

Don Antonio Licán Millalonco, Portero-intérprete de Protectorado de Llanquihue, decreto número 1024 de 10 de agosto de 1915

Don Emilio Crespo, Portero 2.° de la Inspección General, decreto número 483 de 21 de abril de 1915.

Don Justo Escobar, Portero-intérprete del Protectorado de Llanquihue, decreto número 484 de 21 de abril de 1915.

Don Emilio G. Jiménez, Escribiente del Protectorado de Valdivia, decreto número 556 de 80 de abril, de 1915.

Don Salvador Larraín Torres, Agrimensor auxiliar de Valdivia, decreto número 740 de 15 de junio de 1915.

Don Felipe Reyes, Portero-intérprete de la Comisión Radicadora de Indígenas, decreto número 752/349 de 15 de mayo de 1915.

Don Teófilo Oportus, Portero-intérprete del Protectorado de Arauco, decreto número 925/436 de 26 de julio de 1915.

Don Leoncio Rivera, Presidente de la Comisión Radicadora de Indígenas, decreto número 458 de 28 de abril de 1916.

Se extendieron los siguientes nombramientos:

Año 1915

Escribiente del Protectorado de Malleco, don Luis A. Rojas Salas, decreto número 1339 de 14 de octubre de 1915.

Oficial 3° de la Inspección General don Ernesto Urzúa, decreto número 1566 de 15 de diciembre de 1915.

Portero-intérprete del Protectorado de Valdivia, don José Tripallante, decreto número 939 de 26 de julio de 1915.

Portero-intérprete del Protectorado de Llanquihue, don Luis Figueroa, decreto número 1024 de 10 de agosto de 1915.

Portero 2° de la Inspección General, don Rosamel Miranda, decreto número 483 de 21 de abril de 1915.

Portero-intérprete del Protectorado de Llanquihue, don Antonio Licán Millalonco, decreto número 484 de 21 de abril de 1915.

Escribiente del Protectorado de Valdivia, don Juan de la Cruz Puente, decreto número 556, de 30 de abril de 1915.

Agrimensor auxiliar de Valdivia, don Salvador Larraín Torres, decreto número 21 de 14 de enero de 1915.

Agrimensor auxiliar, don Gustavo Calvo, decreto número 740 de 15 de junio de 195.

Portero-intérprete de la Comisión Radicadora de Indígenas, don Pedro Juan Melin, decreto número 752/349 de 15 de mayo de 1915.

Portero-intérprete del Protectorado de Arauco, don Rigoberto Fuentes, decreto número 925/436 de 26 de julio de 1915.

Agrimensor auxiliar interino, don Enrique Verdugo, decreto número 1627 de 30 de diciembre de 1915.

Dibujante ayudante, don Guillermo Aravena y don Andrés Vallejos, decreto número 406 de 9 de abril de 1915.

Año 1916

Administrador de Colonias, don Luis Rivas, decreto número 10 de 8 de enero de 1916.

Ingeniero 1.° don Agustín Gallardo, con el carácter de Jefe de la Sección Topográfica, decreto número 284 de 13 de marzo de 1916.

Presidente de la Comisión Radicadora de Indígenas don Eleazar Bravo C., decreto número 573 de 18 de mayo de 1916.

Protector de Indígenas de Cautín, don Francisco Mozó Merino, decreto número 573 de 18 de mayo de 1916.

Archivero de la Inspección General, don Luis Morales Zuaznábar, decreto numero 573 de 18 de mayo de 1916.

Oficial 1° de la Inspección General, don Humberto Moreno García, decreto número 578 de 18 de mayo de 1916.

Oficial 2° de la Inspección General, don Luis Olivos Prado, decreto número 578 de 18 de mayo de 1916.

Oficial 3° de la Inspección General, don Diego Molina Letelier, decreto número 573, de 18 de mayo de 1916.

El movimiento habido durante los años 1915 y 1916 fue el siguiente:

En 1915 se recibieron 3.560 expedientes y oficios, a los cuales se les dio tramitación; se despacharon 1.925 informes y oficios varios, 4.370 providencias, 1235 cartas y 371 telegramas.

En 1916 se recibieron 3.180 expedientes y oficios; se despacharon 2.800 informes y oficios varios; providencias, 5.202; 1.575 cartas y 422 telegramas.

Dios guarde a US.

Temístocles Urrutia

OM

1917 Y 1918
TEMÍSTOCLES URRUTIA
MEMORIA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COLONIZACIÓN E INMIGRACIÓN[407]
[Extractos sobre Protectorado de Indígenas y Movimiento del personal]

Protectorado de Indígenas

Los Protectores de Indígenas establecidos en Malleco, Cautín y Valdivia oyeron durante el año 1917 a 2.379 indígenas y en 1918 a 2.163, los que concurrieron a formular diversos reclamos que fueron solucionados en 825 comparendos celebrados en 1917 y en 883 en 1918.

En el año 1917 se tramitaron 159 juicios y en 1918, 109.

La labor de mayor importancia que desarrollan los Protectores de Indígenas y a la vez la más pesada, es la que se refiere a los innumerables reclamos que los indígenas hacen ante estos funcionarios, reclamos estos que en la mayoría de los casos son motivados por divergencias que se suscitan entre ellos, como consecuencia del régimen de comunidad en que viven. Estos reclamos son solucionados en la generalidad de los casos, por medio de comparendos que se llevan a cabo ante el respectivo Protector.

Con las notificaciones administrativas que se hacen por intermedio de los carabineros, subdelegados, jueces de subdelegación o distrito, se evitan muchos juicios entre los indios y los particulares, solucionando las dificultades que entre ellos se presentan en los comparendos a que se citan a ambas partes.

El trabajo de carácter judicial que está encomendado a estos funcionarios es de suma importancia, pero no de tanta labor como el anterior. En la cuestión judicial se tropieza con el grave inconveniente de la demora de los litigios, demora esta que no es debida a desidia o falta de atención a los juicios, sino a que no se cuenta con los fondos ni el personal necesario para su rápida tramitación.

Los motivos principales de esta demora, son los recursos de apelación y casación que se entablan por los particulares, con el único objeto de continuar durante largo tiempo usufructuando las tierras que han usurpado a los indios, pues, como es sabido, esta es, casi en la totalidad de los casos, la causa que motiva los juicios.

[407] Incluimos aquí el resumen sobre el Protectorado de Indígenas dado por el Inspector General (véase nota al pie anterior). "Memoria de los años 1917 i 1918", en *Memoria de la Inspeccion General de Colonización e Inmigración correspondiente a los años 1915, 1916, 1917 y 1918* (Santiago, Imprenta y Encuadernación Universidad, 1920), pp. 246-279.

La defensa en las Cortes de Apelaciones de Concepción y Valdivia, bajo cuya jurisdicción están todos los juzgados que corresponde atender a los Protectores, es hecha por ellos mismos.

En cuanto a los juicios que vienen a la Corte de Apelaciones de Santiago o a la Corte de Casación, se solicita por esta Oficina del Consejo de Defensa Fiscal procure prestarles su atención.

Debido seguramente a que no tiene el tiempo o el personal suficiente, no se ha conseguido que se interese por esta clase de juicios.

En todas las memorias anteriores que he presentado a ese Departamento, he hecho ver la conveniencia urgente que hay de que una vez por todas se solucione la cuestión relacionada con la constitución y goce de la propiedad indígena. En ésta, me permito nuevamente insistir sobre esta misma cuestión, y al mismo tiempo a deplorar que aun no se despache el proyecto de ley que pende de la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, el que viene a resolver las dificultades que en la actualidad se originan por el régimen establecido, el que es perfectamente pernicioso para los intereses de los indios, por ser ya muy anticuado.

Estimo, pues, que debe cuanto antes legislarse sobre esta materia, porque mientras más sea el tiempo que pase, mayores serán las dificultades que se presentarán para su solución, y mayores también los hechos graves y sangrientos que se originarán entre los indígenas, como consecuencia natural de la situación en que se les tiene.

Debe, pues, serse previsor e impedir que estos hechos se produzcan, los que seguramente tendrán que venir.

La división de las comunidades, la autorización para vender en ciertos y determinados casos y bajo ciertas condiciones, vendrán a poner término a esta situación en que se tiene a los indígenas, y que ya se ha hecho para ellos insostenible, y que al mismo tiempo es un tropiezo insalvable para el progreso de la enorme y rica región agrícola que esta en poder de los araucanos.

Movimiento del personal

Durante los años 1917 y 1918 se han nombrado los siguientes empleados:

Escribiente del Protectorado de Cautín, don Juan B. Urrutia, decreto número 987 de 26 de octubre de 1917.

Oficial 1° de la Inspección General, don Carlos Cortés, decreto número 1.058 de 24 de noviembre de 1917.

Oficial 2° de la Inspección General, don Diego Molina Letelier, decreto número 1.058, de 24 de noviembre de 1917.

Oficial 3° de la Inspección General, don Hernán Mujica Mujica, decreto número 1.058, de 24 de noviembre de 1917.

Jefe de Sección del Ministerio de Colonización, don Héctor Wood, decreto número 1.205, de 27 de diciembre de 1917.

Portero-intérprete del Protectorado de Cautín, don Antonio Catrileo, decreto número 1.179/522 de 31 de diciembre de 1917.

Secretario de la Inspección General, don Francisco Mozó Merino, decreto número 192 de 6 abril de 1918.

Subinspector de Colonias de Ancud, don Daniel Cavada, decreto número 456 de 13 de junio de 1918.

Ingeniero 2° en Magallanes, don Hugo Pietrogrande, decreto número 729 de 30 de agosto de 1918.

Agrimensor 1° don César Ibar, decreto número 729 de 30 de agosto de 1918.

Se han retirado:

Oficial 2° de la Inspección General, don Felipe Mujica, decreto número 630 de 30 de junio de 1917.

El movimiento habido durante los años 1917 y 1918, fue el siguiente:

En 1917 se recibieron 4.563 expedientes y oficios, a cuales se les dio la tramitación que les correspondía; se despacharon 2.384 informes y oficios varios, 4.061 providencias y 330 telegramas.

En 1918 se recibieron 3.977 expedientes y oficios, se despacharon 2.233 informes y oficios varios, 3.681 providencias y 215 telegramas.

Dios guarde a US.

Temístocles Urrutia.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

Como se puede leer en las Memorias, el Protectorado generaba gran cantidad de documentos de diversa índole, cuyo estudio está en buena medida por hacerse. Entre ellos están, desde luego, los relativos a las actividades propias del cargo (visitas a terreno, encuentros con autoridades, y todo tipo de oficios con reiteradas e insistentes demandas por mayor apoyo de la autoridad superior), pero también se encuentra la documentación personal de los propios protectores, que nos informan de sus intereses intelectuales y de su actividad como publicistas, dando a conocer sus posiciones públicas respecto a los "asuntos indígenas". Nos informan, también, de las redes de colaboración que mantenían con otros letrados, laicos y religiosos, las opiniones que tenían unos de otros y los temas que se debatían en el momento.

Creemos, por lo tanto, que será de interés la lectura del informe que el Protector de Indígenas de Cautín, el abogado Eulogio Robles, redactó tras la visita de inspección a la Isla Huapi, en el lago Budi, donde el colono Eleuterio Domínguez estaba despojando de sus tierras a los indígenas, una situación que fue también denunciada por el misionero Félix de Augusta. El documento proporciona número de habitantes con sus nombres y datos familiares, destaca la existencia de una capilla y escuela, y la necesidad de que esta reciba una dotación mayor de tierra. De esta manera, Robles confecciona el retrato de una comunidad cohesionada, ligada a la tierra, respetuosa de la misión y con ánimo de educar a sus hijos. No podría darse mejor argumento para contrarrestar las pretensiones de ocupación del colono Domínguez. Como muestra de su afición intelectual indigenista incluimos también su correspondencia con el destacado lingüista y profesor Rodolfo Lenz, del Instituto Pedagógico, autor de una importante y pionera obra araucanista y folklorista. Se percibe en las cartas de Robles a Lenz su entusiasmo por contribuir al conocimiento etnológico del pueblo mapuche. Aunque relativamente excepcional en Chile, la figura de Robles, junto a la del rector del Liceo de Temuco, Tomás Guevara, recuerda el perfil de ciertos funcionarios públicos en las colonias francesas o inglesas en África o Asia, que junto a sus funciones como administradores de las colonias desarrollaron importantes obras etnográficas sobre los pueblos colonizados[408].

[408] Véase, por ejemplo, Edward Said, *Orientalism* (London, Penguin Books, 1978); Jean-Loup Amselle et Emmanuelle Sibeud (eds.), *Maurice Delafosse. Entre orientalisme et ethnographie: l'itinéraire*

Es con esa disposición que Robles participa activamente de la Sociedad de Folklore Chileno dirigida por Lenz, se vincula con redes de investigadores, y publica una serie de relatos etnográficos en los *Anales de la Universidad de Chile*, que serán compilados después en el libro *Costumbres y creencias araucanas* (1940). Las cartas dan cuenta del proceso y la metodología de producción de esos relatos, y también de la forma en que su actividad cotidiana como Protector le permitió a Robles desarrollar un conocimiento etnográfico de primera fuente, a partir del intercambio con todo tipo de interlocutores mapuches (sus intérpretes, sus defendidos, dirigentes, o jóvenes *mapuche* que quería apoyar en sus estudios).

Las fuentes de prensa muestran que la actividad de los Protectores estaba sometida al permanente escrutinio público, y la prensa era donde el apoyo o rechazo (justificado o no) a ciertos protectores alcanzaba un importante impacto; de hecho, las acusaciones que se ventilaban en la prensa les obligaban a dar explicaciones y rendir cuentas al Inspector General. Al mismo tiempo, los protectores también tomaban posiciones públicas en la prensa respecto a la "cuestión indígena". En el escrutinio al Protectorado de Indígenas por parte de la "sociedad civil", destacaban las intervenciones de los miembros de la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía que, compuesta de mapuches letrados vinculados de diferentes maneras a las instituciones públicas (algunos de ellos con trayectoria de funcionarios del Estado chileno), ponía especial acento en la defensa jurídica de los *mapuche*, el proceso de radicación, la formulación de las leyes sobre propiedad indígena y su correcta aplicación. En varias oportunidades los miembros de la Sociedad Caupolicán apoyarán públicamente a ciertos protectores considerados probos y activos promotores del derecho de los mapuches a la tierra (es el caso del mismo Eulogio Robles, de Eleazar Bravo o de Manuel Labbé). En otros casos, la Sociedad Caupolicán denunciará la negligencia o los evidentes conflictos de interés de funcionarios públicos que tenían responsabilidad en la constitución de la propiedad de la tierra, como el destituido presidente de la Comisión de Radicación Leoncio Rivera.

Finalmente, hay que señalar que la mayoría, sino todos los protectores, consideraban las leyes de radicación y el otorgamiento de títulos de propiedad colectiva como un obstáculo a la "civilización" de los indígenas, entendida esta como la integración a la sociedad en tanto individuos y no como colectivo familiar o étnico. La propiedad colectiva fue vista como un factor de atraso económico y social de los *mapuche*, y la ideología liberal individualista fue ganando apoyo incluso entre la élite mapuche, hasta concretarse el proyecto de subdivisión de la propiedad indígena en 1927. Es ese debate, que llevó al diputado Manuel Manquilef (a favor de la división) a alejarse de la Sociedad

d'un africaniste (1870-1926) (Paris, Maisoneuve et Larose, 1998); Richard Bauman & Charles Briggs, *Voices of Modernity. Language Ideologies and the Politics of Inequality* (Cambridge, Cambridge University Press, 2003).

Caupolicán (en contra de la división), el que se refleja en los artículos polémicos del Protector Armando Moraga contra el dirigente de la Sociedad Caupolicán, Juan Huenul, publicados en la prensa de Temuco.

Esperamos que esta breve muestra de la gran cantidad de documentación que existe dispersa en archivos y prensa regional será de interés y servirá para profundizar el conocimiento histórico del Protectorado de Indígenas.

Gertrudis Payàs Puigarnau
Jorge Pavez Ojeda

INFORME DE VISITA A ISLA HUAPI[409] E ISLA ÑIELNIÉ LAGO BUDI, 27 DE DICIEMBRE 1904[410]

Eulogio Robles R.

República de Chile
Inspección de Tierras y Colonización
Protectorado de Indígenas
N°535

Temuco, 27 de diciembre de 1904

Cumpliendo orden emanada de Ud., me dirigí al Budi a imponerme personalmente de los reclamos de los indígenas de la isla Huape y Ñielnié, hoy del Pilar, y el resultado de esta inspección es el informe minucioso que paso a exponer:

Recorrí la isla Huape en toda su extensión, tomando nota de cada *ruca* y del número de las personas que viven en ella. Mide esta isla mil ciento ochenta hectáreas, su terreno es, en parte de regular calidad, y en parte suelo colorado, impropio para el cultivo. Tiene vegas que solo en el verano se aprovechan, para talaje, y que en invierno se cubren de agua.

La isla Huape está totalmente ocupada por indígenas, que tienen regulares sementeras y una cantidad relativamente considerable de animales.

No hay personas extrañas en ella, salvo el misionero capuchino, Fray Félix de Augusta y un preceptor, que ocupan tres cuartos de hectáreas de terreno en que han edificado una capilla de madera que sirve además de local para una escuela en que se educan treinta niños indígenas.

El padre Félix es persona distinguidísima, tiene diploma de médico expedido por una facultad alemana y es además autor de una concienzuda Gramática mapuche, idioma que habla con rara facilidad. Presta servicios de mucha consideración a los indígenas. Tal vez sería conveniente se reservara para la misión unas cuatro hectáreas de terreno.

Como se habría asegurado que algunos indios de Huape deseaban trasladarse a otra parte para dejar lo que ocupan a la Empresa Domínguez, mediante ciertas concesiones, pregunté a uno por uno de los Jefes de familia si deseaban

[409] Alternan ambas grafías: Huape y Huapi.
[410] ARNAD, Fondo Inspección General de Colonización e Inmigración, vol. 60, 1904.

irse a otro terreno, y todos, salvo Alonso Lefinul, me respondieron que no, porque habían nacido en la isla, descansaban en ella los restos de sus mayores y porque la ubicación del terreno los ponía a cubierto de robos, y les daba grandes facilidades para la pesca.

En un extremo de la isla en que hay madera gruesa, esa está explotada por la Empresa Domínguez.

Habiéndome puesto al habla con el Administrador de la Empresa, me prometió este caballero que pagaría la madera a los indios.

La isla Ñielnié, de cuarenta hectáreas, situada frente a Huape, está ocupada por la Empresa Domínguez. En ella está matriculado el indígena Carmen Painemilla y seis personas. En octubre de 1902, mientras Painemilla prestaba sus servicios a la Guardia Nacional, compareció a esta Oficina solicitando se le diera una orden para que se le respetara su posesión durante su ausencia.

Después de cerciorarme por medio de una información que efectivamente tenía Painemilla una casa, sembrado y animales en Ñielnié, le expedí esa orden, que él conserva en su poder. Al año siguiente el Secretario de la Comisión Radicadora lo encontró viviendo ahí y lo matriculó.

La ocupación de la expresada isla por la Empresa Domínguez es indebida.

Aguardo instrucciones para proceder.

Según censo levantado personalmente por mí, pasando de *ruca* en *ruca*, viven en Huape trescientas cincuenta y dos personas, distribuidas en cuarenta y cuatro *ruca*s.

Los indígenas Jefes de *ruca*s, son los siguientes:

Antonio LLanquin, casado con Luisa Llanquirrai. Hijos: Painequeo, casado con Huiritrai y tiene seis hijos. Sobrino: Luis Aburto casado [con] Margarita. Entenada: Carlota María. Total, trece personas.

Pascual Painemilla Llanquin, casado con dos mujeres, la primera, Antonia Traiguin, con la cual tiene tres hijos; la segunda, Marta Llanquileo, con la que tiene un hijo. Abuela: Isabel Quiñeñen. Tío: Luis Hilario, casado con Lorenza. Entenado: Pascual Pichulman, casado con Serafina. Vive con ellas Manuela, madre de Pichulman. Total, trece personas.

Esteban Millahuala, casado con Clorinda Calvupan. Hijos: dos, una hija adoptiva. Vive por ahora en esta *ruca* Carmen Painemilla con seis personas. Painemilla vive en ella por ocupar su antigua posesión la Empresa Domínguez. Total, doce personas.

Jacinto Lolin, casado con dos mujeres, la primera, Lorenza Ana Llanquin, en la que tiene dos hijos; la segunda, Florinda María, en la que tiene tres hijos. Viven también aquí dos nietos huérfanos y una entenada. Total, once personas.

Inai Nañuin Agnir, casado con Carolina, tienen cinco hijos. Cuñada: María, tiene una hija. Total, nueve personas.

Cayumil Paillal, casado con María. Hijos: siete. Nietos: cuatro. Total, trece personas.

Manuel Nain, casado con María Paillalef, tiene seis hijos. Total, ocho personas.

Ignacio Colin, casado con dos mujeres. La primera, María, en quien tiene Ignacio Huaiquivil, casado con Luisa y tiene dos hijos; la segunda, Lorenza, en quien tiene un hijo. Vive en esta *ruca* un nieto de Colin, huérfano y se llama Juan Colin. Total, nueve personas.

Juan Llancanao, casado con Elena. Hijos: cinco. Total, siete personas.

Antonio Painefil, casado con Belinda Huirapan, tiene dos hijos. Total, cuatro personas.

Manuel Llanquileo, casado con Maria Pascuala. Hijos: cinco. Total, siete personas

Juan Paillafil, casado con Antonia Llanquileo. Hijos, tres. Total, cinco personas.

Lorenzo Huente, casado con dos mujeres, la primera, María, en la que tiene un hijo, y en la segunda, Margarita Lorenza, en la que tiene dos. Total, seis personas.

Felix Huenten, casado con dos mujeres; la primera, Juanilla Martin, en la que tiene cuatro hijos; la segunda, Merceda Meliqueo, en la que tiene también cuatro hijos. Madre: Calfurrai. Total, doce personas.

Pascual Huenten, casado con Francisca Llanquileo. Hijos, seis. Suegra: Manuela Maripan. Total, nueve personas.

Antonio Quichuvil, casado con Isabel Caniunao. Hijos, dos, uno de ellos Antonio Antivil, casado con Ineipan. Total, cinco personas.

Lorenzo Huenten, casado con Margarita Paillan. Hijos, uno. Hermana, Panchita Huenten. Total, cuatro personas.

Felipe Huenchuleo Llanquileo, casado con Pepa. Tiene un hijo. Madre, Calbutrai Maripan. Hermana, Lorenza Llanquileo, que tiene tres hijos. Primohermano, Paillaleo, casado con Juanilla Lleuman, que tiene dos hijos. Tío, Juan Huenchuleo. Total, catorce personas.

Pancho Curifil, casado con Felicia Painepan. Hijos: tres, uno de ellos, Francisco 2° Curifil, es casado. Total, seis personas.

Lorenzo Chañafil, casado con Panchita Agnir, tiene una hija llamada Chañafil que a su vez tiene un hijo. Total, cuatro personas.

Juan Chañafil, casado con Francisca Maripil. Hijos, cuatro. Hermano, Juan Paillafil, casado con Monse y tiene dos hijos. Tío, Carmen Chañafil. Suegra de Paillafil, Raitrai que tiene un hijo que se llama Cheuquepa. Total, trece personas.

Luis Paillan, casado con Maica Levio. Hijos: tres. Primo-hermano, Miranda Puen, casado con Maria Painequeo y tiene un hijo. Total: ocho personas.

Antonio Curifil, casado con Chenquetrai, tiene un hijo adoptivo. Estas personas están matriculadas en otra parte. Total: tres personas.

Felipe Huenten, casado con Juana Paillao. Tiene cinco hijos. Total, siete personas.

Quimen Lorenzo Huenten, casado con dos mujeres, la primera, Carmelita Ñain, en la que tiene seis hijos; la segunda, Juana Ñain, en la que tiene cuatro hijos. Suegra, Huenuquir. Total, catorce personas.

Ignacio Painenao, casado con Francisca Aignen, con cuatro hijos. Madre, Francisca Panchita. Hermana, Clorinda Painepan. Estos indígenas están matriculados en la reserva de Huaiquipan Collincafu, donde no tienen casa. Total, ocho personas.

(*Ruca* quemada) Luis Puen, casado con Lia Painequeo. Hermana, Francisca Nahuen. Total, tres personas.

Juan Antilen, casado con Marcelina Huentecura, con tres hijos, uno de ellos, Juan Marilen, casado con Mallenqueo. Sobrina, Huenten Curifil. Total: ocho personas.

Manuel Catrilen, casado con Facunda Lefi[]ia. Total: dos personas.

Antonio Huaiquipan, casado con dos mujeres, la primera, Jurecheo Huentecoi, con dos hijos; la segunda, Jurecheo Nahuelpan, siete hijos. Además viven tres hijos de otra mujer fallecida y dos sobrinos. Total: diez personas.

Juana Painepan, viuda. Maria Huaiquil, viuda, la primera con dos hijos, la segunda con seis. Total: diez personas.

Francisco Ñancucheo, casado con Chiñurra[411]. Entenado: Vicente, casado con Maria Painepan. Vive también en esta *ruca* José Collio, casado con Maria Losada, con tres hijos. Total, nueve personas.

Santos Montupil, casado con Rufina Colil, con cuatro hijos. Primo-hermano, Maricheo Huenten, casado con Juanilla Jurecheo. Total, ocho personas.

Juan Huerquipan, casado con Curritrai Lepin. Entenado: Inai Colil. Hijo adoptivo, Llanquileo. Total, cuatro personas.

Pancho Antipan, viudo, tiene una hija casada con Venancio Coñuepan. Nietos: tres. Total, seis personas.

Martin Huenchucoi, casado con Juana Huerapil, con tres hijos, dos casados: Miguel Huenchucoi, casado con Maria Huenupan, tiene un hijo. El otro hijo casado de Huenchucoi es Nicolas Huenchucoi, casado con Marcelina Llancapan y tiene dos hijos. Sobrino, Segundo Huenchucoi, casado con Manuela Huerapil, tiene dos hijos. Total, catorce personas.

Francisco Lepiman, casado con Francisca Colin, con una hija. Madrastra, Juana Huentelen, casada con Chihuin Llancapan. Parientes, Jacinto Chehuin, casado con Jacinta Huenchucoi, con tres hijos, Bartolo Chehuin, soltero. Total, once personas.

Antonio Chehuin, casado con Llanquin Ingles, con dos hijos y un sobrino. Total, cinco personas.

Juan Huiquipan, casado con Antonia Caniulen. Total, dos personas.

Jacinto Llancapan, casado con Francisca Mallon, con dos hijos y tres sobrinos. Madre, Panchilla Ancan. Total, ocho personas.

[411] Chiñurra=señora, en *mapudungun*; así se llamaba a las mujeres chilenas o no mapuche.

Pascual Huenupan, casado con Paillan Callul. Total, dos personas.

Ignacio Chihuaillan, casado con Llanquitrai Inaileo. Hijo, Ignacio 2° Chihuaillan, casado con Juana Cullin, con tres hijos. Sobrino, Juan Paillan, casado con Jurecheo Panchu, con un hijo e Ignacio Paillan. Total, once personas.

Antonio Carrera, casado con Juana Grandon, con nueve hijos. Total, once personas.

Lefinul, casado, con seis hijos. Total, ocho personas.

Como he expresado, la extensión de la isla Huape es de mil ciento ochenta hectáreas distribuidas entre las trescientas cincuenta y dos personas que en ella viven, resulta un cociente de poco más de tres hectáreas.

No es posible, pues, declarar fiscal ningún pedazo de la isla, en que, como se ve, los indios están muy estrechos y cuyo terreno no es en su totalidad cultivable.

Saluda a Ud.

Eulogio Robles Rodríguez[412]

[412] Se puede contrastar este Informe con la investigación etnográfica en Isla Huapi realizada setenta años después por el antropólogo estadounidense Thomas Melville, *La naturaleza del poder social mapuche* (Santiago, Pehuén, 2016).

OFICIO AL INSPECTOR GENERAL DE COLONIZACIÓN E INMIGRACIÓN[413]

Eulogio Robles R.

Temuco, 27 de mayo de 1909

Aunque en varias ocasiones he manifestado al Sr. Inspector las necesidades de esta Oficina, detallándolas también invariablemente en mis Memorias anuales, necesidades que el Sr. Inspector conoce y que tiene la mejor buena voluntad de satisfacer, me veo obligado a representarlas nuevamente a fin de que el Sr. Inspector, si lo estima del caso, lo haga a quién corresponda.

Constantemente estoy recibiendo de esa Oficina comunicaciones en que se me expone que el indígena tal ha comparecido a la Inspección a quejarse que un extraño le ha tomado tantas o cuantas hectáreas de terreno, y se me ordena que proceda a amparar al reclamante a la brevedad posible y de cuenta de lo obrado.

Las órdenes se refieren a asuntos que deben ventilarse en Collipulli, Traiguén, Imperial o Angol.

Como se comprende, no puedo materialmente cumplirlos como es mi deseo, careciendo de auxiliares.

Si me sería posible defender con algún trabajo treinta o cuarenta juicios en Temuco, no es lo mismo que defender siete u ocho en puntos tan distantes, debiendo ser abogado y procurador al mismo tiempo, pues, los plazos establecidos para la secuela de la litis[414] pueden contraponerse y estorbarse.

Bien sabe el Sr. Inspector que las atenciones judiciales no constituyen sino una de las obligaciones a que debo dedicar mi actividad, pues también hay que dedicarla al estudio de los títulos de merced que se expide a los indios, al informe que evacúo al Ministerio y a esta Oficina, a absolver[415] consultas sobre asuntos de indígenas que el público me hace de continuo, a consultas de los indios mismos, y todavía más tengo que advertir que la mayor parte de los asuntos

[413] Este oficio del protector Robles al inspector Urrutia es copiado por el Inspector al Ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización, y lleva el siguiente encabezado: "Señor Ministro: El Protector de indígenas de Temuco por oficio N° 513 de 27 de mayo último, me comunica lo siguiente". Al final del oficio copiado, el Inspector reitera al Ministro las demandas planteadas por el Protector, en los siguientes términos: "Por este motivo me permito reiterar mis diversas comunicaciones en que he pedido se nombren los ingenieros de los Protectorados consultados en el Presupuesto de esta Inspección pues sin ellos es casi imposible defender con éxito a los indígenas; como así mismo los agentes y fondos ya solicitados. Dios guarde a US. [firmado] Y. Urrutia. ARNAD, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización, año 1909, vol. 1436.

[414] = el caso que es materia de litigio.

[415] = resolver.

del Protectorado se resuelven administrativamente, para lo cual hay que dar fatigosas audiencias todos los días.

En las provincias de Malleco y de Cautín, en donde ejerzo mis funciones, hay según el último censo 58.022 indios, distribuidos 11.261 en Malleco y 46.761 en Cautín, y entiendo que no se puede ser muy exigente con el único procurador y abogado a quien está confiada la representación y defensa de los indígenas que dentro de este número ven desconocidos sus derechos.

Si se quiere amparar efectivamente a los araucanos, hay que reorganizar el servicio de su defensa, sin esperar la aprobación de los proyectos de ley pendientes, que, según se me dice, serán vivamente resistidos, procediendo del modo como ha sido creada la Oficina de Mensura de Tierras dictándose un decreto orgánico, y consultados anualmente en la ley de presupuestos los fondos correspondientes.

Pero mientras viene esa organización del servicio, para la diaria atención del él me es indispensable que se den agentes, para distribuirlos, según las exigencias, en los diversos departamentos comprendidos dentro de la zona de este Protectorado, y que se me provea de fondos para los gastos judiciales indispensables.

Sin estos, ni el Sr. Inspector ni el Protector de indígenas de Temuco pueden responder de la eficacia del servicio.

Antes de pasar a otro punto, debo hacer presente al Sr. Inspector que el funcionario encargado de velar por los derechos de los araucanos, a causa de la situación en que se encuentra colocado respecto a ellos, es el consejero, obligado, no solo en sus asuntos domésticos, sino en lo concerniente a la educación de los que desean civilizarse, para lo cual les indico el colegio que deben elegir y los proveo de las recomendaciones del caso para los directores de los establecimientos a que quieran ingresar, proporcionándoles todas las informaciones que necesiten.

El año pasado fui comisionado por el Señor Ministro para preparar a doce jóvenes que ingresaron a la Escuela Normal de Preceptores de Victoria, comprándoles lo que necesitaban y haciéndome cargo de todo lo que era menester para que estos jóvenes se dirigieran sin tropiezo al establecimiento en que debían educarse.

Este año se ha visto también en la necesidad de prestar su concurso a otros que se dirigieron a la Escuela de Artes y Oficios de Santiago.

Estas atenciones me quitan también tiempo.

Pasando al otro asunto importante del servicio, sabe el Sr. Inspector que la ley dispone que el Protector atienda de preferencia el deslindamiento de los terrenos de indígenas, y esta prescripción especial no puede acatarla careciendo de un ingeniero.

Los asuntos de deslinde, ya sea entre particulares e indígenas y entre los indígenas mismos, es uno de los asuntos más complicados que se ventilan en esta Oficina y por desgracia, en la mayoría de los casos, estérilmente.

En el presupuesto actual se consultaron fondos para ingenieros de los Protectorados de indígenas: pero hasta hoy no se han expedido los respectivos decretos de nombramientos.

Cuando esta Oficina necesita de los servicios de un ingeniero, el procedimiento de que hay que valerse es de dirigirse a la Inspección para que se sirva recabar del Ministerio ordene al Sr. Director de la Oficina de Mensura de Tierras, que, a su vez, ordene a algunos de los funcionarios de su dependencia, se ponga a disposición del Protector.

El trámite es engorroso y dilatorio, y mientras se lleva a cabo puede pasar la oportunidad de dichos servicios.

Hace diez días telegrafié al Sr. Inspector rogándole recabara del Ministerio la orden de que se me facilitara un ingeniero por tener necesidad de algunas operaciones en el terreno como cuestiones previas para entablar dos juicios, y hasta la fecha no sé si se haya accedido o no a lo solicitado, y mientras tanto, los indios interesados vienen diariamente a exigirme los atienda.

No sería raro que, cansados de esperar, se dirijan a ese a interponer un reclamo porque no los atiendo, y que me traigan una orden para que proceda a la brevedad posible a amparar sus derechos dando cuenta de lo obrado.

En resumen: necesito se me dé agentes judiciales, se me provea de fondos para los gastos indispensables de los juicios de indígenas, y se me nombre un ingeniero.

La reiteración de comunicaciones de esta naturaleza servirá, a lo menos, para eximirme de la responsabilidad que podría caberme si se me dieran todas las facilidades exigidas para la expedición del servicio, y así mismo como una manifestación de los propósitos que me animan a amparar eficazmente a los araucanos, secundando las miras del Ministerio del Ramo y de esa Inspección.

(Firmado) Eulogio Robles Rodríguez.

CORRESPONDENCIA

CARTAS DE EULOGIO ROBLES A RODOLFO LENZ (1910-1913)[416]

Temuco, 24 abril de 1910
S.D. Rodolfo Lenz
Santiago

Estimado amigo,

tiene Ud. sobrada razón en lo que me dice relativo a la pronunciación de *Epu Ange*, que chilenizándolo se pronuncia 'Epu Angne' o 'Epu Añe', como Ud. dice. La pronunciación 'Epu Agñe' es errata mía, después de escrita, esperaba rectificación.

Notará Ud. que de algunas palabras mapuches empleadas en mis *Guillatunes* no doy explicación alguna: se debe ello a que ya se la ha dado en artículos anteriores.

No vino hoy el joven que desea ir a Chillán. Tan pronto como lo haga, averiguaré sus antecedentes, que los creo buenos, y avisaré a Ud., aunque si Ud. ha dado con Collio, no es necesario enviar a ese joven a Santiago.

Estoy sacando en limpio un *Machilugun*, que es, como Ud. sabe, la ceremonia de la iniciación de los *machis*, "hacer una *machi* nueva", como dicen los indios ladinos. Irá después de una Ñeicurihuen, baile de *machis*, que ya está hecho y que me falta solo entregarlo a mi escribiente. No sé si se haya descrito antes una ceremonia "para hacer *machi* nueva". Tengo la letra de los cantos de las *machis*, en esa ocasión, tomados en "terreno" mismo. Son interesantes. Ud. verá en ellos, como es que el *Pillan* no es dios, sino como lo digo en mis *Guillatunes*, una especie de Esculapio. Debo emplear la palabra generalmente, porque para algunos no difiere de *Guenechen.*

Manquilef se ha puesto a la labor, y encabezará su trabajo con la observación original de Ud. en el sentido de que los chilenos deben la industria del telar a Arauco, no a España.

¿No podría hacer el F.Ch.[417] una publicación extraordinaria para contribuir a la celebración del Centenario? Talvez convendría pensar sobre el punto.

[416] Las cartas originales se encuentran en el Fondo Lenz, Departamento de Francés, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

[417] Se refiere a la Sociedad del Folklore Chileno, fundada en 1909, y presidida por Rodolfo Lenz. En esta sociedad, pionera en América Latina, participaron destacados intelectuales como: Julio Vicuña, Ricardo Latcham, Ramón Laval, Tomás Guevara y Manuel Manquilef.

Estudiando el presupuesto, quien sabe si no se encontraría una partida para el gasto que comportaría la publicación.

No he recibido la entrega 2.- Laval, Cuentos de nunca acabar[418].

Lo saludo su Afmo. Amigo y S.S.

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

24 abril 1910.

Temuco, 30 de abril de 1910
S.D. Rodolfo Lenz
Santiago

Mi estimado amigo,

mil gracias por el trabajo que se va a llevar con mis *Guillatunes*. Acepto con gratitud el honor de las notas suyas, con su firma, que desea poner a mi trabajo.

Le agradeceré se sirva advertir que he prescindido deliberadamente de todo lo que se ha escrito sobre los araucanos para no influir con ideas preconcebidas mis descripciones ni la exposición de las creencias religiosas de ellos. He buscado la espontaneidad como guía para alcanzar la exactitud.

No avanzaría nada con dar a los indios los modelos que Ud. me indica. No los leerían. Mis intérpretes son ocasionales, porque no los tengo cerca de mí, aunque muchas veces me valga de las mismas personas. El intérprete oficial del Protectorado es hombre de alguna edad y no me sirve de nada en mis investigaciones. Sentí mucho la pérdida del antiguo, un joven Urrutia Loncon que tenía sed de aprender y que después de fatigarse todo el día en la Oficina, se hacía tiempo para asistir a una escuela nocturna. Encontró poco el sueldo y yo pude, después de algunas peleas con la Comisión Radicadora, conseguir se le diera una buena hijuela y hoy trabaja en el campo con éxito. Si no tenía la ilustración de Manquilef, en cambio, había en él mucha, muchísima más materia prima. El nombre de Manquilef es Manuel.

No sé si le he dicho en algunas de mis anteriores que el P. Félix [de Augusta] ha recogido muchos trozos de música entre los araucanos y que los publicará.

Hay aquí un joven Sepúlveda, pintor, que fue discípulo de Ernesto Molina, a quien Ud. debió conocer[419]. Molina decía que Sepúlveda tenía gran talento. Este joven, que se dedica a pintar indios, paisajes araucanos, etc., y que tiene el ojo perfectamente educado para esto, me va a ilustrar el libro que publicaré. Salgo

[418] Ramón A Laval, *Cuentos chilenos de nunca acabar* (Santiago, Impr. Cervantes, 1910).

[419] Juan A. Sepúlveda ejercía como profesor de dibujo en el Liceo de Temuco y fue también miembro fundador de la Sociedad Caupolicán. Cf. Tomás Guevara, *Reseña histórica del Liceo de Temuco* (Temuco, Imprenta Alemana, 1902). En 1915 viaja junto a Onofre Colima en representación de la Sociedad Caupolicán para solicitar terrenos fiscales "situados a orillas del Lago Colico para la fundación de una ciudad indígena". Cf. Foerster y Montecinos, *op. cit.*

con él los días festivos a acompañarlo a pintar y me pinta lo que yo le indico. Me ha hecho algunos cuadros que han llamado la atención de los entendidos.

Agradezco lo que me escribe respecto de mi artículo publicado en El Mercurio. No sé por qué no hayan publicado el segundo. En él me he permitido aprovechar, citándolo, algo de lo que Ud. opina sobre los araucanos.

La Sociedad me parece que crecerá. Mal que mal, D. Tomás [Guevara] es buena adquisición. He hablado al Señor Rodolfo Vera Pinto, Profesor de Historia y Geografía de este Liceo para que ingrese. Le di uno de los programas que Ud. me envió. Quedó de enviar solicitud.

Me ha extrañado que no sea consocio el señor Chiappa, que, como Ud. sabe, es hombre de mérito verdadero.

Después de Ud., del P. Félix [de Augusta], del P. Jerónimo [de Amberga], no veo otro más competente en folklore araucano. No sé por qué no escriba. Le he oído ideas mui originales sobre la expansión geográfica de los mapuches. Lo estimo más profundo que D. Tomás, quien, en cambio, lo gana en superficie...

Precisamente en los días de su ausencia, iré a Santiago a alegar ante la Corte Suprema en algunos pleitos mapuches.

Le deseo feliz viaje en la Argentina congratulándome por la representación del F.Ch. [Sociedad del Folklore Chileno]

Descartando a Ud., y al Señor Medina, los otros que irán al Congreso de Americanistas son meros aficionados.

Me es grato saludarlo afectuosamente.

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

30 de abril del 1910.

Temuco, 14 de junio de 1910
S. D. Rodolfo Lenz
Santiago

Muy estimado amigo,

le doy mi bienvenida y lo felicito por su brillante actuación en Buenos Aires de que la prensa ha dado noticia. Lo esperaba.

Lo felicito igualmente por la publicación de la segunda entrega de su Diccionario. Le agradezco su valioso obsequio.

Estuve en Santiago quince días, desde el 16 de mayo hasta el dos del corriente. Me habría sido muy agradable conversar con Ud., pero no supe el día de su llegada.

Su Diccionario lo he aprovechado en lo que me corresponde, como en mis memorias anuales y en publicaciones que he hecho en la prensa.

Me es grato saludarlo y suscribirme de Ud. como atento amigo y obsecuente servidor.

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

14 junio 1910.

Temuco, 3 de agosto de 1910
S. D. Rodolfo Lenz
Santiago

Muy estimado amigo,

ayer tuve el agrado de hacer remitir a Ud. algunos ejemplares de mi último trabajo publicado en los Anales [de la Universidad de Chile] conjuntamente con uno anterior a fin de que Ud. como Presidente de nuestra Sociedad tenga a bien hacerlos distribuir entre los consocios a nombre del autor.

He leído con agrado la primera memoria del F. Ch. [Sociedad del Folklore Chileno]. Veo que se trabaja y que se produce.

Próximamente enviaré a la S. F. Ch. [Sociedad del Folklore Chileno] otro trabajo..., un ñeicurihuen. Para los títulos hay que adoptar la escritura chilena.

¿Por qué no envía a D. Carlos Sadleir un programa? Ingresaría a la Sociedad. Ya le he hablado.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo afectuosamente como amigo y servidor

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

Temuco, 3 agosto 1910.

[Anotación al margen en sentido vertical]

Si no han ido los ejemplares suficientes para ser distribuidos entre todos los consocios, le agradeceré tenga la bondad de decirme los que falten a fin de completar el número.

Temuco, 1 de octubre 1910
S. D. Rodolfo Lenz
Santiago

Muy estimado amigo,

le incluyo mi contribución sobre el Ñeicurihuen [sic] Lo escribo con la ortografía chilena, porque se va usando la palabra entre los chilenos y así la escriben. En el texto puede llevar esa ortografía, en las notas usaremos la otra. Le ruego la haga leer en el F.Ch. [Sociedad del Folklore Chileno].

"Poco a poco, hila la vieja el copo". Y así yo, paso a paso, aunque tardíamente, voy concluyendo mi modesta obra.

El P. Félix ha publicado recientemente, Ud. lo sabe, una valiosísima contribución al Folklore Araucano. Mis trabajos son de índole muy secundaria y talvez no se oponen a esas investigaciones de más vuelo.

Como Ud. verá, va en una nota la fórmula del juramento araucano. Fue lo primero que aprendí de la lengua, en fuerza de oírlo diariamente en mi oficina[420].

¿Cómo va Ud. de trabajos? ¿Nos prepara su competencia y dedicación alguna sorpresa?

Que se conserve bien.

Lo saluda su Afmo. amigo y servidor

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

Temuco, 1° de octubre de 1910.

P.D. Le remito el original del canto mapuche escrito por un intérprete.

¿Qué será de la impresión de mi trabajo anterior?

TEMUCO, 19 DE OCTUBRE DE 1910
S. D. RODOLFO LENZ
SANTIAGO

Muy estimado amigo,

hace como quince días que tuve el gusto de remitir a Ud. un trabajo folclórico sobre los araucanos en que describo la ceremonia que denominan Ñeicurihuen

[420] La nota referida es la siguiente: "Vamos a dar aquí el texto del juramento de los mapuches. No tienen fórmula sacramental; pero en el fondo coinciden las diversas fórmulas que hemos oído a indígenas provenientes de los distintos puntos de la Frontera.

Chau iñché kulpalan, tafa tañi epu né rume, // Padre yo culpa no, estos mis dos ojos jamás,

Tafa tañi piuke meu rume, tafachi antu men rume, tafa // Este mi corazón por jamás, este sol por jamás, esta

Tañi lonko meu rume; chau, fareneen; lledkumen anai; //Mi cabeza por jamás; padre, favoréceme, suéltame;

Chau, amutuan tañi ruka meu, petu numai tañi fotam, // Padre, volveré mi casa a, todavía llorarán mi hijo,

Tañi ñawe, tañi kure, iñche tañi duam; putuli tañi ruka // Mi hija, mi mujer, yo mi asunto; si llego mi casa

Meu, ayuuai tañi pichikeche, tañi kure kafei. Chumal // A, se alegrarán mis chicuelos, mi mujer también. ¿Por qué

Koilatuafun iñche? Wenunanemapun tañi duam meu // Mentira yo? Arriba gobierna tierra (=Dios) su obra por

Malei kom che, fei meu malei kai nillatun // hay toda gente, por eso hay también fiestas religiosas (rogativas).

Traducción libre: "Padre, no soy culpable, lo juro por mis dos ojos que jamás lo he sido: lo juro por mi corazón que jamás lo he sido; lo juro por mi cabeza que jamás lo he sido; lo juro por el sol que jamás lo he sido. Padre, por favor, suélteme. Padre, permite que vuelva a mi casa, pues, mi desgracia la lloran mi hijo, mis hijos y mi mujer. Si llego yo a mi casa se alegrarán mis pequeñuelos y mi mujer. ¿Por qué mentiría yo? Aquel que domina el cielo y la tierra, el Autor de todos los hombres. Aquel a quien se le hacen rogativas, sabe que no soy culpable".

Eulogio Robles cierra la nota indicando que el texto fue proporcionado por el intérprete del Protectorado de Cautín, José Manuel Huento. Cf. Eulogio Robles, "Ñeicurehuen. Baile de Machis", en *Anales de la Universidad de Chile*, tomo 128 (Santiago, enero-junio 1911), pp. 549-550.

[sic]. No sé hasta hoy si ese trabajo ha llegado a su poder. Me sería muy molesto su extravío, porque tendría que rehacerlo.

Le ruego me diga si lo recibió.

Deseándole buena salud y buena fortuna, me suscribo de Ud. como afectísimo amigo y S.S.

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

19 octubre 1910.

Temuco, 16 de noviembre de 1910
Sr. Dr. Don Rodolfo Lenz
Santiago

Muy distinguido amigo,

no dirá Ud. que soy socio platónico del F.Ch. [Sociedad del Folklore Chileno]. Pienso aburrirlos con mis "costumbres". Este trabajo lo tenía escrito desde hace más de un año y por esto, le puse la fecha en que redacté el borrador: 9 de mayo de 1909.

No sé si se haya descrito antes esta ceremonia. Como se lo he dicho a Ud., quiero prescindir de libros y olvido deliberadamente todas mis lecturas. Escribo lo que veo y lo que oigo. Mis libros son los mapuches. Esto por ahora. Más tarde, vendrá algún estudio sobre la evolución de las costumbres y las creencias.

Me pasa, doctor, algo que entiendo pasa a todos los que estudian: mientras más avanzo en la observación de los mapuches, noto que menos sé. Se me presentan hoy, con más conocimiento, oscuras las cosas que antes veía claras.

Tiene Ud. razón: la palabra no es ñeicurihuen, como la escribí en mi trabajo anterior, sino ñeicurehuen.

He consultado el punto con muchos indios y todos están de acuerdo con Ud.

Me es grato saludarlo y ponerme afectuosamente a sus órdenes

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

16 nov. 1910.

Temuco, 23 de noviembre de 1910
Sr. Dr. D. Rodolfo Lenz
Santiago

Estimado amigo,

recibí la carta del Señor Juan B. Ambrosetti que me remitió Ud. Es sobradamente benévola para apreciar mis trabajos.

Me dice en uno de sus párrafos:

"mucho me ha llamado la atención el dato sobre la creencia (se refiere a mi *Machitun*) que puede ser causa de enfermedad la pérdida del espíritu del paciente. Este punto lo he tratado ya hace algunos años en mis notas de Arqueología Calchaquí, pág. 17, que desgraciadamente se me han agotado ya. Ud. podrá examinar algún ejemplar en casa del Dr. Lenz que las posee o en alguna colección del Boletín del Instituto Geográfico Argentino, Tomo xvii, pág. 429. La identidad de esta superstición en Araucanía y en Calchaquí es de suma importancia y le recomiendo que compare al mismo tiempo que trate de ampliar más y de aportar otros datos al respecto, con lo cual Ud. podría hacer un estudio comparativo que sería muy útil y que siento no poder hacer por falta material de tiempo y de elemento".

Volviendo al trabajo que le remití, noto que Ud. escribe dos veces *Machi<u>tu</u>luhun*, y no *Machiluhun*: he consultado a los mapuches, y entre ellos al intérprete del Protectorado y pronuncian *Machiluhun*, que ellos traducen "hacer *machi* nueva".

Lo saluda afectuosamente su Afmo. amigo y S.S.

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

23 nov. 1910.

Temuco, 13 de enero de 1911
S. D. Rodolfo Lenz
Santiago

Mi distinguido amigo,

recibí su apreciable de fecha 11 y el paquete con los impresos. Agradezco a Ud. profundamente la corrección de pruebas y las notas.

Debo hacerle una observación, y es que Ud. me permitirá que no esté de acuerdo con Ud. acerca de las dudas que manifiesta sobre si existía entre los mapuches la leyenda que transcribo en mi trabajo. Además, Ud. dice que la conservación de la leyenda se debe exclusivamente al hecho de que el P. Rosales la haya narrado en su Historia.

Desde luego: es evidente que cuando el P.R[osales] tomó la leyenda la recogió de entre los mapuches. Además, *Cai Cai* y *Tren Tren* figuran en otras obras anteriores a Rosales, y *Cai Cai* y *Tren Tren* son elementos de la leyenda.

Ud. aduce como antecedente para creer que la conservación de la leyenda se debe exclusivamente al hecho de haberla narrado Rosales, el que Ud. la haya oído a unos indios de Ilicura, quienes manifestaron a Ud. que sí la habían escuchado a un señor cura de Angol. Yo he oído la leyenda a indígenas de los departamentos de Arauco, de Traiguén, de Temuco y de Imperial, a indios de la cordillera de la costa, a individuos que es probable no hayan estado en contacto con lectores de la *Historia* de Rosales. Y todavía Rosales solo fue conocido por una parte insignificante de la gente medianamente culta de la era colonial,

y hoy lo conocen solo los que nos ocupamos de estudios de costumbres, de lingüística o de historia.

Con todo, empleando el procedimiento minucioso que he seguido, voy a extender mis investigaciones a las provincias de Valdivia y Llanquihue, y a profundizarlas en la de Malleco.

Agradeceré a Ud. se sirva aun hablarme sobre este particular, que es asunto interesantísimo. Me he hecho un esfuerzo para no admitir inmediatamente el [modo] de pensar de Ud.

Respecto de los ejemplares del trabajo, lo mejor es que Ud. me envíe veinticinco y el resto lo haga poner en la Librería Inglesa, tomando personalmente para Ud. el número de ejemplares que desee.

Ojalá pase Ud. buenas vacaciones y que reúna energías para sus labores tan fructíferas del resto del año.

Reiterando mis agradecimientos, tengo el agrado de saludarlo con el mayor afecto

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

Temuco, 13 de enero de 1911.

Yumbel, 29 de marzo de 1911
S. D. Rodolfo Lenz.
Santiago

Muy estimado amigo,

de Temuco me remitieron a ésta, en donde tomo descanso por algunos días, la circular de la S.F.Ch. [Sociedad del Folklore Chileno] de fecha 25 del presente. Acuso recibo. Devuelvo firmada la esquela anexa.

Es lástima que algunos consocios sean tan "tímidos" para pagar sus cuotas. Debemos a toda costa luchar por la marcha próspera de la Institución. Como a Ud. se lo he expresado, si hay necesidad de alguna erogación extraordinaria, no se olviden de mí. Con gusto la suscribiré. Sírvase decir, se lo ruego, al Tesorero me mande a Temuco el recibo de la contribución anual, me es más cómodo pagarlo de una sola vez.

Lamento no poder concurrir a la sesión general del dos de abril. Ojalá se me remitieran los números de la Revista que no me han sido enviados.

Lamento, doctor, que no se acompañe a Ud. por los consocios con todo el entusiasmo debido en la labor nueva que Ud. ha abierto a los estudiosos de este país.

¡No deje perecer su obra!

Lo saluda afectuosamente su amigo y servidor

Eulogio Robles Rodríguez

Temuco, 18 de Junio de 1911
S.D. Rodolfo Lenz
Santiago

Muy distinguido amigo,

acuso recibo de las tres primeras entregas de la Revista correspondientes a este año. Recibí todas las del año anterior. ¿Por qué no me hizo el honor de ponerle notas a mi *Neicurehuen*? Para no imponer a Ud. pérdida de tiempo, le suplico ordene en la Imprenta se me remitan los pliegos de prueba de mi artículo *Machiluhun*, como lo hacían antes.

De las publicaciones que fueron puestas a disposición de la Sociedad, no recibí las de Gabino Ezeiza y Godofredo Daireaux que se enumeran en la Segunda Comunicación a los miembros de la Sociedad.

Pronto le remitiré nuevos trabajos. Parece que el Sr. Amunátegui es hombre más fácil que D. Valentín [Letelier] por las franquicias nuevas a la Sociedad y por la mayor rapidez de las publicaciones.

Aprovecho la oportunidad para rogarle que aconseje a mi hermano, que es alumno suyo, en el sentido de que sea perseverante. Sé que Ud. tiene ascendiente sobre él. La palabra de un profesor de prestigio puede determinar el porvenir de un joven. Mi hermano es flojo. Actualmente es empleado en la Colonización con poco sueldo. Yo deseo que se reciba de profesor para que tenga más horizontes.

Lo saluda su Afmo. amigo

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

Temuco, 6 de julio de 1911
Señor Doctor
D. Rodolfo Lenz.
Santiago

Muy distinguido amigo,

tengo el gusto de remitirle otra contribución al Folklore Araucano. Como Ud. me lo ha observado más de una vez, las costumbres que describo no son de seguro tal como eran antes; pero yo describo las actuales, infeccionadas de extranjerismos. Quizás es útil un trabajo en esta forma pues así se estudia experimentalmente como poco a poco el influjo de una raza de cultura superior va penetrando en el modo de ser de una raza inferior en cultura hasta modelarla a su imagen, y absorberla completamente.

Don Tomás [Guevara] nos presenta a los indios aislados sin sus múltiples relaciones con los civilizados y como invulnerables al medio ambiente.

Tuvo que resultar de esto, y resultó efectivamente, una imagen deformada. No son los indios araucanos los que pinta ese caballero.

Estoy sacando en limpio una descripción del "juego de chuecas" que pronto irá.

Tengo en mi poder copiosas observaciones y correcciones que mi muy distinguido y querido amigo –no me crea pechoño[421]– el Padre Jerónimo [de Amberga], me ha remitido. Al padre no le han gustado los refranes de D. Tomás.

Si Ud. lo quisiera, le podría facilitar por algún tiempo el manuscrito para que Ud. tomara copia o lo completara con las observaciones que Ud., de seguro, tiene escritas sobre esos refranes.

Deseándole mui buena salud, y muchos alientos para el trabajo, lo saluda afectuosamente su amigo y servidor

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

Temuco, 6 de Julio de 1911.

Temuco, 19 de octubre de 1911
Sr. Doctor
D. Rodolfo Lenz
Santiago

Muy distinguido amigo,

tengo el placer de acompañarle un trabajo sobre "Juego de chueca", de la serie de mis *Costumbres y Creencias Araucanas.* Como todos los que he hecho, es copia fiel del natural. Le ruego lo haga leer en la Sociedad de F.Ch. [Sociedad del Folklore Chileno]

Respecto a lo que me preguntaba en su anterior relación a si podría poner como nota en mi trabajo sobre "Una reunión publica" un acápite de una carta dirigida a Ud., puede Ud., doctor, disponer lo que guste.

Leí la polémica de los colegas del Folklore con la prensa clerical[422]. Son de mui mala fe, estos "pechoños", doctor. Comenté el caso con el Padre Jerónimo [de Amberga], que, como hombre razonable y culto no se encuentra en este punto de acuerdo con sus correligionarios.

La prensa clerical se colocó en situación peligrosa porque se le pudo contestar que en materia de pornografía no son los católicos los que pueden disparar piedras al tejado del vecino, porque el propio es de vidrio.

Los niños católicos, y yo entre ellos, cuando lo eran, tuvieron que aprender los mandamientos de la ley de Dios, y toparnos con el sexto.

Las oraciones que se enseña a la infancia están plagadas de lo que la prensa clerical podría tildar de pornografía. Así se dice en una de ellas que la Madre de Dios fue "virgen antes del parto, en el parto y después del parto".

[421] = mojigato, santurrón.

[422] Se refiere a los ataques públicos de la prensa clerical a la Sociedad de Folklore Chileno, por publicar adivinanzas populares que los columnistas de la Iglesia consideraron "pornográficas". Para más detalles de la polémica, véase Jorge Pavez O., *Laboratorios etnográficos. Los archivos de la antropología en Chile (1880-1980)* (Santiago, U. Alberto Hurtado, 2015), pp. 151-158.

Esos niños están de continuo oyendo hablar de virginidad, ¿no se les ocurrirá también la idea opuesta?

O se les explica lo que es "virgen" o no se les explica. Si lo primero, se cae en la malicia, si lo segundo, se acostumbra al niño a repetir palabras que no entiende, lo que es mal sistema educacional.

Nada más pernicioso que la confesión para el pudor. Yo recuerdo algunas preguntas pornográficas relacionadas con la pubertad que me hizo el clérigo con quien por primera vez me confesé. No entendí la pregunta, y el fraile me explicó su contenido en forma crudísima.

Las historias sagradas de Duruy y de Drioux que se pusieron en mis manos cuando niño están plagadas de pornografía.

¿Cómo sigue la marcha del Folklore Chileno?

Entiendo que no será absorbida nuestra Sociedad por la reciente de Historia y Geografía.

Yo creo que para el mejor éxito de las labores debe conservar su autonomía.

Deseándole buena salud y prosperidad, tengo el agrado de suscribirme de Ud. como atento amigo y S.S.

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

Temuco, 19 de oct. de 1911.

Temuco, 10 de febrero de 1912
S.D. Rodolfo Lenz
Los Guindos

Estimado amigo,

contesto, conforme a sus deseos, inmediatamente su apreciable de fecha 8.

Respecto a sus dudas acerca de la escritura de mi escribiente, tengo el agrado de decirle:

1.- Es Ancavil, no Aucnavil [sic], es decir, el indio ese no es culebra alzada[423]

2.- Sinónimo de *prahue*[424] es *praprahue.* Me lo acaba de decir mi intérprete.

Hay también la palabra *purra-prahue* que Ud. acertadamente indica y que mi intérprete la traduce "escala para bailar"

3.- Es *quemuquemu*, no *queumqueum.* Es este el otro nombre del *rehue*, es decir, del conjunto formado por el *prahue*, las ramas de laurel y de canelo y del cuero de oveja.

Espero ansioso sus adivinanzas y su grupo de cuentos populares.

El quince voy a Lonquimay, en parte por ver a "mi gente" a la cual están molestando, y en parte para recoger material folklórico.

[423] Aunque está mal deletreado en el original, el autor alude al nombre Aucavil: *Awka* = alzado), *Vil[u]* = culebra.

[424] *Prawe* = escalera.

Estuve en Llaima y pasé la Cordillera y me interné quince leguas en el territorio argentino de Neuquen. Algo recogí, pero no mucho, como lo esperaba.

En mi viaje a Lonquimay haré la descripción del *guillatúe-pehuen* que los chilenos denominan "El Pino Hilachento" o simplemente "El Tiriento".

Ud. sabe lo que es esto.

Lo saluda su Afmo. amigo y S.S.

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

Temuco, 10 de feb. 1912

Temuco, 4 de abril de 1912
Sr. Doctor
D. Rodolfo Lenz
Santiago

Muy estimado amigo,

hace mucho tiempo a que Ud. tuvo la bondad de anunciarme el envío de un estudio de Ud. sobre los cuentos populares chilenos y aun cuando he leído la critica que de su importantísimo trabajo hace Omar Emeth en El Mercurio, no he tenido el gusto de recibirlos. Me permito recordarle la promesa.

¿Cuándo reanuda las sesiones la Sociedad F.Ch.[del Folklore Chileno]? tengo algo que mandar.

No ha llegado aun a mi poder el recibo de la cuota anual. Parece un tanto remiso el Tesorero.

Tengo el agrado de saludarlo muy afectuosamente.

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

Temuco, 4 de abril 1919

La Serena, 2 de mayo de 1913
Señor Doctor
D. Rodolfo Lenz
Santiago

Mi distinguido amigo,

hacía mucho tiempo que no tenía noticias de nuestra Sociedad F.Ch. [del Folklore Chileno] hasta hoy que he recibido una tarjeta del Secretario en que me pregunta si acepto la fusión con la de Historia y Geografía.

Hace también tiempo que no tengo el placer de saber noticias de Ud.

Muchísimo le agradecería se sirviera indicarme qué últimos trabajos ha repartido la Sociedad F.Ch.

Oportunamente, a mi llegada a ésta, comuniqué a Ud. mi cambio de domicilio, ofreciéndole mis servicios en ésta que tengo el gusto de reiterar con la presente.

Lo saluda su Afmo. amigo y S.S.
Eulogio Robles Rodríguez [firma]
La Serena, 2 de mayo de 1913
Casilla 445

La Serena, 14 de agosto de 1913
Señor Doctor
D. Rodolfo Lenz
Santiago

Muy distinguido amigo,

tan pronto como me instalé en esta tuve el agrado de comunicar a Ud. mi cambio de domicilio y de ocupaciones, ofreciéndome en lo que pudiera Ud. ocuparme.

Revisando mis libros, me he acordado que no se me remitieron las últimas publicaciones folklóricas. Yo solo tengo hasta el "*Machiluhun*", que es trabajo mío. Lo que se publicó después no ha llegado a mis manos. Le suplico quiera Ud. hacer corregir esa omisión. Deseo con vehemencia no tener trunca la colección de la Revista de Folklore Chileno.

¿Cómo le va de trabajo?

Aprovecho la oportunidad para saludarlo mui afectuosamente
Eulogio Robles Rodríguez [firma]
Serena – casilla 445 – 14 agosto 1913

La Serena, 22 de diciembre de 1913
Señor Doctor
D. Rodolfo Lenz.
Santiago

Muy recordado amigo,

siento mucho la noticia que Ud. me da acerca del decaimiento del entusiasmo en la S. de F. Ch. [Sociedad del Folklore Chileno], precisamente cuando estaba dando buenos frutos y cuando por la abundancia de los trabajos que alcanzaron a imprimirse, hacía presumir que cada día tomara mayor vuelo.

A pesar de lo pesado y de lo impostergable de mis tareas, ya tengo aquí apuntes para un regular tomito, que publicaré luego que haya dado la última mano a mis "Costumbres araucanas" que pienso publicarlas reunidas en un libro. Antes de la publicación de lo que tengo sobre folklore de Coquimbo, debo

también hacer un trabajo de índole profesional, un tratadito sobre la administración de justicia en los juzgados inferiores, a los cuales estoy en la actualidad, constituido en visita. Pero no por esto desperdiciaré los abundantes apuntes reunidos en esta región, apuntes que irán enriqueciéndose con el tiempo.

Me interesan vivamente sus labores ¿cómo va de trabajos? Ojalá la salud lo ayude en provecho de la cultura chilena, la que le es deudora a Ud. de muchísima gratitud.

Recibí oportunamente su "Grupo de Consejas Chilenas" y sus "Tradiciones e ideas de los Araucanos acerca de los Terremotos". Son interesantísimos.

Aun no puedo empastar el tercer tomo de la Revista de Folklore: de él solo tengo sus "Consejas" que forman las entregas 1ª a 3ª y mi "*Machiluhun*" y "*Trabun*" que forman la cuarta entrega. ¿Cuál es el trabajo que sigue?. Entiendo que debe ser el de [Daniel] Aeta, que no ha llegado a mis manos, como tampoco el índice.

Para no molestar a Ud. más sobre el particular, le ruego me diga a quien debo dirigirme para poder completar este tomo.

Le agradeceré me indique la dirección del señor Aeta.

Del cuarto tomo sólo tengo el folleto de [Desiderio] Lizana "Como se canta la poesía popular"

¿Hay otras publicaciones para este tomo? ¿Cuál es hoy el Directorio de la Sociedad?

Perdóneme tantas preguntas. Ellas le demostrarán, por lo menos, que quien las hace es un entusiasta alumno suyo en el ramo del Folklore.

Hay en la Corte de la Serena un Ministro, el Señor Carreño Gómez, muy aficionado a estos estudios y desearía me dijera si podría adquirir para él la colección completa de la Revista y cuánto vale, y a quien podría dirigirme con dicho objeto.

Le deseo muy buenas pascuas y muy feliz año nuevo.

Lo saluda muy afectuosamente su amigo y servidor

Eulogio Robles Rodríguez [firma]

La Serena (casilla 445).

22 de diciembre de 1913.

COLUMNAS DE PRENSA
(1912-1923)

RAZA ARAUCANA. DON MANUEL LABBÉ. SOCIEDAD CAUPOLICÁN[425]

MANUEL MANQUILEF G.

El 12 del presente asumió sus funciones de Protector de Indígenas de esta provincia don Manuel A. Labbé, ex-Protector de Arauco.

Habiéndosele imputado algunos cargos por los indígenas de Arauco, nos hemos concretado a indagar lo que haya de realidad acerca del particular.

Hemos conferenciado con personas competentísimas en lo relativo a la propiedad indígena y acerca de la actuación que le cupo al señor Labbé en la defensa de los intereses que le confiaran.

De una correspondencia enviada por un distinguido abogado de Concepción a uno de nuestros amigos extractamos lo siguiente:

> "En los números correspondientes a los días 24 y 26 del presente mes próximo pasado, aparecen en *El Diario Ilustrado* sueltos que afectan a la conducta funcionaria del Protector de Indígenas de la provincia de Arauco, don Manuel A. Labbé. En calidad de abogado en segunda instancia de las causas que vienen de ese Protectorado y por apreciar de muy cerca la labor de ese Protector, me he decidido a dirigir estas líneas con el objeto de rectificar las informaciones suministradas y a que se refieren aquellos párrafos.
>
> Quien quiera imponerse en forma auténtica del modo como desempeña su puesto el Protector de Indígenas de la provincia de Arauco no tiene más que revisar los numerosos expedientes que a su actividad se encuentran pendientes en las Secretarías de la Ilma. Corte Suprema, de la Ilma. Corte de Apelaciones de esta ciudad y de los Juzgados de Lebu y Cañete, como también de los fallos favorables a los intereses de los indígenas en ellos recibidos.
>
> La verdad de aquellas quejas, a mi juicio, se encuentran en los intereses particulares que se ponen en juego y que se consideran lesionados con la actitud que tiene que adoptar el Protector para defender a los indígenas en contra de las usurpaciones de los particulares, y al carácter de los propios indígenas que hábilmente es aprovechado por los representantes de esos intereses particulares para hacer una campaña como lo que se manifiesta en aquellos párrafos.
>
> Y sobre este particular cabe señalar un dato curioso y muy revelador: precisamente esta campaña en contra del nombrado Protector se viene realizando

[425] *La Opinión del Sur*, Temuco, 21 de diciembre de 1912.

de tiempo en tiempo, a fines de cada año, en las vísperas del nombramiento que tiene que recibir del Supremo Gobierno al iniciarse el nuevo año; pero ella ha sido inoficiosa y tendrá que seguir siéndolo.

Por último, la labor del señor Labbé ha sido apreciada por el Supremo Gobierno, pues ha sido ascendido al Protectorado de la Provincia de Cautín".

Hemos creído no dejar en silencio la exposición precedente por ser debida a la pluma de un inteligente e ilustrado funcionario.

Por otra parte, hemos tenido oportunidad de conversar con el señor Labbé y con abundancia de datos nos pintó los embustes y traiciones de que son objetos los aborígenes de Arauco.

La Sociedad Caupolicán en su última sesión, acordó su Directorio ir en masa a dar la bienvenida al recientemente ascendido a Protector de Cautín, don Manuel A. Labbé.

En esa misma sesión de la Sociedad Caupolicán, el activo tesorero de la institución, don Jorge Hernández, leyó un hermoso discurso en que daba cuenta de los socios incorporados durante el año en curso.

Nos permitimos insertar los acápites siguientes por envolver ellos, en cierto modo, la labor misma de la sociedad.

"Al terminar mi periodo de tesorero, doy las gracias por la confianza que me habéis dispensado. Al mismo tiempo tengo el placer de comunicaros que en el año que termina se han incorporado 269 socios.

Estos han venido de diferentes partes: Así los hay de ultra cordillera, de Llaima, Villarrica, Victoria, Perquenco, Angol, Cañete, Lautaro, Pillanlelbun, Cajón, Temuco, Imperial, Carahue, Padre de las Casas, Metrenco, Quepe, Freire, Pitrufquen, Gorbea, Lastarria, Loncoche, La Paz, Lago Ranco, Futrolhue, Valdivia, Río Bueno, La Unión, Osorno y Puerto Montt".

La palabra alentadora de esta sociedad indígena, que tan solo persigue el fin de propagar la necesidad imperiosa que hay en civilizar a los araucanos, nos pone de relieve los esfuerzos que gastan por vencer el sin número de dificultades los entusiastas socios de la Sociedad Caupolicán, Defensora de la Araucanía.

M. M. G.

Diciembre 18 de 1912.

LOS INDÍGENAS SE QUEJAN. OBSERVACIONES INTERESANTES. UNA NOTA AL MINISTRO[426]

Manuel A. Neculmán

Excmo. señor:

Ponemos en conocimiento de V.E. que ante el Directorio de la Sociedad Caupolicán, se ha presentado el indígena Mariano Calful, actual jefe de la reserva de José María Melillan, del lugar denominado Colico de este Departamento de Temuco, exponiendo que fueron radicados el 4 de octubre de 1911 en una extensión que en el Título de Merced se hizo figurar con 146 hectáreas, pero lo que realmente tiene alcanza 220, según mensura del ingeniero del Protectorado de Indígenas, cuyo informe fue pasado con fecha 1º de noviembre próximo pasado a la Inspección General por el Protector, señor Eleazar Bravo, y que no obstante haber sido trazada la primitiva línea divisoria por el ingeniero de la Comisión Radicadora, señor Silva Rivas, después de trascurrido varios años, valiéndolas [sic] de un señor Calvo, ingeniero de Comisión Radicadora, ha hecho trazar una nueva línea, procurando despojar a los indígenas de una considerable extensión del mejor suelo con que cuenta la reserva para el futuro, y que el mismo señor Silva Rivas, hace como ocho días hizo destruir el cerco que los indígenas estaban haciendo en la legítima línea y ordenó a sus inquilinos que hicieran el cerco en la línea trazada últimamente, amenazando a los indígenas de llevarles presos si se oponían.

Al procederse con los indígenas en la forma expuesta, Excmo. S., es en la seguridad del apoyo con que cuenta el concesionario, señor Silva Rivas, de parte de la Comisión Radicadora don Leoncio Rivera, ex abogado de dicha concesión y que, últimamente, por no aparecer como tal ha hecho traspaso a su sobrino don Domingo Rivera, cuya oficina funciona en la casa del primero y las defensas son en común, según se manifiesta por el aviso en [el periódico] "El Sur" que se adjunta, como también por la defensa que hace don Domingo Rivera a favor de la concesión Silva Rivas ante el Juzgado de Letras contra la indígena Rosa Carilaf y otros; y bajo esa misma influencia, el presidente de la Comisión Radicadora, refiriéndose a la solicitud enviada a V.E. por el anterior jefe de la referida reserva de Colico, José María Melillan, pasó un informe a

[426] "La Sociedad Caupolicán ha elevado la siguiente nota al Ministerio de Colonización", *La Época*, Temuco, 12 de diciembre de 1915.

la Inspección General afirmando que, "al accederse conforme a lo solicitado, quedarán los indígenas con más de mil hectáreas lo cual no considera lógico", pero esta falta de verdad, Excmo. Señor, que ha causado tan grave perjuicios a los indígenas, ha quedado en descubierto con la mensura efectuada por el ingeniero del Protectorado de Indígenas, señor Manterola, quien ha constatado que existen solamente 220 hectáreas y no miles, ni tampoco 146 como en el Título de Merced que, por error o premeditada mala fe se hacía figurar, y validos de este proceder inexplicable, se pretende despojar a los indígenas del suelo, que según el Título de Merced y el concepto del señor Silva Rivas y el Presidente de la Comisión Radicadora se considera sobrante.

Al permitir[se] Excmo. Señor, semejante proceder, o si se deja puniblemente despojar al indígena por el hecho referido, sería sentar un precedente cien veces más funesto para nuestra desgraciada raza, que la misma radicación, porque es raro el título que coincida con la escasa extensión de suelo que se ha dejado al indígena, y está de manifiesto que la radicación se ha efectuado en las más malas condiciones, sin tomar en cuenta para nada lo dispuesto en la ley de radicación.

No es posible, Excmo. Señor, que nuestra raza continúe bajo el capricho de un funcionario que no tiene el menor escrúpulo de faltar a la verdad y engañar a sus superiores con el objeto de perjudicar al indígena y favorecer a los particulares a quienes defiende, y que está más preocupado de sus propios negocios que a la atención de los deberes que el Supremo Gobierno le ha confiado, hecho que se manifiesta con las publicaciones que se acompaña, y como los antecedentes de reclamo de los indígenas de Colico obran en poder de la Inspección General, el Directorio de la Sociedad Caupolicán ruega al señor Ministro se digne hacer que se ampare a los referidos indígenas en su primera línea que [corresponde] con el diseño adjunto y que dará una idea a V.E. de la injusticia con que se procede.

Los perjuicios que se causa, Excmo. Señor, a los indígenas en estos reclamo, son considerables, por lo que es de necesidad que el Supremo Gobierno tome una pronta y enérgica medida.

Temuco, diciembre 2 de 1915.

(Firmado) Manuel A. Necul

DON PEDRO MONTT Y UN PROTECTOR DE INDÍGENAS. NOBLES IDEALES. IRONÍAS DE LA SUERTE[427]

ARMANDO MORAGA D.

Don Pedro Montt fue un hombre de nobles ideales. No pudo, sí, realizarlos durante su vida laboriosa y fecunda. Pero vio, en cambio, con la dolorosa inquietud del que desea con fervorosa confianza el cumplimiento de sus ideales, que la realidad triste de las cosas humanas, los odios y pasiones de los hombres, y hasta pequeños y bastardos intereses del momento, habían sido poderosos abortos, en germen, [de] las puras y grandes aspiraciones, que con santa unción deseaba ver cumplidas, para grandeza de la patria, el Presidente Montt.

Don Pedro Montt amó con amor fecundo y paternal, la raza aborigen en Chile.

No olvidó nunca, el señor Montt, corazón magnánimo, que la raza araucana era también la suya, y no olvidaba tampoco que los descendientes enfermos de la raza más noble y valiente de la América arrastraban su vergüenza y pobreza, triste y melancólicamente, por las selvas de Arauco.

Don Pedro Montt impulsó con inquebrantable tenacidad y firmeza proyectos de ley inspirados en el mejoramiento social y económico de los nativos de Chile. Pero como he dicho, la muerte cegó su actividad fecunda, dejando la vida con la dolorosa inquietud del que había alimentado la engañosa ilusión de todos como él, serían buenos y nobles.

El deseo de hacer algo de interés inmediato y positivo en favor de los mapuches, le hizo llamar a Santiago a un Protector de Indígenas.

Oí de labios de este las razones de todo punto interesantes que habían pasado entre él y el señor Montt, siendo la sustancia de aquella conversación, la que indicará este artículo con la consiguiente variación de forma.

Don Pedro lo recibió en audiencia privada, con la sencilla modestia de los hombres que no necesitan recurrir a falsas exterioridades, porque valen de sí mismos.

– ¿Qué podemos hacer, díjole, en pro del bienestar material y social de los indígenas de que Ud. es Protector? Y don Pedro, al decir esto, elevaba sus ojos pequeños y negros, de mirar agudo y triste en las pupilas de los ojos pequeñitos y vivos de mi estimado amigo, Don...

– ¿Me permite S.E. expresar mi opinión con entera franqueza?

[427] *El Diario Austral*, Temuco, 28 de diciembre 1919.

– Pero hombre, si lo he llamado precisamente para eso, para que hable con entera libertad, contestó el Presidente.

– Con la confianza que V.E. me da, me atrevo a decirle que la medida eficaz y rápida que debe adoptarse, a fin de poner término al grave problema indiano, es la de acabar con éstos...! ¡Qué dice hombre, dijo el Presidente, con temblor agitado y nervioso en la voz colérica[428], que casi fue bastante a poner miedo en el pecho de mi excelente amigo ¡Cómo Ud., protector de indígenas, aquí en mi propia presencia, continuaba el Presidente, con creciente enojo, tiene la osadía de decir tal inconsecuencia!

El Protector no había perdido más de [sic] por un instante, la suave y risueña quietud de su carácter envidiable, y así, con muy concedidas [sic] razones, rogó al Exmo. señor Montt que le permitiera terminar su pensamiento, que, de seguro, no había tenido la suerte de explicarse debidamente.

No digo yo, prosiguió el Protector, que debamos terminar este problema cortando la cabeza a todos los mapuches, sino que debe ponerse término inmediato al régimen funesto y desgraciado que hoy impera en la legislación que rige la propiedad indiana.

Y así repito que no debe haber ya más indígenas o naturales, que tal calificativo es denigrante y que él fue abolido solemnemente en los albores de nuestra vida republicana, por O'Higgins.

El imperio de las leyes debe pesar en toda su amplitud sobre todos los ciudadanos de Chile, sin distinción de castas, credos o razas, como lo dispone nuestra Carta Fundamental.

¿Es concebible, decía aquel Protector, con creciente entusiasmo y elocuencia, es concebible que hoy, en el siglo del progreso y de la luz, como se le llama al que vivimos, hay seres humanos que debido al régimen legal en que viven, sean rémora y estagnación para el progreso y engrandecimiento de la zona más bella y rica del país?

¿Es aceptable que el régimen de comunidad forzada en que viven esté en uso, que no pueden hacer transacción alguna sobre sus propiedades, que éstas estén fuera de las casas comerciales, que, por esto mismo, sean los mapuches la presa fácil y codiciada de los mil usureros que pululan y se enriquecen, mediante el dolor y las lágrimas de un pueblo por mil razones digno de mejor sueño y de mejores tiempos? ¿Es humano aceptar, no subleva esto acaso la sangre ver cómo traficantes audaces e inescrupulosos han amasado dinero, que es el producto del asesinato lento y cruel de una raza, mediante el alcohol barato y mortífero que llevaba la muerte y la degeneración a la raza descendiente de los héroes inmortales de la conquista de Chile?

¿Es posible que no haya crédito alguno para estos desgraciados, que tienen forzadamente que recurrir al prestamista sin entrañas, al usurero desnaturalizado que compra a vil precio las cosechas que el indio tenía para alimentarse?

[428] Recomponemos el orden de la frase, que por error de composición dice: "temblor agitado y nervioso, con en la voz colérica"

¿Es posible, además, continuaba el Protector, con verbo cálido y justiciero, que hería la fina sensibilidad del Excmo. señor Montt, es posible que la constitución regular de la familia no exista entre los mapuches, que estos estén tan atrasados como los pueblos primitivos y salvajes de África, que el nombre, lo que distingue a un hombre de otro, no se trasmita de padres a hijos, que en una misma familia, por regla general, no haya ningún hermano que lleve el mismo apellido de su otro hermano, llamándose el uno Antillen, Cheuquelen y Neculpan Huente el otro?

¿Es posible que la disolución de la familia y del amor sean permitidos por la ley misma, dando esta los mismos derechos hereditarios que las leyes comunes confieren a los padres, cónyuges e hijos legítimos, a los mapuches que comprueban la posesión notoria de cualquiera de sus agitados civiles [sic][429], así tenga un hombre una sola esposa o varias?

¿No duele y pone sonrojo en el alma, que no en el rostro, que un hombre pueda tener impunemente cuatro y más mujeres, provocando con esto la disolución de la familia y del amor?

Y ¿qué decir, Excmo. señor, de la indivisión forzada y eterna del terreno, de la propiedad, del comunismo, base fecunda y funesta de las odiosidades mortales[430] entre padres e hijos australes que luchan con furor de hombres primitivos, sobre la parcela de terreno a que cada cual se cree con mayor derecho?

¿No es esta, principalmente, la causa del atraso araucano, de la pobreza dolorosa en que arrastran su vida obscura, vida sin ideales ni horizontes de ninguna especie? ¿No es esta, también, la razón de la falta de cultivos de los terrenos indianos, de la triste soledad de sus campos, del desamparo que circunda a las *ruca*s a cuyo alrededor, no se ve nunca un árbol, una planta, una flor, que les despierte ideas de espiritualidad y belleza, cuyo es el santo efecto de las flores y de las plantas?

¿Es posible aún que se prostituya innoblemente la más bella pasión humana, el amor y este se encuentre indecorosamente unido a la idea de precio, porque está en uso todavía la compra indirecta de la doncella que va a ser mujer del mapuche más espléndido y que más especies da por ella?

¿Y no es esta misma costumbre la que engendra la otra, de la poligamia, causa del descenso y atraso de las mapuches?

Y la ignorancia, supersticiosa y cruel que reina entre estos desgraciados, ¿no es culpa, en buena parte, de nosotros mismos?

Don Pedro Montt escuchaba apenado y triste el relato que, con la consecuencia persuasiva de los hechos y de la verdad, hacía el Protector de Indígenas,

[429] Habiendo observado varios errores de composición del texto, creemos que la frase "que comprueban la posesión notoria de cualquiera de sus agitados civiles" no forma parte de esta oración, y sugerimos obviarla en la lectura.

[430] El original dice aquí "australes", y más adelante, fuera de contexto, "mortales". Se ha invertido el orden.

y así, empeñó su palabra de proceder con tesón y energía a la dictación por el Congreso Nacional de una ley que corrigiese en parte la grave situación social y económica en que se encuentran los mapuches.

La promesa que hace diez años hiciera don Pedro Montt está próxima a cumplirse; en pocos días más la Cámara de Diputados empezará a discutir un proyecto de ley que se encuentra aprobado en el Senado y cuyo estudio, mediante la benevolencia de los que me lean, tendré oportunidad de dar a conocer en próximos artículos.

ASUNTOS INDÍGENAS. EL INDÍGENA CAYUPAN Y EL PROTECTORADO[431]

Armando Moraga D.

Vuelve en un remitido de hoy, publicado en [el periódico] "La Mañana" la persona que se oculta con el nombre de Cayupan, y a quien conozco y desprecio, a hacer apreciaciones sobre mi conducta.

No tengo obligación alguna de dar respuesta a las preguntas de este indígena, porque para eso está mi Oficina, en la cual nunca han sido negados los datos que se soliciten; los doy, sin embargo, para que no pese, así sea no más de por un instante, la más ligera sombra sobre mi actitud. Hay en la reducción de Curilef seis personas radicadas, y que actualmente son muertas.

Los hijos de una de estas se han presentado a mi Oficina en su calidad de mapuches, solicitando la herencia de sus padres y abuelos; se citó a Cayupan, quien es el que detenta el suelo, pero no concurrió a reiterados llamados que se le hicieron.

Ya en tiempos de mi antecesor, señor Robles, este había reconocido los derechos hereditarios de la indígena Medina; pero había sido imposible darle lo que era de ella y sus hermanos, por la tenaz oposición que pusiera el firmante Cayupan. En esta situación la indígena Medina elevó una solicitud al Ministerio de Colonización, y en virtud de la providencia en ella recaída, ordenó le fuera entregado el terreno, y basta esta afirmación que hago para comprender por ella la procaz insolencia de quien, bajo el nombre de Cayupan, expresa que no cree en mi afirmación.

El estado civil de los indios es difícil de ser probado, porque carecen de los actos constitutivos de él, como son las inscripciones de los matrimonios, nacimientos, defunciones en el registro respectivo. Nada de esto hacen los indios; pero si no fuera verdad que la Medina es hija de quien ella, sus testigos y demás comuneros afirman, con la sola excepción de Cayupan; si el Juzgado no reconoce su parentesco y el estado civil consiguiente, y a pesar que esa desgraciada no tiene suelo y arrastra la más triste y dolorosa pobreza, pronto estaría el infrascrito a dejar sin efecto la orden dada.

Repito que no volveré a dar respuesta alguna sobre este asunto, porque no lo deseo y porque creo que no es llegado todavía el momento de abatir la dignidad de mi puesto para dar respuestas públicas a audaces explotadores de pobres e indefensos mapuches.

[431] *El Diario Austral*, s/f, 1920.

LA LEY, LOS INDÍGENAS Y DON JUAN HUENUL[432]

ARMANDO MORAGA D.

No había tenido la suerte de leer la primera carta pública, que, antes de su segunda, acordó dirigirme el indígena don Juan Huenul[433]: lo siento, hay nervio, corre robusta la vida en ella; empieza el señor indígena nombrado, con gran acierto la ironía –no poco fuerte, es cierto– pero ironía al fin. Y todas estas cualidades que campean largamente en su carta hacen sensible en el más alto grado la ignorancia que de su primera tengo. Pero en esta segunda hay una serie de ideas, francamente expresadas unas y habilidosamente insinuadas las otras, mediante el recurso fácil y viejo de las palabras subrayadas.

¿Acaso no es gracioso y gentil, no deja ancho campo para todas las imaginaciones aquello de escribir, a continuación de mi nombre, y especialmente subrayada, la palabra Protector de Indígenas?

El señor indígena Huenul hace, en su carta, las siguientes afirmaciones:

1ª. Que he visto enemigos oculto [sic] en las *refutaciones* (perdón de la letra cursiva) que los araucanos hicieron a ciertas apreciaciones mías; pero que esto de los enemigos es tan solo una salida, aunque no la verdadera, para salir del atolladero en que el señor mapuche me ve naufragar;

2ª. Que en Estados Unidos rige una ley prohibitiva análoga a la nuestra y nadie ha pensado derogarla; y

3ª. Que, aunque es autorizada mi palabra, y a pesar de ser, según el preopinante, gran abogado, él aprendió por allá en la escuela que discurre más un hambriento que cien letrados, y el señor Huenul no puede negarse que discurre admirablemente!

Los indígenas cuyos nombres aparecen al pie de las columnas escritas hace días en "La Mañana", Ud., señor Huenul, otro que hay no nombro, y algunos más que a la hora de ahora están en Santiago, solicitando mi destitución, por el delito enorme de haber hecho justicia a secas ¿son mis amigos? ¿No sería para Uds. la cosa más bella del mundo verme destruido, aniquilado, tomando pensativo y triste el camino de la derrota, el que va a Canosa?[434] ¿No han sentido

[432] *El Diario Austral*, 8 de diciembre de 1920.

[433] Juan Huenul era miembro activo de la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, de la cual ocupará el cargo de Pro-Secretario en la directiva liderada por Arturo Huenchullán en 1925.

[434] Camino a Canossa. Alusión a un episodio humillante de la historia medieval europea.

Uds. agitarse de entusiasmo sus corazones, cuando leen ufanos y alegres, las terribles comunicaciones que Uds. me lanzan desde la prensa?

¿Y qué delito he cometido, qué he hecho para merecer que se descarguen sobre mi cabeza los rayos envenenados de vuestros enojos colectivos?

¿Qué...? Lo decís vosotros: he afirmado que las leyes prohibitivas que pesan sobre los indios no son buenas leyes, porque si lo fueron hace sesenta años no son ya. Agregué que esta era también la opinión de numerosos diputados con quienes había conversado en Santiago. ¿Qué no lo creís vosotros?

Poco, en verdad, importa, pero la verdad es ella, y lo es también que no dista mucho en que, a pesar de vos, señor Huenul, dictáranse en Chile unas leyes que regulan la condición legal de los indios de la misma manera que el resto de sus habitantes.

Os habéis sentido heridos en lo más profundo de vuestras conciencias porque avancé la opinión que, a veces, los indios sentían inclinación al robo... ¡No, decís, es falso!

Estas son las pruebas: ¡poseemos joyas valiosas, y nuestras *ruca*s no tienen puertas!

Pero, ¿era de verdad, esta la causa de la ausencia de puertas en vuestras *ruca*s, o será acaso otra...? ¡Oh!, si fuera solo la de la seguridad absoluta de que no sería robados, todas, todas las ilusiones y teorías de comunismo y colectivismo de que fueron autores, Proudhon, [...], Rousseau, Laboulaye, Marx, Owen, Morover, Engels, Naquet, habrían tenido magnifica confirmación en este extremo austral del Universo; habrían sido realizadas magníficamente por la raza mapuche de Chile!

Tenéis, señor Huenul, un respeto sagrado y religioso de la ley; por lo menos así se deja ver en vuestra carta. Estimáis que es una horrible, monstruosa profanación hablar, a diputados todavía! antecesores en el Parlamento de los que redactaron la ley que nos ocupa, que ella ha dejado de ser buena, si es que ya lo fue alguna vez.

El espíritu conservador que os anima es seguramente bueno; cuando la ola de reivindicaciones que hoy invade al mundo llegue a Chile, contarán nuestras instituciones fundamentales con el valeroso apoyo vuestro; en frases maestras y lapidarias estigmatizaréis a los que osan hablar de defectos en las leyes, ya que ellas deben salir puras y relucientes del crisol de las Cámaras. ¿Lo creéis sinceramente, pensáis acaso que hay un chileno que no sepa cómo se generan las leyes de este país, fruto casi todos ellas de transacciones entre las diversas corrientes en que se dividen los Cámaras?

Decís que en Estados Unidos me habrían estigmatizado si yo allá hubiera osado decir que alguna ley de la más vasta democracia del Universo era injusta ¡No; talvez no! En Estados Unidos se respeta inmensamente la libertad de pensamiento; cada hombre es dueño y soberano de decir pública o privadamente lo que le viniera en gana, lo que estime necesario. Ningún pueblo ha hecho tanto por la integral libertad del pensamiento y de las opiniones ¿No recordáis

la guerra de 1865 en que combatieron en lucha cruenta y fratricida los estados del Sur con los del Norte para dar libertad a los ciudadanos indígenas de los Estados Unidos que hasta entonces eran esclavos? ¿No os acordáis que, víctima de esa gran causa, encontró la muerte el Presidente Lincoln?

No, señor Huenul, no tengáis temor; allá, aquí en Chile y en todas partes del Universo, donde haya ciudadanos libres, cada hombre es soberano absoluto para manifestar sus opiniones; ¡ojalá, si, que ellas fueran siempre honradas y sinceras!

¿Creéis de verdad, que las leyes prohibitivas son buenas?, ¿creéis que en la forma actual adquirirán alguna vez, los indios, la cultura que el Gobierno buscaba manteniéndoles esclavos de la ley, que es lo que significan las leyes prohibitivas...? Vos mismo, señor Huenul, sois un hombre inteligente e instruido, y como vos hay muchos, ¿creéis vos que es buena la ley que os prohíbe arrendar, hipotecar o vender la parte de suelo que en vuestra calidad de indígena os ha dado el Estado? Vos que sois hombre inteligente e instruido, que seguramente seréis también hombre de honor y que cumple su palabra y compromisos, no os sentís lastimado, vejado casi, en la absoluta repulsa y rechazo que de vuestras proposiciones harán las casas bancarias, los hombres de negocio?

Necesitáis un poco de dinero, ofrecéis en garantía vuestra propiedad, pero nadie la acepta ¡porque os lo prohíbe la ley! Y cualquiera otro miserable que talvez no sabe poner su nombre, puede hacer estos contratos; pero vos no ¡porque sois indio! ¿No hay una evidente injusticia en esto? ¿No se rebela en vos el orgullo ancestral de vuestra raza, en estas que, a juicio mío, son injusticias?

Pero los que, como yo, diréis, son inteligentes e instruidos, son los menos. No creáis señor Huenul; hay muchos que se os parecen y tendrían suficiente criterio para discernir lo que es bueno y malo; estoy por creer que la inmensa mayoría de vosotros no seríais engañados. Ya es cosa pasada a la historia, eso de los engaños de que los indios son víctimas. Y, por último, hay una suprema razón de Estado para entregar al comercio y a la vida las tierras del Estado, la parálisis de la propiedad, según enérgica frase de Thenig, el más grande de los jurisconsultos del Universo, es también parálisis de la vida, de las industrias y del comercio.

[Sabed?] que abogo por una ley que suprimiera inmediatamente el cargo de Protector de Indígenas que yo desempeño. ¡No lo olvidéis!

¿Qué os parece, señor Huenul, que la ley de que hablamos os faculte para que toméis dos, tres y más mujeres, y que pobléis de hijos y esposas vuestra casa o *ruca*? ¿Qué os parece la constitución del estado civil de las personas que descansan sobre estos principios; ¿qué decís, os parece justo que vos os llaméis Huenul, Huste vuestro hermano y Chanqualen vuestro padre? ¿Os parece justo y bueno que permanezcáis en la indivisión forzada de vuestras tierras que nunca sepáis lo [que] os pertenece? Si todas estas cosas os parecen justas ¿a qué seguir hablando, a qué decir con sinceridad lo que se piensa, cuando estáis apercibidos para no entenderlas?

En un próximo artículo os probaré que la diferencia entre las reservas fiscales donde viven los pieles rojas y otras razas aborígenes de Norte América, con relación a las reducciones de indios en la frontera de Chile, es más grande que la que hay entre los guerreros araucanos descritos por Ercilla y los restos raquíticos y enfermos de los mapuches de hoy.

LA LEY, LOS INDIOS, JUAN HUENUL Y OTROS HOMBRES PÚBLICOS[435]

Armando Moraga D.

Profunda extrañeza manifestaba en su carta pública el señor indígena Huenul, cuando yo afirmaba haber hablado con numerosos diputados, cuyas ideas y opiniones respecto a los indios, a la ley que les rige y a su atraso y miseria actuales, eran las que en diversos artículos he manifestado. Y le causaba mayor asombro que fueran ellos, los diputados, y cuyos antecesores hicieron estas leyes, quienes les encontraran vacíos o defectos; y su admiración subía de punto, dejándole suspenso y casi lelo, cuando era yo, el Protector de Indígenas, el que tenía la peregrina ocurrencia de pensar y de oír tales absurdos.

Me compadecía lastimosa y caritativamente el señor indígena, y ofrecía explicarme lo absurdo de mis pretensiones, sobre todo, poniéndolas, con rara erudición, al frente de las leyes dictadas por la Unión Americana, a fin de favorecer a los indios. ¡Ojalá, exclamaba en profética voz el señor Huenul, que aquí se hiciera como la gran democracia americana, que ha logrado civilizar a los indios sin haber necesidad de Protectores, sino mediante el cumplimiento severo y estricto de la ley! Agregaba que la situación jurídica de los pieles rojas era análoga a la de los indios chilenos.

En mi artículo de ayer, yo también ofrecía probar modestamente al preopinante Huenul que medía grande, enorme diferencia entre ambas situaciones legales, tanta como la que existe entre los valerosos y nobles guerreros araucanos descritos por Ercilla, y los pobres y miserables de hoy, cuyas mejores manifestaciones de fuerza y poder no se dejan ver más que en venganzas ruines, en odiosidades estériles y nocivas para ellos mismos. (¡Hay excepciones!)

Antes de probar las diferencias que he anotado ligeramente, vale la pena copiar algunas declaraciones hechas por congresales de mi patria y por otros hombres de todo punto eminentes, y que se refieren a la situación legal de los indios, y a la eficacia de las leyes que actualmente regulan su situación legal y económica.

¿Son inatacables estas leyes?; ¿es verdad, señor indígena Huenul, que comete profanación y delito nefando, delito de lesa indiada, quien pone mano *sacrílega* en ella?

Veamos. Desde 1888 hasta 1912, o sea en 24 años, se han presentado sesenta y siete diversos proyectos de ley, y todos, todos tendientes a reformar y reemplazar

[435] *El Diario Austral*, Temuco, 29 de diciembre de 1920.

por otras las leyes que en vuestro temor, verdaderamente religioso y servil, de su enmienda, que para vos es profanación, [deben permanecer intangibles][436], ya que según vuestro esclarecido criterio deben permanecer intangibles, aureoladas por la santa pátina de los siglos, las leyes que se dicten en este país. ¡Para vos no hay evolución, ni cambios ni nuevas necesidades y hechos que aconsejen cambiar lo que se hizo ayer pero que ya no sirve hoy! Sois verdaderamente conservador, y, por tanto, valioso elemento para atajar, merced a vuestros conocimientos, la ola gigantesca de cambios, de renovaciones que invade al mundo.

Pero yo me he preguntado en el fuero mínimo de mi conciencia, si acaso no estáis con error, si las verdades que lanzáis *ex cathedra* no serán tales, sino espejismos, engaños, confusiones y mezclas que fermentan en vuestro cerebro joven?

Y veréis, señor Huenul. Se han presentado 67 proyectos de ley, de los cuales siete a iniciativa del Ejecutivo, para poner mano en lo que consideráis intangible. Quedareis asombrado, lelo, cuando hieran vuestra imaginación los preclaros nombres de Presidentes de la República, de Ministros de Estado, en el departamento de Relaciones, que han hecho desesperados esfuerzos por modificar las leyes prohibitivas. ¡Leed! Mensaje de 10 de diciembre de 1888 que firman Balmaceda y Lastarria; de junio de 1892 que lleva las firmas de Montt y de don Isidoro Errázuriz; los de Montt y Blanco el año 1893; de Errazuriz y Morla en 1897; de Fernández Blanco y Errázuriz Urmeneta de 1900; de Riesco y Edwards en 1905, que es interesantísimo, y finalmente el suscrito por don Pedro Montt en 1908.

¿Qué os parece, qué decís de esta pléyade de hombres ilustres, de Presidentes de la República, de Ministros de Estado que han estado unánimemente de acuerdo en confesar el fracaso de las leyes que vos afirmáis ser buenas, útiles y perfectas...?

Y a más de estos, hay *sesenta* proyectos de ley diversos, suscritos por Senadores, Diputados, Ministros, etc., pidiendo la reforma de la ley que vos declaráis inatacable. Ved si no el proyecto de la Comisión parlamentaria que lleva tantas ilustres firmas, aprobado por el Senado en 1913, el contra proyecto del eminente político radical, don Ramón Briones Luco. Como este proyecto es corto y sencillísimo, os voy a trascribir sus párrafos principales, y, sobre todo, la moción con que lo acompaña.

Dice el señor Briones:

> "La raza indígena ha alcanzado ya un grado de desarrollo que no difiere del común de nuestro pueblo.
>
> Hay razones de carácter étnico que le impiden sobresalir de este nivel, y no parece obra de justicia contraer exclusivamente a ella una atención preferente que no reciben los demás conciudadanos.

[436] En vista de los ocasionales errores de composición en los textos de prensa, nos permitimos sugerir que por equivocación se omitió esta frase, sin la cual no se entiende la idea.

Hasta aquí hemos estado poniendo dificultades al cumplimiento de las leyes sociológicas que se observan en todas partes, según los cuales es un principio científico que el contacto de dos razas opuestas hace desaparecer por eliminación o absorción a la raza inferior.

No hay principio alguno de justicia que aconseje establecer para ella una legislación especial.

El amparo soberano de la ley que prohíbe adquirir sus propiedades y les permite la poligamia ha impedido a los indígenas asimilarse a nuestra raza y los ha mantenido independientes de la civilización, formando un pueblo aparte dentro de nuestro pueblo, a semejanza de aquellas privilegiadas castas orientales.

Esta excepción no está justificada ni aun por la defensa o amparo de los indígenas. Agrega que pueden sentarse los siguientes principios.....

3º Que debe permitírseles vender sus terrenos para que sean absorbidos en nuestra raza.

4º Que el estancamiento de la propiedad en manos de los indígenas, fomentada artificialmente por la ley prohibitiva, causa un verdadero malestar económico y social en la región austral.

Ved, pues, lo que dice uno de nuestros legisladores y prohombres del régimen actual, sobre las leyes prohibitivas y vosotros.

Pero hay ejemplos más edificantes.

Ved si no lo que dice el señor Torrealba:

"Los naturales radicados ya, algunos desde 1875, muchos de ellos cerca de nuestras florecientes ciudades australes, permanecen, en general, tan ignorantes y perezosos como cuando vivían en selvas y mucho más viciosos que cuando estaban en plena barbarie". Legislación sobre las tierras de colonización, tomo I, pág. 91.

"La radicación de indígenas debe amoldarse a estos nuevos derechos y debe ser llevada adelante en condiciones que permitan a los favorecidos tomar parte en la lucha por la existencia. Tenemos el desengaño de la experiencia sobre la eficacia del sistema que nuestras leyes han empleado para favorecer al indígena". Obra citada, pág. 96.

"Si se prefiere hacer una obra patriótica es necesario no contar para nada con el actual sistema", página 88, id.

"Los futuros pobladores de estas colonias serían los indios más pobres, que son, casi siempre, los más ociosos y ladrones". Obra citada, pág. 100.

"La radicación de indígenas en colonias valorizaría la propiedad particular en muchas regiones, cuando estas tienen indios en sus *vecindades están generalmente depreciadas*, porque estos casi nunca trabajan en las faenas del fundo y porque son ladrones de ganado para entregarlo a cierta gente que trafica en la industria de comprar animales hurtados". Obra citada, pág. 99.

Sería inoficioso seguir copiando a este reputado tratadista. Baste agregar que en iguales o parecidos términos se expresan los ex Protectores de Indígenas señores: Robles, Romero, Oñat, Schwerter, Irribarra, etc.

Y el eminente Dr. Serrano Montaner dice también cosas bien edificantes sobre estas materias, pero sus opiniones, como las del Dr. Max Westenhoefer, Francisco Muñoz, Tomás Ramírez Frías, Alfredo Barros, Alberto Cumming, autores cuyas consultas pueden hacerse en los escasos libros que sobre estas materias hay en Temuco, serán materia de próximos artículos.

Pero he aquí que pensaba hablar de la ley que regula en Norte América la condición legal de los pieles rojas y el tiempo no me alcanza. Hablaremos, en consecuencia, en el próximo artículo sobre la famosa *Homestead Law* a que en sus cartas públicas hace referido el señor indígena Huenul, a quien Dios conserve por luengos y venturosos años.

SOBRE UN PRETENDIDO LANZAMIENTO INDÍGENA. NOTA PASADA POR EL PROTECTOR A LA INTENDENCIA[437]

Armando Moraga D.

Temuco, 16 de enero de 1923.

En este instante se me comunica que personas extrañas a la reducción de Pedro Coñoenao, en Cholchol, simulando deudas que no existen, han obtenido orden judicial para desalojar a los indios de sus suelos y, además, lo que es verdaderamente criminal, para apoderarse de las cosechas de trigo que el pobre indígena ha podido hacer, a trueque de grandes sacrificios en su suelo. Este, como se sabe, no puede adquirirlo a título alguno los particulares, siendo, por tanto, completamente ajenos a la ley los actos o hechos que hayan podido invocar los usurpadores para entrar en posesión de un suelo que está amparado por leyes de la República y fuera de toda clase de transacciones. Además, cualquiera orden judicial que se haya dado para despojar a los indios de lo que es de ellos no puede cumplirse, sin previa audiencia y del permiso del señor Ministro del Interior. Así se desprende de la circular impartida por este Ministerio, en 1910, a todas las Intendencias y Gobernaciones para que éstas, por título alguno, pudieran conceder el auxilio de la fuerza pública a objeto de lanzar a indígenas radicados. Esta circular fue impartida a raíz de los desgraciados sucesos de Forrahue.

En estas circunstancias, el infrascrito estima que US. está habilitado y tiene atribuciones para impartir ordenes telegráficas a las autoridades del departamento de Imperial, ordenando que se dejen sin efecto las órdenes que hubieren dictado, a petición de cualesquiera autoridad, para conceder la fuerza pública encaminada a poner en posesión de los terrenos de Coñoenao a cualquiera clase de personas. Además, y para completar la benéfica intervención de US. se hace indispensable que US. dé eficaces órdenes para que Coñoenao sea acompañado a su terreno por el número de carabineros que US. estime necesario, dos de los cuales podrían permanecer hasta que éste pueda cosechar íntegramente el

[437] "El jefe de la Oficina del Protectorado de indígenas, señor Armando Moraga, ha enviado a la Intendencia la siguiente nota, sobre un pretendido lanzamiento de indígenas en una de las reducciones a Cholchol, y que el señor Intendente acogiéndola favorablemente la ha retrasmitido al Gobernador de Imperial para que dicho funcionario proceda a prestar las garantías del caso. La nota cuya trascripción se hizo ayer, dice como sigue". *El Diario Austral,* Temuco, 19 de enero de 1923.

trigo que tiene sembrado en terrenos que son de su solo y exclusivo dominio

Dios guarde a US.

Armando Moraga D.

Al señor Intendente de la provincia de Cautín.

Presente.

GLOSARIO[438]

Accionista indígena. Propietario de títulos o acciones sobre determinada porción de terreno, según el régimen especial de propiedad indígena que se impuso en las provincias del sur.

Anticresis. Contrato por el que el deudor entrega al acreedor un bien raíz para que se pague con sus frutos. Junto con las hipotecas y los arriendos, se señala a los contratos de anticresis como formas veladas de despojo de la propiedad indígena.

Aparcería, aparcero (o mediería, mediero). Régimen de explotación de la tierra por el que el propietario da a otro (aparcero o mediero) la posibilidad de explotar en condiciones fijadas por contrato. Los contratos de aparcería o mediería, a veces simples tratos de palabra, fueron motivo de abusos, normalmente del aparcero no indígena, que, aprovechando alguna ocasión, como podía ser la ausencia del propietario, hacía valer derechos sobre la propiedad. Estos abusos fueron a menudo denunciados al Protectorado.

Colonización, colono (título de). Título escrito bajo forma de contrato con el Estado de Chile, mediante el cual se reconocía a un determinado sujeto su condición de colonizador de una determinada porción de terreno con límites claros y definidos que se expresaban en un plano de colonización.

Comisario de Naciones. Responsable de las funciones de mediación del ejército de la frontera en periodo colonial y republicano. Bajo el primero, fue cargo del ejército español, y de él dependían los capitanes de amigos e intérpretes. Se nombraban dos, uno en Concepción y otro en Valdivia. Con el cambio de régimen desaparece ese cargo como tal. Sin embargo, en 1822, según atestigua un informe del Protectorado de la jurisdicción de Llanquihue, se crea el nombramiento de Comisario de Naciones en Valdivia y Osorno, correspondiente a un funcionario con atribuciones para resolver deslindes de tierras indígenas. Jerárquicamente dependía de forma directa del inten-

[438] Para la elaboración de este glosario nos hemos basado principalmente en la obra de Ramón Briones Luco, *Glosario de Colonización i Esposición de las Leyes, Decretos i demás antecedentes relativos al Despacho de colonización hasta el 1 de enero de 1900,* segunda edición (Santiago, Imprenta Nacional, 1900).

dente de la provincia, y participó como garante de la entrega de títulos de propiedad a los mapuche-huilliche, títulos que se conocieron como "títulos de comisario".

Comisión de Títulos de Merced a indígenas o Comisión Radicadora de Indígenas. Fue la encargada de deslindar, revisar, componer y supervisar el otorgamiento de títulos colectivos a caciques jefes de familia y su parentela, en el marco del proceso de radicación que se instauró en Arauco, Malleco, Cautín y algunos sectores de Valdivia, entre 1884 y 1930 (fue creada por la ley de 1866, pero constituida recién en 1884). Su labor llegó a su fin cuando se completó la radicación en 1930 con las leyes de división de la propiedad indígena.

Entre 1866 y la fecha del decreto por la que queda debidamente instrumentada, su actuación fue variable. Fue por el decreto supremo de fecha 20 de diciembre de 1883 que quedaron establecidos los cargos que la componían: un abogado, como presidente de la misma, y dos ingenieros nombrados por el supremo gobierno. Además del presidente y los ingenieros que nombraba el gobierno y que pertenecían a la Sección Topográfica de la Inspección General de Tierras y Colonización, esta comisión tenía un secretario, un escribiente y un intérprete (que podía servir también al Protector de Indígenas). La comisión tuvo su residencia en Temuco[439] y daba cuenta de sus operaciones a la Inspección General de Tierras y Colonización y al Protector de Indígenas.

Comisión Parlamentaria de Colonización. Comisión especial que se constituyó en diciembre de 1910 con motivo de las muchas denuncias de abusos sobre el proceso de colonización en el sur. Durante 1911 realizó en varias ciudades visitas de inspección, audiencias públicas y recopiló antecedentes. En su informe final concluye:

"Muchos reclamos son justificados: que los indígenas suelen ser víctimas de gentes inescrupulosas y á veces de inhumanas, que los hostilizan, los maltratan ó se valen de argucias abogadiles para despojarlos de lo suyo; que su radicación se hace con despacio, (...) que otros son perseguidos por vías de hecho o judicialmente, por detentadores injustos de tierras del Estado, que aspiran por este medio a afirmar sus pretensiones de dominio sobre las mismas; que algunos concesionarios tratan de desalojar sin razón a personas establecidas dentro de sus concesiones; que hay ocupantes que se instalan donde no les corresponde; y que la acción de las autoridades aparece en ciertos casos amparando, más las arbitrariedades del fuerte que los derechos del débil..."[440].

[439] Artículos 25 y 26 del supremo decreto reglamentario de 20 de mayo de 1896)

[440] Véase Informe de la CVHNT, Primera Parte, tomo iv, El Pueblo Mapuche, p. 429.

Sus conclusiones fueron publicadas en 1912: *Comisión Parlamentaria de Colonización, Informe, Proyectos de Ley y Actas de las Sesiones y otros antecedentes. Sociedad*[441].

COMISIÓN RADICADORA. Véase Comisión de Títulos de Merced.

COMUNIDAD, COMUNERO. Por las características de asentamiento de los *mapuche* y la necesidad de nombrar legalmente las unidades territoriales que serían objeto de delimitación parece haberse fijado en este periodo el término 'comunidad', como equivalente moderno del término 'reducción', que fue el más usado en los documentos coloniales. Si bien en sentido estricto, el comunero era toda persona que poseía un bien en comunidad con otros, en el marco del Proceso de Radicación se entendió el comunero como el integrante de una comunidad indígena que accedía a una posesión territorial reconocida por el Estado de Chile. En la documentación del Protectorado se encuentra ocasionalmente el sustantivo 'comunismo' para nombrar la costumbre de vivir en comunidades (y no en pueblos), costumbre que, según las autoridades chilenas, los propios indígenas deseaban que desapareciera. El término tuvo, por lo tanto, un sentido legal: "Si varios indígenas poseyesen un terreno sin que ninguno de ellos pueda establecer posesión exclusiva sobre una porción determinada, se les considerará como comuneros, y se subdividirá por partes iguales"[442], y también un sentido más genérico, como equivalente de cualquier indígena no urbano, que vivía en comunidad. Al respecto, se observa en los documentos como la noción de "comunidad indígena" se va fijando en el vocabulario de la radicación[443]. Es de señalar que hubo conflictos y litigios creados porque algunos no indígenas "se hicieron comuneros de indígenas" y se apropiaron de sus tierras.

CONTRATO TRASLATICIO DE DOMINIO. Es una de las formas de adquirir un compromiso respecto de una cosa o bien, como, por ejemplo, ocurre con los contratos de compraventa. No necesariamente implica la transferencia de la cosa o bien sino que pone de manifiesto una voluntad, opera como antecedente para la adquisición, en este caso, de una propiedad.

CONTRIBUCIÓN (IMPUESTO) DE HABERES. En el marco de la radicación la propiedad indígena quedó exenta del pago de contribuciones, y también quedaron exentas las tierras entregadas al proceso de colonización. No radicados=exentos[444].

CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL. Pago de un valor proporcional al paño de terreno que se poseía, que en virtud de la Ley de la Comuna Autónoma se realizaba a las municipalidades y era de cargo al propietario o legítimo dueño de una porción de suelo reconocida por el Estado en determinado lugar.

[441] Santiago, Imprenta y litografía Universo, 1912.
[442] Briones, *op. cit.*, 1900, p. 383.
[443] Véase proyecto de ley de Robles 1910.
[444] Ley de Municipalidades, art. 38, n.° 1.

Corte de alzada. Se refiere a las Cortes de Apelaciones que jerárquicamente están por sobre un juez y por debajo de la Corte Suprema

Fiador de cárcel segura. Persona que responde monetariamente por el acusado a fin de que no pueda eludir la acción de la justicia.

Gobernador de indígenas. Cargo de corta duración tras la creación de la provincia de Arauco en 1852. Se estipulan sus funciones en el decreto n.º 104 del 14 de marzo de 1853 donde se habla del "Intendente y/o gobernador de indígenas". En la Ley S/N del 4 de diciembre de 1866, se le sigue considerando ligado a las labores del Intendente de la provincia y dependiente directo la presidencia de la República. En concreto, debía ocuparse de las situaciones relativas a la propiedad indígena reconocida como tal por el Estado. Guarda cierta similitud con el cargo colonial del "Comisario de naciones", título que adquirió singulares funciones en el territorio huilliche, en torno al resolver pleitos y dar fe en las transacciones y la conformación de propiedades. En el art. 1 del decreto de 1853 se le considera como un posible comisionado del mismo Intendente mientras que en el art. 8 de la ley de 1866 se menciona que sus funciones serán continuadas por el Protectorado de Indígenas, con lo que se extingue en la práctica esta figura.

Hijuela (hijuelar, hijuelador). División predial o subdivisión. Originalmente, la palabra 'hijuela' significa la porción que le toca a cada heredero de una herencia (de ahí que sea porción "hija"). Sin embargo, en el contexto de la colonización la hijuela se considera el pedazo de terreno que se adjudica a un propietario, e hijuelador el encargado de hijuelar o parcelar, fijando la mensura.

Hijuela pagadora. En algunos pleitos entre varios interesados se sacaba a remate una hijuela para pagar las costas del juicio. De ahí que se la llame "hijuela pagadora", y aun hoy con este nombre se conoce a la porción de bienes de una herencia que se reserva para pagar deudas que haya dejado el difunto.

Indígena, calidad o título de. En el ordenamiento jurídico del periodo que nos ocupa, y para efectos de la radicación, el indígena fue un tipo especial de individuo, distinto del chileno y del colono extranjero, al que se aplicó un régimen especial. Acreditar la calidad de indígena, por lo tanto, fue un requisito habitual en ese contexto. Para su cumplimiento, el interesado debía reunir algunos requisitos objetivos (nombre, uso de la lengua), pero, además, debía presentar testigos. Como puede leerse en los informes del Protectorado, se dieron tensiones y confusiones en la acreditación de los derechohabientes para acceder a la posesión de tierras sometidas a ese régimen especial de propiedad territorial[445]. Decir quién era indígena y definirse como tal no era algo sencillo ni que pudiera determinarse de una vez

[445] Véanse Leyes prohibitivas.

por todas: algunos sujetos eran considerados mestizos y otros "aindiados", las leyes no cubrían todas las eventualidades derivadas de la condición, y aquellas que supuestamente favorecían al indígena, en unos casos resultaron ser un obstáculo. De esa manera, los protectores de indígenas defendían a veces a indígenas que hubieran preferido renunciar a tal calidad, porque las circunstancias del caso los exponían a perder más como indígenas que como chilenos.

Inspección General de Tierras y Colonización. Al mando de un inspector general de colonización, que recibía en un principio las instrucciones del Ministerio de Colonización y de la Sociedad Nacional de Agricultura, la Inspección debía encargarse de las necesidades de las colonias establecidas en el territorio indígena y, en particular, atender a la recepción, ubicación e instalación de colonos. Operó desde los años 1880 y quedó bajo dependencia del Departamento de Colonización de dicho ministerio. El Inspector General residía en Santiago, y tenía un subinspector en Temuco. Bajo sus órdenes había un secretario, un contador intérprete (de dos idiomas extranjeros) y dos oficiales.

Dependía de la Inspección General la Sección Topográfica, convertida después de 1900 en Subinspección de Colonización, compuesta de ingenieros encargados de la demarcación de la propiedad fiscal, de levantar planos de nuevos centros de población en territorio indígena, efectuar la hijuelación, entregar lotes a subastadores, colocar a los colonos y supervisar la colonización. Asimismo, dos de estos ingenieros desempeñaban sus funciones en la Comisión Radicadora. Dependían, asimismo, de la Inspección General la Comisión Radicadora de Indígenas y el Protectorado de Indígenas[446].

Intérprete-portero o portero-intérprete. Funcionario bilingüe, perteneciente al más bajo rango salarial, encargado de atender a su llegada a los usuarios del Protectorado y de servir de intérprete del *mapudungun*. Como servicio no profesional, sus labores no estaban delimitadas, y tenían más bien un carácter *ad hoc*. Sin embargo, el hecho es que el desconocimiento de la lengua y la cultura indígena de parte del protector y demás funcionarios hacía que estos dependieran de las competencias del portero-intérprete, por lo que su papel en la comunicación y en el desarrollo y desenlace de las demandas debe haber sido mayor de lo que se reconoce.

Inquilinaje. En el sistema de hacienda colonial en la zona del centro de Chile, el inquilinaje, que consistía en arrendar a peones de hacienda una vivienda y un pedazo de tierra para sí, a cambio de trabajo en la propiedad, permitió a los terratenientes obtener mano de obra en permanencia y controlarla. Al mismo tiempo, las viviendas y pedazos de los inquilinos se situaban

[446] Véase organigrama en la sección Cuadros de este volumen.

estratégicamente para proteger las lindes de la propiedad. Inquilinos y medieros o aparceros constituían así la mano de obra estable del fundo. Con algunas diferencias, en la Araucanía del periodo XIX-XX este sistema se impuso también, y algunos colonos lo aprovecharon para hacerse inquilinos en tierras indígenas y, con la connivencia de agentes y jueces, despojar al legítimo dueño de su propiedad.

JUICIO DE PARTICIÓN. Toda división de propiedad se sometía a juicio de partición y al juez se le llamaba juez partidor. Tratándose de indígenas, el Protector debía estar presente en estos juicios. Cuando se trataba de indígenas en procesos de radicación, había que despejar incompatibilidades con la Comisión Radicadora y de ello se derivaron actuaciones del Protectorado.

JUEZ COMPROMISARIO, *véase* JUICIO DE COMPROMISO.

JUEZ PARTIDOR, *véase* JUICIO DE PARTICIÓN.

JUICIO DE COMPROMISO. Los juicios de compromiso fueron instancias de arbitraje en casos de litigios. Las partes debían ponerse primero de acuerdo con un juez compromisario, que a veces fue el Protector de Indígenas. Se dieron incompatibilidades con la actuación de la Comisión Radicadora.

JUZGADOS. Hasta la Ley n.º 4802 del 24 de enero de 1930, por la que se crean los juzgados de indios, no hay una administración de justicia indígena particular. Todos los litigios se ventilan en los juzgados generales. De ello, los llamados de menor cuantía son los estaban a cargo de jueces legos, es decir, sin formación jurídica, como eran los subdelegados o inspectores. Los juzgados de mayor cuantía, partiendo por el Juzgado de Letras, estaban a cargo de jueces letrados.

LEYES DE PROHIBICIÓN, LEYES PROHIBITIVAS, LEYES DE EXCEPCIÓN. Durante la segunda mitad del siglo XIX se dictaron diversas leyes transitorias destinadas a reglamentar los contratos de compra-venta, arriendo y otras formas de contratos entre indígenas y no indígenas, por la frecuencia con que se dieron abusos en perjuicio suyo. Estas leyes imponían condiciones y restricciones a dichas transacciones, sea territoriales (zonas exclusivas para indígenas) o de actuación (condiciones para la firma y ejecución de los contratos). Algunos protectores expresaban que con el tiempo resultaron restrictivas para los propios indígenas, que deseaban más libertad de acción, y propusieron que se flexibilizaran; otros, al contrario, opinaban que debían extenderse más allá de su vigencia, para seguir protegiendo la integridad de la propiedad indígena e impedir los atropellos.

LITIGAR COMO POBRE. A efectos de las instituciones de justicia, se dio a los indígenas "privilegio de pobreza", que implicaba que podían litigar haciendo uso de papel común (no membretado) y que tenían derecho a ser asistidos gratuitamente en los litigios. Correspondió a los protectores asistirlos y litigar "como pobres" en su defensa.

Mediería *véase* Aparcería.

Promotor fiscal. En el decreto del 10 de noviembre de 1884 se introdujo en el Poder Judicial el cargo de Promotor Fiscal, con rango de juez de letras, encargado de velar por los intereses del fisco en su labor de defensa y representación de los indígenas en los juicios que celebrasen sobre posesión de tierras, contratos de compra-venta y de arriendo. Dependía del Inspector General, y debía cooperar con el Protector de Indígenas. En la práctica, hubo fricciones por la interpretación del decreto que establecía sus labores, y algunos protectores así lo señalan en las memorias.

Propiedad de indígenas. En el periodo que nos ocupa, el indígena radicado en conformidad a la ley es dueño junto a su familia del terreno que le asigna su título de merced (Ley de 4 de diciembre de 1866.) Sin embargo, desde el año 1853, los derechos de propiedad otorgados a los indígenas fueron protegidos de posibles transacciones comerciales y sustraídos del mercado de tierras mediante varias restricciones a la compra-venta, con el fin de proteger la propiedad indígena. Toda compra de tierra hecha a indígenas debía verificarse con la intervención del intendente de Arauco o del Gobernador de Indígenas, con el objetivo de que estas autoridades se cerciorasen de que el indígena prestaba libremente su consentimiento.

La misma formalidad se exigía para el empeño de terrenos o para el arriendo por un tiempo que excediese de 5 años. La falta de estos requisitos producía nulidad absoluta[447]. Los poderes para litigar sobre cuestiones de terrenos debían sujetarse a los mismos trámites indicados anteriormente. Asimismo, debían ser visados por el Intendente de la provincia los poderes otorgados por los indígenas para la venta, empeño o arriendo por más de 5 años, de terrenos de su propiedad[448]. Disposiciones análogas se dictaron para la compra de terrenos de indígenas en la provincia de Valdivia y territorio de colonización de Llanquihue[449].

Con posterioridad se estableció que los contratos sobre terrenos ubicados en territorio indígena solo podrían celebrarse cuando el que enajenare tuviera título inscrito y registrado. Siendo indígena alguno de los contratantes, debía sujetarse a las disposiciones del decreto supremo de 14 de marzo de 1853, antes citado.

La prohibición de enajenar se extendió a las hipotecas, anticresis, arriendo o cualquier otro contrato sobre terrenos situados en territorio indígena[450].

Salvo que los títulos estuvieran inscritos legalmente, se prohibió a los particulares la adquisición, por cualquier medio, de terreno de indígenas dentro

[447] Decreto supremo con fuerza de ley de 14 de marzo de 1853.
[448] Decreto supremo de 5 de junio de 1856 y 23 de marzo de 1857.
[449] Decretos supremos de 4 de diciembre de 1855 y 29 de julio de 1856.
[450] Art. 4° de la ley de 4 de diciembre de 1866 y art. 5° de la ley de 4 de agosto de 1874.

de los límites siguientes: por el norte, el río Malleco, desde su nacimiento en la cordillera de los Andes hasta su desembocadura en el Vergara, y de este punto siguiendo al sur el curso del río Picoiquen hasta su nacimiento en la cordillera de Nahuelbuta, y desde allí una línea hasta la laguna de Lanalhue, situada en dicha cordillera y el curso del río Paicaví hasta su desembocadura en el mar; por el sur, el límite que separa el departamento de Imperial de la provincia de Valdivia; por el este, la cordillera de los Andes; y por el oeste, el mar[451].

Esta prohibición fue alzada en parte en los departamentos de Lebu, Cañete e Imperial, cuando se crearon las provincias de Arauco y Biobío y el territorio de colonización de Angol[452]. Sin embargo, en breve se dispuso que la prohibición de adquirir terrenos de indígenas, hecha a los particulares en el art. 6 de la ley de 4 de agosto de 1874, que hemos citado más atrás, en el territorio designado en dicho artículo, se extendiera a las hipotecas, anticresis, arriendos o cualquier otro contrato sobre terrenos situados dentro de esos límites, aun cuando el indígena o su reducción tuvieran registrado su título de propiedad y se amplió otros diez años esta prohibición[453]. De este modo la prohibición de adquirir terrenos de indígenas fue renovada y más tarde se volvió a ampliar tanto en tiempo como en cuanto a los límites territoriales, haciéndose extensiva a las provincias de Valdivia, Llanquihue y Chiloé y al territorio de Magallanes.

Protector de indígenas. Jefe de la Oficina del Protectorado de Indígenas, creada junto a la Comisión Radicadora de Indígenas, por ley del 4 de diciembre de 1866. Se mantiene hasta 1930 con un lapso de suspensión entre 1876 y 1883. Tiene como dependientes un ingeniero o asesor técnico, un secretario-escribiente, un agente judicial y un portero-intérprete. Sus atribuciones consisten en atender las demandas presentadas por los indígenas en el contexto de la radicación y remitir a juzgados de letras los casos que no pueda resolver por sus medios. El cargo de protector no tuvo personería jurídica, o sea, autoridad para hacer obligatorias sus decisiones, lo que obstaculizó su labor. También sufrió la falta de recursos, que le impedía contar con la dotación de personal adecuada y realizar los trámites necesarios. Las primeras oficinas del protectorado se establecieron entre el Biobío y el Cautín, y solo después de varios reclamos se instauraron en Valdivia y Llanquihue. Donde no había protector, la figura de Promotor Fiscal hacía las veces.

Radicar/radicación de indígenas. El proceso de radicación (1884-1930) tuvo como fin y resultado la delimitación y fijación de la propiedad indígena,

[451] Art. 6 de la ley de 4 de agosto de 1874.
[452] Ley de 13 de octubre de 1875.
[453] Art. 1 de la ley de 20 de enero de 1883.

por medio de la entrega de los llamados títulos de merced. Según su reglamentación:

"El Estado concede al indígena que cumple con ciertos requisitos un título de merced, que le otorga la propiedad del suelo. El título es expedido por una comisión especial denominada Comisión de Títulos Merced a Indígenas o Comisión Radicadora de Indígenas. Para otorgar dicho título la comisión se sujetará a los siguientes procedimientos:

1° La ocupación efectiva y continuada de un año por lo menos será título bastante para que el indígena sea considerado como dueño;
2° Cuando varios indígenas pretendan derecho a un mismo terreno, se considerará como dueño el que lo haya poseído los últimos cinco años;
3° Si varios indígenas poseyesen un terreno sin que ninguno de ellos pueda establecer posesión exclusiva sobre una porción determinada, se les considerará como comuneros, y se subdividirá por partes iguales;
4° Los derechos de propiedad que deberán reconocerse á favor de los indígenas se entenderán siempre a favor del que sea cabeza de familia, sea varón o mujer;
5° Cuando los indígenas que ocupan un terreno posean como individuos de una reducción dependiente de un cacique, se les tendrá a todos como comuneros, y se deslindará el terreno como propiedad común a todos ellos;
6° Si una octava parte de los indígenas cabezas de familia de la reducción reconocida como propietaria de un terreno pidiese que se le asigne determinadamente lo que le corresponda, los ingenieros procederán a hacer la división y demarcación de límites, asignando al cacique el triple de la parte de terreno que se asigne a las cabezas de familia;
7° Al fijar los linderos, sea en las posesiones de indígenas particulares, sea en las de una reducción, se preferirán los límites naturales, cuando los poseedores no presenten los límites precisos, y á fin de adoptar esos límites se podrán establecer compensaciones de los terrenos colindantes; pero en ningún caso de aquéllos en que los indígenas tuvieren planteles o que destinaren á siembras (ley de 4 de diciembre de 1866). Si el título que se extendiera a favor de un indígena o de una reducción pasare de 300 hectáreas, deberá elevarse el expediente respectivo en consulta al Presidente de la República, acompañando un plano del terreno a que el título se refiere[454].

A los indígenas que no probaren la posesión a que se refieren las disposiciones anteriores se les considerará como colonos para el efecto de adjudicarles hijuelas, sin que por ello queden sujetos a las condiciones impuestas a los demás colonos.

[454] Inciso 3, art. 2 de la ley de 20 de enero de 1883.

La posesión notoria del estado de padre, madre, marido, mujer o hijo se tendrá como título bastante para constituir a favor de los indígenas los mismos derechos hereditarios que establecen las leyes comunes en favor de los padres, cónyuges e hijos legítimos"[455].

La radicación de indígenas puede considerarse en dos periodos: El primero, desde 1874 hasta 1883, cuando las funciones concernientes a la radicación estaban encomendadas a un Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, y se entregaron apenas diez títulos de merced (3700 has.), y el segundo, que comienza el año 1884, en que se constituyó la Comisión Radicadora de Indígenas.

Para la radicación del indígena se procedía de la siguiente manera: el interesado, por medio de una solicitud, pedía por sí y por su reducción o familia ser radicado en el terreno que poseía, ofreciendo información de testigos para acreditar que era indígena.

Siendo suficiente la información, la Comisión averiguaba qué clase de individuo era, si era "civilizado"; si tenía elementos y hábitos de trabajo; de qué calidad era el terreno; si tenía agua, leña o madera de construcción; si estaba cerca de los pueblos, etcétera.

En vista de los datos recogidos se acordaba la extensión que correspondía al indígena, y la Comisión se dirigía al terreno para hacer la entrega, previa citación del Protector de Indígenas y de los vecinos. De todo ello se levantaba un acta por el secretario de la Comisión, firmada por todos los concurrentes. Luego se mandaba extender el título, que cuando excedía de trescientas hectáreas era elevado para su ratificación al Supremo.

Gobierno. El título se notificaba al Promotor Fiscal del departamento en donde estaba situado el terreno y al Protector de Indígenas. El título se inscribía en un registro especial que llevaba la Comisión.

Reducción. El concepto de reducción de indígenas, hoy en desuso, está ya presente en el vocabulario colonial, y parece haberse comprendido como equivalente de *rewe* (cada *rewe* compuesto de varios *lebo*, unidades familiares). En el periodo de nuestro estudio es posible que haya conservado este sentido, al que se suma el sentido y concepto de "comunidad", término que se mantiene hasta el día de hoy, con el equivalente actual de *lof*. El tamaño de una reducción podía ser muy variable:

"Los caciques reconocidos como tales antes del 1 de enero de 1892 tendrán para sí y sus hijos mayores de diez y dieciocho años, el doble de lo que corresponde al indígena cabeza de familia, si su reducción constaba en la fecha indicada de más de diez ranchos; tres veces más si la reducción contuviera veinte, y cuatro, si contuviera cuarenta o más, en la misma fecha"[456].

[455] Arts. 8 y 9 de la ley de 4 de agosto de 1874.
[456] Briones, *op. cit*., 1900, pp. 392-393

Territorio fronterizo de indígenas. Determinado por el artículo 3 de la ley de 7 de diciembre de 1852:

> "el territorio comprendido entre el Biobío y el Toltén y entre los Andes y la Cordillera de la Costa será regido como territorio fronterizo. Lo mismo se observará con el comprendido entre el Carampangue y el Toltén, la cordillera de la costa y el mar".

Estos límites no fueron fijados de una vez por todas, sino que hubo redefiniciones a lo largo del periodo. Las actas del Protectorado señalan las ambigüedades y conflictos creadas por estos cambios.

Tinterillo. Nombre despectivo del agente judicial oficioso. Como se le describe en las *Memorias*, se trata de un individuo bilingüe, conocedor del papeleo y la jerga judicial, y se ofrece al indígena como representante suyo en los trámites. Son frecuentes las quejas de los protectores contra estos individuos y sus prácticas, que llaman tinterillaje. Les culpan de alargar deliberadamente los pleitos, de engañar a los indígenas creando falsas expectativas, de duplicar gestiones y de tramitar a espaldas del Protectorado. En la práctica, estos agentes tienen más facultades de representación que los propios protectores, por lo que en las *Memorias* figuran propuestas de ley para que se invalide todo acto o contrato que los indígenas celebren sin intervención del protector.

Título de merced. Documento que atestigua la propiedad indígena. Véase Comisión de Títulos de Merced.

Tutela/curatela. En términos jurídicos, desde la Colonia, los indígenas fueron considerados menores de edad y, por lo tanto, incapaces de actuar civilmente por su cuenta. La institución del Protectorado descansa sobre esta doctrina jurídica.

Ülmen: El diccionario de Félix de Augusta registra 'noble' y 'rico' como equivalentes. Si bien el *ülmen* tiene características de autoridad, esta se asocia a riqueza y prestigio material más que a poder político. En alguna ocasión se encuentra la denominación de *longko ülmen*, que conjuga ambas características.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

A

Abel, Enrique, 393
Aburto, 125
Aburto, *véase* Aburto Panguilef, Manuel
Aburto, Bernardo, 266
Aburto, familia, 101, 125
Aburto, Francisco, 48, 101, 125-126
Aburto, Germán, 126
Aburto, los, 94
Aburto, Luis, 125
Aburto, Juan, 125
Aburto, Manuel, *véase* Aburto Panguilef, Manuel
Aburto Ayñamko, José, 125
Aburto Ayñamko, Luis, 125
Aburto Namuncura, Bernardo, 125
Aburto Panguilef, *véase* Aburto Panguilef, Manuel
Aburto Panguilef, Manuel, 23-25, 32-33, 85, 101, 108, 124-126-128, 130-133, 163-164
Aburto Ramírez, Francisco, 125
Aedo Sagredo, Paula, 54
Aeta,
Aeta [Daniel],
Agnir, Panchita,
Aguayo, Félix Antonio,
Aguayo, Jerónimo, 351
Aguirre, Santiago,
Aignen, Francisca,
Ailla, , *véase* Ailla Varela, Juan
Ailla Varela, *véase* Ailla Varela, Juan
Ailla Varela, Juan, 181-182, 271
Aillapan, José, 304
Albran, 297
Alcaman,
Alcamán, *véase* Alcamán, Eugenio
Alcamán, Eugenio, 19, 43, 48, 101, 128-130
Alcamau, Manuel, 352
Alemán Rico, 297
Alessandri, Arturo, 131
Alfaro, Manuel,
Alfonso, *el Sabio*, 90, 229
Almonacid, Fabián, 19, 26
Alonso, 382
Althusser, Louis, 29-30
Álvarez, Alejandro, 256
Álvarez, Pedro J., 323, 393
Álvarez Toledo, Francisco, 14
Ambrosetti, Juan B.,
Amselle, Jean-Loup,
Amunátegui, *véase* Amunátegui, Miguel Luis
Amunátegui, Miguel Luis, 44
Ancan, Panchilla,
Ancavil,
Ancol, hermanos, 129
Ané,

Ané del C., 351
Anguita, familia, 55
Anguita, J. Ignacio, 193
Aniñir, Juan,
Antifilo, *véase* Antipilo, Manuel
Antilen, Juan,
Antillanca, José, 296
Antillen,
Antinao, Ignacio, 355
Antinao, Segundo,
Antipan, Pancho,
Antipil, *véase* Antipilo, Manuel
Antipil, Manuel, *véase* Antipilo, Manuel
Antipilo, Manuel, 100-101, 108
Antivil, Antonio,
Antonio, 298
Araneda, Saturnino,
Aravena, Guillermo,
Arenas, Emiliano,
Arendt, Hannah, 29
Arévalo, Gregorio, 193
Arriagada, J. Amador,
Arriagada, José Amador, 352
Arrieta, *véase* Arrieta, Javier
Arrieta, Javier, 67, 69, 80, 87, 92, 115
Arrieta, Javier L., 28
Arrieta S., Javier L., 28
Aucal, *véase* Aucal, Juan
Aucal, Juan, 298-299
Aucavil,
Aucnavil,
Augusta, Félix de, *véase* Félix José de Augusta, fray
Augusta, Félix José de, *véase* Félix José de Augusta, fray
Ávila, Jenaro,

B

Baeza, *véase* Baeza Espiñeira, Agustín
Baeza Espiñeira, Agustín, 256-257, 261-262
Balmaceda,
Balmaceda, R., *véase* Balmaceda, Rafael
Balmaceda, Rafael, 41
Bamberga, 332
Barrera Ortega, Aníbal, 54
Barros, Adolfo, 110
Barth, Frederik, 30
Bauman, Richard,
Bayle, Cosntantino, 13
Bello, *véase* Bello, Álvaro
Bello, Álvaro, 23, 40, 70
Bello, Andrés, 29-30, 47
Benavente, *véase* Benavente, Toribio
Benavente, Toribio, 181-182, 271
Benavente Jineo, Ricardo,
Bengoa, *véase* Bengoa, José
Bengoa, José, 21, 51, 103, 105
Berequeo, Tránsito, 322
Berho, Marcelo, 106
Bienestor, 109
Blanco,
Boizard, Carlos, *véase* Boizard, Huidobro, Carlos,
Boizard, Huidobro, Carlos, 19-20, 27, 50, 52,
Bonnet, *véase* Bonnet, Diana,
Bonnet, Diana, 14-16
Brand, Donald, 84
Bravo, *véase* Bravo, Eleazar
Bravo, Eleazar, 24-25, 63-65, 81, 91, 119-121
Bravo, Nelson, 163
Bravo C., Eleazar, 28
Briggs, Charles,
Briones,
Briones, *véase* Briones Luco, Ramón
Briones Luco, *véase* Briones Luco, Ramón

Briones, Ramón, *véase* Briones Luco, Ramón
Briones L., Ramón, *véase* Briones Luco, Ramón
Briones Luco, Ramón, 16, 19, 28, 56, 70, 88, 149, 168, 188, 191, 253, 256, 346, 348, 406
Brito, *véase* Brito, Lisandro
Brito, Lisandro, 114
Bucardo de Roettingen, fray, 212
Bunster, familia, 55
Bunster, los, *véase*, Bunster, familia,
Burgos, Atanasio, 80
Burgos, Celestino (Chelle), 95-96
Burgos, Chelle, *véase* Burgos, Celestino (Chelle)
Burgos, Rafa, 96
Burgos, Victorio, 353
Bustamante, Abdón,.

C

Cabeton,
Cabetón, *véase* Cabeton, Miguel
Cabeton, Miguel, 115-116
Cabrera, Abraham, 82
Cabullanca, Nicolás, 355
Cáceres, Fidel, 352
Cáceres, Manuel,
Calibullanca, Nicolás, 352
Calfio, José Segundo, 105
Calful, Mariano,
Calfurrai,
Callul, Paillan,
Calvo, 81
Calvo, Gustavo,
Calvül, José María,
Calvupan, Clorinda,
Campelo, *véase* Campelo, José
Campelo, José, 351-352
Candia, Abraham, 109
Caniulen, Antonia,
Caniunao, Isabel,
Canupí, Juan,
Canupí, Juan B.,
Carilaf, Rosa,
Carileo, Francisco, 105
Carileo, 422
Carlota María,
Carmona, Antinao,
Caro, Rosendo, 188
Carolina,
Carrasco, Manuel,
Carreño Gómez,
Carrera, Antonio,
Castañeda, J. Salvador, 204
[Castro], Francisco, 193
Castro, Salomé, 193
Castro Gutiérrez, Felipe, 7, 143-146
Catriel, *véase* Catriel, Juan,
Catriel, Juan, 73
Catrilefen Coihueco, Seferino,
Catrilelbun, María,
Catrilelvun, María,
Catrilen, Manuel,
Catrileo, *véase* Catrileo, Juan
Catrileo, Antonio, 99-100, 108
Catrileo, familia, 99
Catrileo, Jose María, 65
Catrileo, Juan, 25, 99, 159-160-161
Catrileo, Ramon,
Catrinahuel, José Antonio, 322
Catrileo, Juan M., 24
Caupolicán, 391
Cavada, Daniel,
Cayo Ayñamko, José, 125

Cayulao, Lucía,
Cayulao vda. de Cariman, Lucía, 353
Cayupan,
Cayupi, *véase* Cayupi, Pedro
Cayupi, José, 66
Cayupi, Juan, 352
Cayupi, Luisa,
Cayupi, Pedro, 180
Cayuqueo, Pedro, 109
Cerda, *véase* Cerda, Daniel
Cerda, Daniel, 22, 28, 92, 111-112, 327, 329, 337,427, 437
Cerda A., Daniel, *véase* Cerda, Daniel
Chanqualen,
Chañafil,
Chañafil, Carmen,
Chañafil, Juan,
Chañafil, Lorenzo,
Chehuin, Antonio,
Chehuin, Bartolo,
Chehuin, Jacinto,
Chelle, *véase* Burgos, Celestino (Chelle)
Chenquimilla, 187
Cheuquelen,
Cheuquenao, Ignacio, 105
Cheuquehuala, Ignacio, 105
Cheuquepa,
Chenquetrai,
Chiappa, *véase* Chiappa, Víctor M.
Chiappa, Víctor M., 219
Chihuailaf, los, 94
Chihuailaf, Antonio, 66, 133
Chihuaillan, Ignacio,
Chihuaillan, Ignacio 2º,
Chindo, 298
Chiñurra,
Chouquelen, Pedro,
Cea, Francisco,
Class, Percy E., 214
Colichicheo, Felipe, 162
Coipayante, Clemente, 298
Colil, Inai,
Colil, Pascual, 353
Colil, Rufina,
Colima, Onofre,
Coliman, *véase* Coliman, Lorenzo
Coliman, Lorenzo, 107
Colin,
Colin, Francisca,
Colin, Ignacio,
Colin, Juan,
Colipi, 174
Colipi, Juan Bautista, 107
Colipi, los, 107
Coliqueo, Miguel Santos, 393
Collimil, 294
Collincafu, Huaiquipan,
Collío,
Collío, *véase* Collío Huaiquilaf, Martin
Collio, José,
Collio, Martin, 66, 84
Collío Huaiquilaf, Martin, 84-85
Collipal, Juan, 109
Compan, José, 144, 146
Cona, Juan Manuel,
Conrady, *véase* Conrady, Luis,
Conrady, Luis, 70-71, 74, 77-78, 186, 271
Constancio, 211
Constantino, 16
Coña, Pascual, 352
Coñoenao,
Coñoenao, Pedro,
Coñuepan, 38-39, 217
Coñuepan, Domingo, 38-39

Coñuepan, familia, 94
Coñuepan, Venancio,
Correa, Juan, 109
Correa, Martín, 116
Cortés, Carlos,
Cortínez, Alfredo, 393
Cratchley, Claudio, 20
Crespo, Emilio,
Cresta, 116
Crow, Joanna, 94
Cruz, Anselmo de la, 205
Cruz Collipal, Juan de la, 109
Cruz Poza, Juan de la,
Cruz Puente, Juan de la,
Cuadra, Marco Antonio de la, 242
Cuante, Francisco, 322
Cuena *véase* Cuena Boy, Francisco,
Cuena Boy, Francisco, 13-14, 16-17, 104
Cuevas, Enrique, 304
Cuevas Silva, M. 163-164
Cuitiño, José, 116
Cullin, Juana,
Cumming, Alberto,
Cunill, Caroline, 13, 93
Curamil, 226
Curaqueo, Domingo, 105
Curifil, Antonio,
Curifil, Francisco 2º,
Curifil, Huenten,
Curifil, Pancho,
Curihiuinca, Elsy, 90
Curin, Juan,
Curipan, 295

D

Daireaux, Godofredo,
Dawson, Albert, 124
De la Maza, *véase* Maza, David de la
De la Torre, *véase* Torre Curiel, José Refugio de la,
Delgado, Daniela, 90
Derrida, Jacques, 33, 35, 38
Díaz, Darío, 322
Díaz, Felipe, 322
Díaz, Félix, 322
Díaz, José Miguel, 193
Díaz Álvarez, Pedro J., 322
Díaz de Aguayo, Sara,
Döll, 101
Domínguez, 240
Domínguez, Eleuterio,
Donoso, *véase* Donoso, Ricardo
Donoso, Francisco,
Donoso, Ricardo, 15, 48, 69, 95
Drioux,
Drouilly, [Martín], 54
Duhart, Ramón,
Duran, Teófilo *véase* Durán, Teófilo
Durán, *véase* Durán, Teófilo
Durán, T., *véase* Durán, Teófilo
Duran, [Teófilo], *véase* Durán, Teófilo
Durán, Teófilo, 21, 27-28, 55-56, 67, 169-170, 199
Durhkeim, Emile, 31
Duruy,

E

Ebensperger, Jorge G.,
Echeverría, 392
Echeverría, Joaquín de, 391
Edwards,
Edwards, Agustín, 139, 256
Edwards, María Luisa,
Egaña, Juan, 391
Egaña, Mariano de, 391

El Alemán véase *Alemán Rico*
Elena,
Emeth, Omar,
Engels,
Ennis, Juan Antonio, 7
Entenada, Margarita,
Entenado, Lorenza,
Epulef, 296
Epulef, Juan, 89
Epulef, Rosario, 296
Epullan, Juan,
Epuyao, Juan, 298
Ercilla, 283
Errazuriz,
Errázuriz, Isidoro.
Errázuriz, Federico, *véase* Errázuriz Echaurren, Federico,
Errázuriz, Teodoro, 19, 27
Errázuriz Echaurren, Federico, 38-39, 55
Errázuriz Urmeneta,
Escobar, Justo, 108
Eyzaguirre, Agustín, 391
Ezeiza, Gabino,

F

Faundes M., Mariano, 193
Felipe II, 14
Félix,
Félix José de Augusta, fray, 100, 247, 585
Fernández, Froilán, 351
Fernández, Lorenzo, 353
Fernández A., Elías, 418
Fernández Albano, Elías, 393
Fernández blanco,
Ferrada, 110
Figueroa, Luis, 108
Figueroa Larraín, Emiliano, 393, 418
Flores, Pedro, 353
Florinda María,
Foerster, *véase* Foerster, Rolf,
Foerster, Rolf, 24, 32-33, 43, 46-47, 66, 85, 89, 93-94, 104
Fontaine, Alfredo,
Francisca Panchita,
Francisco, *véase* [Maricura], Francisco
Frauenhäusl, Sigifredo de, 106, 237, 304
Fredes, Luis, 142
Frédes, Luis,
Frías, Carlos B., 393
Frioche, 382
Fuentes, Antonio, 352
Fuentes, Arturo, 108, 336
Fuentes, Emiliano, 54
Fuentes, Juan de la C.,
Fuentes, Rigoberto, 107
Fuentes, Rodolfo, 84
Fulano,
Furlo, Carlos, 37

G

Gaete, Manuel, 109
Gajardo, Arturo,
Gajardo, Félix, 352
Gallardo Agustín,
Gallardo, Manuel,
Gallegos, Franklin, 125
Gamboa, *véase* Gamboa, Diego
Gamboa, Diego, 32, 54-55, 97
Garay Burr, M. A., 321
Garbarini, Carmen Gloria, 93
García, *véase* García, Basilio
García, Basilio, 24, 65, 105
Gardiner, *véase* Gardiner, Allen Francis
Gardiner, Allen Francis, 216-217
Gastigau, Juan, 352
Gay, Claude, *véase* Gay, Claudio

Gay, Claudio, 20
Gerlach, Guillermo,
Gevilao, Esteban,
Glave T., Luis M., 93
González, *véase* González, Gregorio
González, *véase* González, Jonathan
González, Gregorio, 382-383
González, 237
González, Jonathan, 32, 54-55, 97
González, José Ignacio, 144, 146
González, Pascual, 351
González, Pedro Luis, 256
González, Susana, 5, 7
González H., Luis, 308
Grandon, Juana,
Grismaldi, *véase* Grismaldi, Facundo
Grismaldi, Facundo, 133
Guarda, Dina, 7
Guarda, Gabriel, 93
Gueiquipan, María Rosario, 322
Guemil, 109
Guevara, *véase* Guevara, Tomás,
Guevara, Tomás, 28, 38, 51, 54-55, 94, 97-98, 106-107, 125, 158-159, 246
Guirriman, Ramon,
Gutiérrez, Artemio, 55
Gutiérrez, Crispino, 353
Gutiérrez, J. Ramón,
Gutiérrez, José Miguel,
Gutiérrez, José Ramón,
Gutiérrez Castro, Felipe, 7
Gutrapeguey, María, 353
Guzmán Daniel, 111, 194

H

Harismendy,
Harismendy, hermanos,
Henríquez, Camilo, 391
Hernández, Jorge,
Hidalgo, José María,
Hilario, Luis,
Hillock, Laura, 7
Hiriarte, Juan Bautista,
Holley, Adolfo, 54
Huaiquil, Maria,
Huanquil, Juan de Dios, 320-322
Huanquil, Manuel, 320-322
Huaquipan, Antonio,
Huaiquivil, Ignacio,
Huelate, Francisco, 353
Huelato, Francisco,
Huenchucoi,
Huenchucoi, Jacinta,
Huenchucoi, Martín,
Huenchucoi, Miguel,
Huenchucoi, Nicolas,
Huenchucoi, Segundo,
Huenchuleo, Francisca,
Huenchuleo, Juan,
Huenchuleo Llanquileo, Felipe,
Huenchullan, Arturo, 65-66
Huenchullán, Arturo, 131, 133
Huenchuñir, Francisco, 73
Huente, Lorenzo,
Huente, Neculpan,
Huentecoi, Jurecheo,
Huentecul, José, *véase* Lun Huentecul, José
Huentecura, Marcelian,
Huentelen, Juana,
Huenten, Felipe,
Huenten, Félix,
Huenten, Lorenzo,
Huenten, Maricheo,
Huenten, Quimen Lorenzo,
Huenten, Panchita,

Huenten, Pascual,
Huento, *véase* Huento, José Manuel
Huenteo, José,
Huento, Antonio, 99
Huento, Jose Manuel, 108
Huento, José Manuel, 99-100
Huenuhan, Pablo,
Huenul,
Huenul, Domingo, 109
Huenul, Juan, 65, 84
Huenul, Mariano, 355
Huenumil, 108
Huenupan, Maria,
Huenupan, Pascual,
Huenuquir,
Huenuqueo, Patricia, 7
Huerapil, Juana,
Huerapil, Manuela,
Huerquipan, Juan,
Hueuchunas, Luis,
Huichalaf, José Andrés, 127
Huilipan, *véase* Huilipan, Ignacio
Huilipan, Ignacio, 353, 355
Huiquipan, Juan,
Huirapan, Belinda,
Hunuhuan, Domingo,
Huste,
Husuchunao, Pedro, 187

I

Ibáñez, *véase* Ibáñez, Adolfo,
Ibáñez, Adolfo, 48, 55, 132
Ibar, *véase* Ibar, Cesar
Ibar, C., *véase* Ibar, Cesar
Ibar, Cesar, 73, 83, 110, 182
Ibar, César,
Ibar, Juan de Dios, 192
Ibarra, 100
Ibarra, Carlos,
Ineipan,
Infante, José Miguel, 391
Ingles, Llanquin,
Inostroza, Iván, 46
Irribarra, *véase* Irribarra Stuardo, Carlos G.
Irribarra, Carlos, *véase* Irribarra Stuardo, Carlos G.
Irribarra, Carlos G., *véase* Irribarra Stuardo, Carlos G.
Irribarra, Carlos Guillermo, *véase* Irribarra Stuardo, Carlos G.
Irribarra S., Carlos G., *véase* Irribarra Stuardo, Carlos G.
Irribarra Stuardo, Carlos G., 28, 57, 59, 61, 67, 72, 89, 91-92, 96-97, 100, 102-104, 106, 110, 114-115, 124, 275, 317, 319, 325, 346, 421, 425
Islas, Avelino, 353

J

Jara, *véase* Jara, Álvaro
Jara, Álvaro, 21, 88
Jaramillo, los, 125
Jaramillo, Gabino,
Jaramillo, Pedro, 101
Jaramillo,Valle, familia, 101
Jaramillo,Valle, Guillermo, 101, 108
Jarpa, familia, 55
Jerónimo de Amberga, fray, 348
Jiménez, Emilio G.,
José, 295
José María, 298
José Segundo, 298
Juan, 298
Juan de Dios, *véase* Huanquil, Juan de Dios
Juanita, *véase* Lemunao, Juana Rosa
Judy, Ronald, 17

Jurecheo, Juanilla,

K

Kalfukura, Juan, 125
Kilapan, José Santos, 50
Khranass,
Khránass, 72

L

Labbé,
Labbé, Manuel, *véase* Labbé, Manuel A.
Labbé, Manuel A., 22-24, 28, 68, 80, 351, 356-357, 362
Labbé F., Santiago,
Laboulaye,
Lagos,
Lagos, Ernesto,
Landero, 38-39
Lara, Horacio, 39
Larenas, Alejandro, 54-55
Larraín Alcalde, Juan, 243
Larenas Fuenzalida, Alejandro, 27-28
Larraín Torres, Salvador,
Larroulet,
Las Casas, Bartolomé de, 13-14, 17
Lastarria, *véase* Lastarria, José Victorino
Lastarria, José V., *véase* Lastarria, José Victorino,
Lastarria, José Victorino, 44-45, 52, 55
Latcham, Ricardo,
Laval,
Laval, Ramón,
Laval, Ramón A.,
Lavanderos, familia, 55
Layseca, 181
Le Bonniec, Fabien, 7, 90, 92, 106
Leal, Francisco, 351
Leal, Pedro,
Leal, Pedro José, 352
Lefi[]ia, Facunda,
Lefinul,
Lefinul, Alonso,
Leiva, Abraham,
Lemunao, Juana Rosa, 119
Lenz, *véase* Lenz, Rodolfo
Lenz, Rodolfo, 99, 123, 201-202, 219, 222, 246, 347-348
León, Leonardo, 47, 93
Lepin, Curritrai,
Lepin, Lorenzo,
Lepin Millahual, Lorenzo, 351
Leonetti, Estanislao, *véase* Leonetti, Estanislao M.
Leonetti, Estanislao M., 50
Lepiman, Francisco,
Lepin Millahual, Lorenzo,
Lermanda, Federico,
[Letelier[, Valentín, 17
Levaggi, Abelardo,
Levian, Enrique, 187
Levian, Juan, 54
Levinao, *véase* Levinao, Francisco
Levinao, Francisco, 111, 194
Levio, Maica,
Liberato Novoa, José, 107
Lican Millalonco, Antonio, 108
Licán Millalonco, Antonio,
Lincoguir, Juan,
Lincoln,
Lincopan, Juan,
Lincopau, Juan, 352
Lincopi, *véase* Lincopi, Rosa
Lincopi, Juan, 61, 193
Lincopi, Juan Tomas, 389
Lincopi, Rosa, 193

Lizana, [Desiderio].
Llancapan, Chihuin,
Llancapan, Jacinto,
Llancapan, Marcelina,
Llancapichún, Ramón, 37
Llancanao, Juan,
Llancau, Marcelino, 105
Llancavil, Juan Antonio, 109
Llanquileo,
Llanquileo, Antonia,
Llanquileo, Francisca,
Llanquileo, Lorenza,
Llanquileo, Manuel,
Llanquileo, Marta,
Llanquileo Tranma, Juan, 82
Llanquin, Antonio,
Llanquin, Lorenza Ana,
Llanquinao, Gabriel, 281, 293
Llanquitrai, Inaileo,
Llanquirrai, Luisa,
Llaulen,
Lleuman, Juanilla,
Loncon, *véase* Loncon, Nicolas
Loncon, Nicolas, 298-299
Lolin, Jacinto,
López, Nepomuceno, 193
López Lican, Santos, 181
Lorenza,
Losada, Maria,
Luisa,
Lun Huentecul, José, 54

M

Macheo, José,
Macheo Illiman, José,
Macheo Ulliman, Pascual,
MacKay, familia, 55
Mackenna, Juan, 435
Maldonado, José Manuel,
Maliqueo, Felipe, 192
Maliqueo, Juan, 393
Maliqueo, Manuel, 352
Mallenqueo,
Mallon, Francisca,
Malvestitti, Marisa, 7
Manquenahuel, Andrés, 105
Manquelef, 221
Manquilef, *véase* Manquilef, Manuel
Manquilef, los, 94
Manquilef, Manuel, 23-24, 31, 37, 56-57, 65-66, 81, 84-85, 104-105, 127, 130-131, 133, 268, 270
Manquilef, Pedro, 66, 81
Manterola, 81, 83, 142
Manterola, Francisco,
Manuel, *véase* Manquilef, Manuel
Manuel, 297
Manuela,
Marchant, Luis,
Margarita Lorenza,
María,
María Pascuala,
Maricoi, Luisa,
[Maricura], Francisco, 354
Maricura, Isabel, 354
Marihual, José María,
Maril, Manuel,
Marilen, Juan,
Marileo, Juan 2º, 352, 355
Marileo, Juan Segundo,
Mariluan, 50
Mariman, 73
Mariman, Danay, 5, 7
Mariman, Pablo, 21

Marín Quilaleo, Juan de Dios,
Maripan, Calbutrai,
Maripan, Manuela,
Maripil, Francisca,
Mariqueo, Ambrosio, 266
Mariqueo, Manuel, 37
Martin, Juanilla,
Martin Curipillan, José, 237
Martínez, Alberto, 105
Martínez, Miguel Alfonso, 15
Martínez, Serafín, 192
Martínez, Simón, 354
Marx,
Matilde de la Purísima Concepción, sor, 205
Maza, *véase* Maza del Río, David de la
Maza, David, *véase* Maza del Río, David de la
Maza, David de la, *véase* Maza del Río, David de la
Maza del Río, David de la, 19, 27, 48-52, 117
Maza, Domingo de la, 19, 50
Mechtilde de la Santísima Trinidad, sor, 207
Medina,
Meecks, 26
Meli, Juan,
Melillan, José María, 81
Melillán, José María,
Meliman, Juan,
Melin, Domingo, 98
Melin, familia, 94
Melin, Fermín Alejo, 98
Melin Juan, 353
Melin Pedro Juan, 98, 107
Meliñamku, 98
Meliqueo, Merceda,
Melita, Antonio,
Melivilu, los, 94
Melivilu, Francisco, 25, 161
Mella, Celestino, 61, 193
Mella, Eduardo, 116
Mely, Juan,
Menard, *véase* Menard, André
Menard, André, 66, 85, 88, 94, 104, 125-126, 132
Méndez, José del C., *véase* Méndez, José del Carmen
Méndez, José del Carmen, 352
Méndez, José del Carmen 2º,
Mengano,
Mera, *véase* Mera, Joaquín
Mera, Joaquín, 237
Mera Jaramillo, Adriano, 101
Merino, Humberto,
Mesías,
Meza, 142
Mezzadra, Sandro, 36
Michaeli, 62
Miguel, 55
Millahual, Juana, 111, 353
Millahuala, Esteban,
Millaleo, *véase* Millaleo, Juan
Millaleo, Juan, 111, 194
Millaleo, M.,
Millaleo, Pascual, 352
Millanao, Francisco, 37, 39
Millanao, Joaquín, 37, 39
Millanao, Juan, 193
Millanao Lincopi, Juan, 61
Millanao, los, 40, 94
Millas J., Alcides,
Milos, Diego, 20
Miranda, Rosamel,
M.M.G.
Molina,

Molina, Ernesto,
Molina, María Florentina, 109
Molina Letelier, Diego,
Monse,
Montané, 127
Montecino, *véase* Montecino, Sonia,
Montecino, Sonia, 24, 32-33, 66, 85, 89, 94
Montecinos, Cristóbal, 76
Montt,
Montt, Pedro, 74
Montupil, Lorenzo, 109
Montupil, Santos,
Mopuy, José María, 322
Mora, Aniceto, 353
Mora, Avelino,
Mora, Héctor, 7
Moraga, *véase* Moraga, Armando
Moraga, Armando, 63-64, 82-85
Moraga D., Armando, 28
Moraga Droguett, Armando, 28, 82
Morales, *véase* Morales, Manuel
Morales, Manuel, 98-100, 108
Morales Z., Luis,
Morales Zuaznábar, Luis,
Moreno G., Humberto,
Moreno García, Humberto,
Moreno V., Ismael,
Morla,
Morover,
Moya, José Bernardo,
Mozó, *véase* Mozó, Francisco
Mozó, Francisco, 24, 99
Mozó M., Francisco, 28
Mozó Merino, Francisco, 28, 82
Mozo Morales, 98
Mujica, Felipe,
Mujica Mujica, Hernán,
Mulato, Osvaldo, 115
Munita Risoptatrón, Julio,
Muñoz, *véase* Muñoz, Félix
Muñoz, *véase* Muñoz, Fernando
Muñoz, *véase* Muñoz, Juan de Dios
Muñoz, F.,
Muñoz, Félix, 109, 193
Muñoz, Fernando, 92, 112, 118-119
Muñoz, Fidel,
Muñoz, Francisco,
Muñoz, Juan de Dios, 109
Muñoz Q., Francisco,
Muñoz Quezada, Francisco, 28
Muñoz R., Fidel, 393, 418

N

Nahuelcheo, Pamela, 90
Nahuelpan,
Nahuelpán, Héctor, 21, 71
Nahuelpan, Jurecheo,
Nahuen, Francisca,
Naillauca, Pascuala, 322
Nain, Manuel,
Namoncura, Francisco, 352, 354
Namuncura, Valentín, 382
Namuncura, *véase* Namuncura, Valentín
Namuncura, Valentín, 383
Nañuin Agnir Inai,
Naquet,
Navarro, Eulogio, 393
Necul, *véase* Necul, Manuel A.
Necul, Manuel A., 23, 81
Neculman, *véase* Neculman, Manuel Antonio
Neculman, Antonio, 228
Neculman, los, 94
Neculman, Manuel, 7, 23, 81, 105, 161
Neculman, Manuel A., 65, 80, 160, 203

Neculman, Manuel Antonio, 32, 97, 107, 211
Necuñir, Juan Jacinto,
Novion, Horacio, 393
Novoa, *véase* Novoa Cain, Mauricio
Novoa, Juan,
Novoa Cain, Mauricio, 14-17
Núñez, Aurelio, *véase* Núñez Morgado, Aurelio
Núñez Morgado, Aurelio, 163
Núñez, Nicolás, 352

Ñ

Ñain, Carmelita,
Ñain, Juana,
Ñamko, los, 97
Ñancucheo, Francisco,

O

O'Higgins, 392
O'Higgins, Ambrosio, 125, 435
Olivos, Prado, Luis,
Oñat, *véase* Oñat, Manuel,
Oñat, Manuel, 19, 22, 28, 68, 363, 367, 369, 380
Oñate, *véase* Oñate, Manuel,
Oñate, Manuel, 69, 92, 352
Oportus, Teófilo, 107
Orellana, Painecura, 192
Ortiz, Félix, 353
Ortiz, Hernán, 278
Ortiz, José Miguel, 7
Osses, Antonio, 107
Osorio, Luis, 193
Ovalle Vicuña, Félix,
Owen,
Oyarso,

P

Pacheco, Emilio, 108
Pacheco, de Oliveira, Joao, 30
Padilla, Félix R.,
Pagden, Anthony, 17
Pailañir, Hermenegildo, 422
Paillafil,
Paillafil, Juan,
Paillal, Cayumil,
Paillalef, *véase* Paillalef, Pascual
Paillalef, Ambrosio, 25, 266
[Paillalef], Eulario, 221
Paillalef, los, 94
Paillalef, María,
Paillalef, Pascual, 221
Paillaleo,
Paillan, Ignacio,
Paillan, Juan,
Paillan, Luis,
Paillan, Margarita,
Paillao, Juana,
Paillao, Manuel, 54
Paillao, Pedro,
Painefil, Antonio, 55
Painemal, 98, 158, 202
Painemal, familia, 94
Painemal, José Manuel, 62
Painemal, Martin S., 105
Painemal, Martin Segundo, 105
Paineman, 38-39
Painemilla,
Painemilla, Carmen,
Painemilla Llanquin, Pascual,
Painen, Pedro, 228
Painen, Francisco, 61, 193
Painenao, Ignacio,
Painepan, Clorinda,
Painepan, Felicia,

Painepan, Juana,
Painepan, Maria,
Painequeo,
Painequeo, Lia,
Painequeo, Maria,
Painevilo, los, 94
Painevilu, Domingo, 266
Palma, Miguel,
Panchu, Jurecheo,
Panguilef, 133
Parentini, *véase* Parentini, Luis Carlos
Parentini, Luis Carlos, 50, 95, 117, 125
Parga, Juan, 90
Parga, Juan N., 229
Parra, Juan, 193
Pavez, *véase* Pavez Ojeda, Jorge,
Pavez, Jorge, *véase* Pavez Ojeda, Jorge,
Pavez O. Jorge, *véase* Pavez Ojeda, Jorge,
Pavez Ojeda, Jorge, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 30, 35, 37-39, 55, 66, 85, 88, 94, 98, 125, 132, 135, 168
Payàs, Gertrudis, *véase* Payàs Puigarnau, Gertrudis,
Payàs Puigarnau, Gertrudis, 5, 7, 9, 13, 92-93, 168
Pedro, 298
Peña, Francisco, 37
Pepa,
Peralta, Abelardo,
Peralta, José Antonio,
Pérez, 181
Pérez Francisco Antonio, 353, 391
Pérez, José Joaquín, 9
Pérez de Arce, *véase* Pérez de Arce, Hermógenes,
Pérez de Arce, Hermógenes, 45-46
Pietrogrande, Hugo,
Pérez de Montalbán, Juan, 55
Pérez V., Salvador,
Pichulman,
Pichulman, Pascual,
Pilquiman, Lorenzo, 351, 353
Pineda, Juan F.,
Pinto, *véase* Pinto, Jorge
Pinto, Exequiel,
Pinto, Jorge, 46, 81, 94
Pinto Rodríguez, Jorge, 21
Piutre, Francisco, 54
Placencia, Serafín, 353
Poblete,Genaro,
Polma, Andrés, 353
Porma, Andrés, 355
Pozo M., Gabriel, 106
Proudhon,
Pucci, Adeodato, 37
Puchi, *véase* Pucci, Adeodato,
Puen Luis,
Puen, Miranda,
Puga, *véase* Puga Borne, Federico
Puga, F., *véase* Puga Borne, Federico
Puga B., Federico, *véase* Puga Borne, Federico
Puga Borne, *véase* Puga Borne, Federico
Puga Borne, F., *véase* Puga Borne, Federico
Puga Borne, Federico, 40-41, 74, 292, 309, 325, 343, 345, 408
Purralef,
Purralef, Pedro José,

Q

Quichuvil, Antonio,
Quidel, Juan Alberto, 39
Quilaleo, 384
Quilaleo, José, 383-384
Quilaleo, Juan de Dios María, 384
Quilapi, Ignacio, 54

Quilapi, Manuel, 54
Quilapi Cabeton, Lorenzo, 115
Quintana, Eliseo,
Quintre, Mateo,
Quintrileo, Lorenzo, 352
Quintriqueo, Pablo,
Quintriqueo, Saturnino, 352
Quiñeñen, Isabel,

R

Rabal, Ramón,
Raiman, 221
Rainado, Juan, 271
Raitrai,
Ramipan, Martín,
Ramírez, Jacinto, 353
Ramírez, R. V., 321
Ramírez, Rafael, 321
Ramírez Frías, Tomás,
Ramos, Julio, 134
Rañiqueo, Juan, 353
Reggio, Pedro de, 211
Reinao, *véase* Reinao, Juan,
Reinao, Juan, 181-182
Reyes, Diego A., 393
Reyes, Felipe, 98
Reyes, Ramón, 98
Reyes Millan, Felipe, 97
Reyes Millán, Felipe, 107
Ribera, [Leoncio], 55
Richther, *véase* Richther, Adolfo,
Richther, Adolfo, 430
Riesco,
Riffo, Sebastian,
Riffo, Sebastián, 353
Río, Ricardo del, 256
Ríos, Gerardo, 308
Rios G., Germán, 383, 385
Risopatrón, *véase* Risopatrón, Luis
Risopatrón, E., 343
Risopatrón, Luis, 74
Rivas, Luis,
Rivas, Santiago, 160
Rivera, *véase* Rivera, Leoncio
Rivera, Diego, 339
Rivera, Domingo,
Rivera, Leoncio, 23-25, 77, 81, 86-87, 112-113, 393
Rivera C., Leoncio, 418
Rivera Cruzat, Leoncio, 393, 418
Robles, *véase* Robles Rodríguez, Eulogio,
Robles B., Eudoro, 336
Robles, Eulogio,*véase* Robles Rodríguez, Eulogio,
Robles R., Eulogio,*véase* Robles Rodríguez, Eulogio,
Robles Rodríguez, Eulogio, 10, 20, 22-23, 27-28, 39-40, 42-45, 57-62, 67, 70, 74-77, 80, 83, 85-87, 89-90, 94-96, 98-99, 108-111, 113, 117, 119-120, 123, 130, 167, 171, 212, 222-223, 233, 235, 237-239, 254-255, 262-263, 268, 273, 316, 339, 349, 381-383, 392-393, 395, 418-419, 439
Robles Rodríguez, José,
Robles B., Eudoro,
Rodríguez, Enrique,
Rodríguez vda. de Carrasco, Carmen, 354
Rojas, Darío, 7
Rojas, Eduardo,
Rojas, Jovino, 353
Rojas, Luciano, 353
Rojas Salas, Luis A.,
Rojas Vásquez, Marcelo, 7
Romero, *véase* Romero, Esteban
Romero, Esteban, 37-39
Romero, Tomás, *véase* Romero Hodges, To-

más,
Romero Hodges, Tomás, 21, 27-28, 54-55
Rosales,
Roselot, Pedro,
Rousseau,
Royo, Pablo de, 210
Ruiz Tagle, Francisco, 391

S

Saavedra, *véase* Saavedra, Cornelio
Saavedra, Cornelio, 9, 44, 49, 51, 107
Saavedra, Gregorio, 353
Sadleir, Carlos, 113, 124, 144
Sadleir, Carlos A., 127, 214, 269, 393
Sagredo Baeza, Rafael, 7, 144, 146
Said, Edward,
Saint Anne, E., 393
Salas, Gerardo, 105
Salas, Juan, 109
Salazar, Alfredo, 353
Salazar, Filadelfo,
Samaniego, Mario, 93
Sambolin, Aurora, 7
Sandoval, *véase* Sandoval, Erasmo
Sandoval, Erasmo, 62, 83
Sandoval, Juan, 105
Sanhueza, Virginio, 19
Santa María, Domingo, 27, 54
Santander, Alejandro, 108
Schaefer,
Schaefer, Teodoro,
Schmidlin, Hermann, 7, 160-161
Schmidt, Teodoro, 52, 70
Schmitt, *véase* Schmitt, Enrique,
Schmitt, Enrique, 37
Schnake, *véase* Schnake, Carlos
Schnake, Carlos, 115-116
Schnake, Oscar, 116
Schnake Vergara, Carlos, 28
Schneider, *véase* Schneider, Federico
Schneider, *véase* Schneider, [Sigisfredo]
Schneider, Federico, 77-78, 182
Schneider, [Sigisfredo], 73
Schwerter,*véase* Schwerter, José
Schwerter, José, 80, 106, 117-118, 126
Schwerter Q., J.,
Schwerter Q., José, 28
Schmidlin, Hermann,
Sena Araneda, Bernardino de, 353
Sepúlveda, *véase* Sepúlveda, Belisario
Sepúlveda, Belisario, 109
Sepúlveda, Eduardo, 393
Sepúlveda, Juan A.,
Sepúlveda, Rufuino,
Serafina,
Serrano Montaner,
Sibeud, Emmanuelle,
Silva, Osvaldo, 40
Silva, Santiago,
Silva Vargas, *véase* Silva Vargas, Fernando,
Silva Vargas, Fernando, 15-16, 69
Slater, 247
Solari, Pablo, 29
Soro B., Fernando, 383, 385
Soto, *véase* Soto, Leónidas
Soto, Evaristo, 393
Soto A., Evaristo, 418
Soto, Juan Esteban, 353
Soto, Leónidas, 72, 96-97
Soto C., Leónidas,
Soto Cañas, Leónidas,
Sotomayor, *véase* Sotomayor González, Alberto
Sotomayor, Alberto, *véase* Sotomayor

González, Alberto
Sotomayor González, Alberto, 132-133
Speck, Frank, 84
Spivak, Gavatri,
Stuardo, Luis A., 36
Subercaseaux, familia, 55

T

Temo, Pascual, 113
Thenig,
Toledo, Víctor, *véase* Toledo Llancaqueo, Víctor,
Toledo Llancaqueo, Víctor, 44-45, 51
Tolosa, Segundo, 109
Tomás,
Tori, Domingo, 140
Tori Rucal, Domingo, 141
Torre Curiel, José Refugio de la, 14-15
Torrealba,
Traiguin, Antonia,
Trangol,
Trangol, Domingo,
Treulen,
Treulen, Manuel, 237
Treutler, 101
Treutler, Paul, 125
Treutler, Pedro, 101
Trina, Domingo, 109
Tripaillante, José, 101, 108
Trizano, 111, 195
Tussaint, Pablo,

U

Ulloa, *véase* Ulloa Valenzuela, Fernando
Uribe, Emilio,
Uribe, los, 125
Ulloa, Fernando, 7, 13
Ulloa, Santos, 353
Ulloa Valenzuela, Fernando, 95-96, 101
Urrutia, *véase* Urrutia, Basilio
Urrutia, *véase* Urrutia, Gregorio
Urrutia, *véase*, Urrutia, Temístocles
Urrutia, *véase* Urrutia Loncon, Juan Bautista
Urrutia, familia, 94
Urrutia, Basilio, 48, 52
Urrutia, Gregorio, 51, 55, 97-98, 100, 115
Urrutia, Juan B.,
Urrutia, T.,
Urrutia, Temístocles, 59, 73-75, 256
Urrutia Loncon, *véase* Urrutia Loncon, Juan Bautista
Urrutia Loncon, Juan B., 108
Urrutia Loncon, Juan Bautista, 98-100, 108
Urzúa, Ernesto,

V

Valenzuela, Nicanor, 353
Vallejos, Andrés,
Varas, Antonio, 44
Varela, José Miguel, 55
Vásquez Grille, Isidoro, 256
Velasco, *véase* Velasco, Fanor
Velasco, Fanor, 15, 48, 69, 95
Vélez, Ricardo, *véase* Vélez Lamberry, Ricardo,
Vélez L., Ricardo, 393
Vélez Lamberry, Ricardo, 393, 418
Venegas, *véase* Venegas, Gregorio
Venegas, Gregorio, 384
Venegas, Isaías,
Vera Pinto, 339
Vera Pinto, Rodolfo,
Verdugo, Enrique,
Vergara, *véase* Vergara Donoso, José Francisco

Vergara, Luis Antonio, 256
Vergara Donoso, José Francisco, 225, 256-257, 261-262, 408
Verniory, Gustave, 343
Vezub, Julio, 94
Vicente,
Vicuña, Julio,
Vicuña Mackenna, Benjamín, 44, 46
Vidal, *véase* Vidal, Arturo
Vidal, Arturo, 131, 133
Vidal, Juan de Dios, 109
Villagrán, Andrés, 353
Villalobos, 65
Villarroel, Fernanda, 93
Villouta, Juan B.,
Vissman, Cornelia, 33
Vitoria Francisco de, 17
Vivanco, Juan de Dios, 353
Vivar, Catalina, 7
Vivar, Julieta, 5, 7
Viveiros de Castro, Eduardo, 36

W

Walder, Roberto, 195
Westenhoefer, Max,
Wilke, Robt, 393
Wilson, Gmo., *véase* Wilson, Gillermo
Wilson, Gillermo, 215, 218
Wolleter de V., Rodolfo,
Wood, Héctor,

Y

Yaitul, Pascual, 105
Yevilao, Esteban, 353

Z

Zapata, Isaías,
Zaslavsky, Danielle, 7
Zavala, José Manuel, 7, 11, 15, 93
Zenon Melivilu, Francisco, 268
Zuñiga, Fernando, 13
Zurita, Celestino, 353

ÍNDICE

Agradecimientos 7
Prólogo 9
El Protectorado de indígenas en Chile. Estudio introductorio por Jorge Pavez Ojeda 13

Planos y mapas 137

Cuadros 147

Ilustraciones 153

Las Memorias del protectorado 167

1898. Teófilo Durán. Memoria que el protector de indígenas pasa a la inspección general De tierras y colonización 169
1901. Eulogio Robles. Memoria del protectorado de indígenas 171
1902. Eulogio Robles. Memoria del protectorado de indígenas 223
1903. Eulogio Robles. Memoria del protector de indígenas 235
1904. Eulogio Robles. Memoria del protectorado de indígenas 239
1905. Eulogio Robles. Memoria del protectorado de indígenas 255
1906. Eulogio Robles. Memoria del protectorado de indígenas 263
1907. Carlos G. Irribarra. Memoria del protector de indígenas de Valdivia y Llanquihue 275
1908. Carlos G. Irribarra. Memoria del protectorado de indígenas. Provincia de Valdivia 319
1908. Daniel Cerda. Memoria del protector de indígenas de Llanquihue 327
1909. Eulogio Robles. Memoria del protector de indígenas de Temuco 339
1910. Manuel Labbé. Memoria del protectorado de indígenas de Arauco 351

1910. Manuel Labbé. Informe del protector de indígenas de Arauco a la Comisión parlamentaria 357
1910. Manuel Oñat. Memoria del protectorado de indígenas de Malleco 363
1910. Manuel Oñat. Informe del protector de indígenas de Malleco a la Comisión parlamentaria 369
1910. Eulogio Robles. Memoria del protector de indígenas de Cautín 381
1910. Eulogio Robles. Informe del protector de indígenas de Cautín a la Comisión parlamentaria 395
1910. Carlos G. Irribarra. Memoria del protectorado de indígenas de Valdivia 421
1910. Daniel Cerda. Memoria del protectorado de indígenas de Llanquihue 427
1911. Eulogio Robles. Memoria del protector de indígenas de Cautín 439
1911. Manuel Labbé. Memoria del protectorado de indígenas de Arauco 441
1911. Javier Arrieta. Memoria del protectorado de indígenas de Malleco 447
1911. Carlos G. Irribarra. Memoria del protectorado de indígenas de Valdivia 455
1911. Daniel Cerda. Memoria del protectorado de indígenas de Llanquihue 465
1912-1913. Temístocles Urrutia. Memoria de la Inspección General de Colonización e Inmigración (Extracto sobre protectorado de indígenas) 473
1912. Carlos G. Irribarra. Memoria del protectorado de indígenas de Valdivia 479
1913. Fernando Muñoz. Memoria del protectorado de indígenas de Arauco 487
1913. Javier Arrieta. Memoria del protectorado de indígenas de Malleco 493
1913. Eleazar Bravo. Memoria del protector de indígenas de Cautín 495
1913. José Schwerter. Memoria del protectorado de indígenas de Llanquihue 503
1915 y 1916. Temístocles Urrutia. Memoria de la Inspección General de Colonización e Inmigración (Extractos sobre protectorados de indígenas, radicación de indígenas y movimiento del personal) 511
1917 y 1918. Temístocles Urrutia. Memoria de la Inspección General de Colonización e Inmigración (Extractos sobre protectorado de indígenas y movimiento del personal) 517

FUENTES COMPLEMENTARIAS 521

Informe de visita a isla Huapi e isla Ñielnié. Lago Budo, 27 de diciembre 1904. Eulogio Robles R. 527

Oficio al Inspector General de Colonización e Inmigración. Eulogio Robles R. Temuco, 27 de mayo de 1909 533

CORRESPONDENCIA

Cartas de Eulogio Robles a Rodolfo Lenz (1910-1913) 539

COLUMNAS DE PRENSA

Raza Araucana. Don Manuel Labbé. Sociedad Caupolicán Manuel Manquilef G. 551

Los indígenas se quejan. Observaciones interesantes. Una nota al ministro. Manuel A. Neculmán 557

Don Pedro Montt y un protector de indígenas. Nobles ideales. Ironías de la suerte. Armando Moraga D. 559

Asuntos indígenas. El indígena Cayupan y el protectorado. Armando Moraga D. 563

La ley, los indígenas y don Juan Huenul. Armando Moraga D. 565

La ley, los indios, Juan Huenul y otros hombres públicos. Armando Moraga D. 569

Sobre un pretendido lanzamiento indígena. Nota pasada por el protector a la Intendencia. Armando Moraga D. 573

GLOSARIO 575

Índice onomástico 587

TÍTULOS PUBLICADOS
POR EL
CENTRO DE INVESTIGACIONES DIEGO BARROS ARANA

1990-2021

40 años, 40 historias. Exiliados chilenos y solidaridad en Holanda (Santiago, 2015, 193 págs.).

A 90 años de los sucesos de la escuela Santa María de Iquique (Santiago, 1998, 351 págs.).

Abarca, Soledad, Octavio Cornejo, Paula Fiamma, Ximena Rioseco, *Instantes memorables. 100 años de fotografía minutera en Chile* (Santiago, 2019, 203 págs.).

Adler Lomnitz, Larissa, *Lo formal y lo informal en las sociedades contemporáneas* (Santiago, 2008, 404 págs.).

Álbum de Isidora Zegers de Huneeus, con estudio de Josefina de la Maza, edición en conmemoración del bicentenario de la Biblioteca Nacional de Chile (Santiago, 2013).

Alcázar Garrido, Joan de, *Chile en la pantalla. Cine para escribir y enseñar la historia* (1970-1998) (Santiago, 2013, 212 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2000, tomo I, 347 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2000, tomo II, 371 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2000, tomo III, 387 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2000, tomo IV, 377 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2000, tomo V, 412 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2001, tomo VI, 346 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2001, tomo VII, 416 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2002, tomo VIII, 453 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2002, tomo IX, 446 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2002, tomo X, 462 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2003, tomo XI, 501 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2005, tomo XII, 479 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2005, tomo XIII, 605 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2005, tomo XIV, 462 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2005, tomo XV, 448 págs.).

Barros Arana, Diego, *Historia general de Chile*, 2ª edición (Santiago, 2000, tomo XVI, 271 págs.).

Bascuñán E., Carlos, Magdalena Eichholz C. y Fernando Hartwig I., Naufragios en el océano Pacífico sur (Santiago, 2003, 866 págs.).

Bascuñán E., Carlos, Magdalena Eichholz C. y Fernando Hartwig I., *Naufragios en el océano Pacífico sur*, 2ª edición (Santiago, 2011, tomo I, 838 págs.).

Bascuñán E., Carlos, Magdalena Eichholz C. y Fernando Hartwig I., *Naufragios en el océano Pacífico sur* (Santiago, 2011, tomo II, 940 págs.).

Bauer, Arnold, *Chile y algo más. Estudios de historia latinoamericana* (Santiago, 2004, 228 págs.).

Bello, Andrés, *Cuadernos de Londres*, prólogo, edición y notas de Iván Jaksic y Tania Avilés (Santiago, 2017, 900 págs.).

Blest Gana, Alberto, *Durante la Reconquista.* Novela histórica (Santiago, 2009, 926 págs.).

Bianchi, Soledad, *La memoria: modelo para armar* (Santiago, 1995, 275 págs.).

Biblioteca de Fundamentos de la Construcción de Chile (Santiago, 2007-2013, 100 vols.).

Caffarena Barcenilla, Paula, *Viruela y vacuna. Difusión y circulación de una práctica médica. Chile en el contexto hispanoamericano 1780-1830* (Santiago, 2016, 232 págs.).

Cardoso, Armindo, *Un otro sentimiento del tiempo. Chile, 1970-1973* (Santiago, 2017, 177 págs.).

Cartes Montory, Armando, *BIOBÍO. Bibliografía histórica regional* (Santiago, 2014, 358 págs).

Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, *La época de Balmaceda. Conferencias* (Santiago, 1992, 123 págs.).

Contreras, Lidia, *Historia de las ideas ortográficas en Chile* (Santiago, 1993, 416 págs.).

Cordero Fernández, Macarena, Rafael Gaune Corradi, Rodrigo Moreno Jeria (compiladores), *Cultura legal y espacios de justicia en América, siglos XVI-XIX* (Santiago, 2017, 318 págs.).

Cornejo C., Tomás, *Manuela Orellana, la criminal. Género, cultura y sociedad en el Chile del siglo XVIII* (Santiago, 2006, 172 págs.).

Chihuailaf, Elicura, *El azul de los sueños* (Santiago, 2010, 193 págs.).

Darwin, Charles, *El origen del hombre y la selección en relación al sexo* (Santiago y Madrid, 2020, 450 págs.).

Darwin, Charles, *Observaciones geológicas en América del sur*, traducción de María Teresa Escobar Budge (Santiago, 2012, 464 págs.).

Devés Valdés, Eduardo, *Del Ariel de Rodó a la CEPAL (1900-1950). El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Entre la modernización y la identidad* (Santiago y Buenos Aires, 2000, tomo I, 336 págs.).

Devés Valdés, Eduardo, *El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Desde la CEPAL al neoliberalismo (1950-1990)* (Santiago y Buenos Aires, 2003, tomo II, 332 págs.).

Devés Valdés, Eduardo, *El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Entre la modernización y la identidad. Las discusiones y las figuras del fin de siglo. Los años 90* (Santiago y Buenos Aires, 2004, tomo III, 242 págs.).

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, *Catálogo de publicaciones, 1999*, edición del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana (Santiago, 1999, 72 págs.).

Dirección de Obras Municipales, I. Municipalidad de Santiago, *Santiago sur. Formación y consolidación de la periferia* (Santiago, 2015, 308 págs.).

Dirección de Obras Municipales, I. Municipalidad de Santiago, *Palacio Cousiño. Historia y restauración - History and Restoration* (Santiago, 2018, 163 págs.).

Donoso, Carlos y Jaime Rosenblitt (editores), *Guerra, región, nación: La confederación Perú-Boliviana. 1836-1839* (Santiago, 2009, 369 págs.).

Dussaillant, Jacqueline y Macarena Urzúa, *Concisa, original y vibrante. Lecturas sobre la revista Zig-Zag* (Santiago, 2020, 256 págs.).

El Censor Americano, introducción y transcripción Iván Jaksić (Santiago, 2019, 360 págs).

Ehrmann, Hans, *Retratos* (Santiago, 1995, 163 págs.).

Feliú Cruz, Guillermo, *Obras escogidas. 1891-1924. Chile visto a través de Agustín Ross*, 2ª edición (Santiago, 2000, vol. I, 172 págs.).

Feliú Cruz, Guillermo, *Obras escogidas. Durante la república*, 2ª edición (Santiago, 2000, vol. II, 201 págs.).

Feliú Cruz, Guillermo, *Obras escogidas. En torno de Ricardo Palma*, 2ª edición (Santiago, 2000, vol. III, 143 págs.).

Feliú Cruz, Guillermo, Obras escogidas. La primera misión de los Estados Unidos de América en Chile, 2ª edición (Santiago, 2000, vol. IV, 213 págs.).

Fernández Canque, Manuel, *ARICA 1868 un tsunami, un terremoto* (Santiago, 2007, 332 págs.).

Fernández Canque, Manuel, *Arica de antaño en la pluma de viajeros notables. Siglos XVI-XIX* (Santiago, 2016, 598 págs.).

Fernández Labbé, Marcos, *Bebidas alcohólicas en Chile. Una historia económica de su fomento y expansión, 1870-1930* (Santiago, 2010, 270 págs.).

Fitz Roy, Robert, *Viajes del "Adventure" y el "Beagle". Apéndices* (Santiago 2013, 360 págs.).

Fitz Roy, Robert, *Viajes del "Adventure" y el "Beagle". Diarios*, traducción de Armando García González (Santiago 2013, 584 págs.).

Fondo de Apoyo a la Investigación 1992, *Informes*, n.º 1 (Santiago, julio, 1993).

Fondo de Apoyo a la Investigación 1993, *Informes*, n.º 2 (Santiago, agosto, 1994).

Fondo de Apoyo a la Investigación 1994, *Informes*, n.º 3 (Santiago, diciembre, 1995).

Fondo de Apoyo a la Investigación 1995, *Informes*, n.º 4 (Santiago, diciembre, 1996).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 1998, *Informes*, n.º 1 (Santiago, diciembre, 1999).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 1999, *Informes*, n.º 2 (Santiago, diciembre, 2000).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2000, *Informes*, n.º 3 (Santiago, diciembre, 2001).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2001, *Informes*, n.º 4 (Santiago, diciembre, 2002).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2002, *Informes*, n.º 5 (Santiago, diciembre, 2003).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2003, *Informes*, n.º 6 (Santiago, diciembre, 2004).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2004, *Informes*, n.º 7 (Santiago, diciembre, 2005).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2005, *Informes*, n.º 8 (Santiago, diciembre, 2006).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2006, *Informes*, n.º 9 (Santiago, diciembre, 2007).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2007, *Informes*, n.º 10 (Santiago, diciembre, 2008).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2008, *Informes*, n.º 11 (Santiago, diciembre, 2009).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2009, *Informes*, n.º 12 (Santiago, diciembre, 2010).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2010, *Informes*, n.º 13 (Santiago, diciembre, 2011).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2011, *Informes*, n.º 14 (Santiago, diciembre, 2012).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2012, *Informes*, n.º 15 (Santiago, diciembre, 2013).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2013, *Informes*, n.º 16 (Santiago, diciembre, 2014).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2014, *Informes*, n.º 17 (Santiago, diciembre, 2015).

Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial 2015, *Informes*, n.º 18 (Santiago, diciembre, 2016).

Forstall Comber, Biddy, *Crepúsculo en un balcón: ingleses y la pampa salitrera* (Santiago, 2014, 427 págs.).

Fray Félix José de Augusta, *Diccionario mapudungún-español. Español-mapudungún*, directora Belén Villena Araya (Santiago, 2017, 628 págs.).

Gazmuri, Cristián, *Tres hombres, tres obras. Vicuña Mackenna, Barros Arana y Edwards Vives* (Santiago, 2004, 163 págs.).

Gazmuri, Cristián, *La historiografía chilena (1842-1970)* (Santiago, 2006, tomo I, 444 págs.).

Gazmuri, Cristián, *La historiografía chilena (1842-1970)* (Santiago, 2008, tomo II, 526 págs.).

Gay, Claudio, *Atlas de la historia fisica y política de Chile* (Santiago, 2004, tomo primero, 250 págs.).

Gay, Claudio, *Atlas de la historia física y política de Chile* (Santiago, 2004, tomo segundo, 154 págs.).

Gillis, James M., *Expedición astronómica naval de los Estados Unidos al hemisferio Sur durante loas años 1849-'50-'51-'52* (Santiago, 2016, 591 págs.).

González Miranda, Sergio, *Hombres y mujeres de la pampa. Tarapacá en el ciclo de expansión del salitre*, 2ª edición (Santiago, 2002, 474 págs.).

González V., Carlos, Hugo Rosati A. y Francisco Sánchez C., *Guamán Poma. Testigo del mundo andino* (Santiago, 2003, 619 págs.).

Guerrero Jiménez, Bernardo (ed.), *Retrato hablado de las ciudades chilenas* (Santiago, 2002, 309 págs.).

Herrera Rodríguez, Susana, *El aborto inducido. ¿Víctimas o victimarias?* (Santiago, 2004, 154 págs.).

Humboldt, Alexander von, *Cosmos. Ensayo de una descripción física del mundo* (Santiago, 2011, 964 págs.).

Hutchison, Elizabeth Q., *Labores propias de su sexo. Género, políticas y trabajo en Chile urbano 1990-1930*, traducción de Jacqueline Garreaud Spencer (Santiago, 2006, 322 págs.).

Jaksic, Fabián M., Pablo Camus, Sergio A. Castro, *Ecología y Ciencias Naturales. Historia del conocimiento del patrimonio biológico de Chile* (Santiago, 2012, 228 págs.).

Kordic R., Raïssa. *Topónimos y gentilicios de Chile* (Santiago, 2014, 313 págs.).

Las horas Gott. Un manuscrito iluminado en Chile. Acompañado de un estudio de Daniel González Erices, Paola Corti Badía y María José Brañes González, Las horas Gott. Un manuscrito iluminado en Chile. Estudio introductorio (Santiago, 2019, 94 págs. y 306 págs.).

León, Leonardo, *Los señores de la cordillera y las pampas: los pehuenches de Malalhue, 1770-1800*, 2ª edición (Santiago, 2005, 355 págs.).

León, Marco Antonio, *Construyendo un sujeto criminal. Criminología, criminalidad y sociedad en Chile. Siglos XIX y XX* (Santiago, 2015, 185 págs.).

Lira, Rodrigo, *Proyecto de obras completas* (Santiago, 2003, 153 págs.).

Lizama, Patricio, *Notas de artes de Jean Emar* (Santiago, RIL Editores-Centro de Investigaciones Barros Arana, 2003).

Lizama Silva, Gladys (coordinadora), *Modernidad y modernización en América Latina. México y Chile, siglos XVIII al XX* (Santiago-Guadalajara, 2002, 349 págs.).

Loveman, Brian y Elizabeth Lira, *Las suaves cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política 1814-1932* (Santiago, 1999, 338 págs.).

Loveman, Brian y Elizabeth Lira, *Las ardientes cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política 1932-1994* (Santiago, 2000, 601 págs.).

Loveman, Brian y Elizabeth Lira, *El espejismo de la reconciliación política. Chile 1990-2002* (Santiago, 2002, 482 págs.).

Marsilli, María N., *Hábitos perniciosos: religión andina colonial en la diócesis de Arequipa (siglos XVI al XVIII)* (Santiago, 2014, 156 págs.).

Martínez C., José Luis, *Gente de la tierra de guerra. Los lipes en las tradiciones andinas y el imaginario colonial* (Lima, 2011, 420 págs.).

Martínez L., René, *Santiago de Chile: Los planos de su historia. Siglos XVI a XX, de aldea a metrópolis* (Santiago, 2007, 130 págs.).

Mazzei de Grazia, Leonardo, *La red familiar de los Urrejola de Concepción en el siglo XIX* (Santiago, 2004, 193 págs.).

Medina, José Toribio, *Biblioteca chilena de traductores*, 2ª edición, corregida y aumentada con estudio preliminar de Gertrudis Payàs, con la colaboración de Claudia Tirado (Santiago, 2007, 448 págs.).

Mercedes Marín del Solar (1804-1866). Obras reunidas, compilación, estudio preliminar y notas críticas de Joyce Contreras Villalobos (Santiago, 2015, 642 págs.).

Mistral, Gabriela, *Lagar II* (Santiago, 1991, 172 págs.).

Mistral, Gabriela, *Lagar II*, primera reimpresión (Santiago, 1992, 172 págs.).

Mitre, Antonio, *El dilema del centauro. Ensayos de teoría de la historia y pensamiento latinoamericano* (Santiago, 2002, 141 págs.).

Moraga, Pablo, *Estaciones ferroviarias de Chile. Imágenes y recuerdos* (Santiago, 2001, 180 págs.).

Morales, José Ricardo, *Estilo y paleografía de los documentos chilenos siglos XVI y XVII* (Santiago,1994, 117 págs.).

Moreno Jeria, Rodrigo, Jorge Ortiz Sotelo, *Un derrotero del Mar del Sur. El Pacífico americano a fines del siglo XVII* (Santiago, 2018, 539 págs.).

Muñoz Delaunoy, Ignacio y Luis Ossandón Millavil (comps.), *La didáctica de la Historia y la formación de ciudadanos en el mundo actual* (Santiago, 2013, 456 págs.)

Muratori, Ludovico Antonio, *El cristianismo feliz en las misiones de los padres de la Compañía de Jesús en Paraguay*, traducción, introducción y notas Francisco Borghesi S. (Santiago, 1999, 469 págs.).

Mussy, Luis de, *Cáceres* (Santiago, 2005, 589 págs.).

Onetto Pavez, Mauricio, *Historia de un pasaje-mundo: El estrecho de Magallanes en el siglo de su descubrimiento* (Santiago, 2018, 99 págs.).

Oña, Pedro de, *El Ignacio de Cantabria*, edición crítica de Mario Ferreccio P. y Mario Rodríguez (Santiago, 1992, 441 págs.).

Paiva, Eduardo França, *Nombrar lo nuevo. Una historia léxica de Iberoamérica entre los siglos XVI y XVIII (las dinámicas de mestizajes y el mundo del trabajo)* (Santiago, 2020, 316 págs.).

Parra, Antonio, *Descripción de diferentes piezas de historia natural las más del ramo marítimo, representadas en setenta y cinco láminas*, edición facsimilar. Acompañada de un estudio de Armando García González, El naturalista portugués Antonio Parra. Su obra científica (Santiago, 2016, 370 págs. y 244 págs.).

Pinto Rodríguez, Jorge, *La formación del Estado, la nación y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión*, 2ª edición (Santiago, 2003, 320 págs.).

Piwonka Figueroa, Gonzalo, *Orígenes de la libertad de prensa en Chile: 1823-1830* (Santiago, 2000, 178 págs.).

Plath, Oreste, *Olografías. Libro para ver y creer* (Santiago, 1994, 156 págs.).

Puig-Samper, Miguel Ángel, Francisco Orrego, Rosaura Ruiz y J. Alfredo Uribe (eds.), *"Yammerschuner" Darwin y la darwinización en Europa y América* (Madrid/Santiago, 2015, 350 págs.).

Rebok, Sandra, *Humboldt y Jefferson. Una amistad transatlántica de la Ilustración* (Santiago, 2019, 200 págs.).

Recabarren, Floreal, *La matanza de San Gregorio 1921: Crisis y tragedia* (Santiago, 2003, 117 págs.).

Rengifo S., Francisca, *Vida conyugal, maltrato y abandono. El divorcio eclesiástico en Chile, 1850-1890* (Santiago, 2012, 340 págs.).

Retamal Ávila, Julio y Sergio Villalobos R., *Bibliografía histórica chilena. Revistas chilenas 1843-1978* (Santiago, 1993, 363 págs.).

Rinke, Stefan, *Cultura de masas, reforma y nacionalismo en Chile, 1930-1931* (Santiago, 2002, 174 págs.).

Rojas Flores, Jorge, *Las historietas en Chile 1962-1982. Industria, ideología y prácticas* (Santiago 2016, 549 págs.).

Rosenblitt, Jaime (editor) *Las revoluciones americanas y la formación de Estados Nacionales* (Santiago, 2013, 404 págs.).

Rousso, Henry, *La última catástrofe. La historia, el puente, lo contemporáneo* (Santiago, 2018, 285 págs.).

Rubio, Patricia, *Gabriela Mistral ante la crítica: bibliografía anotada* (Santiago, 1995, 437 págs.).

Sagredo Baeza, Rafael (ed.), *Biblioteca Nacional. Patrimonio republicano de Chile* (Santiago, 2014, 209 págs.).

Sagredo Baeza, Rafael, *La gira del Presidente Balmaceda al norte. El inicio del "crudo y riguroso invierno de un quinquenio (verano de 1889)"* (Santiago, 2001, 206 págs.).

Sagredo Baeza, Rafael (ed.), *Ciencia-mundo. Orden republicano, arte y nación en América* (Santiago, 2010, 342 págs.).

Sagredo Baeza, Rafael y José Ignacio González Leiva, *La Expedición Malaspina en la frontera austral del imperio español* (Santiago, 2004, 944 págs.).

Sagredo Baeza, Rafael, José Ignacio González Leiva y José Compan Rodríguez, *La política en el espacio. Atlas histórico de las divisiones político-administrativas de Chile 1810-1940* (Santiago, 2016, 334 págs.).

Sagredo Baeza, Rafael y Rodrigo Moreno Jeria (coordinadores), *El Mar del Sur en la historia. Ciencia, expansión, representación y poder en el Pacífico* (Santiago, 2015, 562 págs.).

Salinas C., Maximiliano, Daniel Palma A, Christian Báez A y Marina Donoso R., *El que ríe último... Caricaturas y poesías en la prensa humorística chilena del siglo XIX* (Santiago, 2001, 291 págs.).

Salinas C., Maximiliano, Micaela Navarrete A., *Para amar a quien yo quiero. Canciones femeninas de la tradición oral chilena recogidas por Rodolfo Lenz* (Santiago, 2012, 234 págs.).

Salinas, Maximiliano, Tomás Cornejo y Catalina Saldaña, *¿Quiénes fueron los vencedores? Elite, pueblo y prensa humorística de la Guerra Civil de 1891* (Santiago, 2005, 240 págs.).

Scarpa, Roque Esteban, *Las cenizas de las sombras*, estudio preliminar y selección de Juan Antonio Massone (Santiago, 1992, 179 págs.).

Sepúlveda Llanos, Fidel, *El canto a lo poeta: a lo divino y a lo humano. Análisis estético antropológico y antología fundamental* (Santiago, 2009, 581 págs.).

Sepúlveda Llanos, Fidel, *El cuento tradicional chileno. Estudio estético y antropológico. Antología esencial* (Santiago, 2012, 522 págs.).

Sepúlveda Llanos, Fidel, *Patrimonio, identidad, tradición y creatividad* (Santiago, 2010, 173 págs.).

Sepúlveda Llanos, Fidel, *Patrimonio, identidad, tradición y creatividad*, 2ª edición (Santiago, 2015, 178 págs.).

Serrano, Sol, *Universidad y Nación* (Santiago, 2016, 308 págs.).

Stabili María Rosaria, *El sentimiento aristocrático. Elites chilenas frente al espejo (1860-1960)* (Santiago, 2003, 571 págs.).

Steffen, Hans, *Problemas limítrofes y viajes de exploración en la Patagonia. Recuerdos de los tiempos del litigio limítrofe ente Chile y Argentina*, traducción y notas al margen Fresia Barrientos Morales y Wolfgang Staub (Santiago, 2015, 314 págs.).

Tafra, Sylvia, *Diamela Eltit: El rito de pasaje como estrategia textual* (Santiago, 1998, 102 págs.).

Tampe, Eduardo S.J., *Catálogo de jesuitas en Chile* (1593-1767) (Santiago, 2008, 304 págs.).

Tesis Bicentenario 2004 (Santiago, 2005, vol. I, 443 págs.).

Tesis Bicentenario 2005 (Santiago, 2006, vol. II, 392 págs.).

Timmermann, Freddy, *Violencia de texto, violencia de contexto: historiografía y literatura testimonial. Chile, 1973* (Santiago, 2008, 195 págs.).

Tinsman, Heidi, *La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad y movimientos campesinos en la Reforma Agraria chilena* (Santiago, 2009, 338 págs.).

Toro, Graciela, *Bajo el signo de los aromas. Apuntes de viaje a India y Paquistán* (Santiago, 1995, 163 págs.).

Torres, Isabel, *La crisis del sistema democrático: las elecciones presidenciales y los proyectos políticos excluyentes. Chile 1958-1970* (Santiago, 2014, 421 págs.).

Urbina Carrasco, Mª Ximena, *La frontera de arriba en Chile colonial* (Santiago, 2009, 354 págs.).

Uribe, Verónica (editora), *Imágenes de Santiago del nuevo extremo* (Santiago, 2002, 95 págs.).

Urrutia, María Eugenia, *Rosamel del Valle, poeta órfico* (Santiago, 1996, 119 págs.).

Valdés Chadwick, Consuelo, *Terminología museológica. Diccionario básico, inglés-español y español-inglés* (Santiago, 1999, 185 págs.).

Valle, Juvencio, *Pajarería chilena* (Santiago, 1995, 75 págs.).

Varas, Augusto y Felipe Agüero, *El proyecto político-militar* (Santiago, 2011, 261 págs.).

Vico, Mauricio, *El afiche político en Chile, 1970-2013* (Santiago, 2013, 185 págs.).

Vico, Mauricio, *Todos juntos: Iconografía de la contraculrura en Chile (1964-1974)* (Santiago, 2019, 314 págs.).

Vico, Mauricio, *Un grito en la pared: psicodelia, compromiso político y exilio en el cartel chileno* (Santiago, 2009, 215 págs.).

Vicuña, Manuel, *Hombres de palabras. Oradores, tribunos y predicadores* (Santiago, 2003, 162 págs.).

Vicuña, Manuel, *Voces de ultratumba. Historia del espiritismo en Chile* (Santiago, 2006, 196 págs.).

Viu Antonia, Pilar García, *Territorios del tiempo, historia, escritura e imaginarios en la narrativa de Antonio Gil* (Santiago, 2013, 270 págs.).

Villalobos, Sergio y Rafael Sagredo, *Los Estancos en Chile* (Santiago, 2004, 163 págs.).

Virgilio Maron, Publio, *Eneida*, traducción castellana de Egidio Poblete (Santiago, 1994, 425 págs.).

Whipple, Pablo, *La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano* (Lima, 2013, 220 págs.).

Y se va la primera... conversaciones sobre la cueca. Las cuecas de la Lira Popular, compilación Micaela Navarrete A. y Karen Donoso F. (Santiago, 2010, 318 págs.).

Zavala, José Manuel y Gertrudis Payàs P., *Los parlamentos hispano-mapuches 1593-1803. Textos fundamentales* (Temuco, 2018, 652 págs.).

Colección Fuentes para el Estudio de la Colonia

Vol. I *Fray Francisco Xavier Ramírez, Coronicón sacro-imperial de Chile*, transcripción y estudio preliminar de Jaime Valenzuela Márquez (Santiago, 1994, 280 págs.).

Vol. II *Epistolario de don Nicolás de la Cruz y Bahamonde. Primer conde de Maule*, prólogo, revisión y notas de Sergio Martínez Baeza (Santiago, 1994, 300 págs.).

Vol. III *Archivo de protocolos notariales de Santiago de Chile. 1559 y 1564-1566*, compilación y transcripción paleográfica de Álvaro Jara H. y Rolando Mellafe R., introducción de Álvaro Jara H. (Santiago, 1995-1996, dos tomos, 800 págs.).

Vol. IV *Taki Onqoy: de la enfermedad del canto a la epidemia*, estudio preliminar de Luis Millones (Santiago, 2007, 404 págs.).

Vol. V *Escribanos de Santiago de Chile. Índice descriptivo (1559-1600)*, estudio preliminar de Marcello Carmagnani (Santiago, 2014, dos tomos 1016 págs.).

Colección Fuentes para la Historia de la República

Vol. I *Discursos de José Manuel Balmaceda. Iconografía*, recopilación de Rafael Sagredo B. y Eduardo Devés V. (Santiago, 1991, 351 págs.).

Vol. II *Discursos de José Manuel Balmaceda. Iconografía*, recopilación de Rafael Sagredo B. y Eduardo Devés V. (Santiago, 1991, 385 págs.).

Vol. III *Discursos de José Manuel Balmaceda. Iconografía*, recopilación de Rafael Sagredo B. y Eduardo Devés V. (Santiago, 1992, 250 págs.).

Vol. IV *Cartas de Ignacio Santa María a su hija Elisa*, recopilación de Ximena Cruzat A. y Ana Tironi (Santiago, 1991, 156 págs.).

Vol. V *Escritos del padre Fernando Vives*, recopilación de Rafael Sagredo B. (Santiago, 1993, 524 págs.).

Vol. VI *Ensayistas proteccionistas del siglo XIX*, recopilación de Sergio Villalobos R. y Rafael Sagredo B. (Santiago, 1993, 315 págs.).

Vol. VII *La "cuestión social" en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902)*, recopilación y estudio crítico de Sergio Grez T. (Santiago, 1995, 577 págs.).

Vol. VII *La "cuestión social" en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902)*, recopilación y estudio crítico de Sergio Grez T., primera reimpresión (Santiago, 1997, 577 págs.).

Vol. VIII *Sistema carcelario en Chile. Visiones, realidades y proyectos (1816-1916)*, compilación y estudio preliminar de Marco Antonio León León (Santiago, 1996, 303 págs.).

Vol. IX *"... I el silencio comenzó a reinar". Documentos para la historia de la instrucción primaria*, investigador Mario Monsalve Bórquez (Santiago, 1998, 290 págs.).

Vol. X *Poemario popular de Tarapacá 1889-1910*, recopilación e introducción, Sergio González, M. Angélica Illanes y Luis Moulián (Santiago, 1998, 458 págs.).

Vol. XI *Crónicas políticas de Wilfredo Mayorga. Del "Cielito Lindo" a la Patria Joven*, recopilación de Rafael Sagredo Baeza (Santiago, 1998, 684 págs.).

Vol. XII *Francisco de Miranda, Diario de viaje a Estados Unidos, 1783-1784*, estudio preliminar y edición crítica de Sara Almarza Costa (Santiago, 1998, 185 págs.).

Vol. XIII *Etnografía mapuche del siglo XIX*, Iván Inostroza Córdova (Santiago, 1998, 139 págs.).

Vol. XIV *Manuel Montt y Domingo F. Sarmiento. Epistolario 1833-1888*, estudio, selección y notas Sergio Vergara Quiroz (Santiago, 1999, 227 págs.).

Vol. XV *Viajeros rusos al sur del mundo*, compilación, estudios introductorios y notas de Carmen Norambuena y Olga Ulianova (Santiago, 2000, 742 págs.).

Vol. XVI *Epistolario de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941)*, recopilación y notas Leonidas Aguirre Silva (Santiago, 2001, 198 págs.).

Vol. XVII *Leyes de reconciliación en Chile: Amnistías, indultos y reparaciones 1819-1999*, recopilación e interpretación Brian Loveman y Elizabeth Lira (Santiago, 2001, 332 págs.).

Vol. XVIII *Cartas a Manuel Montt: un registro para la historia social y política de Chile. (1836-1869)*, estudio preliminar Marco Antonio León León y Horacio Aránguiz Donoso (Santiago, 2001, 466 págs.).

Vol. XIX *Arquitectura política y seguridad interior del Estado. Chile 1811-1990*, recopilación e interpretación Brian Loveman y Elizabeth Lira (Santiago, 2002, 528 págs.).

Vol. XX *Una flor que renace: autobiografía de una dirigente mapuche, Rosa Isolde Reuque Paillalef*, edición y presentación de Florencia E. Mallon (Santiago, 2003, 320 págs.).

Vol. XXI *Cartas desde la Casa de Orates*, Angélica Lavín, editora, prólogo Manuel Vicuña (Santiago, 2003, 105 págs.).

Vol. XXII *Acusación constitucional contra el último ministerio del Presidente de la República don José Manuel Balmaceda. 1891-1893*, recopilación de Brian Loveman y Elizabeth Lira (Santiago, 2003, 536 págs.).

Vol. XXIII *Chile en los archivos soviéticos 1922-1991*, editores Olga Ulianova y Alfredo Riquelme (Santiago, 2005, tomo 1: Komintern y Chile 1922-1931, 463 págs.).

Vol. XXIV *Memorias de Jorge Beauchef*, biografía y estudio preliminar Patrick Puigmal (Santiago, 2005, 278 págs.).

Vol. XXV *Epistolario de Rolando Mellafe Rojas*, selección y notas María Teresa González F. (Santiago, 2005, 409 págs.).

Vol. XXVI *Pampa escrita. Cartas y fragmentos del desierto salitrero*, selección y estudio preliminar Sergio González Miranda (Santiago, 2006, 1054 págs.).

Vol. XXVII *Los actos de la dictadura. Comisión investigadora, 1931*, recopilación e interpretación Brian Loveman y Elizabeth Lira (Santiago, 2006, 778 págs.).

vol. XXVIII *Epistolario de Miguel Gallo Goyonechea 1837-1869*, selección y notas Pilar Álamos Concha (Santiago, 2007, 810 págs.).

Vol. XXIX *100 voces rompen el silencio. Testimonios de ex presas y presos políticos de la dictadura militar en Chile (1973-1990)*, compiladoras Wally Kunstman Torres y Victoria Torres Ávila (Santiago, 2008, 730 págs.).

Vol. XXX *Chile en los archivos soviéticos 1922-1991*, editores Olga Ulianova y Alfredo Riquelme (Santiago, 2009, tomo 2: Komintern y Chile 1931-1935, 482 págs.).

Vol. XXXI *El mercurio chileno*, recopilación y estudio Gabriel Cid (Santiago, 2009, 622 págs.).

Vol. XXXII *Escritos políticos de Martín Palma*, recopilación, estudios Sergio Villalobos R. y Ana María Stuven V. (Santiago, 2009, 422 págs.).

Vol. XXXIII *Eugenio Matte Hurtado. Textos políticos y discursos parlamentarios*, compilación, estudio introductorio y notas Raimundo Meneghello M., prólogo Santiago Aránguiz P. (Santiago, 2010, 372 págs.).

Vol. XXXIV *Pablo Neruda-Claudio Véliz, Correspondencia en el camino al Premio Nobel, 1963-1970*, selección, estudio preliminar y notas Abraham Quezada Vergara (Santiago, 2011, 182 págs.).

Vol. XXXV *Epistolario de Alberto Blest Gana*, recopilación y transcripción dirigidas por José Miguel Barros Franco (Santiago, 2011, tomo I, 804 págs., tomo II, 1010 págs.).

Vol. XXXVI *Diccionario de los militares napoleónicos durante la independencia. Argentina, Chile y Perú*, compilación e investigación Patrick Puigmal (Santiago, 2013, 340 págs.).

Vol. XXXVII *Calles caminadas, anverso y reverso*, estudio y compilación Eliana Largo (Santiago, 2014, 552 págs.).

Vol. XXXVIII *Domingo Santa María González (1824-1889). Epistolario*, estudio y compilación Álvaro Góngora Escobedo (Santiago, 2015, 1136 págs.).

Vol. XXXIX *Diccionario de los militares napoleónicos durante la independencia de los países bolivarianos (Colombia, Venezuela, Panamá, Bolivia y Ecuador)*, compilación e investigación Patrick Puigmal (Santiago, 2015, 432 págs.).

Vol. XL *Epistolario de Manuel Montt (1824-1880)*, estudio preliminar, recopilación, transcripción y notas Cristóbal García-Huidobro Becerra (Santiago, 2015, tomo I, 1082 págs., tomo II, 960 págs.).

Vol. XLI *Fuentes para la historia sísmica de Chile (1570-1906)*, estudio preliminar, selección, transcripción y notas Alfredo Palacios Roa (Santiago, 2016, 354 págs.).

Vol. XLII *Un viaje a las colonias. Memorias y diario de un ovejero escocés en Malvinas, Patagonia y Tierra del Fuego (1878-1898),* investigación, estudio introductorio y comentarios Alberto Harambour R., traducción Mario Azara y Alberto Harambour, transcripción Mario Azara (Santiago, 2016, 178 págs.).

Vol. XLIII *Flores de cobre. Chile entre 1969 y 1973*, de Jarka Stuchlik, con un estudio introductorio de Constanza Dalla Porta Andrade, traducido por Gorgias Romero y Willie Barne en colaboración con la autora (Santiago, 2017, 392 págs.).

Vol. XLIV *Chile en los archivos soviéticos 1922-1991*, editores Olga Ulianova y Alfredo Riquelme (Santiago, 2017, tomo 3: Komintern y Chile 1935-1931, 775 págs.).

Vol. XLV *Monografía de una familia obrera. Jorge Errázuriz Tagle, Guillermo Eyzaguirre Rouse*, estudio introductorio Simón Castillo Fernández (Santiago, 2018, 168 págs.).

Vol. XLVI *Epistolario de Rafael Gatica Soiza 1812-1876*, introducción, recopilación, transcripción y notas Sergio Silva Gatica (Santiago, 2019, 313 págs.)

Vol. XLVII *Chile en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (1960-1974)*, introducción, recopilación, transcripción y notas Ricardo Pérez Haristoy (Santiago, 2019, 341 págs.).

Vol. XLVIII *Testimonios de militares antigolpistas*, presentación y entrevistas Jorge Magasich Airola (Santiago, 2019, 1284 págs.).

Vol. XLXIX *Diccionario de los militares y agentes napoleónicos durante la independencia. México, Centroamérica, el Caribe y Brasil (1791-1840)*, compilación e investigación Patrick Puigmal (Santiago, 2020, 695 págs.).

Vol. L *La Junta de Gobierno Militar. Poder Constituyente y Legislativo, 11 de septiembre de 1984 - 11 de marzo de 1990*, recopilación e interpretación Brian Loveman y Elizabeth Lira (Santiago, 2021, 530 págs.).

Colección Sociedad y Cultura

Vol. I Jaime Valenzuela Márquez, *Bandidaje rural en Chile central, Curicó, 1850-1900* (Santiago, 1991, 160 págs.).

Vol. II Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, *La Milicia Republicana. Los civiles en armas. 1932-1936* (Santiago, 1992, 132 págs.).

Vol. III Micaela Navarrete, *Balmaceda en la poesía popular 1886-1896* (Santiago, 1993, 126 págs.).

Vol. IV Andrea Ruiz-Esquide F., *Los indios amigos en la frontera araucana* (Santiago, 1993, 116 págs.).

Vol. V Paula de Dios Crispi, *Inmigrar en Chile: estudio de una cadena migratoria hispana* (Santiago, 1993, 172 págs.).

Vol. VI Jorge Rojas Flores, *La dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927-1931)* (Santiago, 1993, 190 págs.).

Vol. VII Ricardo Nazer Ahumada, *José Tomás Urmeneta. Un empresario del siglo XIX* (Santiago, 1994, 289 págs.).

Vol. VIII Álvaro Góngora Escobedo, *La prostitución en Santiago (1813-1930). Visión de las élites* (Santiago, 1994, 259 págs.).

Vol. IX Luis Carlos Parentini Gayani, *Introducción a la etnohistoria mapuche* (Santiago, 1996, 136 págs.).

Vol. X Jorge Rojas Flores, *Los niños cristaleros: trabajo infantil en la industria. Chile, 1880-1950* (Santiago, 1996, 136 págs.).

Vol. XI Josefina Rossetti Gallardo, *Sexualidad adolescente: Un desafío para la sociedad chilena* (Santiago, 1997, 301 págs.).

Vol. XII Marco Antonio León León, *Sepultura sagrada, tumba profana. Los espacios de la muerte en Santiago de Chile, 1883-1932* (Santiago, 1997, 282 págs.).

Vol. XIII Sergio Grez Toso, *De la "regeneración del pueblo" a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)* (Santiago, 1998, 831 págs.).

Vol. XIV Ian Thomson y Dietrich Angerstein, *Historia del ferrocarril en Chile* (Santiago, 1997, 279 págs.).

Vol. XIV Ian Thomson y Dietrich Angerstein, *Historia del ferrocarril en Chile*, 2ª edición (Santiago, 2000, 312 págs.).

Vol. XV Larissa Adler Lomnitz y Ana Melnick, *Neoliberalismo y clase media. El caso de los profesores de Chile* (Santiago, 1998, 165 págs.).

Vol. XVI Marcello Carmagnani, *Desarrollo industrial y subdesarrollo económico. El caso chileno (1860-1920)*, traducción de Silvia Hernández (Santiago, 1998, 241 págs.).

Vol. XVII Alejandra Araya Espinoza, *Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile colonial* (Santiago, 1999, 174 págs.).

Vol. XVIII Leonardo León, *Apogeo y ocaso del toqui Ayllapangui de Malleco, Chile* (Santiago, 1999, 282 págs.).

Vol. XIX Gonzalo Piwonka Figueroa, *Las aguas de Santiago de Chile 1541-1999* (Santiago, 1999, tomo I: "Los primeros doscientos años. 1541-1741", 480 págs.).

Vol. XX Pablo Lacoste, *El Ferrocarril Trasandino* (Santiago, 2000, 459 págs.).

Vol. XXI Fernando Purcell Torretti, *Diversiones y juegos populares. Formas de sociabilidad y crítica social Colchagua, 1850-1880* (Santiago, 2000, 148 págs.).

Vol. XXII María Loreto Egaña Baraona, *La educación primaria popular en el siglo XIX en Chile. Una práctica de política estatal* (Santiago, 2000, 256 págs.).

Vol. XXIII Carmen Gloria Bravo Quezada, *La flor del desierto. El mineral de Caracoles y su impacto en la economía chilena* (Santiago, 2000, 150 págs.).

Vol. XXIV Marcello Carmagnani, *Los mecanismos de la vida económica en una sociedad colonial: Chile 1860-1830*, traducción de Sergio Grez T., Leonora Reyes J. y Jaime Riera (Santiago, 2001, 416 págs.).

Vol. XXV Claudia Darrigrandi Navarro, *Dramaturgia y género en el Chile de los sesenta* (Santiago, 2001, 191 págs.).

Vol. XXVI Rafael Sagredo Baeza, *Vapor al norte, tren al sur. El viaje presidencial como práctica política en Chile. Siglo XIX* (Santiago y México D.F., 2001, 564 págs.).

Vol. XXVII Jaime Valenzuela Márquez, *Las liturgias del poder. Celebraciones públicas y estrategias persuasivas en Chile colonial (1609-1709)* (Santiago, 2001, 492 págs.).

Vol. XXVIII Cristián Guerrero Lira, *La contrarrevolución de la Independencia* (Santiago, 2002, 330 págs.).

Vol. XXIX José Carlos Rovira, *José Toribio Medina y su fundación literaria y bibliográfica del mundo colonial americano* (Santiago, 2002, 145 págs.).

Vol. XXX Emma de Ramón, *Obra y fe. La catedral de Santiago. 1541-1769* (Santiago, 2002, 202 págs.).

Vol. XXXI Sergio González Miranda, *Chilenizando a Tunupa. La escuela pública en el Tarapacá andino, 1880-1990* (Santiago, 2002, 292 págs.).

Vol. XXXII Nicolás Cruz, *El surgimiento de la educación secundaria pública en Chile (El Plan de Estudios Humanista, 1843-1876)* (Santiago, 2002, 238 págs.).

Vol. XXXIII Marcos Fernández Labbé, *Prisión común, imaginario social e identidad. Chile, 1870-1920* (Santiago, 2003, 245 págs.).

Vol. XXXIV Juan Carlos Yáñez Andrade, *Estado, consenso y crisis social. El espacio público en Chile 1900-1920* (Santiago, 2003, 236 págs.).

Vol. XXXV Diego Lin Chou, *Chile y China: inmigración y relaciones bilaterales (1845-1970)* (Santiago, 2003, 569 págs.).

Vol. XXXVI Rodrigo Hidalgo Dattwyler, *La vivienda social en Chile y la construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo XX* (Santiago, 2004, 492 págs.).

Vol. XXXVII René Millar, *La inquisición en Lima. Signos de su decadencia 1726-1750* (Santiago, 2005, 183 págs.).

Vol. XXXVIII Luis Ortega Martínez, *Chile en ruta al capitalismo. Cambio, euforia y depresión 1850-1880* (Santiago, 2005, 496 págs.).

Vol. XXXIX Asunción Lavrin, *Mujeres, feminismo y cambio social en Argentina, Chile y Uruguay 1890-1940*, traducción de María Teresa Escobar Budge (Santiago, 2005, 528 págs.).

Vol. XL Pablo Camus Gayán, *Ambiente, bosques y gestión forestal en Chile 1541-2005* (Santiago, 2006, 374 págs.).

Vol. XLI Raffaele Nocera, *Chile y la guerra, 1933-1943*, traducción de Doina Dragutescu (Santiago, 2006, 244 págs.).

Vol. XLII Carlos Sanhueza Cerda, *Chilenos en Alemania y alemanes en Chile. Viaje y nación en el siglo XIX* (Santiago, 2006, 270 págs.).

Vol. XLIII Roberto Santana Ulloa, *Agricultura chilena en el siglo XX: contextos, actores y espacios agrícolas* (Santiago, 2006, 338 págs.).

Vol. XLIV David Home Valenzuela, *Los huérfanos de la Guerra del Pacífico: el 'Asilo de la Patria'* (Santiago, 2006, 164 págs.).

Vol. XLV María Soledad Zárate C., *Dar a luz en Chile, siglo XIX. De la "ciencia de hembra" a la ciencia obstétrica* (Santiago, 2007, 548 págs.).

Vol. XLVI Peter DeShazo, *Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile: 1902-1927*, traducción de Pablo Larach (Santiago, 2007, 390 págs.).

Vol. XLVII Margaret Power, *La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973*, traducción de María Teresa Escobar (Santiago, 2008, 318 págs.).

Vol. XLVIII Mauricio F. Rojas Gómez, *Las voces de la justicia. Delito y sociedad en Concepción (1820-1875). Atentados sexuales, pendencias, bigamia, amancebamiento e injurias* (Santiago, 2008, 286 págs.).

Vol. XLIX Alfredo Riquelme Segovia, *Rojo atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y democracia* (Santiago, 2009, 342 págs.).

Vol. L Consuelo Figueroa Garavagno, *Revelación del subsole. Las mujeres en la sociedad minera del carbón 1900-1930* (Santiago, 2009, 152 págs.).

Vol. LI Macarena Ponce de León Atria, *Gobernar la pobreza. Prácticas de caridad y beneficencia en la ciudad de Santiago, 1830-1890* (Santiago, 2011, 378 págs.).

Vol. LII Leonardo León Solís, *Ni patriotas ni realistas. El bajo pueblo durante la Independencia de Chile, 1810-1822* (Santiago, 2011, 816 págs.).

Vol. LIII Verónica Undurraga Schüler, *Los rostros del honor. Normas culturales y estrategias de promoción social en Chile colonial, siglo XVIII* (Santiago, 2013, 428 págs.).

Vol. LIV Jaime Rosenblitt, *Centralidad geográfica, marginalidad política: la región de Tacna-Arica y su comercio, 1778-1841* (Santiago, 2013, 336 págs.).

Vol. LV Pablo Rubio Apiolaza, *Los civiles de Pinochet. La derecha en el régimen militar chileno, 1983-1990* (Santiago, 2013, 346 págs.).

Vol. LVI Stefan Rinke, *Encuentro con el yanqui: norteamericanización y cambio cultural en Chile 1898-1990* (Santiago, 2013, 586 págs.).

Vol. LVII Elvira López Taverne, *El proceso de construcción estatal en Chile. Hacienda pública y burocracia (1817-1860)* (Santiago, 2014, 336 págs.).

Vol. LVIII Alejandra Vega, *Los Andes y el territorio de Chile en el siglo XVI: descripción, reconocimiento e invención* (Santiago, 2014, 324 págs.).

Vol. LVIX Jaime Valenzuela Márquez, *Fiesta, rito y política. Del Chile borbónico al republicano* (Santiago, 2014, 470 págs.).

Vol. LX William Sater, *Tragedia Andina. La lucha en la Guerra del Pacífico. 1789-1884* (Santiago. 2016, 302 págs.).

Vol. LXI Javier E. Rodríguez Weber, *Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009). Historia de su economía política* (Santiago, 2017, 415 págs.).

Vol. LXII Mauricio Onetto Pavez, *Temblores de tierra en el jardín del Edén. Desastre, memoria e identidad. Chile, siglos XVI-XVII* (Santiago, 2017, 472 págs.).

Vol. LXIII Samuel J. Martland, *Construir Valparaíso: Tecnología, municipalidad y Estado, 1820-1920* (Santiago, 2017, 250 págs.).

Vol. LXIV João Paulo Pimenta, *La independencia de Brasil y la experiencia hipanoamericana (1808-1822)* (Santiago, 2017 422 págs.).

Vol. LXV María Carolina Sanhueza Benavente, *Por los caminos del valle central de Chile: El sistema vial entre lo ríos Maipo y Mataquito (1790-1860)* (Santiago, 2018 148 págs.).

Vol. LXVI Ignacio Chuecas Saldías, *Dueños de la frontera. Terratenientes y sociedad colonial en la periferia chilena. Isla de Laja (1670-1845)* (Santiago, 2018, 540 págs.).

Vol. LXVII Xochitl Guadalupe Inostroza Ponce, *Parroquia de Belén. Población, familia y co--munidad de una doctrina aimara. Altos de Arica 1763-1820* (Santiago, 2019, 392 págs.).

Vol. LXVIII José Araneda Riquelme, *Un gobierno de papel. El correo y sus rutas de comunicación en tiempos de la reforma imperial en Chile (1764-1796)* (Santiago, 2020, 174 págs.).

Vol. LXIX Ricardo D. Salvatore, *La Confederación Argentina y sus subalternos: Integración estatal, política y derechos en el Buenos Aires posindependiente(1820-1860)* (Santiago, 2020, 314 págs.).

Colección Escritores de Chile

Vol. I *Alone y los Premios Nacionales de Literatura*, recopilación y selección de Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 1992, 338 págs.).

Vol. II *Jean Emar. Escritos de arte. 1923-1925*, recopilación e introducción de Patricio Lizama (Santiago, 1992, 170 págs.).

Vol. III *Vicente Huidobro. Textos inéditos y dispersos*, recopilación, selección e introducción de José Alberto de la Fuente (Santiago, 1993, 254 págs.).

Vol. IV *Domingo Melfi. Páginas escogidas* (Santiago, 1993, 128 págs.).

Vol. V *Alone y la crítica de cine*, recopilación y prólogo de Alfonso Calderón S (Santiago, 1993, 204 págs.).

Vol. VI *Martín Cerda. Ideas sobre el ensayo*, recopilación y selección de Alfonso Calderón S. y Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 1993, 268 págs.).

Vol. VII *Alberto Rojas Jiménez. Se paseaba por el alba*, recopilación y selección de Oreste Plath, coinvestigadores Juan Camilo Lorca y Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 1994, 284 págs.).

Vol. VIII *Juan Emar, Umbral*, nota preliminar, Pedro Lastra; biografía para una obra, Pablo Brodsky (Santiago, 1995-1996, cinco tomos, c + 4134 págs.).

Vol. IX *Martín Cerda. Palabras sobre palabras*, recopilación de Alfonso Calderón S. y Pedro Pablo Zegers B., prólogo de Alfonso Calderón S. (Santiago, 1997, 143 págs.).

Vol. X *Eduardo Anguita. Páginas de la memoria*, prólogo de Alfonso Calderón S. y recopilación de Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 2000, 98 págs.).

Vol. XI *Ricardo Latcham. Varia lección*, selección y nota preliminar de Pedro Lastra y Alfonso Calderón S., recopilación de Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 2000, 326 págs.).

Vol. XII *Cristián Huneeus. Artículos de prensa* (1969-1985), recopilación y edición Daniela Huneeus y Manuel Vicuña, prólogo de Roberto Merino (Santiago, 2001, 151 págs.).

Vol. XIII *Rosamel del Valle. Crónicas de New York*, recopilación de Pedro Pablo Zegers B., prólogo de Leonardo Sanhueza (Santiago, 2002, 212 págs.).

Vol. XIV *Romeo Murga. Obra reunida*, recopilación, prólogo y notas de Santiago Aránguiz Pinto (Santiago, 2003, 280 págs.).

Colección de Antropología

Vol. I Mauricio Massone, Donald Jackson y Alfredo Prieto, *Perspectivas arqueológicas de los Selk'nam* (Santiago, 1993, 170 págs.).

Vol. II Rubén Stehberg, *Instalaciones incaicas en el norte y centro semiárido de Chile* (Santiago, 1995, 225 págs.).

Vol. III Mauricio Massone y Roxana Seguel (compiladores), *Patrimonio arqueológico en áreas silvestres protegidas* (Santiago, 1994, 176 págs.).

Vol. IV Daniel Quiroz y Marco Sánchez (compiladores), *La isla de las palabras rotas* (Santiago, 1997, 257 págs.).

Vol. V José Luis Martínez, *Pueblos del chañar y el algarrobo* (Santiago, 1998, 220 págs.).

Vol. VI Rubén Stehberg, *Arqueología histórica antártica. Participación de aborígenes sudamericanos en las actividades de cacería en los mares subantárticos durante el siglo XIX* (Santiago, 2003, 202 págs.).

Vol. VII Mauricio Massone, *Los cazadores después del hielo* (Santiago, 2004, 174 págs.).

Vol. VIII Victoria Castro, *De ídolos a santos. Evangelización y religión andina en los Andes del sur* (Santiago, 2009, 620 págs.).

Vol. IX Daniel Quiroz, *Soplan las ballenas... Historias sobre la caza de cetáceos en las costas de Chile* (Santiago, 2020, 408 págs.).

Colección Imágenes del Patrimonio

Vol I. Rodrigo Sánchez R. y Mauricio Massone M., *La Cultura Aconcagua* (Santiago, 1995, 64 págs.).

Colección de Documentos del Folklore

Vol. I *Aunque no soy literaria. Rosa Araneda en la poesía popular del siglo XIX*, compilación y estudio Micaela Navarrete A. (Santiago, 1998, 302 págs.).

Vol. II *Por historia y travesura. La Lira Popular del poeta Juan Bautista Peralta*, compilación y estudio Micaela Navarrete A. y Tomás Cornejo C. (Santiago, 2006, 302 págs.).

Vol. III *Los diablos son los mortales. La obra del poeta popular Daniel Meneses*, compilación y estudios Micaela Navarrete A. y Daniel Palma A. (Santiago, 2008, 726 págs.).

Vol. IV *Si a tanta altura te subes. "Contrapunto" entre los poetas populares Nicasio García y Adolfo Reyes*, compilación y estudios Micaela Navarrete A. y Karen Donoso F. (Santiago, 2011, 530 págs.).

Colección Ensayos y Estudios

Vol. I Bárbara de Vos Eyzaguirre, *El surgimiento del paradigma industrializador en Chile (1875-1900)* (Santiago, 1999, 107 págs.).

Vol. II Marco Antonio León León, *La cultura de la muerte en Chiloé* (Santiago, 1999, 122 págs.).

Vol. III Clara Zapata Tarrés, *Las voces del desierto: la reformulación de las identidades de los aymaras en el norte de Chile* (Santiago, 2001, 168 págs.).

Vol. IV Donald Jackson S., *Los instrumentos líticos de los primeros cazadores de Tierra del Fuego 1875-1900* (Santiago, 2002, 100 págs.).

Vol. V Bernard Lavalle y Francine Agard-Lavalle, *Del Garona al Mapocho: emigrantes, comerciantes y viajeros de Burdeos a Chile. (1830-1870)* (Santiago, 2005, 125 págs.).

Vol. VI Jorge Rojas Flores, *Los boy scouts en Chile: 1909-1953* (Santiago, 2006, 188 págs.).

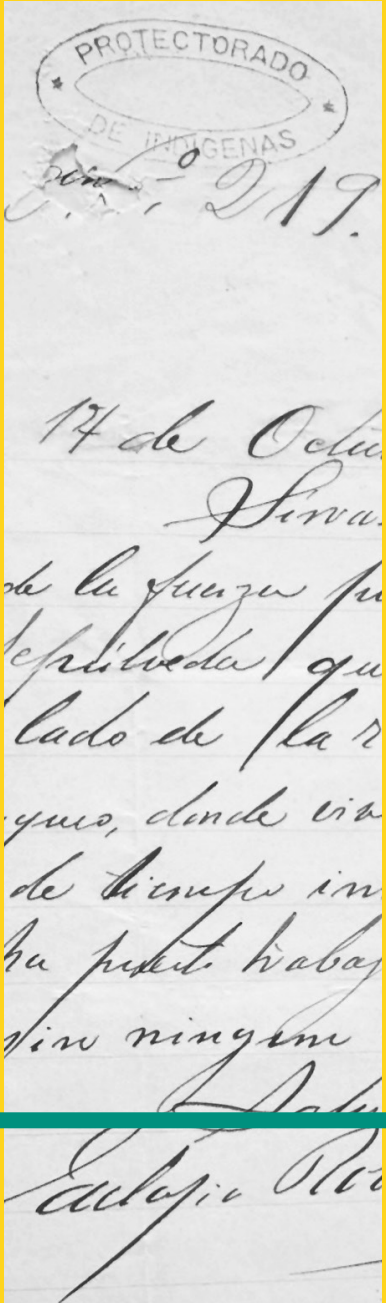
Vol. VII Germán Colmenares, *Las convenciones contra la cultura. Ensayos sobre la historiografía hispanoamericana del siglo XIX* (Santiago, 2006, 117 págs.).

Vol. VII Marcello Carmagnani, *El salariado minero en Chile colonial su desarrollo en una sociedad provincial: el Norte Chico 1690-1800* (Santiago, 2006, 124 págs.).

Vol. IX Horacio Zapater, América Latina. *Ensayos de Etnohistoria* (Santiago, 2007, 232 págs.).

Se terminó de imprimir esta primera edición,
de quinientos ejemplares, en el mes de noviembre de 2021
en Andros Impresores
Santiago de Chile

Este volumen constituye un nuevo y trascendental hito en el trabajo de desclasificación de archivos y documentos de la larga historia de relaciones entre los mapuche y el Estado español –primero– y chileno –después–. Los protectores de indígenas del Chile republicano fueron la versión modernizada de una institución jurídica colonial cuyo propósito fundamental era el amparo y la representación de los habitantes originarios: labor que nos parece hoy casi irrisoria frente a la dimensión del atropello y abuso producido por la ocupación militar y colona de la Araucanía o Ngulumapu durante el siglo XIX. Las consecuencias humanas, sociales y económicas de la ocupación *wingka* del Ngulumapu se dejan sentir con fuerza en la pluma de los protectores. El estrechamiento territorial, la conculcación de derechos, el sentimiento de derrota y de indefensión, el supremacismo y racismo de los vencedores se sienten abierta o soterradamente en las páginas dadas a la luz pública en este volumen (Prólogo de José Manuel Zavala)



Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Gobierno de Chile